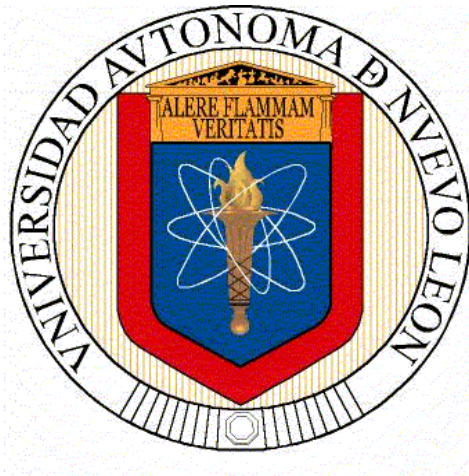


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**



**TESIS**

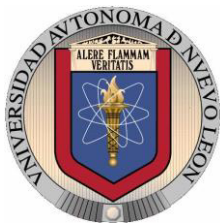
**PROBLEMÁTICA EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO EN JALISCO  
(ADMINISTRATIVO, POR MUTUO CONSENTIMIENTO Y  
CONTENCIOSO)**

**PRESENTA:**

**LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ**

**PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO**

**MAYO 2013**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**  
**DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**



**PROBLEMÁTICA EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO  
EN JALISCO (ADMINISTRATIVO, POR MUTUO  
CONSENTIMIENTO Y CONTENCIOSO).**

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO  
DE DOCTORA EN DERECHO PRESENTA:

**LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ**

**DIRECTOR DE TESIS:**  
**DOCTOR JOSÉ ZARAGOZA HUERTA**



## **AGRADECIMIENTOS**

Con absoluto amor hoy y por siempre, para mis hijos Alejandro y Sebastián, que me dieron el más grande motivo de vida.

En memoria de mis padres, Sofía y Marciano. Con amor, respeto y gratitud eterna.

A todos aquellos hombres y mujeres que hicieron que naciera en mí el amor al Derecho y vocación a la impartición de justicia

Con gratitud por siempre a mi Director de Tesis, el Señor Doctor José Zaragoza Huerta y a mi nueva casa universitaria, la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialmente a la Facultad de Derecho y Criminología, División de Estudios de Posgrado.

Al Poder Judicial del Estado de Jalisco, mi casa formadora.

A todos aquellos que aunado al fracaso del matrimonio, han sufrido la tortura del proceso del divorcio.

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPÍTULO I.....</b>	<b>17</b>
<b>PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS PROCESOS DE DIVORCIO EN JALISCO.....</b>	<b>17</b>
1.1 El crecimiento de los procesos de divorcio. ....	17
1.2 Estadísticas del divorcio del periodo 2001 al 2010. ....	19
1.3 Los operadores jurídicos en los divorcios. ....	29
1.4 Deficiencias en el planteamiento y tramitación del divorcio mutuo consentimiento.....	41
1.5 Problemática general en el planteamiento y acreditación de un divorcio contencioso.....	47
1.5.1 Deficiencias comunes del escrito inicial de una demanda de divorcio.....	48
1.5.2 Planteamiento deficiente de la demanda y las causales de divorcio. ....	60
<b>CAPITULO II.....</b>	<b>79</b>
<b>EL DIVORCIO EN EL ESTADO DE JALISCO.....</b>	<b>79</b>
2.1 El divorcio. ....	79
2.2 Elementos del marco Constitucional.....	99
2.3 Sistemas o Procesos jurisdiccionales de disolución del vínculo matrimonial. ....	106
2.4 Fundamentos de los procesos de divorcio.....	110
2.5 Aspectos Generales del Divorcio Contencioso. ....	113
2.5.1 Separación de personas.....	113
2.5.2 Acción de divorcio y acciones simultaneas. ....	124
Las características de la acción de divorcio son las siguientes: .....	124
2.5.3 Alimentos Provisionales. ....	130
2.6 Efectos de la interposición de una demanda de divorcio. ....	136
2.7 Allanamiento en una demanda de divorcio.....	142
2.8 Caducidad de las causales. ....	147

2.9 Conclusión de un proceso de divorcio contencioso mediante convenio.	150
2.10 Cónyuge culpable.	161
2.11 La sentencia de divorcio en un juicio contencioso y sus efectos.	165
2.11.1 Efectos de la sentencia de divorcio.	180
2.11.2 Efectos jurídicos de índole administrativo.	184
2.11.3 Consecuencias jurídicas en caso de hijos menores de edad o incapacitados.	184
2.12 Relación económica y patrimonial del matrimonio.	210
2.12.1 Régimen presunto en Jalisco.	222
2.12.2 Regímenes matrimoniales presuntos en los Estados de la República Mexicana.	222
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>224</b>
<b>EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO EN JALISCO</b>	<b>224</b>
3.1 El divorcio Administrativo en Jalisco.	224
3.2 Fundamentos y Procedimiento	230
3.3 Particularidades del divorcio administrativo	235
<b>CAPITULO IV</b>	<b>242</b>
<b>EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO</b>	<b>242</b>
4.1 Divorcio por mutuo consentimiento o voluntario.	242
4.2 Trámite y substanciación. Requisitos.	251
4.2.1 Competencia.	252
4.2.2 Vía procesal.	254
4.2.3 Personalidad, capacidad y representación.	255
4.2.4 Legitimación a la causa y al proceso, de los comparecientes para solicitar el divorcio.	256
4.2.5 Oportunidad para la solicitud de divorcio.	258
4.2.6 Documentos a exhibir.	258
4.2.7 Proceso.	259
4.3 El Convenio y su clausulado.	262
4.4 Pactos indebidos o ilícitos.	265

4.5 Pactos inapropiados. ....	271
4.6 Oposición del Agente Social o Ministerio Público. ....	273
4.7 Aprobación judicial del convenio de divorcio. ....	276
4.8 Sentencia Ejecutoriada del divorcio por mutuo. ....	281
4.9 Problemática de la ejecución de sentencia. ....	283
<b>CAPÍTULO V .....</b>	<b>289</b>
<b>EL DIVORCIO CONTENCIOSO.....</b>	<b>289</b>
Primera Parte. ....	289
5.1 Características del divorcio contencioso y sus causales. ....	293
5.2 Infidelidad sexual. ....	317
5.2.1 Elementos. ....	327
5.2.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	327
5.3 Cuando uno de los cónyuges haya concebido un hijo con tercera persona, antes del matrimonio. ....	331
5.3.1 Teorías de la concepción y el alumbramiento. ....	332
5.3.2 Elementos. ....	333
5.3.3 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	334
5.4 La propuesta de prostitución de uno de los consortes hacia el otro. .	337
5.4.1 Elementos. ....	341
5.4.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	341
5.5 Incitar a la violencia un cónyuge al otro, para la comisión de delito....	342
5.5.1 Elementos. ....	346
5.5.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	347
5.6 Actos inmorales de cualquiera de los cónyuges para la corrupción de los hijos. ....	348
5.6.1 Elementos. ....	357
5.6.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	358
5.7 Enfermedad crónica o incurable, contagiosa o hereditaria de cualquiera de los consortes. ....	360
5.7.1 Elementos. ....	363
5.7.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	368

5.8 La enajenación psíquica. ....	370
5.8.1 Elementos. ....	372
5.8.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	372
5.9 Separación del hogar por más de seis meses. ....	373
5.9.1 Elementos. ....	374
5.9.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	388
5.10 Separación del hogar por más de un año sin el consentimiento del otro. .....	388
5.10.1 Elementos. ....	389
5.10.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	392
5.11 Declaración de ausencia.....	392
5.11.1 Elementos. ....	397
5.11.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	398
<b>CAPÍTULO VI.....</b>	<b>399</b>
<b>EL DIVORCIO CONTENCIOSO.....</b>	<b>399</b>
6.1 Violencia intrafamiliar. ....	399
6.1.1 Elementos. ....	404
6.1.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	422
6.2 Incompatibilidad de caracteres. ....	424
6.2.1 Elementos. ....	426
6.2.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	429
6.3 Negativa de proporcionar alimentos. ....	429
6.3.1 Elementos. ....	432
6.3.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	434
6.4 Acusación calumniosa por un cónyuge contra el otro. ....	435
6.4.1 Elementos. ....	439
6.4.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	439
6.5 La comisión de un delito por uno de los cónyuges. ....	440
6.5.1 Elementos. ....	442
6.5.2 Medios de prueba para su acreditación.....	445
6.6 Hábitos de juego, de embriaguez o uso de drogas. ....	446

6.6.1 Elementos en cuanto al hábito de la embriaguez. ....	446
6.6.2 Elementos en los hábitos de juego. ....	447
6.6.3 Elementos sobre el uso indebido y persistente de drogas enervantes. ....	448
6.6.4 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	451
6.7 Cometer un cónyuge contra el otro un delito o bien, un acto que sería punible si fuera un tercero. ....	453
6.7.1 Elementos de la primera modalidad. ....	454
6.7.2 Elementos de la segunda modalidad. ....	454
6.7.3 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	462
6.8 Separación por más de dos años. ....	462
6.8.1 Elementos. ....	468
6.8.2 Medios de prueba posibles para su acreditación. ....	473
6.9 Cuando el cónyuge hubiera perdido juicio de divorcio o de ilegitimidad del matrimonio. ....	474
6.9.1 Elementos. ....	474
6.9.2 Medios de prueba para su acreditación. ....	476
<b>CAPÍTULO VII. ....</b>	<b>478</b>
<b>UN NUEVO MODELO DE DIVORCIO. ....</b>	<b>478</b>
7.1 El divorcio incausal, un modelo garantista. ....	478
7.2 Debate sobre la inclusión del divorcio incausal en el Distrito Federal. ....	484
7.3 El proceso de divorcio incausal en el Distrito Federal. ....	508
7.4 Estadísticas del divorcio en el Distrito Federal, antes y después del divorcio exprés. ....	549
<b>CAPÍTULO VIII. ....</b>	<b>555</b>
<b>HACIA UN MODELO IDÓNEO PARA UN PROCESO DE DIVORCIO. ....</b>	<b>555</b>
8.1 Panorama actual del divorcio. ....	555
8.2 Alternativas jurídicas posibles para los procesos de divorcio. ....	571
8.2.1 Divorcio Judicial Voluntario y con causa. ....	575
8.2.2 Divorcio por medios alternativos. ....	584
8.2.3 Divorcio incausal o exprés. ....	603

8.2.4 La misión de los Operadores Jurídicos. ....	607
8.3 Constitucionalidad del Divorcio Exprés. ....	616
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>627</b>
<b>PROPUESTAS.....</b>	<b>631</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>632</b>
<b>JURISPRUDENCIA.....</b>	<b>643</b>
<b>ANEXOS. ....</b>	<b>663</b>
Anexo 1.- Divorcios registrados según tipo de trámite, 1990 a 2011. ....	664
Anexo 2.- Población por sexo y estado conyugal, 1950 a 2010.....	665
Anexo 3.- Distribución porcentual de la población de 12 y más años según sexo y estado conyugal para cada entidad federativa, 2000 y 2010.....	667
Anexo 4.- Distribución porcentual de divorcios judiciales según persona que lo solicita para cada causa de divorcio, 2009, 2010 y 2011. ....	670
Anexo 5.- Distribución porcentual de divorcios judiciales según persona a favor de quien se resuelve para cada causa de divorcio, 2009, 2010 y 2011. ....	673
Anexo 6.- Divorcios registrados por entidad federativa según tipo de trámite, 2011.....	676
Anexo 7.- Edad media al divorcio por entidad federativa de residencia habitual de los divorciantes según sexo, 2007 a 2011 .....	677
Anexo 8.- INEGI. Divorcios .....	679
Anexo 9.-.....	680
Anexo 10.- Cuestionarios sobre el divorcio por mutuo consentimiento.....	688
Anexo 11.- Cuestionarios sobre el divorcio contencioso.....	719
Anexo 12.- Regímenes presuntos en los estados de la Republica Mexicana. ....	800
1. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES .....	801
2. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE.....	801
3. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.....	802
5. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS .....	804
6. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA .....	805

7.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA .....	805
8.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA.....	806
9.	CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL .....	807
10.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO .....	808
11.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO .....	809
12.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.....	810
13.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO.....	811
14.	CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE HIDALGO.....	812
15.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO .....	812
16.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACÁN .....	813
17.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS .....	815
18.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT .....	815
19.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.....	816
20.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA .....	817
21.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA .....	818
22.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERETARO.....	818
23.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.....	820
24.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....	820
25.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA.....	821
26.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA.....	822
27.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO .....	823
28.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.....	824
29.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA .....	824
30.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ .....	824
30.	CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN .....	825
31.	CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE ZACATECAS .....	825
	Anexo 13.- Estadísticas del Divorcio en el Distrito Federal.....	827
	Anexo 14.- Promedio de acuerdos realizados por juzgado y materia, años judiciales 2008-2009. ....	829
	Anexo 15.- INEGI, Nupcialidad, conjunto de datos. Divorcios. ....	830



## INTRODUCCIÓN

Los procesos de divorcio en el Estado de Jalisco han alcanzado un grado de obstaculización que impide el debido cumplimiento de la Ley y su propia naturaleza, ya sea por cuestiones legales derivadas de las propias disposiciones normativas o bien por la interpretación jurisprudencial que de ella se hace, o por la dificultad probatoria que las causales presentan en la praxis judicial, cuando se trata de divorcios contenciosos o necesarios, al igual que el trámite del divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio administrativo, que si bien, no representan alto grado de dificultad, no menos cierto es que en el primero de ellos un proceso relativamente corto y con la voluntad expresa de las partes, se torna largo y complicado, sobre todo en ejecución de sentencia, y el último de ellos, por el número que se presenta no resulta una gran descarga a los tribunales.

En la actualidad la información que se genera sobre los divorcios proporciona elementos que contribuyen a su análisis, bajo diferentes enfoques.

Desde el punto de vista social, presenta información para el estudio de la desintegración familiar y las consecuencias sociales, culturales, sociológicas y económicas que esto conlleva, y las características de la población involucrada.

Desde el punto de vista legal, trae como consecuencia un nuevo status legal entre los cónyuges así como el nacimiento de nuevos derechos y obligaciones y en algunos casos nuevos procesos jurisdiccionales por el probable incumplimiento en las nuevas obligaciones derivadas del divorcio.

Se efectúa un análisis sobre la estadística de los divorcios en el Estado de Jalisco, del periodo del 2001 al 2010, con la finalidad de establecer sus

rangos de crecimiento, cuáles son las causales que más se invocan y cuales se consideraron procedentes; la estadística se obtiene a través de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), Supremo Tribunal de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

En el trabajo de investigación el objeto de estudio se constituye el establecer y conocer los grados de dificultad que se presentan, tanto procesal como sustantiva en los procesos jurisdiccionales de disolución del vínculo matrimonial, por lo que se analiza el juicio de divorcio en sí, al igual que el comportamiento de los operadores jurídicos.

En cuanto a los objetos y sujetos de nuestra indagación, hay que apuntar que una de las finalidades, consiste en que se considera necesario que en el Estado de Jalisco se utilicen vías alternas (como los medios alternativos de resolución de conflictos y el divorcio exprés o incausal) para dar por concluido el vínculo matrimonial, en el primer supuesto cuando los conyugues así lo acuerden y en el segundo, a petición de cualquiera de ellos. Tales vías alternas requieren forzosamente del conocimiento de técnica especializada para la consecución de su fundación teleológica y que es propia para cualquier sistema de justicia, donde el Estado debe preocuparse para su realización al constituir lo que la doctrina señala como servicio público esencial.

Se abordan las principales líneas de análisis bajo la cosmovisión de las diversas dimensiones en las que incide la disolución del vínculo matrimonial, para ello se considera necesario precisar algunas valoraciones conceptuales mediante las cuales se establecen los parámetros generales del diseño de la investigación que se realiza así como la hipótesis o supuesto metodológico, sus dimensiones histórica, social, económica y jurídica.

El desarrollo de la presente investigación parte de la siguiente hipótesis:

A través de la implementación de los métodos alternos de solución de conflictos y el divorcio incausal, se puede dar una respuesta adecuada a la demanda ciudadana sobre la problemática que actualmente enfrentan al solicitar o demandar la disolución del vínculo matrimonial.

Los métodos utilizados para la realización del trabajo son:

Método inductivo, aplicado a la averiguación, mediante el análisis de los hechos y de las leyes que los rigen. Siendo necesario, partir de las especificaciones y particularidades que identifican o se desprenden del matrimonio y el divorcio, esto es, para construir el objeto de estudio se analizó cada uno de los aspectos que lo hacen relevante en los ámbitos social, familiar, institucional y jurídico; el método deductivo permitió interferir de otros juicios que se tienen como ciertos o necesarios, como se supone lo son, algunas conclusiones basadas en aquellos sobre el tema objeto de estudio.

Por otra parte, el método histórico, facilitó indagar los antecedentes del matrimonio y el divorcio, fue posible revisar en nuestra mente la individualización histórica humana y visualizarla en el espacio y en el tiempo determinado, dónde, cuándo y por qué acontecieron. Asimismo, el método exegético o de interpretación, se aplicó al hacer algunas reflexiones e interpretaciones sobre las leyes que regulan el matrimonio y el divorcio.

Se realiza un estudio sobre el divorcio, sus fundamentos legales, tipos de divorcios (divorcio por mutuo consentimiento, divorcio necesario o contencioso, divorcio administrativo y divorcio exprés), generalidades, efectos, tramitación, requisitos, resolución, ejecución y cumplimiento. Todo ello, con la finalidad de establecer el origen de las exigencias jurídicas, que deben

cubrirse para lograr la disolución del vínculo matrimonial, de manera pacífica; no obstante, la disolución del vínculo detenta bastantes aspectos negativos entre la partes del conflicto, tales como: un alto grado de dificultad en dichos procesos, la invasión a la privacidad de las personas, el irrespeto a la decisión de ellos o de uno de los consortes para no continuar unido en matrimonio. Asimismo, se efectúa un análisis sobre la problemática actual de los procesos de divorcio a través de diversas entrevistas que se realizan a funcionarios judiciales, el crecimiento de los procesos de divorcio en nuestro estado y de las principales deficiencias en el planteamiento del divorcio por mutuo consentimiento.

Igualmente, se establecen las dificultades existentes en los divorcios contenciosos, principalmente en lo referente a la acreditación y comprobación de las causales de divorcio asimismo se estudia la ejecución de sentencias tanto en el divorcio voluntario como el contencioso, pues se pueden presentar diversos tipos de ejecución, en el primero según los pactos que los interesados hayan convenido y el segundo acorde a la sentencia y a la propia ley, y que en muchos de los casos, resulta más complicada que el propio proceso de divorcio.

Por otra parte, se aborda un estudio de derecho comparado con relación a la normativa del Distrito Federal, por esta una normativa garantista, respecto de los derechos humanos de los consortes y los procesos de disolución existentes, los que se traducen en eficientes y eficaces. Asimismo, se establecen los resultados que arrojaron las investigaciones realizadas en este trabajo, con la que se acredita la hipótesis planteada, y por supuesto se determina que los factores que han provocado un crecimiento de los divorcios son diversos, pues tienen matices que inciden en lo económico, cultural y social como es el hecho, de que la mujer ha encontrado en sí misma la capacidad y fuerza para laborar, adquirir independencia económica y tener

confianza en sostener un medio familiar, lo que ha contribuido a que ésta toma decisiones para iniciar trámites de divorcio.

Se propone la implementación de un modelo idóneo para el proceso de divorcio. Para lo cual se contemplan diversas posibilidades, la primera en cuanto a realizar propuestas de reformas sustantivas y procesales en el trámite del divorcio ya sea por mutuo consentimiento o contencioso, o bien la posible supresión del listado de causales de divorcio, para en todo caso dejar dos vertientes específicas que versan en conductas que impliquen violencia intrafamiliar o aquellas que no cumplan con los fines y obligaciones del matrimonio, o como una posibilidad más adecuada a la realidad que nos aqueja, la posibilidad del divorcio a través de los métodos alternos de solución de conflictos y además la supresión del divorcio como actualmente se encuentra para en su lugar determinar la inclusión del divorcio exprés en la legislación sustantiva civil y procesal civil del Estado de Jalisco.

En este sentido, las nociones de equidad y autonomía adquieren la connotación de lo arcaico, lo obsoleto. En esta radicalización del universalismo desaparece toda especificidad histórica y bajo paradigmas moralistas que impiden la libertad plena del sujeto y lo circunscriben a formas de convivencia humana y social predeterminadas convencionalmente bajo la obligada forma de la familia convencional, por lo que intencionalmente se dificulta la separación legal de las personas unidas en matrimonio, pese a que ello sea, un auténtico calvario.

Finalmente acotaremos que la pretensión ha sido evidenciar la dificultad que presentan la acreditación de la mayoría de las causales que se pueden invocar en el procedimiento contencioso, pues es punto menos que imposible comprobarlas con certidumbre científica y jurídica, y que por lo tanto, debería bastar la simple y llana voluntad de las partes para disolver el matrimonio. Si así se considerara, incluso tendríamos la ventaja de no

evidenciar la vida privada de los contendientes, con lo que se preservan incluso sus derechos humanos elementales.

Evidentemente permanecen aún resabios y atavismos que tienen qué ver más con la moral, que de manera indirecta o directa impiden la agilización de los trámites de divorcio proponiendo causales prácticamente imposibles de comprobar, acaso por los intereses de conformación unitaria de una sociedad moralmente “perfecta”, situación que permea a las esferas de la noción jurídica, afectando la obligatoria neutralidad de la impartición de justicia; influjos de corrientes globales de pensamiento conservador discretos pero que de forma efectiva y fáctica logran permanecer en sus intereses, vulnerando así los principios de equilibrio y la equidad, propios del pensamiento crítico, y oscureciendo el camino de la verdad y la justicia. Tengo la certeza, no obstante de que este camino puede ser encontrado, a pesar de la adversa e eminentemente globalización jurídica con sentido de injusticia vertical impuesta por países más poderosos con su propia noción de célula familiar. Aunque como mencionó el máximo existencialista alemán, Federico Nietzsche, *“La esperanza es el peor de los males porque prolonga al ser humano los sufrimientos”*<sup>1</sup>. Este ha sido el fin último de mi trabajo, y así hacer asequible una sociedad más armoniosa, bajo la idea del espacio y del tiempo, tal como lo menciona Kaki Laïdi:

*“Las sociedades renegocian su relación con el espacio y el tiempo por medio de concatenaciones que ponen en acción una proximidad planetaria bajo su forma territorial (el fin de la Geografía), simbólica (la pertenencia a un mismo mundo) y temporal (la simultaneidad).”*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Nietzsche, Federico, *Humano. Demasiado humano*, México, Porrúa, 1989, p. 34.

<sup>2</sup> Laïdi, Kaki, *Política y Derecho. Un mundo sin sentido*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 12.

En esta exploración se ha pretendido realizar una labor clara y objetiva; un estudio basado en cuestiones históricas, culturales, constitucionales y familiares principalmente, donde la concisión sea el factor preponderante. Con este trabajo tan sólo se denuncia y demuestran las deficiencias legales, la falta de profesionalismo en algunos de los abogados postulantes, así como negligencias de los juzgadores, que en esta materia en específico imposibilita no sólo el cumplimiento pragmático del articulado relativo, sino la correcta y estricta observancia del Estado de Derecho en un ámbito más justo y democrático.

En consideración de lo anterior cabe apuntar que el objetivo inmediato en la presente investigación radica en establecer, en primer momento, la actual problemática de los procesos de divorcio ya sea voluntario o contencioso, así para estar en condiciones de evidenciar jurídicamente la dificultad de acreditación de la prueba en la gran mayoría de las causales de divorcio, que a merced a la deficiencia en el actuar de los abogados o bien en los requisitos que para cada una de ellas ha sostenido en diversas tesis y jurisprudencias el Poder Judicial de la Federación, lo que propicia la posibilidad de lamentables circunstancias muy adversas todas en grado, y que en frecuencia también son insoslayables, respecto a la integración procesal y al buen funcionamiento de los tribunales.<sup>3</sup>

Como resultado de la búsqueda iniciada, se tiene que en los últimos años la visión del matrimonio para toda la vida, se ha dejado a un lado y el crecimiento de procedimientos judiciales inherentes a la disolución del vínculo matrimonial han florecido en forma impresionante; un sin fin de factores ha incidido en ello, podemos establecer que tanto los aspectos económicos, como políticos, sociales y jurídicos han creado una perspectiva diferente de estos procesos y naturalmente el impacto de sus consecuencias trae consigo una serie de aspectos de la misma índole que deben ser considerados con

---

<sup>3</sup> Sánchez Márquez, Ricardo, *Derecho Civil*, 3ª ed., México, Porrúa, 1998, p.125.

objetividad y madurez en beneficio de los interesados y para que no se pierda la esencia de la familia como tal.

El hecho de que enfrentemos con una nueva mentalidad las formas de solución a los conflictos matrimoniales, no implica necesariamente que estemos preparados para ello, dicho en otras palabras, la circunstancia de que en la actualidad se ventilen un gran número de juicios de divorcio, no implica que se tenga profesionalismo en el planteamiento jurídico y social en que se traduce este proceso -cantidad no implica calidad- y es justamente este punto en donde se plantea un nuevo sistema garantista de divorcio, que corresponde a la hipótesis de este estudio, se trata de demostrar que por las propias normas, su interpretación, así como en gran medida la falta de profesionalismo y conocimientos jurídicos en los asesores jurídicos, el desconocimiento de tales aspectos aun en lo básico o esencial, por los propios interesados, produce demandas o solicitudes y convenios de divorcio deficientemente planteados, lo que a su vez provoca pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, duplicidad de trabajo y un sin fin de situaciones negativas, y que lamentablemente genera una injusta falta de credibilidad en los órganos de administración de justicia.

Sin embargo este estudio, no tiene como única finalidad la realización de una investigación para probar esta hipótesis, sino que una vez confirmada, se proponga en forma clara y sencilla una propuesta de reforma de ley, que logre para los interesados el objetivo deseado protegiendo sus derechos fundamentales, de la misma manera este trabajo tiene como fin colateral el que estudiantes y pasantes de la carrera de derecho, tengan una panorámica de los procesos de divorcio por mutuo consentimiento y contencioso, con la intención de que los profesionales de la abogacía se sensibilicen de los derechos e intereses de los justiciables, así como de la gama de consecuencias que genera un deficiente planteamiento de la disolución de un matrimonio.



# **CAPÍTULO I**

## **PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS PROCESOS DE DIVORCIO EN JALISCO**

### **1.1 El crecimiento de los procesos de divorcio.**

La disolución del vínculo matrimonial es aspecto jurídico que en nuestra historia inmediata no era cosa frecuente más que en casos considerados como absolutamente necesarios y atendiendo a las circunstancias especiales que pudieran envolver un asunto específico y particular, razones de índole moral y social eran las causas principales por las cuales poco uso se hacía del divorcio; empero, en la actualidad no se puede soslayar el incremento sustancial de esta figura jurídica.

El mundo ha cambiado, los factores son múltiples, la globalización ha hecho presencia en diversos aspectos que van desde el económico, político, social hasta el familiar a través de las nuevas formas de familia; el siglo XXI nos llega con un sinnúmero de nuevos conceptos jurídicos, en tanto que la gran mayoría de los operadores del derecho estamos inmersos en el pasado, con una formación educativa, profesional y laboral tradicional, en la que solo tiene cabida el derecho positivo y su limitada interpretación, aspecto que debemos cambiar pues como lo señala Rafael Sánchez Vázquez “...*Los juristas del siglo XX, y en tránsito al tercer milenio están obligados a obtener una información y formación interdisciplinaria que les permita ver con mayor claridad la complejidad del fenómeno jurídico, como una realidad socio-histórica. Además, cabe destacar que, el Derecho se encuentra condicionado por las relaciones sociales de producción. Empero, el Derecho visto como superestructura también condiciona a dichas relaciones.*”<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Sánchez Vázquez, Rafael, *Metodología de la Ciencia del Derecho*, México, Porrúa, 2008, p. 358.

Bonnecase, sobre el divorcio señala que: *“...Por una consecuencia lógica, todas las revoluciones que se sucedieron en el siglo XIX, insertaron en sus programas un artículo relativo al matrimonio y al divorcio porque, en su espíritu, el matrimonio y el divorcio constituían desde entonces, cuestiones políticas, y porque, una revolución, aunque se diga y pretenda lo contrario, reviste siempre un carácter político. Esto se advierte a raíz de la revolución de julio, al proponerse el restablecimiento de él, “como demostración contra la religión de estado que acababa de perecer”. Por otra parte, la concepción del matrimonio-contrato influyó, a su vez sobre el restablecimiento del divorcio.*<sup>5</sup>

En la gran mayoría de los Estados de la República Mexicana y especialmente en Jalisco, el sistema jurídico vigente se prevén tres formas para obtener la disolución del vínculo matrimonial, una de índole administrativo, que se puede tramitar ante el oficial del registro civil o los centros de mediación y dos de naturaleza jurisdiccional, ya sea en la vía de tramitación especial para el divorcio por mutuo consentimiento o bien a través de la vía civil ordinaria, bajo el ejercicio de la acción de divorcio haciendo valer la causa o causales que para el caso se hayan presentado, este último conocido como divorcio contencioso, y a partir del año 2007 en Jalisco retorno el divorcio administrativo que se ventila ya sea ante el oficial del registro civil o los centros de mediación.

Si bien la figura del divorcio es añeja en nuestro sistema jurídico, es en los últimos años cuando se ha presentado una gran demanda en su ejercicio, ciertamente que no se ha generalizado su uso en toda la ciudadanía, pero los números estadísticos nos reflejan que en los últimos diez años, se ha incrementado en forma vertiginosa.

---

<sup>5</sup> Bonnecase, Julien, *Tratado elemental del Derecho Civil*, México, Harla, 1993, Colección Clásicos del Derecho, p. 252.

Como se indicó, los factores que han provocado un crecimiento de estos procesos son diversos, pues tienen matices que inciden en lo económico, cultural y/o social. El hecho de que la mujer ha encontrado en sí misma la capacidad y fuerza para laborar, adquirir independencia económica y tener confianza en sostener un núcleo familiar, ha contribuido a que ésta tome decisiones para demandar la disolución del matrimonio, aunado a la difusión de grandes campañas, tanto internacionales como locales, para concientizar a las víctimas de violencia intrafamiliar. Este mundo está globalizado y ello tiene un impacto en todo sentido.

Esta cultura, poco a poco ha penetrado en la conciencia de mujeres y hombres que viven en matrimonios con un alto grado de disfunción; tales mensajes han creado y seguirán creando conciencia en que ese tipo de convivencia no es la forma de vida que quieren asumir, por lo que el temor o el sometimiento a que han estado sujetos comienza a alejarse para dar paso a decisiones de denuncia o de demanda de divorcio; en fin, todas las circunstancias que envuelven a los seres humanos, todos los eventos que rodean a nuestra sociedad Jalisciense, ya sean políticos, económicos, religiosos, sociales, han estado en continua evolución y variado en forma tal, que en la actualidad el estatus de divorciada o divorciado no conlleva al estigma que tan solo hace unas dos o tres décadas implicaba para aquellas personas que decidían promover la disolución del vínculo matrimonial.

## **1.2 Estadísticas del divorcio del periodo 2001 al 2010.**

Las estadísticas son necesarias como un criterio orientador del aumento en los procesos de divorcio, y resulta aspecto fundamental en nuestro tema para dar el soporte y tener un panorama del crecimiento del divorcio, las demandas que se presentan y cuántas de ellas llegan a la disolución del vínculo matrimonial, las causales que se invocan y cuáles de ellas se

justifican, ciertas características de los divorciantes, etcétera; atenderemos por tanto a fuentes fidedignas que nos proporcionan diversos datos estadísticos nacionales y locales, del periodo comprendido del año dos mil uno al año dos mil diez.

El 25 de enero de 1983 se creó, por decreto presidencial, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que integró en su estructura a:

- La Dirección General de Estadística, en funciones desde 1882, cuando pertenecía a la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.
- La Dirección General de Geografía, establecida en 1968 y que estaba adscrita a la Secretaría de la Presidencia.
- La Dirección General de Política Informática.
- La Dirección General de Integración y Análisis de la Información

El INEGI<sup>6</sup> modernizó la valiosa tradición que tenía nuestro país en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía. Conjuntó en una sola institución la responsabilidad de generar la información estadística y geográfica

El Sistema Nacional de Estadísticas Vitales es una de las fuentes de información demográfica con mayor tradición, sus antecedentes inmediatos fueron los registros parroquiales que realizaba la Iglesia Católica en la Nueva España, con el propósito de registrar los bautizos, matrimonios y entierros. Registros que en su momento y por mucho tiempo fueron la única fuente de información demográfica en el país, se proporcionaba por curatos y vicarías con la finalidad de conocer aproximadamente el crecimiento natural de la

---

<sup>6</sup> INEGI, disponible en <<http://www.inegi.org.mx/inegi/acercade/default.aspx>>, página consultada el 20 de abril de 2013.

población y algunas características sociodemográficas de las personas que participaron en esos acontecimientos.

En nuestro país se efectuaron diversos intentos oficiales para integrar las estadísticas vitales del país, en el año de 1857 se propone la creación de la Ley Orgánica del Registro Civil, la que por oposición natural del clero no entra en vigor sino hasta el año de 1859, formando parte de las Leyes de Reforma.

Por la situación política del país, es claro que el funcionamiento del Registro Civil se presentó en forma irregular: *“...durante muchos años los datos provenientes del Registro Civil estuvieron muy por debajo de los datos registrados por las autoridades eclesiásticas, por lo que en 1871 se establece la obligatoriedad de los padres de inscribir a sus hijos en esta institución. Posteriormente, en este mismo año se expidió el reglamento de los juzgados del Registro Civil; y más tarde, en 1874, se decretó que estas leyes fueran adicionadas a la Constitución de 1857, para reglamentar el registro de los hechos vitales y del estado civil en México. Entre las disposiciones fundamentales de esta Ley, destacan:*

- *El matrimonio es un contrato civil, monogámico e indisoluble.*
- *Son actos del estado civil los nacimientos, las adopciones, los reconocimientos, las arrogaciones, los matrimonios y los fallecimientos.*
- *El clero no intervendrá más en la administración y economía de los panteones y cementerios.*
- *Los encargados de la función registral serán los jueces del Registro Civil<sup>7</sup>.*

---

<sup>7</sup> INEGI, *Síntesis metodológica. Estadística de divorcios*, disponible en [http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/registros/sociales/sm\\_divorcios.pdf](http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/registros/sociales/sm_divorcios.pdf), página consultada el 20 de abril de 2013, *passim*.

La Dirección General de Estadística fue creada en 1883, la información que se generaba se publicaba en el Boletín Estadístico, que fue sustituido por el Anuario Estadístico en el año 1893, a partir del cual se establece en nuestro país, el Sistema de Estadísticas Vitales basado en información recolectada por el registro civil de cada entidad federativa mediante la transcripción de la información de los actos del estado civil y los hechos vitales.

En 1917 se promulgo la Ley sobre Relaciones Familiares, que permitió la disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio, empero es hasta el año de 1926 cuando los datos estadísticos del divorcio se incorporan a las estadísticas vitales, y quedan incorporados como fuentes de información de estos eventos, los Juzgados de lo Familiar, Civiles y Mixtos.

En la actualidad el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales genera información de: nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones generales y muertes fetales e interactúan con el INEGI diferentes instituciones que son órgano-rector de las diversas fuentes que proporcionan la información de los cinco hechos vitales, entre ellos y por el tema de la investigación que nos ocupa, el Registro Civil el cual supone la anotación continua, permanente, obligatoria y universal de los hechos ocurridos y sus características, en particular los hechos concernientes al estado civil de las personas y el Poder Judicial de los Estados, a través de los Juzgados de lo Familiar, Civiles o Mixtos proporcionan información de la estadística de divorcios.

En la citada Página del INEGI<sup>8</sup> se indica que: *“...es importante la captación de la estadística de divorcios, por el hecho mismo de que las estadísticas vitales pretenden dar información sobre el comportamiento de fenómenos demográficos, entre otros, los relacionados con la natalidad, la mortalidad y la nupcialidad, con el fin de proporcionar elementos que permitan planificar, consolidar y adecuar las acciones gubernamentales conforme a los*

---

<sup>8</sup> Ídem.

*cambios sociodemográficos que experimenta el país, y que la estadística referente a divorcios, es de interés nacional y objeto de estudio...”.*

En nuestro país, el Registro Civil recopila los hechos civiles referentes al estado conyugal de las personas, entre ellos, los relativos a los matrimonios y los divorcios, este último es la unidad de observación para la generación de la estadística; dependiendo del tipo de trámite:

- Los divorcios administrativos que se tramitan en las Oficialías del Registro Civil.
- Los divorcios judiciales se registran en los Juzgados de lo Familiar, Civiles y Mixtos.

La estadística de divorcios del INEGI tiene como finalidad presentar el número de separaciones legales que se realizan en el país, por medio del divorcio; asimismo permite conocer la tendencia que ha tenido la disolución de los matrimonios en México<sup>9</sup>. De su análisis podemos observar la frecuencia de los divorcios, así como conocer las causas y los factores que inciden para la disolución del vínculo, y por supuesto proporciona diversos elementos que contribuyen a definir los programas asistenciales dirigidos a la familia y sus integrantes.

Para fines estadísticos, se distingue el tipo de trámite se denomina divorcio administrativo si se efectúa a través del Registro Civil y divorcio judicial cuando se gestiona en algún Juzgado de lo Familiar, Civil o Mixto.

En el rubro del divorcio se efectúan los datos estadísticos, bajo diversos ejes, por grupos sociales, regiones en el territorio nacional, medio urbano rural, edad, nacionalidad, escolaridad de los divorciantes, etcétera, como marcos de referencia que definirán el fenómeno con base en cualidades

---

<sup>9</sup> *Ídem.*

distintas. Estas estadísticas permiten establecer el crecimiento de la disolución del vínculo matrimonial lo que permite ubicarlo como un acontecimiento social innegable, para algunos relacionado con la desestabilización de la familia que desintegra hogares y para otros como una opción social y jurídica necesaria.

Para poder determinar el crecimiento, motivos y diversas circunstancias sociales inherentes del divorcio en el estado de Jalisco en los últimos años, a continuación analizaremos la información que se proporciona sobre el periodo del año 2001 al 2010, en la base de datos derivada de la “**ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS**” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en todos los años atenderemos a los detalles que se estiman relevantes para el estudio que nos ocupa, como el número de divorcios decretados según la vía, las causales que fueron procedentes, a quien o a quienes se otorgó pensión alimenticia y el ejercicio de la patria potestad, en algunos de los años se analizarán otro tipo de información, como edad de los divorciantes, tiempo de duración del matrimonio, residencia habitual, etcétera, para tener una visión panorámica de otros aspectos colaterales.

Como puede captarse de los datos estadísticos del INEGI sobre los divorcios decretados en los últimos años en nuestro país, anexo 1 y 8, nos proporciona un amplio panorama del crecimiento del divorcio así como factores colaterales que proporcionan una lectura integral de esta figura jurídica y realidad social. Del anexo 2, se desprende sobre el estatus del estado conyugal de la década de los cincuentas al dos mil diez, se puede apreciar cómo mientras se incrementa el número en el estado civil de divorciados y divorciadas, baja el que corresponde al rubro de “*separados*”, lo que implica que los ubicados en este último optaron por la tramitación del divorcio.



De igual manera, la estadística refleja que contrario a lo que puede estimarse, no es alarmante ni el número ni el crecimiento de personas divorciadas en el Estado de Jalisco, pues en el año dos mil representa un 41.8% de solteros, 54.5% de casados, 1.8% de divorciados y 1.9% de viudos, en los varones; en tanto que en las mujeres, el 38.4% de solteras, 51.5% de casadas, 3.7% de divorciadas y 6.4% de viudas, cifras que una década después, o sea en el año dos mil diez se arrojan las siguientes; en los hombres, el 39.9% de solteros, frente al 54.9% de casados, el 3.3% de divorciados y el 1.9 % de viudos, en tanto que las mujeres, representa el 35.7% de solteras, 52.2% de casadas, el 5.7% de divorciadas y el 6.4% de viudas, Ver anexo 3.

Podemos observar que la mayoría de los divorcios derivan del trámite del divorcio voluntario, y que son pocos los que emergen como procedentes en el divorcio contencioso; si atendemos al rubro del medio urbano o rural de los divorciantes, deja en claro que el mayor porcentaje corresponde al medio urbano; que contrario a lo que se expresa como una leyenda urbana, la gran mayoría de los divorcios decretados no corresponden a parejas de pocos años de matrimonio, sino que el porcentaje más alto esta en las parejas que han durado diez años o más unidos en matrimonio; que haciendo a un lado el divorcio por mutuo consentimiento, la causal que más se acredita (y por lo tanto es la que más se invoca) es la relativa a la separación o abandono de hogar sin causa justificada, seguida por la causal de sevicia, amenazas e injurias o violencia intrafamiliar, y en tercer lugar aparece la negativa de proporcionar alimentos, que de los hombre divorciados trabaja, como empleado, casi la totalidad, en tanto que las mujeres solo trabajan un cincuenta por ciento, y el número más alto en calidad de empleadas. Ver. Anexos 4, 5, 6, y 7.

El incremento de este tipo de procesos, se presenta en forma evidente en la zona metropolitana del Estado de Jalisco, no así, en el resto de la

Entidad, en donde todavía los aspectos religiosos y sociales pesan mucho en las personas, y que sólo en casos especiales o graves, ambos o uno de los cónyuges solicitan el divorcio.

Lo anterior se confirma con los datos que arrojan las estadísticas del número de asuntos que han recibido los juzgados familiares del Primer Partido Judicial del año 2001 al 2010, no obstante el hecho de que en este periodo hubiesen aumentado el número de juzgados en esta materia, de cuatro a diez, tal como puede observarse en anexo 9.

Uno de los puntos a justificar en este estudio, es si los procedimientos de divorcio son idóneos o difíciles de tramitar y acreditar, a virtud de la exigencia de la ley o los criterios emitidos al respecto por el Poder Judicial de la Federación, o bien el desconocimiento de dichas normas y criterios por parte de los abogados. La estadística del INEGI en relación con los divorcios decretados en el Estado de Jalisco, deja en claro que el porcentaje mayor de divorcios se deriva del mutuo consentimiento, en tanto que resulta mínimo el número de divorcios derivados del juicio contencioso, ello a virtud de que la acreditación de las causales de divorcio son de difícil justificación, según se verá a lo largo de la investigación.

Con la finalidad de poder tener un resultado más o menos certero de estos aspectos, se realizara un comparativo de los datos estadísticos del INEGI que corresponden a los divorcios decretados en todo el Estado de Jalisco anualmente, con los datos estadísticos del año correspondiente sobre las demandas de divorcio presentadas únicamente a lo que corresponde al primer partido judicial del Estado, lo que nos dará una idea de la desproporción entre lo que se demanda y lo que se concede en relación con el divorcio en nuestra entidad Federativa.

De los datos comparativos del INEGI sobre las sentencias de divorcio decretadas en cada anualidad en todo el Estado de Jalisco, frente a los datos estadísticos de las demandas de divorcio únicamente presentadas en el primer partido judicial del Estado -sin considerar el resto de los partidos judiciales- del cien por ciento de las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, solo llegan a sentencia favorable un aproximado del cincuenta y cinco a sesenta por ciento, sin que se tenga el dato estadístico de que aconteció con el resto de los divorcios por mutuo, para conocer cuantas corresponden a solicitudes no admitidas, a procesos sobreseídos por abandono, o bien por reconciliación entre los cónyuges, etcétera.

En tanto que del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, oscila entre el seis y el diez por ciento las que llegan a sentencia favorable; ciertamente se tiene el dato de cuantas demandas de divorcio se presentan al menos en el primer partido judicial, sin embargo no existen estadísticas de cuántas fueron materia de prevención, cuántas no se admitieron, en cuales existió desistimiento, cuántas fueron abandonadas o bien a qué número asciende aquellas que continuaron por todas sus etapas procesales llegando a sentencia en la cual se determinó la improcedencia de la acción de divorcio, lo que nos proporcionaría un dato más exacto de qué es lo que acontece respecto del casi noventa por ciento que no llega a sentencia que disuelva el vínculo matrimonial, -aspecto que se reflejara en el investigación de campo realizada entre los juzgadores y que posteriormente veremos- empero, no menos cierto es que el resultado de la equiparación resulta revelador, y deja en claro que del universo de juicios de divorcio por causales, es un porcentaje mínimo el que obtiene sentencia favorable.

De la misma manera, la estadística refleja que en una década, del año 2001 al 2010, las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento presentadas en el primer partido judicial, tuvieron un incremento aproximado del **37 %**, sin dejar de considerar que a partir del año 2007 retorno el divorcio

administrativo y que ello, repercute de manera directa en este tipo de divorcios voluntarios.

En tanto que en el mismo periodo, del año 2001 al 2010, las demandas de divorcio contencioso presentadas en el primer partido judicial, se incrementaron en un **25 %** aproximadamente.

Otra lectura que emerge de los datos aludidos, es que si comparamos las solicitudes de divorcio por mutuo frente a las demandas de divorcio, en los primeros años de la década 2000 al 2010 el divorcio por mutuo representa un doscientos por ciento más que el contencioso, en tanto que en el último año, 2010, el mutuo represento un doscientos cuarenta por ciento más aproximadamente, frente a las demandas de divorcio necesario, lo que implica que el divorcio voluntario siempre ha sido de mayor demanda y que en los últimos años se ha venido incrementando; lo que resulta lógico ya que como se verá en esta investigación, representa un procedimiento más ágil y efectivo para los propios interesados.

Un dato más que emerge de las estadísticas anteriores y con el que se fortalece la hipótesis del aumento de este tipo de asuntos, corresponde al crecimiento de los propios juzgados especializados en materia familiar en el Primer Partido Judicial, que en el año de 1999 correspondía a cuatro juzgados y en la actualidad se han incrementado al número de diez tribunales en esta materia, y pese a ello, es clamor general, tanto de funcionarios como de postulantes, la necesidad de crear nuevos juzgados especializados en materia familiar, con la finalidad de que las actuales cargas de trabajo se descarguen, para poder obtener un proceso judicial más ágil y de mejor calidad jurídica.

### 1.3 Los operadores jurídicos en los divorcios.

La gran demanda de procesos judiciales de esta naturaleza, no significa necesariamente que los conocedores del derecho se encuentren debidamente preparados para hacer frente en forma positiva a estos reclamos, pues como se ha visto, del cotejo de las estadísticas del INEGI frente a las de Oficialía de Partes Común del Primer Partido Judicial –sin considerar los presentados en el resto de los partidos judiciales- el que sólo de un cincuenta a sesenta por ciento de divorcios por mutuo lleguen a sentencia, puede ser aceptable, mas no lo es en los juicios de divorcio contencioso, ya que resulta altamente preocupante y cuestionable que el índice de porcentaje en los que se obtiene sentencia que decreta el divorcio, oscile en una década entre el seis y diez por ciento, lo que deja en claro que en un noventa por ciento de los juicios de esta índole no se logran resultados satisfactorios para los demandantes involucrados, lo que en gran parte se debe, a un deficiente o pésimo planteamiento de la solicitud de divorcio o de la demanda. “...*Tampoco podemos ignorar el hecho de que algunos litigantes viven prolongando los procedimientos judiciales con el propósito de obtener más dinero. Estos abogados viven del conflicto sin importarles la situación que vive el cliente y mucho menos las consecuencias que pudiera tener su actuar y la resolución judicial en la comunidad, así como algunos médicos se les critica el fomentar las operaciones por el beneficio económico que les representa.*”<sup>10</sup>. Todo esto, hace necesario que los funcionarios y postulantes involucrados en este tipo de asuntos deban prepararse en forma más profesional y consciente del conocimiento correcto y exacto de los requisitos de fondo y forma para un adecuado planteamiento del caso, la preparación

---

<sup>10</sup> Pérez Saucedo, José Benito *et al.*, “La interdisciplinariedad y multidisciplinariedad como modelos a seguir en la enseñanza del Derecho. La experiencia de los Métodos Alternos de Solución de Controversias”, *Revista Letras Jurídicas*, núm. 8, primavera de 2009, *passim*.

para la oferta de las pruebas pertinentes y así finalmente lograr éxito en el juicio que se plantea.

Alcalá-Zamora<sup>11</sup>, indica: *“Sin llegar a tales extremos, el proceso rinde con frecuencia mucho menos de lo que debiera: por defectos procedimentales, resulta muchas veces lento y costoso, haciendo que las partes, cuando ello sea posible, lo abandonen para buscar el arbitraje o en la autocomposición, soluciones con menos posibilidades de ser justas, pero con la seguridad de ser más rápidas y más económicas; pero el mayor escollo con que tropieza y tropezará el proceso, por muy perfectas que sean las leyes que lo encuadren, es la naturaleza humana.”*. Ciertamente las vicisitudes de los procesos jurisdiccionales, provocan que en muchos de los casos, los justiciables desistan de la reclamación formulada ante la autoridad judicial, para la búsqueda de soluciones en otras vías, empero, ello no implica que necesariamente se resuelvan, pues en unas y otras intervienen el factor humano que dimana de los propios interesados y de los terceros intervinientes.

Del resultado de la investigación de campo, se infiere que una gran parte de los juzgadores expresa en buena medida, que la problemática en los procesos de divorcio ya sea en etapa de juicio o en ejecución de sentencia, se debe a una deficiente actuación del profesional del derecho, las causas pueden ser múltiples, desde una deficiente preparación jurídica, la falta de actualización en el derecho positivo y su interpretación, hasta la falta de ética profesional. Calamandrei,<sup>12</sup> señala que: *En la abogacía civil la diferencia entre los profesionales dignos y los aprovechados, es la siguiente: que*

---

<sup>11</sup> Alcalá-Zamora, Niceto, *Proceso, auto composición y auto defensa*, México, Editorial Jurídica Universitaria, 2001, Serie Clásicos de la Teoría General del Proceso, vol. 2, pág. 103.

<sup>12</sup> Calamandrei, Piero, *Elogio de los Jueces*, Edición Facsimilar, México, Editorial Tribunal, p. 97.

*mientras éstos se ingenian por encontrar en las leyes las razones que permitan a los clientes violar legalmente la moral, aquéllos que buscan en la moral las razones para impedir que los clientes hagan lo que sólo las leyes permiten”.*

Es importante recordar a los estudiantes de derecho o a los pasantes de la carrera de la abogacía, que la deontología como ciencia o disciplina que estudia los deberes o el deber ser, aplicada a la rama profesional del derecho no sólo es definida como la rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica de la determinación de cómo debe ser el derecho y cómo debe de aplicarse, sino también bajo la acepción de los deberes que han de cumplirse en una profesión determinada, de donde se desprende que en este sentido particular la deontología jurídica se identifica con la ética profesional de los juristas.

Por ello, resulta trascendental que el profesionista en derecho, asuma ante su comunidad el verdadero conocimiento del derecho y su ejercicio, los abogados estamos obligados a fortalecer los lazos de las familias, y por ende, a defender el matrimonio como institución.

Además, es menester que cada vez que una persona ocurra ante el juzgador a plantear una problemática conyugal, antes que proponer como solución el divorcio, es su deber realizar un estudio y análisis profundo de la verdadera problemática de los cónyuges, y procurar que entre ellos se desvanezca la obstinación para que surja el entendimiento, que al enojo o contrariedades –que en ocasiones son momentáneas y hasta infundadas– prevalezca la comprensión mutua.

En fin, el postulante y aún el juzgador deben realizar un trabajo de consejero, de orientador en la búsqueda de la solución a los problemas conyugales; sin embargo es evidente que en muchas ocasiones la

problemática no tiene remedio y que si por el contrario, el no tomar las medidas jurídicas adecuadas puede poner en peligro la integridad de cualquiera de los miembros de la familia, en estos casos, no vale actitud conciliadora ni mucho menos puritana o moralina alguna, el abogado debe enfrentar y afrontar a su cliente a la realidad de la problemática que se presenta y exponerle las consecuencias jurídicas y naturales que la opción de un divorcio puede acarrear.

Efrén Vázquez señala que para entender la formación deontológica y hermenéutica de los operadores del derecho, debemos recurrir al *ethos*<sup>13</sup> de la ciencia:

*“...Sin ethos de la ciencia no hay posibilidad de hacer ciencia, esto es obvio, sin embargo, lo primero que se aprecia en los decálogos de ética profesional de los operadores del derecho es la existencia de no pocas paradojas que ponen en entredicho al ethos de la ciencia. Parece ser que la mayoría de los juristas y los operadores del derecho comparten un ethos que no es de la ciencia; o bien, que el ethos de los juristas y operadores del derecho es otro, muy distinto al ethos de la ciencia. En algunos casos los hábitos, costumbres, convicciones, actitudes, presuposiciones, etc., de éstos simplemente caminan en sentido contrario a los hábitos, costumbres, convicciones, actitudes y presuposiciones del ethos de la ciencia, y en otros es de apreciar que la mayor parte de estas normativas deontológicas expresan un marcado rechazo y desprecio por todo aquello que significa abstracción y pensamiento teórico, que es lo que caracteriza precisamente el ethos de la ciencia, desprecio que además se lanza*

---

<sup>13</sup> *Ethos*: Credibilidad, Honestidad. Cfr. Cisneros Farías, Germán, *Diccionario Jurídico*, México, Trillas, 2006 (reimpresión 2012), p. 44.



*contra quienes de alguna manera en el medio de los operadores del derecho aparecen como teóricos.”<sup>14</sup>.*

Si el abogado no es especialista en derecho familiar o es de aquellos que no están de acuerdo con el divorcio, -por la razón que sea-, es preferible que en un acto de pleno autoconocimiento -que por supuesto requiere de un gran valor- señale a la persona o personas que buscan sus servicios profesionales, su carencia o falta de conocimiento profundo en la materia o su falta de aceptación al divorcio, y en todo caso los derive a un conocedor del tema del divorcio; no debe de olvidarse que como lo expreso el maestro Miguel Villorio Toranzo, *“la finalidad de la deontología jurídica es informar lo que es lícito o ilícito en la práctica de la profesión del abogado al servicio de la justicia”*.<sup>15</sup>

El abogado, antes que postulante, tiene el deber de ser un mediador en los conflictos que le sean expuestos por sus clientes, sobre todo en aquellos que inciden en la problemática familiar; entendiendo como mediador, aquella persona capacitada profesionalmente para ayudar a las partes en conflicto a encontrar una solución al o los problemas que enfrentan<sup>16</sup>, ello de ninguna manera implica que deje de cobrar honorarios, pues su intervención como mediador para proporcionar a las partes en conflicto las herramientas necesarias para lograr la o las soluciones al problema que enfrentan, es parte de un trabajo profesional. Se requiere de un abogado con multiplicidad de

---

<sup>14</sup> Vázquez, Efrén, “El Entroncamiento del Problema Hermenéutico con el Deontológico en la formación de los Operadores del Derecho”, (Segunda Parte), *Revista Conocimiento y Cultura Jurídica*, Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Segunda Época, Año 3º, núm. 5, enero-junio 2009, pp. 29 y 30.

<sup>15</sup> Villorio Toranzo, Miguel, *Deontología Jurídica. Textos Universitarios*, México, D. F., Universidad Iberoamericana, Departamento de Derecho, 1987, p. 9.

<sup>16</sup> Cárdenas, Eduardo José, *La mediación en conflictos familiares*, 2ª ed., Buenos Aires, Editorial Lumen Humanitas, 1999, p. 15.

herramientas y no solo en base al derecho positivo; *“...Para lograr ello necesitamos preparar al jurista para ser un constructor de paz, a través de la formación positivista que se le da a los futuros abogados resulta imposible, debemos evolucionar a modelos de educación jurídica más integrales, que le den competencias apropiadas al operador del derecho de realmente solucionar conflictos en la práctica no sólo en la esfera jurídica.”*<sup>17</sup>.

Se estima que de lograr el acuerdo o la solución del conflicto por la vía de la mediación, los propios interesados quedarán emocionalmente con mayor satisfacción personal y de pareja y por ende éstos cubrirán con mejor ánimo los honorarios profesionales respectivos. Es por ello, que se insiste que el trabajo profesional de un abogado que se precie de serlo, debe primeramente ayudar en calidad de mediador, a las partes en conflicto a la solución real y adecuada de sus problemas, sin tener necesariamente en todos los casos, que llegar a la disolución del vínculo matrimonial.

Sobre los Métodos alternos de solución de conflictos, Francisco Gorjón Gómez y José G. Steele Garza, señalan:

*“...En la actualidad, el alcance de la mediación familiar en México es limitado, aunque hay iniciativas específicas para la aplicación ad hoc. La mediación familiar siempre ha estado presente en nuestros códigos civiles a través de las audiencias o reuniones de avenencia donde el juez en turno o el secretario exhorta a las partes a llegar a un arreglo en la toma de decisiones en relación con los hijos, los pagos para alimentos, etc. En esencia, las partes se ponen de acuerdo y el juez sanciona dicho acuerdo.*

*El verdadero sentido de esta mediación es la humanización de los acuerdos a los que llegan las partes, ya que en los conflictos familiares*

---

<sup>17</sup> Pérez Saucedo, José Benito *et al.*, *op. cit.*, nota 10.

*hay una gran carga emocional, en comparación con otro tipo de asuntos. Por lo mismo, la mediación familiar es considerada una buena herramienta pacífica y multidisciplinaria, que facilita las relaciones humanas y busca una justicia restaurativa, no solo una justicia complementaria a través de técnicas específicas.”<sup>18</sup>.*

Parte fundamental de los procesos judiciales es el actuar de los impartidores de justicia, Alsina<sup>19</sup> refiere: *“La función jurisdiccional se ejerce, según hemos dicho, por personas a quienes el Estado confiere la dignidad de magistrados y cuyo conjunto constituye la administración de justicia. Aun cuando la función pertenece en realidad al órgano, o sea el tribunal propiamente dicho, y el elemento humano es sólo el medio del cual se vale el Estado para ponerlo en movimiento, lo cierto es que en la práctica se identifican, y la persona del juez adquiere así singular relieve en el proceso. Su misión no puede ser ni más venerable ni más delicada: a él le está confiada la protección del honor, la vida y los bienes de sus conciudadanos.”*. Efectivamente el actuar del juez es de vital importancia, pues en “sus manos” se encuentra el aplicar la norma para resolver en medida de lo posible en forma justa en beneficio del ciudadano.

Mucho puede decirse al respecto de la función del juzgador, y al igual que sobre el asesor jurídico, se puede iniciar desde la falta de preparación adecuada sobre la materia familiar, pasando por los excesos de trabajo, falta de actualización en el estudio del derecho hasta llegar a la notoria ineptitud; pero una de las características y limitante obvia, es la formación exacerbada dentro del positivismo. Sobre el punto concreto, Herrendorf, indica: “Los

---

<sup>18</sup> Gorjón Gómez, J. Francisco y Steele Garza, José G., *Métodos alternativos de solución de conflictos*, 2ª ed., México, Oxford University Press, 2012, *passim*.

<sup>19</sup> Alsina, Hugo, *Fundamentos de Derecho Procesal*, México, Editorial Jurídica Universitaria, 2001, Serie Clásicos de la Teoría General del Derecho, vol. 4, p. 392.

*jueces de tradición romanista, y con exacerbada desesperación los jueces latinoamericanos, han visto devaluado su desempeño judicial. La tradición doctrinaria, vigente sorprendentemente hoy, lo obliga a funcionar como un aplicador automático de normas escritas. Se admite con alérgica tolerancia que el juez “interprete” una norma, pero nunca que deje de aplicarla por propia decisión doctrinaria, o que encuentre una forma más justa, más razonable o más adecuada de resolver el caso al margen de la ley. La doctrina sostiene todo un andamiaje formalista que, si bien por un lado es un gran sustento para la preservación de la legalidad y el funcionamiento de todo orden jurídico, también puede convertirse en una verdadera camisa de fuerza para sujetar al derecho judicial. Camisas de fuerza y cinturones de castidad de muchos tamaños sujetan y controlan a los jueces, para que sólo actúen como aplicadores de normas, lo que convierte a los parlamentos y a los gobiernos ejecutivos en los monopolizadores de la creación normativa, como quería Kelsen un poco a pesar de sí mismo, como hemos dicho tantas veces.*<sup>20</sup>

Sobre el exceso del respeto irrestricto a la ley por parte de los juzgadores, Alsina<sup>21</sup> indica que el sistema dispositivo tenía una prevalencia en el ámbito del procedimiento civil, empero, en los últimos tiempos se ha iniciado una tendencia a la ampliación de los poderes del juez, para sustraerlo de la situación expectante en que se encontraba colocado, y que ello se debe a distintos factores que contribuyen a una distinta concepción de la función jurisdiccional, las que resume:

*“...1. La evolución de los estudios de derecho procesal, que atribuyen*

---

<sup>20</sup> Herrendorf, Daniel E., *El Poder de los Jueces. Cómo piensan los jueces que piensan*, 2ª ed., Argentina, Abeledo-Perrot, 1994, pp. 35-36.

<sup>21</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, pp. 407 y 408.

*al juez una función pública encaminada al mantenimiento del orden jurídico determinado en las leyes sustanciales. La llamada tendencia "privatista" de la escuela clásica, de filiación civilista, había considerado la litis como una cuestión de derecho privado y al proceso como un instrumento para la protección del derecho subjetivo; por consiguiente, a las partes corresponde no sólo la iniciación del mismo, sino el impulso procesal y el juez es un mero espectador que al final de la contienda acuerda la razón al vencedor dentro de lo que las partes han querido que sea materia de su pronunciamiento; por el contrario la tendencia "publicista" considera la litis como un fenómeno social, cuya justa solución interesa a la colectividad para el restablecimiento del orden jurídico alterado; el proceso es entonces un instrumento para la actuación del derecho objetivo y por ello deben ampliarse sus facultades para la investigación de la verdad real frente a la verdad formal y conferirle la dirección del proceso a fin de evitar que la mala fe o la negligencia de las partes difieran el pronunciamiento o puedan motivar una solución injusta.*

*2. Las transformaciones del derecho privado, con creciente tendencia a su socialización. Así como el auge del individualismo, dice Couture, se proyectó en el régimen procesal, su crisis tuvo también su repercusión en el procedimiento. Un nuevo derecho se había elaborado sobre la base de las desigualdades de la vida real frente a la igualdad proclamada por el individualismo, determinando nuevas concepciones y formas de vida. Ejemplo de ello es el derecho del trabajo, que exigió un nuevo tratamiento para los conflictos derivados del mismo.*

*3. El avance, cada vez más acentuado, del derecho público en campos reservados hasta ahora al derecho privado y que se manifiesta más agudamente en el derecho administrativo. Así lo hacía notar ya la doctrina y se destaca en la exposición de motivos del nuevo código procesal italiano.”.*

En la actualidad en materia de familia, la aplicación de la norma solo mantiene una aparente rigidez, pues cuando se ven involucrados derechos de menores, lo que es prodigo, el juzgador de manera oficiosa no solo puede sino que debe recurrir a la suplencia de manera oficiosa y ordenar las diligencias que para mejor proveer estime necesarias para una mejor resolución del asunto.

Sobre la importancia del actual del juez, Calamandrei<sup>22</sup> expresa:

*“...El aforismo tan estimado por los antiguos doctores según el cual res iudicata facit de albo nigrum et de quadrato rotundum [la cosa juzgada hace de lo blanco, negro, y de lo cuadrado, redondo] hace hoy sonreír; sin embargo, pensándolo bien, debería hacer temblar. El juez tiene, efectivamente, como el mago de la fábula, el sobrehumano poder de producir en el mundo del derecho las más monstruosas metamorfosis, y de dar a las sombras apariencias eternas de verdades; y porque, dentro de su mundo, sentencia y verdad deben en definitiva coincidir, puede, si la sentencia no se adapta a la verdad, reducir la verdad a la medida de su sentencia.”*

Cierto, el juez “dice” la verdad jurídica, empero, dista mucho de que ello de una respuesta al ideal de justicia de la sociedad en general, en la actualidad ante los excesos en los tribunales en materia de familia, el juzgador esta atiborrado de trabajo jurisdiccional y administrativo, en la actualidad tiene el deber de atender la problemática que se presente en el propio tribunal ya sea interno o externo, o sea debe atender al justiciable y al equipo de trabajo del juzgado para la orientación y debido desempeño laboral, las cargas son múltiples, pero de ninguna manera deben ser justificaciones

---

<sup>22</sup> Calamandrei, Piero, *op. cit.*, nota 12, p. 9.

para no resolver el proceso en forma ajustada a derecho, el abogado y el juez representan un binomio especial, uno al otro, son necesarios pues ambos están en la búsqueda del fin del proceso:

*“...El proceso cumple asimismo un importantísimo fin, que pudiéramos llamar de educación cívica o social: inculcar entre los justiciables el respeto a la ley y a la justicia, y hacerles comprender los inconvenientes de la autodefensa. Sin embargo, para que el proceso satisfaga esta finalidad, es necesario que su desarrollo práctico coincida con las esperanzas cifradas en sus excelencias teóricas. ... El proceso debe servir para discutir lo discutible, pero no para negar la evidencia, ni para rendir por cansancio al adversario que tenga razón; ha de representar un cambio breve y seguro para obtener una sentencia justa y no un laberinto interminable y peligroso para consumir un atropello. Al expresarnos como lo hacemos, no propugnamos la eliminación del principio dispositivo, uno de los más fecundos del enjuiciamiento, y sí sólo la corrección de sus abusos y extravíos; pero no es únicamente por el lado de las partes (en quienes pueden tener disculpa ciertos excesos y apasionamientos) por donde ha de moralizarse el proceso, sino asimismo en la repercusión – muchísimo mayor de lo que el teorizante se imagina.- que sobre él tiene la actividad de los bajos fondos curialescos, que, por desgracia, en todas partes persisten en seguir escribiendo capítulos de la más lamentable novela picaresca, conforme al más enrevesado estilo literario. A esa moralización del proceso pueden contribuir eficazísimamente, en un sentido, la colegiación de las profesiones forenses, a la que, por ejemplo, obedece, en gran parte, el prestigio de las grades abogacías europeas; en otro, un régimen de auténtica publicidad de los debates procesales, que deben ser entre abogados y no entre magistrados, y como complemento suyo, una labor respetuosa, pero asidua y a fondo, de crítica de la actuación y de las decisiones judiciales, tanto desde el punto de vista técnico, en revistas*

*especializadas, como desde un punto de vista, diríamos, más humano, en la prensa diaria. Lo que haga la justicia, no es asunto que sólo interese a los litigantes y al juez, sino que importa, o debe importar sobremanera, a la opinión pública, integrante en definitiva de esa comunidad de justiciables, de donde surgen los titulares de la acción.”<sup>23</sup>.*

Por ello, resulta esencial que los operadores jurídicos tengan una nueva visión en el ejercicio de la función que a cada uno corresponde. El derecho positivo no siempre da una respuesta cabal y justa al problema que se plantea, Campillo Sáinz, establece que abogado debe tener una conciencia recta e indica: “...*Estoy seguro de que las normas generales no sirven para resolver todos los actos que la vida nos ofrece; el abogado trata con la miseria y la flaqueza humana. El cliente le revela muchas veces no sólo las injusticias de que ha sido víctima, sino las que él ha cometido. Sus tropiezos, sus actos de violencia, su incumplimiento al derecho y la moral, y el abogado tiene que enfrentar, depurar, aconsejar en justicia y buscar que el derecho se aplique al menos para amortiguar, en lo que lícitamente sea posible, la responsabilidad.*”<sup>24</sup>

La persona en que recae el nombramiento de juez debe ser algo mas, que aquel que estudió o sabe derecho, muchos deben ser los requisitos para designar a un juzgador; sobre las características elementales del juzgador, Alsina<sup>25</sup>, alude que además de los requisitos para el desempeño del cargo, por la alta misión que desempeñan los jueces también deben de acreditarse que estos poseen “...*la cultura profesional y la dignidad de vida. Desde luego, el título habilitante hace presumir la preparación técnica necesaria, pero eso*

---

<sup>23</sup> Alcalá-Zamora, Niceto, *op. cit.*, nota 11, p. 95.

<sup>24</sup> Campillo Sáinz, José, *Dignidad del abogado*, 9ª ed., México, Porrúa, 1999, p. 52.

<sup>25</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, p. 394.



*no es suficiente. Debe además, el juez, poseer conocimientos generales en todas las ciencias que tengan vinculación con los estudios jurídicos, porque ese mínimo de cultura profesional es hoy indispensable para comprender y apreciar los complejos problemas que la vida moderna plantea diariamente. Desde luego que no se pueden exigir conocimientos completos, pero ¿cómo podría el juez apreciar una pericia si no tiene nociones de mecánica o de medicina legal? ¿Cómo podría establecer el verdadero sentido de un precepto si no tiene conocimientos históricos o carece de una elemental preparación filosófica? No es fácil, por cierto, reunir esas condiciones, pero es necesario empeñarse en ello porque es la única forma de tener una justicia consciente.*

#### **1.4 Deficiencias en el planteamiento y tramitación del divorcio mutuo consentimiento.**

La experiencia de trabajo en los Tribunales del Estado, deja en claro que los actuales procesos judiciales de divorcio son obsoletos, no se ajustan a un sistema garantista que dé respuesta jurídica adecuada y expedita, a las personas que están inmersas en esta problemática. En Jalisco, se presenta un alto índice de procesos judiciales relacionados con el divorcio que son formulados en forma deficiente e inadecuada, lo que en la gran mayoría de las ocasiones trae como resultado una resolución adversa a los intereses de quien planteó la demanda en ejercicio de la acción de divorcio, lo que conduce al interesado o los interesados a diversas situaciones negativas que inciden en su economía, su estado anímico, incrementando la falta de credibilidad en las Instituciones Públicas, ello tomando en cuenta que las partes estuvieron sujetas a un proceso judicial que les ha costado dinero, tiempo, esfuerzo y por supuesto una buena dosis de problemas emocionales de cualquier tipo.

Las estadísticas de trabajo y resultado en este tipo de trámites judiciales nos refleja –en gran medida- un desconocimiento de la materia, tanto en los aspectos de fondo como de forma, o sea en derecho sustantivo y en derecho procesal.

Las causales de divorcio representan una gama de conductas que pueden desplegar cualesquiera de los consortes, cuando una o varias de ellas se hacen patentes, el cónyuge inocente estará en posibilidad de hacer valer la acción de divorcio; sin embargo, no solo se debe tener el derecho, ya que lo esencial es saber ejercitar dicho derecho, plasmarlo en forma adecuada en la solicitud (divorcio por mutuo) o demanda, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontece cada uno de los eventos que fundan la demanda, dejando al descubierto de terceros, hechos de vida personal íntima que en otras circunstancias, difícilmente se plantean para conocimiento de personas ajenas; por lo que sí una demanda ordinaria para la disolución del vínculo matrimonial se plantea en forma incorrecta o genérica no se tendrá una resolución favorable; además, no debe olvidarse que existe la obligación de probar los motivos planteados en forma plena dentro del juicio, sin soslayar que la acreditación de la gran mayoría de las causales es punto casi imposible, pues representan alto grado de dificultad, por lo que invariablemente se opta por invocar causales de sencilla justificación en el procedimiento como la negativa de proporcionar alimentos, quedando muchas de las causales como letra muerta, demostrando con ello su anacronismo y falta de adaptación a la realidad que impera, tal como se analizará en los capítulos quinto y sexto.

Respecto del divorcio por mutuo consentimiento, no sólo se requiere la voluntad de las partes, ya que es menester plantear en forma debida y ajustada a derecho la solicitud y el convenio que deben formular los interesados, pues solo que colmen tales requisitos se tendrá una sentencia favorable con una etapa de ejecución correcta y sin complicaciones; sin

embargo, la práctica en este ramo, nos indica que aun en un trámite que no corresponde a un alto grado de dificultad, las solicitudes y convenios se plantean en forma desatinada o de plano no ajustada a derecho, tal como se analizará en el capítulo cuarto, en donde se especificaran los puntos primordiales en cuanto a las deficiencias del planteamiento en la solicitud de divorcio y el convenio respectivo, aspectos estos que generan una serie de problemas ya sea en el mismo proceso, prevenciones por parte del juzgador para aclarar, corregir o definir alguna situación de la demanda y convenio obscura o irregular, lo que implica una mayor dilación en el proceso, o bien la aprobación de un convenio inadecuado que en todo caso su complejidad o imposible ejecución se reflejara necesariamente en la etapa de ejecución de sentencia.

En apoyo de los argumentos sobre las deficiencias apuntadas y como justificación y soporte de este trabajo, se realizó una investigación de campo a través de cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, que respondieron los Titulares de los Juzgados de lo Familiar del Primer Partido Judicial, anexo 10, ello atendiendo a que es en la zona metropolitana en donde se concentra el mayor número de procesos judiciales, especialmente de este orden, pues en el resto del Estado los índices de los juicios o trámites de divorcio continúa siendo mínimo.

En la capital del Estado se concentran diez juzgados en materia familiar del Primer Partido Judicial, el que se conforma con los Municipios de la zona metropolitana y que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y es justamente en el Primer Partido Judicial en donde se concentra el cincuenta por ciento del trabajo jurisdiccional, pues el resto está diseminado en los demás partidos judiciales con cabecera en distintas ciudades del Estado, por ello resulta esencial el que se tomara el parecer de todos los jueces de lo familiar del Primer Partido, pues en ellos se tramita el mayor porcentaje de divorcios, lo que hace que el resultado de dicha

investigación corresponda a una visión general de la problemática que se presenta en este tipo de asuntos.

Para conceptuar y concentrar dicha problemática, los titulares de los diez juzgados en materia familiar del Primer Partido Judicial dieron respuesta al cuestionario referido, el que cuenta con diversas interrogantes sobre el tema, para poder conocer la opinión directa de los rectores del proceso, sobre cuestiones relacionadas con los procesos de divorcio así como los motivos primordiales de la problemática que en ellos se presenta, como una herramienta más para redondear la investigación.

Ejemplificando lo que acontece en forma cotidiana en los Tribunales de Justicia sobre este trámite judicial, conforme al resultado de la estadística y la investigación de campo apuntada, nos encontramos que el mayor porcentaje de asuntos que se presentan a un Juzgado de lo Familiar, corresponde al planteamiento de la solicitud de divorcio voluntario; que implica uno de los trámites judiciales que por lo general su planteamiento y procedimiento es aparentemente fácil, y si bien su grado de dificultad es mínima frente a un divorcio contencioso, no menos cierto resulta que aunque una mayoría de los postulantes considera que el soporte jurídico esencial o básico se encuentra en cuatro o cinco artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles, es indudable y evidente que para plantearlo en forma absolutamente correcta y ajustada a derecho se tendrá que tener un conocimiento sistemático, general y profundo del contenido total de dichos ordenamientos, criterios jurisprudenciales y convenios internacionales.

El resultado de la investigación refleja que del cien por ciento de las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento -que representa un trámite judicial casi palmario- la autoridad judicial, manda prevenir a las partes para que complementen, aclaren o corrijan ya sea la solicitud o el convenio en un porcentaje promedio del veinticinco por ciento, siendo la principal causa de la

prevención el deficiente planteamiento del convenio y en un menor porcentaje la falta de documentación, un setenta y cinco por ciento de este tipo de asuntos se formula en forma ajustada a derecho.

Como se dijo, para comprender los alcances de la disolución del vínculo matrimonial, aun en un divorcio voluntario, es claro que se requiere del conocimiento sistemático del derecho sustantivo y procesal que rige tal figura y además es necesario conocer el contenido total de ambos ordenamientos, Código Civil y Procesal Civil, -especialmente el primero- para entender plenamente las características y alcances de todas las figuras jurídicas que están ligadas al divorcio, en cualesquiera de sus procesos, pues solo conociendo y comprendiendo los derechos y obligaciones del matrimonio, alimentos, custodia, patria potestad, etcétera, se puede estar en posibilidad de plantear una demanda de divorcio correcta o formular un convenio ajustado a derecho, ya que lo que bien se presenta, conduce a un trámite ágil y sin complicaciones en la etapa de juicio y sobre todo, en el de ejecución de sentencia.

Sobre la teoría de la norma jurídica y la teoría del ordenamiento jurídico, Bobbio señala que forman una completa teoría del derecho desde el punto de vista formal, que en el primer título se estudia la norma jurídica de manera aislada y en el segundo título se analiza el conjunto o sistema de normas, que constituyen un *ordenamiento jurídico*, y refiere “...La necesidad de la investigación en este campo surge de la comprobación de que en la realidad las normas jurídicas no existen nunca solas sino siempre en un contexto de normas, que tienen entre sí relaciones particulares (estas relaciones serán en gran parte el objeto a tratar). Este contexto de normas se suele denominar <<ordenamiento>>. Y es bueno observar desde el principio que la palabra <<derecho>> tiene, entre sus muchos significados, también el

de <<ordenamiento jurídico>>, por ejemplo, en la expresión <<derecho romano>>, <<derecho italiano>>, <<derecho canónico>>, etc.”<sup>26</sup>.

De la misma manera, en opinión de los juzgadores en materia familiar, el porcentaje de abandono de este tipo de procedimientos es mínimo pues se encuentra en el rango del 1 al 25% por ciento, lo que implica que la gran mayoría de los peticionarios del divorcio por mutuo, están convencidos de la decisión tomada para disolver el matrimonio que les une.

Este último punto adquiere especial relevancia, puesto que si bien el trámite para la obtención de la disolución del vínculo matrimonial en forma voluntaria, es relativamente sencillo y se obtiene en forma rápida, de la investigación de campo efectuada se desprende que es en la etapa de ejecución en donde el proceso se torna áspero, difícil y tortuoso para los ex cónyuges y en muchas ocasiones, con las repercusiones negativas para la prole.

Sobre los motivos que generan una ejecución problemática, el resultado de la encuesta no es coincidente, pues mientras algunos jueces señalaron con un mayor porcentaje las deficiencias del convenio aprobado, otros señalan como principal causa, la falta de preparación del asesor jurídico y en menor porcentaje la deficiencia o lagunas de la ley. Sobre el punto relacionado con el convenio, la dificultad se deriva cuando el convenio se presenta de manera imprecisa y obscura, pues da lugar a una serie de interpretaciones inadecuadas por parte de los interesados y no en pocas ocasiones un asunto en el que los promoventes estuvieron en una fase de concordia y buena voluntad se transforma en una ejecución con mayor dificultad que el propio divorcio contencioso, generando incertidumbre del

---

<sup>26</sup> Bobbio, Norberto, *Teoría General del Derecho*, España, Editorial Debate, 1992, p. 153.

alcance jurídico y real de las obligaciones y derechos pactados en el convenio.

Es por ello que es y resulta esencial que el convenio que se formule y en su momento sea materia de aprobación por el juzgador, sea claro, preciso y obviamente ajustado a derecho; trabajo profesional en el cual en una primera etapa es encomienda directa del abogado o abogados asesores de las partes interesadas y en una segunda oportunidad, corresponde al juzgador no solo realizar las prevenciones pertinentes, sino en su caso reprobando las cláusulas ilícitas o incorrectas que se pretendieran convenir, tal como al respecto se indica en el capítulo cuarto.

Tampoco existe uniformidad sobre el comportamiento jurídico procesal del trámite del divorcio por mutuo consentimiento en relación con años anteriores, sin embargo se presenta mayor concordancia en cuanto a que estos continúan presentándose en igualdad de circunstancias.

Finalmente en la opinión de los juzgadores entrevistados, simplificar el trámite del divorcio por mutuo representa la mejor opción para mejorar el nivel de este tipo de procesos, como segunda línea, se marca la adecuada preparación profesional de los asesores jurídicos.

### **1.5 Problemática general en el planteamiento y acreditación de un divorcio contencioso.**

En capítulo quinto y sexto se expondrá una visión general de las causales de divorcio y los medios de prueba posibles para su acreditación; en el capítulo segundo se tratarán temas jurídicos relacionados con el divorcio en general, su marco constitucional y fundamentos, el juicio contencioso de disolución del vínculo jurídico, medios preparatorios, la demanda y sus efectos, allanamiento, caducidad de las causales, cónyuges culpable, la

sentencia de divorcio y sus consecuencias, etcétera, bajo la normatividad y criterios jurisprudenciales vigentes; en tanto que en este apartado vemos la problemática en los juicios de divorcio contencioso, lo que nos llevara a concluir que las normas sobre el juicio de divorcio en el Estado de Jalisco, son arcaicas y no responden a una política pública que de cabal y eficaz respuesta a las necesidades de la población que enfrenta con esta clase de juicios un camino lleno de complejidades, que no respeta su voluntad como persona, ni la vida privada o íntima de los involucrados, sino al contrario exige su exhibición y acreditación ante terceros, con pocos resultados positivos; lo que nos hace considerar la necesidad de un cambio sustancial en la forma jurídica de observar el divorcio, para dar paso a procedimientos que respondan a la solución eficaz y real de los divorciantes, en pleno respeto de su derechos fundamentales.

En la actualidad la mayor problemática de los juicios de divorcio que se plantean en el Estado de Jalisco, descansa en gran medida sobre el correcto o indebido planteamiento de la demanda, así como en la oferta y desahogo de pruebas pertinentes, para ajustar todo lo anterior, no solo a la normatividad respectiva, sino a la diversidad de criterios tanto jurisprudenciales como aislados, emitidos al respecto por el Poder Judicial de la Federación; por lo que además de estos aspectos y con la finalidad de establecer la dificultad específica, nos daremos a la tarea de exponer algunas de ellas en forma puntual.

#### **1.5.1 Deficiencias comunes del escrito inicial de una demanda de divorcio.**

Es menester hacer el señalamiento sobre uno de los actos principales del litigio, si no es que represente el de mayor relevancia en un juicio adversarial, corresponde al ejercicio de la acción mediante la interposición de una demanda, punto clave para la obtención de una resolución positiva o bien, negativa.



Pérez Palma<sup>27</sup>, señala que *“La demanda se define, como el acto jurídico mediante el cual se inicia el ejercicio de la acción.”*

Con la finalidad de dejar claro el punto sobre proceso y procedimiento es menester atender a la diferenciación que al respecto señala Alcalá-Zamora, quien indica:

*“...Los términos proceso y procedimiento (y aun algunos otros, como litigio, pleito, causa y juicio) se emplean con frecuencia, incluso por procesalistas eminentes, como sinónimos o intercambiables. Conviene, sin embargo, evitar la confusión entre ellos, porque si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso (por ejemplo, el que se utilice para la extradición). El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el procedimiento (que puede manifestarse fuera del campo procesal, cual sucede en el orden administrativo o en el legislativo) se reduce a ser una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo (por ejemplo, procedimiento incidental o impugnativo). Así, pues, mientras la noción de proceso es esencialmente teleológica, la de procedimiento es de índole formal, y de ahí que, como luego veremos (véase núms. 2.4.4 y 2.4.4.1), tipos distintos de proceso se puedan sustanciar por el mismo procedimiento, y viceversa, procedimientos distintos sirvan para tramitar procesos de idéntico tipo. Ambos conceptos coinciden en su carácter dinámico, reflejado en su común etimología, de *procedere*, avanzar; pero el proceso, además de un procedimiento como forma de exteriorizarse, comprende los nexos –constituyan o no relación jurídica-*

---

<sup>27</sup> Pérez Palma, Rafael, *Guía de Derecho Procesal Civil*, 6ª ed., México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1981, p. 134.

*que entre sus sujetos, es decir, las partes y el juez, se establecen durante la sustanciación del litigio.”<sup>28</sup>*

Gómez Lara<sup>29</sup>, señala que resulta común la confusión de los significados de los vocablos proceso y juicio, y se toman como sinónimos, como equivalentes, alude a que la palabra juicio parece que equivale a lo que hoy se entiende por proceso y con la finalidad de explicar lo anterior indica que debemos recordar que “...en el siglo pasado los códigos españoles no se llamaron procesales o de procedimientos, sino leyes de enjuiciamiento. El código español de 1855, por ejemplo fue denominado precisamente Ley del Enjuiciamientos Civiles. Aquí están subyacentes los conceptos de juicio y de enjuiciar, es decir, de proceso y de procesar.” Alude a otra acepción de juicio, que es cuando se refiere a las etapas en que se divide el proceso, pues la parte inicial se le denomina instrucción y la segunda etapa, se le llama juicio.

El mismo autor se pregunta: “...¿De dónde le provino al derecho procesal la palabra juicio? ¿De qué disciplina o rama del conocimiento viene este vocablo? Procede de la lógica, entendida ésta como ciencia del conocimiento, como ciencia del razonar, como ciencia del pensar. Y es que, en su aspecto lógico, el juicio es un mecanismo del pensamiento. El concepto original de la denominación juicio es un mecanismo del pensamiento. El concepto original de la denominación juicio corresponde o proviene de la lógica aristotélica y no es, en este sentido, sino un mecanismo del razonamiento mediante el cual llegamos a la afirmación de una verdad. Claro, a través de un proceso dialéctico que implica una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por lo que se refiere al proceso, resulta que la mencionada segunda parte que llamamos juicio es, en este sentido, un

---

<sup>28</sup> Alcalá-Zamora, Niceto, *op. cit.*, nota 11, p. 53.

<sup>29</sup> Gómez Lara, Cipriano, *Derecho Procesal Civil*, 5ª ed., México, Editorial Harla, 1991, Colección Textos Jurídicos Universitarios, pp. 3 y 4.

*verdadero juicio lógico, que se actualiza en el momento de dictar la sentencia, en cuya estructura están presentes la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La premisa mayor es la norma general, la premisa menor es el caso concreto sometido a la consideración del tribunal y, la conclusión, es el sentido de la sentencia.”*

Establecida la diferencia entre procedimiento y proceso, entre proceso y juicio, como sinónimos, diremos que proceso de divorcio, inicia con la demanda respectiva; el escrito de demanda debe de contener determinados requisitos,<sup>30</sup> en el caso de una demanda de divorcio, el punto total corresponde a los hechos en que la parte actora la funda, los que deben de numerarse y narrarse de manera sucinta con toda claridad y precisión, de manera tal que el demandado pueda preparar su contestación y defensa, so pena de que proceda una obscuridad de la demanda, más aun, como se verá en los capítulos quinto y sexto, en la gran mayoría de las causales deben de expresarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se supone acontecieron los eventos que las sustentan, lo cual se potencializa en caso de que además de la disolución del vínculo matrimonial se ejercitan otras acciones, pues sería absolutamente necesario que el escrito inicial, estableciera bajo las características apuntadas, cuales son los hechos que a cada causal y acción soportan.

La demanda representa el ejercicio de la acción, Alsina<sup>31</sup> señala que cuando el Estado asume la tutela del ordenamiento jurídico, prohibiendo el empleo de la violencia en la defensa privada del derecho, lo cual constituye su función jurisdiccional: “...se reconoce en los individuos la facultad requerirle su intervención para la protección de un derecho que se considera

---

<sup>30</sup> Véase, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *Periódico Oficial de Estado*, 27 de diciembre de 2011, art. 267.

<sup>31</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, p. 110.

*lesionado, cuando no fuere posible la solución pacífica del conflicto. A esa facultad se designa en doctrina con el nombre de acción y ella se ejerce en un instrumento adecuado al efecto que se denomina proceso Jurisdicción, acción y proceso son así conceptos correlativos, que integran los tres capítulos fundamentales del derecho procesal, cuyo contenido no es otro que el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado.”.*

*Continúa el autor y concluye que se podría definir la acción “...como el derecho del acreedor a obtener mediante el órgano jurisdiccional un bien jurídico que la ley le reconoce y que le es negado o desconocido por su deudor. Pero esta concepción, que inspiró los primeros intentos explicativos de la doctrina, resulta insuficiente a poco que se pretenda aplicarla a la solución de las múltiples cuestiones que el examen del proceso suscita, después de ponerse de manifiesto aspectos antes inadvertidos. En efecto, el proceso tiene por objeto la decisión de una litis conforme a las normas del derecho sustancial y en él intervienen por lo menos tres sujetos: el actor, el demandado y el juez, este último en ejercicio del poder jurisdiccional del Estado. La primera cuestión que se presenta es la de saber si ese medio de obtener la tutela jurídica que llamamos acción no es más que el mismo derecho que se pretende, considerado en su fase activa, o si por el contrario es un derecho que subsiste con independencia del derecho sustancial. En este segundo supuesto, ¿qué vinculación hay entre la acción y el derecho que sustancial o es que actúan prescindiéndose mutuamente? Por otra parte, la intervención en el proceso de un órgano del Estado plantea las siguientes cuestiones; ¿la acción está en el campo del derecho privado o del derecho público? ¿quién es el sujeto pasivo de la acción, el demandado, el juez o el Estado?, ¿cuál es contenido de la acción? No son éstas meras proposiciones intrascendentes, sino de innegable interés práctico porque las distintas respuestas que se les ha dado constituyen la base de los diversos sistemas procesales que de la doctrina han pasado a la legislación positiva. Esto se ve más claro en la acción penal, cuyo carácter fundamentalmente público la separa en forma absoluta del derecho sustancial (no hay una acción de*

*homicidio o de defraudación, sino acción penal), lo q permite a algunos códigos excluir del proceso al querellante particular. Pero bien mirado, problema central es el de la relación entre acción y el derecho sustancial, del cual las otras proposiciones son en realidad derivados.”*

Otro problemática que se presenta en nuestra legislación procesal, sobre el ejercicio de acciones simultaneas o acumulación de acciones<sup>32</sup>, corresponde a que no todas las acciones se tramitan en la misma vía, ejemplo, la acción de divorcio, de custodia, convivencia son en la vía ordinaria, en contrapartida la de alimentos, perdida del ejercicio de la patria potestad se ventilan en la vía sumaria conforme lo dispone el artículo 618 en sus fracciones I y VI del código procesal civil, lo que en todo caso implica términos distintos en una y otra vía, pero que finalmente no genera perjuicio pues al admitirse en la ordinaria, las partes se benefician pues los términos son más amplios.

La acumulación de acciones, dice Pérez Palma<sup>33</sup>, se presenta cuando, dentro del mismo juicio, se ejercitan conjuntamente varias acciones, que en principio, la acumulación de acciones es voluntaria y el actor puede acumular tantas acciones en una misma demanda, cuantas sean necesarias y solamente por excepción la acumulación es obligatoria o está prohibida. Indica que las acciones que libremente se pueden acumular son de cuatro clases: “...*principales, accesorias, alternativas y subsidiarias. Principales, son*

---

<sup>32</sup> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, Artículo 27. “Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y que provengan de una misma causa, deberán intentarse en una sola demanda, y por el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras.

No podrán acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias; ni las posesorias con las petitorias. Tampoco serán acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza correspondan a jurisdicciones diferentes”.

<sup>33</sup> Pérez Palma, Rafael, *op. cit.*, nota 27, p. 55.

*las que se refieren al derecho que se hace valer y accesorias, las que son consecuencia de aquéllas, como las de intereses, daños y perjuicios, o pago de pena convencional. Alternativas las que expresan dos pretensiones, para que de ellas cumplan el demandado una, por ejemplo, o devuelven las cosas que recibió o en su defecto paga por su precio. Las subsidiarias consisten en el ejercicio de una acción como principal y de otra como subordinada, para que el juez tome en cuenta la segunda, en caso de que declare improcedente la primera”.*

Sin embargo el inconveniente se presente bajo otra óptica, una de las acciones simultaneas corresponde a la perdida de la patria potestad, pues el trámite procesal es diverso a las otras acciones, pues en términos de lo ordenado por los artículos 721-Bis y 721-Ter, en el escrito de demanda se deberá acompañar los documentos tendientes a la justificación de su acción y ofrecer los medios de convicción que considere adecuados, misma regla que aplica para la contestación de la demanda, después se debe resolver ya sea sobre la rebeldía o la contestación de la demanda o de la reconvenición, si la hubiera, luego sobre admisión de las pruebas, previniendo a las partes para que por lo menos con cinco días de anticipación a la fecha que se señale para la audiencia de pruebas y alegatos, aporten los elementos necesarios para el desahogo o integración de los medios convictivos admitidos a su cargo, en este mismo acuerdo se debe resolver sobre las circunstancias especiales del caso y ordenar la práctica de cualquiera de las diligencias para mejor proveer que estime sean necesarias para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, velando siempre por el interés superior de la niñez. En esta clase de juicios no se celebra la audiencia conciliatoria; en la audiencia de pruebas alegatos se procede al desahogo de las pruebas admitidas y de las ordenadas oficiosamente, desahogadas se procede a la formulación de alegatos y se cita para sentencia. La audiencia aludida solo puede ser diferida, a criterio del Juez, por una sola ocasión, de oficio o a petición de parte, justificando debidamente el motivo del aplazamiento.

La diferencia de la vía y del tramite provoca que en las demandas con acciones simultaneas, el juzgador prevenga a la actora para que señale que vía y que acciones ejercita, y cumplida la prevención, solo admite las acciones que sea ajustan a la vía que se señala en el escrito de aclaración y niega las otras acciones, auto que puede ser materia del recurso de apelación y aun de la interposición de amparo, la que provoca dilación en el juicio. Lo anterior se considera un grave perjuicio para los justiciables, pues trastoca lo normado por el artículo 17 Constitucional, por lo que en aras de la economía procesal y con la finalidad de dar cabal cumplimiento la norma procesal, lo pertinente es que la ley procesal se reformara para las controversias del orden familiar tuvieran una sola vía y tramite. No debemos olvidar que la vía sumaria es de privilegio, en atención al interés del mismo actor y a la naturaleza de la acción, o bien porque hay interés público en que se resuelve el asunto a la brevedad posible, pues de otro modo se causarían perjuicios muy graves e irreparables, como en los casos de alimentos provisionales, de impedimentos de matrimonio, etcétera, y en los que forzosa e ineludiblemente deben tramitarse en juicios sumarios, empero, cuando el procedimiento sumario lo autoriza la ley en beneficio del actor y no está interesado el orden público, el actor puede renunciar a ese beneficio y entablar su acción en vía ordinaria, de lo cual no redundará ningún perjuicio a la demandada, ya que es más favorable a esta defenderse en esta vía por la amplitud en los términos<sup>34</sup>; aunque existen criterios que cuando se ejerciten derechos relacionados con los hijos del matrimonio, debe ser la vía privilegiada, en este caso la sumaria.

Otro aspecto que genera interpretación cuando se hacen valer acciones simultaneas, es el inherente a la competencia del juez, pues en los casos de divorcio, en términos de la fracción XII del artículo 161 del Código

---

<sup>34</sup> [J] XXIV, Tesis Aislada, *Semanario Judicial de la Federación*, Sexta Época, Registro: 271969, Tercera Sala, Cuarta Parte, Civil, p. 260, Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 316, p. 928.

Procesal Civil, en los juicios de divorcio, es juez competente el del tribunal del domicilio conyugal y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado. Si ambos cónyuges se dijese abandonados y se imputasen el abandono, será competente el juez del domicilio del demandado, en tanto que por lo que corresponde a la acción de alimentos, la fracción XIII dispone que en los juicios de alimentos, el juzgador competente corresponde al del domicilio del acreedor alimentario o el del demandado a elección del primero; al igual que en el presupuesto de la vía, se ha interpretado que cuando se ejercite la acción no solo de divorcio, sino de pérdida del ejercicio de la patria potestad, la de alimentos y se solicite la fijación de una pensión provisional, debe entenderse que la acción principal ejercitada, para efectos de establecer la competencia del juez correspondiente, es la relativa al pago de alimentos, a virtud de su carácter urgente y perentorio de la propia prestación, lo que en todo caso le da un estatus de competencia privilegiada, en consecuencia el juez competente no sería el del domicilio conyugal, sino el del acreedor alimentario o el del demandado a elección del primero, que implica una oposición de la parte actora<sup>35</sup>.

Sobre esta problemática de las acciones acumuladas que se ventilan en distinta vía, Pérez Palma<sup>36</sup> señala: “...*Puede ocurrir, como sucede en los juicios de divorcio, en los que simultáneamente sean ejercitadas acciones tendientes a la disolución del vínculo y al reconocimiento y pago de alimentos. Las dos clases de acciones son principales y no pueden ser ejercitadas en juicios por separado, sin peligro de romper la continencia de la causa. De manera que, en caso de tener que acumular una acción alimentaria a otra de*

---

<sup>35</sup> [J] XLVIII/92, Tesis Aislada, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Registro: 206827, Tercera Sala, Civil, Mayo de 1992, p. 103. Competencia en un juicio de divorcio y alimentos. Corresponde al juez de la residencia del acreedor alimentario.

<sup>36</sup> Pérez Palma, Rafael, *op. cit.*, nota 27, p. 884.



*naturaleza familiar que haya de ser tramitada en otra vía, el cumplimiento del precepto resulta imposible.”*

Retomando el punto sobre los requisitos que debe contener la demanda, si bien no se desconoce que algunas de ellas cumplen a cabalidad con estos, en una buena medida no se cumple tales aspectos procesales; del resultado de las encuestas efectuadas a los juzgadores en materia de familia, se desprende que la mayor deficiencia en este tipo de juicios estriba en que los hechos se narran de manera genérica y sirven de base a todas y cada una de las reclamaciones, resulta excepcional encontrar un escrito de demanda con múltiples acciones y ejercitando diversas causales de divorcio que presente de manera clara y pertinente, de forma separada todos y cada uno de los requisitos apuntados.

En este tipo de demandas irregulares, se encuentran dos vertientes, las muy escuetas, que poco narran o las extensas; las primeras de ellas, justamente por lo limitado de los hechos que se expresan, no se indican las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se supone acontecieron o se dieron cuenta de ellos y que motivan la acción, respecto de las causales que así lo ameritan, lo que a la postre tendrá la improcedencia de la causal que requiere de tales requisitos; esta deficiencia puede generarse a virtud de que la parte accionante no quiere hacer una narración real de los hechos que motivan su demanda, por considerar que exhibir ante terceros la problemática de su matrimonio es cuestión que no desea y el compartirla, pues estos aspectos son “...cuestiones relativas a la culpabilidad tienden a dar salida a viejos rencores y a reavivar los conflictos determinantes del quebrantamiento de la unión, los que al menos uno de los cónyuges desea mantener en la esfera de la intimidad, y la invocación de una causal solamente implicará la exteriorización de todas aquellas desavenencias”<sup>37</sup>; o

---

<sup>37</sup> Stilerman, Martha y De León, María Teresa, *Divorcio. Causales objetivas*, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1994, p. 52.

bien por negligencia o ignorancia del postulante jurídico. En contrapartida están las demandas prolijas, en ellas nos encontramos una gran cantidad de hechos sobre la problemática familiar entre los cónyuges, que no en pocas ocasiones abarca desde el inicio de su matrimonio hasta las últimas fechas antes de la presentación de la demanda, aunque este periodo corresponda de veinte o más años; ciertamente debe darse al juzgador una panorámica de la relación matrimonial, empero, los hechos de las causales de índole momentáneo, por la distancia, es patente que ya están caducos y en todo caso deben ser resumidos, y solo extenderse detallando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en aquellos eventos que atento a la fecha en que ocurrieron o el actor supo de ellas, sí están vigentes para el ejercicio de la acción, hecha excepción que correspondan a causales de tracto sucesivo, pues en ellas, no opera la caducidad, como se analizara en el capítulo segundo.

Otro aspecto detectado, es que se invocan un sin fin de causales, y de los hechos que narran, éstos solo corresponden a una o dos de las ejercidas; esto ocurre bajo el amparo de la máxima jurídica de que *“las partes dan los hechos y el juzgador debe proporcionar el derecho”* que se consigna en el artículo segundo de la ley procesal civil<sup>38</sup>, y por ende al momento de resolver, el juez deberá de estudiar todas y cada una de las causales invocadas, aunque determine su improcedencia sobre la mayoría, lo que en todo caso solo genera un exceso superior a las ya de por si grandes cargas de trabajo en los tribunales familiares. Una visión torpe y legalista da *“...como resultado un excesivo formalismo jurídico que sólo entorpece el procedimiento, el aumento del tiempo para resolver y también de los costos judiciales, el desinterés de una parte importante de la comunidad por la obtención de*

---

<sup>38</sup> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, Artículo 2. “La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción”.

*“justicia” y si la solución del litigio judicial verdaderamente resolvía el conflicto o lo enardecía aún más.”<sup>39</sup>.*

Las deficiencias del escrito inicial pueden ser solventadas desde el inicio<sup>40</sup>, ya que el juez podrá ordenar que la parte actora para que en el término de tres días aclare, corrija o la complete, señalando de manera concreta los defectos y una vez corregida le dará curso; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, le será devuelta teniéndose por no presentada para todos los efectos legales. Sobre este punto debemos de reconocer que el juzgador de primera instancia, por exceso de labores, por falta de acuciosidad o cualquier otro factor, no le es dable a ordenar la aclaración de la demanda y la admite en los términos planteados, lo que en todo caso implica que si desde el inicio es deficiente y en caso de que la parte reo comparezca a producir contestación, muy probablemente haga valer la obscuridad de la demanda como defensa a su favor.

Como caso extremo sobre este punto, debe decirse que no en pocas ocasiones, la parte reo hace valer la defensa de obscuridad de la demanda en el sentido de que la misma es carente de los datos de modo, tiempo y lugar, pese a ello, al momento de reconvenir a su contraparte por diversas causales de divorcio, comete la misma deficiencia, pues no externan respecto de los

---

<sup>39</sup> Pérez Saucedo, José Benito *et al.*, *op. cit.*, nota 10, *passim*.

<sup>40</sup> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, Artículo 269. “Si el Juez encuentra que la demanda es oscura o irregular, prevendrá al actor para que dentro del término de tres días la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, señalándole en concreto sus defectos y una vez corregida le dará curso. Si el actor no enmendase su demanda, ésta le será devuelta teniéndose por no presentada para todos los efectos legales. Esta determinación judicial es apelable en ambos efectos”.

hechos las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se supone se cometió el evento o se tuvo conocimiento del mismo, lo que en todo caso, a la postre genera que ni al actor principal ni el reconvencional obtengan sentencia favorable.

### **1.5.2 Planteamiento deficiente de la demanda y las causales de divorcio.**

Para conocer las causas y concentrar la problemática que se presenta en los juicios contenciosos de divorcio necesario, en la investigación de campo referida mediante cuestionario sobre aspectos del divorcio contencioso, Anexo 11, se obtuvo la opinión de los diez jueces en materia familiar del primer partido judicial, y si bien algunos puntos no fueron materia de respuesta, del resultado de la encuesta practicada, respecto de datos que corresponden al año 2010, se desprende lo siguiente:

La mayoría de los entrevistados indicaron que en el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en un rango del 51 al 75 por ciento se presentan demandas en las cuales además de la disolución del vínculo se hacen valer acciones simultaneas, que por lo general corresponden a la acción de alimentos, la de pérdida del ejercicio de la patria potestad, y las relativas a la custodia y convivencia con los hijos de las partes.

Atendiendo a un promedio de las respuestas efectuadas, tenemos que en las demandas de divorcio contencioso, en un rango de porcentaje del 25% por ciento, recae auto de prevención por deficiencias en el planteamiento y en similar porcentaje aquellas que nos son admitidas por cualesquier causa; y si bien no existe conformidad en el porcentaje de las demandas de divorcio necesario que fueron planteadas de forma correcta, la mayoría señala que están en el rango del 25 al 50 por ciento, lo que

demuestra que son pocas las demandas de divorcio que se presentan en forma correcta y ajustadas derecho.

En cuanto al porcentaje de demandas de divorcio necesario, que fueron abandonadas, existe coincidencia que se presenta en un rango del 1 a 25 por ciento, igual que el divorcio por mutuo, lo que hace patente que la parte actora está plenamente convencida de su intención de obtener la disolución del vínculo matrimonial.

Llama la atención de manera preponderante, la respuesta de los jueces familiares del primer partido judicial, en cuanto a la pregunta específica relativa a que en el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes, pues la gran mayoría indicó que en el rango del 51 al 75 por ciento, en tanto que otros optaron por los extremos señalando que proceden en un rango del 26 al 50 por ciento o bien el 76 al 100 por ciento, lo que refleja una disparidad en la información obtenida. Por otra parte confrontado esta información con la oficial derivada del INEGI, existe una gran discrepancia, pues como se ha visto en líneas precedentes, en el año indicado, la oficialía de partes común a los juzgados del primer partido judicial recibió un total de 8,892 demandas de divorcios, de las cuales 2,628 son relativas a divorcios contenciosos y 6,264 solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, en tanto que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, reportó que en dicho año, de todos los juzgados del Estado de Jalisco, se decretaron un total de 4,340 divorcios, 320 son relativos al trámite administrativo ante el oficial del Registro Civil, en tanto que del total de divorcios judiciales que corresponde al número de 4,020, solo 165 emergen de los juicios de divorcio contencioso y en número de 3,852 se derivan del divorcio por mutuo consentimiento, lo que en todo caso implica que en este año, haciendo el comparativo de las demandas de divorcio frente a los divorcios decretados en juicio contencioso, se arroja que solo un 7 % obtuvo

sentencia en la cual se declaro disuelto el vinculo matrimonial; sin embargo no debemos dejar de considerar el porcentaje de demandas no admitidas o de los juicios abandonados por las partes, así como el hecho de que no todas las demandas presentadas en determinado año, se resuelven en la misma anualidad, pues el promedio de vigencia de un juicio de esta índole es superior a un año.

En cuanto a pregunta expresa sobre en qué porcentaje se hacer valer cada una de las causales, existe coincidencia general entre los entrevistados, que además encuadra con la información estadística del INEGI, el señalar como causales mas invocadas las inherentes a la separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada; la negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, la violencia intrafamiliar, la incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, la infidelidad sexual, y el crecimiento de la causal inherente a la separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada; reflejando además, el poco o casi nulo ejercicio del resto de las causales, lo que las hace obsoletas.

En cuanto al porcentaje sobre las causales que se acreditan y estiman procedentes, al igual que el punto anterior, se presenta cierta concordancia en cuanto a que la más acreditada, es la relativa a la negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, seguida de la separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada, luego la de la separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, posteriormente aparecen la infidelidad sexual, la violencia intrafamiliar, la incompatibilidad de caracteres, y un porcentaje menor sobre el resto de las causales de divorcio.

No se presenta concomitancia sobre la proporción de las causales de divorcio que se plantearon en forma deficiente, ya que la mitad de los

juzgadores la señala en un rango del 1 al 25 por ciento, en tanto que el resto indica que oscila entre el 26 al 50 por ciento; se indica como principal causa o motivo por el cual se estiman defectuosas, el que se plantearon mediante hechos genéricos, sin expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos respectivos, en un porcentaje menor, por invocar causales ya caducas y finalmente por falta de pruebas idóneas. Empero, si el porcentaje de causales mal planteadas, atendiendo el medio, pudiera considerarse cercano al cincuenta por ciento, la cuestión que surge es ¿Por qué entonces, las sentencias que decretan la disolución del vínculo matrimonial en juicios contenciosos, corresponde a un porcentaje mínimo frente a las demandas de divorcio que se presentan, según se corrobora en los datos oficiales del el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática?. Esto, además de lo anterior, nos refleja que al carecer los tribunales con sistemas estadísticos adecuados, se carece de una información real y confiable sobre lo que acontece en los propios juzgados.

En cuanto a que etapa de los juicios de divorcio contencioso que genera mayor problemática, prevalece la inherente a la oferta y desahogo de pruebas, seguida de la ejecución de sentencia. Cómo motivos por los cuales los juzgadores entrevistados consideraron como causas intraprocesales, por las cuáles no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial en los juicios contenciosos, la gran mayoría señala un cincuenta por ciento relativo a hechos de la demanda deficientes y en igual porcentaje a la ausencia de pruebas, en menor porcentaje a pruebas deficientes.

Cómo motivos primordiales, por los cuáles los juzgadores consideran que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos, resulta relevante que la mayoría optó como primera opción la falta de profesionalismo del asesor jurídico, posteriormente se indican como tales, las deficiencias de la ley y el exceso de formalismos tanto de la ley como derivados de tesis y Jurisprudencias. En este punto, debemos destacar el

demerito que ello implica tanto para el foro de abogados como para la impartición de justicia, y como lo señalan José Benito Pérez Saucedo, José Zaragoza Huerta y Rogelio Barba Álvarez “...podemos comprender el porqué la abogacía ha perdido escalones dentro de las profesiones mejor pagadas y más buscadas por los empleadores y puestos públicos, el jurista se está convirtiendo en un ente sin sentido (como lo menciona Wallerstein), el Derecho se convierte en una ciencia sin sentido, el sistema judicial se vuelve una maquinaria obesa que no ofrece resultados.”<sup>41</sup>.

Se refleja además, que el comportamiento sustantivo procesal en los juicios de divorcio necesario, en diez años anteriores al año 2010, se considera igual o peor, mas no se eligió la opción de mejor; por otra parte, si atendemos al término medio, la mayoría de la encuesta refleja que a efecto de mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso, se requiere en un porcentaje similar tanto el simplificar el procedimiento, como, la preparación adecuada de los abogados

Siete de los juzgadores expreso su conformidad con la implementación del divorcio exprés o incausal, indicando como beneficio, tanto la celeridad en el proceso como la libertad de decisión de las personas y en tercer término el respeto a la intimidad de los cónyuges; tres de ellos señalaron no estar de acuerdo con el divorcio incausal, expresando como motivo violación al derecho fundamental del debido proceso y el detrimento del Matrimonio, así como que resulta complicado el dejar para ejecución de sentencia lo inherente a la situación de los hijos y los aspectos patrimoniales.

Como se ha indicado a lo largo de esta investigación, el escrito inicial de demanda es punto toral en gran medida, para la procedencia o improcedencia de la misma y el resto, corresponde a la comprobación de tales

---

<sup>41</sup> Pérez Saucedo, José Benito *et al.*, *op. cit.*, nota 10, *passim*.



hechos, “...*Parece obvio señalar que el objeto de la prueba en el juicio de divorcio lo constituyen los hechos alegados como fundamento de la demanda, y, en su caso, de la reconvenición. En ese sentido, la prueba de las causales de divorcio incumbe a la parte que las alega, no siendo suficiente limitarse a probar la propia honorabilidad: es menester acreditar la incoconducta del cónyuge demandado o reconvenido.*”<sup>42</sup>

El litigio, como indica Alcalá-Zamora, “... *a nuestro entender, constituye el presupuesto procesal por antonomasia...*”<sup>43</sup> empero, en los divorcios contenciosos, como se expreso con antelación y se corrobora con los datos estadísticos y la investigación de campo efectuada, la generalidad de las demandas contienen una narración de hechos genéricos sin que se especifique a cual o cuales causales corresponden, por lo que el juzgador debe de considerar cual o cuales de los hechos narrados son los que dan soporte a cada una de las causales invocadas, sin estar en aptitud de variar la litis planteada.

Un punto fundamental para plantear debidamente equis causal, es tener pleno conocimiento de si se está en la presencia de una causal en la que opera o no la caducidad, por lo que es menester diferenciar si es de tracto sucesivo o momentáneo, el primero se presenta cuando el evento se genera día a día, en tanto que en el segundo, son aquellas conductas de realización instantánea que se consuman en el momento mismo en que ejecutan. En las de tracto sucesivo no opera la caducidad en las momentáneas si opera.

---

<sup>42</sup> Zannoni, Eduardo A., *Derecho Civil. Derecho de Familia 2*, 3ª ed., Buenos Aires, Editorial Astrea, 1978, p. 102.

<sup>43</sup> Alcalá-Zamora, Niceto, *op. cit.*, nota 11, p. 4.

En algunas de las causales de tracto sucesivo no es menester señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues no se considera necesario para su procedencia, por ejemplo: sería absurdo pretender que se señalen tales características en cuanto a la causal relativa a la negativa a proporcionar alimentos a sus acreedores, pues la conducta es reiterativa y cotidiana.

En cuanto a la relativa al abandono injustificado del domicilio familiar por cualquiera de los consortes durante seis meses consecutivos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se concentran en establecer en qué momento, el otro consorte abandono el domicilio sin causa alguna y no retorno al mismo, ya que a partir de la fecha del abandono es una reiteración de lo mismo hecho, pues día a día se comete un acto por parte de uno de los cónyuges que da motivo al divorcio; en cuanto a la de incompatibilidad de caracteres, es de tracto sucesivo, pues se refiere a una situación que se da cuando los cónyuges hacen vida en común, sin embargo no debemos perder de vista que pierde este carácter cuando los esposos quedan separados, por lo que a partir de ese momento, se inicia el período de caducidad de la acción<sup>44</sup>; al igual que las relativas a padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años y la de padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente, la de los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal. El punto toral sobre una causal de tracto sucesivo es que de los primeros o primeros actos que origina dicha causal, continúan otros que son reincidentes en la configuración de la misma.

---

<sup>44</sup> [J] IX, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro: 220141, Civil, Marzo de 1992, p. 187. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de cómputo del término para la caducidad de la acción. (Legislación del estado de Tlaxcala).

Como causales momentáneas, como ejemplo tenemos la relativa a la infidelidad esporádica, (no así la continuada), la violencia intrafamiliar, que engloba la sevicia, injurias y amenazas o malos tratos<sup>45</sup>; al igual se debe atender a la data en que se presentó la propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa, o cuándo se generó la incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito; o bien cuando se enteró de la acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión, y será a partir el hecho en sí o su conocimiento del mismo, en que antes de que trascurra el término de seis meses el cónyuge deberá de interponer su demanda, pues si lo hace después de tal término, la causal es caduca.

Es este un motivo más de índole procesal y sustantivo, por el cual en la demanda de divorcio deben de establecerse con claridad y precisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se supone aconteció el hecho o hechos que motivan la acción de divorcio, y dependerá de la naturaleza de la causal que sea un hecho directo, o bien que se entere por terceros, por lo que es menester indicar cuando se dio cuenta de ello, para establecer si en ella opero o no la caducidad de la acción<sup>46</sup>, sin que de manera alguna se prolonguen en el tiempo, por lo que, caducan si no se hacen valer dentro del término legal.

Como se ha indicado, estas deficiencias puede producir dos vertientes, la primera y más socorrida es que el juzgador al momento de emitir el fallo,

---

<sup>45</sup> [J] VI.2o. J/226, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro: 217859, Civil, Noviembre de 1992, p. 69. Divorcio. Injurias, amenazas y malos tratos. Caducidad.

<sup>46</sup> Véase, capítulo segundo.

sustraiga del todo de la demanda los hechos que a cada causal y acción simultánea corresponden, en atención a la máxima jurídica de que las partes dan los hechos y el juez el derecho, en cuyo caso el juez, aunque el actor se hubiere expresado en forma equivocada al plantear la acción o la causal, puede establecer cuál es la intentada sin salirse de la litis a efecto de respetar el principio de congruencia<sup>47</sup>, pero en la demanda se debe determinar con claridad la prestación que se reclama y los motivos de la misma; la segunda, se presenta en el supuesto de que el escrito inicial es tan deficiente el planteamiento, que no es factible ir más allá de lo que se plantea –justamente en respeto del principio de congruencia- y en todo caso lo que procede es la obscuridad de la demanda con resultados negativos para la parte actora.

El juicio contencioso de divorcio, representa un alto grado de dificultad: Al respecto se presentan diversos escenarios: si se tiene el derecho pero se plantea la demanda en forma deficiente, el resultado será negativo; si se tiene el derecho y se expresa en forma correcta, pero no se prueban los hechos en la etapa respectiva, el resultado será adverso; las fallas en estos supuestos es lo que marca el común denominador en los procesos judiciales de disolución del vínculo matrimonial.

Al respecto y atendiendo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el resultado de la investigación de campo referidas, podemos observar que en la mayoría de los juicios de divorcio contencioso que resultan procedentes, la causal más socorrida tanto en su invocación como acreditación es la relativa a el abandono o la separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada, causal cuya justificación es de mediana dificultad, pues lo que debe probarse en el proceso, es la existencia del matrimonio, la del domicilio conyugal y la fecha del abandono, lo que se logra con documentales y testimonial, en tanto que la segunda de las causales más trillada es la inherente a la negativa de

---

<sup>47</sup> Cfr. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, Artículo 87.

proporcionar alimentos, y ello es debido a que esta causal es casi concedida por la ley, pues tan solo hay que hacerla valer y narrar los hechos en forma clara, ya que la carga de la prueba corresponde al deudor, o sea a la parte demandada deberá de acreditar que si cumple con sus obligaciones de pago<sup>48</sup>, en otras palabras, la parte actora se limitará a decir que la parte demandada no cumple con la obligación de alimentos para con su consorte y sus hijos, acreditara la existencia del matrimonio y de los hijos acreedores con las documentales respectivas y con testimonial la falta de suministro de alimentos, en tanto que será la parte contraria la que deba de acreditar que sí cumple con tal carga.

Como tercera causal mas invocada y acreditada, se encuentra la relativa a la sevicia, amenazas, injurias o violencia intrafamiliar, esta es de difícil acreditación, pues la demanda deberá de contener datos precisos de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho o los hechos pertinentes, y deberá de acreditarse en el proceso, con las documentales respectivas la existencia del matrimonio y de los hijos, si los hubiera, y atendiendo a los hechos que la soportan estos se acreditaran con pruebas testificales, con documentos, periciales psicológicas, confesión expresa, etcétera, según corresponda. La investigación de campo y el dato estadístico respectivo nos reflejan que se hace valer en un gran porcentaje, pero que poco se acredita, lo que confirma la dificultad de su justificación en el proceso o bien el deficiente planteamiento de los hechos que soportan la causal.

Por otra parte, se aprecia que en los últimos años, se ha incrementado el número de divorcios por haber acreditado la causal de incompatibilidad de caracteres y la de adulterio o infidelidad, ambas son de medio o difícil

---

<sup>48</sup> [J] VI.3o.C. J/32, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Registro: 192661, Civil, Diciembre de 1999, p. 641. Alimentos, carga de la prueba (Legislación del estado de Puebla).

acreditación, pues además de acreditar la existencia del matrimonio, en la primera deberá justificarse, con testimoniales, periciales psicológicas, confesión o cualquier medio de prueba la referida incompatibilidad y que ello genera entre los esposos una animadversión tal, que la vida en común ya no es sostenible; en tanto que en la infidelidad, será con pruebas indirectas su acreditación. Pese a tales dificultades, estas son causales que se han incrementado en su invocación y el aumento de divorcios por su justificación en el proceso. En los capítulos quinto y sexto se efectúa el análisis de cada una de las causales referidas en párrafos precedentes, estableciendo sus elementos y medios de prueba posibles para su acreditación.

Conforme a los datos del INEGI, en este periodo de diez años, el resto de las causales de divorcio es exigua su acción y se han acreditado en un mínimo de ocasiones, lo que implica que algunas de ellas están en desuso o bien por su difícil acreditación poco se hacen valer; por orden descendente, podemos decir que las causales de menos invocación, son:

- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal.
- La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión.
- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años.

- Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años.
- Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión.
- La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa.
- La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito.
- Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión.
- Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.
- La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia.
- El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.

Aunque se debe dejar en claro que la causal relativa a la separación por más de dos años de los consortes, por su reciente creación, no se refleja aun en la estadística oficial, empero es patente que por sus características, en pocos años, será la causal de mayor invocación.

Por otra parte, en un divorcio contencioso ante un proceso positivo como el vigente, el juzgador no está en aptitud de resolver favorablemente, cuando tiene enfrente un ejercicio de la acción incorrecto o bien, pruebas inconducentes o no suficientes, pues aun cuando del propio expediente se infiere que el matrimonio cuya disolución se reclama está en crisis, este tipo de deducciones o perspectivas no deben ser bastantes para decretar la disolución del vínculo matrimonial, pues se insiste los hechos no pueden variarse una vez integrada la litis, por lo que si las pruebas son aptas para ello, no quedara más remedio que negar la procedencia de la acción. Por ello debemos recordar que para el ejercicio de la acción se requieren de ciertos requisitos y sobre ellos Alsina<sup>49</sup>, en referencia a *Savigny*, indica que éste: “... comenzó por restituir el derecho su posición lógica; primero el derecho, luego la acción y atribuyó a ésta una función de garantía: la acción es el derecho que se pone en movimiento como consecuencia de su violación; es el derecho en ejercicio, en pie de guerra, que tiende a remover los obstáculos que se oponen a su eficacia.”, de este punto de partida el autor refiere que la acción supone entonces un derecho y la violación del mismo; “...de donde desprende que los elementos de la acción son necesariamente cuatro:

1. *Un derecho, porque no se concibe una acción sin un derecho que le sirva de fundamento y a cuya protección se dirija;*

---

<sup>49</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, pp. 112 y 113.



2. *un interés, porque el derecho es un interés protegido por la ley y si el interés falta la protección desaparece;*
3. *la calidad, porque la acción corresponde al titular del derecho o a quien puede ejercerlo en su nombre (padre por el hijo, tutor por el menor, etc.); y*
4. *la capacidad, es decir, la aptitud para actuar personalmente en juicio (no la tienen los menores, los dementes, etc.).*

*Como consecuencia de esta identidad entre la acción y el derecho, se afirma que:*

1. *No hay derecho sin acción, ya que de lo contrario carecería prácticamente de eficacia; por excepción y fundada en razones de orden público, la ley priva de acción a algunos derechos (obligaciones naturales);*
2. *no hay acción sin derecho, desde que aquélla no es sino un elemento de éste; y*
3. *la acción participa de la naturaleza del derecho (personal, real, etc.).<sup>14</sup>*  
*Es decir que para esta teoría, en el derecho privado deben buscarse los elementos para la concesión de la tutela jurídica, mientras que el objeto del derecho procesal sería puramente formal y técnico.”*

*Por tanto quien demanda debe tener derecho, interés, calidad y capacidad, cuando ello no se presenta no es factible obtener un resultado positivo. Para entender que en estos casos la postura del juzgador no es intransigente, se tiene que comprender que nuestro sistema actual corresponde al derecho positivo con reglas de naturaleza adjetiva y sustantiva que son y deben de ser necesarias para un debido proceso legal; en nuestro sistema de derecho vigente, tanto la autoridad como el gobernado deben saber cabalmente a qué atenerse respecto de los planteamientos jurídicos que unos y otros formulan o resuelven, de tal manera que las partes*

integradoras de un procedimiento judicial, actúen sabiendo qué hechos se buscan, y en relación con qué preceptos deben ajustarse.

Se ha indicado hasta la saciedad, que debido proceso legal es uno de los logros de la democracia que se consagran en los artículos 14 y 16 constitucionales; es decir, para que no se respire un clima de inseguridad y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que la autoridad judicial resuelva las peticiones en forma ajustada a los preceptos legales que a cada caso concreto le sean aplicables, conforme a las disposiciones Constitucionales invocadas, la cual en su carácter de Ley Suprema, ningún acto del poder público ya sea administrativo o del Poder Judicial, tanto federal como local, puede quedar fuera de esta supremacía constitucional.

Aunado a ello, si bien debe atenderse a que en este tipo de procedimientos legales no es aplicable la acepción de la justicia en cuanto a que la sentencia que se emita se dicte a verdad sabida y apreciando los hechos en conciencia, como lo es en la justicia municipal, en materia laboral, etcétera, sino a través de la aplicación de las normas que contienen las reglas jurídicas tanto procesales como de fondo previamente establecidas dentro de nuestro derecho positivo, o bien bajo la jurisprudencia o los principios generales del derecho, motivos por los cuales el juzgador no puede apartarse del conjunto de cláusulas y principios estructurales de orden constitucional positivo en nuestro estado de Derecho, no debemos olvidar que bajo el nuevo orden de cosas, sobre todo en el ámbito familiar, no estamos ante la rigidez del derecho positivo, y si en cambio el juez debe respetar los derechos fundamentales de las partes en conflicto y su prole, en caso de hacerla, por lo que tiene que ver más allá de las propias limitaciones de la norma escrita para desentrañar su significado y alcance, Bobbio, en el análisis que formula sobre el establecer una teoría de la norma jurídica sobre

bases sólidas, indica que el primer punto que hay que tener absolutamente claro que la toda norma jurídica puede ser sometida a tres distintas valoraciones, o sea si es justa o injusta, valida o invalida y finalmente si es eficaz o ineficaz, y sobre la norma justa refiere: “...*El problema de la justicia es el problema de la más o menos correspondencia entre la norma y los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico. No tocamos por ahora el problema de si existe un ideal del bien común, idéntico en todo tiempo y lugar. Nos es suficiente comprobar que todo ordenamiento jurídico persigue algunos fines, y aceptar que estos fines representan los valores para cuya realización el legislador, más o menos conscientemente, más o menos adecuadamente, dirige su propia obra. Cuando se considera que hay valores supremos, objetivamente evidentes, preguntarse si una norma es justa o injusta equivale a preguntarse si es apta o no para realizar esos valores. Pero también en el caso de quien no crea en valores absolutos, el problema de la justicia de una norma tiene un sentido: equivale a preguntarse si esa norma es apta para realizar los valores históricos que inspiran ese ordenamiento jurídico, concreta e históricamente determinado. El problema de si una norma es o no justa es un aspecto de la oposición entre mundo ideal y mundo real, entre lo que debe ser y lo que es: norma justa es lo que debe ser; norma injusta es lo que no debería ser. Plantear el problema de la justicia de una norma equivale a plantear el problema de la correspondencia entre lo que es real y lo que es ideal. Por eso el problema de la justicia se conoce comúnmente como el problema deontológico del derecho*”<sup>50</sup>.

Como corolario de lo anterior, de la investigación realizada se confirma la hipótesis respecto de que el planteamiento de este tipo de asuntos legales en una gran medida se formula en forma defectuosa, y que por ende los resultados son negativos o sinuosos para los interesados, y no solo para ellos, sino genera un aspecto negativo hacia la profesión de la abogacía y

---

<sup>50</sup> Bobbio, Norberto, *op. cit.*, nota 26, pp. 33 y 34.

lógicamente crea en el ánimo de la sociedad, de manera lamentable, la falta de credibilidad en los Órganos de Justicia.

Una falla más que encontramos en este tipo de juicios, deriva del hecho de que si en sentencia se decreta la disolución del vínculo matrimonial, en caso de existir hijos menores de edad de los divorciantes, el juzgador debe resolver la situación de los infantes en términos de lo ordenado por el artículo 415 del Código Civil; la problemática se presenta cuando dentro del proceso las pruebas ofertadas fueron encaminadas únicamente para acreditar los hechos del divorcio, sin embargo, no existen pruebas en el sumario que puedan proporcionar el juzgador los elementos suficientes para determinar sobre la patria potestad, la custodia, los alimentos y la convivencia<sup>51</sup> de los hijos con sus progenitores, empero, ello no será motivo para que el juez no resuelva lo pertinente, pues en todo caso está obligado a subsanar las deficiencias que al respecto puedan presentarse y además ordenar de oficio todas las diligencias de prueba que estime pertinentes para en su momento, emitir el fallo respectivo y resolver en beneficio del interés superior de la niñez, al respecto debemos de considerar la normatividad, doctrina, jurisprudencia, tratados y convenciones internacionales que se especifican en el capítulo segundo y octavo, sobre este punto concreto. Haciendo hincapié que la ausencia de pruebas sobre estas consecuencias jurídicas y su posterior orden por el juzgador, lógicamente se traduce en mayor dilación del proceso.

Los datos que se arrojan en las estadísticas y la investigación de campo antes referidas, no son halagadores, y si por el contrario reflejan pocos resultados positivos en los procesos adversariales de divorcio. En este punto la reflexión se presenta en cuanto a si los juzgadores de familia tienen

---

<sup>51</sup> Véase, Código Civil del Estado de Jalisco, *Periódico Oficial del Estado*, 26 de enero de 2013, Artículo 572.

el perfil necesario para ello, pues un juez familiar, debe ser un especialista en la materia, pues si bien anteriormente los procesos judiciales en materia civil (de la cual forma parte la materia familiar) son de índole positivista y su movimiento es a petición de las partes interesadas, en la actualidad a virtud del reconocimiento de los derechos de los menores y adolescentes, del bien superior de la niñez, del control convencional y los derechos fundamentales, es patente que el juez no solo puede sino que debe y está obligado a ello, por eso debe ser un juzgador presente en la problemática que se le plantea, debe ordenar la práctica de cualquier diligencia o de medios de prueba que crea oportunos para resolver lo más acertado en relación con los derechos de los menores, el juez familiar debe ir más allá de criterios estrechos y legalistas para lograr un bien social, *“...Acciones de este tipo solo se pueden desarrollar con la intervención de un juez presente, que ejerza verdadera intermediación, extremo que implica conocer de manera personal a los interesados y no resolver de acuerdo con formalidades que surjan de los papeles, sino con realidades que emanen de la expresión directa y vital de los interesados. Destaco que nada de esto significa avanzar sobre el respeto de ciertas normas procesales que regulan y aseguran el ejercicio de sus derechos a todos los involucrados, sean víctimas o victimarios; por el contrario, con las nuevas estrategias se está reafirmando una noción más justa de lo que debe ser un proceso de familia. ...Hemos dicho muchas veces, siguiendo entre otros al juez de familia Eduardo Cárdenas, que los integrantes del sistema judicial no pueden permanecer hoy como observadores neutrales o simples árbitros, destinados a sentenciar sobre una disputa, sino que deben comprometerse con el resultado de esa disputa, a través de un papel activo, desestabilizador, que favorezca el cambio que la familia está requiriendo”*<sup>52</sup>.

Por todo ello, es que se considera pertinente no solo el que la investigación efectuada acredite o justifique la hipótesis que se plantea, sino

---

<sup>52</sup> Sanz, Diana y Molina, Alejandro, *Violencia y abuso en la familia*, Argentina, Lumen Humanitas, 1999, pp. 257 y 258.

la necesidad de que este trabajo tenga alguna utilidad o provecho concreto y por ello se propone como una posible solución al problema, la posibilidad de implementación de los métodos alternos de resolución de conflictos con competencia en divorcios y ante el claro panorama de que no todos los conflictos son aptos para la mediación, se implemente el divorcio exprés -que analizaremos el capítulo séptimo- con la finalidad de ver si es factible que su implementación tenga como resultado beneficios jurídicos necesarios a los divorciantes, en pleno respeto a sus derechos fundamentales, en fin, una panorámica centrada en los requisitos de fondo y forma que son y resultan fundamentales para la obtención de un trámite correcto y favorable a los intereses de los solicitantes, al igual que una preparación adecuada de los operadores jurídicos, abogados postulantes y funcionarios judiciales, juzgadores con un mínimo de las cuatro virtudes de las que habla Saldaña Serrano, la virtud de la prudencia, la independencia del juzgador como virtud, la imparcialidad y la objetividad, y citando a Malem, señala que los jueces *“...deben ser sobrios, equilibrados, pacientes, trabajadores, respetuosos, con capacidad para saber escuchar los argumentos que las partes les ofrecen en el proceso y con la habilidad suficiente como para poder superar sus propias limitaciones personales.”*<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Malem, Jorge, La vida privada de los Jueces. Principio básico de la Deontología Jurídica. Reforma Judicial, *Revista Mexicana de la Justicia*, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, julio-diciembre 2006, p. 93.

## CAPITULO II

### EL DIVORCIO EN EL ESTADO DE JALISCO

#### 2.1 El divorcio.

En la antigüedad el repudio fue la forma primitiva de casi todos los pueblos, como fórmula para la disolución del matrimonio, por lo general representaba un derecho masculino a virtud de la posición de inferioridad de la mujer dentro de dichas culturas, por lo que resultaba lógico y natural la posibilidad de que fuese expulsada o abandonada por su “dueño”, derecho que en algunos casos llegó a ser ilimitado sin mediar causa alguna, en algunos supuestos se requería de causas que hoy nos pueden parecer irrisorias, ejemplo de ello es que en la sociedad china se encontraba, la falta de sumisión a los parientes del marido, la locuacidad de la esposa, entre los hebreos cuando el marido tenía aversión a la esposa por encontrar en ella “algo que le desagradaba” o situaciones similares, sin embargo es patente que una de las primeras causas que generó el repudio-divorcio que prevalece hasta la actualidad es el adulterio llamado también infidelidad sexual, y como parte del bagaje histórico de las causales de divorcio está la de abandono del hogar conyugal, injurias graves o la crueldad excesiva.

Acosta Romero, en la obra inherente al Código Civil para el Distrito Federal Comentado<sup>54</sup>, cita diversos conceptos de divorcio, a saber:

*“...Para Mazeaud el divorcio es la ruptura del vínculo conyugal, pronunciada por los tribunales en vida de los esposos, a petición de uno de ellos o de ambos.*

---

<sup>54</sup> Acosta Romero, Miguel, *Código Civil para el Distrito Federal. Comentarios, Legislación, Doctrina y Jurisprudencia*, 2ª ed., México, Porrúa, 1986, p. 236.

*Planiol conceptualiza el divorcio como la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los dos esposos; divortium se deriva de divertore, irse cada uno por su lado. Esta ruptura sólo puede existir por autoridad de la justicia y por las causas determinadas en la ley...”.*

*Boneccase define al divorcio como: “...la ruptura de un matrimonio valido en vida de los esposos, por causas determinadas y mediante resolución judicial”<sup>55</sup>.*

Cierto, como lo expresa Boneccase y la gran mayoría de los citados, el divorcio es la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los esposos, empero, debemos dejar atrás la visión tradicional que esto se presente por causas determinadas, para buscar una fórmula jurídica que determine la disolución del vinculo matrimonial mediante resolución judicial, respetando en forma plena los derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso de esta naturaleza.

Reiterando lo dicho por Rojina Villegas, Jorge Mario Magallón Ibarra indica que si la comunión espiritual del matrimonio ha dejado de existir, "el divorcio es una medida necesaria para evitar inmoralidades de mayor alcance, para detener un torrente de inmoralidad que de otra manera el derecho está permitiendo".<sup>56</sup>

Magallón Ibarra, dice que "la palabra divorcio encuentra su etimología en el verbo latino *divertere*, que entraña que cada cual se va por su lado".<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Bonnecase, Julien, *op. cit.*, nota 5, p. 251.

<sup>56</sup> Magallón Ibarra, Jorge Mario, *Instituciones de derecho civil*, México, Porrúa, 1988, t. III, p. 425.

<sup>57</sup> *Ídem.*



En el sentido de Planiol- Ripert, señala Galindo Garfias<sup>58</sup>: “

*“es la ruptura del matrimonio valido, en vida de los esposos decretada por autoridad competente y fundada en una de las causales expresamente establecida por la ley”*

Couto, hace un detallado estudio de los efectos del divorcio, tanto en contra como en defensa del mismo,<sup>59</sup> sobre los adversarios del divorcio indica:

*“...dicen que la sola perspectiva que tienen los esposos de contraer una nueva unión legítima es bastante para acabar con la santidad del matrimonio, provocando primero la corrupción de la familia, y después, la de la sociedad; alegan que la disolución del vínculo hace imposible la reconciliación de los esposos con perjuicio, principalmente, de los hijos, que quedan privados para siempre del afecto y cuidados de uno de los padres, cuando no es que sometidos a la dura autoridad de un padrastro...”*

El mismo autor señala que los defensores del divorcio, sin dejar de reconocer que el matrimonio es una institución social, sostienen que debe disolverse cuando han dejado de existir las condiciones que dieron lugar a su formación...; afirman que el divorcio, lejos de ser corruptor, es moralizador, dado que con él los esposos divorciados pueden buscar en un nuevo matrimonio la satisfacción de sus aspiraciones; por lo que respecta a la situación de los hijos, dicen que si mala es con el divorcio, peor es fuera de él. Más adelante, señala:

*“...si la separación es una necesidad de todo matrimonio en que la vida en común se ha hecho imposible, preferible es por mil conceptos que se haga radicalmente, como la hace el divorcio... o hay matrimonio o no lo hay, y si la vida común, que es la base del matrimonio, se ha roto, es absurdo sostener que haya matrimonio”.*

---

<sup>58</sup> Galindo Garfias, Ignacio, *El derecho de familia*, 9ª ed., México D. F., Porrúa, 2002, p.326.

<sup>59</sup> Couto, Ricardo, *Derecho civil mexicano*, México, D. F., Porrúa, 1919, pp. 300-308.

Posteriormente agrega: "¿No es más indigno para el matrimonio y más contrario al respeto que se merece esta institución el pretender que se mantenga por la fuerza?".<sup>60</sup>

Al aludir a la disolución del vínculo se entiende que la disolución opera extinguiendo, para el futuro, la relación jurídica matrimonial. En las legislaciones que admiten esta forma de disolución vincular, el divorcio constituye el origen de un verdadero estado de familia que restituye la aptitud nupcial de los cónyuges divorciados sin perjuicio, claro está, de la validez y subsistencia de los efectos que el matrimonio produjo hasta que la sentencia pasó en calidad de cosa juzgada (así, la legitimidad de los hijos concebidos durante el matrimonio, la subsistencia del parentesco por afinidad, etcétera).<sup>61</sup>

De manera lisa el divorcio constituye la disolución del vínculo matrimonial que deja a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer otro.<sup>62</sup>

Efectivamente el divorcio es, o puede ser la solución al problema, pero la única manera de evitar que se presenten mayores "*inmoralidades*", es mediante la implementación de procesos administrativos o jurisdiccionales de divorcio que respeten los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, su voluntad, su vida privada o íntima, su libertad de crear una nueva fórmula de familia frente a la familia tradicional, etcétera, lo cual no se logra bajo el sistema jurídico actual del divorcio, pues como se ha visto en el capítulo primero, pocos procesos de divorcio llegan a una sentencia favorable, por lo que los contendientes siguen unidos en matrimonio, de manera forzada, lo que hace indigno al propio matrimonio, como lo señala Couto. Por ende, es

---

<sup>60</sup> *Ídem*.

<sup>61</sup> Zannoni, Eduardo A., *op.cit.*, nota 42, p. 9.

<sup>62</sup> Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, Artículo 403. "El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer otro".

claro que los actuales procedimientos de divorcio no son una respuesta al problema y si en cambio una prolongación del mismo, acrecentado y quizá, con desanimo, malestar y desconfianza al foro de abogados y a la administración de justicia, por parte de quienes lo han intentado infructuosamente.

Ibarrola<sup>63</sup> señala, que la disolución del matrimonio es la ruptura del lazo conyugal y la cesación de los efectos que la unión de los esposos producía respecto a ellos o respecto a terceros, sin embargo, la disolución de un matrimonio presupone su validez, es decir el matrimonio nulo no puede disolverse: cuando la nulidad se decreta se reconoce que jamás ha existido ni producido efectos, o que los efectos quedan retroactivamente destruidos, todo ello bajo la teoría de los *matrimonios putativos*, o matrimonio supuesto, el que tiene apariencia de tal, sin serlo en realidad. En sentido estricto, por matrimonio putativo se entiende el nulo por causa de un impedimento dirimente, pero que surte efectos como si hubiera sido lícito y válido, por haberse contraído de buena fe.<sup>64</sup>

El divorcio ha sido y será objeto de debate bajo diversas ópticas, ya sea jurídico, social, religioso y hasta económico. Existen posturas de polémica entre divorcistas y antidivorcistas a favor y en contra y unos y otros encuentran argumentos bastantes para encontrar los pros y contras en beneficio de su percepción, se argumenta por los primeros el respeto a la libertad individual, el respeto a la religión de las personas, el derecho a rehacer la vida, la justificación por la desaparición del amor, la necesidad de satisfacer el instinto sexual, del reconocimiento de la ruptura matrimonial preexistente, etcétera, en tanto que la corriente antidivorcista alude a la unión permanente (perdurable), la fidelidad, la familia como soporte y núcleo social.

---

<sup>63</sup> Ibarrola, Antonio De, *Derecho de familia*, México, D. F., Porrúa, 2011, p. 331.

<sup>64</sup> Disponible en <<http://www.definicionlegal.com/definicionde/Matrimonioputativo.htm>>, página consultada el 21 de noviembre de 2012.

Se podrá adoptar una postura u otra, lo que es y resulta innegable es que ante la presencia indiscutible de que la sociedad actual recurre con mayor frecuencia a su interposición se hace patente que la disolución del vínculo es y representa un mal necesario, cuya obtención presenta no en pocos casos, un largo camino a recorrer.

Ibarrola<sup>65</sup>, en su misma obra señala:

*“...de acuerdo con nuestras actuales leyes, el matrimonio se ha convertido en nuestra legislación mexicana en un arrendamiento de cuerpos, verdadera prostitución, tiene más causas de rescisión que cualquier otro contrato...”*

A escoger para este autor:

*“...nuestra flamante revolución pone a nuestra alcance hoy en día el divorcio sanción, el divorcio remedio, el “divorcio capricho” y el “divorcio repudio”, la sagrada institución resulta flatus vocis...”*

Podríamos definir la familia<sup>66</sup> como la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.

Desde que nacemos, la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de sostenimiento. Se comienza con la conducta de apego, nada más nacer, y se termina con la posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los recursos que nos ofrece la sociedad. En este sentido, podemos decir que

---

<sup>65</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, p. 334.

<sup>66</sup> Psicología online. Formación, autoayuda y consejo, Iria Malde Modino, disponible en <<http://www.psicologia-online.com/>>, página visitada el 17 de diciembre de 2012.

el grupo familiar cumple una serie de funciones con respecto a sus hijos, que serían las siguientes:

- Asegurar su supervivencia, su crecimiento y su socialización en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización.
- Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no sería posible.
- Aportar a los hijos la estimulación necesaria para relacionarse de una forma competente con su entorno físico y social, así como la capacidad para responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo que les toca vivir.
- Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que compartirán con la familia la tarea de educación del pequeño.

### **La familia.**

Se le ha considerado como la célula primaria de la sociedad, como el núcleo inicial de toda organización social, como la unidad económica que constituye la base de la seguridad material del individuo.<sup>67</sup>

La familia se ha conceptualizado desde diferentes ópticas:

Concepto biológico. Es la institución formada por el padre, la madre y los hijos de ambos, es decir, es el grupo formado por la primitiva pareja y los descendientes de ambos sin limitación.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía, *Derecho de Familia y Sucesiones*, 9ª ed., México, Harla, pp. 7,8 y 9.

Concepto sociológico. Es la institución social formada por los miembros vinculados por lazos sanguíneos, y los individuos unidos por intereses económicos, religiosos o de ayuda.<sup>69</sup>

Concepto jurídico. Este modelo atiende a las relaciones derivadas del matrimonio y la procreación conocidas como parentesco, y a las que la ley reconoce efectos, esto es, que crean derechos y deberes entre sus miembros.<sup>70</sup>

Como puede observarse todas las connotaciones anteriores de familia aluden a un grupo de personas que por diversas circunstancias conforman una comunidad especial, con intereses conjuntos, derechos y obligaciones.

El concepto jurídico de familia responde al grupo formado por la pareja, sus ascendientes y descendientes, así como por otras personas unidas al grupo por vínculos de sangre o matrimonio o sólo civiles, a los que el ordenamiento positivo impone deberes y otorga derechos jurídicos.<sup>71</sup>

Pallares<sup>72</sup> señala que el Estado enfrenta el dilema si es o no conveniente el divorcio y señala que para la solución del mismo, se debe tomar en cuenta:

*“...a) La subsistencia de los matrimonios mal avenidos o en los cuales uno de los cónyuges sea indigno de continuar siendo el titular de los derechos, poderes y facultades que derivan del matrimonio, es evidente*

---

<sup>68</sup> *Ídem.*

<sup>69</sup> *Ídem.*

<sup>70</sup> *Ídem.*

<sup>71</sup> *Ídem.*

<sup>72</sup> Pallares, Eduardo, *El Divorcio en México*, 3ª ed., México, Porrúa, 1981, pp. 38 y 39.

*un mal social que es preciso remediar por los pésimos ejemplos que produce, sobre todo respecto de los hijos.*

*b) A su vez, el divorcio produce también consecuencias funestas para ellos y trae consigo la disolución de la familia, y el peligro de que se multiplique en los mismos divorcios, y se convierta el matrimonio en una institución de tal manera frágil, que sólo sirva para permitir a los esposos satisfacer pasiones temporales y dar rienda suelta a sus costumbres disolutas;*

*c) También hay que tener en cuenta que el instinto sexual y las necesidades a que da nacimiento, son muy poderosos y difíciles de dominar, de tal manera que si no se permite el divorcio en cuanto al vínculo, se obliga a los divorciados a tener relaciones ilícitas fuera del mismo matrimonio.*

Continúa diciendo que:

*“...Como se ve, el problema del divorcio está relacionado con la aptitud de los cónyuges a refrenar sus instintos sexuales, sea en el mismo matrimonio o fuera de él, cuando están separados. Por lo mismo, es posible afirmar que la evolución de la especie humana no ha alcanzado el grado de moralidad suficiente para soportar la indisolubilidad del matrimonio, por lo que debe considerarse el divorcio como un mal necesario a fin de evitar otros mayores e injusticias increíbles”.<sup>73</sup>*

Sobre el mismo tema Víctor M. de la Paz y Fuentes, señala que:

*“En realidad hemos de ver en el divorcio, no una causa sino un efecto y así, no atribuirle el cargo de que a él se deba la destrucción familiar, ya que dicha desintegración ha venido operando en la familia desde*

---

<sup>73</sup> Ídem.

*tiempos remotos y por causas muy complejas; no es de acatarse el divorcio en sí, sino los males a los que verdaderamente deban atribuirse la desintegración familiar, el divorcio en última instancia puede ser bienhechor para muchas situaciones que son nocivas y destructivas para la familia, no puede considerarse que el divorcio por sí mismo sea una acción negativa sino lo malo es el abuso excesivo de él, si bien es cierto que tiene sus ventajas como son que únicamente a través del mismo sea el remedio para diversas situaciones conyugales que son incompatibles con la propia naturales del matrimonio, también lo que es que no puede dejarse de reconocer que cuando únicamente se tramita como un capricho, comodidad o por falta de madurez en uno o ambos cónyuges, ya sea por aburrimiento de uno hacia el otro, y lo más grave aún, por el simple hecho de contraer nuevo matrimonio, sin tener motivo suficiente y real para invocar alguna causal y tratar de desbaratar el suyo, son motivos que siendo el producto de una falta de moralidad y a la vez vergonzosas, no son suficientes por sí mismas para tratar de refugiarse dentro de los fines de la institución, relativa evidentemente en estos casos se trata de una ofensa a la moral y agravio de los derechos de la institución relativa, evidentemente en estos casos de los hijos y aún de los propios consortes a su persona.*<sup>74</sup>

Empero, debemos considerar que en el siglo actual, frente a la familia nuclear tradicional, se presentan nuevas formaciones de familia. Así, tenemos: la familia nuclear simple, que es la conformada por una pareja sin hijos; la biparental o básica, está conformado por el padre, la madre y su descendencia; en tanto que la nuclear monoparental se integra por uno de los padres y uno o más hijos; la familia extensa es aquella que se conforma por una pareja o uno de sus miembros, con o sin hijos y con otros miembros ya sean parientes o no; la familia extensa biparental y la monoparental, la

---

<sup>74</sup> Paz y Fuentes, Víctor M. De La, *Teoría y Práctica del Juicio de Divorcio*, 2ª ed., México, D.F., Editor Fernando Leguizamo Cortes, 1984, pp. 47 y 48.



primera corresponde a la integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos y por otros parientes y la segunda es aquella que se conforma por uno de los miembros de la pareja, con uno o más hijos y otros parientes. Se encuentra la familia reconstituida, es aquella en que uno de los padres, después de un divorcio, separación o viudez, vuelve a formar pareja, pero existe al menos un hijo de la relación anterior, de ésta proviene la figura del padrastro o madrastra; la familia proveniente de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges tiene hijos previos de un matrimonio anterior o bien ambos están en el mismo caso, también conocidas como familias ensambladas; también se encuentra la familia adoptiva; sin olvidar la nueva fórmula de familia en donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, conocidas como familias homoparentales.

Se debe atender a las circunstancias que se van presentando en un núcleo familiar es que podemos atender a qué tipo de familia estamos incorporados o a cual nos referimos, pues no podemos soslayar que a medida que se presentan ciertos eventos en el seno de la misma, es que su estructura se modifica.

Como lo señala González Martín; *“...si se habla de una generalidad al plantear las diferentes nuevas estructuras familiares, metiendo en un “mismo saco” a las diferentes formas de convivencia, todas las formas de unión entre personas, esto no se debe a una falta de entendimiento de cada uno de los conceptos o estructuras planteadas, dada la proliferación de estas uniones e incluso de la dimensión de los derechos y obligaciones demandados a través de su regulación, sino simplemente se debe a la presentación de un panorama general y real que debemos atender, independientemente de que tomemos posturas a favor o en contra. La idea es, como reiteraremos a lo largo de este trabajo, posicionarse en pro de un discurso congruente que*

*busca soluciones armoniosas dentro del respeto a la divergencia y a los derechos fundamentales*<sup>75</sup>.

Se dejan atrás paradigmas históricos y se presenta ante nuestros ojos una nueva forma de familias, que es mas incluyente y respetuosa de la formula de vida que cada quien quiere para sí mismo, su pareja y su familia, con el reconocimiento de estos nuevos tipos de familia, es que se cumple el derecho fundamental que se consagra en el artículo 4º Constitucional, por ende, si las personas expresaron su voluntad para unirse en matrimonio y ello fue bastante para celebrar dicho acto jurídico, es patente que en los mismos términos tienen el derecho de externar su voluntad para no continuar unidos en matrimonio, pues en ambos casos debe aplicar el sistema de eficacia de los contratos que rige nuestra legislación civil, que adopta en lo general la tesis pacta sunt servanda, o sea que se debe estar a la voluntad de las partes.

Diversos tratadistas y estudiosos del derecho familiar han determinado que la disolución del vinculo matrimonial puede analizarse bajo diversas modalidades, las que en todo caso corresponden al momento histórico en que se presenta, se alude al proceso a seguir, o según los motivos o causas que la generan.

Acosta Romero<sup>76</sup>, señala que el divorcio puede tener las siguientes modalidades.

1.- El divorcio-repudio, el cual corresponde hacer valer al marido.

---

<sup>75</sup> González Martín, Nuria, *El derecho de familia en un mundo globalizado. Especial Referencia a la adopción internacional*, disponible en <<http://www.oas.org/dil/esp/5%20-%20nuria.LR.CV.75-120.pdf>>, p. 82.

<sup>76</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, 234 y 235.

2.- El divorcio por voluntad unilateral, el cual permite a los divorciados contraer nuevas nupcias<sup>77</sup>.

3.- El divorcio por consentimiento mutuo.

4.- El divorcio-remedio, el cual tiene su origen en las causas que hacen imposible la vida en común, en virtud de que un consorte padece una enfermedad incurable, que además resulta contagiosa o hereditaria.

5.- El divorcio-sanción, el cual toma en cuenta las culpas graves cometidas por uno de los cónyuges.

Todavía a mediados del siglo pasado algunos países del mundo occidental se negaban a reconocer el divorcio como disolución del vínculo matrimonial. Ejemplo de ello son Italia, España, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, su legislación solo reconocía la separación de cuerpos, figura a la cual también se le denominaba divorcio, sin embargo en la actualidad la gran mayoría reconoce el divorcio vincular.

Sobre lo anterior, es interesante conocer los principios del Código Civil alemán (origen de la secularización del matrimonio), de que un matrimonio puede ser disuelto, aquí observamos que La Reforma rompió la unidad jurídica del Derecho Canónico Matrimonial. Bajo su influencia y la de las doctrinas del Derecho Natural del siglo XVIII se tendió a afirmar la disolubilidad vincular.

El código civil alemán establece el principio de que un matrimonio puede ser disuelto, pero: a) solo por las razones aducidas por la ley, b) debe tener lugar vía judicial y c) la eficacia jurídica de la sentencia de separación

---

<sup>77</sup> Corresponde al llamado Divorcio exprés, con vigencia en el Distrito Federal.

lleva consigo la disolución del matrimonio. Los motivos de disolución son absolutos y relativos.

Absolutos: Adulterio, abandono, enfermedad mental etc. Los relativos quedan resumidos en esta proposición: “Un esposo puede pedir la separación, cuando el otro, por la lesión grave de los deberes matrimoniales o por su conducta inmoral, ha causado tan profunda perturbación en la comunidad conyugal que haga imposible la continuación de esta.”

No son motivos de separación para el Código Civil alemán, el consentimiento mutuo de los esposos en la separación, los defectos corporales y el cambio de religión y la aversión invencible.<sup>78</sup>

Se debe distinguir el divorcio vincular del llamado también divorcio en cuanto a la separación de cuerpos:

a) El divorcio absoluto, divorcio vincular, divorcio *ad vinculum*, o simplemente divorcio, que es la disolución del matrimonio válido en vida de los esposos, y habilita a los divorciados para contraer nuevas nupcias.

b) La separación de cuerpos, separación personal, divorcio limitado o divorcio *quoad thorum et mensam* (del tálamo y de la mesa), que consiste en la cesación de la obligación de cohabitar, sin que desaparezca el vínculo matrimonial.<sup>79</sup>

Por lo cual es patente que en el primero se puede contraer nuevas nupcias en tanto que en el divorcio por separación de cuerpos, al no llegar a

---

<sup>78</sup> De Ibarrola citando a A. Knetch, véase, Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, p. 575.

<sup>79</sup> Belluscio, Cesar Augusto, *Manual de Derecho de Familia*, 7ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2004, t. I, p. 425.

disolver en forma total el vínculo matrimonial solamente se suspende la obligación de cohabitar con el otro cónyuge.

Sobre este punto en particular, Bonnecase<sup>80</sup>, indica que: “...*Se designa por separación de cuerpos el derecho reconocido a los esposos, por sentencia judicial. Para no hacer vida común. Entre otros términos, el matrimonio no es disuelto; sencillamente cada uno de los esposos tiene derecho a vivir separado del otro, por lo demás, esto no es sino una apariencia; además de que la separación de cuerpos en muchos casos es la preparación del divorcio, las reglas de éste se aplican en gran parte a la separación de cuerpos, debido a encontrarse brevemente reglamentada en el código, por los arts. 306 a 311, únicos que se refieren a ella. Causas de la separación de cuerpos en sus relaciones con las de divorcio: su identidad. Las causas de la separación de cuerpos son las mismas que las del divorcio, art 306. A los interesados corresponde, en definitiva, optar por el divorcio o por la separación de cuerpos. Sin embargo, se considera que está es menos grave, lo que se demuestra con la circunstancia de que el art. 239 autoriza, durante los procedimientos, a transformar el juicio de separación de cuerpos en juicio de divorcio.*”

En nuestra Entidad, la separación de cuerpos no tiene la connotación que se daba en otros países en los cuales no se contemplaba el divorcio y aquella resultaba la fórmula adecuada para la no cohabitación entre los esposos, pues en Jalisco se prevén ambas figuras jurídicas. La separación de cuerpo se encuentra prevista en el artículo 409 del Código civil, y prevé en forma expresa que el cónyuge que no quiera pedir el divorcio fundado en las causas enumeradas en las fracciones VI y VII del artículo 404, podrá, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligación de cohabitar con su consorte; y el juez, con conocimiento de causa, podrá decretar esa

---

<sup>80</sup>Bonnecase, Julien, *op. cit.*, nota 5, pp. 255 y 256.

suspensión, quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el matrimonio. Las referidas causales corresponden a padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años o bien a padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente. Se hace referencia al tema concreto sin abundar en el mismo, a virtud de que tal figura jurídica en nuestro país se encuentra en desuso, lo que es comprensible si atendemos a que en la actualidad la óptica social para el divorcio vincular a sufrido grandes cambios y de tener una actitud renuente a su ejercicio, poco a poco se ha posicionado como la solución real al conflicto matrimonial. No se debe confundir la separación de cuerpos, que dimana de una resolución judicial, con la separación de los cónyuges, pues la primera corresponde a todo un proceso judicial y la segunda es un acto de hecho de los consortes.

Para acceder al divorcio, se requiere fundarlo en uno o más hechos ilícitos, como pudiera ser el adulterio o la infidelidad, la comisión de un delito en contra del cónyuges o de los hijos, el abandono o separación del domicilio conyugal, los malos tratamientos, las injurias, la violencia intrafamiliar, que se atribuyen a uno de los esposos. Solo en estos supuestos especificados en la ley sustantiva es que la ley confiere al otro un interés legítimo para demandar el divorcio, si no se está en el caso de poder imputar al cónyuge algún hecho ilícito de los enumerados como causales se estará en presencia de la ausencia de acción.

Frente al concepto tradicional del divorcio vincular contencioso apareció en el derecho liberal moderno el divorcio por mutuo consentimiento de los esposos, que se presenta sin atender a la causa que lo genera, y tan solo debe ser solicitado por ambos consortes.

Sobre el tema, Zannoni, acota que:

*“...la expresión más radical haya sido la de la Francia revolucionaria a través de la constitución de 1791, en la cual expresamente se declara que “la ley no considera al matrimonio sino como un contrato civil”, permitiendo por consiguiente, lo que hoy llamaría algún autor, la rescisión del matrimonio por la voluntad común de los esposos. No sin contramarchas, el divorcio por mutuo consentimiento de los esposos sale airoso: pero no porque sea una consecuencia de una concepción contractualista del matrimonio, sino porque constituye una solución al conflicto conyugal que no recibe adecuada respuesta a través del régimen del divorcio como sanción. Porque, en efecto, ese conflicto no nace necesariamente en la comisión de unos hechos ilícitos tipificados a priori por la ley. La vida es algo más compleja que eso: el conflicto nace y se acrecienta en la medida que los esposos, con los hijos que ellos trajeron a este mundo, no pueden, no saben o no quieren asumir el proyecto existencial, de naturaleza ética, que la unión matrimonial propone. ¿Debe mediar la comisión de ilícitos? No, evidentemente.”<sup>81</sup>.*

Adheridos al criterio de Bustos Rodríguez<sup>82</sup>, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial decretada por la autoridad, desde el punto de vista del acuerdo entre los cónyuges, el divorcio puede ser por mutuo consentimiento, cuando ambos cónyuges acuerdan disolver el vínculo y contencioso (también llamado necesario), cuando alguno de los dos ha cometido algún acto contra el otro que haga imposible la convivencia (divorcio sanción), o haya situaciones que hagan imposible la vida en común (divorcio remedio), y se vean en la necesidad de pedir la disolución del vínculo matrimonial.

A su vez el divorcio por mutuo acuerdo (como se verá con posteridad) puede ser administrativo y tramitarse ante el oficial del registro civil o centros de mediación y solución de conflictos, reuniendo determinados requisitos exigidos por la ley.

---

<sup>81</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, p. 10.

<sup>82</sup> Bustos Rodríguez, María Beatriz, *Personas y Familia*, México, Oxford, 2006, pp. 33 y 34.

Otra clasificación podría darse de la siguiente forma: cuando hay disolución del vínculo y nueva aptitud nupcial, se habla de divorcio vincular y solamente quedan a cargo de los cónyuges las obligaciones derivadas de la patria potestad. En contrapartida a este divorcio se encuentra la separación de cuerpos o divorcio no vincular, en el que cesa la cohabitación, pero se siguen manteniendo algunos deberes emanados del matrimonio como son la fidelidad y la deuda alimenticia entre cónyuges todo esto sin disolver el vínculo y nada una nueva aptitud nupcial.

En el divorcio se presentan dos grandes rubros:

El divorcio-remedio, llamado así porque no atiende tanto a las causas ni a la culpa de los esposos en la crisis matrimonial, tiene su origen en las causas que hacen imposible la vida en común, ya sea porque un consorte padece una enfermedad incurable, que además resulta contagiosa o hereditaria, el estado de interdicción de alguno de ellos, o el divorcio por mutuo consentimiento

Entiéndase entonces que el divorcio remedio, atiende a causas especiales, taxativamente enumeradas por el Código Civil. Se trata de enfermedades sobrevinientes a la celebración del matrimonio; por tanto, ninguno de los dos cónyuges es culpable de tal situación. Sin embargo la ley considera que padecer ciertas enfermedades crónicas o incurables y además contagiosas o hereditarias y la impotencia incurable sobrevenida por causa de la edad, pone al cónyuge sano en una situación que hace difícil la convivencia.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Bustos Rodríguez, María Beatriz, *Diccionario de Derecho Civil*, México, Oxford, 2006, pp. 43 y 44.



Con las mismas posibilidades son tratadas las enfermedades demenciales que no tengan cura, declarada esta por autoridad jurisdiccional.

El divorcio-remedio deriva de las causas llamadas eugenésicas. Para paliar esta situación se permite remediar un matrimonio que se ha tornado insostenible, en virtud de alguna enfermedad crónica o incurable, que sea además contagiosa o hereditaria, o bien, por la impotencia incurable que sobrevenga al esposo después de celebrado el matrimonio. En cuanto al divorcio-sanción éste tiene lugar en virtud de una pena que pronuncia el juzgador contra el cónyuge culpable, con fundamento en las causales restrictivas que contempla el código.<sup>84</sup>

El divorcio-sanción, el cual toma en cuenta las culpas graves cometidas por uno de los cónyuges, que corresponde al modelo privilegiado en el siglo veinte, en donde la mayoría de las legislaciones establecen el catalogo de causas de divorcio, las que atento a su naturaleza corresponden a una conducta “ilícita” de uno de los cónyuges hacia el otro que violenta en forma grave la relación matrimonial que trae aparejada el incumplimiento de las obligaciones y fines del matrimonio.

En efecto, este se motiva por las causales mencionadas en el Código Civil y que supone una violación grave a los deberes del matrimonio, y el divorcio es la sanción que se aplica al culpable. El ejercicio de la acción corresponde al cónyuge que no ha dado causa y es libre de perdonar o permitir que la acción prescriba.<sup>85</sup>

El contraste entre ambas radica en que “...la diferencia sustancial entre la concepción del llamado divorcio-sanción y del divorcio-remedio, reside en

---

<sup>84</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 235.

<sup>85</sup> Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía, *op. cit.*, nota 65, p. 150.

*que la primera considera que la causa del conflicto conyugal es la causa del divorcio, mientras la segunda entiende que el conflicto es, él mismo, la causa del divorcio, sin que interesen las causas de ese conflicto.”<sup>86</sup>*

Otra clasificación se encuentra en cuanto a las causales, ya sean objetivas o subjetivas, dentro de las primeras se encuentra la inherente al transcurso de un determinado período de tiempo de separación de hecho, la voluntad conjunta de los esposos o la quiebra irreparable de la comunidad de vida matrimonial, entre otras causales de esta naturaleza.

Sobre estos puntos específicos se abundara en los capítulos quinto y sexto, inherentes al estudio de las causales taxativas del divorcio.

Las anteriores clasificaciones del divorcio corresponden a una visión doctrinaria clásica y tradicional, dejando en claro la serie de características que las enmarcan, según la vía o según la casual o causales que se invoquen; sin embargo tales aspectos solo deben quedar como antecedentes históricos del divorcio, dejar a un lado tales clasificaciones, en donde poco importe si es divorcio remedio o sanción, aspectos característicos de un derecho sancionador más que resolutor, para dar paso a una nueva visión de la función del derecho en este punto específico, en donde su deber primordial es el estar al servicio de la ciudadanía para la solución real y expedita del conflicto, con pleno respeto a las garantías de las personas, implementando los sistemas alternativos de resolución de conflictos en materia de divorcio, así como el divorcio incausal, en donde la vida íntima de los interesados queda protegida y se respeta la voluntad del o los interesados.

---

<sup>86</sup> *Ibídem*, p. 19.

## 2.2 Elementos del marco Constitucional.

### Antecedentes<sup>87</sup>

El divorcio fue introducido en la legislación civil mexicana, por decreto del 29 de diciembre de 1914, publicado el 2 de enero de 1915 en El Constitucionalista, periódico oficial de la federación que se editaba en Veracruz, sede entonces del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. En ese decreto, se modificó la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 14 de diciembre de 1874 reglamentaria de las adiciones y reformas de la Constitución Federal decretadas el 25 de diciembre de 1873.

José Venustiano Carranza Garza, Presidente Constitucional de aquel entonces en su exposición de motivos ponía a consideración lo siguiente:

*“...Que la experiencia y el ejemplo de las naciones civilizadas enseñan que el divorcio que disuelve el vínculo es el único medio racional de subsanar, hasta donde es posible los errores de uniones que no pueden o no deben subsistir.*

*Que admitiendo el principio establecido por nuestras leyes de reforma, de que el matrimonio es un contrato civil, formado principalmente por la espontánea y libre voluntad de los contrayentes, es absurdo que deba subsistir cuando esa voluntad falta por completo, o cuando existan causas que hagan definitivamente irreparable la desunión consumada ya por las circunstancias; Que tratándose de uniones que por irreductible incompatibilidad de caracteres, tuvieran que deshacerse por la voluntad de las partes, se hace solamente necesario cerciorarse de la definitiva voluntad de esos cónyuges para*

---

<sup>87</sup> Divorcio. Antecedentes del divorcio en México, disponible en <<http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21886/Capitulo1>>, página visitada el 21 de noviembre de 2012.

*divorciarse, y de la imposibilidad absoluta de remediar sus desavenencias o de resolver sus crisis, lo cual puede comprobarse por el transcurso de un 4 periodo racional de tiempo, desde la celebración del matrimonio hasta que se permita su disolución, para convencerse así de que la desunión moral de los cónyuges es irreparable”.*

Por tanto, se decretó: *“Artículo Primero; Se reforma la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 14 de diciembre de 1874 reglamentaria de las Adiciones y Reformas de la Constitución Federal decretadas el 25 de diciembre de 1873, en los términos siguientes:*

*Fracción IX. El matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de tres años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno de los cónyuges, que hagan irreparable la desavenencia conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima”*

En dicho decreto se establecía la separación legal de los cónyuges, siendo entonces la primera vez en nuestro país que se instituía jurídicamente la disolución vincular del matrimonio. Ya sea, por el mutuo o libre consentimiento de los cónyuges, cuando tuviera más de tres años de celebrado o en cualquier tiempo por causas que hicieran imposible o indebida su realización. Disuelto el matrimonio, los cónyuges estarían libres de contraer matrimonio de nuevo.

Ahora bien, por cuanto a las garantías individuales que atendiendo al estado actual de la ley en relación con el divorcio y que pueden ser materia de violación desde el marco normativo federal, debemos enfatizar que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su contenido refleja los Derechos Mexicanos; para su estudio se integra por una parte dogmática que son nuestros Derechos fundamentales, es decir las mencionadas garantías individuales o derechos fundamentales, las cuales delimitan el poder del Estado frente al ciudadano, son las reservas de los derechos públicos subjetivos, que crean la relación jurídica de un gobernado y el Estado, del cual el gobernado puede exigir una obligación que debe ser respetada para conseguir sus fines y formar su propia persona.

La otra parte que complementa a nuestra Constitución se le denomina parte Orgánica que tiene como objeto organizar el poder público estableciendo las facultades de sus órganos. Ambas partes mencionadas forman un todo que es la Constitución Mexicana.

Estos derechos para su reconocimiento los divide, Jellinek<sup>88</sup>, en Garantías Sociales, Políticas y Jurídicas; teniendo ésta como base la idea general de Garantía que por modo indistinto se puede aplicar a la llamada Garantía Individual.

En efecto, hablar de derecho procesal es hablar de la prohibición de hacer justicia por propia mano, impedimento señalado por la parte dogmática de la Constitución Política del País, concretamente en el artículo 17 de la indicada Ley fundamental, al ordenar que:

*“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.”<sup>89</sup>*

---

<sup>88</sup> Burgoa Orihuela, Ignacio, *Derecho Constitucional Mexicano*, México, Porrúa, pp. 318-339.

<sup>89</sup> Sada Contreras, Carlos Enrique, *Apuntes elementales de Derecho Procesal Civil*, Nuevo León, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2000, p. 98.

Continuando dicho precepto en su párrafo segundo no con una obligación a cargo del gobernado, sino con un derecho, es decir, el legislador constitucional en el párrafo segundo del citado artículo 17 es en donde da la pauta para encontrar la obligación a cargo del Estado para administrar justicia pronta en beneficio de los gobernados, pues si en principio prohíbe hacer justicia por propia mano, o sea la venganza privada, es congruente el actuar legislativo al imponer al Estado la obligación de decidir quién tiene la razón en caso de controversia, ya sea que ésta surja de particular a particular, o de particular contra el Estado, o bien sea del Estado en contra de un particular, siendo a cargo del propio Estado los gastos que se eroguen con motivo de la función gubernamental de que hablamos, pues dice así el párrafo segundo del aludido precepto 17 Constitucional:

*“[...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”<sup>90</sup>*

Dicha garantía, ahora denominada *Derecho Humano* o *Derecho Fundamental* se encuentra por su parte reconocida en el Artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en el que transcribe textualmente el referido 17 de la Constitución Federal.

De lo anteriormente comentado se llega a la conclusión de que la base constitucional de nuestra disciplina se encuentra inmersa en el contenido de los artículos 17 de la Ley Suprema y 52 de la Constitución Local.

---

<sup>90</sup> Burgoa Orihuela, Ignacio, *op. cit.*, nota 88, pp. 318-339.

Para los fines de la investigación, debemos atender en forma especial el contenido de los artículos 1º<sup>91</sup> y 4º de nuestra Carta Magna. En el primero de ellos, queda de manifiesto que en este país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, y establece de manera clara que las normas relativas a los

---

<sup>91</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, *Diario Oficial de la Federación*, 26 de febrero de 2013, Artículo 1o. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, debiendo favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia de tales derechos fundamentales, determinando con claridad que está prohibida cualquier discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; derechos de los cuales algunos de ellos, como las preferencias sexuales, el estado civil, el género, a virtud del estado actual de las cosas dentro de los procesos de divorcio, se pueden ver vulnerados.

En cuanto al artículo 4º Constitucional<sup>92</sup>, por lo que corresponde a la materia de esta investigación, debemos atender que en él se determinan

---

<sup>92</sup> *Ibídem*, art. 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.



como derechos fundamentales que el varón y la mujer son iguales ante la ley, así como el deber del Estado de proteger la organización y el desarrollo de la familia, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, que todos tenemos derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado debe garantizar este derecho, de igual manera se establece que en todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, que los ascendientes, padres y abuelos, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, así como la obligación del

---

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Estado para otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En los términos actuales, las normas relativas al divorcio en la legislación de Jalisco, no cumplen a cabalidad con las garantías constitucionales o derechos fundamentales de los ciudadanos, como se irá bordando a lo largo de esta investigación, ello sin dejar de considerar que en el momento histórico en que entraron en vigor, correspondían al concepto que del matrimonio y el divorcio tenía la ciudadanía en general, mas la vida cambia y con ello las personas, sus necesidades y sus requerimientos, motivos por los cuales se debe contemplar nuevas formulas jurídicas que se adapten a los cambios históricos que vivimos.

### **2.3 Sistemas o Procesos jurisdiccionales de disolución del vínculo matrimonial.**

Es necesario hacer un recorrido por diversos aspectos de la norma y del derecho procesal para poder conceptualizar, en su momento la problemática que de ellas emerge en los juicios de disolución del vínculo matrimonial en los términos que actualmente se encuentran legislados en el Estado de Jalisco,

El derecho procesal<sup>93</sup> es una rama del Derecho Público, ya que desde nuestro punto de vista, la Ley es su única fuente.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Según Hernández, Kelly, no debe confundirse proceso con procedimiento, pues el primero es la rama del Derecho público interno, que reglamenta la organización del órgano jurisdiccional, fija su jurisdicción y competencia, y señala el camino a seguir para hacer efectivos los derechos de los particulares, véase, Hernández Kelly, *Teoría general del derecho procesal*, México, Porrúa, 2000, *passim*. El derecho procesal es derecho público, porque la administración de justicia es función del Estado, por mandamiento constitucional en su artículo 17.

Efectivamente, resulta ser la Ley la única fuente de esta disciplina, ya que los principios generales de derecho que son mencionados para decidir el pleito en el Artículo 14 Constitucional, difícilmente podrán ser útiles para encausar el debate pues éste tiene señalada su tramitación en tanto que la jurisprudencia sólo una guía de interpretación de la ley procesal y por último, la costumbre es rechazada tanto por el legislador como por los jueces y tratadistas para llenar las posibles lagunas existentes en los diversos procedimientos ideados por el creador de la ley, pues las llamadas prácticas o usos del foro, representan una deformación de las leyes aplicables.

Alsina<sup>95</sup>, en referencia a las normas de orden público y de interés privado señala: “... *Se discute si las leyes de procedimiento son de orden público o de interés privado, sin advertir que, por sus caracteres, tales leyes no pueden estar sometidas en absoluto a una u otra categoría. En realidad, todas las ramas del derecho, tanto público como privado, tienen como verdaderos sujetos a los individuos, sea aisladamente, sea como integrantes de la colectividad, y esto explica por qué toda norma jurídica contiene un máximo y un mínimo que determinan su naturaleza. Es más exacto, entonces, decir que ciertas normas interesan al orden público o afectan al interés privado según la prevalencia que se conceda a uno con respecto al otro, y solo por facilidad de expresión se habla de normas de orden público o de interés privado.*”

---

Después del anterior análisis y sumando la palabra proceso, se puede definir a esta obligación estatal como: “el examen de la serie de actos realizados por el órgano regulador y las partes, relacionados entre sí por el fin que se persigue, que es satisfacer las pretensiones de las partes”

<sup>94</sup> Sánchez Márquez, Ricardo, *op. cit.*, nota 3, p. 121.

<sup>95</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, p. 17 y 18.

No debemos olvidar que unidad procesal que se presenta en juicio; Gómez Lara<sup>96</sup>, refiere que ha sustentado las seis razones fundamentadoras de la unidad procesal, las que consisten en: “a) *el contenido de todo proceso es un litigio*; b) *la finalidad de todo proceso es la de dirimir o resolver un litigio*; c) *todo proceso presenta una estructura triangular en cuyo vértice superior esta el órgano jurisdiccional y en los inferiores se encuentran las partes en contienda*; ch) *todo proceso presupone la existencia de una organización judicial con jerarquía y escalonamientos de autoridad*; e) *todo proceso está dividido en una serie de etapas o secuencias que se desenvuelven a su largo desde su principio hasta su fin*; y e) *todo proceso tiene un principio general de impugnación mediante el cual se postula la necesidad de que las resoluciones del tribunal puedan ser reexaminadas o revisadas porque no estén apegadas a derecho, porque sean incorrectas, equivocadas o ilegales*”.

Si bien es verdad que en estos procesos judiciales se deja a las partes el impulso del procedimiento, ello no quiere decir que sea dicho impulso el que encause el debate, sino que se trata de no dejar paralizados los juicios por falta de interés de los particulares, puesto que la autoridad está impedida para sustituirse en los derechos de las personas, por lo general a la mayoría de los juicios se les impone a los participantes, la obligación de darle continuidad, so pena de aplicarle las sanciones respectivas dada su falta de interés para la continuación del procedimiento, como sería la caducidad de la instancia; en nuestro tema, en el divorcio por mutuo consentimiento, cuando los cónyuges dejan pasar más de tres meses sin continuar el procedimiento, el tribunal debe declarar sin efecto la solicitud y mandará archivar el expediente<sup>97</sup>, en tanto que la caducidad no es aplicable al juicio de divorcio contencioso<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> Gómez Lara, Cipriano, *op. cit.*, nota 29, p. 4.

<sup>97</sup> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, art. 773. En cualquier caso en que los cónyuges dejen pasar más de tres meses sin continuar el procedimiento, el tribunal declarará sin efecto la solicitud y mandará archivar el expediente.

<sup>98</sup> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, art. 29-bis, fr. VII. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio,

La ley como norma, corresponde, a nuestro entender: la representación de lo bueno, de lo justo y de lo equitativo. Es decir, que de inicio, el derecho procesal está llamado a ser el camino idóneo por medio del cual, los particulares y el Estado representado por el órgano de jurisdicción, encontrarán la solución a lo que Floris Margadant<sup>99</sup> da en llamar los casos patológicos del derecho.

Intentado una fácil definición del proceso, diremos que es el camino que las partes y el órgano de jurisdicción deben seguir para lograr el dictado de la sentencia, por medio de la cual se tutele el derecho controvertido, o bien, se otorgue autorización al particular para realizar algún acto jurídico, según sea el caso.

Para lograr tal objetivo, los participantes en el juicio estarán en todo tiempo y momento ajustándose a los dictados de la legislación respectiva, ya sea en la vigencia de la época de la iniciación del procedimiento, o bien atendiendo a la reformas que pudieran generarse, ya que la aplicación retroactiva de la ley, sí aplica en normas de naturaleza procesal, salvo lo que

---

desde la notificación del primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento. Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las normas siguientes:

VII. No tiene lugar la declaración de caducidad:

- a) En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero si en los juicios con ellos relacionados que se tramiten acumulada o independientemente, que de aquéllos surjan o por ellos se motiven;
- b) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria;
- c) En los juicios de alimentos y en los de divorcio; y
- d) En los juicios seguidos ante la justicia de paz;

<sup>99</sup> Margadant, Guillermo F., *Derecho Romano*, 5ª ed., México, Editorial Esfinge, 1974, p. 128.

al efecto se señale en los artículos transitorios de la ley que modifica el procedimiento.

Dentro de nuestro sistema procesal, existen tres procedimientos para la disolución del vínculo matrimonial; el divorcio administrativo (que se tramita ante el oficial del registro civil o por medios alternativos), el divorcio necesario o contencioso y el divorcio por mutuo consentimiento o voluntario. El primero es inherente a un trámite administrativo con las características de un divorcio por mutuo consentimiento y los restantes corresponden a procesos judiciales, los que serán materia de análisis en capítulos subsecuentes.

Estos sistemas jurídicos del divorcio no resultan adecuados a la época en que vivimos, el divorcio administrativo, aunque sencillo en trámite, por el mínimo de asuntos que en él se ventilan, no da una respuesta satisfactoria a la gran demanda de reclamaciones matrimoniales; en tanto que el divorcio necesario o contencioso y el divorcio por mutuo consentimiento o voluntario, sobre todo el primero de los aludidos, representa una serie de dificultades tanto procesales como de fondo, que tampoco se logran una respuesta efectiva a la gran petición que de ellos se hace por parte de los divorciantes, con los consabidos resultados negativos para todos.

## **2.4 Fundamentos de los procesos de divorcio.**

La fundamentación sustantiva del divorcio vincular se encuentra contemplada en el Capítulo XII del Título Cuarto del Libro Segundo del Código Civil del Estado de Jalisco, se denomina “El Divorcio” y su normatividad está contemplado del artículo 403 al 422.

Por su parte, el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento, se encuentra normado en el Capítulo IV del Título Décimo Segundo denominado “De los Negocios de Tramitación Especial”, del artículo 764 al 775, en tanto

que el divorcio necesario o contencioso se tramita bajo las reglas del juicio civil ordinario.

Sobre los tipos fundamentales de procedimiento, tenemos el dispositivo y el inquisitivo, sobre este punto, Alsina<sup>100</sup> hace un análisis sobre la distinción entre uno y otro, y refiere:

*“...En realidad no existen sino dos tipos fundamentales de procedimiento, que responden a dos concepciones distintas del proceso según la posición que en el mismo se asigne al juez y a las partes. El sistema dispositivo confiere a las partes, el dominio del procedimiento y sus reglas fundamentales son las siguientes: el juez no puede iniciar de oficio el proceso (nemo iure sine actore); no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes (principio de presentación; quod non est in actis non est in mundo); debe tener por cierto los hechos que en aquéllas estuviesen de acuerdo (ubis partis sunt concordēs nihil ab iudicē); la sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado (secundum allegata et probata); y el juez ni puede condenar a más ni a otra cosa que la pedida en la demanda (net eat ultra petita partium). Por el contrario, en el sistema inquisitivo el juez debe investigar, sin otra limitación que la impuesta por la ley, la verdad material con prescindencia de la actividad de las partes (principio de investigación judicial; de inquirere, averiguar); no sólo puede el juez iniciar de oficio el proceso, sino que está facultado para buscar los hechos, descubriéndolos a través de los que ya conoce y utilizando cualquier medio tendiente a la averiguación de la verdad.*

*Confrontando los dos sistemas se advierte que en dispositivo no sólo corresponde a las partes el ejercicio de la acción, sino que ellas fijan la cuestión litigiosa (thema decidendum), establecen los hechos que*

---

<sup>100</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, pp. 34 y 35.

*determinan su posición respectiva frente a ella y utilizan los medios de prueba que estiman más ventajosos, dentro de los permitidos por la ley, para el éxito de las pretensiones; por consiguiente, el juez desempeña un papel pasivo, manteniéndose a la expectativa para atribuir en su fallo la victoria a quien mejor hubiera defendido su derecho. En cambio, en el inquisitivo el juez se desempeña activamente, averigua los hechos, trata de descubrir a la verdad formal que le presentan las partes, la verdad real que le permita dictar una sentencia justa.*

*Pero no son con sistemas absolutos, porque no hay procesos puramente dispositivos o inquisitivos. En el sistema dispositivo se admite aun tratándose de cuestiones de derecho exclusivamente privado, ciertas facultades por las que el juez puede completar su conocimiento de los hechos (diligencias para mejor proveer), y en las que se halle interesado el orden público (divorcio, nulidad de matrimonio, etc.), no siempre el juez está obligado a tener por ciertos los hechos que las partes reconozcan (por ejemplo, no hay divorcio por mutuo consentimiento en nuestro derecho). Por consiguiente, solo puede hablarse de prevalencia de uno u otro sistema, en lo que influye la materia de la cuestión, así en tanto que el proceso civil es prevalentemente dispositivo, el penal es prevalentemente inquisitivo.”*

Efectivamente en los procesos de divorcio jurisdiccional, se conjugan ampliamente ambos sistemas, pues aun cuando estamos en el dispositivo, las facultades del juzgador para ordenar cualquier diligencia para mejor proveer para arribar a la verdad, y no solo eso, sino el de suplir la deficiencia y de oficio, ordenar cualquier diligencia de prueba para resolver lo adecuado en relación con los hijos de las partes, deja en claro que estamos ante la presencia de un sistema mixto.



## **2.5 Aspectos Generales del Divorcio Contencioso.**

En este apartado tratamos de dar un visión panóptica de distintos aspectos jurídicos que se tienen que tomar en consideración en un juicio de divorcio según la circunstancia específica que presente cada proceso y que resultan situaciones jurídicas comunes, pero que no por ello implica que se promuevan adecuadamente por los interesados o bien, que sean materia de estudio y resolución por el juzgador, intentando dar una panorámica general de cada punto concreto pues tienen relación directa con los juicios de divorcio adversarial, ya que el profundizar sobre algunas de estas figuras jurídicas equivaldría a un tema central de investigación.

### **2.5.1 Separación de personas<sup>101</sup>.**

Nuestra legislación procesal en su capítulo III determina la normatividad vigente para este trámite preparatorio de juicio, que esencialmente corresponde a que cuando alguno de los cónyuges, intente, o fuese a intentar demanda, querella o denuncia, puede solicitar la separación del otro ante el juez, acreditando por los medios permitidos a su alcance, la urgencia y necesidad de la medida; este acto se tramita por separado o en forma simultánea a la presentación de la demanda; a virtud de su naturaleza precautoria o medida cautelar, su trámite se ventila sin audiencia del cónyuge contra quien se solicitan<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> El juez podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar la resolución. En el caso de violencia familiar tomara en cuenta los dictámenes, informes y opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender asuntos de esta índole.

<sup>102</sup> [J] VI.1o.140 C, Semanario Judicial de la Federación, XV-II, Civil, Febrero de 1995, p. 316. Domicilio conyugal. En las diligencias relativas a la separación de un cónyuge, como medida preparatoria de juicio, no debe tener el otro intervención.

Por separación<sup>103</sup> se entiende al acto y consecuencia de separar o de ser separado (es decir, fijar o incrementar una distancia, aislar). El término tiene su origen en el latín *separatio* y suele aprovecharse para hacer mención al cese de la vida en pareja establecido por una decisión tomada por las partes o decretado por un fallo judicial, sin que ello represente la disolución del vínculo matrimonial.

La separación<sup>104</sup>, en este sentido, es una situación intermedia entre la unión conyugal y la sentencia de divorcio. A nivel jurídico, esta categoría o clasificación se utiliza en caso de que la ley vigente no autorice el divorcio. En estos casos, la separación supone que el lazo de la pareja se mantiene vigente, aunque se dan por concluidos varias de las obligaciones y los derechos que alcanzan a los miembros de la pareja.

La separación de los cónyuges puede ser una separación de hecho (acordada entre los involucrados, sin que el vínculo se haya disuelto por vías legales) o una separación judicial (que posee diversos efectos jurídicos sobre los integrantes de la pareja).

Es importante insistir que, pese a la separación de hecho, para que el matrimonio se disuelva se tiene que tramitar el divorcio. Por eso, alguien que se ha separado pero no divorciado no puede contraer enlace nupcial sin incurrir en bigamia.

Las parejas, por lo general, primero deciden la separación y después inician los trámites de divorcio. Esto permite que, tras la separación y antes del divorcio, la pareja tenga la posibilidad de recomponerse y los cónyuges retomen la vida matrimonial habitual.

---

<sup>103</sup> Definición.de, disponible en <<http://definicion.de/separacion/#ixzz2E7aOMtcg>>, 2008-2013.

<sup>104</sup> *Ibídem*.

En la vida cotidiana, la separación de *hecho*, marca el fin de la convivencia. Las personas involucradas deben acordar la distribución de los bienes, la custodia legal de los descendientes y otras cuestiones.

En cuanto a la separación de *derecho*, se prevé que sólo los Jueces de Primera Instancia, pueden decretar la separación judicial en comento, hecha excepción que por circunstancias especiales no pueda ocurrirse al Juez competente, podrá entonces el Juez del lugar donde el cónyuge se encuentre decretar la separación provisionalmente con sujeción a la ley y remitiendo las diligencias al juez que le corresponda conocer de la causa. En la solicitud se deben señalar sus generales, acreditar la existencia del vínculo matrimonial, una relación de los hechos o causas por las que se pide el acto prejudicial, y en su caso, aportar las pruebas que demuestren tal situación, mismas que deberán admitirse sin necesidad de ninguna otra solemnidad, para que una vez analizadas, el Juez valore y resuelva en un término de 72 horas, si se practica la separación o no, que la autoridad dispondrá las medidas necesarias para que el cónyuge que tuviere el cuidado del hogar y de los hijos siga habitando la casa conyugal y prevendrá al otro cónyuge que señale el domicilio donde deberá habitar durante el curso del procedimiento respectivo. Sobre este punto concreto existen diversas legislaciones que dan preferencia a que la madre sea la que se quede en el hogar conyugal y sea el esposo quien sea separado del mismo, ejemplo de ello es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León<sup>105</sup>, lo mismo en cuanto a

---

<sup>105</sup> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, *Periódico Oficial del Estado*, 28 de diciembre de 2012, Artículo 167. “La mujer continuará habitando el domicilio conyugal, preferentemente; pero podrá escoger en su derecho, un lugar diferente, debiendo el juez vigilar que ello sea sin perjuicio de los hijos menores si los hubiera. Sin embargo, si el solicitante fuere el varón, el Juez tomará en cuenta siempre el interés superior de los menores, si los hubiere, y las circunstancias de cada caso; por lo que procurará que el cónyuge que conserve a su cuidado a los hijos siga habitando, si así lo desea, el domicilio conyugal. Esta resolución no admitirá recurso alguno”.

cuidado de los hijos, lo cual se ha considerado discriminatorio por razón de género e inconstitucional pues contraviene la garantía de igualdad jurídica que entre mujer y varón debe existir en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>106</sup>; en nuestra Entidad Federativa, como se observa, el quid de la persona que se debe quedar en el hogar es aquel cónyuge que tiene el cuidado del hogar y de los hijos, el que debe seguir habitando la casa conyugal y el otro es el separado y en cuanto a la custodia de los hijos, se dispone que ellos deben ponerse de acuerdo, lo que implica igualdad entre ambos y solo en caso de no hacerlo, el juez debe atender entonces cual de los dos progenitores es el que está al cuidado de los hijos, así como a la edad de estos y las circunstancias especiales que deriven del trámite judicial y las que al momento se puedan observar, para resolver lo conducente.

El Código Procesal Civil del Estado de Jalisco, dispone: Artículo 221. Cuando alguno de los cónyuges, intente, o fuese a intentar demanda, querrela o denuncia, puede solicitar la separación al juez, acreditando por los medios permitidos a su alcance, la urgencia y necesidad de la medida. Dicha autoridad, desde luego, dispondrá las medidas necesarias para que el cónyuge que tuviere el cuidado del hogar y de los hijos siga habitando la casa conyugal y prevendrá al otro cónyuge que señale el domicilio donde deberá habitar durante el curso del procedimiento respectivo.<sup>107</sup>

Para obtener el dictado de una Medida Cautelar es necesario tramitar un Proceso Cautelar, pero ella, se dicta por ser necesaria para otro proceso que se va a iniciar o que ya se ha iniciado. Es imprescindible aclarar que no

---

<sup>106</sup> [J] IV.1o.C.50 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Novena Época, Civil, Registro: 176995, Octubre de 2005, p. 2361. Igualdad jurídica entre el varón y la mujer. El artículo 167, párrafo primero, del código de procedimientos civiles del estado de nuevo león (vigente hasta el veintiocho de abril de dos mil cuatro), viola esa garantía constitucional.

<sup>107</sup> Véase, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, art. 221.

siempre las Medidas Cautelares son instrumentales, es decir accesorias a otro proceso principal, sino que las hay también autosatisfactivas, como por ejemplo la que solicita la intervención de las Sociedades Comerciales, que se agota en sí misma.

Retomando el tema de la separación judicial que nos ocupa, la norma determina que juez debe intervenir personalmente en el cumplimiento de las medidas que disponga para la separación y practicará las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de emitir el fallo, que en caso de que conceda la petición, dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente la separación atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular y establecerá la situación de los hijos menores, tomando en cuenta las obligaciones señaladas en el Código Civil del Estado.

En cuanto al desahogo de la diligencia de separación, en ella los cónyuges podrán de común acuerdo designar la persona que tendrá a su cargo la custodia de los hijos, si no se pusieren de acuerdo, el juzgador dejará a la madre el cuidado de los hijos que no hayan cumplido trece años, salvo que esta se dedique a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriagarse, sea aficionada o adicta a las drogas, tuviese alguna enfermedad contagiosa, por su conducta ofreciera peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijos o fuere negligente en el cuidado de los mismos, igualmente debe prevenir al cónyuge separado para que señale el domicilio donde deberá habitar durante el curso del procedimiento respectivo. En este punto concreto, es el juez quien de manera personal deba de efectuar la diligencia y no el secretario del juzgado, ello es a virtud de que el juzgador al momento de la practica debe de dar cumplimiento a lo normado por el artículo 221 ante citado en cuanto a que tiene que disponer las medidas necesarias para que el cónyuge que tuviere el cuidado del hogar y de los hijos siga habitando la casa conyugal y prevendrá al otro cónyuge que señale el domicilio donde deberá habitar durante el curso del procedimiento respectivo,

de la misma manera tiene que analizar y observar si los hechos en que se funda la petición y las pruebas desahogadas, se ajustan a la verdad de las cosas, por lo que a través de los sentidos podrá confirmar tales eventos o bien llegar a una conclusión diversa y así estar en posibilidad de resolver lo pertinente, sobre todo en lo que respecta a la custodia de los hijos menores, en caso de haberlos, por otra parte, si los esposos no se ponen de acuerdo es claro que los hijos menores de 13 años deben quedar al cuidado de la madre, la dificultad se presenta, cuando el padre aduce que su esposa esta en uno o más casos de excepción de referencia, pues evidentemente que por la naturaleza de la diligencia, difícilmente podrá acreditarse en ese momento que la madre se que se dedica a la prostitución, al lenocinio, que tiene el hábito de embriagarse o que es aficionada o adicta a las drogas, que tenga alguna enfermedad contagiosa o que bien, por su conducta ofreciera peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijos o fuere negligente en el cuidado de los mismos, lo que en todo caso genera que pese a que ello se exprese al no tener pruebas para justificarlo, los hijos quedaran en custodia de la madre; este punto puede ser motivo de variación, pues la misma legislación prevé que cuando al cónyuge a quien se hubiere otorgado la custodia de los hijos se encuentre en alguno de los supuestos aludidos, se le revocará aquella, una vez acreditada la existencia de cualesquiera de dichos supuestos en el incidente respectivo, lo que en todo caso, el incidente en cuestión da oportunidad de probar tales excepciones para la custodia de los menores.

Sobre la norma que indica que el juez debe dictar las medidas necesarias<sup>108</sup> que estime procedentes para que se cumplan sus

---

<sup>108</sup> Artículo 224.- El juez deberá intervenir personalmente en el cumplimiento de las medidas que disponga para la separación y practicará las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar la resolución.

Artículo 226.- El juez dictará las medidas necesarias que estime procedentes para que se cumplan sus determinaciones, así como para evitar que los cónyuges se ocasionen molestias

determinaciones, así como para evitar que los cónyuges se ocasionen molestias bajo apercibimiento de proceder en contra del desobediente, se tienen las siguientes observaciones, ciertamente el juzgador debe hacer que se cumplan sus resoluciones, por lo que se recurre a los medios de apremio que estable la propia ley procesal y que corresponden a la multa por el importe de diez a ciento veinte días de salario mínimo; la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia; el auxilio de la fuerza pública y el fracturar la cerraduras si fuere necesario; el cateo por orden escrita, fundado y motivado y la privación de la libertad hasta por treinta y seis horas; sin embargo, tales medidas no surten los efectos deseados, pues carecen de un impacto adecuado y no en pocas ocasiones la diligencia de separación de personas genera un mayor encono en el consorte separado con consecuencias graves para el peticionario, pues aquel lo hace objeto no solo de molestias sino de acoso que puede llegar a peligrar su integridad corporal.

En este punto es importante hacer una acotación y destacar diversas disposiciones de la ley penal del Estado, que por su naturaleza tienen vinculación con el tema; así nos encontramos que en el numeral 19 en su fracción VI dispone como una de las sanciones o medidas de seguridad, la prohibición de ir a lugar determinado o de residir en el, en tanto que el artículo 24 prevé que la prohibición de ir a lugar determinado, o de residir en él, sólo podrá aplicarse cuando exista peligro para la integridad física o moral de las víctimas de la comisión de un delito intencional y que la prohibición no podrá exceder de cinco años.

Por su parte el artículo 176-Ter, dispone que comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno o varios miembros de su familia, tales como cónyuge, pariente consanguíneo hasta

---

bajo apercibimiento de proceder en contra del desobediente. Cfr. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30.

cuarto grado, pariente afín hasta cuarto grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado; que debe entenderse por maltrato, los actos u omisiones que causen un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas, independientemente de que se cometa o no otro delito.

En cuanto a la sanción a quien cometa este delito, se establece que se impondrá al responsable de seis meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por la comisión de cualquier otro delito previsto por este código aplicándose para ello las reglas de concurso de delitos y que además a juicio del Juez se impondrán las penas conjuntas o separadas de la pérdida de la custodia que tenga respecto de la víctima, la prohibición de ir a lugar determinado o residir en él y tratamientos psicológicos, reeducativos, integrales, especializados y gratuitos que serán impartidos por instituciones públicas.

En tanto que en el código procesal penal, sobre las reglas especiales para las actuaciones en la averiguación previa, en su artículo 93 Bis, dispone que tratándose de delitos de violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, el Ministerio Público otorgará, tomando en consideración el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que se cuente, órdenes de protección de emergencia, las cuales tendrán una temporalidad no menor de un mes, pudiendo prorrogarse hasta tres meses y deberán expedirse dentro de las doce horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Las órdenes de protección de emergencia consisten en:

- I. Desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble;



- II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente a la víctima;
- III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y
- IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de la familia.

Como puede observarse en la legislación civil no se encuentran previstas como medidas cautelares o provisionales ni como medios de apremio, la prohibición de ir a lugar determinado, o de residir en él, ni las órdenes de protección de emergencia señaladas, figuras jurídicas que deberían estar previstos en la legislación civil familiar de Jalisco, justamente para que con el adecuado uso de tales herramientas, ya sea una orden de restricción o de protección, puede salvaguardarse la integridad física y psicológica del consorte que obtiene la separación de personas u su prole.

Retornando al trámite que nos ocupa, atento a la naturaleza provisional de esta medida, se faculta al juez para que con audiencia de las partes, puede variar las disposiciones decretadas cuando exista causa justa que lo amerite o en vista de lo que los cónyuges, de común acuerdo o individualmente le soliciten, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de la jurisdicción contenciosa.

En caso de que el trámite de la separación de personas se intente como medida cautelar independiente, ejecutada la diligencia, en cumplimiento a lo normado en el artículo 228, el peticionario en un término de 8 días hábiles a partir del día siguiente que la separación se ejecute, debe acreditar haber presentado la denuncia, demanda o querella, mismas que deberán referirse a lo dispuesto por el artículo 404 del Código Civil del Estado y aquellas que por alguna causa hagan imposible la vida en común, que de no darse

cumplimiento a ello, el Juez, a petición de parte, levantará la medida, dictando un auto que deje sin efecto la separación y autorice al cónyuge a reintegrarse al hogar en cualquier momento. Si la medida se hace valer dentro de la formulación de la demanda, se admite una y otra cosa, se lleva el trámite de la medida cautelar, una vez decretada, en su ejecución se procede también al emplazamiento de la parte reo sobre el juicio planteado en su contra, por lo que cuando se formula en estos términos, no es menester aperebrir al peticionario de la medida precautoria.

Por otra parte, no debemos olvidar que esta medida precautoria tiende a proteger la integridad de las personas y que el uso de ella implica necesariamente un alto grado de urgencia y necesidad de la medida, lo que debe ser acreditado por los medios permitidos a su alcance; por lo que el juzgador debe dar prioridad a este tipo de solicitudes sobre cualesquier otro, lo que por cierto, si acontece en los juzgados que conocen la materia; el quid del asunto, radica cuando decretada por el juez la orden respectiva, el peticionario no pide su ejecución y tan solo la deja vigente para hacer uso de ella en fecha posterior; si la fecha para su ejecución es más o menos cercana a cuando se decreto, es factible asumir que por equis cuestiones se demora su ejecución, empero, cuando el trámite se abandona y un año después o más tiempo se pretende ejecutar, brotan serias dudas respecto de la veracidad u objetivo real al haberlas promovido, ya que entonces la calidad de urgente queda desvirtuada; al respecto la ley procesal nada dispone en cuando a que una vez decretada, tenga un periodo de vigencia para su ejecución, lo que significa que tendría que ejecutarse sin mayor preámbulo en cualquier momento. La situación se plantea porque debemos recordad que la gran mayoría de las causales de divorcio son objeto de caducidad al no hacerse valer dentro del término de los seis meses siguientes a que ocurrió el evento o se entero de él, lo que nos lleva a cuestionar la vigencia de la resolución que decreta la separación de personas, pues si esta se genera por la gravedad y urgencia de la situación de riesgo que prevalece entre los

esposos y que efectuada la misma, a los ocho días se debe presentar la demanda de divorcio que lógicamente tendrá soporte en los mismos hechos, empero, si su ejecución se peticiona ocho meses o años después de que se emitió la resolución, es patente que los hechos en que funde su demanda serán nuevos motivos, pues si fueren los que sustentaron la separación ya están caducos, en todo caso el transcurso del tiempo denota o presume que medio el perdón entre los cónyuges, por lo que no es válido que haga uso de una medida cautelar que se baso en la urgencia y necesidad de la misma, pero que por el transcurso del tiempo pierde tales características; esto nos obliga a ponderar la posibilidad de que exista una norma que establezca una vigencia sobre la medida una vez que es decretada, a fin de que no se haga un uso incorrecto de la misma y solo sirva de amenaza entre los cónyuges.

Finalmente se debe dejar en claro que esta medida cautelar solo se presenta entre cónyuges y no es factible que hagan uso de ella los concubinos, pues las normas en cuestión refieren de manera clara que el tramite es a petición de uno de los cónyuges<sup>109</sup>, lo cual pudiera estimarse desafortunado, ya que la problemática surgida entre las parejas, que puede generar un peligro en su integridad física y la de los hijos que hubiere, no es exclusiva de los esposos y es evidente que se da entre concubinos, lo que en todo caso nos deja una ausencia de norma que esperemos algún día se contemple en nuestra legislación estatal.

---

<sup>109</sup> [J] III.5o.C.107 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Novena Época, Registro: 173450, Civil, enero de 2007, p. 2355. Separación de personas como acto prejudicial. Es una medida no prevista para los concubinos (Legislación del estado de Jalisco).

### **2.5.2 Acción de divorcio y acciones simultaneas.**

**Las características de la acción de divorcio son las siguientes:**

- 1) Es una acción sujeta a caducidad.
- 2) Es personalísima.
- 3) Se extingue por reconciliación o perdón.
- 4) Es susceptible de renuncia y desistimiento.
- 5) Se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges, bien antes de ser ejercitada o durante el juicio.

#### **Caducidad de la acción.**

Por caducidad se entiende en el derecho la extinción de una acción, de una facultad jurídica o de una obligación, por el transcurso del tiempo que determine la ley, sin que se pueda evitar esa extinción, interrumpiendo el plazo o suspendiéndolo. La caducidad se caracteriza por consiguiente por la extinción fatal, necesaria o inevitable de la acción, del derecho o de la obligación, por el sólo transcurso del tiempo; de tal manera que para evitar la caducidad no queda otra posibilidad que ejercitar el derecho o la acción.

En el caso concreto debemos atender a que el concepto caducidad aplica a las causales de la acción de divorcio, mas no al procedimiento, pues una vez iniciado el juicio, este no caduca<sup>110</sup>. No todas las causales en la acción de divorcio están sujetas a caducidad, pues en ellas debemos atender a si son de tracto sucesivo o de realización instantánea.

a) Acciones de tracto sucesivo: quiere decir que día a día se comete el acto que da motivo al divorcio, y por lo tanto no puede correr un término de seis

---

<sup>110</sup> Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, Artículo 29 bis.- "...VII. No tiene lugar la declaración de caducidad:... En los juicios de alimentos y en los de divorcio..."

meses<sup>111</sup>, tomando en cuenta los primeros actos que originaron esa causa, pues se reincide en la misma falta constantemente, o bien en la misma situación, aun cuando no implique una falta, como las enfermedades crónicas e incurables, que sean contagiosas o hereditarias.

b) Las causas de realización momentánea: son aquellas que no implican un estado o situación que se actualiza constantemente en el tiempo, sino que se realizan en un momento dado, por ejemplo: el adulterio o Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años.

En párrafos siguientes se hará un análisis pormenorizado de la caducidad en las causales de divorcio.

La prescripción: Por su parte, es una forma de extinguir acciones, derechos u obligaciones, por el transcurso del tiempo; pero se pueden interrumpir o en su caso suspender los plazos. En consecuencia la prescripción no traerá consigo de manera fatal la extinción de la situación jurídica.

Carácter personalísimo de la acción. Se entiende por acción personalísima aquella que sólo puede intentarse exclusivamente por la persona facultada por la ley. En cambio las acciones que no son personalísimas, pueden intentarse por los herederos y en ciertos casos por los acreedores, siendo susceptibles de representación los incapaces. La acción de divorcio es personalísima, por lo que no puede ser intentada por los herederos.

---

<sup>111</sup> Artículo 410.- El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él y dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda, salvo que se funde en causales de tracto sucesivo.

Tratándose de las causales previstas en las fracciones VII, XII y XIX del artículo 404, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. *Íbidem*.

En el caso de divorcio de los menores de edad, cómo éste produce de pleno derecho su emancipación, tendrá, tanto para el divorcio voluntario<sup>112</sup> como para el necesario, que hacer valer personalmente la acción, pero asistido de un tutor especial. Se señala en el Código Civil vigente en el Estado de Jalisco, que el menor de edad necesita de un tutor para los negocios judiciales.

Para el problema relativo a la interdicción del cónyuge inocente, en nuestro derecho no tenemos prohibición o excepción alguna para que dentro de las reglas generales de la tutela, no pudiera el tutor ejercitar la acción de divorcio en representación de ese cónyuge inocente o bien, representarlo en caso de ser demandado, tal como se expreso en capítulo anterior.

La acción de divorcio se extingue por reconciliación o por perdón expreso o tácito. Al efecto los numerales 411 y 412 del Código Civil, expresan:

**Artículo 411.-** Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 404 puede alegarse para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón expreso o tácito.

**Artículo 412.-** La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio de divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoria. En este caso, los interesados deberán informar su reconciliación al juez, sin que su omisión destruya los efectos producidos por la reconciliación.

---

<sup>112</sup> Artículo 771.- El cónyuge menor de edad necesita de un tutor especial para poder solicitar el divorcio por mutuo consentimiento. *Íbidem*.

La reconciliación presupone el perdón mutuo de culpas reales o probables, y pone fin de común acuerdo al estado de desavenencia. El perdón presupone culpa de alguno de los cónyuges, y de forma unilateral el inocente perdona el agravio, ya sea de forma expresa, con palabras o por escrito o con actos que de manera indubitable (tácita) hagan suponer el perdón de la falta. La reanudación de la vida en común es la forma más frecuente de reanudación o perdón.

No puede intentarse nuevo juicio por las causas perdonadas, pero sí por otras de la misma naturaleza.

La acción de divorcio puede ser objeto de renuncia o desistimiento. Naturalmente es posible renunciar a las causas de divorcio ya consumadas; pero lo que es imposible jurídicamente, es renunciar a causas de divorcios que pudieran ocurrir en el futuro.

Puede también la acción de divorcio ser objeto de desistimiento, lo que implica una renuncia pero de la acción ya intentada. Es decir, la renuncia puede presentar dos formas:

1. Antes de que se intente la acción o;
2. Una vez intentada, pero en ambos casos la causal ya está consumada.

Si una vez conocida la causa de divorcio por el cónyuge inocente, manifiesta éste que la renuncia, puede simplemente prescindir de intentar la demanda. O bien, puede la demanda ya haberse formulado, y estando en trámite el juicio de divorcio, es posible que el cónyuge actor se desista de la acción.

La acción de divorcio se extingue con la muerte de cualquiera de los cónyuges. En los términos de lo dispuesto por la ley<sup>113</sup>, la muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiera el procedimiento judicial ya incoado.

En cuanto a la acumulación de acciones o acciones simultaneas, como antes se indico, resulta absolutamente cotidiano que en el escrito de demanda además de la acción de divorcio, se ejercitan otras acciones relacionadas con el tema, como son la acción de alimentos, de la pérdida del ejercicio de la patria potestad, de la custodia definitiva, etcétera, éstas no como consecuencia en caso de obtener el divorcio, sino como acciones autónomas planteadas en la misma demanda, con lo que pareciera que se da cumplimiento a lo normado por el artículo 27 del código procesal civil que establece que cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y que provengan de una misma causa, deberán intentarse en una sola demanda, y por el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras, pero que además prevé que no pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias; ni las posesorias con las petitorias. Tampoco serán acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza correspondan a jurisdicciones diferentes. (Ver 1.5)

Ahora bien, es importante establecer cuáles son los requisitos que debe contener una demanda<sup>114</sup>, a saber:

#### I. El tribunal ante quien se promueva;

---

<sup>113</sup> Artículo 421.- La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiera existido dicho juicio. *Ibíd.*

<sup>114</sup> Cfr. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, artículo 267.



II. El nombre del actor, de su abogado patrono, autorizado para recibir notificaciones y el domicilio que señale para oír las;

III. El nombre del demandado y el domicilio en que pueda ser emplazado;

IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios;

V. Los hechos en que el actor funde su petición numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa;

VI. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables; y

VII. En su caso el valor de lo demandado.

Los efectos de la presentación de la demanda son someter al actor a la competencia del juez ante quien fue presentada la misma; interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios; señalar el principio de la instancia; en su caso, impedir la tácita reconducción, la caducidad y los demás que expresamente señale la ley.

El punto fuerte en una demanda de divorcio corresponde a los hechos en que la parte actora funda su o sus peticiones, pues en términos de ley debe de numerarlos y narrarlos de manera sucinta con toda claridad y precisión, de manera tal que el demandado pueda preparar su contestación y defensa, so pena de que procede una obscuridad de la demanda; y justamente a través del recorrido que efectuamos sobre la causales de divorcio, tenemos que en la gran mayoría de ellas deben de expresarse las

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se supone acontecieron los eventos que dan soporte a sus causales de divorcio, con mayor razón si la en la demanda también se ejercitan otras acciones, pues sería absolutamente necesario que el escrito inicial, estableciera bajo las características apuntadas, cuales son los hechos que a cada acción soportan. (Ver 1.5)

### **2.5.3 Alimentos Provisionales.**

El ejercicio de acciones simultáneas, provoca otro tipo de efectos procesales, pues al ejercer la acción de alimentos casi por lo general se solicita la fijación de alimentos provisionales, como una medida preventiva.

El procedimiento para su fijación se contempla en el contenido de los artículos 694 al 700 del Código Procesal civil, que disponen que si al promoverse el juicio también se demanda la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales, el juez sin correr traslado a la contraparte verificará que el demandante le acredite con los medios permitidos a su alcance la urgencia y necesidad de la medida y que justifique aproximadamente, cuando menos, la posibilidad del que deba darlos; que cuando el peticionario, bajo protesta de decir verdad, manifieste no contar con elementos suficientes para acreditar la posibilidad económica del deudor y bajo los mismos términos informe el ingreso aproximado mensual de éste, el juzgador atendiendo a la capacidad económica y nivel de vida del deudor y de los acreedores alimenticios, así como las circunstancias especiales del caso, fijará la pensión con base en el salario mínimo vigente de la zona. Que cuando se pida la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales por una institución oficial, dedicada a la protección de la familia, o a la asistencia pública, se presumirán como ciertos salvo prueba en contrario, los dictámenes y documentos por ellas elaborados que se acompañen a la solicitud correspondiente.

Por otra parte, se prevé que satisfechos tales requisitos el decretará de plano la pensión de alimentos provisionales, fijando la suma, porcentaje o salarios mínimos en que deben consistir la pensión y mandará abonarlos, por mensualidades anticipadas, mientras se resuelve en definitiva y que cuando de manera inmediata se debe requerir al que debe cubrirlos por el pago de la primera mensualidad, y si no lo verifica en el acto de la diligencia, se procederá a embargarle bienes bastantes a cubrir su importe. Sobre el tema específico se ha cuestionado si este procedimiento es contrario a la Constitución por no ser oído dentro del trámite precautorio el deudor alimentario, sin embargo se ha interpretado que la legislación establece la forma de dictar con urgencia medidas para fijar una pensión alimenticia provisional, simplemente precautoria y fuera de juicio, sin que la resolución que la establezca sea definitiva ni de ejecución irreparable, la interlocutoria que decreta la pensión de alimentos provisionales no puede dictarse sino cuando quien la exige, haya acreditado el derecho a recibirlos previamente, ofreciendo el documento con el cual se justifique la obligación de dar alimentos, es claro que se está frente a normas jurídicas análogas a las que regulan las providencias preparatorias, las precautorias y aun las ejecutivas, en que para decretarlas no se oye previamente al deudor y que, no obstante esta circunstancia, no son inconstitucionales porque se le oye en el juicio y que la petición de alimentos provisionales se basa sustancialmente en la necesidad ineludible e inaplazable de obtener los alimentos; que como consecuencia, no son anticonstitucionales<sup>115</sup> las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco relativas a los juicios sobre alimentos y al procedimiento sobre alimentos provisionales.

---

<sup>115</sup> [J] IV, Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro: 272930, Cuarta Parte, Civil, p. 34. Alimentos provisionales. El procedimiento para obtenerlos no es anticonstitucional (legislaciones de Chiapas y de Jalisco).

Finalmente sobre el trámite de alimentos provisionales, se establece que hecho el embargo, se emplazará en forma al demandado para que conteste la demanda dentro del término de cinco días y seguirá el juicio por los demás trámites.

Aunque el trámite resulta relativamente sencillo, debemos de recordar que se debe acreditar y establecer en la interlocutoria que los decreta, distintos aspectos jurídicos relacionados con el tema, por ello es necesario atender a lo previsto en los artículos 432, 433, 434, 442 y correlativos de la Ley Civil del Estado de Jalisco, se debe considerar que los alimentos comprenden un deber recíproco, son personales e intrasmisibles, corriendo dicha obligación a cargo de los padres hasta que sus hijos alcancen la mayoría de edad o llegando a ella sean incapaces, y para fijar la suma o porcentaje que debe constituir la pensión de alimentos provisionales, debe acreditarse los siguientes elementos:

- a) La relación de parentesco entre acreedor y deudor alimentista;
- b) La urgencia y necesidad de la medida; y,
- c) Que se justifique aunque sea de manera aproximada, cuando menos, la posibilidad del deudor alimentista.

Sobre el primero de dichos elementos, quien lo peticiona debe estar legitimada en términos de los artículos 433, 434 y 446 fracción I y II de la Ley Sustantiva Civil para el Estado, o sea que quien comparece a reclamar el aseguramiento de alimentos provisionales, sea el cónyuge por su propio derecho y en representación legal del o los menores que fungen como acreedores alimentarios sujetos a patria potestad, lo que se justifica con las copias certificadas del acta de matrimonio y de nacimiento de la prole.

En cuanto a la necesidad de recibir alimentos, ha expuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias, que comprende un

derecho de naturaleza continúa y surgen por el simple hecho de existir la vida humana, en esas condiciones se ha considerado que esta necesidad se presume con la presentación de la demanda en donde quien los solicita de manera provisional, pretende que el Juez únicamente fije la pensión a que tienen derecho los acreedores para cubrir sus necesidades de subsistencia en los términos que señala el numeral 439 del código civil en cita; sin que ello implique que la obligación correlativa esté condicionada solamente a los casos de urgencia, o sea, que en el caso de alimentos, corresponde la acreditación al acreedor alimenticio respecto del primero y el tercer elemento, el derecho que tiene a percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para proporcionarlos, en tanto que el segundo de ellos relativo a la necesidad que haya de los alimentos, goza de esa presunción a su favor, ya que dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba corresponde al deudor<sup>116</sup>.

El concepto de la urgencia se justifica por lo general con prueba testimonial, queda acreditada con el desahogo de la prueba testimonial; cosa diversa ocurre con la posibilidad económica del deudor, pues si este labora en una empresa u dependencia oficial, se puede girar oficio para que se informe lo que percibe de salario, empero, cuando es trabajador por su cuenta, la situación se complica pues no en pocas ocasiones resulta difícil justificar la posibilidad económica del deudor, en este sentido, por ser los alimentos una cuestión de orden público que protege los derechos de la niñez, debe fijar una cifra determinada de dinero por concepto de alimentos provisionales, empero debe motivar el porqué llegó a tal determinación, o sea, establecer de dónde obtuvo los elementos que lo llevaron a obtener la conclusión de que

---

<sup>116</sup> [J] VI.3o.C. J/32, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 192661, Civil, diciembre de 1999, p. 641. Alimentos, carga de la prueba (legislación del estado de Puebla).

esa suma es proporcional a las necesidades de los acreedores y posibilidad del deudor, y con ella es factible cubrir los rubros atinentes a ese concepto, ya que aunque no obre prueba al respecto, está obligado a motivar su resolución, una posibilidad poco usada, pero no por ello, incorrecta, es el recurrir a recabar los datos estadísticos de la canasta básica necesaria para cubrir los rubros de alimentos, educación, cuidados médicos, transporte y esparcimiento dentro del contexto familiar que los rodea, etcétera; de conformidad con el artículo 26, apartado B, primer párrafo, de la Constitución del país, por cuanto dispone que el Estado cuenta con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales y de uso obligatorio para la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, en los términos establecidos por la ley; lo que le da el soporte oficial a la argumentación respectiva<sup>117</sup>. En el entendido que los alimentos para los menores es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone como uno de los deberes del Estado es el de asegurar que los menores de edad y los incapaces tengan un acceso completo y eficaz a la impartición de la justicia, con lo que se busca evitar que dichas personas vulnerables queden indefensas ante las deficiencias en las que durante el juicio incurran sus representantes, que por lo tanto en los procesos judiciales en donde se encuentran de por medio intereses de menores o de incapaces, se hace más patente la necesidad de contar con una adecuada demostración de los hechos materia del debate y en tales casos surge la potestad probatoria del juzgador para allegarse y ordenar de manera oficiosa todos los medios de convicción necesarios para decidir objetivamente el negocio, o sea el juzgador no solo puede, sino que para dar cumplimiento a la norma e incorporarla

---

<sup>117</sup> [J] III.2o.C.152 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Novena Época, Registro: 168393, Civil, diciembre de 2008, p. 968. Alimentos. Cuando el juzgador no cuente con dato alguno para poder fijar una suma determinada por tal concepto, está obligado a recabar datos estadísticos referidos a la canasta básica, del Sistema Nacional De Información Estadística y Geográfica, a que alude el artículo 26, apartado B, primer párrafo, de la Constitución Federal.

eficazmente a la tarea de la impartición de justicia, debe entenderse que el ejercicio de la facultad aludida es obligatorio para resolver las cuestiones de índole sustantiva cuando en la litis se encuentran derechos irrenunciables de los menores de edad o de los incapaces<sup>118</sup>.

Una vez determinado lo anterior el juzgador debe fijar la pensión provisional de alimentos, ya sea en salarios mínimos, porcentaje de percepciones o cantidad líquida mensual, establecer que la cantidad que se fija debe abonarse por mensualidades anticipada, mientras se resuelve en definitiva, bajo el sentido de que la misma puede sufrir incremento o disminución al momento de dictarse el fallo final en este juicio, tal como lo dispone el artículo 695 del Enjuiciamiento Civil, la resolución que fija alimentos provisionales, sólo tienen vigencia durante la tramitación del juicio y lo decidido al respecto no puede ser abordado en la decisión definitiva, pues en esta solo debe ocuparse sobre la procedencia de la acción de alimentos a partir de su dictado, pero no sobre las pensiones alimenticias provisionales, cuya existencia descansa en que se decretan para que los acreedores subsistan mientras se tramita el juicio, esto es, que por su naturaleza -uso y consumo-, es patente que una vez satisfechos los alimentos provisionales en la forma ordenada, no son factibles de recuperación, dicho en otras palabras, los efectos de los alimentos provisionales no se destruyen por el hecho de obtener una sentencia definitiva que absuelva al reo o bien disminuya la cantidad en el concepto de alimentos definitivos, ya que las cantidades que se paguen por alimentos definitivos se destinan a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores, lo que significa que son consumidas y no son

---

<sup>118</sup> [J] XIX.2o.A.C. J/19, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Novena Época, Registro: 170236, Civil, febrero de 2008, p. 2061. Pensión alimenticia. La facultad del juzgador para allegarse de pruebas, tratándose de menores de edad o incapaces, es de ejercicio obligatorio si no se cuenta con las suficientes para fijar la definitiva (legislación del estado de Tamaulipas).

materia de reintegración<sup>119</sup>; en el entendido que si la pensión provisional no fue cubierta dentro de la etapa de juicio por el obligado y se impone una condena definitiva en el fallo, el acreedor tendrá derecho a solicitar en el periodo de ejecución de sentencia, tanto el pago de lo adeudado a partir de que el fallo sea ejecutable, como el monto de aquellas pensiones adeudadas, vencidas y no pagadas, aun cuando se refieran a las fijadas de manera provisional, pues se concluye que todas las pensiones generadas y no cubiertas durante el juicio están comprendidas en la condena impuesta y, por tanto, pueden ser objeto de liquidación y reclamo,<sup>120</sup> aun en el supuesto que la sentencia definitiva nada resuelva sobre los alimentos provisionales anteriormente fijados.

## **2.6 Efectos de la interposición de una demanda de divorcio.**

Como efectos generales de la interposición de una demanda, cualquiera que sea su naturaleza, Tarigo los resume de la siguiente manera<sup>121</sup>:

- *Interrumpe el curso de la prescripción:* Aunque la demanda contenga defectos, la autoridad sea incompetente o el actor carezca de capacidad procesal.

---

<sup>119</sup> [J] I.3o.C.536 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Novena Época, Registro: 175689, Civil, marzo de 2006, p. 1941. Alimentos provisionales. Constituye una protección urgente otorgada por el legislador, a los integrantes de la familia, respecto de la cual no procede la restitución de los pagos hechos por este concepto pues no se está ante un enriquecimiento ilegal.

<sup>120</sup> [J] 1a./J. 53/2006, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, Novena Época, Registro: 174054, Civil, octubre de 2006, p. 205. Pensión alimenticia provisional. No cesa con el solo dictado de la sentencia con la que culmina el juicio de alimentos, si el juez reserva para el periodo de ejecución la cuantificación definitiva (legislación del estado de Aguascalientes).

<sup>121</sup> Tarigo, Enrique E. *Derecho de Familia y Familia*, Uruguay, s.e., 1993, vol. I, *passim*.



- *Determina la pérdida provisoria de la posibilidad de entablar juicio petitorio:* cuando se deduce pretensión posesoria.
- *Determina que la autoridad que recibe la instancia y los letrados que la suscriben no puedan comprar la cosa litigiosa.*
- *Determina que la autoridad que recibe la instancia no pueda ser cesionaria del derecho litigioso.*

Desde el momento mismo en el cual el actor presenta su demanda a la autoridad, se producen los siguientes efectos:

***Procesales:***

- *Fija respecto del actor la competencia subjetiva de la autoridad:* Que ya no podrá ser recusada sino por causa sobreviviente.
- *Efectiviza una prorroga o una propuesta de prórroga de competencia territorial:* Cuando ello está autorizado en la ley.
- *Genera en la autoridad el deber de proveer la instancia:* (admitiéndola o rechazándola) y lo coloca ante el deber de pronunciarse acerca de su competencia.

**Efecto procesal de la admisión de la demanda por la autoridad:**

*Crea el estado de litispendencia.*

**Efectos de la notificación de la demanda:**

***Sustanciales:***

- *Constituye en mora al demandado:* Si es que no lo estaba desde antes respecto de obligaciones que carecen de plazo convenido pero que resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de aquellas y respecto de los frutos percibidos por el poseedor de buena fe.
- *Determina la elección del actor respecto de la prestación debida:* Por virtud de obligaciones alternativas.

- *Extingue el derecho de reclamar útilmente una de las posibles pretensiones:* Contempladas en el código civil, por virtud de la elección que acuerda el código civil.

***Procesales:***

- *Extingue el derecho del actor de desistir unilateralmente del proceso:* A partir de la notificación, podrá hacerlo solo con la previa conformidad (expresa o tacita) de demandado.
- *Extingue el derecho del actor a modificar su pretensión.*

En lo particular y respecto del tema materia de la investigación, los efectos particulares de una demanda de divorcio se encuentran consignados en los artículos 331, 407, 414, 416 del código civil, el primero de los dispositivos invocados señala que la sociedad se suspende en los casos de divorcio, cuando así se solicite al inicio del procedimiento respectivo, sobre esto diremos que pocas veces se solicita por la actora ya sea principal o reconvenicional, la suspensión de la sociedad legal o conyugal, según corresponda, lo cual como el propio dispositivo lo indica debe ser materia de solicitud del interesado.

En tanto que en el precepto 407, se dispone que la demanda de divorcio surte los siguientes efectos:

- I. Cesa la presunción de convivencia conyugal;
- II. Quedan revocados los poderes que cualesquiera de los cónyuges hubiese otorgado al otro, sin que ésta disposición afecte derechos de terceros. Dentro de esta revocación, se entiende cualquier autorización para disponer de bienes pertenecientes a los cónyuges o a los de su sociedad matrimonial;

III. Separar a los cónyuges en todo caso, debiéndose decretar por el juez quién habitará el domicilio conyugal y asimismo, previo inventario, los bienes que continuarán en éste y los que se ha de llevar el otro cónyuge; y

IV. Señalar y asegurar por el juez y dictar en su caso las medidas precautorias que correspondan, cuando la mujer quede encinta, así como poner a los hijos al cuidado de persona idónea.

Estos puntos concretos de los efectos de la admisión de una demanda de divorcio por lo general no son materia de acuerdo en el auto admisorio, porque pocas veces se solicita en tales términos y por que los juzgadores son omisos en ello, mas no implica que por no decretarlo no surta sus efectos; por su contenido, los dos primeros de ellos, no requieren de declaración alguna, empero, el tercero y cuarto si debería ser objeto de acuerdo judicial aunque no se peticionara por los interesados. Al respecto debemos de considerar que la omisión del juzgador resolver sobre estos efectos de la demanda, se debe a que históricamente se ha considerado que en el derecho civil los procedimientos son a petición de parte y no de manera oficiosa. Otros motivos son el exceso de trabajo en los tribunales del orden familiar y que por lo general la parte actora promueve, ya sea como medio preparatorio o en el escrito de demanda el trámite de separación de personas, fundando su pretensión en la normatividad que para el caso señala el código procesal civil y que con antelación dimos cuenta.

Del contenido del artículo en estudio, tenemos que mientras que se decreta el divorcio, el juez autorizará la separación de los cónyuges de una manera provisional y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos a quienes haya obligación de dar alimentos, que en los casos en que exista violencia o peligro para los integrantes de la familia, el juez dictará las medidas adicionales necesarias que garanticen su seguridad

integral. Sobre esto podemos decir que reitera lo relativo a la separación de los cónyuges de forma provisional que fue materia de análisis en párrafos anteriores.

Sobre las medidas alimentarias que deben atenderse, con antelación en este capítulo se efectuó un recorrido sobre el trámite y aspectos esenciales de los alimentos provisionales y; respecto de las medidas necesarias en caso de violencia o peligro para los integrantes del núcleo familiar, tenemos que ponderar que en la actualidad los formalismos en materia de familia y el derecho de petición, se han modificado sustancialmente a virtud de los lineamientos del Poder Judicial de la Federación en cuanto a que en las contiendas que se vean involucrados los derechos de la infancia, el juzgador no solo puede sino que debe de suplir la deficiencia del planteamiento y ordenar lo que corresponda en protección de tales derechos, como es el de designar tutor que represente los derechos de los menores, dar vista al agente social, tener charla o entrevista con los menores, decretar de oficio las pruebas que estime pertinentes para allegarse de medios que le ayuden a resolver en forma adecuada el problema planteado sobre derechos de menores e incapacitados, por lo que es claro que el juez no solo puede sino que debe dictar las medidas cautelares o provisionales contempladas en la legislación civil, y abre la posibilidad de decretar como tales la restricción o prohibición de ir a lugar determinado, o bien de cualesquiera de las órdenes de protección de emergencia contempladas en la legislación penal.

En cuanto al último de los preceptos invocados, el 416, en este se dispone que antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, el juez podrá resolver, a petición de los abuelos, tíos o hermanos mayores, cualquier providencia que se considere benéfica a los menores, aspecto al que le son igualmente aplicables los argumentos vertidos.

De lo analizado podemos concluir que los efectos de la presentación de la demanda de divorcio, surten los siguientes efectos:

- Suspensión de la sociedad, cuando se solicite al inicio del procedimiento respectivo.
- Separación de los cónyuges de una manera provisional. Cuyos aspectos genéricos se han indicado con antelación.
- Dictar medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos a quienes haya obligación de dar alimentos.
- Cuando exista violencia o peligro para los integrantes de la familia, el juez dictará las medidas adicionales necesarias que garanticen su seguridad integral.
- Cesa la presunción de convivencia conyugal.
- Quedan revocados los poderes que cualesquiera de los cónyuges hubiese otorgado al otro, sin que ésta disposición afecte derechos de terceros.
- Separar a los cónyuges en todo caso, decretando quién habitará el domicilio conyugal y asimismo, previo inventario, los bienes que continuarán en éste y los que se ha de llevar el otro cónyuge.
- Emitir las medidas precautorias que correspondan, cuando la mujer quede encinta.
- Custodia de los hijos al cuidado de persona idónea.

## 2.7 Allanamiento en una demanda de divorcio.

Sobre el allanamiento de la demanda Gómez Lara<sup>122</sup>, refiere: “...*El allanamiento es, según lo ha explicado claramente Alcalá Zamora, una figura autocompositiva unilateral de solución de los litigios. El allanamiento como forma autocompositiva se caracteriza porque la parte resistente del litigio despliega una actividad tendiente a resolver su conflicto. La actividad que despliega el resistente en el litigio, en este caso radica en consentir el sacrificio del interés ajeno. Así pues, como figura autocompositiva, el allanamiento implica una actividad que realiza el demandado en el proceso, actividad por la cual da solución al conflicto en el que era parte resistente y se convierte en parte sometida. Es conveniente dejar asentado que el allanamiento implica una actividad que realiza el demandado en el proceso, actividad por la cual da solución al conflicto en el que era parte resistente y se convierte en parte sometida. Es conveniente dejar asentado que el allanamiento como actitud de sometimiento no siempre implica el reconocimiento del demandado respecto a la fundamentación de la pretensión del actor.*”

Es común que en algunos procesos de divorcio contencioso la parte reo, ya emplazada comparece a dar contestación a la demanda en la cual indica que se allana a la misma, empero, deben de considerarse ciertas situaciones jurídicas para estar en posibilidad de resolver en forma ajustada a derecho.

En el caso de que se manifieste que se allana a la demanda, pero del resto del escrito se aprecia que tan solo expresa su conformidad con el divorcio, empero niega los hechos relativos a las causales, o bien, solo se

---

<sup>122</sup> Gómez Lara, Cipriano, *op. cit.*, nota 29, p. 61.

allana al divorcio mas opone excepciones y defensas por lo que corresponde al resto de las prestaciones reclamadas, o resulta que se allana a unas de las causales pero no a otras, no debemos de olvidar que cuando se trata de un divorcio necesario, las causales que dan origen a éste son autónomas e independientes una de otra u otras<sup>123</sup>; bajo cualquiera de tales circunstancias se evidencia que ello no implica un allanamiento total de la demanda, y por ende<sup>124</sup>, el juicio tendrá que proseguir por las etapas respectiva hasta la resolución definitiva, en la cual, en todo caso el juzgador deberá de considerar el valor y la eficacia jurídica que podrá tener lo confesado en la contestación.

Por regla general acorde al lo ordenado por el artículo 282 del código procesal, confesada la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la contestación de ella, previa citación, se pronunciará sentencia, también se especifica que si las cuestiones controvertidas fueren puramente de derecho y no de hecho, se pondrán los autos a disposición de las partes para que aleguen, y oportunamente se pronunciará la sentencia, lo que a través del sentido literal de la ley, no tendría razón de una interpretación diversa, sin embargo tratándose de divorcio el allanamiento de la demanda, por jurisprudencia con registro número, 173318, se determino que *“...de aceptarse que basta el allanamiento y el reconocimiento de los hechos de la demanda para que procediera la disolución del vínculo matrimonial en un juicio de divorcio necesario, implicaría un fraude a la ley, toda vez que si para uno voluntario se deben satisfacer determinados requisitos (ratificación de la solicitud y una junta en la que el juzgador trata de persuadir a los cónyuges de que se retracten), sería entonces más sencillo promover un divorcio*

---

<sup>123</sup> [J] V, Segunda Parte-1, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, enero a junio de 1990, p. 189. Divorcio necesario. Las causales que le dan origen son autónomas e independientes.

<sup>124</sup> [J] XVII.1o.3 C, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, septiembre de 1994, t. XIV, p. 255. Allanamiento y contestación a la demanda en juicio de divorcio. Debe prevalecer esta.

*contencioso, pues sería suficiente que el demandado se allanara para que se pronunciara la sentencia que decretara la disolución sin las exigencias previstas para el voluntario, lo que no es posible debido a que de no seguirse las formalidades adjetivas que lo rigen, esto es, las establecidas en los artículos 764 al 775 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y contravenir, por ende, las que son aplicables, prescritas en el título sexto del citado ordenamiento, se violarían las leyes del procedimiento que son de orden público e irrenunciables...”,* sin embargo dicho criterio aunque permaneció por décadas, fue superado por tesis de contradicción, en la cual se interpreta que el allanamiento constituye una actitud autocompositiva que implica el sometimiento incondicional por parte de quien resiste en el proceso a las pretensiones del accionante, en relación con derechos renunciables, que lleva implícita la admisión de la exactitud de los hechos, por lo que su efecto lógico es eximir de la prueba y, por regla general, que el juez tenga que aceptarlos sin exigir probanza directa; que el allanamiento no presupone necesariamente el reconocimiento de la procedencia de la acción intentada, pues como sólo puede referirse a derechos privados renunciables, no es admisible tratándose de derechos de terceros, irrenunciables o de cuestiones de orden público o que puedan fundar una condena a prestación imposible o contraria a las buenas costumbres; o cuando el juez disponga de elementos suficientes para considerar que está en presencia de un proceso simulado o resulte un hecho impeditivo o extintivo que pueda declararse de oficio; que en los procesos de divorcio, del solo allanamiento a una acción de divorcio necesario no puede deducirse el consentimiento de los cónyuges en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial ni la intención de cometer un fraude a la ley, sino que éste debe hallarse, en su caso, en pruebas que lo tornen evidente y que demuestren la deliberada intención de los cónyuges de eludir la aplicación de las reglas del divorcio voluntario; que bajo tal sentido se determina que en los juicios de divorcio necesario el allanamiento del demandado releva al accionante de la carga de la prueba respecto de los hechos fundatorios de la pretensión, siempre que no se refiera a derechos de



terceros o irrenunciables, y no sea evidente un fraude a la ley; de ahí que dicho allanamiento será suficiente para decretar el divorcio, máxime que el citado artículo 282 no establece alguna excepción en materia de pruebas para los juicios de divorcio<sup>125</sup>.

De la misma manera el escrito de allanamiento de la demanda debe de ser ratificado en términos de lo previsto por el numeral 129 de la ley procesal que en su último párrafo dispone que todo allanamiento, convenio o desistimiento deberá formularse por escrito debidamente ratificado, bien sea por el tribunal del conocimiento del negocio o ante fedatario público, por lo que solo en tales términos el allanamiento podría surtir los efectos de confesión en cuanto a los hechos y causales que se encuentren debidamente planteadas<sup>126</sup>, el requisito de la ratificación tiene como finalidad tener la certeza de que el reo está conforme con la demanda entablada en su contra y la confiesa en su totalidad,

La experiencia, genera la duda de un posible fraude a la ley, que nos permite dudar del comportamiento y verdadera intención de las partes, por el conocimiento directo de casos que corresponden a un fraude a la ley; dicho en otras palabras, una persona se da cuenta que está divorciada y que fue ella quien entabló la demanda de divorcio sin tener la menor idea de tal juicio, cuando comparece a la revisión del expediente se encuentra con desagrado que efectivamente, en forma aparente fue ella quien demandó

---

<sup>125</sup> [J] 1a./J. 118/2009, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165038, Civil, marzo de 2010, p. 179. Divorcio necesario. El allanamiento del demandado releva al accionante de la carga de la prueba respecto de los hechos fundatorios de la pretensión, siempre que no se refiera a derechos de terceros o irrenunciables y no sea evidente un fraude a la ley (legislación procesal civil del estado de Jalisco).

<sup>126</sup> [J] VI, Segunda Parte-1, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, julio a diciembre de 1990, p. 142. Divorcio, allanamiento al, debe ratificarse para que produzca efectos de confesión.

pero sus firmas son falsas, lo que en todo caso la deja en situación de demandar la nulidad de dicho proceso; esto se presenta porque en un juicio de divorcio, si el reo se allana, es él quien se debe presentar ante fedatario o la autoridad judicial a ratificar el escrito de allanamiento, en tanto que la parte actora no tiene que comparecer personalmente al tribunal, en casos de esta índole, la falta de escrúpulos tanto del abogado como del interesado, trastocan el principio de buena fe y a través de una conducta ilícita, se auto demanda, se allana y obtiene el divorcio de manera fácil pero delictiva. En principio la duda surge bajo el supuesto de que si la parte demandada se allana a la demanda y nada discute sobre las prestaciones que le son reclamadas, válidamente puede considerarse que ambos pudieron acogerse al beneficio del divorcio por mutuo, mas no ejercitar una demanda contenciosa; la solución para evitar un fraude a la ley y tener total certidumbre jurídica de lo que realmente acontece, es modificar la ley procesal civil y exigir que cuando se presente este supuesto, ambas partes deben de ratificar su postura ante la presencia judicial, esto evitara, en medida de lo posible, las suplantación de personas y la existencia de juicios simulados.

El allanamiento total trae consigo otros beneficios, como lo es la liberación de costas, pues el numeral 143 de la ley procesal civil señala que se exceptúan del pago de costas entre otros supuestos, cuando entablada una acción y contestada la demanda, el demandado se allane a cumplir lo reclamado; además de la norma que dispone que cuando entablada la demanda, la parte reo al ser requerido, cumpla la obligación, las costas sólo comprenderán los honorarios del abogado y los gastos que el demandante justifique haber erogado hasta el acto en que el demandado se allane al cumplimiento.

## **2.8 Caducidad de las causales.**

Como se verá en los capítulos quinto y sexto, la gran mayoría de las causales de divorcio caducan si no se ejerce la acción de divorcio en el transcurso del término de seis meses a que se refiere el artículo 410 del Código Civil del Estado, que dispone que el divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él y dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda, salvo que se funde en causales de tracto sucesivo; que en tratándose de las causales previstas en las fracciones VII, XII y XIX del artículo 404, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges.

Lo que da lugar legalmente a la caducidad de la acción de divorcio necesario es que opera en las causas que no son de tracto sucesivo, aspecto que debe ser materia de estudio oficioso por el juzgador al constituir una condición para el ejercicio de la acción. El término fijado por la ley para el ejercicio de la acción de divorcio, es un término de caducidad y no de prescripción. Ambas son formas de extinción de derechos que se producen por el transcurso del tiempo, pero se diferencian, fundamentalmente, en que la primera es condición para el ejercicio de la acción, por lo que debe estudiarse de oficio; en cambio, la segunda sólo puede analizarse cuando se hace valer por parte legítima. En materia de divorcio, dado su carácter excepcional porque pone fin al matrimonio, el término señalado por la ley para el ejercicio de la acción debe estimarse como un término de caducidad, porque si la acción de divorcio estuviera sujeta a prescripción, su término no correría entre consortes y la amenaza del cónyuge con derecho a solicitarlo sería constante, afectándose con la incertidumbre, todos los derechos y obligaciones que forman el estado civil del matrimonio, intereses que dejan de ser de orden privado, y pasan a afectar la estabilidad de la familia y el orden público. La ley señala término para el ejercicio de la acción de divorcio cuando la causal es

un hecho, pero no cuando se trata de una causal que implica una situación permanente porque en este último caso la causal, por su propia naturaleza, es de tracto sucesivo y de realización continua, y puede ejercitarse la acción en cualquier tiempo, si los hechos que la motivan subsisten cuando se ejercita.

Al respecto y para fin de poder distinguir cual o cuales de las causales de divorcio están sujetas a la caducidad, debe atenderse a la naturaleza de la causal que se trate, por ende, distinguir cuando un hecho es de tracto sucesivo frente a las denominadas causales momentáneas. El tracto sucesivo se presenta cuando el evento o acto se genera día a día, como ejemplo de ello, es la negativa a proporcionar alimentos a sus acreedores, ya que no puede correr el término de caducidad, tomando en cuenta los primeros actos que originaron esa causa, en los que se reincide en la misma falta; al igual que la del abandono injustificado del domicilio familiar por cualquiera de los consortes durante seis meses consecutivos, pues en ella, día a día se comete un acto por parte de uno de los cónyuges que da motivo al divorcio; en cuanto a la de incompatibilidad de caracteres, es de tracto sucesivo, pues se refiere a una situación que se da cuando los cónyuges hacen vida en común, sin embargo no debemos perder de vista que pierde este carácter cuando los esposos quedan separados, por lo que a partir de ese momento, se inicia el período de caducidad de la acción<sup>127</sup>; al igual que las relativas a padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años y la de padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente, la de los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo

---

<sup>127</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, Registro: 220141.n, Civil, marzo de 1992, p. 187. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de, cómputo del término para la caducidad de la acción. (legislación del estado de Tlaxcala).

motivo de desavenencia conyugal. El punto total sobre una causal de tracto sucesivo es que del primer o primeros actos que origina dicha causal, continúan otros que son reincidentes en la configuración de la misma.

En tanto que las causales momentáneas, son aquellas de realización instantánea que se consuman en el momento mismo en que ejecutan, como puede ser cuando se expresan las injurias y amenazas o en que se dan los malos tratos<sup>128</sup>; al igual se debe atender a la data en que se presentó la propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa, o cuanto se genere la incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito; o bien cuando se enteró de la acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión.

Es este un motivo más de índole procesal y sustantivo, por el cual en la demanda de divorcio deben de establecerse con claridad y precisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se supone aconteció el hecho o hechos que motivan la acción de divorcio, y dependerá de la naturaleza de la causal que sea un hecho directo, o bien que se entere por terceros, por lo que es menester indicar cuando se dio cuenta de ello, para establecer si en ella operó o no la caducidad de la acción, sin que de manera alguna se prolonguen en el tiempo, por lo que, caducan si no se hacen valer dentro del término legal.

La infidelidad sexual o adulterio, puede tener las dos connotaciones, o sea presentarse como un hecho aislado o bien de tracto sucesivo que se presenta cuando se configura una situación de carácter permanente y

---

<sup>128</sup> [J] VI.2o. J/226, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 59, Octava Época, Registro: 217859, Civil, noviembre de 1992, p. 69. Divorcio. Injurias, amenazas y malos tratos. Caducidad.

continuo, ya que en este supuesto, por su propia naturaleza, la causal en cuestión se torna de tracto sucesivo y de realización permanente<sup>129</sup>, por lo que en este caso la acción puede hacerse valer en cualquier tiempo.

## **2.9 Conclusión de un proceso de divorcio contencioso mediante convenio.**

En un juicio contencioso de divorcio, la postura general es que no debe de concluir mediante convenio, por que se presta a un fraude a la ley y que se trastocan diversas prohibiciones legales<sup>130</sup>. Se interpreta que el convenio celebrado en la audiencia conciliatoria celebrada durante la tramitación de un juicio de divorcio necesario, que satisface los requisitos de aquel que se presenta tratándose del divorcio por mutuo consentimiento, no puede provocar que se decrete la disolución ya que corresponde a un fraude a la ley, pues el objetivo de reunir a las partes para la celebración de dicha audiencia conciliatoria en los juicios contenciosos es que éstas lleguen a un acuerdo para poner fin a la contienda y se eleve a la categoría de sentencia ejecutoriada, según lo normado por el artículo 282 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en tanto que la finalidad de la celebración de la audiencia a que se convoca en los divorcios voluntarios es diversa pues en ella se pretende restablecer la armonía de los cónyuges con el propósito

---

<sup>129</sup> [J] XV, Tesis Aislada, 151-156 Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Registro: 250557, Civil, p. 75. Genealogía: Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, p. 338. Divorcio, adulterio como causal de caducidad de la acción.

<sup>130</sup> [J] III.5o.C.111 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Novena Época, Registro: 173315, Civil, febrero de 2007, p. 1700. Divorcio. Se cataloga como fraude a la ley que los consortes promuevan un juicio contencioso de esa naturaleza y luego decidan de motu proprio que concluya como voluntario (legislación del estado de Jalisco).

de que desistan de su petición de divorciarse, o sea concluir el juicio sin sentencia que resuelva el fondo, mientras en los juicios contenciosos sí se decide la materia sobre la que versa el proceso aunque con las condiciones establecidas por las partes, por lo que no resultaba válido que los cónyuges promuevan un juicio contencioso de divorcio y luego pretendan transformarlo en voluntario, puesto que para ello, deben sujetarse a las reglas previstas en el enjuiciamiento civil del Estado; este criterio generó que las Salas del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en la revisión de oficio respectiva o bien por apelación, determinara que se violaban las reglas del procedimiento y por ende la determinación de dejar insubsistente la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento hasta la fecha de la audiencia conciliatoria y se continuara el trámite por sus fases procesales respectivas hasta llegar a sentencia, esto último provocó otra interpretación de los tribunales federales del Tercer Circuito, en cuanto a que si bien en términos del artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el tribunal de alzada cuando advierta que se violaron las reglas del procedimiento, o que el Juez de primer grado incurrió en alguna omisión que dejara sin defensa al recurrente, o influyera en la sentencia que deba dictarse, o si alguna de las partes indebidamente no ha sido oída, debe revocar la resolución recurrida y mandar reponer el procedimiento; empero que tal facultad no es absoluta del *ad quem*<sup>131</sup>, sino que se limita a que se actualicen dos hipótesis: a) Que advierta tal violación a través de los agravios expresados y b) Que no se trate de actos consentidos. Por lo que si en un juicio de divorcio promovido como contencioso, que el Juez lo varía a mutuo consentimiento, y las partes consienten tal determinación, y al resolver el recurso de apelación el tribunal de alzada hace una revisión oficiosa del procedimiento y ordena la reposición

---

<sup>131</sup> En el derecho procesal la expresión se utiliza comúnmente en el lenguaje forense para indicar al juez o tribunal de alzada, ante quien se interpone un recurso, de la resolución dictada por un juez inferior y distinto (*a quo*). Cisneros Farías, Germán, *Argumentación y Discurso Jurídico*, México, Trillas, 2010, p. 27.

del mismo para que se deje insubsistente el trámite del mutuo consentimiento que se llevó a cabo por cuerda separada, y se siga por sus etapas procesales el trámite contencioso, tal actuación resulta ilegal, porque si esa cuestión no fue invocada en los agravios y, además, la violación fue consentida por los contendientes, por haber comparecido a ratificar un convenio que celebraron y en virtud del cual se varió la naturaleza del juicio natural, además de haber acudido a la audiencia de avenimiento, es clara su conformidad con que el procedimiento se llevara a cabo de tal forma, que por tal motivo el tribunal no está facultado para aplicar el dispositivo legal mencionado. Lo que en todo caso implicaría que resultaría válido que en un juicio contencioso de divorcio, las partes pueden concluirlo mediante convenio.

Empero, debemos considerar que al igual que con la figura del allanamiento –según se analizó con antelación- se superen interpretaciones rígidas que no conducen a una solución práctica del conflicto y si en cambio se atiende a una serie de factores y figuras jurídicas que se considera que si posibilitan la conclusión de un juicio de esta naturaleza a través de un convenio que celebren los contendientes con la finalidad de concluir el proceso y solucionar las diferencias entre ellos surgidas, pues en primer lugar este convenio se presenta en la audiencia conciliatoria, ante la autoridad judicial o bien ya entablada la litis, en este sentido se infiere de manera nítida que los contendientes han decidido ponerse de acuerdo y concluir un proceso que la mayoría de la veces es desgastante en todo sentido, por lo que difícilmente pudiera darse una suplantación de personas o un fraude jurídico, de la misma manera que en el allanamiento, en la celebración de un convenio para finiquitar el proceso de divorcio contencioso cuyo objetivo primordial es el que se declare la disolución del vínculo matrimonial que une a los contendientes, si se refiere a una serie de derechos privados renunciables, pero debe de cuidarse que en ellos no se involucren derechos de terceros, irrenunciables o de cuestiones de orden público o que puedan fundar una condena a prestación imposible o contraria a las buenas costumbres; por lo



que en todo caso el juzgador debe de analizar de manera tal el contenido del convenio y establecer si de él se desprenden elementos suficientes para considerar que está en presencia de un proceso simulado o sea que se aprecien factores que tornaron evidente la deliberada intención de los cónyuges de eludir la aplicación de la ley, empero, si el convenio es correcto y se ajusta a las normas jurídicas respectivas, se salvaguarden los derechos de la prole, si la hubiera, este sea suficiente para decretar el divorcio, y para ello se debe atender a los siguientes aspectos.

En nuestro sistema jurídico procesal, se tiene como principio general que las controversias sólo pueden concluir cuando se presente alguna de las situaciones previstas expresamente por la ley o que resulten claramente de su interpretación jurídica. La forma ordinaria y común que constituye la regla general corresponde al dictado o pronunciamiento de la sentencia definitiva, sin embargo existen otras formas o modos que se han denominado anormales o extraordinarios, y que se encuentran dispersos ya sea en la legislación procesal o en la ley sustantiva aplicable; ejemplo de ello son las figuras del desistimiento de la demanda o de la acción, la caducidad de la instancia, la decisión de una cuestión preliminar sustancial emitida antes de llegar a la fase procesal de emitir sentencia, como es, en la audiencia de conciliación; al igual que la transacción que se encuentra prevista en el Código Civil, o la reconciliación de los cónyuges o la muerte de alguno de ellos durante el juicio de divorcio, previstas en la ley civil<sup>132</sup>; de lo que se colige que un juicio puede concluir por cualquiera de los modos que se prevén en nuestra legislación, ya sea ordinario o extraordinario.

---

<sup>132</sup> [J] Tesis Aislada, Segunda Parte-2, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. III, Octava Época, Registro: 229642, Civil, enero a junio de 1989, p. 821. Terminación de los juicios civiles.

En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco se contemplan las reglas del juicio ordinario en el que debe tramitarse el juicio de divorcio, y también se encuentran diversas reglas procedimentales del divorcio por mutuo consentimiento en el que se llega al objetivo de la disolución del vínculo matrimonial por convenio presentado por las partes interesadas, y que por consecuencia uno y otro tienen caminos procesales distintos; sin embargo, esta situación no riñe ni se contrapone para que un juicio ordinario concluya bajo un convenio judicial en el que se contiene la voluntad expresa de las partes en conflicto, se dice lo anterior atento al contenido del numeral 282 bis de la ley en cita, cuyo objetivo principal es precisamente el que las partes contendientes lleguen a un acuerdo sobre sus diferencias y arriben a un convenio en el que concilien los intereses de ambos sin perjuicio de terceros; más aun, en los términos de lo dispuesto por el numeral 81 de la ley procesal en comento, puede el juzgador citar a una junta a las partes contendientes para procurar su avenimiento, lo que en sí implica lograr el que las partes en conflicto limen sus diferencias o resuelvan estas de la manera que mejor convenga a los intereses de ambos.

El Código Civil de la Entidad, prevé en sus artículos del 2633 al 2651, la figura de la transacción, definiéndola como un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura, la cual debe formalizarse, entre otros supuestos, cuando se refiera a una controversia presente y se trate de derechos reales o personales o de ambos a la vez, mediante ocurso presentado y ratificado ante la autoridad judicial que esté conociendo del negocio; por otra parte el artículo 2649, en forma clara señala que la transacción podrá tener por objeto: a) Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos respecto de ambas partes o de una de ellas, siempre y cuando guarden alguna relación con los derechos disputados o inciertos; b) Declarar o reconocer los derechos que sean objeto de las diferencias sobre las que la

transacción recaiga; y c) Establecer certidumbre en cuanto a derechos dudosos o inciertos, determinando en su caso sus alcances y efectos.

Si se llega a un convenio en el que se convenía sobre la disolución del vínculo matrimonial, no se está ante la prohibición de los artículos 80 y 2637 de la ley en cita, puesto que no se está transigiendo sobre el estado civil de las personas ni sobre la validez del matrimonio, (pues no es el caso de desconocer o reconocer una relación filial, ni tampoco el que se pone en tela de duda la validez del vínculo), sino que se celebra un convenio entre los interesados en relación con las reclamaciones y diferencias entre ambos surgidas, que destrabe sus diferencias y concilien sus intereses, en una consecuencia jurídica que dará un nuevo estatus a su estado civil en virtud de la disolución del vínculo jurídico del matrimonio que los une, pues ambos estarían de acuerdo en finalizarlo, por lo que tal consecuencia sí es factible de determinar o resolver mediante convenio entre los cónyuges, considerando que tanto la ley sustantiva en sus numerales 404 fracción XIX, 406 y correlativos, así como la adjetiva civil en sus artículos del 764 al 775 prevén el divorcio por mutuo consentimiento, mismo que se determina por convenio entre los consortes, por lo que una interpretación armónica de lo dispuestos por los fundamentos aludidos de los ordenamientos en cita, nos permite arribar a la conclusión de que en un juicio ordinario de divorcio necesario sí es factible el que las partes interesadas resuelvan sus diferencias a través de la voluntad expresa que emiten mediante el convenio que para ello presenten.

Si en el convenio se establece lo pertinente en cuanto a los alimentos entre los cónyuges y sus hijos, tampoco se estaría ante la presencia de ninguno de los supuestos de nulidad a que alude el dígito 2639 de la ley civil, pues en todo caso el punto materia del pacto debe ser en cuanto a que persista y se determine con claridad y precisión el derecho de recibir alimentos de los menores hijos de los interesados, la fijación de estos, sus incrementos, fecha y forma de pago y la manera de asegurarlos, a partir de la

formulación del convenio y en todo caso, si obra transacción que esta verse únicamente sobre las cantidades que ya fueren debidas por alimentos caídos pero no pagados por el deudor alimentario.

El convenio que se formule, ya sea en la audiencia conciliatoria o mediante escrito debidamente ratificado, cuya elevación a la categoría de cosa juzgada se solicita por los interesados, debe ser analizado por el juzgador quien puede y debe advertir si la transacción o convenio judicial sometido a su aprobación, se encuentra o no prohibido por la ley; si dicho convenio reúne o no la forma precisada por la ley procesal, si las partes contratantes tienen o no capacidad jurídica o autorización judicial para celebrarla, asimismo es necesario que vincule exclusivamente a las partes en conflicto y no rebase lo pedido por éstas, etcétera, todo ello atento al principio de congruencia. El convenio celebrado por las partes en una controversia judicial, con la finalidad de dar por concluida ésta, haciéndose recíprocas concesiones, hace las veces de una sentencia ejecutoria, por ello asume el carácter de una resolución judicial y entonces representa, ya no la simple voluntad de quienes lo celebraron, sino la postura, criterio y decisión de la autoridad jurisdiccional respecto del problema sometido a su conocimiento, con el rango de verdad legal; por lo que a efecto de que se alcance ese rango de sentencia ejecutoria, cosa juzgada o verdad legal, se requiere necesariamente de la aprobación mediante la actuación jurisdiccional del juez, ante quien se ventila la controversia judicial que se quiere dar por terminada. Sin embargo, como se ha dicho con anterioridad tal aprobación, no puede deducirse de la manifestación de la voluntad de las partes que formaron el convenio de estar y pasar por él en todo tiempo, ni considerarse implícita en la declaración judicial de tener por ratificado el convenio en cuestión, sino que la misma debe ser expresa, no como un mero formulismo o empleo de una frase sacramental, sino como una condición sine qua non, para alcanzar ese rango de verdad legal, tanto formal como materialmente, porque la naturaleza jurídica de esa aprobación conlleva la realización de actos de esa índole, por

parte del juzgador ante quien se somete, como son, el análisis del convenio para verificar que el mismo satisface los elementos reales, personales y formales que le son propios, además, que no contraviene ninguna disposición de orden público, así como, la decisión misma del juzgador de otorgarle al convenio la calidad de sentencia ejecutoria, lo cual debe de plasmarse en forma escrita, de manera clara, precisa y congruente, es decir, expresamente, de acuerdo a las reglas adjetivas de índole legal, que regula los requisitos que deben satisfacer las resoluciones judiciales.

En tal virtud, dentro de un juicio ordinario en el que la acción principal es la disolución del vínculo matrimonial, el convenio que se presente para finiquitar el mismo, además de que tiene que reunir los requisitos de congruencia antes indicados, en concordancia con los argumentos jurídicos vertidos en párrafos precedentes, se estima que debe cubrir las exigencias señaladas por el artículo 415 de la Ley Sustantiva en los que se prevé los efectos del divorcio, o sea, deberá de especificarse la situación de los hijos de los divorciantes en términos de las disposiciones aplicables, sin vulnerar ninguno de los derechos de los menores y si en cambio dejarlos plenamente establecidos, con las cargas, derechos y obligaciones que hacia sus hijos tienen sus progenitores.

Empero, no se puede soslayarse que ante los criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federación, en cuanto a que en un juicio de divorcio contencioso no puede válidamente concluir con convenio entre los contendientes, los juzgadores optan por transformar el juicio ordinario en uno de tramitación especial relativo al juicio de divorcio por mutuo, lo que tampoco es factible, pues no existe precepto legal que permita la modificación de la vía intentada; el actuar del juez en este sentido es por que acude a la búsqueda de la solución a un problema lo que de suyo, lo ubica bajo la regla de la economía procesal y actúa conforme a la teoría de la interpretación constructiva del derecho, propuesta por Ronald Dworkin, cuya premisa

fundamental es que ante la ocasión de debatir y tener que decidir y optar por una de dos opciones en una alternativa jurídica, en donde una es el derecho y su apego estricto, y la otra es la justicia y su persecución, debe optarse por ésta última, aunque hacerlo, aparentemente contraviene al derecho positivo y sus formalismos elementales.

Se dice que es una apariencia tal contravención, pues si la ley procesal establece la audiencia conciliatoria y no excluye de ella al divorcio contencioso, es claro que existe una norma que sustenta la posibilidad de que las partes resuelvan su contienda, y ante el posible conflicto de normas, estar a la que mas beneficie a los propios interesados, pues no debemos olvidar el principio *Pro-homine*, conocido como cláusula del individuo más favorecido, sobre el tema Zaragoza Huerta y Martínez Zamora, indican que tal principio se presenta cuando: *“...el intérprete al aplicar una norma al caso concreto, deberá preferir aquella que sea más favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa interna del Estado de que se trate. La preferencia de normas más favorables tiene su fundamento como mencionamos anteriormente, en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.*

*En esta línea de argumentos, este principio, establece dos formas de interpretación y aplicación del mismo:*

- 1) **Interpretación extensiva:** este tipo de interpretación nos indica que debe acudirse a la norma más amplia cuando se trata de derechos protegidos.*
- 2) **Interpretación restringida:** cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.”<sup>133</sup>.*

---

<sup>133</sup> Zaragoza Huerta, José y Martínez Zamora, Juan Jesús, “Medios de Protección de las Garantías Individuales (Derechos Humanos). Principio Pro-homine”, *Revista letras Jurídicas*, núm. 4, marzo-septiembre de 2007.

Kelsen<sup>134</sup> señala que la: “... *Justicia es ante todo, una característica posible pero no necesaria de un orden social. Solo secundariamente, una virtud del hombre; pues un hombre es justo cuando su conducta concuerda con un orden que es considerado justo. Pero, ¿cuando un orden es justo? Cuando regula conducta de los hombres de una manera tal que a todos satisface y a todos permite alcanzar la felicidad. La inspiración de justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad; al no poder encontrarla como individuo aislado, busca el hombre esta felicidad en la sociedad. La justicia es la felicidad social, es la felicidad que el orden social garantiza. En este sentido, identifica Platón la justicia con la felicidad cuando afirma que solo el justo es feliz y el injusto desgraciado.*”. Por lo que vale la pena preguntarse, si es justo nuestro derecho positivo en relación con las normas señaladas y la interpretación que de ellas se ha hecho, cuando niega no a una, sino a las dos partes en conflicto, la oportunidad de concluir el juicio contencioso de divorcio mediante convenio.

Dworkin inicia el desarrollo de sus ideas sobre la interpretación jurídica, preocupado principalmente por dar cuenta del razonamiento judicial de forma distinta a como lo hace el positivismo jurídico; consideró que si se analizaba el cómo se interpretaba en diferentes contextos la norma, se tendrían avances en la comprensión de la interpretación en general, pues para el autor el derecho es una actitud interpretativa, introspectiva, dirigida a la política en sentido amplio.

Respecto de la interpretación de la norma, debemos considerar que la práctica social, permite construir un argumento para socavar la distinción entre el derecho que es y el derecho que debe ser. Dworkin afirma que una teoría

---

<sup>134</sup>Kelsen, Hans, *¿Qué es la Justicia?*, México, Distribuciones Fontamara, 2000, pp. 9 y 10.

jurídica consiste básicamente en la mejor interpretación plausible de las prácticas jurídicas, entendidas a su vez como prácticas sociales interpretativas y en estos casos en donde el juzgador cuando en un juicio contencioso aprueba el convenio que se presenta por los contendientes para disolver el vínculo jurídico y dar fin al litigio, es que opta por esta teoría, pues desdeñar la norma y su interpretación, para aplicar la solución jurídica al conflicto planteado desde una perspectiva de justicia pronta en beneficio de los contendientes. Dworkin, denomina “*la hipótesis política*” y señala: “...*Como el derecho es una empresa política, los enunciados que componen la teoría jurídica deben mostrar al derecho como lo mejor que el mismo puede ser desde el punto de vista de la moral política*”.<sup>135</sup>

Para este autor, la finalidad de la interpretación, es mostrar al objeto interpretado como el mejor ejemplo posible dentro del género de objetos al que se lo considera perteneciente, señala que toda interpretación debe ser puesta a prueba en dos dimensiones: la dimensión del *ajuste* y la dimensión del *valor*. En la primera se exige que la interpretación se adecue a los principales rasgos que encontramos en el elemento a interpretar. Mientras que en la segunda, se evalúa hasta qué punto el objeto de la interpretación es mostrado en su mejor perspectiva. Bajo estos parámetros, diremos que, si interpretar algo, es mostrarlo en su mejor perspectiva, y la mejor perspectiva, debido a la noción de la economía procesal es que los jueces, haciendo uso de sus facultades discrecionales, sancionen un convenio de esta naturaleza y determinen la disolución del vínculo matrimonial por medio de convenio en un juicio adversarial, en esencia están interpretando la ley en beneficio de las partes contendientes, o sea, dicen el derecho en su mejor perspectiva.

---

<sup>135</sup> Dworkin, Ronald, *El imperio de la Justicia*, Barcelona, Gedisa, 1992, p.46.



## **2.10 Cónyuge culpable.**

El estatus de conyugue culpable resulta importante a virtud de los consecuentes derecho y obligaciones que de ello dimanar, estos se consignan en lo dispuesto por los artículos 417 y 419 de la ley sustantiva civil, que estable que el cónyuge que diere causa al divorcio, perderá todo lo que se le hubiese dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste, recuperando el donante los bienes donados; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho; y que el cónyuge inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente, que para su fijación, se deben tomar en cuenta las circunstancias del caso, así como la proporción en la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos, que además cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito. En tanto que en el divorcio por mutuo consentimiento, como se analizara en el capítulo respectivo, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia ni a la indemnización que concede este Artículo.

Para efecto de establecer la calidad de inocente es menester recurrir al catálogo de causales que prevé el artículo 404 del Código Civil del Estado, estas pueden calificarse en cuatro grupos, a saber:

a) Las que constituyen un delito; en este grupo se encuentran inmersa varias causales, por ejemplo: la fracción III que refiérela propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa; también está la fracción **IV** consistente en la incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, así como la fracción **V** que establece como causal de divorcio los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como

la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión; se incluye igual la consignada en la fracción XVII relativa a cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;

b) Las que constituyen falta grave de un cónyuge a otro y que la ley estimó de trascendencia y gravedad suficientes para establecer la disolución del vínculo matrimonial, ejemplo de ello es el contenido de la fracción I que se refiere a la infidelidad sexual; al igual que la prevista en la fracción II que la señala como el hecho de alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad; al igual que la de la violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido, que se consigna en la fracción XI, o la contemplada en la fracción XIII relativa a la negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos; en este apartado se incluyen las causales que se establecen en las fracciones XIV, XV, XVI del citado artículo 404.

c) Aquel grupo de causales que no constituyendo delito ni una falta grave de un cónyuge para el otro, son causas inimputables a los mismos cónyuges, suficientes para establecer la disolución del contrato, como por ejemplo las de las fracciones VI y VII, que establecen respectivamente, el padecimiento de alguna enfermedad crónica o incurables que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que

se prolongue por más de dos años y padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente; en este grupo encuadra la prevista en la fracción X relativa a la declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia.

d) Aquellas en que ambos son responsables, como es la prevista en la fracción XII relativa a la incompatibilidad de caracteres, y la reciente incluida en la fracción XIX que es inherente a la separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Si la o las causales de divorcio que se invocan y se determina su procedencia son relativas las consignadas en los dos primeros grupos que corresponden a los casos en que por ser manifiesta la voluntad de los cónyuges en ejecutar el acto delictivo o en cometer la injuria o la falta, la misma ley ha establecido como pena al cónyuge culpable, además de la disolución del vínculo matrimonial, el derecho a obtener alimentos, la revocación de los bienes donados, y deberá responder por los daños y perjuicios, si estos se hubiesen generado.

En cambio, si la causal invocada y acreditada está comprendida dentro de los casos previstos por la ley que no constituyen un delito ni tampoco falta o injuria grave de alguno de los cónyuges, que son aquellos en que no puede decirse sea imputable al cónyuge que desgraciadamente la padezca, sería injusto que en esos casos también se aplicase la sanción consistente en la pérdida del derecho de alimentos. Por lo que si ninguno puede ser estimado como cónyuge culpable, es evidente que en estas condiciones aun cuando se declare fundada la causal que se invoque, ello no es motivo para relevar de la obligación de ministrar alimentos al cónyuge

inocente, por no poder sostenerse legalmente que la causal de divorcio invocada en su contra le sea imputable, pues es ajena a su voluntad.

En tanto que ambos se estiman responsables en el caso que se presente el de incompatibilidad de caracteres, por lo que a los dos debe considerárseles como culpables del divorcio originado por esa causal<sup>136</sup>, finalmente respecto de la causal de separación por mas dos años, en donde no importa la causa, por ende no puede existir cónyuge culpable.

En resumen, en la actualidad es menester dejar en claro quién tiene la calidad de cónyuge o sea el que diere causa al divorcio, pues éste perderá todo lo que se le hubiese dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste, recuperando el donante los bienes donados; en tanto que el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho; y que el cónyuge inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente, que para su fijación, se deben tomar en cuenta las circunstancias del caso, así como la proporción en la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos, que además cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito. En tanto que en el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia ni a la indemnización que concede este Artículo.

---

<sup>136</sup> [J] XIV.C.A.32 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165039, Civil, marzo de 2010, p. 2974. Divorcio. Clasificación de las causas que lo originan, en relación con el derecho a recibir alimentos (legislación del estado de Yucatán).

## 2.11 La sentencia de divorcio en un juicio contencioso y sus efectos.

Podemos definir la sentencia como el acto aplicador de la ley sustantiva a un caso concreto para poder solucionarlo, el encargado de aplicar la ley es el juez<sup>137</sup>.

Sobre la naturaleza jurídica de la sentencia, Gómez Lara<sup>138</sup> indica: *“...La sentencia es el acto final de un proceso normal que se desarrolla en todos sus pasos; va proyectando, va destinando ese proceso a terminar precisamente en una sentencia. La sentencia es el acto final del proceso, acto aplicador de la ley sustantiva a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Existe un paralelismo en esta referencia a las sentencias, con la noción del proceso. Si hemos definido al proceso como un conjunto complejo de actos, del Estado como soberano, de las partes interesadas y de terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que tienden a uno final de aplicación de la ley general a un caso concreto controvertido, para dirimirlo o solucionarlo, 1 resulta que ese acto final mediante el cual se aplica la ley general a un caso concreto controvertido para dirimirlo o solucionarlo es precisamente la sentencia.”*

Por su parte, Pérez Palma refiere que agotadas las etapas procesales, el corresponde al juzgador tratar de establecer, cuál es en su concepto, la verdad respecto de los hechos controvertidos, para luego aplicar a tal verdad el derecho correspondiente, sin embargo acota: *“Pero esclarecimiento da la verdad, de la verdad pura, de la verdad que a pesar de la tautología y de la redundancia que encierra, bien pudiera llamarse la verdadera verdad, es, especialmente en cierta clase de juicios, difícil de establecer y de hecho hay y ha habido juicios en los que la verdad nunca ha sido conocida por quines resuelven el pleito. Ante esta dificultad, frecuentemente insuperable, la lógica*

---

<sup>137</sup> Becerra Bautista, José, *El Proceso Civil en México*, México, Porrúa, 1997, *passim*.

<sup>138</sup> Gómez Lara, Cipriano, *op. cit.*, nota, 29, p. 189.

*jurídica distingue varias clases de verdad: la verdad material u objetiva, la verdad subjetiva, la verdad formal y la verdad legal.<sup>139</sup>*”

Sobre la verdad objetiva o material y la verdad subjetiva, el autor en cita refiere:

*“... que la verdad objetiva o material, es la pura, la cierta, al autentica, de la que además se dice ha de ser una y única, ante la posibilidad de que coexistan dos verdades de los hechos, sin que contenga ningún elemento de ficción, ya sea convencional o accidental. La verdad subjetiva es la verdad de cada quien, el fruto de sus impresiones, inteligencia y sentimientos personales. Ante la discrepancia e inconformidad entre la verdad material y la subjetiva, debe tenerse en consideración que quien miente, no es aquel que deja de declarar la verdad objetiva, sino aquel que deliberadamente falta a su verdad subjetiva, ya que sin su culpa y sin malicia, se puede estar en el error o en estado de ignorancia respecto a la verdad objetiva. La verdad formal es la que resulta del texto o de la redacción de un documento o del aspecto exterior de las cosas; esta verdad pro motivos de simulación, es frecuente que no concuerde con al vedad objetiva y puede aún estar en contra de ella. La verdad legal es la establecida por la ley; como ejemplo de esta clase de verdad pueden mencionarse las presunciones juris et de jure y la cosa juzgada que como se dice en el comentario del Art. 379, más que pruebas son verdaderos postulados de derecho sustantivo. Verdad legal también la que resulta de las constancias de autos.”<sup>140</sup>.*

La sentencia de un juicio de divorcio contencioso, al igual que todo fallo, debe de dar cabal cumplimiento a lo normado por el artículo 87 del

---

<sup>139</sup> Pérez Palma, Rafael, *op. cit.*, nota 27, p. 462.

<sup>140</sup> *Ibídem*, pp. 462 y 463.

Código de Procedimientos Civiles de la Entidad para cumplir el principio de congruencia que debe revestir toda resolución judicial, que implica la exhaustividad de las resoluciones en el sentido de obligar al Juzgador a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiera sido materia del debate, debiéndose tomar en cuenta, no solo la acción principal, sino también las excepciones que los demandados hicieran valer para desvirtuar los puntos pretendidos.

El principio de congruencia se refiere a que las sentencias tanto de primer como de segundo grado, no sólo deben ser congruentes consigo mismas, en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna), sino que también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada por medio de los escritos de demanda y contestación (congruencia externa), y la reconvencción y su contestación, en caso de haberla, ya que no actuar de este modo, se deja en estado de indefensión a las partes contendientes<sup>141</sup>. En tanto que como incongruencia se entiende que en la sentencia no cumplió con lo antes indicado o bien en ella se introducen elementos ajenos a la litis, como puede ser alguna prestación no reclamada, una condena no solicitada, o bien, cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación, o bien, porque el que obtuvo no apeló

---

<sup>141</sup> [J] VI.2o.C. J/218, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Novena Época, Registro: 187909, Civil, enero de 2002, p. 1238. Sentencia incongruente. Es aquella que introduce cuestiones ajenas a la litis planteada o a los agravios expresados en la apelación.

adhesivamente para que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.

Etimológicamente la palabra sentencia proviene del verbo sentir, y es que refleja la sentencia lo que el juez siente, lo que el tribunal siente en relación a la problemática planteada por las partes.

La sentencia es el acto final de un proceso judicial que se desarrolla en todas sus fases, todo el procedimiento que se realiza durante el juicio va destinado a terminar en una sentencia.

En tal sentido de cosas, bajo un concepto de una controversia básica, que corresponda a una demanda y su contestación, en la cual en la primera solo se ejercita la acción de divorcio, debe decidirse que el fallo debe estar en plena concordancia con los hechos de la demanda atendiendo a las causales intentadas, así como el estudio y resolución de las excepciones y defensas que se hubieran opuesto. En caso de que la parte actora hubiera fundado su demanda, el juez está obligado al estudio de todas y cada una de las causales invocadas y no dejar de estudiarlas ante la procedencia de una de ellas<sup>142</sup>. Aspecto que no siempre se cumple, y no en pocas ocasiones nos encontramos que el juzgador ante la procedencia de una sola causal, omite el estudio de las restantes; esto probablemente se genera por desconocimiento del criterio al respecto, o bien, que ante la acreditación de una de ellas y por el exceso de labores en los tribunales, el juez considera que procede la acción y que ya no es menester analizar y resolver sobre las restantes causales, ya que el tiempo que puede dedicar a ello, lo puede aplicar a la resolución de otros asuntos, además de que no es dable desconocer y como antes se

---

<sup>142</sup> [J] I.5o.C.53 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IV, Novena Época, Registro: 200915, Civil, noviembre de 1996, p. 430. Divorcio, causales de. El acreditamiento de una de ellas no es óbice para analizar las demás que se hacen valer.



expreso, en muchas demandas solo se invocan un sinnúmero de causales, pero pocas de ellas tienen soporte en los hechos que se narran, mucho menos se prueban en el sumario; sin embargo debe atenderse que la obligación del estudio y resolución de todas ellas, no implica un mero formalismo, sino que además de dar cumplimiento al principio de congruencia, debemos recordar que las causales de divorcio son autónomas e independientes, por lo que la procedencia de algunas de las causales, pueden generar una consecuencia distinta tanto en relación con los divorciantes como con los hijos menores de edad.

De la misma manera en caso de acciones simultáneas, ya sea en la demanda principal o la contrademanda, la sentencia debe ocuparse del estudio, análisis y resolución de todas y cada una de las acciones ejercitadas y las excepciones y defensas que se hubieren opuesto. Finalmente, en el supuesto de no existir más reclamaciones que la acción de divorcio, en caso de proceder, el juzgador está obligado a resolver sobre las consecuencias jurídicas de la disolución del vínculo matrimonial, mismas que por su trascendencia se plantean en líneas siguientes.

En el caso de una demanda con reconvención, la sentencia no solo debe resolver la acción de divorcio en cuanto a la demanda principal, pues aun en el caso de que se considerara procedente, el juez está obligado al estudio y resolución de la reconvención planteada en donde el otro hace valer diversas causales de divorcio, pues solo así se cumple con el principio de congruencia referido, amén de que si bien la acción de divorcio tiene como finalidad el obtener la disolución del vínculo matrimonial, no podemos soslayar que puede generarse por su fin de causas y atender que los efectos jurídicos de cada una de las causales pueden ser diversos<sup>143</sup>, por lo que es

---

<sup>143</sup> [J] 1a./J. 35/99, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, Novena Época, Registro: 193178, Civil, octubre de 1999, p. 139. Divorcio, juicio de. La

menester que se estudie y resuelva la totalidad de la litis planteada para fin de obtener un pronunciamiento sobre todos los puntos litigiosos expuestos por los contendientes y estar en aptitud de resolver las consecuencias legales a que se harían acreedores.

Como se indico en el capítulo primero, ante la presencia de una demanda de divorcio con hechos genéricos, poco claros y sin que se narre de manera clara y sucinta los hechos, con prestaciones confusas y otras irregularidades, estaremos ante la presencia de una obscuridad de la demanda; entendida como tal, cuando está redactada en tales términos que impiden que el demandado conozca e identifique las pretensiones de su contraria y los hechos en que la funda, lo que puede generar una sentencia adversa a la accionante, empero, si la parte reo al producir contestación la controvierte y oferta pruebas para desvirtuar la acción y los hechos que la fundan, entonces no se estará ante la presencia de la obscuridad indicada, pues finalmente aunque el escrito inicial sea desordenado en su planteamiento y fundamento, no se deja en estado de indefensión a la parte demandada<sup>144</sup> pues entendió su contenido y alcance.

Otro punto importante de una sentencia de esta índole, es que puede darse el supuesto de que en el fallo se determine la improcedencia de la acción de divorcio, empero, se ha emitido jurisprudencia que señala que por la importancia de los derechos que se encuentran involucrados, pese a no probarse la acción de divorcio, la sentencia debe de resolver lo pertinente en relación la situación de los hijos de los contendientes, en caso de haberlos, y suplirá a su favor la deficiencia de los planteamientos respectivos o aun en el

---

demostración de la acción principal, no deja sin materia la ejercida en la vía reconvencional (legislación del estado de Veracruz).

<sup>144</sup> [J] V.1o. J/29, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 81, Octava Época, Registro: 210330, Laboral, septiembre de 1994, p. 62. Obscuridad, excepción de. Procedencia.

caso de que no los hubiera, pues se estima que resulta imprescindible y preferencial que en el fallo se decida lo relativo a su derecho de recibir alimentos son derechos que corresponden a una cuestión de orden público y de urgente necesidad, y lo mismo acontece respecto de la custodia y convivencia de los hijos<sup>145</sup>, en caso de que los padres vivan separados, pues el juez debe atender al principio fundamental del interés superior del niño, sin que ello implique violentar el principio de congruencia, ya que tiene que atenderse a lo normado por los artículos 9, 10 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, normas que deben ser interpretadas acorde con la obligación que contrajo el Estado mexicano como parte integrante de la convención aludida en el sentido de que los tribunales judiciales al resolver controversias que puedan afectar los derechos de los niños, están obligados a resolver sobre sus derechos alimentarios, el régimen de visita y convivencia con sus padres, aspectos que quedarían sin satisfacerse plenamente, si se obligara al ejercicio de otra demanda para fin de obtenerlos<sup>146</sup> o resolver sobre tales derechos de los infantes, amén de que al determinar sobre estos aspectos se da cabal a lo normado por el artículo 4º y 17 Constitucional.

La sentencia definitiva debe determinar sobre las medidas preventivas decretadas; en caso de los alimentos provisionales, estos dejarán de surtir efectos, ante la condena y fijación de los alimentos definitivos; lo mismo sobre la custodia provisional que se hubiera determinado en relación con los hijos menores de los contendientes, ya que deberá de resolverse sobre la custodia

---

<sup>145</sup> [J] II.3o.C.62 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Novena Época, Registro: 178644, Civil, abril de 2005, p. 1469. Régimen de visita y convivencia con los padres. El Juez debe resolver ese tema aunque las partes no lo hayan planteado, atendiendo al interés superior del niño.

<sup>146</sup> [J] I.6o.C. J/47, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Novena Época, Registro: 179681, Civil, enero de 2005, p. 1483. Alimentos. Obligación del juzgador de proveer de oficio respecto de ellos, al dictar sentencia en cualquier instancia, aun cuando no se hubiesen solicitado en vía de excepción o reconvención.

definitiva y en iguales circunstancias sobre cualquiera de los derechos de los menores hijos de las partes en conflicto. Sin olvidar que aunque en términos generales la sentencia definitiva, una vez declarada ejecutoriada, se transforma en cosa juzgada; empero debe decirse que en relación con las figuras jurídicas de los alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia y convivencia, si pueden ser motivo de modificación, cuando se presenten hechos supervenientes que alteran o cambian las circunstancias que afecten el ejercicio del punto en cuestión o se varía la situación jurídica existente de cuando se pronunció la resolución respectiva y ello se demuestre plenamente en el juicio o procedimiento respectivo<sup>147</sup>.

Toda sentencia, por disposición expresa de la ley procesal, tiene a su favor la presunción de haberse pronunciado según la forma prescrita por el derecho, con conocimiento de causa y por juez legítimo, con jurisdicción para dictarla, bastando para considerarla como tal, que contenga puntos resolutivos que estén debidamente motivados y fundamentados.

La sentencia como tal, es la resolución que se emite por el juzgador en el proceso judicial respectivo, bajo las reglas aludidas, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido controvertidos sin tomar en consideración hechos, ni pruebas distintas. Cuando los puntos litigiosos objeto del debate sean varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, o bien en el caso de convenio el juzgador sanciona que el mismo se encuentre ajustado a derecho para que sea materia de aprobación condenando a las partes estar y pasar por los puntos del convenio como sentencia ejecutoriada; igualmente, los jueces y tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales y los elementos procedimentales respectivos.

---

<sup>147</sup> Cfr. Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, artículo 89.

Una sentencia firme o ejecutoria, produce acción y excepción contra los que litigaron y contra terceros llamados legalmente al juicio, en este caso un tercero puede excepcionarse contra la sentencia firme, pero no contra la que recayó en juicio de estado civil, a menos que alegue colusión de los litigantes para perjudicarlo.

Debemos distinguir entre sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, como se dijo, hay cosa juzgada cuanto la sentencia causa ejecutoria<sup>148</sup>, ya sea por ministerio de ley o bien por declaración judicial<sup>149</sup>, lo que implica que la sentencia ejecutoria y la cosa juzgada son cosas diferentes, de las cuales, es patente que la sentencia ejecutoriada, es la condición de existencia y presupuesto de la cosa juzgada.

La sentencia ejecutoriada es aquella contra la cual no cabe ningún recurso ordinario, aunque pueda ser revocada o modificada mediante algún recurso extraordinario, como el juicio de amparo.

---

<sup>148</sup> *Ibídem*, Artículo 420. “Hay cosa juzgada cuando la sentencia cause estado.

Causan estado por ministerio de ley:

- I. Las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no pase de setecientos veinte veces el salario mínimo diario general vigente;
- II. Las sentencias de segunda instancia;
- III. Las que resuelvan una queja;
- IV. Las que diriman o resuelven una competencia; y
- V. Las demás que se declaran irrevocables por prevención expresa de la ley, así como aquellas de las que se dispone que no hay recurso alguno”.

<sup>149</sup> *Ibídem*, Artículo 420 bis. “Causan estado por declaración judicial:

- I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus abogados patronos o por sus representantes con poder o cláusula especial;
- II. Las sentencias respecto de las cuales hecha la notificación en forma no se interponga recurso en la forma y término señalado por la ley; y
- III. Las sentencias respecto de las cuales se interpuso recurso, pero no se expresaron agravios en forma y términos legales o que se desistió de él el recurrente, su abogado patrono o su representante con poder o cláusula especial”.

En tanto que la cosa juzgada, dice Pérez Palma<sup>150</sup>:

*“...se refiere propiamente a lo que es la materia de la controversia y por ello el Art. 422 requiere, para que la presunción de cosa juzgada opere, que haya identidad en las cosas, en las causas y en las personas. El concepto de sentencia firme, es aún más amplio que el de sentencia ejecutoriada, o simplemente ejecutoria, puesto que por sentencia firme, se entiende aquella que ya no puede ser modificada, ni mediante el empleo de recursos extraordinarios. Consecuentemente, cuando se dice que una sentencia causa o ha causado ejecutoria, ya sea por ministerio de ley o por declaración judicial, no se quiere decir, como erróneamente se supone, que la sentencia tenga la autoridad de la cosa juzgada, sino solamente, que la sentencia ya no admite recuso ordinario.”*

Y abunda:

*“... La esencia o la naturaleza de la cosa juzgada consiste en ser un mandato individual y concreto, complementario del abstracto y general que contiene la ley y que el juez aplica en el fallo”. Así precisada al naturalzaza de las cosa juzgada podría preguntarse, si la institución a que da origen es del derecho procesal, es decir de derecho público, o si lo es de derecho civil; aun cuando la contestación a la respuesta sea sólo de orden especulativo, dado su corto interés práctico, conviene puntualizar, que si bien los procedimientos seguidos hasta obtener la sentencia ejecutoriada que produce la cosa juzgada son evidente e indiscutiblemente de derecho procesal, el contenido de la cosa juzgada, por su naturaleza, en razón de los derechos que de ella nacen, por afectar el patrimonio personal de los interesados o de los derechos y*

---

<sup>150</sup> Pérez Palma, Rafael, *op. cit.*, nota 27, p. 496.

*las obligaciones inherentes a sus personas, es de derecho civil. Por esta razón, como luego se verá, la cosa juzgada opera a veces como acción, en otras como excepción, o como presunción juis et de jure.*<sup>151</sup>.

Puede definirse la cosa juzgada, siguiendo a Liebman, como "...la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia."

La cosa juzgada, señala Savigny, "...no es una consecuencia natural o necesaria deducible del concepto del oficio del juez. Al contrario, cuando se pone en duda la justicia de la sentencia, parece natural emprender un nuevo examen del asunto. La experiencia histórica demuestra cómo, en diversas épocas de la evolución de las instituciones judiciales, se ha considerado conveniente el establecimiento de un régimen jerárquico de instancias sucesivas en busca de la justicia de la decisión; y cómo se ha comprobado en muchos casos, que la decisión del último juez no es siempre la más justa, ni la más conforme con el derecho..."<sup>152</sup>.

Ahora bien, la cosa juzgada presenta dos vertientes, la formal y la material, estas se distinguen doctrinalmente, en cuanto a que la primera se refiere a la autoridad y fuerza que tiene una sentencia ejecutoriada, dentro del mismo juicio en que fue pronunciada; en la propia fuerza y autoridad de la sentencia en otros juicios o procedimientos o ante autoridades diversas y la material, son el título del derecho que establecen, que puede ser exhibido ante toda clase de autoridades, administrativas o judiciales o hecho valer ante particulares.

El juzgador no puede variar ni modificar una sentencia después de firmada; sin embargo, de manera oficiosa al día hábil siguiente al de la autorización de la sentencia, o a petición de parte interesada presentada por

---

<sup>151</sup> *Ibídem*, p. 497.

<sup>152</sup> Arellano García, Carlos, *Derecho Procesal Civil*, México, Porrúa, 2001, *passim*.

escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación de la misma, sí puede aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión que contengan sobre punto discutido en el litigio o proceso, sin que esto altere la substancia, ni el sentido de la misma, y el acuerdo que al respecto se emita, es parte integrante de la misma y entre tanto no se pronuncie no corre el término previsto en éste código para recurrir la sentencia.<sup>153</sup>

Decretado el divorcio, las actuaciones deben enviarse al tribunal de segunda instancia para su revisión oficiosa<sup>154</sup>, y en caso de que se haya interpuesto el recurso de apelación, para la substanciación del mismo. En materia de revisión de oficio, obra jurisprudencia del Tercer Circuito que señala que en nuestra Entidad Federativa, la revisión de oficio de la sentencia de divorcio, sólo debe llevarse a cabo por el tribunal revisor de manera limitada a las consideraciones de la sentencia de primer grado que fundan la determinación de disolver el vínculo<sup>155</sup>. Empero, como se ha visto a lo largo de este estudio, cuando se involucran derechos de los menores, el tribunal revisor no solo puede, sino que debe de suplir la deficiencia en el planteamiento en cuanto a determinar lo pertinente en relación con los hijos menores. En el caso de existir apelación sobre una sentencia que decreta el divorcio, existen vertientes que señalan que si el juez solo estudio una causal y se abstuvo del análisis y resolución de las restantes, en caso de que el *Ad quem*, considere improcedente la causal que inicialmente genero el divorcio, al sustituirse en el Juez de primer grado para resolver sobre la acción intentada, debe de manera oficiosa analizar las causales que no fueron materia de estudio, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la actora,

---

<sup>153</sup> Cfr. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, Artículos 87 a 89.

<sup>154</sup> *Ibidem*, Artículo 457.

<sup>155</sup> [J] III.2o.C. J/26, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Novena Época, Registro: 169803, Civil, abril de 2008, p. 2143. Revisión de oficio de las sentencias de divorcio necesario. Sus limitantes (legislación del estado de Jalisco).



la cual es evidente que no apela del fallo definitivo porque en primera instancia obtuvo todo lo que pidió al declararse disuelto el vínculo matrimonial y por ende carece de la oportunidad de expresar agravios por haber obtenido el divorcio que demandó.

El ideal de toda sentencia es resolver en forma ajustada y argumentativa en derecho, todos los puntos cuestionados y aquellos aspectos que aunque no hayan sido materia de reclamación, por disposición legal deben de resolverse en el fallo definitivo; empero, como antes se expreso, no podemos dejar de desconocer que el exceso de trabajo en los tribunales, no produce sentencias incólumes y perfectas, pues en la gran mayoría de los casos, tan solo se resuelve lo esencial y muchas ocasiones de forma superficial, ante la premura de resolver el cúmulo de juicios que se acumulan sobre el escritorio, el juzgador no quiere o no puede, según el caso, hacer una sentencia debidamente fundada y argumentada.

La ausencia de una debida interpretación y argumentación jurídica en los jueces, el modo de pensar del jurista, es criticada fuertemente por Herrendorf<sup>156</sup>, quien señala que los físicos y matemáticos no suelen arriesgar opiniones rápidas y venturosas y se pregunta: “... ¿Por qué, entonces, han de hacerlo los sociólogos, los politólogos, los juristas?” Y remata:

*“... ¿Cómo piensan los jueces que piensan? Por lo pronto, piensan los objetos de la ciencia del derecho con métodos impropios. Describen situaciones y las resuelven bien o mal según la doctrina más enseñada, la norma más próxima, siempre y cuando las causas no sean resueltas en forma mecánica por los secretarios y oficiales de los tribunales, lo que es un secreto a voces; práctica que ha desplazado a los jueces de sus funciones a cambio de la comodidad de contar con los dichos subrogantes de facto.*

---

<sup>156</sup> Herrendorf, Daniel E., *op. cit.*, nota 20, p. 47.

*Pero si el juez asume su función con todas sus luces, será visible que el atosigamiento al que esté sometido le impedirá desplegar su actividad mental de cabo a rabo, y deberá conformarse, por inteligente y lúcido que sea, con soluciones rápidas, inmediatas, que le permitan salir del embrollo y no atrasar los asuntos de su despacho.*

*En la emergencia, las soluciones normativas –normativistas, digamos, son las más aceleradas: le cabe al juez no hacer más que repetir lo que la norma dice, con lo que se libera de actividades más complejas –interpretativas, comprensivas, intelectivas-.*

*En esa reiteración de los vocablos de la norma pertinente queda contenida la sentencia. Así resuelven habitualmente los problemas nuestros jueces.*

*Por atosigamiento, por velocidad, por falta de tiempo material, por comodidad intelectual.*

*Así suele pensar los jueces que piensan; se adhieren sin miramientos al rigorismo de la expresión normativa, y sin quererlo alientan la idea de que el derecho es lo que las normas dicen que es. Lo que a esta altura de la filosofía del derecho es toda una descortesía.”*

Lo anterior es y resulta uno de los graves problemas en la impartición de justicia, el copioso trabajo y las circunstancias a que alude el autor, hace que las resoluciones judiciales resulten una determinación simplista que intenta cumplir de manera lisa lo que dispone la norma al caso planteado. Ciertamente que “...La actividad del juez en el proceso está regulada por un conjunto de principios que establecen sus deberes y facultades con el objeto asegurar el correcto desempeño de su cargo y proporciona a litigantes la garantía de una sentencia justa. Los jueces tienen facultades a las que deben someterse los litigantes en su actuación, pero éstos también tienen derechos que determinan en aquéllos deberes correlativos.”<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, p. 407.

Empero, el juzgador normativista olvida que su deber va mas allá de la simple aplicación de la norma, se escuda en la complicación y exceso de labores, para evitar pensar como un juez en toda la extensión de la palabra, con sentimiento y lógica jurídica, con independencia, con intuición humana y jurídica, con valentía, con protagonismo jurídico, con sentido de justicia, recordando a Calamandrei: *“...No digo, como le he oído decir muchas veces, que sea nociva al juez la mucha inteligencia; digo que es juez óptimo aquel en quien prevalece, sobre las dotes de inteligencia, la rápida intuición humana. El sentido de la justicia, mediante el cual se aprecian los hechos y se siente rápidamente de qué parte está la razón, es una virtud innata, que no tiene nada que ver con la técnica del Derecho; ocurre como en la música, respecto de la cual, la más alta inteligencia no sirve para suplir la falta de oído.”*<sup>158</sup>

En la actualidad es menester exigir que la sentencia y resoluciones sean un discurso jurídico; *“...El concepto de discurso jurídico es de reciente creación en la doctrina. Antes se consideraba que la sentencia, oficio, resolución jurídica, fallo o conclusión administrativa, es decir, la respuesta dada por la autoridad pública, debía estar fundada en alguna disposición normativa y contener dos o tres razones que le diesen contenido lógico a las leyes o disposiciones normativas. Al paso del tiempo, además del requisito anterior, se exige al funcionario público que entre las razones expresadas por él en su respuesta, se encuentren argumentos convincentes para aceptar su decisión. La doctrina exige a la luz de los sistemas democráticos, un discurso jurídico en el total de su respuesta, pero ¿Qué es o qué entendemos por discurso jurídico?, incluso, ¿Qué entendemos por discurso jurídico? Concepto: Llamamos así a las públicas, aceptadas y buenas razones que la autoridad declara que son y constituyen el cuerpo lógico, jurídico-argumentativo y filosófico de su respuesta-petición, por medio de la cual se estabilizan las*

---

<sup>158</sup> Calamandrei, Piero, *op. cit.*, nota 12, p. 131.

*expectativas y conflictos sociales.*<sup>159</sup>; sin embargo esto no siempre es posible, pues las justificaciones sobran, ya sea porque el número de demandas se incrementa, o el nivel de participación de los abogados de las partes también crece a través de la interposición de recursos, incidentes, o promociones correctas o indebidas, en tanto que no se aumenta el número de tribunales, ni se incrementa el personal de un juzgado, lo cual, dicho sea de paso es cierto, pues no se proporciona a los juzgadores los elementos necesarios para tal fin.

### **2.11.1 Efectos de la sentencia de divorcio.**

La sentencia de Divorcio es constitutiva y de condena, “...*Es constitutiva, ya que sólo mediante ella se puede disolver jurídicamente el matrimonio, y también lo es de condena, en virtud de que se imponen determinadas responsabilidades al cónyuge que dio origen al divorcio.*”<sup>160</sup>

Bonnecase<sup>161</sup> establece que al determinar el divorcio, los efectos se retrotraen a la data de la presentación de la demanda por lo que hace a sus intereses pecuniarios, y que: “... *respecto al matrimonio mismo, es decir en cuanto a los intereses de carácter personal, solo surte efectos desde el día de la sentencia. Los esposos pueden casarse nuevamente entre sí, bajo la condición de una nueva celebración. Puede derivarse de todo un conjunto de penalidades y de pérdida de derechos para el culpable del divorcio; a) el cónyuge culpable puede ser condenado a pagar al otro daños y perjuicios en la forma de una pensión alimenticia de una suma determinada en atención al perjuicio experimentado por el esposo inocente, y no en atención a la idea de la obligación de socorro , pues ésta ya no existe entre los esposos*

---

<sup>159</sup> Cisneros Farías, Germán, *op. cit.*, nota 131, pp. 107 y 108.

<sup>160</sup> Paz y Fuentes, Víctor M. De La, *op. cit.*, nota 74, p. 80.

<sup>161</sup> Bonnecase, Julien, *op. cit.*, nota 5, p. 255.

*divorciados; b) la más grave penalidad que puede imponerse al esposo culpable es la del art. 299, según el cual “el esposo culpable del divorcio perderá todas las ventajas que el otro le hubiere concedido en el contrato del matrimonio o posteriormente”. Este texto que sólo puede aplicarse tratándose de los regímenes matrimoniales, se refiere a las liberalidades propiamente dichas y a las ventajas matrimoniales; en esta parte debe hacerse una dedicada distinción que exponemos posteriormente.”*

Para que se presente la ejecución de una sentencia, Gómez Lara<sup>162</sup>, indica que se deben dar los siguientes presupuestos en la sentencia:

- 1.- Que la sentencia sea de condena.
- 2.- Que se firme o definitiva o que, no siéndolo, el recurso de apelación se haya admitido contra ella en un solo efecto devolutivo.
- 3.- Quien pida esa ejecución este legitimado para ello.
- 4.- Que el obligado se resista y no pueda cumplir exactamente con lo que se ordena.
- 5 Tratándose de ejecuciones de carácter económico, que exista un patrimonio ejecutable, sobre el cual llevar a cabo la ejecución (solvencia de deudor).

Como efectos que se generan de manera forzosa al decretar la disolución del vínculo matrimonial e inciden en el ámbito personal de los ex cónyuges, se encuentran:

#### **2.11.1.1 Repercusión en el estado civil de ambos.**

La disolución del vínculo matrimonial, retorna a ambos a la soltería y por ende en aptitud de contraer nupcias<sup>163</sup>.

---

<sup>162</sup> Gómez Lara, Cipriano, *op. cit.*, nota 29, p. 243.

En este aspecto particular, debemos atender a ciertas limitaciones, pues en el divorcio contencioso, el cónyuge culpable no podrá volver a casarse, sino después de dos años, a contar desde que se decretó el divorcio. En tanto que en el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento o bien en el administrativo, para que uno y otro puedan volver a contraer matrimonio, debe transcurrir un año desde que obtuvieron el divorcio.

#### **2.11.1.2 Repercusiones en la relación Económico-Patrimonial entre los cónyuges.**

La sentencia de divorcio deberá de resolver el punto cuando se está ante la presencia de que el matrimonio se hubiera celebrado bajo el régimen de sociedad legal o bien en la sociedad conyugal o voluntaria, y aun en la de separación de bienes cuando se presenta en la modalidad de parcial, en estos dos últimos supuestos la liquidación será acorde al contenido de las capitulaciones matrimoniales establecidas, aun en el supuesto de que este aspecto no haya sido materia de reclamación alguna, sin que con ello se corrompa el principio de congruencia, pues la ley en forma clara determina que la sociedad termina, entre otros motivos, por la disolución del vínculo matrimonial, por lo que determinación de la conclusión del régimen matrimonial que une a los contendientes y su liquidación en la etapa de ejecución representa una consecuencia jurídica necesaria de la declaración del divorcio, pues no puede estimarse como una intromisión de una cuestión ajena a la litis, sino la aplicación al resultado del juicio de una las consecuencias jurídicas inherentes a la procedencia de la acción del divorcio<sup>164</sup>.

---

<sup>163</sup> Cfr. Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, Artículos 403 y 420.

<sup>164</sup> [J] 1a./J. 84/2001, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, Novena Época, Registro: 188349, Civil, Noviembre de 2001, p. 22. Sociedad conyugal. La disolución y la orden de liquidación que de ella establezca el juzgador,

La declaración de terminación de la sociedad, produce que en la etapa de ejecución del fallo se proceda a la liquidación de los bienes en común, y efectuada esta, la parte que se adjudique a cada uno de los ex esposos provoca su conversión a un patrimonio individual<sup>165</sup>.

#### **2.11.1.3 Derechos que se generan como resultado del divorcio contencioso a favor del cónyuge inocente.**

Alimentos. Estos serán decretados en forma condicionada hasta que el cónyuge inocente contraiga nuevas nupcias y además viva honestamente. En tanto que para su fijación, se debe atender a las circunstancias del caso concreto, así como la proporción en la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos<sup>166</sup>.

Indemnización por Daños y perjuicios. Estos se producen cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito.

Revocación de los bienes donados. El cónyuge que diere causa al divorcio, perderá todo lo que se le hubiese dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste, recuperando el donante los bienes donados; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho<sup>167</sup>.

En tanto que, como ya se indico, en el divorcio por mutuo consentimiento, el numeral 419 en cita, de manera clara dispone que: salvo

---

oficiosamente, en la sentencia que declaró procedente la acción de divorcio, no transgreden el principio de congruencia que debe revestir toda sentencia.

<sup>165</sup> Cfr. Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, Artículos 292, 337, 340 y 418.

<sup>166</sup> *Ibidem*, Artículo 419.

<sup>167</sup> *Ibidem*, Artículo 417.

pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia ni a la indemnización que concede este Artículo.

Por lo general en el convenio se indica que los cónyuges se eximen del derecho de alimentos.

Para establecer tales derechos, debemos remitirnos a la calidad de cónyuge inocente que se analizo en líneas precedentes.

#### **2.11.2 Efectos jurídicos de índole administrativo.**

Estos corresponden a levantar el acta de divorcio, efectuar la anotación marginal del divorcio en el acta del matrimonio disuelto así como en las partidas de registro de nacimiento de los divorciantes<sup>168</sup>.

#### **2.11.3 Consecuencias jurídicas en caso de hijos menores de edad o incapacitados.**

Se acota que en párrafos anteriores se ha indicado que en una demanda de divorcio, es común que se planten acciones simultaneas que tienen relación directa con los hijos procreados por las partes, y por ende se ha expresado lo que la demanda y la sentencia deben contener y resolver al respecto.

Sin embargo, en muchos de los juicios de divorcio, solo se ejercita tal acción, y aunque haya hijos menores de los divorciantes, no se hace valer acción alguna en relación directa con los hijos, en este supuesto, si se decreta

---

<sup>168</sup> *Ibídem*, Artículo 422, relacionado con los artículos 36, 98, 98 bis, 100 de la Ley del Registro Civil.



el divorcio, la normatividad exige que se resuelva en el propio fallo una serie de circunstancias relacionadas con los hijos, en caso de haberlos, mismas que se encuentran determinadas en el artículo 415 del código civil que de manera expresa determina que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes:

- I. Respecto a la patria potestad, se estará a lo establecido en el capítulo relativo de este código; y
- II. Respecto de la custodia:
  - a) Podrá convenirse entre los cónyuges, quién la tendrá, pero ésta podrá ser revocada en cualquier momento a petición del cónyuge inocente;
  - b) A falta de convenio, la custodia corresponderá al cónyuge no culpable; si ambos cónyuges fueren culpables, la custodia la ejercerá el ascendiente que corresponda y si no lo hubiese se designará por el Consejo de Familia;
  - c) A la muerte del ex cónyuge inocente, tendrá la custodia el que sobreviva, salvo que exista inconveniente grave para ello; y

III. Respecto de los alimentos:

Determinarlos, y establecer la forma de asegurar su pago y los incrementos respectivos; y señalar el o los deudores alimentarios.

En todo caso, el juez atenderá el interés superior de los menores y si fuera necesario escuchará su opinión.

Por su parte, en cuanto a la convivencia, el fundamento se encuentra previsto en el artículo 572 del código civil que establece el orden de preferencias para la custodia de los infantes y en su último párrafo determina

que: “...En cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones que anteceden, los padres tienen el deber y el derecho de visitar y convivir con sus hijos, para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno-filial, y en caso de menores sujetos a la tutela o custodia de alguna institución, estas deberán de vigilar dicha convivencia”.

Es por ello, que aunque algunos temas ya han sido abordados con antelación, deben ser materia de análisis y reflexión en este apartado, desde la óptica, de consecuencias de la sentencia que decreta la disolución del vínculo matrimonial, aunque no hubiera sido materia de la litis.

Como una acotación histórica, en el código civil abrogado, la calidad del cónyuge culpable incidía de manera directa en el ejercicio o pérdida de la patria potestad de los hijos menores, según la causal decretada procedente, así, el numeral 337 disponía que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes:

**Primera.** Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XIV y XV del artículo 322, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge no culpable. Si los dos fueren culpables quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda y, si no lo hubiere, se nombrará tutor.

Tales causales respectivamente, corresponden, al adulterio de uno de los cónyuges; el hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo; la propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer; la incitación o la violencia, hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no

sea de incontinencia carnal; los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción, la separación de la casa conyugal por más de seis meses, sin causa justificada; haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años; los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal.

**Segunda.** Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XVI del artículo 322, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge inocente; pero a la muerte de este, el cónyuge culpable recuperará la patria potestad. Si los dos cónyuges fueren culpables, se les suspenderá en el ejercicio de la patria potestad hasta la muerte de uno de ellos, recobrándola el otro al acaecer esta. Entre tanto, los hijos quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda, y si no hay quien la ejerza, se les nombrará tutor.

La causales de las fracciones en comento, son relativas a la separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio; la declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta que preceda la declaración de ausencia; la sevicia, las amenazas, o las injurias graves de un cónyuge para el otro; la negativa de los cónyuges de darse alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153, siempre que no puedan hacer efectivos los derechos que les conceden los artículos 154 y 155; la acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro un acto

que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión;

**Tercera.** En el caso de la fracción II del artículo 322 y cuando alguno de los cónyuges padezca enfermedad contagiosa que pueda ser transmitida a los hijos, quedarán estos en poder del cónyuge sano; pero el enfermo conservará los demás derechos sobre las personas y bienes de sus hijos.

En este tercer apartado, realmente corresponde a la fracción VI que indicaba como tal, el padecer sífilis, tuberculosis o cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria; hallarse uno de los cónyuges comprendido en los casos que prevé la fracción VII del artículo 145 o padecer impotencia incurable, siempre que no esté en alguna de las excepciones señaladas por el citado artículo o que dicha impotencia, aun cuando exista en uno de los cónyuges, no haya sobrevenido después de celebrado el matrimonio y como consecuencia natural de la edad;

Dichas normas fueron superadas en el nuevo código civil, en el que se suprime en su totalidad este tipo de sanciones, lo que resulta acertado, pues no debemos perder de vista que la mayoría de las causales se generan entre y con los consortes, por lo que la conducta indebida que uno de ellos tiene hacia el otro, por ejemplo, la infidelidad, no debe de trasladarse a los hijos, pues estos no pueden ser objeto de infidelidad alguna por sus progenitores.

La nueva reglamentación nos indica que para resolver sobre la patria potestad, debemos de estar a lo establecido en el capítulo relativo del mismo ordenamiento, por lo que se debe atender a las reglas que obran en el capítulo respectivo; en cuanto a quien ejercerá la custodia, se indica que esta puede ser materia de convenio entre los contendientes y que puede ser revocada en cualquier momento a petición del cónyuge inocente, que en caso de que no obre convenio, la custodia corresponde al cónyuge no culpable y

que si ambos cónyuges fueren culpables, la custodia la ejercerá el ascendiente que corresponda y si no lo hubiese se designará por el Consejo de Familia, previendo que a la muerte del ex cónyuge inocente, tendrá la custodia el que sobreviva, salvo que exista inconveniente grave para ello. Sobre los alimentos el juez debe fijarlos y establecer la forma de asegurar su pago, así como los incrementos respectivos, señalando el o los deudores alimentarios. Respecto de la convivencia, el juez también debe de fijarla en la sentencia, y que para estos fines el juzgador debe atender al principio del interés superior de los menores y si es menester escuchar la opinión del o de los menores.

En tal sentido de cosas, en este tipo de consecuencias jurídicas de la disolución del vínculo matrimonial, hecha excepción de que exista convenio entre los progenitores ya sea en custodia y convivencia, el juzgador cuenta con las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes de la prole, o sea que tiene una facultad discrecional para resolver estos puntos, mas de ninguna manera puede considerarse que tiene un poder arbitrario de decisión, sino que su desempeño debe traducirse en el análisis exhaustivo y evaluación debidamente razonada de todos los elementos con que se cuente en el proceso y que sean susceptibles de conducir a la emisión del juicio más adecuado al fin que persigue, debiendo soslayar el sistema ya superado que generaba de pérdida de la patria potestad como pena al cónyuge culpable, eliminando cualquier idea de determinar tales aspectos en función de determinar una culpabilidad para imponer una sanción; dicho objetivo es lograr que la determinación de estos aspectos beneficie a los hijos dentro del nuevo estado de cosas que se generan en el orden familiar, social y jurídico, por el divorcio de los progenitores. Por lo que evidentemente que los jueces deben resolver estos aspectos bajo una debida y razonada argumentación jurídica atendiendo a las circunstancias que del propio juicio emerjan, y en el caso de no contar con los elementos necesarios para resolver cualquier cuestión relacionada con los

infantes -lo que es absolutamente común ya que no existió reclamación alguna al respecto, o sea, estos puntos no fueron materia de la litis- ordenar de manera oficiosa todas las diligencias que estime necesarias y los medios de prueba que estime pertinentes<sup>169</sup> y que lo puedan conducir a la resolución más adecuada para los menores.

Como se indico ha indicado a lo largo de esta investigación, en los últimos años y como resultado del respeto irrestricto a los derechos de los niños, debe de atenderse a la observancia de los derechos humanos de los menores que se consagran en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 1o. al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica y ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la cual es obligatoria en cuanto a su observancia por parte de todos los órganos jurisdiccionales acorde a lo previsto por el artículo 133 constitucional, atendiéndose incluso a las prevenciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, en cuya exposición de motivos se establece la necesidad de allegarse una legislación encaminada a la protección de los derechos de los menores, que a su vez fuesen tutelados no solamente por instituciones especializadas y específicas, sino por los tribunales de justicia y toda la sociedad, para integrarlos plenamente a ella y permitirles el goce pleno de sus derechos como seres humanos, por lo que es menester resolver los derechos de los menores bajo tales principios y la propia normatividad que sobre cada figura jurídica se contempla en la ley.

---

<sup>169</sup> [J] XIX.2o.A.C. J/19, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Novena Época, Registro: 170236, Civil, febrero de 2008, p. 2061. Pensión alimenticia. La facultad del juzgador para allegarse de pruebas, tratándose de menores de edad o incapaces, es de ejercicio obligatorio si no se cuenta con las suficientes para fijar la definitiva (legislación del estado de Tamaulipas).

En cuanto a la patria potestad, esta se contempla en nuestra legislación civil, la que dispone que por patria potestad se entiende la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre, y por otra, los hijos menores no emancipados, cuyo objeto es la custodia de la persona y los bienes de esos menores, entendida ésta en función del amparo de los hijos y que los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración recíproca.<sup>170</sup>

En tanto que el numeral 580 de la ley en comento, señala que la Patria potestad tiene las siguientes características:

*"I.- Constituye ante todo, un deber y una obligación que bajo ninguna circunstancia se puede renunciar a realizar personalmente. Sólo la custodia en los casos en que lo autorice especialmente la ley, podrá bajo atención de quien ejerce la patria potestad, encomendarse a terceros;*

*II.- Tiene el carácter de intransmisible, salvo en los casos de adopción;*

*III.- Representa un deber positivo de trato continuo, que exige y requiere un despliegue eficaz y constante que cumpla su cometido; y*

*IV.-Confiere el derecho y el deber de aplicar la corrección disciplinaria, la cual se ejercitará en forma prudente y moderada."*

En cuanto a quien ejerce la patria potestad, el numeral 581 dispone que la patria potestad se ejerce por ambos progenitores o, en su caso, por el supérstite; por su parte el artículo 582 prevé que cuando ocurra el

---

<sup>170</sup> Cfr. Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, Artículos 578 y 579.

fallecimiento de ambos progenitores, el ejercicio de la patria potestad corresponde a los abuelos por ambas ramas y que cuando existan abuelos por ambas líneas, ejercerán la patria potestad los ascendientes que tengan para ello la disposición y posibilidad; en caso de conflicto, la autoridad judicial resolverá a quien corresponde su ejercicio, debiéndose de oír para ello al Consejo de Familia y al menor, cuando tenga más de catorce años de edad, teniendo para ello en cuenta el interés superior de los menores y además, las siguientes consideraciones en orden de preferencia:

*I.- Buscar la mayor afinidad e identificación;*

*II.- La menor edad y plenitud psíquica;*

*III.- La mayor instrucción; y*

*IV.- La estabilidad económica necesaria para satisfacer los requerimientos de los menores. Cuando existan varios menores miembros de una misma familia que convivan juntos, se procurará que continúe la convivencia, si ello fuere posible.*

Por su parte el artículo 585 señala que cuando quienes ejerzan la patria potestad vivan juntos y se separen, se convendrá por ambos quién ejercerá la custodia del hijo o los hijos que hubiere y si no se ponen de acuerdo, deberá seguirse el orden de preferencia establecido en el artículo 572, dispositivo este que ordena que es interés superior de la niñez, desarrollarse en un ambiente sano familiar, de conformidad con el siguiente orden de preferencias:

*"I.- Con sus progenitores;*

*II.- Cuando no convivan ambos progenitores, con la madre si es que existe la disposición y la posibilidad afectiva de su custodia y además, no tiene una conducta nociva a la salud física o psíquica del menor;*



*III.- En caso contrario a lo previsto en la fracción anterior, corresponderá la custodia al padre, siempre que reúna los mismos requisitos de disposición y posibilidad afectiva de custodia, así como buena conducta;*

*IV.- Cuando ninguno de los dos progenitores tenga la custodia del menor; ésta podrá ser confiada a los ascendientes, parientes dentro del cuarto grado o personas con las que estén ligados en virtud de afecto, nacido y sancionado por actos religiosos o respetados por la costumbre;*

*V.-Establecimientos públicos previamente constituidos para esos fines; organismos descentralizados que otorguen esas prestaciones y en las instituciones de particulares especialmente instituidos para ello; y*

*VI.-En cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones que anteceden, los progenitores tienen el deber y el derecho de visitar y convivir con sus hijos, para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno filial."*

El numeral 598 de la ley en cita prevé que la patria potestad se pierde en los siguientes supuestos:

*I. Cuando quien la ejerce comete algún delito intencional que afecte al menor o a su patrimonio;*

*II. Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a su pérdida;*

*III. Cuando por malas costumbres de quienes la ejerzan, malos tratamientos o abandono de sus deberes frente a sus descendientes, se comprometa la salud física o psíquica, la seguridad o la moralidad sobre de quienes se ejerce, aunque esos hechos no sean penalmente punibles;*

*IV. Cuando quien la ejerce:*

a) *Exponga a su descendiente.*

b) *Le abandone por más de tres meses si éste quedó a cargo de alguna institución especializada o persona.*

c) *Abandone por más de un día a su descendiente, si el menor no hubiere quedado al cuidado de alguna persona y además éste abandono sea intencional; y*

V. *En los casos de divorcio cuando así se establezca.*

En tanto que el artículo 599 dispone que la pérdida de la patria potestad se decretará:

I. *En el caso de la fracción I del artículo 598; en la sentencia que se dicte por quien haya conocido del proceso penal, suspendiéndose en tanto se decide el negocio judicial;*

II. *En los casos de las fracciones de la II a la IV del citado artículo, en la sentencia del juicio civil que expresamente se siga; y*

III. *En el caso de la fracción V del numeral invocado, en la sentencia que se pronuncie en el juicio de divorcio.*

Es y resulta importante acotar que tal como lo dispone el artículo 600 del cuerpo de leyes invocado, la pérdida de la patria potestad no extingue los deberes y obligaciones que la misma impone.

Bajo tal sentido de cosas, y aun dejando de lado los efectos sancionadores de la legislación anterior sobre la calidad del conyugue culpable, si atendemos a las normas descritas es claro que se deben considerar las circunstancias y hechos probado en el proceso, pues aunque es evidente que la gran mayoría de las causales, no tienen relación directa con los descendientes, algunas de ellas si pueden estar involucradas de

manera directa, como sería la prevista en la fracción quinta, relativa a los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción o bien la consignada en la fracción décima primera, que corresponde a la violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido, cuando se está en la hipótesis de la violencia hacia los hijos, lo que en todo caso de estar debida y cabalmente probados los hechos de estas causales es claro el daño directo hacia los hijos; la que se prevé en la fracción XV, cuando el delito cometido por uno de los cónyuges, que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años y que corresponda a un delito intencional que afecte al menor o a su patrimonio, ya que se actualizaría la hipótesis prevista en la fracción primera del numeral 598, por lo que todo este tipo de actos debidamente probados debe de generar la pérdida del ejercicio de la patria potestad al progenitor que haya incurrido en tales conductas,

Como connotación especial tenemos que en nuestra legislación estatal no se prevé como pérdida del ejercicio de la patria potestad, el abandono de los menores respecto de los alimentos, o sea la falta de ministración de alimentos, como si se prevé en otras legislaciones, por ejemplo en la legislación civil del Distrito Federal, el numeral que establece los efectos de una sentencia de divorcio, resultan más amplios y protectores de los derechos de los hijos, que lo normado en nuestra legislación, así, en su artículo 283 se prevé que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de edad para lo cual deberá contener las siguientes disposiciones:

*I.-Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación; a la guarda y custodia, así como a las obligaciones de crianza y el derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores.*

*II.-Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y pleno.*

*III.-Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos con sus padres, misma que sólo deberá ser limitada o suspendida cuando exista riesgo para los menores.*

*IV.- Tomando en consideración, en su caso, los datos recabados en términos del artículo 282 de este Código, el Juez de lo Familiar fijará lo relativo a la división de los bienes y tomará las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los excónyuges tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos.*

*V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias necesarias para corregir los actos de violencia familiar en términos de la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar y Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el Distrito Federal. Medidas que podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.*

*VI. Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los excónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección;*

*VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia de la compensación*

*que prevé el artículo 267 fracción VI, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.*

**VIII.-** *Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés de los hijos menores de edad.*

*Para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio o a petición de parte interesada, durante el procedimiento el Juez se allegará de los elementos necesarios, debiendo escuchar al Ministerio Público, a ambos padres y a los menores.*

Por su parte el 444, establece que la patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes supuestos:

*I. Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho.*

*II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283 de éste Código.*

*III.-En los casos de violencia familiar en contra el menor;*

*IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría por más de 90 días, sin causa justificada.*

*El cónyuge o concubino que perdió la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, la podrá recuperar, siempre y cuando compruebe que ha cumplido con esta obligación por más de una año, otorgue garantía anual, se le haya realizado un estudio de su situación económica y de comportamiento actual, así como un diagnostico psicológico; dichos estudios serán realizados por el personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o por perito en la materia en los términos del último párrafo del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.*

*V. Por el abandono que el padre o la madre hicieren de los hijos por más de tres meses, sin causa justificada;*

*VI. Cuando el que la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes de los hijos, un delito doloso, por el cual haya sido condenado por sentencia ejecutoriada;*

*VII. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delitos graves.*

*VIII. Por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales, que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia intrafamiliar, cuando estos actos hayan afectado a sus descendientes.*

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en jurisprudencia<sup>171</sup> que tratándose de controversias en que se reclame la pérdida de la patria potestad con motivo del abandono del deber de alimentos, los jueces, conforme a su prudente arbitrio, deberán ponderar si aun probado el incumplimiento de tal deber, sus efectos pueden o no comprometer, según las circunstancias de cada caso, la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, sin que la sola prueba de tal infracción haga presumir en todos los casos la consecuencia de que se pudieron comprometer los bienes en cuestión. Por lo que en todo caso, la pérdida del ejercicio de la patria potestad, el juez solo podrá decretarla cuando de las circunstancias que se desprenden del juicio, así como del resultado de las pruebas fehaciente y fidedignas que obren dentro del proceso, se infiera que uno de los progenitores incurrió en cualesquiera de las causas que para tal pérdida se consignan en nuestra legislación.

---

<sup>171</sup> [J] 3a./J. 7/94, Jurisprudencia, Tercera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206634, Civil, marzo de 1994, p. 20. Patria potestad. Pérdida de la misma en caso de incumplimiento al deber de alimentos.

Por otra parte no podemos soslayar que si bien en nuestra legislación local el abandono alimentario de uno de los padres hacia los hijos, por si solo no es bastante para decretar su perdida, ya que debe acreditarse que tal conducta comprometa la seguridad o la moralidad de los menores y que bajo tal línea jurídica se ha venido resolviendo el punto, en últimas fechas tales criterios han variado, y existe tesis aislada<sup>172</sup> que el referido precepto legal es inconstitucional, argumentando totalmente que el Constituyente en el contenido del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quiso obligar al Estado Mexicano para que todas sus autoridades, incluso las legislativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, proveyeran lo necesario para respetar la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, tanto los constitucionales como los que se encuentren en los tratados internacionales, y dentro de tales derechos se encuentra el reconocimiento de que los menores tienen derecho a ver satisfechas adecuada y oportunamente sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, recreación y esparcimiento, que en primer término, corresponde a los ascendientes el deber de preservar esos derechos, en virtud de la falta de madurez física y mental del menor, resulta incuestionable que en concordancia con esa obligación, las autoridades legislativas pueden establecer las medidas que estimen necesarias para que los ascendientes cumplan con dichas obligaciones, empero tales medidas deben ser válidas constitucionalmente, pues conforme al principio de legalidad constitucional, el legislador no puede actuar arbitrariamente. Que por lo tanto si la fracción III del artículo 598 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la parte que sanciona con la pérdida de la patria potestad la sujeta a la condición de que el abandono de los deberes alimenticios de quienes la ejercen, comprometa la

---

<sup>172</sup> [J] 1a. CXVIII/2012 (10a.), Tesis aislada, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, No. Registro: 2,001,003, Constitucional, Civil, junio de 2012, Libro IX, t. 1, p. 263. Patria potestad. El artículo 598, fracción III, del Código Civil del Estado de Jalisco, en la parte que condiciona la pérdida de aquélla a que se demuestre que quienes la ejercen comprometieron la seguridad o moralidad del menor, es inconstitucional.

seguridad o la moralidad de aquellos sobre quienes se ejerce, dicha norma es inconstitucional pues transgrede el interés superior del menor, pues no se justifica que la aplicación de dicha sanción se condicione a que con el abandono se comprometa su seguridad o moralidad, porque la protección que se le da a través de esa sanción no es eficaz, ya que cuando un padre incumple sus deberes, entre ellos los alimentarios, frecuentemente alguien más se hace cargo de ellos, lo que en todo caso, esto impediría sancionar al progenitor que ha incumplido de forma contumaz con sus obligaciones y deberes de protección. Que en tal sentido, basta con que el juez verifique que efectivamente el progenitor en cuestión ha incumplido sus deberes alimenticios sin que exista una causa justificada para ello, para que pueda decretar la pérdida de la patria potestad del menor. Que la sanción en los términos que se encuentra tampoco es oportuna, porque en el supuesto de que nadie se haga cargo de aquellos deberes, dicha disposición no sólo se reduce a recomendaciones sino que implícitamente permite a los ascendientes que incumplan con sus deberes hasta el grado o medida en que el menor pueda estar en riesgo o peligro y que todo ello contraviene los artículos 4o, de la Ley Fundamental, 5o., 18, apartado 1 y 27, apartados 2 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo que es patente que bajo este nuevo orden jurídico, el incumplimiento de los deberes alimentarios de un progenitor hacia su o sus hijos, tendrá como consecuencia la pérdida del ejercicio de la patria potestad.

En relación con la custodia, como se ha visto, puede ser materia de convención entre los cónyuges y en caso de que esto no se presente, la ley indica que corresponderá al cónyuge no culpable y si ambos cónyuges fueren culpables, la custodia la ejercerá el ascendiente que corresponda y si no lo hubiese se designará por el Consejo de Familia; esto último es desafortunado y una reminiscencia sobre las sanciones para el culpable. Esta determinación al igual que todas las inherentes a los niños, niñas y adolescentes, debe de resolverse en concordancia con sus derechos y las circunstancias que se



desprendan de actuaciones judiciales, sin importar la calidad de inocente o culpable, hecha excepción de aquellas causales que tengan relación directa con el o los hijos de los divorciantes, en los mismos términos que la pérdida del ejercicio de la patria potestad, pero de no ser así, entonces el juez deberá ponderar lo mejor en todos los sentidos para el o los menores, debe además, dejar de lado las circunstancias de género y resolver lo mejor para los infantes. Decretado quién de los progenitores tendrá la custodia de los hijos, deberá resolverse sobre el régimen de convivencia de estos con el progenitor que no los tiene bajo su custodia.<sup>173</sup>

Se ha señalado que en los casos de desintegración familiar provocados por la separación de los cónyuges, los hijos resultan ser los menos responsables y, sin embargo, son los que más la resienten en el ámbito psicológico, social y económico, por lo que en aras de ese supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados, sin condición alguna, sus progenitores deben ejercer la guarda y custodia en un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto, recurriéndose a terapeutas especializados en salud mental, con la única finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con sus menores hijos, despojándose de todo resentimiento que llegase a perjudicarles, de modo tal que la convivencia de los infantes con uno y otro de sus padres, no debe generarles ningún desequilibrio emocional sino, por el contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o utilizados para satisfacer diversos intereses; que los padres deben asumir una responsabilidad absoluta respecto de sus menores hijos y el hecho de que se encuentren divorciados o separados de ningún modo implica que no puedan ser excelentes guías paternas, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto se encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les produce el divorcio de aquéllos; por todo ello es menester señalar un régimen de convivencia adecuado para que los menores sigan en

---

<sup>173</sup> Cfr. Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, Artículo 572.

plena convivencia con sus progenitores, quienes tienen el deber de educarlos consciente e integralmente, incluso, inculcándoles valores y principios conductuales, pues la paternidad nunca termina con una separación o el divorcio, por lo que uno y otro, deben permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio evidente de sus hijos, propiciando así las condiciones para que se desarrollen las relaciones consanguíneas constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre parientes e, incluso, tales facultades y deberes de carácter asistencial surgen entre los padres, hijos, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), y tienen como objetivo tutelar y fortalecer las relaciones y los derechos entre ascendientes y descendientes, sujetándose a las normas fundamentales establecidas para la protección de los hijos<sup>174</sup>.

En cuanto a los alimentos, como antes se expreso, el juez debe atender a la normatividad relativa, que dimana desde el citado artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, los diversos 1, 2, 3, 9 y 27 de la Convención sobre los derechos del Niño, y los artículos 3, inciso A, 7 y 19 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los relativos 567, 568, 569, 570 y 571 del Código Civil del Estado de Jalisco es interés superior de la niñez, de conformidad a la Convención Sobre los Derechos del Niño; atendiendo a estas disposiciones legales, en caso de que se controviertan en un procedimiento jurisdiccional, cuestiones que de alguna manera tiendan a afectar los derechos de los menores de edad, éstos deben ser tutelados y protegidos, entre otras autoridades, por los tribunales, pues la niñez debe ser objeto de especial atención y cuidado, misma que se constituye por la etapa de la vida de los

---

<sup>174</sup> [J] II.2o.C. J/30, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII, Novena Época, Registro: 162402, Civil, abril de 2011, p. 1085. Convivencia, régimen de. Principios jurídicos que deben tenerse en cuenta para su correcto desarrollo entre menores y sus progenitores, cuando éstos se encuentran separados o divorciados.

seres humanos que comprende la gestación, el nacimiento, la primera y segunda infancia, la pubertad, hasta los dieciocho años, acorde al artículo primero de la Convención Sobre los Derechos del Niño, atendiendo al interés superior de la niñez, y a que los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo, incumbiendo a los padres primordialmente, la responsabilidad de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para lograr dicho fin.

En tanto que en los artículos 434, 439, 440, 442 y 443 del Código Civil del Estado de Jalisco<sup>175</sup> se desprende la obligación que tienen los padres de dar alimentos a sus hijos, lo que comprende dicho concepto y los principios de proporcionalidad y equidad que deben prevalecer en relación a los alimentos,

---

<sup>175</sup> Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, Artículo 434.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, hasta que alcancen la mayoría de edad o llegando a ella sean incapaces. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado.

Artículo 439.- Los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son: la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos para la educación de jardín de niños, primaria y secundaria del acreedor alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales.

También comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales.

Artículo 440.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión adecuada al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos.

Artículo 442.- Los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.

Artículo 443.- Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes.

ya que deben ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, y que si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieran posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes; así también que el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión adecuada al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia; por ende para demostrar la obligación alimentaria, es suficiente que quede demostrado, la relación de parentesco entre acreedor y deudor alimentista y que el deudor alimentista no los proporciona.

Sobre el tema nos remitimos al análisis, soporte jurídico e interpretación por parte del Poder Judicial de la Federación, que se expuso en el apartado de los alimentos provisionales en este mismo capítulo, pues los elementos a considerar son esencialmente los mismos. De ello debemos resaltar que los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos<sup>176</sup>, por lo que se tiene que atender al principio de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, lo que implica que para fijar el monto de esta obligación alimentaria se debe tomar en consideración el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, tiene que considerarse el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido y hacer factible este derecho de orden público e interés social<sup>177</sup>.

---

<sup>176</sup> Cfr. Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, Artículo 442.

<sup>177</sup> [J] 1a./J. 44/2001 Jurisprudencia Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, Novena Época, Registro: 189214, Civil, agosto de 2001, p. 11. Alimentos. Requisitos que deben observarse para fijar el monto de la pensión por ese concepto (legislaciones del distrito federal y del estado de Chiapas).

De la misma manera, cuando el deudor alimentario es trabajador que percibe un sueldo, atendiendo a los parámetros indicados y dependiendo de cuantos son los acreedores, los alimentos definitivos pueden establecerse en un porcentaje mensual de los productos o percepciones netas de los ingresos que obtenga el deudor, los que incluyen todas las percepciones que obtenga por concepto de ayuda de renta, ahorro, despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el deudor por su trabajo en la empresa donde labora, ya que dichos puntos son parte de la base del salario, sin que se tomen como descuentos para cuantificación de esta pensión, las cantidades que correspondan al cumplimiento de obligaciones adquiridas de manera voluntaria por el trabajador, como son el pago o abono de créditos o préstamos que le hubieren otorgado ni aquellos de manera similar, sino únicamente los descuentos susceptibles de tomarse en consideración son los que corresponden a conceptos establecidos por la ley, como el impuesto sobre la renta, (Impuestos sobre Productos del Trabajo), de fondo de pensiones, y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuotas, pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas<sup>178</sup>.

Por otra parte, es común que dentro del proceso de divorcio contencioso, no existan prueba idóneas que justifiquen el monto de los ingresos del deudor alimentario; empero ello no debe ser un impedimento para que no fijar la pensión alimenticia respectiva, pues se deben satisfacer las necesidades alimentarias más elementales para proteger el interés superior de la niñez, y además respetar la garantía de seguridad jurídica

---

<sup>178</sup> [J] VI.2o.C. J/325 (9a.), Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 160962, Civil, octubre de 2011, Libro I, t. 3, p. 1418. Alimentos. Prestaciones que deben considerarse para fijar la pensión.

consignada en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, referente a que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...", ya que no resolver el punto o bien ordenar la reposición del procedimiento, para que se recaben elementos de prueba con la finalidad de justificar los ingresos del deudor alimentario, no haría más que retardar la administración de justicia, violentándose el interés superior de la niñez; máxime que tratándose de una resolución sobre alimentos, esto es susceptible de alterarse y modificarse cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecte o varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva, como lo establece el artículo 89-C del Enjuiciamiento Civil del Estado; por ende las partes tienen derecho a aportar elementos de prueba en vía incidental en ejecución de sentencia, incluso el juzgador la obligación de recabar las que estime necesarias para resolver sobre el aumento o reducción de la pensión alimenticia fijada. Por lo que válidamente puede emitirse la condena atendiendo a las circunstancias especiales del caso, del resultado de las presunciones tanto humanas como legales que emerjan de actuaciones y fijar la pensión alimenticia en salarios mínimos, con los que se cubran por los menos las necesidades alimenticias elementales de los menores, con lo que se cumple con la garantía de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial en beneficio del interés superior de la niñez, como obliga a este órgano jurisdiccional los artículos 4 y 17 Constitucionales.

Como se ha indicado, en el supuesto de que dentro del proceso no hubiera pruebas fehacientes para determinar lo relativo a los alimentos, no será motivo para que el juzgador soslaye su obligación o que simplemente realice una condena sin soporte alguno, por ello también resulta válido y correcto que en todo caso, el sustento para la condena respectiva puede

fijarse atendiendo a los componentes de la canasta básica<sup>179</sup> que son indispensables para la subsistencia de una persona, para efectos de individualizar y cuantificar dicha cantidad, a fin de tener una aproximación de los gastos que tiene una familia.

La información que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (antes INEGI), la que de acuerdo con el artículo 26, apartado B, primer párrafo de la Constitución del País, se considera oficial y obligatoria, cuando dispone que: “ ...B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley, estando a cargo de su operación el indicado instituto que produce información susceptible de consultar en el sitio electrónico respectivo<sup>180</sup>, que además es reconocida como medio de prueba en términos del artículo 298, fracción X, del Enjuiciamiento Civil Local; de cuyo contenido se desprenden los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del año que corresponda, conforme a las estimaciones preliminares de población realizadas con base en la información sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, proveniente del último Censo de Población y Vivienda, siendo una de las características sociodemográficas y económicas de los hogares que el tamaño del hogar está

---

<sup>179</sup> [J] III.2o.C.152 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Novena Época, Registro: 168393, diciembre de 2008, p. 968. Alimentos. Cuando el juzgador no cuente con dato alguno para poder fijar una suma determinada por tal concepto, está obligado a recabar datos estadísticos referidos a la canasta básica, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a que alude el artículo 26, apartado B, primer párrafo, de la Constitución Federal.

<sup>180</sup> INEGI, *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*, 2010, disponible en <<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/Enigh2010/tradicional/default.aspx>>, página consultada el 22 de abril de 2013.

integrado por 3.9 integrantes; en dicha encuesta se arroja como principales rubros de gasto, derivado del gasto corriente total promedio trimestral por hogar, el cual se calculó tomando en cuenta el total de hogares a nivel nacional y los precios constantes del año 2010 dos mil diez, que por ejemplo: el gasto corriente total promedio trimestral por hogar es de \$31, 260.00 (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se compone de un gasto corriente monetario por \$23,893.00 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) derivado de lo que gasta un hogar en alimentos, bebidas y tabaco; vestido y calzado, vivienda y combustibles, artículos y servicios para la casa, cuidados de la salud; transporte y comunicaciones, educación y esparcimiento; cuidados personales y transferencia de gasto; y también se compone de un Gasto Corriente No Monetario, por la cantidad de \$7,367.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) rubro en el cual entran los gastos que se realizan por autoconsumo, remuneraciones en especie, transferencias en especie y estimación del alquiler de la vivienda. De tales datos y bajo la estimación de que las familias se componen de 3.9 tres punto nueve miembros, con una simple operación aritmética donde se divide el gasto total entre el número de miembros, se arroja un promedio de \$2,671.79 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), por cada uno de sus integrantes, el cual puede ser variable, dependiendo de la edad, estado de salud, entorno socioeconómico de cada persona y de si vive sólo o en familia; elementos estos que pueden ser el sustento de la condena que al respecto se debe imponer al deudor alimentario.

Aun en el caso, de que el juez no atienda a la canasta básica, ni tenga prueba para determinar la cantidad a fijar por este concepto, en todo caso, a fin de cumplir con las normas referidas, lo correcto será que determine en la propia sentencia definitiva, la condena genérica de alimentos a cargo del



progenitor que no la tiene bajo su custodia, apercibiendo a las partes que se pongan de acuerdo en tales conceptos en beneficio de sus menores hijos, y que de no será así, estos serán fijados en la etapa de ejecución mediante los incidentes respectivos, para dar oportunidad a que se tengan los elementos necesarios y el juzgador emita la resolución adecuada velando siempre por el intereses superior de la niñez.

Se ha expresado cuáles son los efectos de la sentencia de divorcio, empero, como se ha visto en el capítulo primero, pocas son las resoluciones finales que decretan el divorcio frente al cúmulo de demandas de esta índole, el problema de un mal planteamiento por parte del asesor jurídico no es en todo caso la única causa de ese resultado negativo, pues como lo señala Gudiño Pelayo, cuando hace referencia a intervención de los operadores jurídicos en un proceso jurisdiccional, juez, abogados y partes, indica que se debe proponer un sistema para México en que el juez pueda exigir responsabilidad a los litigantes cuando, por su negligencia, por su notoria impericia o la conducta desarrollada en el proceso, resulten, o puedan resultar, afectadas las partes que patrocinan, mas no solo atiende a este aspecto, pues a continuación señala que: *“...para mejorar la administración de justicia no basta con reformar al Poder Judicial y exigir responsabilidad a los jueces por su desempeño, sino que también es indispensable reformar la manera y las condiciones en que se ejerce la abogacía en la actualidad, que se caracterizan, entre otras circunstancias negativas, por el casi nulo sistema de responsabilidades frente al cliente a que están sujetos los abogados postulantes, El juez no es el único, y en ocasiones tampoco el principal, responsable de una baja calidad en la administración de justicia, ni de la falta de credibilidad en ella. En el mejor de los casos, la responsabilidad es compartida.”*<sup>181</sup>.

---

<sup>181</sup> Gudiño Pelayo, José de Jesús, “La Calidad en la Justicia. Corresponsabilidad de jueces, litigantes y partes”. *Reforma Judicial. Revista Mexicana de la Justicia*, México, Comisión

## 2.12 Relación económica y patrimonial del matrimonio.

Sobre el tema, Bonnecase, define al régimen matrimonial, como “...una institución jurídica, que constituye un complemento ineludible del matrimonio. Pero mientras el matrimonio es una institución fija e imperativa en todas sus normas, el régimen matrimonial es susceptible de revestir las más variadas formas; más aún, la ley no especifica todos los aspectos de los diversos tipos de regímenes matrimoniales; deja a las partes la libertad, en ciertos límites, de elaborarlo íntegramente por decirlo así. Adviértase empero desde luego, antes de entrar en materia, que matrimonio y régimen matrimonial no coexisten paralelamente: se influyen recíprocamente, y más bien, las reglas del matrimonio dominan el régimen matrimonial; pero éste influye, a su vez, sobre la capacidad de la mujer, en lo que respecta a los actos de administración. Dado lo anterior, el régimen matrimonial puede definirse como una institución jurídica, complemento ineludible del matrimonio, susceptible de revestir diversas formas, ya sea que éstas hayan sido organizadas por las misma ley, cuyas normas tienen por objeto fijar la condición jurídica de los bienes de los esposos, tanto en sus relaciones entre sí como respecto a terceros, y esto, en principio, de una manera inmutable, ya sea durante el matrimonio o en la época de su disolución.”<sup>182</sup>

En una relación de pareja y en la economía se manejan conceptos similares: contrato, sociedad, ingresos, egresos, obtención y administración de bienes, etc.

---

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, IIJ-UNAM, enero-junio 2004, p. 31.

<sup>182</sup> Bonnecase, Julien, *op. cit.*, nota 5, p. 362.

Para los economistas, el matrimonio es una empresa donde los cónyuges se especializan para producir bienes, y se encuentren mejor que si no estuviesen juntos.

Esta unidad negocia la división de las ganancias y se dice que fracasa cuando no lo logran.

Según la razón económica, el matrimonio ya no cumple ninguna función como institución organizadora, acumuladora y transmisora de la propiedad y de la riqueza.

Las parejas continuamente se separan o divorcian; si se analiza desde el punto de vista económico, hay varios factores: antes se creía que un buen matrimonio estaba ligado al bienestar material, ahora se inclina más por el psicológico, así que hoy es más complicado encontrar la pareja que sea suficientemente capaz de ocupar el puesto. Otros problemas en el día a día: falta de tiempo para convivir, estrés, falta de jerarquías en la familia, inadecuado uso del dinero.

Una relación será exitosa si utiliza bien el tiempo y el dinero para la producción de bienes privados (compras para ella, él, los hijos) y públicos (gastos de casa), en la utilización eficaz de sus recursos. Las opiniones difieren sobre por qué ser parte de un matrimonio tiene ventajas económicas.

Sea cual sea la razón, hay un impacto económico.

Una relación de pareja o matrimonio será exitosa si es eficiente en el uso del tiempo y el dinero<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> José Grasso Vecchio Analista Financiero, *Relación entre la economía y el matrimonio*, <<http://www.elmundo.com.ve/noticias/finanzas-personales/recomendaciones/relacion-entre-la->

## **La fuente del conflicto.**<sup>184</sup>

Podríamos decir que uno de los principales conflictos es el impacto que tiene el dinero en la toma de decisiones de la pareja. El dicho antiguo de “*quien paga manda*” inunda también a menudo las relaciones matrimoniales, así quien tiene el salario más elevado, e incluso, quien aporta unos bienes personales mucho más valiosos que el otro puede creerse con derecho de tener un poder de decisión mayor o determinado sobre el uso del dinero compartido y ya tenemos el conflicto servido. A pesar que parece que se avance en la igualdad de género, lo cierto es que aún en muchos matrimonios, si encima es la mujer quien aporta más salario o bienes, las tensiones pueden agravarse todavía más.

Otra fuente considerable de conflictos suele producirse por las distintas concepciones “valorativas” sobre el dinero. Cuando las expectativas económicas de cada miembro de la pareja no están al mismo nivel, por ejemplo. Hay quien justifica sus “excesivas” decisiones laborales en la necesidad de ganar “X” dinero para cubrir determinadas expectativas cuando el otro valoraría quizás una cantidad de relaciones personales y de vida más óptima aunque se viviera más austeramente. O cuando por ejemplo, uno de los dos tiene la manga más ancha que el otro y se tiene la sensación que “malbarata” el dinero que han puesto en común.

Un aspecto esencial como parte y consecuencia del divorcio es la liquidación de la sociedad matrimonial. El matrimonio puede celebrarse, respecto de su relación económica-patrimonial, que puede ser bajo sociedad

---

*economia-y-el-matrimonio.aspx*>, 30 de agosto de 2010, página visitada el 21 de noviembre de 2011.

<sup>184</sup> Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, Arzobispado de Barcelona, núm. 35, consultado el 18 de noviembre de 2010.

legal, conyugal o voluntaria y la de separación de bienes, cuya normatividad la encontramos regulada del capítulo IV al VIII del Título Cuarto del Libro Segundo del Código Civil del Estado de Jalisco.

El régimen económico matrimonial es el estatuto jurídico que regula la relación económica en un matrimonio de los esposos entre sí y de éstos respecto de terceros<sup>185</sup>.

Según Ibarrola<sup>186</sup> aproximadamente un 96% de las parejas mexicanas contraen matrimonio sin fijarse en lo que están firmando en relación con sus bienes.

Continúa el autor diciendo que el matrimonio civil es un contrato solemne, por ende la voluntad de las partes no es suficiente, pues se trata de un acto jurídico mixto que requiere además de la voluntad de las partes la intervención del Estado a través del Oficial del Registro Civil, cuya intervención otorga al matrimonio el carácter público.

Se entiende entonces que el matrimonio es la institución en que los consortes se obligan a ejercer sus respectivos derechos y obligaciones, son dos personas con iguales derechos que desean llevar una vida en común, esta comunidad genera relaciones económicas sean de ganancias o pérdidas, ambos cónyuges escogen las obligaciones y su patrimonio en términos de la sociedad matrimonial que elijan.

---

<sup>185</sup> Véase, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, “Iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal”, *Gaceta Parlamentaria de la ALDF*, México, año III, núm. 169, primer periodo, 27 de septiembre de 2011, p. 208.

<sup>186</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, pp. 173 y 298.

Existen deberes recíprocos entre los cónyuges así como consecuencias de carácter patrimonial, que obedecen a las necesidades generadas de la comunidad de vida.<sup>187</sup> El régimen patrimonial del matrimonio es el conjunto de relaciones jurídicas de orden patrimonial que se establece entre los cónyuges y entre estos y terceros, se puede afirmar que está constituido por todos los bienes corporales e incorporeales, es decir todos los derechos y acciones, cargas y obligaciones correspondientes a los esposos, se conforma entonces de un activo y un pasivo, el primero se conforma con los bienes, derechos y acciones, por todo aquello que sea capaz de generar beneficio económico, en tanto que el pasivo se constituye por cargas, gravámenes y obligaciones o sea, por todo lo que pueda significar desmedro para los esposos, sin embargo existe complejidad respecto a la pertenencia de los bienes, encontrándose bienes propios del esposo, de la esposa y bienes comunes de ambos.

El matrimonio por constituir una unión de personas constituye una unión de bienes.<sup>188</sup>

De manera sencilla y concreta el régimen patrimonial del matrimonio es la organización económica del mismo y tal como dijera Josserand<sup>189</sup> es el estatuto jurídico que rige los intereses pecuniarios de los esposos.

López del Carril<sup>190</sup> dice que el régimen patrimonial del matrimonio "*....es el estatuto jurídico que regula las relaciones patrimoniales emergentes del matrimonio, ya sea las de los cónyuges entre sí o la de estos con terceros*"

---

<sup>187</sup> Malqui Reynoso, Max, *Derecho de familia*, Lima, Burgos Editorial, 1983, p. 383.

<sup>188</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, p. 293.

<sup>189</sup> Josserand, Louis, *Derecho civil*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, vol. I, t. III, 1951, p. 3.

<sup>190</sup> López del Carril, Julio, *Derecho de familia*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1984, p. 190.

En nuestra Entidad, podemos decir que acorde a la normatividad aplicable existen tres regímenes económicos del matrimonio, la sociedad legal, la conyugal o voluntaria, y el régimen de separación de bienes, en estos últimos se requiere expresamente de capitulaciones matrimoniales<sup>191</sup> para su establecimiento y que al celebrarse el matrimonio los cónyuges deberán indicar cuál de los dos tendrá la administración.

Para mayor exégesis se transcribe la parte relativa de la exposición de motivos del nuevo Código Civil para el estado de Jalisco vigente a partir del día 14 de septiembre de 1995, en su exposición de motivos, dice:

*"La vida en común de los cónyuges genera para estos la posibilidad de constituir y consolidar un patrimonio económico. En Jalisco, el matrimonio puede establecerse bajo tres regímenes patrimoniales específicos: la sociedad legal, la sociedad conyugal y la separación de bienes. "*

*"A ese respecto se hacen las siguientes precisiones: en virtud de la interpretación dada por los Tribunales Colegiados del Tercer Circuito en Materia Civil, con sede en la capital del Estado, al resolver cuestiones a ellos planteados con motivo de la aplicación del artículo 220, en su fracción VI, del actual Código, llegaron a determinar que para que un bien se considerare perteneciente a la sociedad legal matrimonial, debería acreditarse por quien afirmare tal circunstancia, que el mismo había sido adquirido con fondos a costa del caudal común, con lo que la presunción jurídica de que el bien pertenecía a la sociedad legal por el sólo hecho de que se adquiere a nombre de cualquiera de los cónyuges, se vino abajo. Esa interpretación*

---

<sup>191</sup> Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que se celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de estos en uno y en otro caso. Cfr. Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, art. 283.

*generó tangible inquietud en los círculos jurídicos y sociales del Estado y siembra la natural alarma, puesto que la tesis emitida por los Tribunales de Amparo obliga a llevar una detallada contabilidad económica de la vida conyugal, lo que es contrario, a la institución de confianza que debe de prevalecer en toda relación matrimonial. Con esa interpretación se generaron desaciertos sociales; por ello se quita la mención de "a costa del caudal común", y así dándose por supuesta esta situación que es una presunción jurídica, la carga de la prueba en contrario corresponderá a quien lo afirme. "*

*"En el capítulo relativo a las donaciones entre consortes, la legislación que se revisa, suprime la muerte del donante, porque ello, aparte de inutilizado en la vida real, sólo traía como consecuencia en el fondo una disposición testamentaria, tramitada en vida del autor de la sucesión. Además representaba la inseguridad jurídica hacia terceros, ya que no había ninguna aplicación lógica y se cuestiona si los bienes habían salido del patrimonio del donante, o si estos ya habían ingresado al del donatario por el sólo hecho del acto jurídico. "*

El régimen patrimonial del matrimonio puede generar ventajas matrimoniales, Bonnescase<sup>192</sup>, indica que se debe entender por ventaja matrimonial el enriquecimiento derivado directa o indirectamente, expresa o implícitamente, a favor de uno de los esposos y a cargo del otro, de la sola estructura y funcionamiento del régimen matrimonial adoptado, que se presentan diversas categorías de ventajas matrimoniales, susceptibles de derivarse de los diversos tipos de regímenes matrimoniales y señala: "... A este respecto debemos distinguir: 1. los regímenes de comunidad, por una

---

<sup>192</sup> Bonnescase, Julien, *op. cit.*, nota 5, pp. 372 y 373.



*parte, y 2. los regímenes de separación de bienes, por otra. En los regímenes de comunidad es necesario subdistinguir: a) en primer lugar, las tres formas principales de comunidad, es decir, la comunidad de muebles, sus gananciales o comunidad legal, la comunidad de gananciales y la comunidad universal o título universal; b) en segundo lugar, las cláusulas especiales que modifican, principalmente, la comunidad legal, pero también son susceptibles de aplicarse, en una medida más o menos apropiada a la comunidad universal o la de gananciales.”*

En Jalisco, el régimen de sociedad legal<sup>193</sup> consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya administración y dominio corresponde a ambos cónyuges indistintamente, con las limitaciones que se establecen en la ley.

Forman el patrimonio de la sociedad legal, los siguientes bienes<sup>194</sup>:

- I. Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de su profesión u oficio;
- II. Los bienes que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de parte. Si hubiere designación de partes y éstas fueren desiguales, sólo serán comunes los frutos de la herencia, legado o donación;
- III. El numerario extraído de la masa común para adquirir bienes por resolución de contrato u otro título que pertenezca por derecho propio a alguno de los cónyuges, anterior al matrimonio;

---

<sup>193</sup> Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, art. 287.

<sup>194</sup> *Ibidem*, art. 288.

- IV. El precio de las refacciones de crédito, y el de cualesquiera mejora y reparaciones hechas en fincas o créditos propios de cada uno de los cónyuges;
- V. El exceso o diferencia de precio dado por uno de los cónyuges en venta o permuta de bienes propios para adquirir otros en lugar de los vendidos o permutados;
- VI. Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes; y
- VII. Los frutos, acciones, rentas o intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los consortes.

Por lo que corresponde al régimen de sociedad conyugal, el artículo 289 de la ley en cita dispone que esta sociedad se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas a la sociedad legal, o en defecto de éstas, por las que rigen el contrato de sociedad en general.

Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieran después.

De la misma manera las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública<sup>195</sup> cuando los

---

<sup>195</sup> *Ibídem*, art. 290.

esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida.

Por su parte el artículo 292 de la ley sustantiva del Estado de Jalisco indica que las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener:

- I. La lista detallada de los bienes muebles o inmuebles que cada parte lleve a la sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten;
- II. Relación pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio;
- III. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad;
- IV. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de los consortes o solamente sus productos. En uno y otro caso, se determinará con toda claridad la parte que de los bienes o de sus productos corresponda a cada cónyuge;
- V. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción;
- VI. La declaración acerca de sí los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción;  
y
- VII. Las bases para liquidar la sociedad.

Por otra parte por disposición expresa de la ley sustantiva civil del Estado de Jalisco, en sus artículos 313 y 314, no pueden renunciarse los gananciales durante el matrimonio; pero disuelto éste o decretada la separación de bienes, pueden renunciarse los adquiridos a condición de que se formalice en escritura pública, así como el que todos los bienes que existen en poder de cualesquiera de los cónyuges al hacer la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario.

Por lo que corresponde al régimen de separación de bienes, la separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también de los que adquieran después. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial, en este caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos, o en su defecto, de la sociedad legal y el numeral 353 señala que las capitulaciones que establezcan separación de bienes, contendrán un inventario de los que pertenezcan a cada consorte al celebrarse el matrimonio y nota especificada de las deudas que al casarse tenga cada uno de los contrayentes.

La ley sustantiva señala que en el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y acciones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos, que serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria, que los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división, serán administrados por ambos o

por uno de ellos con acuerdo del otro; pero en este caso el que administre será considerado como mandatario.

Cuando la sociedad es disuelta o suspendida, se debe de proceder desde luego a formar inventario, en los numerales 341 y 342 de la Ley sustantiva civil se dispone que en el inventario se incluirán específicamente no sólo todos los bienes que formaron la sociedad, sino los que deben traerse a colación y estos corresponden a los siguientes: 1) las cantidades pagadas por el fondo social que sean carga exclusiva de los bienes propios del cónyuge; y 2) el importe de las donaciones y el de las enajenaciones que deban considerarse fraudulentas conforme al artículo 300 del mismo ordenamiento.

No deben de incluirse en el inventario, los efectos que formaban el lecho y vestidos ordinarios de los consortes, los que se entregarán desde luego a éstos o a sus herederos; que las pérdidas o deterioro de los bienes muebles no estimados, aunque provengan de caso fortuito, se pagarán de los gananciales, si los hubiere, en caso contrario el dueño recibirá los muebles en el estado en que se encuentren, conforme lo disponen los artículos 343 y 344 de la ley en cita, en tanto que el dispositivo legal 345, señala que los deterioros de los bienes inmuebles no son abonables en ningún caso al dueño, excepto los que provengan de culpa del cónyuge administrador.

Finalmente el artículo 346 del Código Civil, prevé que terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y, el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En caso de que haya pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada consorte en proporción a las utilidades que debiera corresponderles y si uno solo llevó capital, de éste se deducirá la pérdida total.

### **2.12.1 Régimen presunto en Jalisco.**

El régimen presunto corresponde aquel que rige al matrimonio por disposición expresa de la ley, cuando al momento de celebrarse el matrimonio no se determinó por los contrayentes en cuál de los regímenes económico patrimoniales contraen el matrimonio.

Este criterio se aplica cuando en el acta de registro de matrimonio no se haya establecido de manera específica o clara por cuál de los tres regímenes patrimoniales que señala la legislación, fue por el que optaron al momento de contraer matrimonio.

Si el matrimonio se celebra en el Estado de Jalisco y del contenido del acta no se advierte que los consortes hubieran optado por determinado régimen, entonces el presunto es el de sociedad legal, según disposición expresa del Código Civil del Estado de Jalisco<sup>196</sup>.

### **2.12.2 Regímenes matrimoniales presuntos en los Estados de la República Mexicana.**

Por otra parte en el tema del régimen presunto, se debe atender al lugar en donde se contrajo matrimonio. Se debe dejar en claro que la competencia para la presentación de la solicitud de divorcio o de la demanda de divorcio, emerge del lugar en donde se estableció el último domicilio

---

<sup>196</sup> Artículo 282.- El matrimonio puede celebrarse por lo que respecta a su relación patrimonial, bajo el régimen de sociedad legal; sociedad conyugal o voluntaria y separación de bienes. El régimen de sociedad legal será presunto en los matrimonios que se celebren. En la sociedad conyugal o voluntaria, y en el régimen de separación de bienes, se requiere expresamente de capitulaciones matrimoniales para su establecimiento. Al celebrarse el matrimonio los cónyuges deberán indicar cuál de los dos tendrá la administración.

conyugal, sin embargo para los efectos de plantear en forma adecuada los aspectos de la liquidación se debe atender al lugar en donde se contrajeron nupcias, o sea, que se debe considerar la Entidad Federativa en que se haya celebrado dicho acto jurídico, para establecer cuál es el régimen matrimonial presunto que rige a ese matrimonio y poder así establecer lo pertinente, en cualquiera de los procedimientos judiciales del divorcio, pues en ellos es necesario resolver los aspectos patrimoniales de los consortes, en términos de ley.

Para conocer cuál es el régimen presunto de cada uno de los Estados que conforman la República Mexicana nos remitimos al Anexo 12.

## **CAPÍTULO III**

### **EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO EN JALISCO**

#### **3.1 El divorcio Administrativo en Jalisco.**

El divorcio administrativo es uno de los tres sistemas para la disolución del vínculo jurídico, por lo que daremos un recorrido por esta figura jurídica, su fundamentación y trámite, para conocer en qué casos se presenta, sus alcances y cuáles son sus repercusiones en los procesos de divorcio.

El divorcio administrativo es un trámite extrajudicial que se encuentra previsto por el artículo 405 Bis del Código Civil del Estado de Jalisco, con relación al artículo 98 bis de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.

Este divorcio se contemplaba en el artículo 326 del derogado Código Civil, sin embargo los legisladores de 1994, en la iniciativa de ley del nuevo Código Civil determinaron su desaparición, argumentando en la exposición de motivos que en la búsqueda de la subsistencia de la institución matrimonial, en la iniciativa de ley se establecen las causales de divorcio de una manera detallada, tratando de evitar una eventual mala interpretación que pudiera tener resultado negativos, por lo que se actualizan las causales de divorcio, procurando buscar un entendimiento en las relaciones matrimoniales y cuando se estima que este entendimiento es imposible entonces se detallan los conceptos por los cuales puede pedirse la disolución del vínculo matrimonial, que tal criterio es y resulta:

*“....determinante para proponer se suprima, como se presenta en esta iniciativa, la cuestión relativa a los llamados divorcios administrativos que se decretan por los oficiales del Registro Civil, con una simplicidad de trámites y en ocasiones, se advierte que en esta clase de divorcios administrativos pueden cometerse*



*verdaderas injusticias o que de plano los procedimientos están viciados, en algunas ocasiones porque los interesados ocultan hechos y circunstancias, que de hacerse del conocimiento harían improcedente este trámite y con posterioridad una vez así conseguidos los divorcios, formalizaban otras relaciones matrimoniales, las cuales tuvieron que sufrir alguna consecuencia por la irregularidad jurídica que les precedió.*

*“Además, el oficial del Registro Civil, nunca realizó diligencia alguna tendiente a obtener la conciliación de los cónyuges, lo que es un imperativo para la autoridad jurisdiccional. Por esa razón, se ha estimado procedente reservar exclusivamente a la potestad jurisdiccional, las cuestiones relativas al trámite de los divorcios por mutuo consentimiento, en la cual desde luego será una autoridad perito en derecho, con conocimiento de causa, en la que se le dará la intervención que corresponda a la representación social, quien analizadas las pretensiones y no lograda la conciliación, determinará lo que corresponda al trámite de ese divorcio. Es más, se propone condicionar la procedencia del divorcio por mutuo consentimiento, al hecho de que cuando menos deban de tener un año de casados lo que intenten esa vía.”<sup>197</sup>*

Años después, se adiciona el artículo 405 *bis*, en el cual se retoma el divorcio administrativo, en la iniciativa respectiva se argumenta como exposición de motivos, que la derogación de tal procedimientos administrativo en su momento quizás fue el adecuado, pero que en la actualidad:

*“...cobra vigencia por la cantidad de juicios instaurados en los Tribunales en materia Familiar, ya que en el último año, se*

---

<sup>197</sup> Cfr., Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, Exposición de motivos de la iniciativa de ley del nuevo Código Civil para el Estado de Jalisco, vigente.

*ventilaron más de siete mil divorcios tan solo en los Tribunales de lo Familiar de Guadalajara; y que si retrotraemos la figura jurídica antes señalada, vendríamos a aligerar la carga de trabajo al Poder Judicial del Estado, ya que una gran mayoría de este trámite, tiene las características y los requisitos contemplados bajo el esquema de un divorcio administrativo....”*

*“...Según datos del Instituto de Estadística, Geografía e Informática, del año 2000, hasta la fecha se ha presentado una tendencia de incrementos en los divorcios. De cada 100 divorciados, 65 tenían entre 20 y 39 años; por grupos de edades, el 31.5% eran jóvenes de 20 a 29 años, con nivel escolar general de secundaria o similar. Por otro lado de cada 100 divorcios, 83 siguieron el trámite judicial y el resto administrativo, de los primeros 65.5% fue voluntario y 34.5% necesario, lo que confirma y avala la propuesta...”<sup>198</sup>*

Siendo estos los motivos que generan de nueva cuenta su inclusión en nuestra legislación y la diferencia primordial entre la norma derogada y la vigente, es que en el nuevo procedimiento se contempla la asistencia de los esposos ante una Institución Pública o acreditada, con personal de trabajo social para recibir terapia de pareja con la finalidad de avenirlos y la acreditación de la asistencia a tal curso.

Recientemente<sup>199</sup>, se incorporo como nuevo sistema el procedimiento de divorcio administrativo para ventilarse bajo el sistema de justicia

---

<sup>198</sup> Decreto número 21689/LVII/06, disponible en <[www.congreso.jalisco.gob.mx](http://www.congreso.jalisco.gob.mx)>, consultado el día 28 de octubre del 2012.

<sup>199</sup> Decreto número 23933/LIX/11. Se adiciona el art. 405-Ter. al Código Civil del Estado de Jalisco, diciembre 27 de 2011, sec. V.

alternativo, según lo dispuesto por el precepto legal 405-Ter, que dispone que el trámite previsto en el artículo anterior (divorcio administrativo ante el Oficial del Registro Civil) se podrá llevar a cabo mediante método alterno, conforme a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Es indudable que en la actualidad los medios alternativos de solución de conflictos empiezan a ser del conocimiento público, por lo que aunque de forma pausada van adquiriendo vigencia entre los integrantes de la sociedad como una vía alterna para la búsqueda de componenda de los conflictos matrimoniales; pues debemos atender que la mediación es un procedimiento voluntario de naturaleza auto compositiva, por el cual dos o más personas denominadas mediados, que están inmersos o involucradas en un conflicto, buscan un remedio amigable y aceptable para ambos, a través de la asistencia de un tercero llamado mediador, quien ajustándose a los principios rectores del método establecido para ello, debe auxiliarles en la construcción de la solución a la controversia o disputa existente.

Se ha indicado que estos son medios de excelente aplicación en materia de familia, que un buen conciliador o mediador, puede lograr resultados excelentes en beneficio de los involucrados en el conflicto, ya que representa un procedimiento voluntario de naturaleza auto compositiva, por el cual dos o más personas denominadas mediados que están involucradas en un conflicto, buscan una solución amigable y aceptable, a través de la asistencia de un tercero llamado mediador o conciliador, quien con las herramientas respectivas puede auxiliarles en la construcción real de la solución al conflicto, no solo desde el punto de vista jurídico sino desde el emocional, la pronta solución al conflicto, no solo suaviza la confronta de los esposos, pues también se dan pautas para el proceso de recuperación emocional y psicológica entre los interesados y sus hijos, lo que en si es benéfico a la familia y por ende a la propia sociedad.

Gorjón Gómez y Steele Garza, señalan que entre los principales objetivos que cumple la mediación familiar, se encuentran los siguientes:

1. Ayudar a los padres que viven una ruptura familiar, y en cualquier estadio del proceso de separación o divorcio en que se encuentren, a llegar a decisiones pactadas como alternativa a la lucha entre ellos para ganarse la confianza de sus hijos e hijas. Las personas toman decisiones más completas y mejores cuando tienen conciencia de los sentimientos ocasionados por los conflictos y se enfrentan a ellos de manera efectiva.
2. Ayuda a los padres a mantener el contacto con sus hijos e hijas y compartir los roles paterno y materno a pesar de la interrupción de su matrimonio y convivencia.
3. Ofrecer una alternativa al litigio, que se considera más largo, más costoso tanto económica como emocionalmente y, por tanto, menos satisfactorio. Las partes implicadas pueden tomar mejores decisiones acerca de sus propias vidas que cualquier autoridad jurisdiccional que emita una sentencia. Los participantes en un convenio de mediación familiar están más inclinados a ajustarse a sus términos si sienten responsabilidad por el resultado, al desprenderse, con ayuda del mediador, de sus intereses, necesidades angustias y temores.
4. Ayudar a que el proceso de separación sea lo menos conflictivo posible, pues ello afecta no solo el aspecto económico de las partes sino también el emocional, lo cual trae consecuencias psicológicas irreversibles.
5. Establecer una nueva relación entre las partes en conflicto, con respeto y confianza.
6. Corregir las percepciones e informaciones erróneas entre los implicados al facilitar la comunicación entre las partes, transformar el conflicto y reducir la ansiedad y cualquier otro efecto negativo derivado del conflicto.

7. Preparar a los participantes para que sean conscientes y acepten las consecuencias de sus propias decisiones<sup>200</sup>.

Por otra parte, señalan que "...las ventajas que en general ofrecen los métodos alternativos de solución de conflictos en contraposición con el sistema adversarial, son evidentes. Resaltan más aún si hablamos de aspectos específicos que afectan a la familia. Dupuis elaboró una clasificación taxativa de características que hacen preferible recurrir a los MACS, la cual interpretamos en forma suscrita:

1. *Amplitud de la solución.* El litigio excede aspectos puramente legales e incluye cuestiones que entran en el terreno psicológico, emocional, etc. En una solución exclusivamente jurídica no es posible desentrañar varios aspectos.
2. *Mantenimiento de relaciones futuras.* La estructura del sistema judicial impone mecanismos de ataque y contraataque, por lo que los participantes se convierten en contrarios. No obstante, las personas en conflicto no siempre son adversarios, e incluso si lo son, no tiene que ser para siempre.
3. *Confidencialidad.* Para las partes es importante que se resguarde su privacidad, pues casi cualquier persona prefiere que sus conflictos no trasciendan a terceros.
4. *Celeridad.* El tiempo que se requiera para resolver los conflictos de familia es un factor que socava y desgasta a sus integrantes. Los MASCS evita que se profundicen las diferencias y el sufrimiento, y que las partes sigan causando daño a sí mismas y a los hijos involucrados.
5. *Resultados permanentes.* Los acuerdos logrados por las partes producen resultados permanentes.

---

<sup>200</sup> Gorjón Gómez, J. Francisco y Steele Garza, José G., *op. cit.*, nota 18, pp. 47 y 48.

6. *Economía*. Las partes se ven menos afectadas en su patrimonio (en algunos casos factores económicos constituyen el motivo mismo del conflicto<sup>201</sup>).

### 3.2 Fundamentos y Procedimiento

El divorcio administrativo corresponde en esencia a un proceso por mutuo consentimiento ante autoridades del registro civil o el centro de mediación que corresponda, cuyas características especiales es que deben los cónyuges estar de acuerdo en ello, tener más de un año de casados, ser mayores de edad, que dentro del matrimonio no hayan procreado hijos vivos o concebidos al momento de la solicitud y que de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal o legal.

Sus fundamentos se localizan en el artículo 405 bis y ter. del Código Civil y 98 bis de la ley del Registro Civil. El procedimiento a seguir es relativamente sencillo, pues los cónyuges que reúnan los requisitos aludidos, deben presentarse en forma personal ante el Oficial del Registro Civil del lugar del domicilio conyugal, debiendo comprobar con las actas del registro civil que son casados entre si y que son mayores de edad, de la misma manera se debe acreditar que han liquidado la sociedad legal o conyugal según sea al caso, el estado de ingravidez de la cónyuge, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que los hechos declarados son ciertos y de manera terminante y explícita, su voluntad de divorciarse.

El Oficial del Registro Civil una vez que identifique a los peticionarios, debe levantar un acta en la que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges transcurridos treinta días naturales para que la ratifiquen en forma personal. En este inter los cónyuges deber acudir al Sistema para el

---

<sup>201</sup> *Ibidem*, pp. 49 y 50.

Desarrollo Integral de la Familia, ya sea estatal o municipal o a cualquiera otra institución acreditada, para que personal de trabajo social con capacitación en terapia de pareja procuren avenirlos en sus diferencias, debiendo extenderles constancia de ello. En caso de que no se presente la avenencia entre ellos y persistan en su decisión de disolución del matrimonio, la constancia de asistencia a tal curso debe entregarse al Oficial del Registro Civil en el momento de la audiencia de ratificación de la petición.

Finalmente una vez ratificada la solicitud, el Oficial del Registro Civil debe hacer la declaración de divorciados, levantando el acta de divorcio, de la misma manera el oficial deberá hacer las anotaciones que corresponden a la obtención del divorcio en términos de la propia ley del Registro Civil.

Decretado la disolución del vínculo matrimonial, las personas así divorciadas podrán volver a contraer matrimonio civil transcurrido un año de que se haya levantado el acta de divorcio. Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio así obtenido no surtirá efectos legales, independientemente de las sanciones previstas en las leyes.

En cuanto al trámite en los Centros de Mediación, las reglas generales se derivan del contenido de los artículos 42 al 76 de la Ley de Justicia Alternativa<sup>202</sup>, y en ellos se dispone lo relativo a la etapa preliminar y trámite.

El trámite se puede resumir en los siguientes términos; puede iniciarse a petición de parte interesada, quien debe elevar su petición verbal o escrita ante el Centro o sede regional, expresando los antecedentes de la controversia que se pretenda resolver, el nombre y domicilio de la parte complementaria, terceros interesados, en su caso, y la declaración de someterse voluntariamente a resolver su asunto a través de alguno de los

---

<sup>202</sup> Véase, Ley de Justicia alternativa para el Estado de Jalisco, *Periódico oficial del Estado*, consultada el 08 de enero de 2013, arts. 42 al 76.

medios de justicia alternativa. Esta etapa es la denominada preliminar, se estudia la solicitud de servicios de alguno de los medios de justicia alternativa, para determinar la viabilidad del método más adecuado para la solución del conflicto planteado, de proceder, se notificará por escrito esta determinación al solicitante y, en su caso, se invitará a los demás involucrados a la entrevista inicial, indicando el nombre y domicilio de las partes, el número de asunto e invitación girada, el lugar y fecha de expedición, la indicación del día, hora y lugar de celebración de la entrevista inicial, el nombre de la persona que solicitó el servicio, el nombre del prestador con el que deberá tener contacto el invitado para confirmar su asistencia, o bien, señalar nueva fecha y el nombre y firma del director del Centro o sede regional. Cuya entrega podrá hacerse por cualquier persona o medio cuando ello facilite la aceptación de la parte complementaria a acudir a la entrevista inicial.

En caso de que la parte invitada no concurra a la entrevista inicial se puede girar otra invitación a petición expresa de la parte interesada y si no acude de nuevo a la segunda invitación se archivará la solicitud, sin perjuicio de que lo soliciten posteriormente de común acuerdo, ya que el procedimiento solo puede continuar en caso de que se acepte la invitación por el involucrado.

Se presenta una entrevista inicial, en la cual el prestador debe presentarse ante los entrevistados, agradecer su asistencia, y explicarles el o los objetivos de la reunión y antecedentes, las etapas en qué consiste el procedimiento, los efectos del convenio, el papel de los prestadores del servicio, las reglas que deben observarse durante el procedimiento, el carácter voluntario, profesional, neutral, confidencial, imparcial, ágil y equitativo y la calidad de gratuidad del procedimiento, tratándose de un centro público, o la forma de fijar los honorarios si se trata de un centro o prestador privado, finalmente debe invitar a las partes para que con la información



proporcionada por el prestador elijan el método de justicia alternativa que estimen más adecuado a su asunto y que se fijen las reglas y duración para el trámite elegido y lo plasmen en el acuerdo inicial. Esta entrevista puede celebrarse con la sola presencia de la parte complementaria o de ambas y estas pueden acompañarse de su asesor jurídico. En caso de que las partes no aceptan ninguno de los medios alternativos propuestos se dará por concluido el trámite.

Por el contrario, si las partes aceptan voluntariamente alguno de los medios alternativos propuestos, se asentará constancia por escrito del acuerdo inicial y del pacto de confidencialidad, haciéndoles saber que el término del proceso será de hasta dos meses, pudiendo prolongarse por uno más si a juicio de las partes y del prestador se considera conveniente.

El proceso debe desarrollarse mediante sesiones orales, comunes o individuales, por las características de confidencialidad, no puede levantarse constancia de su desarrollo, con excepción del acuerdo inicial y el convenio que ponga fin al conflicto o parte de este, que se asentará por escrito.

En la audiencia o sesión de conocimiento del conflicto, el prestador debe explicar la naturaleza y origen del conflicto, sin hacer señalamientos de responsabilidad, hecho ello, las partes deberán manifestar sus puntos de vista respecto al conflicto y las consecuencias, pudiendo solicitar las aclaraciones que consideren necesarias, y una vez que los interesados consideren suficientemente explicada la naturaleza y origen del conflicto, si el prestador de servicios estima que existen condiciones para desahogar la fase de resolución de conflicto, ésta se llevará a cabo conforme a lo señalado en la ley, se debe levantar un resumen de lo más destacado de la sesión o de los acuerdos a los que se hubieren llegado, en su caso y en caso de ser necesario se fijará día y hora para una siguiente sesión.

Que los acuerdos que se propongan deberán ser viables, equitativos, legales y convenientes y serán examinados por los participantes, ello tomando en consideración que el convenio del método alternativo que resulte, ya sea parcial o total, además de los requisitos establecidos en la legislación que regule la materia del conflicto, debe cumplir con los requisitos siguientes:

- I. Constar por escrito;
- II. Señalar hora, lugar y fecha de su celebración;
- III. Señalar los generales de las partes, así como el documento oficial con el que se identifiquen;
- IV. Contener la firma de quienes lo suscriben, del prestador de servicio y sanción del Instituto.

Sobre las características del convenio, este debe levantarse por escrito, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, y conservándose otro en los archivos de la entidad a la que pertenezca el prestador del servicio y otro tanto ante el Instituto que lo sancionó, especificar el contenido del acuerdo en forma clara y precisa, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cumplirán con las obligaciones contraídas por cada una de las partes, deberá entregarse un ejemplar a cada una de las partes, y conservar otro en los archivos de la entidad a la que pertenezca el prestador del servicio y otro tanto ante el Instituto que lo sancionó.

Los prestadores del servicio vigilarán que las partes sean personas con capacidad para obligarse legalmente y que estén debidamente legitimadas o representadas en la sesión de que se trate, y se cerciorarán de que la suscripción del convenio se realiza libre de vicios en el consentimiento de las partes. El convenio sólo deberá suscribirse cuando se trate de materia objeto de algún método alternativo de solución de conflictos y no podrá contener cláusulas que atenten contra el orden público o afecten derechos de terceros.

Una vez ratificado y sancionado por el Instituto el convenio respectivo, se considerará como sentencia que hubiere causado ejecutoria, con todos los efectos que para la ejecución forzosa de la sentencias prevén las leyes, posteriormente se envía el oficio para la elaboración del acta de divorcio y las anotaciones respectivas.

Se considera un avance la inclusión del divorcio administrativo mediante los métodos de resolución de conflictos, pues una de las características esenciales de estas vías es:

*“...que nos acercan más a la equidad y la justicia es más equitativa cuando las partes resuelven sus diferencias con base en un procedimiento no adversarial, y no cuando se someten a un proceso judicial que aplica de manera estricta del derecho.”<sup>203</sup>*

Empero, la reforma en cuestión se queda corta, pues no incluye los métodos alternos para el conflicto del divorcio en general sino lo circunscribe al relativo a las características del administrativo, lo que es absolutamente limitante, como se analiza en el capítulo octavo.

### **3.3 Particularidades del divorcio administrativo**

Ahora bien, para la obtención de la disolución del vínculo matrimonial por el procedimiento administrativo, en cualquiera de sus opciones, es pertinente hacer algunas observaciones:

Solo procede mediante la solicitud y comparecencia de las partes interesadas ya que se considera un acto personalísimo, pues si bien no obra

---

<sup>203</sup> Gorjón Gómez, J. Francisco y Steele Garza, José G., *op. cit.*, nota 18, *passim*.

disposición expresa como si acontece en el divorcio por mutuo consentimiento según lo dispuesto por el artículo 772 del código procesal civil, no menos cierto es que de la interpretación adecuada de las normas del divorcio administrativo, se puede colegir que no es factible que los divorciantes se presenten por conducto de un apoderado.

De la misma manera es claro que solo pueden acceder al mismo los mayores de edad ya que así lo dispone la propia norma, por lo que en el caso de los menores de edad que se encuentren en esta situación se encuentra el tramite jurisdiccional del divorcio por mutuo.

En cuanto a la competencia del oficial del registro civil o centro de mediación, para este procedimiento administrativo, debe ser el del domicilio conyugal, lo que puede apreciarse del propio dispositivo invocado en concordancia con lo previsto por el artículo 161 fracción XII de la Ley Procesal Civil.

Pallares indica que si el divorcio se efectúa ante la autoridad judicial los jueces de primera instancia desempeñan un papel activo, al procurar que los cónyuges zanjen sus diferencias y no se divorcien, que por lo contrario en este tipo de divorcios el oficial del Registro Civil tiene funciones meramente pasivas, pues se limita a levantar el acta inicial para hacer constar su comparecencia y la declaración de voluntad de querer divorciarse y cumplidos los demás requisitos, cita a los peticionarios para que comparezcan dentro de treinta días a ratificar su voluntad de divorciarse, hecho lo cual, procede la declaración del divorcio y procede a anotar la disolución del vínculo conyugal en el acta respectiva del matrimonio. En este caso el tratadista aduce que el papel pasivo del oficial civil en esta clase de divorcios, se explica porque:

*“(...) no habiendo hijos de por medio, ni conflicto de interes pecuniarios procedentes del matrimonio, tanto la sociedad como el Estado carecen de interés en que el vínculo conyugal*

*subsista, y consideran el divorcio como la rescisión de un contrato.”<sup>204</sup>*

Empero, como antes se indico, en la nueva legislación, si bien el oficial del registro civil continua con un papel pasivo, no menos cierto es que actualmente se exige que entre el inter de la petición y la audiencia de ratificación, los peticionarios comparezcan ante una institución para recibir terapia de pareja con la finalidad de avenirlos en la problemática matrimonial que presentan con el objetivo de que subsista el matrimonio, lo que considero una reminiscencia de la postura hasta hace poco predominante en cuanto a la subsistencia del matrimonio.

En cuanto a la comprobación de los requisitos que para este procedimiento se exigen, el propio dispositivo señala que deben de exhibirse copias certificadas de las actas de registro de nacimiento de los peticionarios para acreditar su mayoría de edad, del acta de matrimonio, la documental en que conste la liquidación de la sociedad legal o conyugal, según el caso, si bien no señala que la constancia de ingravidez debe ser oficial, se considera que esta tiene que ser expedida por autoridad de salud oficial, para que sea concordante con lo previsto por el numeral 406 del Código Civil. Finalmente respecto de la ausencia de hijos, este punto a virtud de que encierra un hecho negativo queda salvado con la protesta de decir verdad que deben hacer los solicitantes en cuanto a que los hechos declarados son ciertos, finalmente en su oportunidad deberá de exhibirse la constancia de haber asistido a la terapia de pareja ante el al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ya sea estatal o municipal o cualquier otra institución acreditada.

Una pregunta recurrente se presenta en cuanto a la hipótesis que se presenta cuanto existe falsedad de las declaraciones de los interesados ya

---

<sup>204</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 40.

sea en lo relativo a su domicilio o bien a que no hubieran procreado hijos, al respecto la misma norma dispone que si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio así obtenido no surtirá efectos legales, independientemente de las sanciones previstas en las leyes.

De esto se desprende que los requisitos esenciales para que se considere válido el divorcio ante el oficial del Registro Civil o Centro de Mediación, corresponde a que: los cónyuges sean mayores de edad, no hayan procreado hijos y hayan liquidado su sociedad legal o conyugal, según corresponda; en caso contrario, es menester solicitar ante la autoridad judicial la nulidad del divorcio así obtenido, atento a que en nuestra legislación no existe la nulidad de pleno derecho.<sup>205</sup>

En cuanto a la posible falsedad respecto del domicilio, se considera que este no tiene el carácter de requisito esencial pues aun cuanto pudiera considerarse como incompetente el oficial del Registro Civil que declaro el divorcio, si los cónyuges se han sometido a él afirmando falsamente tener su domicilio dentro de la jurisdicción que aquel compete se considera una sumisión tacita a dicha autoridad administrativa. En estos casos los divorciantes, recobran su aptitud para contraer nuevo matrimonio civil una vez que ha transcurrido un año de que se haya levantado el acta de divorcio.

Finalmente debemos considerar que para que el divorcio surta sus efectos, es menester levantar el acta correspondiente debidamente autorizada, o sea con todos los requisitos que al efecto señala el artículo 99 de la Ley del Registro Civil, que señala que las actas de divorcio expresarán el nombre, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad de los divorciados, su clave

---

<sup>205</sup> [J] VI.2o. J/222, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 59, Octava Época, Registro: 217856, Civil, noviembre de 1992, p. 67. Nulidad. No existe de pleno derecho.

única de registro de Población, si las tuvieran, los datos de ubicación de las actas de nacimiento y matrimonio de los mismos, la parte resolutive de la sentencia judicial o resolución administrativa, fecha de la misma, autoridad que la dictó y fecha en que causó ejecutoria, en su caso.

El artículo 36 de la legislación en cita dispone que los actos del estado civil relativos a la misma persona deberán anotarse en su acta de nacimiento y en la de matrimonio cuando lo hubiere celebrado, en tanto que el numeral 100 prevé que el divorcio debe de anotarse en las actas de nacimiento y matrimonio de los divorciados; lo que conlleva a estimar que en caso de que los cónyuges se hayan casado ante una jurisdicción diferente a la del oficial del registro civil que declaró el divorcio, este debe dar aviso al oficial en donde se celebró el matrimonio y en donde se efectuó el registro de nacimiento de los divorciantes, remitiéndoles copia del acta del divorcio para que se efectúe la anotación respectiva en cada una de dichas partidas del registro civil

En el divorcio administrativo ventilado ante el Oficial del Registro Civil o ante un Centro de Justicia Alternativa, los requisitos para su obtención imperan en uno y otro camino, la diferencia estriba esencialmente en ahorro de tiempo y dinero, pues el primero requiere de más tiempo para su inicio-conclusión y resulta más oneroso, ello considerando los diversos pagos por derechos que se tienen que efectuar ante el oficial del Registro Civil, relativos a pago de solicitud de divorcio administrativo, de ratificación de la solicitud y de resolución de divorcio, así como de certificación de expediente, de expedición de acta de divorcio y de anotación del mismo<sup>206</sup>, aunado al costo de la plática que debe llevarse ante las autoridades del DIF, por lo que actualmente implica un costo aproximado de dos mil pesos, en tanto que el tramitado ante un Centro de Justicia Alternativa, solo tiene el costo del acta de

---

<sup>206</sup> Véase, Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco, *Periódico Oficial del Estado*, consultado el 20 de enero de 2013, arts. 4, fr. IV y 5.

divorcio y de la anotación marginal de este en la partida de matrimonio, que significa un promedio de doscientos pesos.

Como se dijo, es un avance la inclusión de la justicia alternativa para los divorcios “administrativos”, empero, el legislador es miope en cuanto a que no comprende o no quiere entender las bondades que se pueden obtener mediante su aplicación en todos los conflictos familiares, entre ellos el divorcio en general, pues la solución no solo será jurídica, sino que abarcara la salud emocional de los adversarios.

Respecto de los métodos alternos de solución de conflictos, Gorjón Gómez señala que: *“... se encuentran en un punto crítico, en el que tienen que demostrar su valía y sus bondades, ante el hecho de que se están considerando realmente una opción al conflicto de la impetración de justicia, mas aun cuando han sido incorporados como garantías en la constitución en su artículo 17 párrafo III, a propósito de la reforma procesal constitucional penal, considerados como instrumentos para lograr la reparación del daño en la materia, transitando fehacientemente al paradigma jurídico de aplicabilidad”*<sup>207</sup>. Por lo que vale preguntarse, si los sistemas alternos de resolución de controversias se ha incorporado a la materia penal por disposición Constitucional, que siempre se ha considerado como el derecho público por excelencia, ¿Por qué no es factible aplicar tales métodos en todos los asuntos de materia familiar? Debemos dejar atrás los conceptos tradicionalistas que han marcado que la familia como núcleo de la sociedad es de interés público y por ello, las normas aplicables son de tal rigidez que en sí, no cumplen su cometido.

Marlow, reconociendo que los métodos alternos no son una panacea, pero si una herramienta posible, señala que la mediación familiar; *“...Es un*

---

<sup>207</sup> Gorjón Gómez, J. Francisco y Steele Garza, José G., *op. cit.*, nota 18, p. 176.



*procedimiento imperfecto, que emplea una tercera persona imperfecta, para ayudar a dos personas imperfectas, a concluir un acuerdo imperfecto, en un mundo imperfecto.*<sup>208</sup>.

Ciertamente el divorcio administrativo es un procedimiento sencillo, rápido y económico, pues en poco tiempo y con un costo mínimo, los interesados obtienen la disolución del vínculo matrimonial que los unía, por lo que se agradece su retorno a la ley. Sin embargo, como se indico en el capítulo primero, de la información estadística del INEGI se desprende que son pocas las solicitudes de esta índole, pues se requiere que los solicitantes no tengan hijos y hayan disuelto su sociedad patrimonial, por lo que aunque coadyuvan en la solución de los divorcios, en sí, no representa una descarga significativa de trabajo en los tribunales que conocen en materia de familia.

---

<sup>208</sup> Marlow, Lenard, *Mediación Familiar. Una práctica en busca de una teoría. Una Nueva Visión del Derecho*, España, Editorial Granica, 1999, p. 31.

## CAPITULO IV

### EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

#### 4.1 Divorcio por mutuo consentimiento o voluntario.

El divorcio por mutuo consentimiento es uno de los procesos judiciales para la obtención de la disolución del vínculo matrimonial, de gran invocación en el Estado de Jalisco, por lo que es necesario conocer su génesis, al igual que su trámite y substanciación, los puntos que debe contener el convenio de divorcio, al igual que las diferentes figuras jurídicas que deben contemplarse para que el mismo sea correcto y ajustado a derecho, establecer cuáles son los puntos débiles de la solicitud y del convenio, para entender también, la problemática que se presenta con la ejecución de la sentencia de divorcio que se emite en este proceso; todo ello con la finalidad de aportar una solución adecuada y eficaz a quienes desean o deben de transitar por esta vía para la obtención del divorcio.

El divorcio por mutuo, es aquel en que ambos cónyuges de común acuerdo, presentan ante la autoridad judicial, la solicitud de disolución del vínculo matrimonial que los une, en el cuál formulan convenio en relación con los derechos y obligaciones que asumirán cada uno de los interesados hacia su todavía pareja, así como a los hijos menores de edad o incapacitados si los hubiera, y la terminación de la sociedad matrimonial que los une con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.

Razonamiento de la ley del 20 de septiembre de 1792, llamada consecuencia de la libertad sobre el matrimonio<sup>209</sup>:

*“...Los esposos fueron libres al unirse, deben permanecer libres cuando les venga en gana separarse....”*

---

<sup>209</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, pp. 374 y 375.

Chávez Asencio, refiere:

*“que el divorcio voluntario es de contenido no económico, quienes intervienen lo hacen ser un acto jurídico plurilateral y mixto, porque siempre intervienen el juez del registro civil o el juez de lo familiar. Sus efectos son los de disolver el vínculo matrimonial con la cesación de los deberes conyugales correspondientes y extinción de los derechos y obligaciones patrimoniales; también la de crear un nuevo estado familiar que es el de divorciados. No es solemne”.*<sup>210</sup>

Mientras que para Montero Duhalt: *“...el divorcio voluntario judicial es cuando los cónyuges que quieren divorciarse por mutuo consentimiento tienen hijos menores de edad, tienen que recurrir al Juez de lo Familiar de su domicilio para solicitar el divorcio, Con la solicitud de divorcio debe adjuntarse un convenio.”*<sup>211</sup>

Para Baqueiro Rojas<sup>212</sup>, es la forma de disolver el vínculo matrimonial, sin aducir causa específica, reuniendo los requisitos de ley. Este divorcio sólo requiere de la manifestación del mutuo acuerdo de los cónyuges, sin exponer o ventilar la causa o razón que los mueve a hacerlo.

Continúa el mismo autor diciendo que, por divorcio voluntario o por mutuo consentimiento debemos entender, la forma de disolución del vínculo matrimonial por la que pueden optar los esposos cuando sin aducir causa específica y reuniendo los requisitos de ley, hayan decidido poner fin al matrimonio.

---

<sup>210</sup> Chávez Asencio, Manuel F., *La Familia en el Derecho. Primera parte*, 2ª ed., México, Porrúa, 1990, p. 333.

<sup>211</sup> Montero Duhalt, Sara, *Derecho de Familia*, México, Porrúa, 1992, p. 255.

<sup>212</sup> Baqueiro Rojas, Edgar, *Derecho de Familia*, 7ª ed., México, Editorial Harla, 2009, p. 155.

Por lo general, el divorcio por mutuo consentimiento, genera entre las personas una serie de posiciones antagónicas, están quienes lo defienden y aquellos que aseguran que este trámite judicial, por sus bondades, contribuye cada día más a desaparecer o desintegrar la Institución de la familia.

Se puede o no estar de acuerdo con tales posturas, de hecho, en el discurso preliminar del Código Civil Francés, pronunciado por Juan Etienne Marie Portalis, en relación con la figura del divorcio, realiza diversos argumentos, entre ellos:

*“...Hoy la libertad de cultos es una ley fundamental; y la mayor parte de las doctrinas religiosas autorizan el divorcio: la facultad del divorcio se encuentra, pues, ligada entre nosotros a la libertad de conciencia...”,  
“Por otra parte, independientemente de la consideración deducida de la diversidad de cultos, muy bien puede la ley civil, ante el temor de males mayores, no usar de coacción y violencia para obligar a dos esposos infelices a permanecer unidos o a vivir en un celibato forzoso, tan funesto para las costumbres como para la sociedad”<sup>213</sup>*

Pese a ello, se establece que el divorcio solo será permitido por causa expresa y debidamente probada, en el mismo discurso se expresa que ya no se admitirá el divorcio por simple alegación de incompatibilidad de humor y de carácter, pues con ello se “...puede estar escondiendo la ausencia de todo motivo razonable. ¿Quién nos garantiza que existan causas suficientes de divorcio en un caso en el que no se expresa ninguna de ellas? El matrimonio no es una situación, sino un estado.”<sup>214</sup> Mucho tiempo ha transcurrido desde 1804.

---

<sup>213</sup> Portalis, Jean Etienne Marie, *Discurso Preliminar al Código Civil Francés*, Jalisco, Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas, Ediciones de la Noche, 2004, p. 28.

<sup>214</sup> *Ibídem*, p. 29.

Al respecto Chaumette, consolaba a los jóvenes desposados diciéndoles, en el discurso a ellos dirigido por motivo de su matrimonio que<sup>215</sup>:

*“...el divorcio es nada menos que el dios tutelar del himeneo...”*

Mazeud<sup>216</sup> comenta que el divorcio por mutuo consentimiento es:

*“... Un dios ciego, que se halla bien lejos de cumplir su misión, la locura del divorcio se apodera de las grandes ciudades...”*

Por lo general en todas las épocas, el divorcio ha sido materia de fuertes cuestionamientos de toda índole, moral, social, religiosa, económica y hasta política. Elías Azar, expresa *“La ruptura de la familia, el fin de los vínculos que la originaron produce en nuestro medio la génesis de uno de los mayores problemas: el divorcio”*<sup>217</sup>.

En la misma obra y citando a Melgar Pachano, señala que éste sostuvo en su tesis profesional que *“...la disolubilidad del matrimonio es nociva para la sociedad y que este debe considerarse como una institución, ya que mirarlo como simple hecho sería conceptuarlo en un materialismo tan amargo y cruel, que apenas podía divisarse sin profunda repulsión del espíritu”*.<sup>218</sup>

El divorcio por mutuo consentimiento se presenta como una moderna respuesta a la rigidez del divorcio vincular contencioso, en donde la idea primordial es respetar el derecho a la intimidad de los consortes, este trámite *“...es consecuencia de la rigidez que mostró y muestra el que, necesariamente, debe fundarse en hechos culpables atribuidos o imputados al demandado (y siempre, claro está, dentro del catálogo taxativo de ilícitos*

---

<sup>215</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota pp. 374 y 375.

<sup>216</sup> *Ídem.*

<sup>217</sup> Elías Azar, Edgar, *Personas y Bienes en el Derecho Civil Mexicano*, México, Porrúa, 1997, p. 212.

<sup>218</sup> *Ibidem*, p. 213.

*enumerados por la ley), lo cierto es que, a la postre, el mutuo consentimiento se sitúa como un verdadero tertium genus entre la concepción sancionatoria y la que acepta el divorcio ante la quiebra o el fracaso del matrimonio.”<sup>219</sup>*

Por otra parte no puede decirse que en este tipo de divorcio no existan “*causas*” pues es claro que estas subyacen al interior de los cónyuges como quiebra definitiva del matrimonio que conduce a ambos a la decisión de divorciarse.

Cierto es, y como a lo largo de éste documento se ha dicho, no debe de privilegiarse el divorcio y sí en cambio al matrimonio; sin embargo, no podemos negar que los tiempos actuales distan mucho de parecerse a épocas pasadas; la propia sociedad es más tolerante con los hombres y mujeres divorciadas y los hijos de este tipo de familia.

No pocos autores<sup>220</sup> y en general operarios del derecho, están a favor del divorcio bajo este rubro pues alegan que: este tipo de divorcio es, sin duda, el más aconsejable y las principales ventajas son la siguientes: mayor rapidez y sencillez en los tramites y menor costo económico.

Empero, aunque es una disolución del divorcio en forma conjunta, no necesariamente implica que exista plena conformidad y equidad entre los cónyuges, pues no podemos soslayar, que: *“La presentación conjunta, frecuentemente preferida por el menor desgaste emocional que ella significa tanto respecto de los cónyuges como en su repercusión sobre los hijos, tenía la desventaja de que conducía a que la parte más débil, o más interesada en obtener sentencia de divorcio sin acudir a la vía contenciosa, resignará total o parcialmente su interés económico, traducido ello en la desigualdad de partición*

---

<sup>219</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, p. 12.

<sup>220</sup> TNRelaciones, <<http://www.tnrelaciones.com>>, página visitada el 17 de noviembre de 2012.

*de los bienes gananciales o en la determinación de una cuota menor de alimentos de sus hijos menores, como precio de su derecho a resguardar su intimidad*<sup>221</sup>. ”.

En los últimos tiempos, cada vez es y resulta más común, afortunadamente, encontrarnos con ex esposos que han entendido que el divorcio entre ellos no implica un divorcio de los hijos -como por lo general acontecía en tiempos pasados-, más aun, con una actitud madura enfrentan en conjunto todos los aspectos que deben resolverse en relación con su prole; un buen sector de la propia sociedad, ya no los señala como personas irresponsables, sino en todo caso como participantes de una relación que se tornó inconveniente por actitudes de ambos y no por uno solo, que no tuvo más camino que la propia disolución del matrimonio.

La gente está aprendiendo a divorciarse, frase que denota conocimiento, madurez, tolerancia, responsabilidad y evidentemente libertad, y así lo cita Cárdenas:<sup>222</sup> *“...la gente está aprendiendo a divorciarse bien y lo está haciendo cada vez mejor. Está aprendiendo, a la vez, que divorciarse del cónyuge no es sinónimo de divorciarse de los hijos, y que éstos pueden ser criados en una nuevo tipo de familia, la del divorcio, a veces con ventaja, si la comparación se hace con una familia nuclear mal avenida”*.

Oigamos ahora a los defensores del divorcio<sup>223</sup>:

- a) Siendo el hombre libre, no puede encadenarse a perpetuidad.
- b) Todos los contratos son rescindibles.

---

<sup>221</sup> Stilerman, Martha y De León, María Teresa, *op. cit.*, nota 37, *passim*.

<sup>222</sup> Cárdenas, Eduardo José, *op. cit.*, nota 16, p. 38.

<sup>223</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, pp. 370 a 374.

- c) El divorcio es la razón de corregir errores irreparables. Añaden: por millares se cuentan los que han sufrido en el matrimonio crueles decepciones.
- d) El divorcio es una exigencia del progreso moderno.

Verdad es que en el divorcio por mutuo consentimiento no es exigible establecer o narrar causa alguna, por lo general se indica por los promoventes la falta de amor entre ellos o la incompatibilidad de caracteres, sin embargo en muchos de estos trámites existen no sólo una causa sino muchas de ellas, cuya exposición ante los tribunales, generaría vergüenza, descrédito, deshonra para los integrantes de la familia y podría convertirse en un escándalo social o publicitario que en un momento dado puede afectar en diversos ámbitos y en mayor medida a los propios esposos o aun a sus descendientes, y que por ello, optan por este camino y no por el juicio contencioso.

Justamente cuando se toma esta decisión, los involucrados tienen que hacerlo con plena y absoluta conciencia de sus actos, para que ambos estén en posibilidad de sanar las heridas y enfrentar la posibilidad de una vida mejor, pues de no ser así y el divorcio voluntario se utiliza tan solo como una vía rápida para la obtención del divorcio, será en la etapa de ejecución en donde emerja la confrontación de los interesados y el proceso de ejecución se torne más espinoso que un juicio contencioso. Estoy convencida que algunas de las historias más crueles, vergonzosas e indignantes que acontecen entre una pareja, quedan ocultas -pero no resueltas- bajo la solicitud de divorcio por mutuo consentimiento.

En líneas anteriores se indicó que el abogado antes que litigante, debe ser mediador o conciliador, y es justamente en los asuntos de esta naturaleza en que sus habilidades y ética profesional deben mostrarse en forma plena, el diálogo con ambas partes y no sólo con una de ellas, puede generar la



posibilidad de resolver en la forma menos dolorosa los conflictos o crisis matrimoniales, cierto es que los sistemas alternativos de justicia desgraciadamente hasta el momento no son materia obligatoria en la carrera del abogado, sin embargo, empero, por la propia naturaleza del ser humano, amalgamado con el conocimiento jurídico, la experiencia en el trabajo y con la ética profesional que debe distinguirlo, le hace adquirir una habilidad especial en el manejo de la mediación, la conciliación, la amigable composición o cualquiera de estos sistemas alternos. Cárdenas señala que *“...De lo que un abogado pregunte, sugiera y haga, dependerá mucho el rumbo futuro de la familia”*<sup>224</sup>.

Es por lo que, se estima que antes de tomar una decisión apresurada que puede tornarse en desafortunada, el postulante deberá plantear a los cónyuges en un primer término la posibilidad de la solución de sus conflictos y en aquellos casos que esto no sólo no es posible, sino que lo recomendable es el divorcio, exponer las ventajas e inconvenientes que pueden presentarse en cualesquiera de las dos vías para la obtención del divorcio. Explicar las bondades que puede representar el divorcio voluntario, bajo el sentido de que ambos superen la problemática que hubieran vivido y si es factible, convivir en forma armónica, respetuosa y tolerante, especialmente en aquellos casos en los que se procrearon hijos, ya sean éstos menores o mayores de edad, pues su propia descendencia forma lazos indisolubles.

La formación del abogado para la resolución de los conflictos en esencia, sobre todo en materia de familia, como lo señala el Zaragoza Huerta, *“...La sociedad actual reclama hoy mayores habilidades al jurista, gran parte de la crisis en la impartición de la justicia, se debe a la formación excesivamente positivista del estudiante de derecho, el prácticamente nulo fomento al desarrollo de la crítica y el espíritu de renovación. Es por ello, que nos parece importante la utilización de un modelo interdisciplinario de*

---

<sup>224</sup> Cárdenas, Eduardo José, *op. cit.*, nota 16, p. 25.

*educación jurídica que potencie las capacidades de los futuros juristas y aumente sus competencias para la resolución de los conflictos que atiende.<sup>225</sup>*

Si un matrimonio procrea hijos, cuando se llega al inevitable divorcio, la familia como tal, no debe de acabarse o desintegrarse; es verdad que por lo general y como consecuencia, uno de los cónyuges ya no habita con el resto de la familia, pese a ello, no menos cierto resulta que su función natural de madre o padre jamás podrá desligarse de sus hijos y aún de su ex esposa o ex esposo, pues juntos deben velar por un crecimiento sano y adecuado para sus descendientes, tengan la edad que tengan. Un hijo, por el hecho de que no viva al lado de sus padres debido a un sin fin de circunstancias, como pueden ser estudios, trabajo, emancipación, matrimonio de los hijos, etcétera, no por ello tendrá el estatus de ex hijo, pues siempre será y tendrá el estatus de hijo, esté donde esté, ande donde ande, por lo que resulta infantil y hasta grotesco que se pretenda señalar en forma habitual, que el divorcio trae como consecuencia o es factor predominante para desintegrar una familia.

En fin, con este texto no se pretende tomar partido en pro o en contra del divorcio, en todo caso, es y resulta evidente que cada vez es más frecuente este tipo de trámites o juicio, y por tanto, lo que se intenta es que el abogado postulante, sobre todo los estudiantes o recién agregados, se sensibilicen hacia todos los aspectos que deben de considerarse en el divorcio, desde el centro hasta las consecuencias periféricas; tengan un panorama no sólo jurídico, sino también humano de tal figura, para que la labor que como asesores sobre este tema realicen, sea lo más profesional, ético y acertado posible.

---

<sup>225</sup> Pérez Saucedo, José Benito *et al.*, *op. cit.*, nota 10, *passim*.

Por otra parte, en cuanto a los requisitos y características especiales de este trámite por ser precisamente materia de análisis en este texto, se analizarán con detenimiento en los siguientes capítulos.

#### **4.2 Trámite y substanciación. Requisitos.**

Como se indico la fundamentación sustantiva del divorcio por mutuo consentimiento se encuentra inmersa en el Capítulo XII del Título Cuarto del Libro Segundo del Código Civil, que se denomina “El Divorcio” y su normatividad está contemplada por los artículos 403 al 422, y justamente el contenido de los artículos 404 que lo señala como la causal XIX, 406, 407 y 408, son los numerales que hacen referencia al mutuo consentimiento.

En tanto que el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento, se encuentra normado en el Capítulo IV por del Título Décimo Segundo denominado de los Negocios de Tramitación Especial, del artículo 764 al 775, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

De la misma manera, en forma prioritaria se debe atender a las normas que fundan los requisitos de los presupuestos procesales respectivos.

Por lo que por razón de método y con la finalidad de manejar un orden adecuado para el planteamiento de este trámite, se inicia justamente con los presupuestos procesales que toda solicitud de esta índole debe de contener y acreditar:

Breve reseña del proceso judicial del divorcio voluntario o por mutuo consentimiento en Jalisco.

1. El divorcio por mutuo consentimiento se tramita ante el juez de lo familiar del domicilio conyugal y no puede pedirse sino pasado un año de la celebración del matrimonio. Ver 408 y 420 Código Civil del Estado y 764 Código de Procedimientos Civiles del estado último párrafo.

2. Deberá presentarse la demanda respectiva, la cual sólo podrá ser cursada por los interesados y acompañada del convenio correspondiente, en el que se fijará la situación de los cónyuges, hijos y bienes durante el procedimiento y después de decretado el divorcio. (Ver artículo 764 CPCEJ y 406 y 407 CCEJ).

3. El juez citará a los solicitantes para dos juntas de avenencia, a las cuales deberán acudir los esposos sin asesores, en cada una de ellas el juez los exhortará a meditar acerca del pasó que pretenden dar, y procurará avenirlos para que desistan del divorcio.

4. El juez dictará sentencia en el caso de que los solicitantes insistan en divorciarse, y si el convenio que deberá ser ratificado por los solicitantes llena los requisitos legales y dará parte al Ministerio Público. (Ver artículo 765, 767, 768 y 770 CPCEJ).

5. Si a consecuencia de la exhortación del juez, o antes o después, en cualquier estado del juicio, pero antes de la sentencia, los cónyuges deciden reconciliarse, el procedimiento queda sin efecto por desistimiento de las partes, y como efecto de ello no podrán intentar un nuevo juicio de divorcio voluntario sino hasta pasado un año. 408, 412CCEJ.

#### **4.2.1 Competencia.**

“La competencia es el límite de la jurisdicción”. La competencia es determinante para que una autoridad pueda actuar válidamente; la propia

Constitución en su artículo 16 señala que: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente...”<sup>226</sup>.

En lo relativo al divorcio voluntario el artículo 149 del Código Procesal Civil, establece que toda demanda debe de formularse ante Juez competente: de la misma manera se indica que la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado, el territorio y por razón del turno dónde exista éste.

En los casos de divorcio por mutuo consentimiento no existe la competencia por razón de la cuantía, pues las acciones del estado civil no están sujetas a esta norma y en cuanto al grado, lo es el de primera instancia, tal como de manera clara lo establece el artículo 164 de la Ley Procesal que dispone que sobre las contiendas sobre estado o capacidad de las personas, sea cual fuere el interés pecuniario que de ellas emanará, conocerán los jueces de Primera Instancia y donde existiesen juzgados especializados, los de lo Familiar.

En tal virtud, la competencia por razón de la materia, corresponde al juez de primera instancia especializado en materia familiar en aquellos partidos judiciales que existan jueces de esta materia, en caso contrario lo será el juez de primera instancia de lo civil y en caso de no existir juzgado especializado por materia, el competente es el juez de primera instancia mixto, conforme a lo establecido por el citado artículo 164 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 101 fracciones III y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

---

<sup>226</sup> Gómez Lara, Cipriano, *Teoría General del Proceso*, México, Editorial Harla, 2002, p.189.

Por otra parte, en cuanto a la competencia territorial el juez competente para conocer del divorcio por mutuo consentimiento, es aquel en el que está ubicado el domicilio conyugal de los peticionarios. Lo que encuentra su fundamento en lo dispuesto por la fracción III del numeral 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 161, fracción XII, de la Ley Procesal Civil en el Estado.

Para justificar la competencia, se sugiere exhibir documentación con la cual se acredite el domicilio conyugal, como puede ser la correspondencia que reciban los interesados ya sea oficial o comercial; al igual que los recibos de energía eléctrica, agua potable, teléfono, etcétera.

En relación con la competencia del juez para conocer del divorcio voluntario Pallares<sup>227</sup> considera que en primer lugar se tienen que resolver si el divorcio voluntario es un verdadero juicio o constituye un proceso en vía de jurisdicción voluntaria, a lo que este tratadista concluye que el mismo es un verdadero juicio ya que existen cuestiones entre las partes tomando en consideración que la parte contraria a los cónyuges es el Ministerio Público que representa los derechos de los hijos, por lo que el juez competente es el del domicilio conyugal.

#### **4.2.2 Vía procesal.**

El divorcio voluntario se ventila en la vía de Tramitación Especial según lo disponen los artículos 266 y 764 de la Ley Procesal Civil para este Estado, toda vez que este tipo de trámites por su naturaleza resulta ser especial al encontrarse regulada en el capítulo IV del título Duodécimo de la ley en cuestión.

---

<sup>227</sup> Pallares, Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, 21ª ed., México, Porrúa, 1994, p. 268.

#### 4.2.3 Personalidad, capacidad y representación.

Personalidad jurídica. Es aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros<sup>228</sup>.

Capacidad jurídica. Es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones.

Representación jurídica<sup>229</sup>. La representación es una figura jurídica por la cual los efectos de un acto jurídico se radican en una persona distinta del que lo celebró.

Atendiendo a su origen, cabe clasificar la representación en legal (que tiene su fundamento en la ley) y voluntaria (que tiene su origen en la autonomía privada, en un acto de voluntad del representado)<sup>230</sup>.

La personalidad dimana de la propia calidad de los comparecientes en la solicitud, y su calidad de esposos dimana del acta de matrimonio, por lo que tal requisito procesal se tendrá por satisfecho en términos del artículo 40 de la Ley Procesal Civil para este Estado, ya que ambos consortes deben apersonarse a juicio por su propio derecho.

Por otra parte, la capacidad quedará acreditada en términos de la fracción III del artículo 1º de la Ley Civil Adjetiva, en razón de que se justifique

---

<sup>228</sup> Sánchez Cordero Dávila, Jorge Antonio, *Introducción al Derecho Mexicano. Derecho Civil*, México, UNAM, 1981, Serie textos y estudios legislativos, núm. 39, *passim*.

<sup>229</sup> *Ídem*.

<sup>230</sup> Véase, Enciclopedia Jurídica, *Representación*, disponible en <<http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/representacion/representacion.htm>>, página visitada el 20 de noviembre de 2012.

que son mayores de edad y que no obre prueba que presuma limitación al ejercicio del derecho solicitado.

En este apartado es pertinente señalar que en las diligencias que se prevén para el trámite del divorcio voluntario, los interesados no pueden tener representación alguna, pues en forma clara y precisa el numeral 772 del Código Procesal Civil, al disponer que en las diligencias a que alude el capítulo respectivo, los cónyuges no podrán hacerse representar por procurador, sino que deben comparecer personalmente; la salvedad al caso, corresponde en aquellos supuestos a que se deben hacer acompañar del tutor especial, y que se presenta cuando uno u ambos cónyuges sean menores de edad, ya que en este supuesto el numeral 771 ordena que se necesita de un tutor especial para poder solicitar el divorcio por mutuo consentimiento.

#### **4.2.4 Legitimación a la causa y al proceso, de los comparecientes para solicitar el divorcio.**

Sobre la legitimación tanto al proceso como a la causa<sup>231</sup>, debemos decir que la primera de ellas se identifica con la falta de personalidad o capacidad, se encuentra referida a un presupuesto procesal necesario para el ejercicio del derecho que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso ya sea como actor o como demandado; mientras que la segunda implica que la acción se emprenda precisamente por el titular del derecho que se reclama y se le denomina activa, en tanto que la pasiva, ser requiere que se emprenda contra la persona titular del deber que se exige. La legitimación de las partes prevista en el numeral 39 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se define como una de las condiciones

---

<sup>231</sup> [J] XVII.1o.17 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Novena Época, noviembre de 2000, p. 875. Legitimación en la causa. Corresponde determinarla al juzgador con base en el material probatorio aportado en el juicio y no en las declaraciones unilaterales de las partes.



necesarias para la procedencia de la acción y debe determinarse por el juzgador atendiendo al material probatorio aportado en el sumario de origen, y no en las declaraciones unilaterales que realicen las partes, pues es con base en el resultado del análisis de las pruebas desahogadas en el juicio y los datos que deriven de las mismas, como debe la autoridad jurisdiccional determinar su comprobación o inexistencia.

La legitimación hace referencia a determinada relación del sujeto con la situación jurídica sustancial que se deduce en juicio. Esta relación se concreta normalmente en la afirmación de la titularidad de la relación jurídica sustancial cuya tutela se pretende en el proceso<sup>232</sup>.

Este presupuesto procesal se justifica en términos del precepto legal 81 de la Legislación Sustantiva Civil en vigor, con la exhibición desde el escrito inicial de la copia certificada de la partida del registro civil que contiene el acta de matrimonio de los interesados, documento fundatorio con la cual se acredita el vínculo matrimonial cuya disolución se pide y naturalmente el régimen matrimonial por el que hayan optado al contraer nupcias. De la misma manera en muchas ocasiones tal acta de matrimonio sirve para acreditar el domicilio conyugal y además se infiere la edad de los interesados.

La copia certificada del acta de matrimonio es absolutamente necesaria porque lógica y jurídicamente el divorcio presupone la existencia del matrimonio y su prueba.<sup>233</sup>

---

<sup>232</sup> Diccionario jurídico. Iurisconsultas. IC.com. Abogados, <<http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/legitimacion-procesal/30>>, página visitada el 20 de noviembre de 2012.

<sup>233</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, *passim*.

#### **4.2.5 Oportunidad para la solicitud de divorcio.**

En este punto se debe atender a lo previsto por el primer párrafo del numeral 406 del Código Civil vigente en el Estado en relación con el último párrafo del artículo 764, de la Ley Procesal Civil del Estado, en cuanto a que el divorcio voluntario solo debe de promoverse una vez que ha transcurrido más de un año en que se haya celebrado el matrimonio. Esto se justifica del contenido de la partida de matrimonio.

#### **4.2.6 Documentos a exhibir.**

Como se ha visto es esencial -por su carácter de fundatorio- presentar copia certificada del acta del registro de matrimonio; de la misma manera, en caso de haber procreado hijos, es menester exhibir copias certificadas del registro de nacimiento de sus descendientes. Deben de presentarse las actas de nacimiento de los promoventes, pues es exigencia del artículo 764 del Código procesal en relación con el numeral 100 de la Ley del Registro Civil, amén de que de ellas se desprende la edad de los peticionarios y su objetivo final es la anotación marginal en cada una de las actas del divorcio que se decreta; certificado médico expedido por la Secretaría de Salud o cualquier institución oficial de salud, en la que se exprese si la cónyuge mujer se encuentra o no en estado de gravidez. Documentos con los cuales se acredite la titularidad o propiedad de los bienes que conforman la sociedad legal o en su caso la conyugal, según lo pactado y naturalmente copias tanto de la solicitud como de los documentos exhibidos.

Pallares refiere que a la demanda de divorcio voluntario deben acompañarse los siguientes documentos:

*“...Copia certificada del acta de matrimonio de las personas que demandan el divorcio, copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos procreados en el matrimonio, el convenio, así como el inventario y avalúo de*

*los bienes de la sociedad conyugal que va a liquidarse por virtud del divorcio.*<sup>234</sup>

#### **4.2.7 Proceso.**

Presentada y admitida la solicitud de divorcio voluntario, el juzgador señala fecha para la ratificación de la misma por parte de los solicitantes, quienes deben de comparecer al tribunal con identificación oficial.

De la misma manera hay que considerar que el juzgador está obligado a examinar la solicitud y el convenio, y en el caso de que encuentre que éste no reúne los requisitos respectivos o que el convenio no contiene todos los puntos enumerados en el artículo 764 del Código Procesal, no están expresados claramente o son contrarios a derecho, se prevendrá a los solicitantes que los precisen y aclaren en un término que no debe exceder de diez días, apercibiéndolos de que si no lo hacen de común acuerdo se les tendrá por desistidos de su solicitud de divorcio.

Cuando la solicitud es correcta o se haya cumplido la prevención que se hubiere hecho, el juzgador debe dictar aquellas medidas que estime convenientes para asegurar la situación de los hijos menores o incapacitados en caso de haberlos, para la separación de los cónyuges, y los alimentos de los hijos y los que un cónyuge debe dar a otro en su caso, mientras dure el procedimiento, de la misma manera ordenará dar vista de dicha solicitud y los documentos en ella anexados al ciudadano Agente del Ministerio Público con la entrega de las copias simples necesarias, para que dentro de un término no mayor de diez días manifieste en forma expresa su conformidad o inconformidad respecto de la solicitud y del convenio, así como las razones en que se funde; en el caso de que el representante social exprese su

---

<sup>234</sup> *Ibídem*, p. 270.

conformidad con la solicitud y con el convenio, el Juzgador lo debe aprobar si se encuentra arreglado a derecho y citará a los cónyuges a la junta de avenimiento.

En el supuesto de que el Ministerio Público se oponga a la solicitud o a la aprobación del convenio, se debe dar vista de lo que exprese a los cónyuges y una vez llenadas las exigencias del Representante de la Sociedad o cuando ambos esposos insistan en su solicitud por estimarla arreglada a la ley, el Juez traerá los autos a la vista y resolverá si es o no fundada la oposición y aprobará o denegará la aprobación del convenio, si se presenta este último supuesto, entonces también se declarará improcedente la solicitud de divorcio.

Cuando el convenio se haya aprobado, se emite acuerdo en el que se cita a los cónyuges para que personalmente concurren al juzgado a la junta de avenimiento, la que siempre será reservada; en ella, el Juez debe procurar restablecer la armonía entre los comparecientes y si no lo obtuviere y éstos insisten en divorciarse así se debe asentar en actuaciones.

En este punto, es necesario acotar que en cualquier caso en que los cónyuges dejen pasar más de tres meses sin continuar o promover en el procedimiento, el tribunal declarará sin efecto la solicitud y mandará archivar el expediente, tal como lo dispone el numeral 773 de la Ley Procesal; por lo que es menester que los abogados postulantes que asesoran a los interesados o aun estos mismos, estén pendientes de los tiempos que trascurren, a efecto de evitar que el proceso quede sin materia y se vean en la necesidad de promover nuevamente, con la pérdida de dinero, tiempo y esfuerzo que ello significa.

Si los interesados no se avienen, se ordena el traer los autos a la vista del juzgador para emitir la sentencia respectiva en la que de ser procedente,

se declarará disuelto el vínculo del matrimonio y condenará a los cónyuges a cumplir el convenio aprobado. La sentencia que decreta el divorcio por mutuo consentimiento es apelable en el efecto devolutivo, en tanto que la que lo niega es apelable en ambos efectos.

Si la sentencia no es recurrida, una vez que se declara ejecutoriada, el juzgador debe mandar remitir copia de ella al Oficial del Registro Civil de su jurisdicción para que levante el acta de divorcio correspondiente, la archive con el mismo número de acta en el apéndice correspondiente y publique la parte resolutive de la sentencia durante quince días en las tablas destinadas al efecto; de la misma manera se debe remitir copia de la sentencia ejecutoriada al Oficial del Registro Civil que autorizó el acta de matrimonio y el de nacimiento de los divorciados para que hagan las anotaciones marginales correspondientes.

Como podrá observarse el procedimiento o trámite de un divorcio por mutuo consentimiento es relativamente fácil, práctico y con un mínimo de etapas procesales, lo que nos conduce a estimar que respecto de una solicitud debidamente planteada y una oportuna y continua intervención de los interesados al presentar en forma oportuna y correcta los escritos que contengan las peticiones para la continuación del trámite, considerando las posibles cargas de trabajo de un juzgado, tendrá como resultado que el divorcio por mutuo se ventile y obtenga resolución en un promedio de dos meses, en caso contrario, cuando la solicitud es defectuosa y los interesados por sí o por medio de sus asesores legales no promueven en forma correcta y oportuna este trámite puede prolongarse por varios meses, con el consecuente menoscabo de tiempo y dinero para los interesados, pues será materia de acuerdos de prevención para su aclaración o corrección, ya sea por parte del juzgador o bien que se genere de las observaciones que al respecto efectúe el agente social. Deficiencias comunes, según se dejó en claro en el capítulo primero de esta investigación.

Como se dijo con antelación la primera y obligada fase para la ejecución de una sentencia de divorcio por mutuo, es y corresponde a la realización de los actos administrativos que de ella emanan, como lo es el girar diversos oficios con copias certificadas de la sentencia que decreta el divorcio, siendo estos: oficio a la Dirección del Registro Civil y al Oficial del Registro Civil de su jurisdicción para que se levante el acta de divorcio, la archive con el mismo número de acta en el apéndice correspondiente y se publique la parte resolutive de la sentencia durante quince días en las tablas destinadas al efecto; girar oficio al Oficial del Registro Civil en donde contrajeron nupcias para que realice la anotación marginal del divorcio en la partida de matrimonio correspondientes; girar oficios al o los Oficiales del Registro Civil en donde pasaron las actas de nacimiento de los interesados para que se efectúen las anotaciones marginales inherentes al divorcio en sus partidas de registro de nacimiento, todo ello acorde a lo previsto por el artículo 775 del Código Procesal Civil en concordancia con el artículo 422 del Código Civil y de los numerales 98, 99 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado.

Por su trascendencia e importancia el tema de la ejecución de este tipo de sentencias y las circunstancias que en ello se pueden presentar, será expuesto en forma acuciosa en capítulo especial.

#### **4.3 El Convenio y su clausulado.**

Todos los autores<sup>235</sup> nacionales consultados coinciden en que el convenio que debe acompañarse a la demanda de divorcio voluntario por la vía judicial, deberá establecer los siguientes puntos:

---

<sup>235</sup> Baqueiro Rojas Edgar, *op. cit.*, nota 212, pp. 158 y 159.

1. La persona que se hará cargo de los hijos menores.
2. La manera en que se atenderá a las necesidades de los hijos menores.
3. El domicilio en el que habitará cada uno de los cónyuges.
4. La forma de garantizar los alimentos del acreedor alimentario<sup>236</sup> durante el procedimiento.
5. El modo de administrar la sociedad durante el procedimiento.
6. La designación del liquidador de la sociedad.
7. El inventario de bienes y deudas comunes.

Como se ha referido, acorde a lo previsto por el artículo 406 de la Ley Sustantiva en relación con el 764 del Código Procesal, el convenio de divorcio en Jalisco, debe contener un clausulado que se ajuste a las siguientes formalidades:

- Designación del cónyuge a quien sean confiados los hijos del matrimonio, tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio y, en general, el arreglo de la situación de aquéllos;
- El modo de subvenir a las necesidades de los hijos y, en su caso, las del alumbramiento, tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio, así como la forma de asegurar su pago y los incrementos respectivos por concepto de alimentación;
- La casa que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento;
- La cantidad que a título de alimentos, un cónyuge debe pagar a otro durante el procedimiento o después de ejecutoriada la sentencia; la

---

<sup>236</sup> Se le llama acreedor alimentario al individuo que tiene el derecho y la obligación de recibir alimentos para su propia supervivencia, y deudor alimentario al individuo obligado a satisfacer esa obligación.

forma de hacer el pago y la garantía que debe darse para asegurarlo, o bien la manifestación expresa de que ambos cónyuges quedarán exentos de toda obligación a este respecto, en caso de que así se convenga; y

- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal o legal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, así como la designación de liquidadores. A ese efecto, se acompañará un inventario y el proyecto de partición de todos los bienes de la sociedad.

El convenio en el divorcio por mutuo consentimiento, debe considerarse como un verdadero contrato de derecho público, ya que el Estado y la sociedad, están interesados en que se otorgue conforme a las leyes que rigen el matrimonio y el divorcio, pues en el deben de tomarse en cuenta y consideración los intereses de la prole así como los derechos de los cónyuges que se derivan del matrimonio.

Pallares, señala que el convenio es:

*“...un contrato sui géneris, porque la ley obliga a los consortes a incluir en él diversas estipulaciones sin las cuales carece de validez y eficacia jurídicas. En otros términos, los consortes no tienen plena libertad para otorgarlo fuera de las prescripciones legales.*

*También tiene la particularidad de que cuando haya sido aprobado por el juez mediante sentencia ejecutoria, la violación del mismo no da lugar a su rescisión para obtener mediante ella que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de haberse celebrado. En otras palabras, los consortes tienen el derecho de pedir que se cumpla el contrato y aún de lograr su ejecución forzosa por la vía judicial, pero de ninguna*



*manera lograrán que por la violación del mismo se nulifique el divorcio y vuelvan los divorciados a estar unidos por el matrimonio.”<sup>237</sup>*

Como convenio regulador de la separación, es un documento que se elabora cuando la separación es de mutuo acuerdo o por uno con el consentimiento del otro, para regular las relaciones económicas de los cónyuges, se debe aportar junto a la demanda y entre otros debe regular aspectos como la guarda y custodia, régimen de visitas y comunicaciones, uso de la vivienda y ajuar familiar, pensión de alimentos, pensión compensatoria, etc.

El convenio regulador debe contar con la aprobación del juez, quien puede exigir que se adjunten al convenio determinadas garantías<sup>238</sup>.

#### **4.4 Pactos indebidos o ilícitos.**

Como se ha dicho a lo largo de este documento y se constata del resultado de la investigación de campo a que se alude en el capítulo primero, es constante el que se formulen cláusulas que no se ajustan a derecho o no son acordes ni congruentes con la realidad de las personas involucradas, debe de evitarse este tipo de pactos, pues tan solo suelen convertirse en prevenciones, aclaraciones o aun en oposición por parte del Agente Social, lo que traerá como consecuencia que el trámite se dilate por plantar cuestiones inadecuadas.

---

<sup>237</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 49.

<sup>238</sup> Universidad de Salamanca, “Divorcio. Doctrina y Legislación Española”, *Revista jurídica*, España, Universidad de Salamanca, 2012, *passim*.

### **Condiciones.**

Resulta habitual que se expresen pactos condicionados, algunos absurdo o fuera de contexto, como ejemplo de ello, nos encontramos que por lo general los hijos quedan en custodia de la madre y en muchos de estos asuntos se pacta que si la madre desarrolla una conducta inadecuada en la atención, cuidado y educación de sus hijos o que si su conducta personal es disoluta, inmoral, vergonzosa o cualquier calificativo de esta naturaleza, los hijos pasaran a custodia directa del otro progenitor.

Sobre esto, se debe decir que si bien es verdad que la propia Ley sustantiva<sup>239</sup> como procesal<sup>240</sup>, indican un orden de custodia de los hijos para cuando los padres vivan separados, aquellos deben estar en forma prioritaria con la madre si es que existe la disposición y la posibilidad afectiva de su custodia y además, no tiene una conducta nociva a la salud física o psíquica del o los menores, no menos cierto resulta que lo mismo acontece en cuanto al padre, pues también éste puede no tener disponibilidad afectiva y por supuesto presentar una conducta nociva a la salud física o psíquica de sus hijos.

Por otra parte, se insiste que este trámite es con el objetivo directo de obtener la disolución del vinculo matrimonial y no existe litigio alguno entre los interesados ni el trámite ni en su ejecución, por lo que este tipo de pactos o similares deben ser reprobados y por supuesto conminar no solo a la madre sino a ambos, a que se conduzcan de manera adecuada hacia sus hijos. Los padres, están en absoluta libertad de que llegado el caso y de darse los supuestos a que aluden, hagan valer las acciones correspondientes en juicio por separado.

---

<sup>239</sup> Véase, Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, art. 572.

<sup>240</sup> Véase, Código de Procedimientos Civiles del estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, art. 225.

Distinta restricción que se utiliza regularmente, es la de condicionar a la mujer y excepcionalmente al hombre -según a quien se otorgue la custodia- que le está prohibido que al domicilio familiar ingresen personas ajenas a los miembros de la familia, especialmente del sexo opuesto. Esto además de ilícito, ya que no es factible establecer condición alguna de este tipo, es aberrante el que se pretende por uno de los cónyuges que en el otro se coarte su derecho y libertad a elegir sus amistades o peor aún, pretender limitar su derecho a rehacer su vida sentimental, aspirando -aun después de divorciados- a continuar sometiendo a su ex pareja a su voluntad y capricho.

Otro pacto que entra en esta categoría, es cuando en la partición se indica que esquís bien inmueble queda en propiedad exclusiva de la cónyuge mujer o del varón, pero que no podrá venderlo o transmitirlo nunca o hasta que trascurra determinado tiempo; aspecto que por supuesto ni siquiera es materia de aclaración sino de reprobación inmediata, pues el propietario de un bien esta en absoluta libertad de efectuar lo que quiera en relación con el mismo. En fin, se presentan una serie de condicionantes que no tienen sentido ejemplificar, lo que se pretende es que a los estudiantes o pasantes de derecho les quede claro que no deben de hacer en estos aspectos.

### **Desconocimiento de hijos.**

Otro aspecto unto que si bien no es habitual, se presenta en algunas ocasiones, es la pretensión de un punto de convenio completamente desafortunado, que corresponde a que los interesados, -obviamente con una asesoría inexacta, ya sea por desconocimiento o en forma por demás dolosa- expresan que uno de los hijos o bien el hijo que espera la cónyuge mujer no es hijo del varón, por lo que se desconoce la paternidad y no se asume obligación alguna éste en relación con el propio infante o el producto del embarazo.

Es claro que cualquier tipo de convenio en tal sentido es y debe ser reprobado por el juzgador, pues tal pacto es contrario a derecho, tomando en consideración que la ley civil es clara en proteger a los hijos nacidos dentro del matrimonio, conforme lo establecen los artículos 456, 457, 458, 470, 477 y demás relativos de del Código Civil, que entre otras cosas, disponen cuales hijos se presumen de matrimonio, que el marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, aunque esta declare que no son hijos de su esposo.

Además, en relación con la filiación no puede haber, ni transacción ni compromiso en árbitros, más aun, en forma clara se dispone que no basta el dicho de la madre para excluir de la paternidad al marido, mientras que éste viva, ya que solamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo concebido durante el matrimonio y de manera precisa se indica que el desconocimiento de un hijo, de parte del marido o de sus herederos, se hará por demanda en forma ante el juez competente, pues todo desconocimiento practicado de otra forma o manera es nulo; con ello queda claro que es ilegal que en un trámite de divorcio voluntario, cuyo único fin es declarar disuelto el vínculo matrimonial, se pretenda desconocer la paternidad, por más que ambos cónyuges así lo señalen, pues en todo caso, se deberá promover la acción respectiva mediante el juicio que corresponda.

Hijo. Del latín “filius”, es aquel animal nacido de otros que lo engendraron, de distinto sexo, que son sus padres. Es siempre un asociado con el de padres. No hay hijos sin padres ni padres sin hijos, aún cuando no estén vivos. Si una persona carece de padre o madre o de ambos, porque fallecieron, es un huérfano.

### **Bienes no Pertenecientes a la Sociedad Legal.**

Un caso más que se presenta en forma frecuente y errónea es el relativo a que en la liquidación de la sociedad legal se pretende involucrar bienes que por su naturaleza jurídica no forman parte de dicho patrimonio común, caso concreto es cuando se incluyen bienes agrarios en el inventario y naturalmente en la partición, cláusula que también tendrá que ser reprobada ya que el o los bienes de tal naturaleza, se estiman como separación de bienes, conforme a la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, que en su establecía que en su artículo 78, entre otras cosas, dispone que *“Para los efectos de derechos agrarios, el matrimonio se entenderá celebrado bajo el régimen de separación de bienes.”*

En relación con este punto se invoca una ejecutoria que si bien no es aplicable al caso concreto, es evidente que de su contenido se confirma lo expresado.<sup>241</sup>

### **Otros aspectos de liquidación.**

Bajo la misma tesitura se encuentra aquellos bienes que ya salieron del patrimonio de la sociedad, pero que en forma indebida los listan y someten a pactos entre ellos o hasta de terceros, al respecto se debe tener en claro que si el bien -ya sea mueble o inmueble- no forma parte de patrimonio común, no tiene por qué ser materia de inventario en los haberes, y en todo caso, según las circunstancias específicas que sobre el asunto en ese momento imperen, pueden listarse, pero en el rubro de cargas de la sociedad.

### **Respecto de Terceros.**

---

<sup>241</sup> [J] III.1o.A.56 A, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Novena Época, junio de 1998, p. 637. Derechos agrarios. Caso en el que los cónyuges o concubinos de ejidatarios tienen capacidad legal para heredarlos.

Este se presenta cuando en alguna de las cláusulas se pretende incluir obligaciones o derechos de terceros ajenos al trámite, o sea, que se pretende involucrar a terceras personas de cumplimiento de obligaciones u obtención de derechos y no sólo eso sino que también se intenta que en caso de no cumplirse el pacto por alguno de ellos el juez lo realice en su rebeldía; como muestra diremos que se indica qué bien inmueble de la sociedad patrimonial del matrimonio fue materia de venta, donación o cualquier acto de transmisión pero que la misma no se ha formalizado ante Notario Público que por ende pactan que en determinada fecha se realizará la escrituración respectiva ante determinado Notario Público y que en caso de que alguno de ellos no quiera suscribir la escritura entonces el juez lo hará en su rebeldía.

Lo anterior no procede, pues en primer lugar la finalidad del proceso es concreta y no puede involucrarse en el mismo cuestiones ajenas a él, en todo caso es claro que ambos deben de cumplir con su obligación y que en caso de que uno o ambos se nieguen, el tercero en su calidad comprador podrá hacer valer la acción proforma o la que estime conveniente en juicio autónomo.

Otro ejemplo, se presenta cuando se expresa que la sociedad tiene un adeudo, pero que en forma exclusiva solo uno de ellos será el obligado a cubrir el pago, liberando al otro de cualquier obligación al respecto; es válido que entre ambos se pacte que a cargo de uno de ellos está el cumplir con el pago, pero de ninguna manera que el otro no responda o quede liberado de esto, ya que el único que podría hacerlo es justamente el tercero en su calidad de acreedor ya que un pacto de tal naturaleza afecta a sus intereses o derechos, por lo que aun el remoto supuesto de que esto fuese aprobado, no tendrá efecto alguno en relación con el tercero ya es obvio que éste podrá exigir de ambos, el cumplimiento.

#### **4.5 Pactos inapropiados.**

El Convenio además de ajustado a derecho debe estar plasmado con sentido lógico y congruente a la realidad de los interesados en el proceso y los hijos de estos.

No en pocas ocasiones nos encontramos que se formulan puntos de convenio que resultan incompatibles con el resto de los pactos y la realidad de la familia o bien con expectativas a futuro. Como muestra de estas irregularidades se encuentran: que la madre estará a cargo de la custodia de los tres hijos y por ende a cargo de la educación de estos, por lo que se obliga a inscribirlos en determinados colegios, a proporcionarles clases de idiomas, de deportes y hasta viajes al extranjero, sin embargo con sorpresa nos encontramos que el padre se obliga a entregar la minúscula cifra de mil pesos mensuales por concepto de alimentos para sus hijos, uno se pregunta ¿estarán consientes del sentido de las cláusulas?, ¿Tendrán conciencia de los gastos que genera una manutención ordinaria y lo que cuestan los aspectos extracurriculares?.

Ya antes se indicó lo impertinente de los puntos que se pactan en relación con la convivencia cuando la condicionan a esta no debe de interferir en la vida escolar, en aspectos de educación extraordinaria, de descanso, de enfermedad o cualquier asunto del hijo o los hijos y entonces uno se pregunta, bajo tales supuestos, ¿A qué hora podrá el padre –o la madre- convivir con sus hijos?

En otras ocasiones se estipula que los hijos no podrán convivir con la persona que tenga una relación amorosa con el padre o la madre; que a la mamá o al papá, les está vedado proporcionar alimentos chatarra a los hijos y que de hacerlo perderá la custodia; que la señora no puede volverse a casar; que el progenitor y los hijos bajo su custodia, no pueden cambiar de domicilio;

que si ella entra a laborar perderá la custodia de los críos. Qué puede hacerse cuando se estipula que el padre otorgue por concepto de alimentos una cantidad superlativa de dinero, si la verdad es que carece de bienes y de posibilidades económicas para cumplirlo.

En fin una serie de cuestiones que además de indebidas son ilógicas. En estos casos uno se pregunta, ¿acaso los interesados o sus asesores, tienen idea de lo que se está pactando? , o al elaborar el convenio lo hicieron en la computadora utilizando un formato de otro convenio ¿y pactos de éste quedaron en aquel?, o el abogado sabe que el pacto es indebido, pero acepta los caprichos de las partes por la tozudez de éstas.

Se especula sobre los motivos, pero lo importante es que el asesor jurídico realice en forma adecuada su labor e indique a los interesados que el convenio además de ajustado a derecho, se debe realizar en atención a las circunstancias económicas y sociales del entorno y capacidad de los promoventes. Si se quiere tener un buen divorcio, es evidente que se tiene que presentar un buen convenio, entendiendo como tal el que esta ajustado a derecho, es adecuado y factible de cumplir por los interesados, con el objetivo principal de que éstos se encuentren en las mejores circunstancias posibles para emprender en forma sensata una nueva etapa de la vida de la familia y ésta se desarrolle en armonía, comprensión y tolerancia en beneficio de todos sus integrantes.

La formulación de convenios con pactos ilícitos o inapropiados, no es más que el reflejo de una asesoría jurídica incorrecta, como se desprende del resultado de la investigación de campo que se analiza en el capítulo primero, ya sea por desconocimiento del derecho, negligencia en el desempeño profesional o trasfondo con fines de índole económica, que solo generan descontento en los justiciables, pues aun en un procedimiento en donde ambos están de acuerdo, el tramite se dilata o no se obtiene lo que



inicialmente se propuso, ese descontento social resulta grave pues, “...*Esto es lo que parece el Derecho para gran parte de la población, ¿de qué sirve crear abogados que salen a no resolver conflictos o peor aún a empeorarlos?, ¿de qué sirve un sistema judicial que resuelve conforme a formalismos legales y no resuelve el conflicto?, ¿de qué sirven un sistema de normas jurídicas, si en muchos de los casos se encuentran caducas y no coadyuvan a la resolución de conflictos conforme a la justicia y equidad que busca la sociedad?, ¿de qué sirven las facultades de derecho si forman a los alumnos conforme al mismo sistema viciado y que no ha podido resolver los males antes mencionados?*”<sup>242</sup>.

Un convenio es: Tratado o acuerdo entre personas o entidades, en el que se obligan a cumplir alguna cosa<sup>243</sup>.

#### **4.6 Oposición del Agente Social o Ministerio Público.**

Como anteriormente se señaló, debe darse vista al el representante social desde la admisión de la solicitud de divorcio y está facultado para oponerse a la solicitud o al convenio. De manera clara el numeral 769 de la Ley Adjetiva, señala que cuando el Agente Social, antes Ministerio Público, se oponga a la solicitud o a la aprobación del convenio, se dará vista de lo que exprese a los cónyuges y una vez llenadas las exigencias del Representante de la Sociedad o cuando ambos esposos insistan en su solicitud por estimarla arreglada a la ley, el Juez traerá los autos a la vista y resolverá si es o no fundada la oposición y aprobará o denegará la aprobación del convenio. En este último caso, declarará también improcedente la solicitud de divorcio.

---

<sup>242</sup> Pérez Saucedo, José Benito *et al.*, *op. cit.*, nota 10, *passim*.

<sup>243</sup> Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 22<sup>a</sup> ed., Madrid, Espasa-Calpe, 2001.

Pallares, en su Diccionario de Derecho Procesal Civil señala: “... *en el divorcio voluntario el Ministerio Público es parte en razón de que interviene para velar por los derechos e intereses morales y patrimoniales de los hijos menores de edad e interdictos, así también para que se cumplan debidamente las leyes relativas al matrimonio y al divorcio.*”<sup>244</sup>

Sobre este tema, la práctica nos refleja que por lo general existe oposición del Agente Social cuando la solicitud o convenio no se encuentran ajustados a derecho, siendo más habitual lo último, ya que precisamente las cláusulas indebidas o inoportunas provocan dicha oposición y ello se presenta si el juzgador no fue acucioso en el estudio y análisis del escrito inicial –defectuoso- admitiendo la solicitud sin prevención alguna, pues justamente ante ello, al momento de dar vista al representante social y observar alguna omisión o irregularidad lo manifiesta a través de la oposición respectiva.

La obligación primaria se encuentra en el Juez, ya que su función es justamente el efectuar un correcto estudio y análisis de todos los asuntos que se le presentan y es quien no solo debe, sino que tiene que ordenar las prevenciones que estime pertinentes para que se aclare, corrija o complemente una solicitud o pacto que no sea debido, más aun, reprobar aquel que desde su planteamiento no está ajustado a las normas jurídicas respectivas, de ser así, poco trabajo tendrá el representante social, pues los puntos sobre los cuales pudiese válidamente oponerse ya estarían siendo considerados por el propio juez<sup>245</sup>. Sin embargo no hay que soslayar que no

---

<sup>244</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 227, p. 268.

<sup>245</sup> [J] VI.1o.C.90 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Novena Época, Registro: 174475, Civil, agosto de 2006, p. 2177. Divorcio voluntario. Es indispensable que la comparecencia del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, se acredite fehacientemente para estar en condiciones de concluir que el convenio respectivo ha sido analizado por él, si estuvo o no de acuerdo con lo

siempre acontece así, ya sea por las cargas de trabajo o por simple descuido se emite el acuerdo inicial admitiendo la solicitud y nada se indica sobre un pacto incorrecto, generando que se presente la oposición, a lo cual, los cónyuges pueden simplemente cumplir con las exigencias del Representante de la Sociedad o bien insistir en su solicitud por estimarla arreglada a la ley, en este supuesto, el Juez traerá los autos a la vista y resolverá si es o no fundada la oposición y aprobará o denegará la aprobación del convenio, de ser así, también debe declarar improcedente la solicitud de divorcio.

Por otra parte, tanto la solicitud y convenio pueden ser correctos y el Representante Social puede estimar que no es así, por lo que efectuará la oposición respectiva, en su momento el juez emitirá resolución, en la que atendiendo a los argumentos que aquel vierta y los de los cónyuges resolverá si es o no fundada la oposición, si los promoventes están en lo correcto aprobará el convenio y la interposición de la oposición sólo tendrá efectos dilatorios; lo que no acontece cuando resulta que es fundada, pues como se indicó el juzgador denegará la aprobación del convenio y como consecuencia la improcedencia de la solicitud de divorcio.

Algo debe quedar claro, si el asesor jurídico conoce todos los aspectos jurídicos procesales y sustantivos que tienen colación con este tipo de asuntos, solicitud y convenio estarán ajustados a derecho, evitando prevenciones u oposiciones y por ende, los interesados obtendrán una respuesta jurídica pronta a sus intereses.

---

propuesto por las partes y en particular con lo determinado en torno a los intereses de los menores involucrados (Legislación del estado de Puebla).

#### **4.7 Aprobación judicial del convenio de divorcio.**

Sobre este tema es válido expresar algunos comentarios y precisiones. Como se indico, es usual que el juzgador manda prevenir a los interesados para que aclaren o corrijan el contenido de una cláusula o bien, la o las repruebe, esto genera que el abogado patrono o asesor jurídico se presente ante el juez a señalarle que su acuerdo es indebido o carece de sentido, ya que ello obedece a la voluntad de las partes, que si los promoventes es lo que quieren y han pactado es lo que debe de prevalecer y de aprobarse en forma lisa y llana pues por encima de ellos no caben los criterios u apreciaciones del juzgador.

Ya sea verbal o por escrito, el juzgador en los mismos términos que se le plantea, señalara que el hecho de que la voluntad de las partes es punto esencial en este tipo de procesos, de ninguna manera implica el pacto o convenios plasmados sean correctos o se encuentren ajustados a derecho. El juez, no es un objeto decorativo que solo está ahí para sancionar en forma aprobatoria cualesquier cosa que se les ocurra por más de acuerdo que estén los interesados, estimar que la función del juzgador sea en tal sentido, es desconocer el derecho, la función jurisdiccional, las partes de un proceso, en fin, el juez no solo puede sino que está obligado a verificar que los puntos de pacto se encuentren debida y plenamente ajustados a derecho, que sean congruentes, claros, ciertos, adecuados, que corresponden a los asuntos respectivos y no sean ajenos o inconducentes, debemos recordar que la voluntad de las partes debe estar sujeta a la norma.

En líneas precedentes se han expresado un sin fin de ejemplos – algunos cotidianos, otros no tan comunes- de puntos de convenio que son ilícitos o absurdos y que se presentan ante un juzgado para su aprobación; hemos insistido que un convenio correcto y ajustado a derecho no solo da

certeza jurídica sino que evita dilaciones innecesarias o ejecuciones tortuosas o imposibles (pese a su aprobación), por lo que se insiste, el juez es el primer obligado a verificar que todo sea correcto y cuando no lo es, mandar prevenir a las partes o de plano reprobar la cláusula indebida, lo que puede efectuarse desde el acuerdo inicial y no esperar hasta el momento procesal de la aprobación del convenio, pues ello dará oportunidad y tiempo a los interesados de que rectifiquen o aclaren sus pretensiones, si el juzgador no lo hace lo más seguro es que el representante de la sociedad si lo realice a través de la oposición respectiva, con la consecuente pérdida de tiempo.

Por otra parte y en relación al tema que aquí nos ocupa, el citado artículo 769 del Código Procesal, prevé el trámite para la oposición del agente social y en su parte final indica que si el Juez resuelve fundada la oposición, denegará la aprobación del convenio y como repercusión, se debe declarar improcedente la solicitud de divorcio.

Lo anterior no debe confundirse cuando por la oposición o de manera oficiosa, el Juez reprueba una cláusula impropia o inconducente que no es vital. Debe atenderse o distinguirse que punto de acuerdo es el reprobado, sobre todo cuando el resto del convenio si es materia de aprobación.

Si nos encontramos que en la solicitud de divorcio falta algún requisito para su procedencia, o que la cláusula reprobada corresponde a los puntos esenciales del convenio, como sería el que se pretenda liberar a alguno de los consortes de su obligación de proporcionar alimentos a los hijos, desconocer la paternidad, o simplemente liberarse de cualesquiera de las obligaciones inherentes a la maternidad y paternidad, etcétera, o bien cuando lo que se reprueba no es una sino varias cláusulas esenciales, en estos casos es claro que el Juzgador también debe declarar la improcedencia de la solicitud.

Cosa diversa acontece, cuando la estipulación no aprobada corresponde a uno de los ejemplos citados, como lo es el que se pretenda involucrar en la liquidación y partición de los bienes de la sociedad, un bien de naturaleza ejidal que por su naturaleza debe considerarse bajo el régimen de separación de bienes, o una condición absurda e ilegal, como el que cualquiera de los cónyuges se obliga a no contraer nuevas nupcias, la no aprobación de este tipo de componendas no alcanza a afectar los aspectos capitales del convenio, por lo que no se considera que bajo tales situaciones se deba declarar improcedente la solicitud de divorcio, sino tan sólo no aprobarse o reprobarse la cláusula desafortunada y aprobarse el resto del convenio y sin consecuencia jurídica alguna para la solicitud de divorcio y naturalmente en su oportunidad, el clausulado aprobado será parte integrante del fallo definitivo.

Desde el punto de vista jurídico en el momento de emitir la sentencia respectiva, los puntos del convenio materia de aprobación son y forman parte de la misma, por ende, en su momento resultan cuestiones resueltas y materia de cosa juzgada, por lo que éste debe ser analizado por el juzgador quien puede y debe advertir si el convenio sometido a su aprobación, se encuentra o no prohibido por la ley; si dicho convenio reúne o no la forma precisada por la ley procesal, si las partes contratantes tienen o no capacidad jurídica o autorización judicial para celebrarla, asimismo es necesario que el referido convenio vincule exclusivamente a las partes interesadas y su prole – si la hubiera- y no en relación a terceros, etcétera, todo ello atento al principio de congruencia.

El convenio celebrado en este tipo de procesos y que es materia de aprobación, como se ha dicho forma parte de la propia sentencia que una vez que cause estado, representa, ya no la simple voluntad de quienes lo celebraron, sino la postura, criterio y decisión de la autoridad jurisdiccional respecto de los puntos sometidos a su conocimiento, con el rango de verdad

legal; por lo que a efecto de que se alcance ese rango de sentencia ejecutoria, cosa juzgada o verdad legal, se requiere necesariamente de la aprobación mediante la actuación jurisdiccional del juez, ante quien se tramita el proceso.

Empero, como antes se indico, tal aprobación no puede deducirse de la manifestación de la voluntad de las partes que efectúan el convenio para pasar por él en todo tiempo, ni considerarse implícita en la declaración judicial de tener por aprobado el convenio en cuestión, sino que la misma debe ser expresa, no como un mero formulismo o empleo de una frase sacramental, sino como una condición sine qua non, para alcanzar ese rango de verdad legal, tanto formal como materialmente, porque la naturaleza jurídica de esa aprobación conlleva la realización de actos de esa índole, por parte del juzgador ante quien se somete, como son, el análisis del convenio para verificar que el mismo satisface los elementos reales, personales y formales que le son propios, además, que no contraviene ninguna disposición de orden público, así como, la decisión misma del juzgador de aprobarlo en forma definitiva en la sentencia, lo cual debe de plasmarse en forma escrita, de manera clara, precisa y congruente, es decir, expresamente, de acuerdo a las reglas adjetivas y sustantiva de índole legal, que regula los requisitos que deben satisfacer las resoluciones judiciales de esta naturaleza.

Es patente que dentro de un proceso de disolución del vínculo matrimonial en forma voluntaria, el convenio que se presente para finiquitar el mismo, tiene que reunir las exigencias señaladas por Ley Sustantiva en su numeral 406 en relación con el 764 de la Ley Adjetiva Civil en los que se prevé qué requisitos debe contener el convenio que se presente por los cónyuges para el divorcio por mutuo consentimiento y por supuesto que los pactos efectuados sean correctos y debidamente ajustados a derecho.

Por otra parte, los convenios aprobados en este tipo de juicios como se ha visto, son y forman parte de la sentencia, y aun bajo el estricto sentido de que causa estado y por ende adquiere la calidad de cosa juzgada, si son materia de posible modificación cuando cambia la situación o circunstancias previstas en el convenio. En este caso el artículo 89- C de la Ley Procesal en su segundo párrafo señala que las resoluciones judiciales firmes dictadas en juicios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga éste código, sólo pueden alterarse y modificarse cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva y ello se demuestre plenamente en el juicio o procedimiento respectivo.

En tales términos si la propia legislación prevé la posible variación de las sentencias judiciales emitidas en un juicio -o sea bajo litigio- que versan sobre dichas cuestiones, es claro que en el divorcio por voluntario la variación no puede ser en relación con la declaratoria de disolución del vínculo matrimonial decretada, sino en relación con los pactos del convenio sobre alimentos, custodia, convivencia, etcétera; estos aspectos pueden ser reformados cuando las circunstancias que los rodean varían y por consecuencia la estipulación respectiva puede ser sujeta de modificación mediante el procedimiento correspondiente; en este supuesto ninguna de las partes podrá oponer la excepción de cosa juzgada, puesto que “...en materia familiar opera la teoría de la imprevisión..”<sup>246</sup>

Para su validez, el Convenio necesita aprobación judicial. Si no es aprobado judicialmente, se reconoce su validez respecto de cuestiones sobre las cuales las partes tienen poder de disposición, como por ejemplo las de carácter patrimonial-económico. Sin embargo las relativas a los hijos menores

---

<sup>246</sup> Chávez Asencio, Manuel F., *op. cit.*, nota 210, p. 472.



de edad; como la pensión alimenticia o la guarda y custodia, al tratarse de cuestiones de orden público, requieren un pronunciamiento del Juez aprobando los puntos propuestos<sup>247</sup>.

#### **4.8 Sentencia Ejecutoriada del divorcio por mutuo.**

A fin de no ser reiterativos, los elementos que debe contener una sentencia, las formalidades de fondo y forma, los principios que deben respetarse y demás características, fueron materia de análisis en el capítulo segundo en relación con la sentencia de un juicio adversarial de divorcio, (ver. 2.11) por lo que en todo caso, en este apartado se efectúa bajo la perspectiva del divorcio por mutuo consentimiento; en un proceso de esta índole, es claro que el fallo definitivo debe reunir todos y cada uno de los requisitos aludidos, empero como no existe litis, no hay punto a dilucidar en relación con aspectos cuestionados, o sea no tendrá la calidad de una sentencia condenatoria sino exclusivamente de índole declarativo en donde se decretara la disolución del vínculo matrimonial existente entre los solicitantes, en cuanto al convenio presentado por las partes, el fallo tiene que establecer que su clausulado debe regir respecto de las consecuencias del divorcio y obligar a las partes a cumplirlo en los términos aprobados, bajo apercibimiento que de no hacerlo en forma voluntaria, cualquiera de ellos, puede promover su ejecución forzosa en el periodo de ejecución correspondiente.

Es poco común que una sentencia en un proceso de divorcio por mutuo consentimiento, sea materia de apelación, pero no por ello improbable, pues si el fallo no se ajusta a derecho cualquiera de los interesados puede

---

<sup>247</sup> SuDivorcio.es. Consultas sobre el divorcio. Divorcio y Convenio Regulador, <[http://www.sudivorcio.es/divorcio\\_convenio.htm](http://www.sudivorcio.es/divorcio_convenio.htm)>, página visitada el 20 de noviembre de 2012.

impugnarla. En el entendido que si el motivo es un simple error que no trascienda al fondo del asunto, será materia de simple aclaración.

Sobre la sentencia ejecutoriada en general, tenemos que: *“Es la autoridad que adquieren la mayoría de las sentencias firmes o inimpugnables a través de medio de defensa ordinarios por no admitir recurso o por haberse agotado, en virtud de lo cual se les otorga la presunción de que su contenido es verdadero y justo para el derecho (verdad legal), impidiendo que por motivos de seguridad jurídica la causa resuelta se pueda someter nuevamente a proceso”*<sup>248</sup>; así define Contreras Vaca a la sentencia ejecutoriada. Para Pallares *“la sentencia ejecutoriada es aquella contra la cual no cabe ningún recurso ordinario”*<sup>249</sup>

Ciertamente, en lo general se comulga con tales definiciones, pues la sentencia ejecutoriada es cosa juzgada y lo en ella resuelto no puede ser materia de otro proceso judicial; sin embargo en relación con este punto es preciso realizar una serie de observaciones en relación con la sentencia en los juicios de divorcio, como caso de excepción a la regla indicada, ya que cuando se resuelven circunstancias relacionadas con menores o incapacitados, respecto de alimentos, custodia, convivencia, en estos rubros no se presenta la ejecutoriedad o cosa juzgada, por disposición expresa de la ley procesal del Estado, que dispone que, entre otras, las resoluciones judiciales firmes dictadas en juicios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, sólo pueden alterarse y modificarse cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva y ello se demuestre plenamente en el juicio o procedimiento respectivo.

---

<sup>248</sup> Contreras Vaca, Francisco José, *Derecho Procesal Civil*, México, Oxford University Press, 1999, vol. I, p. 177.

<sup>249</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 227, p. 729.

En el caso de la sentencia que se pronuncia en un trámite de Divorcio por Mutuo Consentimiento, por no ser de las que causan ejecutoria por ministerio de ley, si las partes interesadas están conforme y de acuerdo con el contenido de la misma, podrán expresar ante el Juzgado su consentimiento con la misma y pedir al juzgador que por tal motivo se declare ejecutoriada dicha resolución conforme lo dispone el numeral 420 bis de, Código Procesal Civil; por otra parte si tan solo se deja transcurrir el término para su impugnación y no se presenta ningún recurso, la sentencia por ese solo hecho el fallo emitido causa estado, conforme a lo dispuesto en forma expresa por el numeral 421 de la Ley en cita.<sup>250</sup> Pese a ello resulta común que se solicite al juzgador el que se declare que la resolución no fue impugnada y que por ende obrar en autos la declaratoria judicial de que el fallo esta elevado a la categoría de sentencia ejecutoria.

#### **4.9 Problemática de la ejecución de sentencia.**

Una vez que la sentencia emitida en el trámite de divorcio voluntario haya causado estado, como se dijo en líneas anteriores, la primera y obligada fase para la ejecución de una sentencia de esta naturaleza, es y corresponde a la realización de los actos administrativos que de ella emanan en cuanto a girar diversos oficios con copias certificadas de la sentencia que decreta el divorcio a la Dirección del Registro Civil, al Oficial del Registro Civil de su jurisdicción para que se levante el acta de divorcio, la archive con el mismo número de acta en el apéndice correspondiente y se realice la publicación

---

<sup>250</sup> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, art. 421. Para que las sentencias a que se refiere el artículo anterior, produzcan los efectos de cosa juzgada, no se requerirá promoción de las partes ni declaración judicial, bastando certificación de la Secretaría, en los casos en que el tribunal lo crea conveniente para mayor claridad. Los errores que se cometan en esta certificación serán corregidos de plano por el Juez.

respectiva, girar oficio al Oficial del Registro Civil en donde contrajeron nupcias para que realice la anotación marginal del divorcio en la partida de matrimonio correspondientes y girar oficios al o los Oficiales del Registro Civil en donde pasaron las actas de nacimiento de los interesados para que se efectúen las anotaciones marginales inherentes al divorcio, en sus partidas de registro de nacimiento, conforme a lo dispuesto por el numeral 775 del Código Procesal Civil en concordancia con el artículo 422 del Código Civil y de los numerales 98, 99 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado.

Cabe resaltar que sobre estos aspectos resulta primordial que los interesados o sus asesores jurídicos, realicen los trámites correspondientes para que el juez decreta que la sentencia causó ejecutoria y que a virtud de ello emita la orden judicial de girar tales oficios, que estos se remitan en forma debida y completa y que tales órdenes sean cabalmente cumplimentadas por los oficiales del Registro Civil, puesto que esta es la culminación administrativa respecto del trámite de divorcio; se acota lo anterior, ya que es frecuente que tanto los peticionarios como quien los asesora estimen que con la simple emisión de la sentencia ya se encuentran divorciados y abandonen el procedimiento sin darle continuidad en tales aspectos legales administrativos, lo que resultará necesario para que dicha sentencia genere los efectos jurídicos que corresponden.

Como un ejemplo de la problemática que se puede presentar si no se ejecuta debidamente la sentencia de divorcio, diremos que uno de los principales efectos de la disolución del vínculo matrimonial y que se consigna en el numeral 420 del Código Civil es que en virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, sin embargo, no en pocas ocasiones, pasado un tiempo de que el juzgador emitió la sentencia y que por ello los interesados consideran que el divorcio surtió todos sus efectos y un período después pretende o pretenden contraer nuevas

nupcias, por lo que realiza todas las formalidades y trámites para adquirir ese nuevo compromiso, fijando fecha para ello.

Entonces, al momento de pretender realizar los actos administrativos necesarios ante el Oficial del Registro Civil, se encuentran con el problema de que en el procedimiento de divorcio que antes ventilaron nunca se petitionó que se levantara el acta de divorcio y se efectuaran las anotaciones respectivas en la de matrimonio y nacimiento de los interesados, por lo que en un primer lugar, será una desagradable sorpresa para quien quiere contraer un nuevo matrimonio y en segundo término, tendrá que realizar todos y cada uno de los pasos que son necesarios para lograr tales eventos, sin que en muchas ocasiones el tiempo le sea favorable entre la realización de dichas diligencias judiciales y la fecha que tiene para un nuevo compromiso matrimonial.

Amén de que no hay que olvidar que el propio artículo 420 dispone en su tercer párrafo que para que los cónyuges que se divorcien voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio. Razones por las que es necesario que el procedimiento judicial del divorcio voluntario concluya realmente con los aspectos jurídico administrativos que de él emanan.

Si estamos ante la presencia de un divorcio voluntario en donde no hubo hijos ni bienes materia de liquidación, el girar los oficios antes referidos, tendrá, por lo general, como consecuencia la ejecución total de la sentencia de divorcio.

Cosa diversa acontece en donde los divorciantes tengan hijos o bienes que liquidar, pues por lo general en este caso habrá pactos de alimentos, convivencia, custodia, liquidación, etcétera, por lo que en todo caso, la ejecución de la sentencia puede tomar caminos diversos.

Esto significa que en la ejecución de la sentencia, se pueden presentar diversos tipos de ejecución según los pactos que los interesados hayan convenido, lo que podrá manifestarse ya sea en forma voluntaria o forzosa en caso de no cumplir en la forma y términos que se hubiera pactado. Así por ejemplo, cuando una de las partes no cumple con lo pactado o aún ambos, puede solicitarse la ejecución respecto de la liquidación de la sociedad, del pago y garantía de alimentos, de la convivencia, en fin, de aquellos puntos que tengan una consecuencia del propio pacto o bien del incumplimiento del mismo.

En caso de que se presente una ejecución forzosa, dependiendo el punto, es que se debe de atender a las reglas que se establecen en el Título Octavo, Capítulo I del Código Procesal Civil, y que se contienen del artículo 477 al 508, ya que este último de manera clara establece que todo lo que en dicho Capítulo se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales.

Así por ejemplo, en el supuesto que el varón o la mujer, según corresponda, no cumpla con el pago de la pensión alimenticia pactada, se tendrá que solicitar en un primer momento, que se otorgue el término de ley para que cumpla voluntariamente con la obligación respectiva, con el apercibimiento de que caso de no hacerlo así, se procederá en su contra a la ejecución forzosa del pacto.<sup>251</sup>

---

<sup>251</sup> *Ibídem*, art. 481. Cuando se pida la ejecución de sentencia, el Juez señalará al deudor el término improrrogable de cinco días para que la cumpla, si en ella no se hubiere fijado otro término para ese efecto.

Si la parte deudora no cumple con el pago de tales obligaciones, entonces se puede iniciar la ejecución forzosa que en este caso específico, corresponde al embargo de bienes del deudor y la continuación del procedimiento de remate de dichos bienes, ello considerando que exista cantidad líquida pues de no ser así, entonces se debe proceder a elaborar el incidente de liquidación respectivo.

En los casos de incumplimiento en los pactos de custodia, convivencia, liquidación de la sociedad, etcétera, se debe solicitar al juzgador que dicte las medidas pertinentes para el debido cumplimiento de estas obligaciones. En cualquiera de los supuestos que puedan presentarse como ejecución forzosa, se tiene que tener pleno conocimiento de las normas que para cada punto especial se establecen en el Capítulo I del Título Octavo del Código Procesal de la materia.

De la misma manera cabe destacar que en la ejecución sólo se puede involucrar aspectos que fueron materia del convenio, sancionados y aprobados por el juzgador, o sea no se pueden traer cuestiones ajenas; prototipo de esto son aquellos casos en que uno de los ex esposos pide en forma incidental que la custodia de los menores que fue otorgada a su ex cónyuge, sea revocada por que la conducta que se despliega eso puede ser nociva para los menores y que por ello los hijos deben de estar bajo la custodia de quien promueve el cambio de custodia.

En este tipo de supuestos es evidente que el incidente que se pretende hacer valer en la ejecución no procede, pues en primer lugar el trámite corresponde a un Divorcio Voluntario en donde no se solventó cuestión o litigio alguno entre los interesados y que si bien se resolvió sobre diversos puntos que involucran a los hijos, ello se deriva de que al cambiar el estatus civil de los padres debe de resolverse en forma adecuada la situación de los hijos, pero nunca en un proceso de esta índole, se deben ventilar aspectos

que son materia de controversia o que competen a acciones autónomas<sup>252</sup>, por lo que en todo caso, los interesados tienen expedito su derecho para hacer valer la acción o acciones que estime pertinentes<sup>253</sup>.

El incumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio es cosa frecuente en la práctica judicial, resulta frecuente encontrar expedientes con varios tomos que se han generado por el actuar procesal de las partes en el periodo de ejecución, cuando es obvio que el tramite en si corresponde a un mínimo de fojas. La controversia se presenta entre los excónyuges y se alarga, no solo por el incumplimiento en sí, sino porque los pactos del convenio fueron mal redactado, son oscuros o imprecisos, contrarios al derecho o de difícil ejecución, etcétera, empero, se aprobó el convenio respectivo, o bien una asesoría jurídica defectuosa, tal como se refleja de la investigación de campo efectuada y que se analiza en el capítulo uno (v.1.4).

---

<sup>252</sup> [J] XIII.2o.9 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Novena Época, Registro: 179949, Civil, diciembre de 2004, p. 1321. Convivencia familiar pactada por convenio judicial elevado a la categoría de cosa juzgada. No debe impedirse *motu proprio*.

<sup>253</sup> [J] I.6o.C.25 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Novena Época, Registro: 203757, Civil, noviembre de 1995, p. 519. Custodia de menores. Quien por mutuo consentimiento de las partes, elevado a la categoría de cosa juzgada tenga la, para cambiar del domicilio previamente establecido a otro distinto, ya sea dentro del país o fuera de éste, debe solicitarlo a través de un juicio autónomo y no por la vía incidental.



## CAPÍTULO V

### EL DIVORCIO CONTENCIOSO.

#### Primera Parte.

El divorcio contencioso corresponde al proceso adversarial entre los consortes para la obtención de la disolución del vínculo matrimonial, es el mayores problemas presenta tanto desde la perspectiva procesal como en su concepto sustantivo. Por ello es necesario adentrarnos un poco más en el concepto jurídico del divorcio, sus particularidades, las etapas del proceso judicial, las pruebas con la connotación de medios convictivos en materia de familia, las características de cada una de las causales, en fin todo el bagaje jurídico que se tiene que atender en un proceso de divorcio necesario, para entonces comprender el porqué los procesos de esta índole resultan complicados, de difícil acreditación y con pocos resultados positivos.

El Divorcio. Es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida de los cónyuges<sup>254</sup>.

Rojina Villegas y Magallón Ibarra indican que si la comunión espiritual del matrimonio ha dejado de existir, "*...el divorcio es una medida necesaria para evitar inmoralidades de mayor alcance, para detener un torrente de inmoralidad que de otra manera el derecho está permitiendo*"<sup>255</sup>.

Hasta este capítulo podríamos resumir lo anteriormente estudiado sobre el divorcio contencioso de la siguiente manera:

---

<sup>254</sup> Chávez Asencio, Manuel F., *Matrimonio y divorcio*, disponible en <<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/19/pr/pr26.pdf>>, página visitada el 22 de noviembre de 2012.

<sup>255</sup> Rojina Villegas, Rafael, *Compendio de Derecho Civil*, 9ª ed., México, Porrúa, 2009, t. I, *passim*.

El divorcio contencioso es también llamado divorcio necesario o divorcio casual.

Este divorcio se presenta en dos modalidades: el divorcio remedio y el divorcio sanción. En el primero de estos no podríamos hablar de un cónyuge culpable, sino, como lo menciona Bustos Rodríguez<sup>256</sup>, de la existencia de circunstancias que no son imputables a ninguna de las partes, pero que hacen la imposible la vida en común. Por exclusión, diríase que el divorcio sanción es el que sí es imputable a una de las partes y además existe un cónyuge culpable y un cónyuge inocente, es decir aquel que no dio causa para la disolución del vínculo matrimonial como una sanción en contra de quien sí incurrió en la trasgresión. La autora continúa diciendo que en este tipo de divorcio el cónyuge inocente plantea una situación de litigio con base en una de las causas enumeradas en el Código Civil. Como se trata de un proceso judicial habrá que ofrecer pruebas y producirlas durante el mismo.

El divorcio contencioso se lleva a cabo a través de un juicio cuyas características particulares son las siguientes<sup>257</sup>:

- 1.- Es un juicio ordinario civil;
- 2.- Conocen de él los jueces de primera instancia (familiares);
- 3.- La sentencia que se dicta en dicho juicio es al mismo tiempo constitutiva y de condena;
- 4.- Es fallo de condena porque impone responsabilidades y sanciones al cónyuge declarado culpable;

---

<sup>256</sup> Bustos Rodríguez, María Beatriz, *Diccionario de Derecho Civil*, México, Oxford, 2006, pp. 42 y 43.

<sup>257</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 236.

5.- La sentencia que en él se dicte no sólo produce efectos jurídicos entre las partes, sino también es oponible a terceros.

Según Rojina Villegas<sup>258</sup>, las causales de divorcio pueden clasificarse en seis clases:

1. Causales que implican delitos de un cónyuge contra el otro, delitos de un cónyuge contra los hijos y delitos contra terceros.
2. Causales que constituyen hechos inmorales.
3. Causales violatorias de los deberes conyugales.
4. Causales consistentes en vicios.
5. Causales originadas en enfermedades.
6. Causales que implican el rompimiento de la convivencia.

La disolución de un matrimonio pone fin a todos los efectos que produjo, sin embargo, señala Ibarrola<sup>259</sup> que: "...la alianza que estableció subsiste y crea ciertos impedimentos para una nueva unión...."

Continúa el autor diciendo que, los hechos que los hechos que disuelven el matrimonio son a) la muerte de uno de los esposos; b) El divorcio. Antiguamente ponía fin al matrimonio una sentencia condenatoria para uno de los cónyuges que entrañara su *muerte civil*, pero esta causa desapareció en Francia a partir del 31 de mayo de 1854.

Zannoni señala que:

*"...en la actualidad la familia subsiste como estructura basada en el principio de solidaridad y de cooperación de sus miembros: subsiste conexiada en aspiraciones, sentimientos y afectos que, como antes señalamos, son incoercibles. He aquí la "crisis" que nos muestra*

---

<sup>258</sup> Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, pp. 368 a 389.

<sup>259</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, p. 330.

*paradójicamente, la fortaleza y, a la vez, la fragilidad de las relaciones familiares. Nótese, de paso, que estas ideas son las que, modernamente imponen el paulatino debilitamiento del denominado divorcio-sanción, fundado en “causas” que se atribuyen como incumplimiento de “deberes” por parte de uno de los cónyuges hacia el otro. Aunque todavía no prevalece –como ya ocurre en ciertas legislaciones avanzadas, como la de los países nórdicos- la posibilidad de que el divorcio se decrete a pedido unilateral de cualquiera de los esposos, se coincide cada vez más en favorecer el acceso a la justicia de los cónyuges en situación de conflicto sin obligárseles a explicar “causas”, porque las que hubiere, sea cuales fueren, se reputan reservadas a las esfera de la intimidad de ambos. Estas reflexiones nos persuaden de que la diferencia sustancial entre la concepción del llamado divorcio-sanción y del divorcio-remedio, reside en que la primera considera que la causa del conflicto conyugal es la causa del divorcio, mientras la segunda entiende que el conflicto es, él mismo, la causa del divorcio, sin que interesen las causas de ese conflicto. En otras palabras: la concepción decimonónica del divorcio-sanción responde a la pregunta: ¿cuál es la causa del conflicto conyugal?, mientras que la concepción del divorcio-remedio, responde a esta otra: ¿debe ser el conflicto conyugal causa de divorcio? Este diferente modo de preguntar por las causas nos recuerda en cierta forma la contraposición entre los factores de atribución subjetivos y los objetivos de responsabilidad civil. Se trata, en suma, de establecer si el divorcio se basa en una atribución de responsabilidad subjetiva en razón de dolo o de culpa, o si se basa en una atribución objetiva en razón del conflicto conyugal mismo.”<sup>260</sup>*

Por su parte Pallares, indica que:

---

<sup>260</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, p. 18 y 19.

*“...El Estado se encuentra ante el problema de si es o no conveniente el divorcio en cuanto al vínculo. En la solución del mismo, hay que tener en cuenta: a) La subsistencia de los matrimonios mal avenidos o en los cuales uno de los cónyuges sea indigno de continuar siendo el titular de los derechos, poderes y facultades que derivan del matrimonio, es evidente un mal social que es preciso remediar por los pésimos ejemplos que produce, sobre todo respecto de los hijos. b) A su vez, el divorcio produce también consecuencias funestas para ellos y trae consigo la disolución de la familia, y el peligro de que se multiplique en los mismos divorcios, y se convierta el matrimonio en una institución de tal manera frágil, que sólo sirva para permitir a los esposos satisfacer pasiones temporales y dar rienda suelta a sus costumbres disolutas; c) También hay que tener en cuenta que el instinto sexual y las necesidades a que da nacimiento, son muy poderosos y difíciles de dominar, de tal manera que si no se permite el divorcio en cuanto al vínculo, se obliga a los divorciados a tener relaciones ilícitas fuera del mismo matrimonio. Como se ve, el problema del divorcio está relacionado con la aptitud de los cónyuges a refrenar sus instintos sexuales, sea en el mismo matrimonio o fuera de él, cuando están separados. Por lo mismo, es posible afirmar que la evolución de la especie humana no ha alcanzado el grado de moralidad suficiente para soportar la indisolubilidad del matrimonio, por lo que debe considerarse el divorcio como un mal necesario a fin de evitar otros mayores e injusticias increíbles.”<sup>261</sup>*

## **5.1 Características del divorcio contencioso y sus causales.**

Es aquel en que se ejercita la acción de divorcio mediante la interposición de una demanda y que encuentra su sostén sustantivo en

---

<sup>261</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 72, pp. 38 y 39.

cualquiera de las causales que contempla el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco. Como se ha dicho la palabra “*Causa*” deviene del latín causa: que significa fundamento u origen de algo. La palabra causa tiene varios significados en el campo del derecho:

En materia procesal alude, por una parte, al conjunto de actuaciones en un litigio sometido por las partes a un juez para su resolución. Si bien la causa puede ser civil o criminal, comúnmente se reserva dicho término para los asuntos criminales, usándose respecto de los civiles preferentemente el nombre de pleito. Asimismo, en el derecho procesal se habla de la causa de la acción o de la causa de pedir (*causa petendi*), la cual se refiere al hecho generador del derecho que hace valer el actor en un juicio, o bien, al título en que se funda la acción, dando, en este último caso, a la palabra acción la acepción tradicional de derecho substancial materia del litigio.

Sobre la naturaleza de la acción, Alsina<sup>262</sup> refiere:

*“...Acertadamente observa **Calamandrei** que la presencia en el proceso de dos litigantes frente al juez plantea el siguiente dilema: o se ve en el proceso un servicio que el Estado presta al individuo proporcionándole el medio para actuar su derecho subjetivo, o bien es un servicio que el ciudadano presta al Estado proporcionándole la oportunidad de actuar el derecho objetivo. Se comprende fácilmente que el papel del juez varía según la posición en que se le coloque. En el primer supuesto, que considera la acción desde el punto de vista de las partes (concepción privatística), ellas no sólo determinan la cuestión a decidir, sino que fijan el material de conocimiento y el juez es así un mero “espectador de la contienda; en el segundo, que considera la acción desde el punto de vista de la jurisdicción (concepción*

---

<sup>262</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, pp. 110 y 111.

*publicística), las partes sólo actúan como auxiliares del juez, el cual se convierte en dictador del proceso; distintas soluciones éstas que se hallan vinculadas a un problema más general llevado al terreno procesal: el de las relaciones entre el interés individual y el Estado, entre libertad y autoridad, que hoy aflora en el campo del pensamiento. Por eso, con un exacto sentido de equilibrio, Alcalá-Zamora y Castillo completó la fórmula diciendo: ni espectador, ni dictador, sino "director" del proceso, porque toda exaltación del interés público se hace siempre a costa del derecho subjetivo privado.*

Continúa expresando el autor que el estudio de la teoría de las acciones tiene particular importancia desde diversos puntos de vista.

*“...Establecer en un caso concreto la naturaleza de la pretensión deducida en la acción con relación al derecho sustancial, sus condiciones de ejercicio, las formas que debe revestir, resulta indispensable para determinar la función de otros institutos del proceso, a los cuales se halla estrechamente vinculada. Así, la ley distribuye la competencia de los jueces según la naturaleza de las acciones: una acción deducida ante juez incompetente puede ser rechazada de oficio por el tribunal o hacer incurrir en el pago de las costas si la incompetencia se opone por el demandado mediante una excepción. En materia de prueba importa saber la que debe ofrecerse por las partes y admitirse por el juez, según sea la acción deducida. En una acción posesoria (así la llama nuestro CC), sería inútil la prueba del dominio porque no es éste lo que se discute sino el hecho de la posesión. La admisibilidad de la prueba no depende del arbitrio judicial, sino que está regida por textos expresos, que no sólo establecen limitaciones en ciertos casos (como la prueba testimonial en materia de contratos) tratara de atribuir la filiación natural a una mujer casada). En cuanto a la sentencia ella debe estar de acuerdo,*

*bajo pena de nulidad, con las acciones deducidas en la demanda y en la contestación; y por lo que respecta al principal efecto de la misma, o sea la cosa juzgada, sólo el examen de los elementos de la acción permitirá saber, en un caso concreto, cuándo la excepción que de ella deriva puede ser opuesta válidamente. Naturalmente que en casi todos estos casos el concepto de acción para la ley difiere del que hoy le asigna la doctrina y frecuentemente se entiende referirse con ella a la pretensión o a la demanda.*

Tratándose de divorcio por causas determinadas por la ley, aquel siempre es objeto de una demanda intentada por uno de los esposos contra el otro. El actor invoca un hecho, que es una causa de divorcio según la ley; su cónyuge discute la existencia de ese hecho o por lo menos se opone a la demanda.

En este sentido en el derecho positivo mexicano: mientras que los Códigos Civiles de 1870 y 1884 fueron anticausalistas, nuestro Código Civil vigente, siguiendo la jurisprudencia francesa de mediados del siglo pasado y las ideas de Bonnet y Duguit, abandonó por impropia y por ser fuente de confusiones la doctrina de la causa final y prefirió usar como elemento del contrato a la causa impulsora, refiriéndose a ella como “fin o motivo determinante de la voluntad”.

*Zannoni, señala: “...Al aludir a la disolución del vínculo se entiende que la disolución opera extinguiendo, para el futuro, la relación jurídica matrimonial. En las legislaciones que admiten esta forma de disolución vincular, el divorcio constituye el origen de un verdadero estado de familia que restituye la aptitud nupcial de los cónyuges divorciados sin perjuicio, claro está, de la validez y subsistencia de los efectos que el matrimonio produjo hasta que la sentencia pasó en calidad de cosa*



*juzgada (así, la legitimidad de los hijos concebidos durante el matrimonio, la subsistencia del parentesco por afinidad, etcétera)*<sup>263</sup>.

En tanto que Pallares, divide las causales por grupos y las engloba de la siguiente manera:

*“....a) Causas en las que los tribunales gozan de cierta facultad discrecional para decretar el divorcio o abstenerse de hacerlo, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que la ley considera como causas. Por ejemplo, cuando se trata de injurias graves, sevicia, calumnias, abandono del hogar sin oír causa justificada, etcétera. b) Las contrarias a las anteriores, en las que los tribunales no tiene esa facultad discrecional. Ejemplo, el adulterio, el abandono de hogar por más de un año, la falta de pago de los alimentos, la promoción de un juicio improcedente, etc. Respecto de estos dos grupos, hay que aclarar que no cabe identificar la facultad de que se trata, con la relativa al poder de apreciación de que gozan los tribunales en materia de prueba que en el caso de divorcio la tiene dentro de los mismos límites que en los demás juicios, de acuerdo con las reglas relativas a cada prueba en particular; c) Un tercer grupo está formado por las causas que implica un hecho culpable, e incluso la comisión de un delito, por parte del cónyuge demandado; tales como el adulterio, la incitación a cometer un delito, la corrupción de la mujer, el abandono del domicilio conyugal, etc. En sentido apuesto hay causas que no tienen esa naturaleza jurídica. Así, por ejemplo, padecer algunas de las enfermedades que especifican las fracciones VI y VII del Art. 267; d) El cuarto grupo comprende el incumplimiento de las obligaciones matrimoniales, de modo especial las relativas a suministrar alimentos al otro cónyuge y a sus hijos, y la de vivir en el domicilio conyugal. En oposición a estas causas pueden señalarse aquéllas que sin constituir*

---

<sup>263</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, p. 9.

*el incumplimiento de las obligaciones matrimoniales, revelan una condición de inmoralidad tal del cónyuge culpable, que es del todo necesario disolver el matrimonio para evitar su influencia perniciosa en la vida de los hijos del otro consorte; e) Finalmente, hay otras causas que deben producir la disolución del matrimonio, sea por motivos de honor o porque ponen al cónyuge que ha incurrido en ellas, en la imposibilidad de continuar cumpliendo sus obligaciones familiares. Así son las que consignan las fracciones XIV y XV.<sup>264</sup>*

En este sentido, ante pleno siglo veintiuno, debemos dejar atrás la visión del divorcio ya sea como remedio o sanción; olvidar las causas de divorcio, para dar paso a una nueva óptica y resolución de los conflictos matrimoniales que sea respetuosa de la voluntad de los consortes, de su vida íntima y privada, de su vida familiar, lo cual puede lograrse permitiendo que en este tipo de controversias se resuelvan con los métodos alternativos de solución de conflictos y la inclusión del divorcio incausal.

En Jalisco, en referencia específica a las causas de divorcio tenemos que nuestro Código Civil es uno de los más casuísticos del mundo. Las causas son de carácter limitativo y no ejemplificativo, por lo que cada causa tiene carácter autónomo y no pueden involucrarse unas en otras, ni ampliarse por analogía ni por mayoría de razón, según ha expuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La palabra divorcio, tiene su origen en las voces latinas “*divortium*” y “*divertere*”; significando separarse lo que estaba unido, tomar líneas divergentes. El divorcio es la ruptura de un matrimonio válido en vida de los esposos, por causas surgidas con posterioridad a la celebración del mismo y

---

<sup>264</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, pp. 62 y 63.

que permite a los divorciados contraer con posterioridad un nuevo matrimonio válido. De acuerdo a su forma legal, el divorcio sólo puede demandarse por las causas previamente establecidas en la ley, ante autoridad competente y cumpliendo con todos los requisitos legales de procedimiento.

El matrimonio en su concepción general y costumbrista se contrae para toda la vida; los esposos se comprometen en unión perpetua; pero quien dice perpetuidad, no dice necesariamente indisolubilidad. La unión de hombre y mujer, que debería ser una causa de paz y concordia, una garantía de moralidad, a veces no realiza su fin, la vida común llega a ser imposible, se rompe, o bien si continúa, el hogar se convierte en un foco de disgustos; en una causa permanente de conflictos. El más alto Tribunal del país ha dejado en claro el criterio jurisprudencial de que el matrimonio es una Institución de orden público, porque el interés que en él se tutela no es el particular o individual de quienes lo forman, sino un interés superior que corresponde “al de la familia”; por lo que siendo ésta la célula de la sociedad, el matrimonio es también de orden y trascendencia social y ya no meramente privado. Que a virtud de ello, la sociedad está interesada en que se mantenga perdurable el instituto matrimonial y, sólo por excepción, la ley permite su disolución inter vivos, siendo menester en estos supuestos, que quien demande el divorcio necesario acredite plenamente sus afirmaciones sobre los hechos que integran la causal o las causales de divorcio que invoca y que ésta se ejercite de manera oportuna, esto es, antes de su caducidad.

De la misma manera es menester que desde el escrito inicial de demanda se precisen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en que se apoyaron las mismas y que las pruebas que se oferten sean en relación con tales hechos, pues de no hacerlo así, se estarían involucrando hechos ajenos a la litis, porque la demostración de esas circunstancias no forma parte de la contienda, al no precisarse en la

reclamación, pues sabido es que sólo son materia de pruebas los hechos controvertidos.

Acorde con los movimientos sociales y la demanda ciudadana, las legislaturas han realizado una serie de reformas o modificaciones a la normatividad sustantiva del divorcio, en los últimos tiempos están son encaminadas a proporcionar igualdad a los derechos de hombres y mujeres, así como a tener una concordancia con el tema de boga sobre la violencia intrafamiliar, estas modificaciones y adiciones fueron publicadas mediante decretos números 21945/LVIII/07, 22219/LVIII/08 y 23032/LVIII/09, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fechas 13 de noviembre de 2007, 27 de mayo de 2008 y 29 de diciembre de 2009 respectivamente, en las que se modifican las fracciones II, XII, XVII, XVIII y adiciona la fracciones XIX, lo que se traduce en cambios a las causales tradicionales, Empero, no todas las reformas efectuadas pueden considerarse un acierto, y en más de una, su modificación es contraria a la naturaleza de la propia causal, según se analizara posteriormente.

En la actualidad las causales de divorcio están en el contenido del numeral 404 del Código Civil, siendo estas las siguientes:

*“I. La infidelidad sexual;*

*II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad;*

*III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;*

*IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito;*

*V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;*

*VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;*

*VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente;*

*VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;*

*IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.*

*El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;*

*X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;*

*XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;*

*XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;*

*XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;*

*XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;*

*XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;*

*XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;*

*XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;*

*XVIII. El mutuo consentimiento; y*

*XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.*

*Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho.”.*

Sobre esta temática, Pallares<sup>265</sup>, señala que: “... el divorcio contencioso se lleva a cabo en un juicio cuyas notas esenciales son las siguientes:

- a) Es un juicio ordinario civil.*
- b) La ley lo considera tan importante que solo tienen competencia para conocer de él los jueces de primera instancia.*
- c) La sentencia que en él se pronuncia es al mismo tiempo constitutiva y de condena.*

En este punto debemos considerar lo externado en el capítulo segundo (puntos 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11) pero además, es pertinente hacer una reflexión en relación con los medios de convicción en un juicio de esta naturaleza.

### **Medios de Prueba en los procesos de divorcio.**

Como en cualquier juicio, las partes pueden ofertar todo tipo de pruebas, pues no debemos olvidar que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones<sup>266</sup>, siempre

---

<sup>265</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 227, p. 276.

<sup>266</sup> Véase, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, art. 286.

y cuando sean de las permitidas por la ley, estén relacionadas con los puntos controvertidos y no sean contrarias a la moral o al derecho.

El derecho de contradicción, dice Gómez Lara<sup>267</sup>:

*“...ha sido definido por Lauro Aguirre, citando a otros autores, de la siguiente manera:*

*El derecho de contradicción también llamado derecho de defensa o excepción, no es otra cosa que el derecho a la jurisdicción, desde el punto de vista del demandado, como el derecho de acción lo es al demandante o actor. Son dos aspectos de la misma garantía. La garantía jurisdiccional, que contiene otros muchos derechos o garantías; la de ser oído y vencido antes de ser juzgado, tener medios adecuados para la defensa en un plano de oportunidades igual que el demandante, igualdad de las partes, un proceso legalmente preestablecido, debido a adecuado.”*

El artículo 298 de la ley procesal del Estado de Jalisco reconoce como medios de prueba:

- Confesión.
- Documentos públicos.
- Documentos privados.
- Dictámenes periciales.
- Reconocimiento o inspección judicial.
- Declaraciones de testigos.

---

<sup>267</sup> Gómez Lara, Cipriano, *op. cit.*, nota 29, p. 63 y 64.



- Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.
- Presunciones, tanto legales como humanas.
- Información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y
- Los demás medios que produzcan convicción en el juzgador.

Se señala que si las partes ofrezcan cualquier otro medio de prueba diverso a los señalados, en caso de admisión, el juez debe sujetar la prueba a las reglas generales que se establecen en la ley y a las particulares a que más se asemeje.

La oferta, admisión, desahogo o integración de las pruebas tienen las mismas reglas que rigen a cualquier proceso judicial del orden civil, empero, por estar ofertadas en un proceso de índole familiar, algunas de las connotaciones generales varían por aspectos especiales, por lo tanto solo nos referiremos a estos casos especiales. Así podemos indicar que la confesión ficta por sí sola, en materia de divorcio, no es prueba bastante para la procedencia de la acción, pues es menester concatenarla con otros medios convictivos con los que si se acrediten las causales de divorcio invocadas<sup>268</sup>; en materia de familia, un sentido diverso se tiene sobre los atestes que son parientes o empleados de las partes contendientes, pues aun cuando por lo general tal evento es materia de tachas a los testigos, eso no sucede en

---

<sup>268</sup> [J] 1a./J. 92/2004, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Novena Época, Registro: 179317, Civil, febrero de 2005, p. 118. Divorcio Necesario. La confesión *ficta*, por sí misma, es insuficiente para tener por acreditados los hechos en que se funda la acción.

esta clase de juicios, ya que se ha considerado que justamente tal calidad los hace idóneos para conocer las divergencias conyugales.<sup>269</sup>

Por otra parte, en los divorcios no debe ser admisible la prueba testimonial, como tal, en relación con los hijos menores de los contrincantes, pues al respecto, se ha emitido jurisprudencia<sup>270</sup>, que señala que debe considerarse que la salud psicológica de los menores es un derecho protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que ese derecho constituye una garantía individual y un derecho sustantivo cuya protección es obligación del Estado, por lo que la admisión y orden de desahogo de la prueba testimonial a cargo de menores sobre los hechos materia del divorcio necesario de sus progenitores puede causar daños a la salud psicológica de aquéllos, ya que tendrían que verse sometidos a declarar sobre cuestiones graves como lo es la violencia intrafamiliar, infidelidad, maltrato, amenazas. La testimonial de hijos menores no puede confundirse con la plática o charla con los menores, pues su connotación es diversa; en la testifical, entre otros aspectos, al inicio de la prueba, el juez debe tomar la protesta al ateste de conducirse con verdad y luego advertirle las penas en que incurrir los testigos que declaran con falsedad, siendo evidente que esto solo aplica a las personas con plena capacidad de goce y de ejercicio, lo que no es factible con un menor de edad.

---

<sup>269</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. VI, Octava Época, Registro: 225211, Civil, julio a diciembre de 1990, 2ª parte-2, p. 624. Prueba testimonial. Los parientes, amigos o domésticos son aptos en juicios de divorcio.

<sup>270</sup> [J] 1a./J. 182/2005, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Novena Época, Registro: 176168, Civil, enero de 2006, p. 478. Prueba testimonial a cargo de los menores hijos en el juicio de divorcio necesario de sus padres. Su admisión y desahogo constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto.

Por otra parte, la escucha de menor carece de requisitos de formalidad en la ley, en cambio debe ajustarse a las que al respecto establece el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de salvaguardar el interés superior de los menores que se contiene en el artículo 4º de la Constitución Federal y 572 del Código Civil del Estado.

En el Estado de Jalisco es frecuente que en los juicios de divorcio, el juzgador de manera oficiosa ordene la práctica de una investigación por parte de una trabajadora social respecto del entorno familiar en que se desenvuelve cada uno de los contendientes, ello con el afán de hacerse llegar otros medios que por su resultado coadyuven a una mejor resolución del asunto, empero la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>271</sup>, ha indicado que este medio es carente de valor, ya que, en primer lugar, dicho informe es una prueba confeccionada únicamente al arbitrio de las trabajadoras sociales, sin observar formalidad judicial alguna y, en segundo término, en virtud de que las trabajadoras no están investidas de fe pública ni tienen facultades legales para recibir declaraciones de las partes o de terceras personas, actividad que solo corresponde al juzgador según lo previsto por el artículo 69 del código procesal, el que dispone que los jueces y magistrados a quienes corresponda, presidirán todos los actos de prueba, que el secretario facultado por la ley deberá estar presente y dar fe de dicha actuación autorizando la misma. Lo anterior solo deja la posibilidad de que la prueba en comento surta efectos presuntivos o indiciarios. La interpretación resulta rigorista, pues el objetivo de la investigación encuadra plenamente en lo previsto por los artículos 82, 283 y 284 de la ley procesal civil, ya que para conocer la verdad sobre los puntos

---

<sup>271</sup> [J] III.1o.C. J/32, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVI, Novena Época, Registro: 186288, Civil, agosto de 2002, p. 1081. Divorcio, valor probatorio del informe rendido en un juicio de, por el departamento de trabajo social del supremo tribunal de justicia del estado de Jalisco.

controvertidos, el juez puede valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, o de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral; puede además decretar la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados y solo debe observar que no se lesione el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad, todo esto con el objetivo de esclarecer el derecho de las partes, por lo que el ordenar la práctica de esta investigación se ajusta a las normas aludidas y en todo caso, el resultado de la investigación solo debe considerarse como un documento cuyo valor y eficacia tiene que ponderarse en sentencia. Más aun, cuando en los últimos tiempos, se ha sentado jurisprudencia<sup>272</sup> firme que en los asuntos en que se pueda ver afectada, directa o indirectamente, la esfera jurídica de un menor, como acontece en la mayoría de los procesos de divorcio, opera la suplencia de la queja, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia, ya que se debe atender a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz.

En cuanto a la valoración de las pruebas, es conveniente precisar que el valor que corresponde a las pruebas que se aporten en juicio es equivalente a aquél que la ley aplicable les asigna atendiendo a su naturaleza

---

<sup>272</sup> [J] 1a./J. 191/2005, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Novena Época, Registro: 175053, Civil, mayo de 2006, p. 167. Menores de edad o incapaces. Procede la suplencia de la queja, en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente.

e involucra que necesariamente deben contener los requisitos que la norma legal exige.

Mientras que la eficacia probatoria implica que, además de tener valor probatorio, sea conducente y demuestre los hechos que con ellas se pretendan comprobar, tarea ineludible que corresponde determinar al órgano jurisdiccional tomando en cuenta la idoneidad y la confiabilidad de las pruebas aportadas, por tanto, puede acontecer que las pruebas tengan valor probatorio, y finalmente concluir que son ineficaces<sup>273</sup> para los fines pretendidos por su oferente, ya que puede suceder que las probanzas, por más que sean mayor en cantidad que las de su contraria, no sean las idóneas para demostrarlos o que su resultado sea inconducente, insuficiente, etcétera.

Para la valoración de los medios convictivos, se debe atender a los dos sistemas que existen en nuestra legislación, el tasado y el de libre valoración; sobre este aspecto, Alsina<sup>274</sup> refiere. “...*Éste es el origen de los dos sistemas que actualmente se conocen: el de las pruebas morales (o materiales o de las libres convicciones) y el de las pruebas legales. Por el primero, el juez aprecia la prueba libremente, sin sujeción a ninguna regla y de acuerdo con los dictados de su conciencia; por el segundo, el juez sólo puede tener por probado un hecho cuando se han llenado los extremos fijados de antemano por el legislador.*

En el sistema tasado o legales, se consideran como pruebas legales, aquellas a las que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles, ejemplo: documentales públicas, actuaciones judiciales, confesional, presunciones legales, entre otras, cuando cubren diversos requisitos de ley. Por el contrario las pruebas de libre convicción son

---

<sup>273</sup> [J] III.1o.C.14 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Novena Época, mayo de 1996, p. 620. Documentales. Valor y alcance probatorio de las.

<sup>274</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, p. 42.

las que se fundan en la sana crítica y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano, como ejemplo, la testimonial, la pericial, etcétera, en ellas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, por lo que el juez debe exponer detalladamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su decisión.

Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica<sup>275</sup>. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya.

Efectivamente en la ley procesal se establecen determinadas reglas para que el Juez del proceso pueda otorgar a cada medio de convicción el valor que señala el propio precepto legal, empero, no en todas las hipótesis se encuentra prevista dicha tasación, pues en algunos casos se deja al prudente arbitrio del juzgador, y en otros supuestos más nada se menciona al respecto, de lo que se concluye que en caso de que los medios de prueba que deban ser valorados por el Juzgador en el proceso no estén expresamente determinados en la ley, o que estándolo no fueron desahogados con las

---

<sup>275</sup> [J] I.3o.C. J/33, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Novena Época, Registro: 181056, Civil, julio de 2004, p. 1490. Prueba pericial, valoración de la. Sistemas.

formalidades que al efecto se señalan, o que en ningún precepto se establecen las reglas para su valoración, o la permisión de utilizar el libre arbitrio del juzgador, puede decirse que en estos casos el Juez puede apreciarlas libremente mediante una deducción racional, siempre y cuando se motive el valor otorgado y la eficacia probatoria.

Se presentan otras clasificaciones sobre las pruebas, así Pérez Palma<sup>276</sup> refiere:

*“En tanto que los tratadistas al estudiar eficacia o el valor probatorio de los elementos de la prueba, distinguen entre pruebas plenas, semi-plenas y por indicios, el sistema de este código se aparta totalmente de la doctrina, para no considerar sino la prueba plena como el elemento indispensable para fundar una sentencia. En el articulado del código, no hay pruebas semi-plenas, ni se hace el mérito de los indicios. Ciertos elementos de prueba no llegan a constituir, por sí solos, pruebas plenas, como lo pueden ser las declaraciones de los testigos únicos, los documentos provenientes de terceros y venidos al juicio sin que se reciban cual corresponde a una testimonial o los dictámenes periciales producidos fuera de juicio, no son ni semi-pruebas, ni tercio de prueba; cuando más, por las presunciones humanas que de ellos pudiera derivarse, podrían ser apreciados en justicia como la autoriza la parte final del artículo 423. Es muy discutible si la suma de dos, tres, cuatro o más elementos de prueba defectuosa o insuficiente, como los mencionados por vía de ejemplo, sean capaces de producir una prueba plena, perfecta, en la que fundar una sentencia, porque la suma de ceros siempre da ceros.”*

---

<sup>276</sup> Pérez Palma, Rafael, *op. cit.*, nota 27, pp. 464 y 465.

En tanto que sobre la clasificación de los medios convictivos en un juicio, Gómez Lara, indica:

*“...También Pallares enuncia diversos criterios de clasificación de los medios de prueba en los siguientes términos*

- 1. Directas e inmediatas; Producen el conocimiento del hecho sin intermediario*
- 2. Reales, consisten en cosas; Y son contrarias a las personales, producidas por la actividad de las personas.*
- 3. Originales y derivadas; Este es un mero criterio de clasificación en realidad, de las pruebas documentales y tradicionalmente se ha entendido por original ya sea la matriz o el primer documento que se produce, y como copias, las derivadas de aquellos.*
- 4. Preconstituidas y por constituir; Las primeras son las que se han formado o constituido antes del juicio, y las segundas, las que se llevan a cabo durante el mismo juicio.*
- 5. Plenas, semiplenas y por indicios; Esta división está referida al grado de intensidad de la convicción o fuerza probatoria del medio. Si esta fuerza probatoria es de máximo grado, se le llamará prueba plena y, por el contrario la prueba por indicios es muy débil, puede llegar a representar una mera conjetura.*
- 6. Nominales o innominadas; Las primeras son las que tienen un nombre y una reglamentación específica en el texto de la ley. La segunda por el contrario, son las que no están nombradas ni reglamentadas.*
- 7. Pertinentes e impertinentes; Las primeras se refieren a hechos controvertidos y las segundas hechos no controvertidos.*
- 8. Idóneas e ineficaces; Las idóneas no solo son las bastantes para probar los hechos litigiosos, sino las pruebas adecuadas para ello; así por ejemplo la existencia de una enfermedad solamente podrá probarse mediante una pericial médica, o sea que esta será la única*



*pruebas idónea para ello. Las pruebas idóneas son aquellas no adecuadas para probar determinado tipo de hechos.*

- 9. Útiles e inútiles; Las útiles o necesarias conciernen a hechos controvertidos; las inútiles, a hechos sobre los que no hay controversia o bien hechos que ya están anteriormente probados.*
- 10. Concurrentes; Son varias pruebas que convergen a probar determinado hecho. Opuestas serían las pruebas singulares que no están asociadas con otras.*
- 11. Inmorales y morales; El autor no las define; las considera explicadas por sí mismas.*
- 12. Históricas y críticas; Son pruebas históricas las que implican la reconstrucción de los hechos a través de un registro, o del relato que de los mismos hace alguna persona: por el contrario, las críticas no reproducen el hecho que se ha de probar, sino que implican un análisis de causas y efectos y, por lo tanto, alguna deducción o inferencia. Básicamente, éstas son las pruebas de tipo técnico y científico, entre ellas, las periciales.<sup>277</sup>.*

Las pruebas son parte esencial de un proceso judicial, la prueba es el medio para llegar a un resultado obtenido en el juicio, el autor citado indica que medio de prueba es el procedimiento o mecanismo utilizado, el fin de la prueba es él para que queremos probar, o sea conocer la verdad, forjar la convicción del juzgador, en tanto que el resultado de la prueba, es el conocer la verdad, forjar la convicción del juzgador. El resultado de la prueba es el objeto que la prueba pudo producir, es una consecuencia del mismo procedimiento probatorio, que puede ser en uno o en otro sentido.

Sobre la sana crítica del juzgador, Alsina, refiere:

---

<sup>277</sup> Gómez Lara, Cipriano, *op. cit.*, nota 27, pp. 109 y 110.

*“...Así, Costure entiende que este concepto de sana crítica configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la segunda, las reglas de la sana crítica no son sino el correcto entendimiento humano, que conducen en un sentido formal, a una operación lógica. Por nuestra parte, pensamos que no es un sistema intermedio entre la prueba legal y el sistema de las libres convicciones, sino que, como dice Caravantes, el juez debe aplicar, en primer término, la regla general (disposiciones referentes a las formas y solemnidades de los actos jurídicos, prueba instrumental, admisibilidad de la prueba testimonial, etc) y, en ausencia de un texto legal apreciará la prueba según su criterio, pero no en forma arbitraria, sino con sujeción a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia. No es un sistema intermedio porque también en la aplicación de las pruebas legales se sigue un procedimiento lógico y en ausencia de un texto legal el juez no tiene otra guía que su propio raciocinio”<sup>278</sup>.*

Por todo ello es que el uso de los medios convictivos es punto fundamental en el proceso judicial, y su correcta oferta, admisión, integración y desahogo, es vital para la obtención de un fallo positivo; se puede tener el derecho, pero ante la omisión de ofertarlas, o bien una incorrecta oferta o desahogo de pruebas, los llevara al fracaso, en otras palabras se tiene el derecho, mas se pierde, por no probarlo en juicio.

Al momento de emitir sentencia, el juez tiene el deber de analizar las pruebas, una a una y luego en su conjunto, lo que en primer término implica que cumple con la ley al establecer la eficacia probatoria de cada elemento de convicción, para luego determinar su eficacia o alcance, posteriormente debe de concatenarlas para apreciar el resultado global de los medios convictivos y así estar en posibilidad de arribar a la verdad legal. Es en este proceso

---

<sup>278</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, p. 45.

intelectual, en que el juzgador debe concentrar todo su esfuerzo creativo de entendimiento, conocimiento, interpretación para fundar y motivar debidamente su resolución, el juez, dice Herrendorf<sup>279</sup>, *“...no es indiferente al derecho, no está fuera de la vivencia de la experiencia jurídica, sino que la integra vivenciándola de una manera sustantiva. Así, el juez no tiene la misma vivencia de un caso que tiene un jurista; el jurista tiene una vivencia teórica de los problemas, los asume como materia de una ciencia y los entiende como problemas de disciplina. Tampoco el legislador tiene la misma vivencia que el juez, pues el legislador está pensando en normas generales y en pautas también generales de valoración del obrar general. Tampoco el hombre común que vive el derecho en plenitud tiene la misma vivencia del juez, pues este hombre común está situado de tal modo que vive el derecho en un protagonismo activo, de acuerdo a las conductas que él escoja en su libertad situacional. El juez, pues, tiene una vivencia peculiar del derecho, que es la vivencia que integra la experiencia jurídica con la justicia, es decir, el sustrato de las conductas con el valor de esas conductas. Desde lo más íntimo de su conciencia profesional, el juez está dándonos el sentido del derecho, valorándolo y adecuándolo a las conductas que la sociedad le pone por delante. Por eso es justamente eso: un juzgador”*.

Por lo general en un juicio gana una parte mientras pierde la otra, ya sea actor o demandado, pero no se gana el proceso porque se haya tenido el derecho, se haya ejercido correctamente y se hubieran probado los hechos litigiosos, sino que se gana el juicio ante la ineptitud del asesor jurídico de la parte contraria, en estos casos como lo señala Calamandrei<sup>280</sup> *“...El cliente no sabe que en muchas ocasiones, después de una victoria, debería ir a abrazar conmovido, no a su abogado, sino al abogado contrario.”*

---

<sup>279</sup> Herrendorf, Daniel E., *op. cit.*, nota 20, p. 43.

<sup>280</sup> Calamandrei, Piero, *op. cit.*, nota 12, p. 63.

Se presenta esta visión general de los medios de prueba, sus sistemas de valoración y alcances jurídicos, así como circunstancias especiales de las mismas en las controversias del orden familiar, a efecto de tener presente tales aspectos en el análisis que a continuación se hace sobre cada una de las causales de divorcio y comprender el alcance de la dificultad probatoria que cada una de ellas representa en la práctica forense.

Recordando que todas las causales constituyen por lo general conductas antijurídicas, que como acertadamente lo indica Zannoni, al establecer que:

*“...genéricamente, contradicen la observancia de las conductas que el matrimonio hace inherentes a las relaciones entre los esposos. Además, en algunos casos específicamente constituyen transgresiones normativas autónomas, como en el caso de la tentativa de homicidio de un cónyuge contra el otro, sea como autor principal o como cómplice (conf. art. 80, inc. 1º, Código Penal). La antijuricidad objetiva de las causales de separación debe corresponderse con su imputabilidad al cónyuge que incurre en ellas. Se trata del factor de atribución subjetivo que determina su culpabilidad (y por ello el divorcio aparece como sanción: ver 649). En general se trata de culpabilidad derivada de conductas dolosas, es decir, acciones intencionalmente dirigidas a transgredir alguno de los denominados derechos-deberes que el matrimonio impone. Excepcionalmente podrían constituir actos meramente culposos, particularmente en el caso de las injurias inferidas por un cónyuge al otro, las que, aunque carecieran de animus iniuriandi, pueden importar de todos modos ofensas y humillaciones cuya identidad debía ser advertida por el cónyuge ofensor. A este respecto se ha resuelto que injurias graves son toda especie de actos intencionales o no, ejecutados de palabra, por escrito o por hechos que constituyen una ofensa para el cónyuge, ataquen su honor, su*

*reputación o su dignidad. El factor de atribución subjetivo, es decir, la imputabilidad –sea a título de dolo o culpa, como acabamos de afirmar– excluye las conductas que pudieran juzgarse involuntarias, o de hechos involuntarios (cfr. art. 900 y conchs., Cód. Civil). De este modo, por ejemplo, no puede imputarse culpabilidad al cónyuge que oportunamente se probara que obró en estado de demencia o privado de razón (cfr. art. 921, Cód. Civil). Por eso, “la inimputabilidad de los actos del cónyuge enfermo cubre todos los actos por él protagonizados, tanto los que se le atribuyen como constitutivos de injuria grave, de abandono voluntario y malicioso del hogar o cualquier otro que se le reproche como causal de divorcio. En su situación de afectad mental no conoce ni puede conocer el carácter antimatrimonial de su conducta, pues está impedido de su libre determinación.”<sup>281</sup>*

## **5.2 Infidelidad sexual.**

Gramaticalmente se refiere a la falta de fidelidad en el terreno sexual; genéricamente se dice que una persona es fiel cuando corresponde a lo que exige para ella en el amor, la amistad, el deber, etcétera; por lo que en derecho aplicado a contrario sensu, tendríamos que una persona incurre en infidelidad sexual, cuando no corresponde a su cónyuge con lo que exige de ella en cuanto a fidelidad se refiere en el plano sexual, es decir, que mantiene relaciones sexuales con otra u otras personas que no son sus cónyuges.

En otras legislaciones se utiliza el vocablo de adulterio que en el lenguaje común se entiende que es la relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge.

---

<sup>281</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, pp. 75 y 76.

El Adulterio según Baqueiro<sup>282</sup>, consiste en la relación sexual, acceso carnal que uno de los esposos tiene con persona distinta de su cónyuge. Esta causal corresponde a la violación del deber de fidelidad que se han de guardar los esposos. Esta causa implicaba un delito de un cónyuge contra el otro, que sólo se persigue a instancia de parte o querella del cónyuge ofendido, que puede simplemente ejercitar la acción de divorcio, sin presentar querella para obtener la sanción penal del acto, en las entidades que la punición penal del adulterio es posible.

Con razón, menciona Ibarrola<sup>283</sup> que, poco ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el adulterio. Es el Adulterio la ruptura de la *fides matrimonialis* (fidelidad matrimonial). El adulterio no ha de ver sido, no consentido, ni compensado, no condonado. Aduce el autor que:

*“...el adulterio es provocado, cuando la presunta parte inocente ha impulsado a la otra y ello puede hacerlo:*

- a) Mandándolo ejecutar o induciéndolo directamente.*
- b) Negando reiteradamente la prestación del débito conyugal.*
- c) Prestándose al débito con tales dificultades, protestas y frialdad que provoca la búsqueda de ilícita compensación, gravísimo escollo a la fidelidad.*
- d) Es consentido el adulterio cuando el presunto cónyuge inocente no se opone al mismo, sino que lo favorece, tolerándolo u obteniendo del mismo provecho económico;*
- e) Es compensado el adulterio cuando ambos cónyuges lo han cometido.*
- f) Es condonado el adulterio cuando el cónyuge inocente lo ha perdonado después de conocido, ya de palabra, tácitamente, ya usando del derecho conyugal prestando o pidiendo el débito, ya mediante pruebas externas y mutuas de afecto, besos, abrazos, etc.,*

---

<sup>282</sup> Baqueiro Rojas, Edgar, *op. cit.*, nota 212, p. 165.

<sup>283</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, p. 341.

*presuntivamente si dentro de determinado plazo, después de conocido el adulterio no abandona al adúltero o no ejercita la acción judicial correspondiente”.*

En la primera legislación local sobre el divorcio, publicada en mayo de 1915, se indica como primera causal de divorcio, el adulterio de alguno de los cónyuges, sin embargo el trato de quien fuera el adúltero, la mujer o el varón, hacia la diferencia, pues el artículo 228, disponía que:

“...El adulterio de la mujer es siempre causa de divorcio; el del marido lo es solamente cuando con él concurren algunas de la circunstancias siguientes:

- I.- Que el adulterio haya sido cometido en la casa común;
- II.- Que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro o fuera de la casa conyugal;
- III.- Que haya habido escándalo o insulto público hecho por el marido a la mujer legítima.
- IV.- Que la adúltera haya maltratado de palabra o de obra, o que por su causa se haya maltratado de alguno de esos modos a la mujer legítima.

La anterior norma, a todas luces discriminatoria, quedo derogada al entrar en vigor el código civil en enero del año 1936.

Como puede observarse esta causal ha evolucionado, y como señala Acosta Romero: La redacción primitiva del Código de Napoleón establecía una diferencia entre el adulterio cometido por la mujer y el adulterio cometido por el marido, el cual sólo era causa de divorcio cuando iba aparejado de una doble circunstancia agravante: el mantenimiento regular de relaciones de concubinato, o que se cometiese en la casa conyugal. En 1884, en Francia, se

suprimió esta diferencia. Esta distinción se hacía en los códigos civiles mexicanos de 1870 y 1884 y en la Ley de Relaciones Familiares, puesto que para que se diera el adulterio de la mujer era suficiente la simple demostración del adulterio genérico, entendiendo éste como al acceso carnal que tiene una persona casada con otra que no sea su cónyuge, violando con ello el deber de fidelidad conyugal que le impone el matrimonio.<sup>284</sup>

Anteriormente en virtud de la doctrina así como de todas y cada uno de los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación<sup>285</sup>, el adulterio se generaba únicamente cuando uno de los cónyuges tenía relaciones sexuales con persona distinta al cónyuge y de sexo opuesto. En la actualidad el nuevo concepto de infidelidad sexual amplia dicho universo, en el sentido de que la relación sexual con un tercero, válidamente puede efectuarse no solo con persona de sexo opuesto sino con personas del mismo sexo, más aun, que no puede desconocerse la nueva legislación del Distrito Federal respecto de los matrimonio de personas del mismo sexo, lo que en todo caso deja en claro la transformación de la figura del matrimonio y por ende la inherente al divorcio.

Un punto interesante a tener en cuenta es que la infidelidad, se define desde la doctrina jurídica como:

*“Violación del deber de fidelidad, que puede constituirse en causal de disolución matrimonial”.*<sup>286</sup>

---

<sup>284</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 249.

<sup>285</sup> [J] II.4o.C.49 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXX, Novena Época, Registro: 166522, Civil, septiembre de 2009, p. 3090. Adulterio como causal de divorcio. Para su actualización no se requiere reunir los requisitos o condiciones que establece el Código Penal (Legislación del estado de México).

<sup>286</sup> Goldstein, Mabel, *Consultor Magno. Diccionario jurídico*, Buenos Aires, Circulo Latino Austral, S. A., 2008, p. 322.



Según, Bossert y Zannoni<sup>287</sup>, la fidelidad – de *fides*, fe – implica un concepto amplio, que socialmente incluye el deber para cada cónyuge de observar una conducta inequívoca, absteniéndose de cualquier relación que cree una apariencia comprometedora y lesiva para la dignidad del otro. En tal sentido, se trata de una obligación recíproca de los cónyuges que consiste en la abstención de mantener relaciones sexuales y actos de afectuosidad excesiva con personas distintas del otro cónyuge.

Efectivamente, la infidelidad sexual necesariamente debe de acontecer con un tercero que corresponda a una relación entre personas. Diversas conductas o desviaciones sexuales como la zoofilia, fetichismo, masturbación, etcétera no pueden estimarse como infidelidad sexual, en todo caso encuadraría en la causal de injuria grave, ya que implicaría una denotación, vejación, menosprecio en agravio del otro consorte o bien nueva causal inherente a la violencia intrafamiliar.

Doctrinariamente el elemento esencial de la causal de divorcio de adulterio consistente en la infidelidad, esta tiene dos acepciones, la infidelidad sin arribar a la relación sexual es considerada como la causal de injuria grave, en tanto que la infidelidad con relación sexual se consideraba el elemento principal de la causal de Adulterio.

Por otra parte cabe destacar que esta causa de divorcio, no está condicionada a que los hechos constitutivos de la infidelidad se lleven a cabo en el domicilio conyugal, lo que sí acontece en el adulterio como delito, el que prevé dos supuestos ya sea en el domicilio conyugal o con escándalo. Para atender el adulterio para su tipificación como delito, uno de los requisitos para la integración del cuerpo del delito de adulterio previsto y sancionado por el artículo 182 del Código Penal para el Estado, es que el activo del delito sea una persona casada y que tenga cópula con una que no es su cónyuge en el

---

<sup>287</sup> Peralta Andía, Javier Rolando, *Derecho de Familia*, Lima, Editorial Idemsa, 2002, p. 253.

domicilio conyugal o con escándalo; de donde se infiere que debe de acreditarse la existencia del domicilio conyugal en forma coetánea al tiempo de ocurridos los hechos imputados a los inculpados.

Llama la atención la naturaleza de los requisitos. Si se condiciona a que sea en el domicilio conyugal, y que lo cometa precisamente una persona casada, nos sugiere la imposición de una lógica antropocéntrica y *falocrática*, pues según la tradición anquilosada, quien naturalmente asistía en su casa, era la mujer. Se trata pues de una norma que está orientada a castigar a la mujer infiel, toda vez que el marido por tradición estaría en el trabajo o en diversas ocupaciones; que si bien, en efecto la sociedad ha modificado sus usos y costumbres, la norma se implementó cuando la dinámica social así prevalecía. Según Foucault, se trata de una forma de manifestación del poder:

*“(...) lo importante quizá no resida en el nivel de indulgencia o en la cantidad de represión, sino en la forma de poder que se ejerce. Cuando se nombra, (Tal es el caso del decreto de la norma penal que castiga la infidelidad, en este caso específicamente a la mujer), como para que se levante, a toda esa vegetación de sexualidades dispares, ¿se trata de excluirlas de lo real? Al parecer, la función del poder que aquí se ejerce no es la de prohibir, al parecer, se ha tratado de cuatro operaciones muy diferentes de la simple prohibición”.<sup>288</sup>*

Además de la diferencia entre la infidelidad o adulterio como causal de divorcio y el delito homónimo, en razón de que para la comisión de este último se requiere, como elemento constitutivo, que las relaciones sexuales entre uno de los consortes y la persona distinta al otro se hayan realizado en el domicilio conyugal o con escándalo, y de que la sentencia penal que lo declara surte efectos en una controversia de orden familiar, lo cierto es que,

---

<sup>288</sup> Foucault, Michel, *Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber*, México, D. F., Siglo XXI Editores, 1991, p. 54.

desde el momento en que se tiene conocimiento de la infidelidad matrimonial, cuando ésta no es de tracto sucesivo, transcurre el término para el ejercicio de la acción de divorcio, independientemente de la de carácter penal que también pudiera generarse, de manera que aun en ésta última hipótesis no es necesario esperar la obtención del fallo que ponga fin a ésta para hacer valer la primera, pues la finalidad de cada una de ellas es totalmente diversa.

Existen dos tipos de infidelidad sexual, la ocasional así como la permanente o de tracto sucesivo. En la primera si opera la caducidad en los términos que señala el artículo 410 de la Ley Sustantiva Civil<sup>289</sup>, no así en la permanente, por cuanto a los autores prolongan sus relaciones en forma de amasiato, debe de estimarse que aunque la antigüedad de su iniciación exceda de seis meses, el cónyuge ofendido conserva su derecho a demandar el divorcio hasta seis meses después de concluido tal estado, pues de otro modo equivaldría al absurdo de que si dicho estado no terminara en muchos años, se reduciría al cónyuge inocente que haya prolongado por más de seis meses sus instancia de reconciliación a padecer indefinida e irremediablemente tal agravio.

En la doctrina de derecho civil en México se considera que la nueva existencia del adulterio como causal de divorcio implica la existencia de la fidelidad como un deber conyugal.

Según Rojina Villegas<sup>290</sup> la fidelidad sexual consiste, además, en un deber:

---

<sup>289</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 91-96, Séptima Época, Registro: 241221, Civil, Cuarta Parte, p. 16. Genealogía: Informe 1976, Segunda Parte, Tercera Parte, tesis 44, p. 46. Divorcio, adulterio como causal de. La caducidad de la acción transcurre a partir de la fecha del conocimiento de la causal, independientemente del proceso penal a que también pudiera dar lugar.

<sup>290</sup> Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, p. 123.

*“...El deber de fidelidad, que comprende la obligación de abstenerse de la cópula con persona distinta del cónyuge. Su violación constituye el adulterio, que es sancionado civilmente con el divorcio, sin exclusión de la sanción penal correspondiente en algunas entidades federativas. La fidelidad, además, supone la necesidad de una conducta decorosa, de tal suerte que no implique ataques a la dignidad y a la honra del otro cónyuge. Cualquier conducta de actividad extramarital con persona del otro sexo, aun cuando no llegue el adulterio, puede constituir una injuria grave al cónyuge, es por ello que se considera que los casados no pueden tener novio o novia.”.*

Sanción penal.- Artículo 182 CPEJ. Se impondrán de quince días a dos años de prisión al hombre o mujer que tengan entre sí relaciones sexuales, bien sea en el domicilio conyugal o causando escándalo, sabiendo que uno de ellos o los dos están casados con otra u otras personas. Este delito se sancionará por querrella del ofendido, pero el perdón del último beneficiará a ambos responsables, siempre que se otorgue hasta antes de dictar sentencia.<sup>291</sup>

Para que el adulterio surta efectos penales en las entidades federativas que esta figura es punible, se requiere querrella del cónyuge inocente, y sólo se castiga el adulterio consumado, no así la tentativa, aun siendo notoria la intención<sup>292</sup>.

Para que surta efectos civiles, ya que viola el deber de fidelidad, sólo se requiere de la intimidad afectiva con tercero<sup>293</sup>, aunque el acto sexual no se realice o sea imposible probarlo, de todas formas en esta hipótesis se considera realizada la causal de injurias graves.

---

<sup>291</sup> Baqueiro Rojas, Edgar, *op. cit.*, nota 212, p. 166.

<sup>292</sup> No se olvide que la SCJN, reconoce y da validez a la prueba indirecta.

<sup>293</sup> *Ídem.*

Así la fracción I del artículo que se analiza del Código Civil del Estado de Jalisco, establece que la infidelidad conyugal es causal de divorcio, como sanción al incumplimiento del artículo 279 del Código invocado, que establece que: Es deber y obligación de los cónyuges, la fidelidad sexual y afectiva, procurar, respecto del otro su superación personal, guardarle y hacer que se guarden las debidas consideraciones a su persona y proporcionarle en las mejores condiciones, satisfactores de salud y bienestar. Como la fidelidad implica la observancia constante de una conducta altruista de fe, cariño, amor y respeto que un cónyuge debe al otro, lo cual es esencia de los deberes conyugales, es indudable que si uno de ellos falta al otro incurriendo en infidelidad, su conducta ofensiva y desleal sí se integra esta causal de divorcio. Desde el punto de vista psicológico, y humanista, hemos de aprovechar la elocución de Fromm:

*“Experimentar amor en el modo de tener implica encerrar, aprisionar, o dominar el objeto, “amado”. Es sofocante, debilitador, mortal, no dador de vida. Lo que la gente llama amor la mayoría de las veces es un mal uso de la palabra, para ocultar que en realidad no ama”.*<sup>294</sup>

Esta causal, como se ha indicado puede presentarse como un hecho aislado, o bien cuando se presenta como una situación permanente y continua, porque en este caso, por su propia naturaleza, es de tracto sucesivo y de realización persistente. En tal virtud es menester atenerse a los hechos que se invoquen en cada caso particular, para poder atender a las circunstancias específicas de cada evento y poder así considerar si se está en la presencia de un acto de infidelidad sexual aislado o de tracto sucesivo, lo que resulta completamente necesario para considerar si opero o no la caducidad de la causal. El término de seis meses que fija la ley para el ejercicio de la acción de divorcio, es un término de caducidad y no de

---

<sup>294</sup> Fromm, Erich, *Tener o ser*, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 56.

prescripción, y sobre la cual el juzgador no sólo está facultado, sino que se encuentra obligado a analizarlo, para determinar aun de manera oficiosa si la acción se ejercitó oportunamente.

Por lo que para poder determinar si opera o no la caducidad, la parte accionante debe establecer desde su demanda con claridad y precisión tales hechos, es decir, desde el libelo inicial se deben de establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que acontecieron los hechos, de los cuales pretende que se deduzcan que su cónyuge le fue infiel. De tal manera que si en la demanda, no se precisan esas circunstancias y los hechos que narra son genéricos, evidentemente se tendrá por no demostrado el elemento esencial de la causal de divorcio consistente en la infidelidad. De igual manera es patente que debe hacerse valer dentro de los seis meses siguientes a la fecha de que el conyugue se entero de dicha infidelidad, sin que deba confundirse con la fecha en que se genera la causal, sino atendiendo a la data en que el cónyuge inocente se entero del evento.-

La no caducidad es una de las condiciones del ejercicio de la acción y, por ello, la autoridad judicial no sólo tiene facultades para examinar si se cumple el requisito, sino que está obligada a hacerlo para cumplir los deberes que le corresponde. Por tanto, la caducidad de la acción de divorcio, fundada en el adulterio, no debe constituir necesariamente una excepción que se oponga al contestar la demanda y que, por omitirla, no deba analizarse por el tribunal, ya que de acuerdo con lo antes dicho, la no caducidad de la acción constituye uno de los requisitos de ésta; y siendo así, debe analizarse en primera y segunda instancias, como materia de la litis, independientemente de que se hubiese o no invocado como excepción.

En la actualidad el contenido de la causal es indistinta para ambos cónyuges, ello se basa en “...*La igualdad de trato en la cuestión de divorcio es congruente con la igualdad que tiene el varón y la mujer ante la ley*

*actualmente, en virtud de que el matrimonio se funda en la igualdad moral y jurídica de los cónyuges como garantía de la unidad familiar y de una relación estable.*<sup>295</sup>

### **5.2.1 Elementos.**

Los elementos para la procedencia de esta causal son: la existencia de relaciones sexuales entre el cónyuge demandado y otra persona diversa al cónyuge actor.

### **5.2.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

La Suprema Corte de Justicia ha reiterado en tesis jurisprudencial que el adulterio como infidelidad sexual admite prueba indirecta para demostrar la infidelidad del cónyuge culpable, ya que es sabido que el medio directo para la comprobación de esa causal es casi imposible; pero ello no significa que la parte actora quede relevada de acreditar tiempo, lugar y modo en que acontecieron los hechos, de los cuales pretende que se deduzcan que su consorte tuvo relaciones sexuales con diversa persona. Más aun, el medio de convicción indirecto debe encaminarse a demostrar precisamente la conducta infiel del cónyuge demandado, así como la mecánica del adulterio, esto es, que el culpable haya tenido relaciones sexuales con persona distinta de su consorte. Por ejemplo, la circunstancia de que a uno de ambos se le hubiera visto en compañía de otra persona que no es su cónyuge, no es suficiente para tenerla por acreditada<sup>296</sup>, empero si se presentan otro tipo de pruebas

---

<sup>295</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 250.

<sup>296</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XII, Octava Época, Registro: 215414, Civil, agosto de 1993, p. 417. Divorcio, adulterio como

que aunque por si solas no sean suficientes, al concatenarlas y adminicularlas entre sí, ponen en evidencia un comportamiento impropio de pareja del cónyuge con persona diversa, son validas para tener por acreditado en forma indirecta esta causal<sup>297</sup>.

La parte actora tiene la carga de probar en el juicio las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjeron los hechos, de los cuales se pretende deducir que el culpable tuvo relaciones sexuales con persona o personas distintas de su consorte, para así satisfacer las exigencias legales que el caso amerita y que el juzgador este en aptitud de apreciar la conducta indebida imputada a la parte demandada. Por lo que es indispensable que de los hechos demostrados se pueda deducir de manera lógica y consecuente, la infidelidad que se alegue, ya que para que las presunciones humanas merezcan fe, es menester que entre el hecho afirmado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso más o menos necesario, al grado que produzca en el juzgador la certidumbre de la existencia del hecho alegado, debiendo demostrar la conducta infiel en su mecánica. O sea, no por el hecho de que se admita la prueba indirecta para demostrar la infidelidad del cónyuge culpable, quiere decir que el actor quede relevado de acreditar tiempo, lugar y modo en que acontecieron los hechos, de los cuales pretende que se deduzcan que su cónyuge tuvo relaciones sexuales con distintas personas. Por lo que resulta necesario que desde la demanda, se precisen esas circunstancias y no que se aluda a ellas de manera genérica.

---

causal de. No es prueba suficiente la relativa a que el cónyuge demandado haya sido visto en compañía de otra persona que no es su consorte.

<sup>297</sup> [J] II.2o.C.312 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, Registro: 188238, Civil, diciembre de 2001, p. 1718. Divorcio, adulterio como causal de. Para acreditarla resulta procedente la prueba indirecta.



Los elementos de prueba que se aduzcan para demostrar la causal, deben producir en el juzgador certidumbre que de uno de los cónyuges le fue infiel a otro, y que si los elementos de convicción allegados a los autos provocan dudas, incuestionablemente no debe considerarse probada la causal de divorcio de que se trata.

La prueba indirecta, que en este tipo de asunto es o se considera pertinente corresponde por ejemplo: acta de un matrimonio diverso de uno de los conyugues durante la vigencia del matrimonio, ya sea civil o religioso; acta del registro civil de registro del nacimiento de un hijo con persona diversa a su consorte durante la vigencia del matrimonio, fe de bautismo en donde firme como padre o madre del menor y como progenitor persona distinta al consorte, etcétera.

En el primer ejemplo, la prueba indirecta del segundo matrimonio, deja en claro que si entre los deberes y derechos que nacen del matrimonio que se consignan en las disposiciones del numeral 273 al 279 del Código Civil del Estado, se encuentra que los cónyuges deben vivir juntos en el domicilio conyugal que de común acuerdo establezcan, que es deber de cada cónyuge el cultivar y promover el conocimiento, comprensión y concientización de lo que significa el estado social del matrimonio, lo mismo que los procesos de mutación humano-biológicos para que le permitan un mejor acoplamiento y complementariedad en esta relación; así como que es deber y obligación de los cónyuges, la fidelidad sexual y afectiva, procurar, respecto del otro su superación personal, guardarle y hacer que se guarden las debidas consideraciones a su persona y proporcionarle en las mejores condiciones, satisfactores de salud y bienestar, según el conocimiento desde la psicología experimental;<sup>298</sup> y si bien los medios indirectos deben encaminarse a demostrar la conducta infiel del cónyuge demandado, así como la mecánica del adulterio, para efecto de deducir que el demandado tuvo relaciones

---

<sup>298</sup> Arnau Gras, Jaime, *Psicología experimental*, México D. F., Trillas, 1979, p. 13.

sexuales con persona distinta de su cónyuge, es patente que si uno de ellos contrajo un nuevo y segundo matrimonio con persona distinta a su consorte, no puede considerarse que este segundo matrimonio solo hubiese sido solo de papel, por lo que atento a los fines del matrimonio se deduce de manera lógica y consecuente, la infidelidad de uno de ellos hacia sus consorte<sup>299</sup>, amén de que este segundo matrimonio es un acto reprobable por la sociedad y rompe las obligaciones y fines del matrimonio que celebraron los conyugues, ello porque la fidelidad implica la observancia constante de una conducta altruista de fe, cariño, amor y respeto que un cónyuge debe al otro, lo cual es esencia de los deberes conyugales en términos éticos y morales; aunque es preciso aclarar que “La moral siempre será adjetiva y tenderá a calificar los actos (ya sean positivos o negativos, mientras que la ética no los califica, sino que es como un gran menú de restaurante, donde podemos optar por varios platillos, pero al final decidimos por uno, o sea, podemos optar por varias formas de actuar correctamente y escoger una para aplicarla como eje rector de nuestra vida”<sup>300</sup>, por lo que es indudable que si uno de ellos falta al otro incurriendo en infidelidad, la conducta ofensiva y desleal de quien actúa de esta manera sí integra y acredita esta causal de divorcio

Respecto del segundo ejemplo, se debe decir que la documental inherente al registro de nacimiento de un hijo con persona diversa a su consorte<sup>301</sup> o bien el registro de su bautismo suscrito por el cónyuge, como prueba indirecta genera la presunción de que al procrear y registrar a este

---

<sup>299</sup> [J] Tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 4ª parte, t. CXXIII, p. 19. Divorcio, adulterio como causal de, fundada en la bigamia.

<sup>300</sup> Zaragoza Martínez, Edith Mariana (coord.) *et al.*, *Ética y Derechos Humanos*, México D. F., Iure, 2006, p. 6.

<sup>301</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. CXXIV, Quinta Época, Civil, Registro: 340151, p. 1027. Hijos adulterinos. Efectos del registro del nombre de los padres (adulterio como causal de divorcio).

hijo como propio u ostentarse como tal en un acto religioso, se violentan los deberes y derechos que nacen del matrimonio reseñados en el párrafo anterior, puesto que tal registro deja patente que tuvo relaciones sexuales con persona distinta de su cónyuge, lo que evidencia y deduce de manera lógica y consecuente, la infidelidad de uno de ellos hacia su consorte.

Además de las pruebas documentales, también resultan aptas para acreditar la causal, la prueba testimonial, confesional siempre y cuando se ajusten a los requisitos de ley tanto en su oferta como su desahogo e integración, sin olvidar que en caso de que el reo fuera declarado confeso, las presunciones que pudieran emerger sobre las posiciones en que se declaro confesa, así como a las que surgieran de una actitud contumaz del demandado, por si solas no serán suficientes por si solas para tenerlas como pruebas indirectas sobre esta causal, sino que es menester que estén acreditadas con otros medios probatorios que resulten eficaces para tal fin<sup>302</sup>.

El recorrido por esta causal de divorcio, sus elementos, características, medios de prueba, dejan en claro la dificultad probatoria de la misma, quizá por ello es que su invocación puede establecerse como intermedia, empero su acreditación es difícil tarea.

### **5.3 Cuando uno de los cónyuges haya concebido un hijo con tercera persona, antes del matrimonio.**

Esta causal corresponde al evento de que uno de los consortes tenga un hijo dentro del matrimonio, pero el quid del asunto es que hubiera sido concebido antes de celebrarse el mismo con persona diverso al cónyuge. En

---

<sup>302</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XI, Octava Época, Registro: 216632, Civil, abril de 1993, p. 243. Divorcio, adulterio como causal de. Las pruebas indirectas para acreditarlo deben satisfacer los requisitos legales.

ambos casos se requiere de una declaración judicial, en el caso de la mujer mediante la acción de desconocimiento de la paternidad y en tanto que en el caso del varón, se requiere que sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.

### 5.3.1 Teorías de la concepción y el alumbramiento.

La concepción significará que si el hijo ha sido procreado dentro del matrimonio, entonces será tenido como matrimonial, aun cuando el nacimiento se produzca fuera del matrimonio; mientras que el alumbramiento significará que el hijo nacido dentro el matrimonio será matrimonial, aun cuando hubiera sido concebido fuera del matrimonio. Pues bien, ambas teorías por separado llevan implícitas injurias, así, si adoptamos la teoría de la concepción, se considerará extramatrimonial al hijo concebido fuera del matrimonio pese a que nazca dentro de él, y si adoptamos la teoría del alumbramiento, se considerará extramatrimonial al hijo nacido fuera del matrimonio pese a que fue concebido dentro de él<sup>303</sup>.

Baqueiro<sup>304</sup> resume el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a hijo concebido antes de éste, diciendo que: “...es necesario que el recién nacido sea declarado judicialmente ilegítimo. No hay delito alguno en que la mujer oculte al futuro marido que se encuentra encinta de un tercero, pero sí hay un grave hecho inmoral, también existe una injuria que se causa al marido al momento de celebrar el matrimonio, por cuanto resultará deshonra para éste.”.

---

<sup>303</sup> Ojeda Torres, Guido Andrey, *Filiación matrimonial. Impugnación de la paternidad y maternidad*, disponible en <<http://www.monografias.com/trabajos93/impugnacion-paternidad/impugnacion-paternidad.shtml>>, página visitada el 23 de abril de 2013.

<sup>304</sup> Baqueiro Rojas, Edgar, *op. cit.*, nota 212, p. 166.

En tanto que Pallares<sup>305</sup> señala que: “...La acción de divorcio en este caso, únicamente puede ser intentada después de que se obtenga por el marido sentencia ejecutoria que declare la ilegitimidad del hijo, lo que en la práctica da lugar a un juicio que dura aproximadamente dos años, dada la lentitud de nuestros tribunales.”.

Por su parte, Acosta Romero, señala que la injuria en esta causal “....se configura por el silencio guardado por su autor, por el engaño prolongado hasta el momento del matrimonio; o se puede considerar como injuriosa la forma en que esta falta es revelada posteriormente por la mujer a su marido.”.<sup>306</sup>

### 5.3.2 Elementos.

Para la procedencia de esta causal, se requiere acreditar los siguientes requisitos:

- a) El matrimonio celebrado entre los contendientes,
- b) Que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte.
- c) Que para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente o sea que exista sentencia judicial que declare que dicho hijo fue engendrado por persona diversa al cónyuge.

---

<sup>305</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 64.

<sup>306</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 251.

- d) Que tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.

Esta causal en particular en ocasiones se intenta bajo el concepto de la causal de injurias graves –hoy violencia intrafamiliar- lo que no resulta conducente, ya que la ley ha determinado y limitado las causas concretas de divorcio, por lo que no es factible admitirse como equiparación, cuando los hechos en que se hace consistir la injuria grave tienen una causal diversa en la cual encaja de manera plena<sup>307</sup>.

### **5.3.3 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Es pertinente señalar que para la procedencia de esta causal en el primer supuesto, se debe acreditar en forma plena que la cónyuge dio a luz a un hijo, que éste fue concebido antes de la fecha de celebrarse el matrimonio entre los contendientes, y que existe sentencia judicial en el sentido de que el padre del menor es persona distinta al cónyuge varón; de lo que se coligue que es indispensable dicha declaración judicial, la cual sólo puede formularse a través de la sentencia definitiva en que culmine el juicio donde se hubiera cuestionado precisamente si el hijo debe o no reputarse como ilegítimo, sentencia que deberá tener la calidad de ejecutoriada.

Cuando se está en la segunda hipótesis, o sea en el caso del varón, el hijo ajeno también debe nacer durante el matrimonio, sin embargo debe ser concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a

---

<sup>307</sup> [J] Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Parte. XI, Tercera Sala, Sexta Época, Civil, Registro: 272647, p. 81. Divorcio. Causal fundada en el artículo 268 del Código Civil (Legislación de Coahuila).

su consorte y también se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad; por lo que al igual que en el supuesto de la mujer es patente que la declaración judicial referida, sólo puede formularse a través de la sentencia definitiva en que culmine el juicio donde se hubiera cuestionado cualesquiera de las dos precisamente si el hijo debe o no reputarse como ilegítimo, o en su caso sentencia que deberá tener la calidad de ejecutoriada.

La adición a la fracción respecto de la conducta del varón entro en vigencia en el año dos mil ocho, por lo que lógicamente no se tiene en este momento material jurídico que al respecto se haya generado por el Poder Judicial de la Federación, sin embargo al encontrarnos que en uno y otro caso es menester tener una sentencia que declare cualesquiera de ambos supuestos, se considera que los criterios que se han emitido al paso del tiempo sobre la causal que corresponde a la mujer, tienen debida aplicación por analogía al supuesto del hombre.

En tal sentido de cosas existe criterio del Poder Judicial Federal<sup>308</sup>, en que se ha determinado en el sentido de que esta declaración judicial no puede ni podrá formularse indirectamente en un procedimiento ajeno a ese problema, porque ello afectaría la estabilidad misma de la familia, sin ninguna base legal, y no tiene sentido que una cuestión de tan grave trascendencia, se haga depender de resoluciones emitidas en un procedimiento donde no se discutió la ilegitimidad del hijo, con la intervención del padre y de la madre, por lo que es evidente que tal cuestión no puede ser materia de prueba y resolución judicial en el juicio ordinario cuya acción es la de disolución del vínculo matrimonial, sino que debe existir un juicio previo en el cual se

---

<sup>308</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 4, Cuarta Parte, Séptima Época, Civil, Registro: 242487, p. 35. Divorcio, causales de. Hijos concebidos antes de celebrarse el matrimonio (Legislaciones de los estados de Baja California y Morelos).

hubiese resuelto que tal hijo no es del cónyuge varón o que este fue condenado en juicio de reconocimiento de paternidad, sentencia que en todo caso tendrá la calidad de cosa juzgada una vez que haya sido declarada ejecutoriada.

Por otra parte, es menester atender a que la causal que nos ocupa si es materia de caducidad en los términos de lo previsto por el numeral 410 de la Ley Civil, atento a que por su propia naturaleza no corresponde a una causal de tracto sucesivo, sin embargo una correcta interpretación del contenido de dicha norma en relación con la causal y los requisitos para acreditarla, es evidente que los seis meses a que alude el numeral 410 citado, no pueden correr a partir del evento del nacimiento del infante, sino a partir de que se tenga conocimiento de la sentencia ejecutoriada en la cual se determine que dicho hijo fue engendrado por persona diversa al cónyuge varón, o bien, a partir de que se tenga conocimiento de la sentencia ejecutoriada que condene al varón en juicio de paternidad,.

Aunque la ley no lo dice, es conforme a la lógica y a la justicia, que el término de seis meses dentro del cual debe intentarse la acción de divorcio para evitar su caducidad, no comienza a correr, tratándose de esta causal, sino a partir de la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que declare al hijo ilegítimo.<sup>309</sup>

En esta causal, las únicas pruebas que resultan idóneas para su acreditación, en uno y otro supuesto, serán el acta de registro de nacimiento del infante para atender a la data de su nacimiento en relación con la fecha de matrimonio de las partes, así como las actuaciones judiciales que corresponden a la sentencia ejecutoriada que determine cualesquiera de los dos supuestos.

---

<sup>309</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 65.



Esta causal de divorcio es poco frecuente, según se puede observar del análisis estadístico que obra en el capítulo primero; después del análisis de sus elementos y características deja en claro que quizá ello se deba a que es de difícil preparación, pues previo a la acción de divorcio, uno y otro de los cónyuges debe iniciar un juicio diverso que declare la procedencia de la acción de desconocimiento de la paternidad o bien el de reconocimiento de la misma, lo que representa un mayor tiempo, economía y desgaste de los interesados

#### **5.4 La propuesta de prostitución de uno de los consortes hacia el otro.**

De una manera gramatical se entiende por prostitución, el comercio sexual que una persona hace, por lucro, de su propio cuerpo, es entrega carnal retribuida.

La prostitución como tal, puede ser reprochable desde el punto de vista moral y social, sin embargo cabe destacar que desde la óptica del derecho penal y privado, no es punible, sancionable, ni recriminable.

Menciona Rojina Villegas que la causa de divorcio que se hace consistir en el hecho de que el marido prostituyese a su mujer, bien cuando lo lleve a cabo directamente o acepte dinero o alguna otra recompensa para que su mujer tenga relaciones carnales con otro hombre, no requiere que penalmente se declare penalmente al marido, culpable de lenocinio.<sup>310</sup>

Sobre la propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, Baqueiro<sup>311</sup> señala lo siguiente: “...*Normalmente tiene lugar del marido*

---

<sup>310</sup> Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, p. 372.

<sup>311</sup> Baqueiro Rojas, Edgar, *op. cit.*, nota 212, p. 168.

*respecto de la prostitución de su mujer, no sólo se da por la propuesta, sino cuando ha recibido dinero o cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer. Esta conducta constituye un delito, lenocinio, por la explotación del cuerpo de uno de los cónyuges por el otro.”.*

El Código Penal del Estado en el capítulo denominado Ultrajes a la Moral o a las Buenas Costumbres e Incitación a la Prostitución, en su artículo 135 señala que se impondrán de tres meses a dos años de prisión, entre otros supuestos, al que invite a otro a la explotación carnal de su cuerpo.

También se establece como agravante en el delito de corrupción de menores si los actos de corrupción propician el hábito del alcoholismo, el uso de tóxicos y demás sustancias que produzcan efectos similares, la práctica de la prostitución o las de orden homosexual.

El delito de Lenocinio, se contempla en el numeral 139, que dispone que el delito de lenocinio se sancionara de uno a seis años de prisión y multa por el importe de veinte a ciento noventa y seis días de salario y lo comete quien:

- I. Habitual o accidentalmente explote el cuerpo ajeno por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera;
- II. Induzca, medie o solicite a una persona para que con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución; y

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de citas o lugares de concurrencia en donde se explote la prostitución u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

Que en cualquiera de los casos anteriores, si el reo tuviere alguna autoridad sobre la persona explotada, se le impondrá sanción de uno a ocho años de prisión, multa por el importe de cuatro a ciento noventa y seis días de salario y será privado de todo derecho sobre los bienes de aquélla.

Como puede observarse, la prostitución como tal, no es materia de sanción en nuestro derecho penal, sino que cuando se alude a los delitos de prostitución, se habla de las conductas de favorecimiento o explotación ajena, lo que se castiga son las actividades a obtener un lucro a costa de la prostitución de terceros, no se castiga a la prostituta o al prostituto, sino al proxeneta o lenón. Las conductas a perseguir son las relativas a la promoción, favorecimiento o facilitación a la prostitución, coacción a una persona para satisfacer deseos deshonestos de otra, mantenimiento de locales para que en ellos se ejerza la prostitución, etcétera.

En cuanto a la causal de divorcio que nos ocupa, se debe dejar en claro que de la misma manera tampoco se cuestiona la prostitución como tal, sino que versa en relación con la propuesta que uno de los esposos realice para prostituir a su consorte, ya sea por que lo haya propuesto de manera directa o bien consienta en propuestas para ello, por cualquier causa; conducta ésta que de presentarse va en franca confrontación con los derechos y deberes del matrimonio, antes citados <sup>312</sup> deberes estos que no se logran, si uno de los esposos despliega una conducta como a la que alude la causal que nos ocupa.

---

<sup>312</sup> Cfr. Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, arts. 278 y 279.

Por otra parte, al igual que la mayoría de las causales, quien la invoque tiene la obligación de reseñar con toda claridad y en forma precisa desde su escrito inicial de demanda, las circunstancias de modo tiempo y lugar en que acontecieron tales eventos, señalando en forma diáfana y puntual cuál o cuáles son los hechos que se traducen en la propuesta de su cónyuge para prostituirla o prostituirlo, o bien cual o cuales son aquellos hechos que su contraria consintió sobre las propuestas de prostitución que se presentaron a la parte actora, por cualquier causa; puntos estos que deben de establecerse desde un principio a efecto de que su adversario este en posibilidad jurídica de preparar su defensa, amén de que ello es necesario, atento a que de las características de esta causal, es evidente que no es de tracto sucesivo, por lo que una vez que acontezca el hecho de la propuesta o el consentimiento de su consorte con la misma, el cónyuge inocente tendrá que hacerla valer dentro del término de seis meses a que alude el numeral 410 de la ley civil.

La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en las propuestas de prostitución que se presenten a su consorte, por cualquier causa.

Pallares se pregunta: *"...¿Será causa de divorcio la prostitución de la mujer cuando se realiza por el acuerdo mutuo de los esposos?"*

*Y responde: "... En concepto del autor, militan razones contrarias para opinar en pro o en contra de que en ese caso la prostitución de la mujer sea causa de divorcio. Es evidente que el marido no puede demandarlo, porque la fracción III lo considera culpable, y, por tanto, es de aplicarse el Art. 278 del Código Civil, que niega la acción de divorcio al cónyuge culpable, pero tampoco podrá solicitarlo la esposa, porque ha consentido la prostitución o mejor dicho, la injuria grave que el marido le hace al utilizarla como un instrumento de especulación. Tal consentimiento puede considerarse como un acto de perdón a la injuria que ella recibe, en cuyo*

*caso cabe aplicar el Art. 279 del Código Civil. Más aún, puede sostenerse que la mujer no recibe ninguna injuria cuando los dos esposos están de acuerdo en su prostitución. Hay que anotar que la sociedad no debe consentir en que la unión conyugal se corrompa y subsista corrompida de tal manera, por lo que, aún en el supuesto de que se trata, la mujer es titular de la acción de divorcio. Sin embargo, admito que el punto es dudoso.*<sup>313</sup>

#### **5.4.1 Elementos.**

Los elementos principales de esta causal de divorcio, además de acreditar la existencia del matrimonio son:

La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, ya sea que:

- que lo haga directamente o
- consienta en ello por cualquier causa.

#### **5.4.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Por las características de la causal es patente que los hechos en que se soporte serán de difícil acreditación. En si corresponde a una causal de divorcio de casi nulo ejercicio, y si bien es un mínimo su invocación mas difícil resulta su acreditación en el proceso; abona esta opinión, el hecho público y notorio que dimana en cuanto a que sobre el tema específico de esta causal, no existen ni jurisprudencia ni tesis aisladas que al respecto y sobre el caso particular hubiese emitido el Poder Judicial Federal, pues en las que se hace alusión a esta causa, son sobre aspectos genéricos a todas las causales. Sin embargo es factible asumir que pueden considerarse como pruebas aptas, la

---

<sup>313</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 71.

testimonial, confesional, documental (en caso de existir algún hecho documentado al respecto) así como las presunciones.

### **5.5 Incitar a la violencia un cónyuge al otro, para la comisión de delito.**

Procesalmente el Juez debe analizar el delito de que se trate y su gravedad deberá ser calificada, corresponde al actor probar sólo la incitación que se traduce a una provocación aunque el delito no se cometa, la prueba idónea será la testimonial, opera la caducidad en seis meses. Galindo Garfias establece que: “... *el peligro que entraña esta incitación es muy grave, por lo tanto, debe disolverse el vínculo matrimonial, por lo tanto, la causal opera de modo absoluto trae aparejada la pérdida de la patria potestad.*”<sup>314</sup>

Observemos que el presupuesto procesal, como lo indica Rojina Villegas<sup>315</sup>, es que alguien provoque públicamente a otro para cometer un delito o bien, que haga la apología de este o de un vicio, sin embargo en la materia civil – familiar, no se requiere que esa incitación sea pública, basta con que un cónyuge incite al otro a cometer un delito aun cuando no sea de incontinencia carnal, o bien que lleve a cabo una violencia física o moral para que cometa el delito.

La palabra incitar significa mover a una persona para que ejecute o realice algo, su sinónimo es animar. Según Martín Alonso:

---

<sup>314</sup> Servín Becerra, Jorge, *Derecho de Familia y Sucesiones*, Acatlán, UNAM-Facultad de Estudios Superiores, 2009, *passim*.

<sup>315</sup> Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, pp. 372 y 373.

*“Mover, estimular, inducir, instigar, aguijonear, apremiar, excitar, compeler, impeler, empujar, provocar, animar, invitar, convidar, picar, exhortar, persuadir, inspirar, desafiar, retar, aguijar, espolear, instar, importunar, apretar, concitar, malquistar, enemistar, acuciar, engrescar, enrabiar, poner en el disparadero, enzalamar, inclinar”*<sup>316</sup>

El vocablo violencia, significa una fuerza intensa, impetuosa, es la fuerza que se emplea contra algo o contra alguien, también implica la coacción que se ejerce sobre una persona para obtener su aquiescencia en un acto jurídico. En el derecho romano la violencia constituía un vicio del consentimiento siempre que fuese de tal magnitud que pudiese infundir temor a un hombre de ánimo valeroso. Los glosadores ampliaron este criterio, exigiendo que la violencia fuese capaz de amedrentar a una persona de carácter firme. En el ámbito del derecho civil, emplea una fórmula más objetiva: la violencia debe ser de tal consideración que importe peligro de perder determinados bienes jurídicos especificados por la ley. La doctrina distingue entre violencia física y violencia moral. La primera se traduce en actos que, más que viciar, hacen desaparecer la voluntad del individuo. La violencia moral es la que se ejerce a través de medios de presión psicológica, que tuercen o desvían la voluntad de la persona.

Según Carnelutti<sup>317</sup>, el elemento material de la violencia está constituido por un comportamiento intimidatorio, que se manifiesta en la coacción física o en la amenaza. En la violencia la voluntad está viciada por el temor, elemento anómalo que distorsiona la formación del consentimiento,

---

<sup>316</sup> Alonso, Martín, *Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Libro Práctico*, México D. F., Editorial Aguilar, 1994, p. 549.

<sup>317</sup> Carnelutti, Francesco, *Como se hace un proceso*, Bogotá, Editorial Themis, S.A., 2007, p. 92.

teniendo como consecuencia que la libertad de decisión de un sujeto, queda así eliminada.

Sobre los requisitos para considerar que existe violencia, se requiere fundamentalmente que la fuerza física o amenazas, constitutivas de la violencia, importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes, sin embargo en el caso concreto, por la naturaleza de la causal que nos ocupa, la violencia que se ejerza debe tener como objetivo o finalidad el que el otro cónyuge realice una conducta que por sus características encuadre en la comisión de un delito.

La violencia no es cosa nueva, pues es parte de la naturaleza humana, la novedad consiste en el reconocimiento de ella como un mal social, que afecta gravemente a la sociedad en general, a la familia en particular y el propio sujeto violento, en este sentido Méndez Luevano, Tanya Elizabeth y Reynoso Orozco indican:

*“...Las conductas violentas son alarmantemente comunes en nuestra sociedad y se consideran un problema de salud pública, y en un esfuerzo para combatir esta tendencia de crecimiento, se ha incrementado el número de investigaciones y proyectos dirigidos al entendimiento e intervención de este tipo de conductas, que han dado como resultado el desarrollo de teorías que soportan la etiología de la agresión desde diferentes perspectivas y aproximaciones del problema...” “...la conducta violenta nunca surge de una sola causa. Más bien es el resultado de una combinación de los factores de riesgo - entre ellos las tendencia heredada, una infancia traumática y otras experiencias negativas, que interactúan y se agravan uno al otro. El fenómeno de la violencia ha aumentado considerablemente en años recientes, así como el número de investigaciones encaminadas al estudio de sus orígenes dentro de las dinámicas familiares y de sus*



*bases neurobiológicas. La conducta violenta es heterogénea, es decir, los actos de violencia impulsiva y premeditada difieren en sus orígenes, los mecanismos, y la gestión. Entre la población en general, el término “psicópata” conlleva la imagen del “loco” o del “sádico asesino en serie”. Sin embargo, los psicópatas no pueden ser clasificados bajo criterios legales o psiquiátricos de la discapacidad o enfermedad, dado que la mayoría de los asesinos son psicópatas pero no todos los psicópatas son asesinos. Los correlatos clínicos de la conducta violenta son conocidos, pero los mecanismos subyacentes no están bien comprendidos...”<sup>318</sup>.*

Luego entonces, para que proceda esta causal, se debe estimar que uno de los cónyuges debe de incitar, lo que se define como la acción que se lleva a cabo con el ánimo de mover o estimular a su consorte, para que ejecute algún delito, o bien que la acción que se despliegue corresponda a obligar o forzar a que su cónyuge perpetre algún delito, siendo irrelevante el que se hubiese cometido o no el delito, puesto que lo que importa es la actitud de incitación o de violencia manifestada por uno de ellos para que el otro lo cometa.

Al igual que el resto de las causales de divorcio, la que aquí nos ocupa, debe de plantearse por la parte accionante desde el libelo inicial, en forma clara y puntual, reseñando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los actos de incitación o de violencia, así como establecer cuál es el delito o delitos que su consorte pretendió que se cometieran o en su caso se cometieron, por lo que el acto o hecho que se pretenda obtener por medio de la incitación o de la violencia, debe ser forzosamente uno que

---

<sup>318</sup> Méndez Luévano, Tanya Elizabeth y Reynoso Orozco, Orlando, “Aproximaciones al Estudio de la Violencia y los Psicópatas”, *Revista Letras Jurídicas*, núm. 9, Otoño de 2009.

implique una conducta ilícita y que sea considerado como tal, en nuestra legislación penal. Lo anterior, debe ser expuesto desde un inicio a efecto de no conculcar las garantías de audiencia y defensa del demandado, y este en posibilidad de plantear las defensas o excepciones que estime pertinentes. La interrelación de los conflictos psicológicos, legales y sociales nos obliga a pensar en la necesidad de la inter-disciplina pues el abordaje de estas situaciones es muy complejo y requiere de varias miradas.<sup>319</sup>

Atento a la naturaleza de la causal, es evidente que es de realización instantánea, por lo que en ella opera la caducidad a que alude el numeral 410 del Código Civil, por ende es necesario que se exprese en forma exacta la fecha en que acontecieron tales eventos, y estar en posibilidad de establecer si la acción se ejercita en base a tal causal, se hace valer dentro del término de seis meses a que alude el numeral invocado.

Incitar a la violencia significa tanto como provocarla; pero la causal sólo se produce si la provocación tiene por objeto inducir a la persona a cometer un delito.

Lo más frecuentes es que uno de los cónyuges mueva al otro a cometer un delito contra las personas, ya sea el de lesiones, homicidio, plagio, pero también puede ser que tengan por objeto la comisión de un delito sexual, como es el de violación.<sup>320</sup>

### **5.5.1 Elementos.**

---

<sup>319</sup> Canevaro, Alfredo, "Apuntes para una filosofía del grupo familiar", *Revista de terapia familiar*, Buenos Aires, núm. 3, 1979.

<sup>320</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 72.

Además de acreditar la existencia del matrimonio, como requisitos sine qua non para la procedencia de esta causal, se debe de acreditar de manera fehaciente los siguientes elementos:

- a) La existencia de actos de incitación o de violencia, según sea el caso, efectuados por un cónyuge al otro;
- b) Que esos actos hayan tenido como objetivo que el otro cónyuge cometa algún delito.

#### **5.5.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Al igual que la anterior, su invocación es mínima y de difícil acreditación, sobre todo cuando el supuesto es y corresponde solo a la incitación o al acto de violencia sin que se perpetre el delito. Lo que se robustece con el hecho de la nula generación de jurisprudencia o tesis aisladas de los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación sobre la causal en comento de manera específica.

La ausencia referida, no necesariamente implica que no se presenten hechos que pueden encuadrar en esta causal de divorcio, sino en todo caso dejan en claro, que se presentan circunstancias de otra índole que provocan su falta de reclamación, por ejemplo: en múltiples ocasiones vemos o leemos como noticia, la detención de una mujer que cometió un hecho ilícito en donde el incitador o autor intelectual resulta el esposo, ejemplo de ello son las mujeres que pretenden o introducen armas, drogas o cualesquier otro material prohibido a prisión, con el ánimo de entregarlo al consorte que se encuentra en prisión; sin embargo, es excepcional que la mujer solicite el divorcio por esta causa, pero en caso de hacerlo debemos atender a la

jurisprudencia que establece que las causales deben quedar acreditadas en forma plena<sup>321</sup>. Pese a ello, los medios de prueba factibles para acreditar los hechos en que descansa esta causal, son la testimonial, confesional y documentales en caso de haberlas.

## **5.6 Actos inmorales de cualquiera de los cónyuges para la corrupción de los hijos.**

Explica Baqueiro<sup>322</sup> que, la corrupción de los hijos consiste en los actos ejecutados por uno de los consortes para corromper a los hijos, o la tolerancia en su corrupción. Estos actos pueden llegar a constituir delito especial de corrupción de menores, o bien el hecho inmoral que ello conlleve, en algunos casos aun cuando se trate de mayor de edad.

Los actos inmorales que se efectúan con la finalidad de corromper a un hijo propio o del consorte, representa un hecho o acción que contraviene las normas relativas a la conducta sobre el bien y el mal, conforme a las buenas costumbres y adoptadas por la sociedad; desde el punto de la figura del derecho civil que nos ocupa, la ejecución de dichos actos tiene como objetivo primordial disolver el matrimonio y evidentemente evitar que se causen o se sigan causando, según sea el caso, daños psicológicos o físicos a los menores hijos.

En tanto que Pallares señala que: “...*De todas las causas de divorcio que enuncia la Ley, tal vez sea ésta la más odiosa, la más culpable, la que*

---

<sup>321</sup> [J] VI.2o. J/183, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, Registro: 220014, Civil, marzo de 1992, p. 95. Divorcio. Las causales deben probarse plenamente.

<sup>322</sup> Baqueiro Rojas, Edgar, *op. cit.*, nota 212, p. 170.

*demuestra mayor depravación, excepto en aquellos casos en que la miseria obliga a los padres a consentir en la prostitución de sus hijos, hecho éste que la pobreza explica, pero no justifica de ninguna manera.*<sup>323</sup>

Corromper deviene de la palabra latina *corrumpere*,<sup>324</sup> misma que atiende a diversos significados, implica echar a perder, igualmente tiene la connotación de depravar, así como de incomodar o fastidiar. Desde el punto de vista jurídico que es lo que nos importa, la corrupción dentro del marco del derecho penal, y justamente en cuanto a tales actos relacionados con infantes o impúberes, se contempla en diversos dispositivos, así tenemos que el artículo 136 del Código Penal del Estado, indica que se impondrán de uno a cinco años de prisión, al que procure o facilite el deterioro de los conceptos o de los hábitos morales o materiales de una persona de cualquier sexo, menor de dieciocho años, de tal manera que ese deterioro deba considerarse negativo en comparación a las buenas costumbres o hábitos de orden ético social familiar que imperan en el Estado.

Se prevé, que serán considerados como corruptores, entre otros, los que inciten a la mendicidad o a la práctica de hábitos viciosos, a la ebriedad, a la depravación sexual de un púber o impúber o a la iniciación de éste en la vida sexual.

De la misma manera se dispone, que si los actos de corrupción propician el hábito del alcoholismo, el uso de tóxicos y demás sustancias que produzcan efectos similares, la práctica de la prostitución o las de orden homosexual, la pena será incrementada en una cuarta parte más de la que le corresponda por este delito.

---

<sup>323</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 73.

<sup>324</sup> Mateos Muñoz, Agustín, *Gramática Latina*, México D.F., Editorial Esfinge, 1998, p. 112.

Por su parte el numeral 137 del ordenamiento en cita indica que se impondrán de un mes a tres años de prisión y cierre temporal o definitivo del establecimiento, en caso de reincidencia, al que emplee menores de dieciocho años en cantinas, tabernas o centros de vicio.

Ahora bien, respecto que el fin que se persigue con la ejecución de esos actos, que viene siendo la corrupción de los hijos, tenemos que si atendemos al término genérico de corrupción de menores según la legislación penal antes citada, se pueden distinguir tres grandes grupos:

1.- Procurar o facilitar la corrupción de menores mediante:

- a) La depravación sexual de un púber;
- b) Iniciar a la vida sexual o depravar a un impúber;
- c) Inducir, incitar o auxiliar a un menor a la práctica de la mendicidad, hábitos viciosos, ebriedad, formar parte de una asociación delictuosa o cometer cualquier delito.

2.- Provocar que los menores adquieran malos hábitos o vicios en virtud de la práctica reiterada de los actos de corrupción, resultando que el menor:

- a) Adquiera los hábitos del alcoholismo, uso de sustancias tóxicas u otras que produzcan efectos similares;
- b) Se dedique a la prostitución o prácticas homosexuales; o
- c) Forme parte de una asociación delictuosa.

3.- Empleo de menores en cantinas, tabernas o centros de vicio.

Sin embargo, no solo debe atenderse a los actos inmorales que se realicen con el fin de corromper a los hijos y la tolerancia a través de actos positivos, en su corrupción, desde una connotación penal, puesto que si el

verbo corromper, implica echar a perder, válidamente puede decirse que acto inmoral podrá ser todo aquel que implique un hecho o acción que sea contrario a las normas relativas a la conducta sobre el bien y el mal, conforme a las buenas costumbres y adoptadas por la sociedad, que por supuesto deben de prevalecer y ser la constante dentro del seno de la familia conformada por los consortes, en los que hoy se presenta el conflicto.

Para que proceda esta causal, no se requiere que antes de que se enjuicie civilmente al cónyuge a quien se imputa la conducta corruptiva, exista sentencia condenatoria en el proceso penal que pudiera incoarse en su contra, en el supuesto de que los hechos atribuidos, además de inmorales, resulten típicamente punibles, puesto que en el caso de la acción de disolución del matrimonio encuentra sustento en la realización de tal evento o hecho en sí y no en la sanción penal que pudiera corresponderle, por lo que, con independencia de la integración de la respectiva averiguación previa y de la conclusión del proceso penal que pudiera presentarse, debe ser claro que la justificación de esos hechos corresponde a la parte actora en y durante el procedimiento de divorcio.

Como buenas costumbres se comprenden aquellos actos que hieren la honestidad pública, y tienden, por esto mismo a excitar, favorecer o facilitar la corrupción de las personas de uno u otro sexo, el doctrinista Fabreguettes, establece que habrá ultraje a las buenas costumbres “...cuando se compruebe que el acto o hecho realizado, esta destinados, por la naturaleza misma del evento a seducir o pervertir la imaginación.”<sup>325</sup>.

---

<sup>325</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 67, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241649, Civil, p. 24. Divorcio, corrupción de los hijos como causal de.

La facultad de declarar que un hecho es o no un acto inmoral, conforme al carácter variable de la noción de buenas costumbres y de moral pública, puesto que se debe de considerar según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada,

De conformidad al artículo 21 constitucional es propio y exclusivo de la autoridad judicial, esta facultad de apreciación del Juzgador, es necesario dejar a los Jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público, mas no confundirlos con el derecho de corrección, en tal sentido esta debe entenderse como: “Facultad de quienes ejercen la patria potestad de corregir a los sometidos a ella y de castigarlos moderadamente”<sup>326</sup>

A falta de un concepto exacto y de reglas fijas en materia de moralidad pública, el juzgador tiene la obligación de interpretar lo que el común de las gentes entienden por actos inmorales, sin tener por que recurrir a procedimientos de comprobación, que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas, en este caso es el concepto *moral* el que debe servir de norma y guía al juez, en la decisión de los asuntos y problemas jurídicos que lo conllevan, y no existe en tan delicada cuestión, un medio técnico preciso que lleve a resolver, sin posibilidad de error, lo que legalmente debe conceptuarse como inmoral, por lo que no es la opinión de peritos, que por sentido común no los puede haber en esta materia, la que debe servir de sostén a un fallo judicial, ni tampoco en la simple interpretación lexicológica, el único medio de que se puede disponer para llegar a una conclusión, por lo que debe acudir, a la vez, a la interpretación jurídica de las expresiones usadas por el legislador y a la doctrina, como auxiliares en el ejercicio del arbitrio judicial que la ley otorga a los Jueces y tribunales. En resumen, pese a que no existe una base o punto de partida invariable para

---

<sup>326</sup> Pina Vara, Rafael De, *Diccionario de Derecho*, México D. F., Editorial Porrúa, 2004, p. 197.



juzgar en un momento dado lo que es moral o inmoral, contrario a las buenas costumbres o afín a ellas, sí se cuenta con un procedimiento apropiado para aplicar la ley y satisfacer el propósito que ha presidido la institución de esa clase de causal; ello no implica que se atribuya a los jueces una facultad omnímoda y arbitraria, por lo que como todas y cada una de los eventos inherentes a la función judicial, la de establecer si determinado hecho es o no una conducta inmoral, el juzgador debe atender a la moralidad media que impera en un momento dado en la sociedad y en relación con las constancias de autos, para poder establecer si dicho evento es de la clase de conductas que nuestra sociedad rechaza y estima como disolventes de las costumbres y hábitos sociales, así como si ello fue con el objetivo de corromper a los hijos. Por lo que la causal que nos ocupa, consiste en que el acto ejecutado por el cónyuge demandado, tenga un choque con el sentido moral público, debiendo contrastarse el acto reputado como inmoral, con el estado moral contemporáneo de la sociedad en que se pretende que se ha realizado tal conducta, y que con la realización de dicha conducta se pretende corromper o echar a perder a los hijos de ambos o de uno de ellos.

Por otra parte, para la procedencia de esta causal, es requisito sine qua non el que el cónyuge que la haga valer exprese de manera clara y precisa en qué consisten los actos inmorales ejecutados por su contraria con la finalidad o intención de corromper a los hijos mismos que pueden ser habidos del matrimonio o bien de uno solo de los cónyuges, o bien que se tolere por el consorte la corrupción del menor, tolerancia que debe ser encuadrada mediante actos positivos y no por actos de omisión, debiendo establecer con puntualidad y de manera concisa las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se han presentado tales hechos.

La corrupción de los hijos pues no es una cuestión subjetiva que existe en la noción de interioridad o exterioridad. Según García Máynez, esto es una cuestión entre la moral y el derecho y textualmente apunta:

*“Numerosos autores pretenden distinguir moral y derecho oponiendo la interioridad de la primera la exterioridad del segundo. Tal criterio encuentra su antecedente —al menos en su formulación moderna— en una de las doctrinas morales de Kant. La teoría fue elaborada por el filósofo Koenigsberg al explicar el concepto de voluntad pura. Posteriormente ha sido utilizada por los juristas para diferenciar las normas de que hemos venido hablando.*

*Una conducta es buena, según el pensador prusiano, cuando concuerda no sólo exterior, sino interiormente, con la regla ética. La simple concordancia externa, mecánica, del proceder con la norma carece de significación a los ojos del moralista. Lo que da valor al acto no es el hecho aparente, la manifestación que puede ser captada por los sentidos, sino el móvil recóndito, la rectitud del propósito.<sup>327</sup>*

De la misma manera, atento a la naturaleza de la causal, es patente que ello es en relación con el comportamiento que se tenga hacia un hijo menor de edad y no cuando este es mayor de edad<sup>328</sup>, hecha excepción que el hijo tenga cuando menos dependencia educacional con respecto a sus padres, puesto que de proceder la causal, las mediadas que de emitan son tendientes a aislar y proteger al menor hijo, de la influencia perniciosa del padre o de la madre, influencia que no puede operar cuando el hijo por su mayor edad o en un momento dado, por su emancipación derivada del matrimonio ya no se encuentra sujeto a patria potestad, sino que se le estima por la ley, como apto para decidir sus propios intereses.

---

<sup>327</sup> García Máynez, Eduardo, *Introducción al estudio del Derecho*, México D. F., Porrúa, 2004, p. 18.

<sup>328</sup> [J] Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. 49, Cuarta Parte, p. 31. Divorcio, actos inmorales ejecutados por el marido con el fin de corromper a los hijos, como causal de. (Legislación del estado de San Luis Potosí).

La corrupción que menciona la norma, según Pallares.<sup>329</sup>

*“...puede consistir en la prostitución, en la embriaguez, en el uso de sustancias estupefacientes, en la práctica del robo, e incluso en la mendicidad. El vocablo corrupción tiene un sentido tan amplio, que dentro de él caben toda clase de miserias morales, aún las más diferentes entre sí.*

*Para que la causal exista, es necesario que los cónyuges “ejecuten actos inmorales” tendientes a corromper a sus hijos, y no sólo en que sean tolerantes o débiles con ellos, o lo que es igual, que no sepan educarlos al carecer de la autoridad necesaria para hacerlo debidamente.*

*En esta causal, la ley exige pluralidad de actos inmorales, lo que en mi concepto es censurable, porque uno solo de ellos podrá ser bastante para revelar la indignidad del progenitor y la necesidad de que pierda la patria potestad. Por ejemplo, en algunas regiones de la República, es frecuente que los padres vendan a sus hijas o consientan que un hombre tenga acceso carnal con ellas, mediante una suma de dinero, uno sólo de estos hechos merece ser sancionado enérgicamente.”.*

En relación con la causal que nos ocupa, puede hacerse valer en cualquier momento. Al respecto, se podría presentar el supuesto de que el cónyuge hubiera realizado uno o varios actos inmorales desde hace más de seis meses, considerados a la fecha de la presentación de la demanda, y que tales actos hubieran cesado, o sea que ya no se presenten en tiempo resiente; sin embargo, conforme a lo vergonzoso y pudoroso de tales actos, bien puede acontecer que el cónyuge inocente no tuviera conocimiento de

---

<sup>329</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 74.

ello, sino mucho tiempo después, en el supuesto de que se presentaran estas circunstancias, es menester que la parte actora indique con claridad y contundencia en la demanda inicial, la fecha en que se dio cuenta de los actos inmorales que al respecto atribuye a su cónyuge, con la finalidad de que se esté en posibilidad de establecer si se encuentra o no en el término a que alude el artículo 410 del Código Civil.

Finalmente, los actos inmorales que se ejecuten por el cónyuge demandado, tienen que ser con la finalidad u objetivo de corromper a los hijos de ambos o de solo uno de ellos; por ende, tanto para ello, como para la tolerancia de dichos eventos a través de actos positivos, estos tendrán que corresponder a cualesquiera de las conductas que impliquen un acto inmoral, atendiendo a las circunstancias y características antes enunciados.

Esta causal, por su contenido tiene impacto en el fallo, si se decreta procedente, pues como acota Acosta Romero : *“...Al pronunciarse el fallo definitivo, el juez de lo familiar puede privar de la patria potestad al cónyuge declarado culpable, ordenando la guarda de los hijos al esposo que haya obtenido el divorcio, de conformidad con el artículo 444, fracción II de este Código, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283 que a grandes rasgos señala que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, y otorga la facultad de investigar al juez para obtener los elementos de este juicio necesarios, a la que nos referimos anteriormente. En este caso, aunque el juez goza de las más amplias facultades para resolver lo relativo a la pérdida, suspensión o limitación de la patria potestad, creemos que sin duda la sentencia que se dicte con motivo de los actos inmorales ejecutados con el fin de corromper a los hijos, traerá aparejada la pérdida de la patria potestad en relación con el cónyuge declarado culpable, como lo preceptúa el artículo*

283 del Código...”<sup>330</sup> Que en la legislación del Estado de Jalisco corresponde al artículo 415 del Código Civil.

### **5.6.1 Elementos.**

Como se ha indicado, además de acreditar la existencia del matrimonio, los elementos que deben acreditarse para la procedencia de esta causal, son:

- a) actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos.
- b) La tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión.

En ambos casos, puede presentarse hacia los hijos del matrimonio, o bien de uno solo de los cónyuges.

De ello se deriva que la causal en si corresponde a dos supuestos, la primera cuando el hombre o la mujer ejecutan actos inmorales con la finalidad de corrupción a los infantes; en tanto que la segunda es encaminada a la conducta tolerante en sentido positivo, ya sea de él o de ella sobre la corrupción de los niños.

En este caso, existen criterios<sup>331</sup> que señalan que debe entenderse que la corrupción consiste en la depravación que rebaja la moral del hijo con

---

<sup>330</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 253.

<sup>331</sup> [J] VI.2o.C.493 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, Novena Época, Registro: 174736, Civil, julio de 2006, p. 1203. Divorcio necesario. Cuando se sustenta en la perversión de alguno de los cónyuges, no se requiere que antes de que se enjuicie civilmente a quien se le imputa tal conducta, exista sentencia condenatoria en el proceso penal que pudiera incoarse en su contra (Legislación del estado de Puebla).

relación a todas las personas, dejando en éste una huella profunda de psiquismo, torciendo el sentido natural y sano que debe tenerse del comportamiento general humano. Nuestro régimen legal, en relación con el matrimonio, que es de carácter mangánico, cimentándose además, en la permanencia, la razón de ser y finalidad del matrimonio, se sustenta en la idea de un respeto y comprensión absoluta entre los cónyuges, para dar creación normal a la célula que constituye la familia dentro del conglomerado. En esta virtud, resulta obvio que cualquiera actividad que se realice por parte de uno de los miembros del matrimonio, que pueda traer como consecuencia un cambio, daño o desviación moral de la psiquis de los hijos, implica, necesariamente, corruptibilidad. Que el acto de corrupción es la cristalización de un acaecer corruptivo que significa, por extensión figurada, perversión, estrago o vicio, que genera una alteración a las normas de corrección, contrarios a los deberes que sancionan la moral y costumbres normales en todo núcleo familiar.

#### **5.6.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Esta causal en cualesquiera de los dos supuestos resulta de las aisladamente ejercitadas; de la misma manera es patente que por sus implicaciones, los actos inmorales de naturaleza sexual, son cometidos por el agresor en lugares privados donde no hay testigos, lo que hace patente que en todo caso serán los medios de prueba indirectos, indicios, señales y declaraciones circunstanciales<sup>332</sup>, que en conjunto formen convicción en el ánimo del juzgador sobre la acreditación de la causal al momento de emitir su veredicto.

---

<sup>332</sup> [J] CXXXVI, Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Sexta Época, Registro: 269144, Civil, p. 70. Divorcio, actos inmorales como causal de. Prueba.

El poco ejercicio de esta causal no implica necesariamente que no se presente, sino que en todo caso es factible asumir que por sus características intrínsecas su poco ejercicio se debe a que en muchas ocasiones ambos consortes están involucrados en la conducta indebida, ejemplo: la mendicidad en los menores, que en forma descarada y a plena luz pública -sin actos de autoridad que pongan remedio a ello- se presenta en forma cotidiana en las ciudades, en donde es cosa común encontrarnos que los menores que la practican, una vez obtenida la moneda, se dirigen a sus padres o explotadores a hacer entrega de lo obtenido.

En caso de presentarse y tener el valor de ejercitarla, las pruebas pertinentes están relacionadas con los mismos hijos de la pareja o de uno de ellos, que en el caso de ser mayores de edad, sería una testimonial, sin embargo en el supuesto de los menores de edad de ninguna manera pudiera estimarse la prueba testifical, ya que el máximo tribunal del País, ha determinado que ello violenta los derechos de los infantes,<sup>333</sup> pues puede afectar la salud psicológica de los menores, lo que es un derecho protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, signada por el Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, por lo que corresponde a un derecho que constituye una garantía individual y un derecho sustantivo cuya protección es obligación del Estado en todos los actos que realice respecto de los menores; por lo que en todo caso pudiera acudir a la plática o charla con el infante<sup>334</sup>, aspecto que en todo

---

<sup>333</sup> [J] 1a./J. 182/2005, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Novena Época, Registro: 176168, Civil, enero de 2006, p. 478. Prueba testimonial a cargo de los menores hijos en el juicio de divorcio necesario de sus padres. Su admisión y desahogo constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto.

<sup>334</sup> Véase, Código Civil del estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, art. 573. Cuando se vaya a tomar una determinación relacionada con los intereses del menor, deberá oírsele y considerársele su opinión, la cual deberá ser valorada en función de su edad y madurez.

caso debe de ponderarse en su admisión por parte del juzgador, quien está obligado a velar por los derechos de los niños, cuidando que no se lesionen aun mas sus derechos ya atendiendo a su edad y madurez. Igualmente son aceptables las pruebas testimoniales a cargo de terceros, documentales, actuaciones penales en caso de existir, confesional y aun la pericial médica o psicológica en caso de ser necesarias, y según los hechos en que se funde.

Por sus características, esta causal casi no se hace valer, pues esa patente que tendrá no solo que exponerse el grado de miseria humana a la que se ha llegado en la familia que se presente, sino que tendrá que acreditarse plenamente dentro del juicio.

### **5.7 Enfermedad crónica o incurable, contagiosa o hereditaria de cualquiera de los consortes.**

Como antecedente de esta causal especifica tenemos que en la ley de Divorcio, en la que se estableció el divorcio en el Estado de Jalisco, en la fracción IV del artículo 227 se establecía como causal de divorcio la siguiente:

IV.- Ser cualquiera de los cónyuges incapaz para llenar los fines del matrimonio, o sufrir sífilis, tuberculosis, enajenación mental, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable, que sea, además, contagiosa o hereditaria<sup>335</sup>

---

<sup>335</sup> Decreto núm. 63, *Ley de Divorcio*, Guadalajara, 22 de mayo de 1915. Establecimiento del Divorcio, conforme al Decreto de 29 de diciembre de 1914, expedido por la Primera jefatura del E. C.



Sobre este punto específico, Acosta Romero señala:

*“...Creemos que el legislador al enumerar la sífilis o tuberculosis como alguna de las enfermedades crónicas e incurables, obedece a la época en que fue redactada esta fracción, en virtud de que hoy en día la sífilis es curable al igual que la tuberculosis en la actualidad. Ello se corrobora con la reforma a la fracción VII del artículo 156 de este Código, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de julio de 1992, que ya habla en términos generales de las enfermedades crónicas e incurables que sean, además, contagiosas o hereditarias, sin mencionar la sífilis o la locura específicamente como acontecía en el artículo original.*

*La diferencia estriba, reiteramos, en que las causas enumeradas en la fracción VIII del artículo 156, son causas de nulidad no de divorcio, ya que suponen defectos en los pretendientes anteriores a la celebración del matrimonio, con excepción de la impotencia para cópula, que se puede dar posteriormente a su celebración. En consecuencia, si se trata de defectos anteriores al matrimonio, traerá aparejada la nulidad de éste, y si estas causas concurren después de celebrado el matrimonio, se reputan como causas de divorcio.*

*Rojina Villegas al explicar la impotencia incurable que sobreviene después de celebrado el matrimonio, afirma que dicha impotencia debe atenderse como una enfermedad que impida la relación sexual, más no por virtud de haber llegado uno de los cónyuges a una edad avanzada.*

*La jurisprudencia número 154 de la Corte ha determinado que la causal de divorcio consistente en la incurabilidad de la impotencia que sobreviene después de celebrado el matrimonio, implica una situación*

*permanente, de tracto sucesivo, y de realización continua; por consiguiente, se puede ejercitar en cualquier tiempo la acción, a diferencia de la acción de divorcio cuando la causal es un hecho, donde la ley sí señala término (A.D. 7896/68. Celia Cortés Anzures. 9 de enero de 1970. 5 votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Semanario Judicial de la Federación, VII época. Vol. XIII, Cuarta parte, pág. 15.) “.*<sup>336</sup>

Menciona Ibarrola<sup>337</sup>, citando la obra de A. Kentch “*Derecho Matrimonial Canónico*”, que, con motivo de las enfermedades puede surgir un grave peligro para el cuerpo. No solo surge éste cuando uno de los cónyuges y la salud del otro con malos tratos corporales o aspira a quitarle la vida abierta o encubiertamente. Son además de mencionar el peligro de contagio con ocasión del trato sexual, especialmente todas aquellas enfermedades adquiridas culpablemente.

Las adquiridas sin culpa, pueden representar una causa justa para la separación del lecho, o, por lo menos, para negarse a la cópula, si fueran onerosas. La enfermedad en sí misma no es, en otros casos razón suficiente para la separación, como lo serían las enfermedades mentales, que no ofrecen ningún peligro para el cónyuge sano.

La palabra enfermedad deviene del latín *infirmitas*; de la misma manera la palabra griega *pathos* implica enfermedad. Enfermedad implica una alteración en la salud, una anormalidad en el funcionamiento físico o mental de un ser.

Crónico viene de la palabra griega *Kronos*, que significa tiempo. En términos generales su connotación es que significa mucho tiempo, y es

---

<sup>336</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, pp. 253 - 255.

<sup>337</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, pp. 344 y 345.

aplicable a las enfermedades muy largas o habituales. Incurable, es aquello que no tiene enmienda, que no se puede curar o sanar.

La palabra contagio se deriva del vocablo latín *contagio*; implica contaminación, infección, corrupción; en el ámbito de la medicina, su acepción es la transmisión de una enfermedad por contacto inmediato o mediato.

Por su parte, el vocablo hereditario, tiene su origen del latín *hereditarius*, que significa transmisible por herencia, es una carga hereditaria que va de padres a hijos, la tendencia de la naturaleza a reproducir en los seres los caracteres de sus ascendientes. Dentro del punto que nos ocupa, es obvio que el concepto entraña en los terrenos de la patología.

Baqueiro Rojas expresa que: “...*La enfermedad debe reunir tres requisitos: ser crónica, incurable, contagiosa o hereditaria. Como ejemplos veamos la enfermedad de la sífilis, que la ciencia médica ha encontrado métodos para curarla, por lo que creemos, que no puede ser invocada como causa de divorcio por no reunir los requisitos mencionados.*”<sup>338</sup>

### **5.7.1 Elementos.**

Los elementos y requisitos sine qua non para la procedencia de esta causal, consisten en:

- a) Que uno de los cónyuges padezca alguna enfermedad, ya sea crónica o incurable.

---

<sup>338</sup> Baqueiro Rojas, *op. cit.*, nota 212, p. 172.

- b) Que dicho padecimiento sea contagioso o hereditario.
- c) Que la enfermedad ponga en peligro la vida del otro cónyuge.
- d) Que tal trastorno se prolongue por más de dos años.

Ahora bien, el cónyuge que la haga valer, tiene la obligación de expresar desde el escrito inicial de demanda, cual es la enfermedad que padece su consorte que es crónica o incurable, según sea el caso, que la misma es contagiosa o bien hereditaria, que pone en peligro la vida del otro cónyuge y que dicho trastorno se ha prolongado por más de dos años, de lo que se coligue que el derecho para hacerla valer, será a partir de que se cumpla el termino de dos años a que alude la propia causal, una vez que se hubiese diagnosticado la enfermedad respectiva, y que evidentemente por sus características es de tracto sucesivo y si se toma en cuenta las peculiaridades de la causa de divorcio que nos ocupa, la prueba idónea para acreditarla es la pericial medica inherente, según el padecimiento de la persona. Por otra parte atento a la naturaleza de la causal, tenemos que la enfermedad o padecimiento de uno de los cónyuges versa en cuanto al aspecto físico y no al psicológico o mental, pues este último aspecto se encuentra contemplado en la causal VII del artículo 404 de la ley civil.

De la misma manera si se toma en consideración la substancia de la causal en comento, es evidente que el consorte que padezca una enfermedad en los términos antes aludidos, no podrá ser calificado como cónyuge culpable, ya que al encontrarse en tal situación no puede estimarse que hubiera mediado su voluntad o consciencia, pues en todo caso se presenta como algo ajeno a su arbitrio, aunado a ello, debemos considerar que también tiene implicaciones de naturaleza ética, que tiene qué ver con el problema de la realización de los valores, pues desde el punto de vista filosófico una persona se casa para el apoyo perpetuo de su pareja, no para que en cuanto caiga en desgracia de contar con una enfermedad incurable y contagiosa, lo abandone. En palabras de Baeza y Acevez:

*“...El verdadero y único problema de la realización de los valores consiste, pues en saber cómo pueden realizarse éstos y, en forma particular, cómo pueden realizarse los valores éticos.*

*“El hombre puede realizar valores individuales, colectivos y sociales, y para cada uno de estos casos existe un módulo especial, que posiblemente no diera el mismo resultado al aplicarse a valores diversos.*

*“Por otra parte —y concretándonos al aspecto moral—, la gama de valores por realizar es enorme dentro de la vida individual, colectiva, social, familiar, nacional internacional, religiosa, etc. Del hombre, de suerte que la Ética no podría marcar normas genéricas, sino que tendría que descender al particularismo y quizá hasta el casuismo, perdiendo en ipso, su carácter de disciplina normativa, para convertirse en “ciencia práctica”.*

*“Por eso afirmamos que la realización de los valores no es tema que incumba a la Ética, sino a la Moral; que sea la “Moral Especial” del neotomista la que diga al hombre cómo ha de realizar los valores en su moralidad personal o interpersonal, en su profesión o en la familia, en el matrimonio o en la religión.*

*“Empero no significa —entiéndase bien— menosprecio para la moral. Antes al contrario, consideramos que todo curso de Ética debería continuarse con otro de moral. Pues a nada conduce el solo planteamiento de los principios generales, si no se busca el remate y el coronamiento de una aplicación a la vida real...”<sup>339</sup>*

---

<sup>339</sup> Baeza Acevez, Leopoldo, *Ética*, 6ª ed., México D. F., Porrúa, 1965, p. 241.

En otro sentido, el aspecto de la infertilidad no es ni puede estimarse que embone en esta causal,<sup>340</sup> atendiendo a que el hecho de que esta situación de manera alguna encuadra en que ello sea una enfermedad crónica o incurable, ni tampoco corresponda a un padecimiento de naturaleza contagiosa o que pueda ser hereditario, por otra parte tal evento, no se estima una enfermedad, mucho menos que por eso se ponga en peligro la vida del otro cónyuge, ni que sea una enfermedad que se prolongue por más de dos años, amén de que las posibles deficiencias físicas de los cónyuges para los objetivos de la procreación, no es ni puede considerarse enfermedad alguna o que según la deficiencia que se exprese se deba a una enfermedad y que esta por sus características estuviese dentro de los supuestos a que alude la causal de divorcio en comento.

Respecto de esta causal es común que se planten respecto de las enfermedades venéreas, especialmente la sífilis y la del papiloma humano, sin embargo, en la actualidad estas no tienen las características que requiere la causal; por ejemplo la denominada sífilis, que es y resulta enfermedad venérea que si bien tiene las características de ser contagiosa, no menos cierto es que en la actualidad no pone en peligro la vida ni de quien la padece ni de quien está expuesta al contagio, ya que es curable.

En tanto que por lo que corresponde al virus del papiloma humano, respecto de las fuentes consultadas<sup>341</sup>, se puede concluir que el Virus del Papiloma Humano en la mayoría de los casos es totalmente curable, que se conocen alrededor de 100 tipos de este Virus, que una vez adquirido, el

---

<sup>340</sup> [J] Tesis: II.2o.C.113 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VIII, Novena Época, Registro: 195659, Civil, agosto de 1998, p. 853. Divorcio. La incapacidad física para la procreación por parte de la mujer no es causal de disolución del matrimonio (Legislación del Estado de México).

<sup>341</sup> Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, <<http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/periodico/ets/papiloma.html>>, página visitada el 28 de noviembre de 2012.

periodo de incubación puede variar de tres meses o incluso puede tardar varios años; que la forma común de contagio es el contacto sexual, más no la única puesto que existen diversas formas de adquirirlo; que existen diversos factores de riesgo que pueden contribuir a la adquisición del virus.

En cuanto a la enfermedad denominada "Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida", más conocida por su acrónimo o *sida*, puede estimarse que reúne los requisitos de la enfermedad a que hace alusión la causal, ya que desgraciadamente hasta este momento no se ha encontrado su cura, tiene la calidad de ser permanente y contagiosa en aspectos específicos y si no se tienen los debidos cuidados puede ponerse en riesgo la salud del otro cónyuge. Este padecimiento corresponde a un retrovirus que ataca las defensas del organismo y altera la capacidad para defenderse de las enfermedades ocasionadas por otros virus, bacterias, parásitos y hongos, es decir este virus ataca al sistema inmunitario y deja al organismo vulnerable a una gran variedad de infecciones y cánceres potencialmente mortales, lo que implica que la enfermedad en sí, no es la causa de muerte sino el vínculo para que cualquier enfermedad, que no sería mortal en un persona son sistema inmunitario sano, si lo será en alguien infectado de sida.<sup>342</sup>

Es posible estar infectado con el VIH, es decir, ser VIH positivo o portador del virus, y todavía no haber desarrollado el SIDA. Desde el momento en que el virus ingresa al cuerpo hasta que aparecen los síntomas puede pasar mucho tiempo, entre 10 y 12 años período que puede extenderse

---

<sup>342</sup> El VIH se transmite a través de los siguientes fluidos corporales: sangres, semen, secreciones vaginales y leche materna. Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y padecer de sida. Una persona infectada por el VIH es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de sida cuando su nivel de linfocitos T CD4, células que ataca el virus, desciende por debajo de 200 células por milímetro de sangre.

si se comienza un tratamiento temprano. Se dice que una persona padece de sida cuando su organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. Las bacterias comunes, los hongos levaduriformes, los parásitos y los virus que generalmente no provocan enfermedades serias en personas con sistema inmunitario sano pueden provocar enfermedades mortales en las personas con SIDA.

### **5.7.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Si atendemos a las características de la causal, es patente que la pruebas comunes –testimonial, confesional y aun las documentales- son inconducentes para el fin que se pretende probar, y que en todo caso la prueba idónea es la pericial medica.

Ello es así, porque la doctrina, siendo coincidente con la esencia de las disposiciones legales que regulan la institución de la prueba por peritos o peritación, ha sustentado que ésta (la peritación), es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente; su función tiene indispensablemente un doble aspecto:

1) verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y,



b) suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente.

La peculiaridad de la prueba pericial estriba en que se requieren conocimientos especiales en alguna ciencia o arte para determinar, bien la existencia de los hechos que se discuten, bien su naturaleza, sus particularidades o sus accidentes. Estos conocimientos especiales los debe poseer el perito, a fin de que pueda auxiliar al Juez, para que luego éste con las conclusiones y conocimiento que le aporten los peritos, pueda determinar respecto a la comprobación o no de ciertos hechos sujetos a debate.

De ahí que evidentemente, cuando se invoca esta causal y estar en aptitud de determinar si efectivamente el cónyuge demandado padece una enfermedad, que esta reviste las características de ser crónica o incurable, contagiosa o bien hereditaria, que pone en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años, es necesaria la prueba pericial médica que corresponda, puesto que para fallar en ese sentido se requiere de personas que por sus conocimientos técnicos y científicos, están especialmente calificadas para coadyuvar al juez a determinar si efectivamente la enfermedad de que se trata reviste las anteriores particularidades.

En el entendido que las documentales que pudieran existir en relación directa con la enfermedad, como seria, resultados de análisis clínicos, historial médico, etcétera, en todo caso serán pertinentes para robustecer el punto, pero por si solas no se estiman bastantes para tal fin, sino que tendrían que estar concatenados con otros medios de prueba que adminiculados entre sí, generen la certidumbre de la existencia de la enfermedad.

## 5.8 La enajenación psíquica.

Menciona Ibarrola<sup>343</sup>, que es muy complicado para el siquiatra dictaminar sobre la demencia. Por ejemplo, la neurosis ya ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad progresiva e incurable, que afecta el núcleo familiar en uno o más de sus miembros provocando divorcios, cárcel por agresión, hijos delincuentes hospitalización por locura y tratamiento siquiátrico. La neurosis puede ser confundida fácilmente con el mal humor, el decaimiento, el carácter fuerte, el nerviosismo.

En relación con esta causal, nos encontramos que en el área de medicina legal, por enajenación psíquica se entiende toda falta, mengua o perturbación de las facultades mentales de un individuo, a tal grado que ya no sea el hombre o mujer consientes o dueños de sí mismos, para corregir sus ilusiones o alucinaciones, para rectificar sus juicios y para obrar conforme a su deseo. Por otra parte, para poder demostrar la enajenación mental o psíquica, y sobre todo, para poder estar en posibilidad de definir el grado de perturbación, y determinar si trae como consecuencia la falta de capacidad de un individuo para administrar sus bienes y ejecutar actos jurídicos, se impone la necesidad de que se practiquen los estudios correspondientes por personas que tengan la preparación científica necesaria y observar los procedimientos que la ley exige al respecto<sup>344</sup>, por lo que atento al contenido de la propia causal, es evidente que cuando se ejercite la acción de divorcio fundada en la causal que nos ocupa, debe de acreditarse plenamente anexando como fundatorio la resolución judicial que se hubiese emitido en el

---

<sup>343</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, p. 344.

<sup>344</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. XXX, Quinta Época, Registro: 364224, Civil, p. 2180. Enajenación mental.

trámite judicial de declaración de estado de Interdicción respectiva, y en la que evidentemente hubiese procedido tal declaración; ello es así, tomando en consideración que estimar que dentro del proceso de divorcio pudiera acreditarse que la parte reo padece de enajenación mental y en la etapa de pruebas acreditarlo mediante la pericial medica respectiva, es claro que se violentan los derechos de la persona, pues si padece de una enfermedad mental en tales términos, entonces entra en la categoría de incapaz y por ende debería ser representado a través del tutor que le fuera designado legalmente.

Lo anterior nos conduce a otro asunto que se debe de tomar en cuenta, si en el caso concreto uno de los cónyuges padece enajenación psíquica incurable y así fue declarada judicialmente, es evidente que la demanda debe de interponerse en contra de dicho cónyuge por conducto de su tutor legitimo definitivo, ya que la persona que tenga tal cargo es quien representa jurídicamente al interdicto, según lo dispuesto por los numerales 603, 604 fracción I, 619, 686 y correlativos del Código Civil.

De la misma manera, atento a la naturaleza de la causal, es evidente que es de tracto sucesivo, que se manifiestan en una fecha precisa y se van renovando a cada instante, de donde el derecho para demandar la disolución del matrimonio por dicha causal, se renueva también cada día haciendo imposible la caducidad de la acción<sup>345</sup>, amén de que, por las razones expuestas, se considera que esta solo puede invocarse, una vez que se tenga resolución judicial en que declare que el cónyuge padece de enajenación psíquica incurable.

---

<sup>345</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. CXXIX, Quinta Época, Registro: 339233, Civil, p. 544. Informe 1956, Tercera Sala, p. 28. Divorcio, enajenación mental como causal de. Prescripción de la acción (Legislación del estado de Nuevo León).

Una característica más que encontramos en esta causal, es que siendo la enajenación mental incurable una enfermedad que no puede decirse sea imputable al cónyuge que desgraciadamente la padezca, se considera injusto que en esos casos también de aplicarse la sanción consistente en la pérdida del derecho de alimentos del conyugue, por lo que aun cuando se declare procedente la acción de divorcio, no se estará en el caso de condenarlo al concepto de alimentos a favor de la parte actora en su calidad de cónyuge inocente, ya que no es factible sostener que esta causal le sea imputable, o sea no puede tener la calidad de conyugue culpable en los términos de lo dispuesto por el artículo 419 del código civil<sup>346</sup>.

#### **5.8.1 Elementos.**

Respecto de esta causal de divorcio, los elementos que la componen son:

- a) Que uno de los cónyuges padezca enajenación psíquica incurable
- b) Que haya declaración judicial del estado de interdicción.

#### **5.8.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

En esta causal, al igual que en otras, las pruebas testimoniales, confesionales, no son aptas<sup>347</sup>, puesto que por su naturaleza los medios de prueba necesarios e indispensables para su acreditación son, la pericial

---

<sup>346</sup> [J] Informe 1956, Tesis Aislada, Tercera Sala, Informes, Civil, p. 18. Alimentos. El cónyuge que obtiene el divorcio fundado en la causal de enajenación mental incurable de su esposa tiene obligación de ministrarle.

<sup>347</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. XXXVI, Quinta Época, Registro: 362464, Civil, p. 624. Enajenación mental, prueba de la.

medica psiquiátrica que determine la enajenación psíquica y su calidad de incurable del otro conyugue, y por supuesto la documental publica de actuaciones, que resulta medular para su procedencia, o sea la sentencia ejecutoriada que declarara el estado de interdicción de su cónyuge, al igual que la mayoría de las causales, es de poca invocación.

Se alude al dictamen pericial, tomando en consideración que no en todos los tramites relativos al estado de interdicción se basan en la enajenación psíquica incurable, pues algunos de ellos son inherentes a otro tipo de enfermedades o discapacidades, sin embargo, en caso de que el trámite del estado de interdicción tenga sustento en la enajenación psíquica que además tiene la connotación de incurable, válidamente puede decirse que las actuaciones judiciales respectivas, en las que obran las periciales medicas correspondientes, junto con la sentencia que se hubiera emitido decretando su procedencia, pueden ser bastantes para tener por demostrada la causal. De no ser así, resultara absolutamente necesaria la peritación, a cargo de diestros calificados en la materia, mediante la cual se suministran al juzgador, argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente.<sup>348</sup>

## **5.9 Separación del hogar por más de seis meses.**

Hace notar Baqueiro<sup>349</sup> que la separación debe ser de tal manera, que al cesar la vida en común por cierto tiempo, se permite el divorcio, no obstante que no haya una culpa o hecho imputable a los cónyuges. Esta separación no quiere decir necesariamente el abandono de todas las obligaciones conyugales, es por esto que el Código Civil no nos dice abandono por más de

---

<sup>348</sup> Ver páginas 41 y 42.

<sup>349</sup> Baqueiro Rojas, Edgar, *op. cit.*, nota 212, p. 170.

seis meses sin causa justificada, sino separación del hogar conyugal sin tener causa.

#### **5.9.1 Elementos.**

Por lo que corresponde a esta causal la misma se constituye con los siguientes elementos:

- 1) La existencia del matrimonio;
- 2) La existencia del domicilio conyugal, y
- 3) La separación de uno de los cónyuges de esa morada por más de seis meses.

Cada uno de esos elementos descansa en diversos supuestos lógicos y jurídicos, por lo que se debe probar dentro de actuaciones el primer requisito; respecto del segundo, la existencia de domicilio conyugal, se debe entender como tal aquel en el que habitan los esposos en forma autónoma, con plena autoridad y libre disposición en el cuidado y dirección del hogar y se debe acreditar la circunstancia de que el hogar conyugal exista antes, en el momento de la separación y por más de seis meses posteriores a la fecha en que la separación hubiese acaecido<sup>350</sup>. De los elementos expresados se desprende que los conceptos separación, hogar conyugal, y duración de ésta (más de seis meses), están íntimamente ligados y debe coexistir al mismo tiempo para que se produzca la causal de divorcio de que se trata. En esa virtud, también corresponde al actor probar que el hogar conyugal permaneció por el período de más de seis meses que correspondió a la separación, pues de lo contrario, según lo antes expuesto, no podría afirmarse que se produjo la causal de que se viene hablando.

---

<sup>350</sup> [J] Jurisprudencia, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 42, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 242050, Civil, p. 139. Apéndice 1917-1985, Novena Parte, tesis 201, p. 307. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de.

Cuando se trata del abandono del domicilio conyugal, como causal de divorcio, para que la acción pueda estudiarse, es fundamental señalar la fecha exacta desde la cual se debe computar el término de seis meses que la ley señala para esa causal, con el objeto de que la parte contraria pueda oponer sus excepciones y defensas, pues de otra manera, de no establecerse ese requisito, se violaría la garantía de audiencia, y las autoridades de instancia no pueden variar ese elemento constitutivo de la acción; además de ello, resulta igual de importante<sup>351</sup>, el que se acredite de forma plena la fecha del abandono, para estar en aptitud de determinar si a la fecha en que se presente la demanda ha o no transcurrido el término de más de seis meses que precisa señala la ley civil, y estar en aptitud de que proceda o no la acción. Empero, existen criterios más recientes en el sentido de que cuando se hace valer esta causal, aunque la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que debe precisarse y acreditarse la fecha de inicio de la separación, esto solo debe regir en los asuntos en que exista duda en cuanto a si transcurrieron o no los seis meses que la ley señala, ya que tal requisito solo sirve para poder efectuar el cómputo respectivo, que en contraposición se acredita que la separación del domicilio data de años, con ello es bastante para tener por justificado que el aludido abandono excede del plazo mínimo legal aun cuando no se hubiera señalado ni probado exactamente el día y mes en que ocurrió el abandono.<sup>352</sup>

---

<sup>351</sup> [J] Jurisprudencia, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 97-102, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241210, Civil, p. 247. Sexta Época, vol. XXXIV, Cuarta Parte, p. 95. Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 3, p. 44. Apéndice 1917-1985, Novena Parte, tesis 204, p. 318. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de. Necesidad de acreditar la fecha de separación.

<sup>352</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, Registro: 220135, Civil, marzo de 1992, p. 185. Divorcio. Abandono del hogar conyugal, cuando ha transcurrido en exceso el término que la ley señala para que opere este, no se requiere precisar la fecha de separación.

Advertimos que la ley no exige que la causa justificada tenga carácter legal. Precisamente porque concierne a la vida en común de los esposos, puede tener naturaleza diferente, ya sea moral o de carácter social.<sup>353</sup>

El hogar conyugal, además de una morada, se integra con la reunión de los padres y de los hijos, si los hay, en un domicilio que no desaparece por el hecho de que se separe de él la mujer o el varón, en tanto que el domicilio conyugal si se presenta desde el punto de vista material y este debe de acreditarse en cuanto a que haya existido antes de la separación, en el momento de ella y durante los seis meses que necesita la fracción VIII del artículo 404 del Código Civil del Estado. Se debe atender además, que el abandono sea continuo, de tal manera que exista un periodo de seis meses sin interrupción; y finalmente, la falta de justificación del abandono debe existir en el momento en que éste se produce y a lo largo de todo el periodo mencionado.

El abandono debe ser respecto de la morada conyugal y no, como erróneamente se considera por algunos, de los deberes del matrimonio, pues como acertadamente lo expresa Acosta Romero<sup>354</sup> “...evidentemente el abandono del domicilio conyugal no debe entenderse como un abandono de los deberes conyugales, sino que, para que exista dicha causal, es suficiente el incumplimiento del cónyuge demandado por más de seis meses e injustificadamente de la obligación que le impone el matrimonio, consistente en hacer vida en común bajo el mismo techo, aunada a la obligación que se tiene de contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y socorrerse mutuamente.

---

<sup>353</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 76.

<sup>354</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 260.



Se dice que el hogar conyugal debe existir por lo menos durante todo el transcurso de los seis meses, para que en caso de que el cónyuge abandonante desee deponer su conducta y reintegrarse al domicilio, esté en posibilidad de hacerlo, ya que lo que interesa a la sociedad es la preservación de la familia y no que por causas muchas veces baladíes se destruya. Se estima que es más acorde que alguien se reintegre a la vida en común, cuando exista el hogar a cuando este ya no permanece, sin embargo no existe disposición legal que obligue al abandonado a conservar su domicilio, en el mismo lugar en que ocurrió el abandono por parte del otro, durante los seis meses referidos, pues puede presentarse el caso de que el cónyuge abandonado no pudo atender a la subsistencia del domicilio, lo que implica que no se le puede imponer el cumplimiento de algo imposible ni por ende que pierda el derecho de obtener el divorcio,<sup>355</sup>. Por lo que en este supuesto no quiere decir que el cónyuge abandonado se vea restringido en cuanto a su libertad de cambiar el domicilio, pues que si a sus intereses conviene puede hacerlo; pero en este caso, el nuevo hogar debe reunir las condiciones de higiene y decoro y, lo que es más importante, debe requerir al cónyuge abandonante para que se reincorpore, haciéndole saber el lugar de la ubicación de la nueva casa, ya que éste se vería imposibilitado para saber en donde vive el abandonado.

Esta causal de divorcio es y resulta de las mas socorridas en su invocación en las demandas de divorcio, lo que ha generado una gran producción de tesis aisladas o jurisprudencias de los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, que versan sobre la interpretación que debe darse sobre algunos de sus conceptos; pese a ello, es común encontrarnos

---

<sup>355</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LXXII, Sexta Época, Registro: 270479, Civil, p. 115. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de (Legislación del estado de Veracruz).

una serie de deficiencias en su planteamiento, por lo que es menester hacer hincapié en algunos aspectos relacionados con esta causal.

Pallares, en crítica a interpretaciones de la Corte sobre esta causal, indica que:

*“...La H. Suprema Corte de Justicia ha establecido la jurisprudencia de que, por separación del hogar conyugal, no ha de entenderse el hecho material de salir de ella y no volver a la vida en común. Afirma que consiste en que uno de los cónyuges rompa sus relaciones matrimoniales con el otro y deje de cumplir las obligaciones que derivan del vínculo matrimonial, sea porque no suministre alimentos, no cuide de sus hijos, ni los asista en casos de enfermedad y se desatienda por completo de sus deberes familiares.*

*Esta interpretación tiene dos defectos: En primer lugar, es contraria al sentido gramatical y lógico de la palabra separación porque no se justifica en forma alguna que signifique incumplimiento de las obligaciones matrimoniales, sobre todo, cuando se refiere al abandono de la casa conyugal. Es indudable que en este caso dicho vocablo quiere decir salir de la casa y no volver a ella. En segundo lugar, el incumplimiento de una obligación tan importante como es la de dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos está enunciada en la fracción XII, por lo cual, al funcionar las dos fracciones de que se trata, la H. Suprema Corte viola el principio de la autonomía de las causales, que según afirma el alto Tribunal, no deben involucrarse las unas con las otras como se hace en este caso.*<sup>356</sup>

---

<sup>356</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, pp. 77 y 78.

La causal que nos ocupa no es de tracto momentáneo, sino continuo<sup>357</sup>, pues el abandono o separación de la casa conyugal se efectúa momento a momento, después de los seis meses a que la propia fracción se contrae, y no deja de surtirse hasta en tanto no haya mediado perdón expreso o tácito al respecto.

Otro aspecto a considerar en esta causal, es cuando los cónyuges viven en calidad de arrimados, pues al respecto la extinta Tercera Sala de H. Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en tesis jurisprudencial visible con el numero 150, a fojas 484, de la Compilación de 1917-1965, determinó que no existe hogar conyugal "cuando los esposos viven en calidad de arrimados en el domicilio de los padres, de otros parientes o de terceras personas, en donde los cónyuges carecen de autoridad propia y libre disposición en el hogar...". Empero, ello no es tajante, ya que si se está en el supuesto de que los esposos vivían en casa de algún pariente, en todo caso será a la parte actora quien debe de probar fehacientemente que a pesar de dicha circunstancia, vivían ambos en forma independiente, que tanto esposo como esposa tenían derechos propios de gobierno y permanencia<sup>358</sup>, lo que no puede tenerse por probado con las simples afirmaciones que haga el demandado.

Es importante destacar que el concepto jurídico de la palabra "arrimados", con que se califica la situación de los esposos que viven en la casa de los padres, de otros parientes o de terceras personas, es la falta de un domicilio propio de los cónyuges, de un lugar donde éstos deben vivir con

---

<sup>357</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. VII, Octava Época, Registro: 223849, Civil, enero de 1991, p. 234. Divorcio, la separación del hogar conyugal como causal de, no caduca a los seis meses. (Legislación del estado de Chiapas).

<sup>358</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 34, Cuarta Parte Séptima Época, p. 18. Divorcio. Abandono del domicilio conyugal cuando los cónyuges viven en calidad de arrimados.

autoridad propia e iguales consideraciones y donde la mujer debe ser la responsable de la dirección y el cuidado de los trabajos del hogar. Estos derechos y prerrogativas necesariamente se ven menguados por la influencia de la autoridad de las personas con quienes los cónyuges viven y a quienes, obviamente, deben consideración, con perjuicio de la obligación que tienen de contribuir, cada uno, por su parte, a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente.

Es necesario que exista el domicilio conyugal, por lo que primeramente debe justificarse su existencia, entendiéndose jurídicamente como domicilio conyugal el lugar en donde viven los cónyuges con autoridad propia e iguales consideraciones, es decir, en donde viven en forma independiente y no en calidad de "*arrimados*"; y en el supuesto de que carecieren de domicilio propio, por vivir en alguna casa ajena, ya sea de sus padres, parientes, amigos o de terceras personas, debe justificarse plenamente que se ha constituido previamente hogar propio de los consortes, para el efecto de que la cónyuge abandonante pueda ejercitar la causal que nos interesa, puesto que es evidente que no puede darse un abandono del domicilio conyugal cuando éste no existe.

La separación o abandono del domicilio conyugal, implica que uno de los consortes lo abandone sin causa justificada alguna, o sea, que no puede presentarse en el caso de que ambos hayan convenido en una separación de manera voluntaria ya sea porque simplemente así lo determinados o bien porque uno de ellos por índole laboral se ve en la necesidad de vivir en una población o ciudad diversa, por lo que en el caso de ser así, será menester que la parte actora previo a la interposición de la demanda, requiera a su conyuge para reincorporarse al hogar conyugal y de no reintegrarse tendrá derecho al ejercicio de la acción, pero en base a la causal siguiente.

Debe decirse que en caso de que el demandado exprese como defensa que la separación no fue sin causa, sino que existe motivo justificado para ello, en todo caso será a este el que corresponda la carga de la prueba<sup>359</sup>, o sea, tendrá que justificar en el sumario la causa justificada que ha tenido para vivir fuera del domicilio conyugal. Por otra parte, en este punto específico se pueden presentar aspectos claros en cuanto a que la separación no corresponde a un abandono sino a causas o necesidades de que uno de los consortes viva en otra parte ya sea por razones de trabajo o otra índole, como ejemplo tenemos, cuando uno deja de cohabitar en el domicilio conyugal a partir de su reclusión en algún centro penitenciario, lo que dejaría en claro que en todo caso el incumplimiento de sus obligaciones maritales no dimana de su conducta sino de una decisión imperativa del Estado, al privarlo de su libertad personal y recluirlo en un centro de readaptación social<sup>360</sup>, por lo que no sería factible efectuar un juicio de reproche sobre esa conducta particular.

Como punto relevante debe indicarse que la acción para pedir el divorcio por abandono del hogar conyugal por más de seis meses, anteriormente estaba concedida a favor del cónyuge que permaneció en el hogar, o sea el abandonado, mas no del cónyuge que se separó<sup>361</sup>, aunque fuere con causa justificada; ello atento a que si este último tuvo causa

---

<sup>359</sup> [J] Jurisprudencia, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 90, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241260, Civil, p. 61. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de.

<sup>360</sup> [J] II.10.C.T.50 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Novena Época, Registro: 202074, Civil, junio de 1996, p. 826. Divorcio, separación del domicilio conyugal como causal de. Es causa justificada, estar recluido en un centro de readaptación social.

<sup>361</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 47, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241967, Civil, p. 38. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de. La acción corresponde al cónyuge abandonado (legislación del estado de Chiapas).

justificada para separarse y para pedir el divorcio, debió deducir la acción dentro del término concedido por la ley, y si no lo hizo así, su separación se tornó injustificada, por lo que si transcorre el plazo legal sin reincorporarse al hogar, se convierte en cónyuge culpable ya que en tal norma se destaca que el espíritu del legislador, concretó el principio jurídico de que a nadie le es lícito aprovecharse de su propio dolo, por ello en el artículo 410 del Código Civil del Estado, se determina, entre otras cosas, que el divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él, por lo que antaño, esta causal de divorcio solo podía ser invocada por el cónyuge abandonado.

La situación anterior ya no rige en esta causal, pues el artículo 410 en cita, fue materia de reforma<sup>362</sup> al adicionarle un segundo párrafo que establece que en tratándose de las causales previstas en las fracciones VII, XII y XIX del artículo 404, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. En la exposición de motivos que generaron esta reforma se indica en su parte considerativa algunos de los fines del matrimonio, indicando textualmente:

*“...2.- Del análisis del espíritu de la iniciativa que no trata, estimamos pertinente citar algunos preceptos de la Ley sustantiva civil que aportan al presente dictamen el sustento legal de las presentes conclusiones al establecer que en el matrimonio se deben considerar los siguientes fines:*

*a. Que es libremente electo, por tanto no supone una permanencia contraria al ejercicio de esa misma libertad.*

---

<sup>362</sup> Decreto 23032/LVIII/09. Periódico oficial del estado de Jalisco, 29 de diciembre de 2009, sec. IV.

*b. Que los cónyuges conservarán en todo el tiempo, la libertad para determinar la totalidad de los aspectos concernientes a su relación matrimonial, dado que los vínculos que derivan de tal unión, son exclusivos de la pareja, lo que supone el ejercicio de la libertad de los cónyuges para dar inicio a su relación matrimonial, así como su terminación.*

*c. Que con el matrimonio se funda legalmente la familia, al ser una comunidad establecida naturalmente para la diaria convivencia, lo que supone que al dejar de existir convivencia entre los cónyuges, desaparece naturalmente dicha comunidad y por lo tanto el matrimonio carece de objeto y finalidad.*

*d. Que en las relaciones conyugales tiene manifestación la complementariedad de los seres humanos en los aspectos afectivo y biológico, lo que hace suponer la convivencia diaria al no existir dicha convivencia, al vivir separados los cónyuges, resulta imposible dicha complementariedad.*

*e. Que la familia constituye el medio natural para el desarrollo de las interrelaciones, de responsabilidad y solidaridad humana, lo que resulta imposible con la separación de los esposos.*

*f. Que en la familia debe buscarse el afecto y la fidelidad, así como darse apoyo recíproco, otro supuesto imposible de cumplir con la separación conyugal...”.*

*“...A mayor abundamiento cabe precisar que establece el Código Civil del Estado que existe ineficacia en el matrimonio cuando su celebración o permanencia va contra la naturaleza y esencia de la institución.*

*Lo anterior nos permite, sin lugar a dudas advertir que el legislador jalisciense ha creado disposiciones legales muy específicas para brindar seguridad jurídica a la familia, cuyas bases están soportadas en el respeto de los derechos fundamentales de las personas, en garantizar el ejercicio de los derechos del hombre y del ciudadano, en la sana convivencia social propiciando su armonía.*

*Por otro lado coincidimos con el diputado ponente en la necesidad de la adición planteada, toda vez que si bien es cierto que en las fracción VIII y IX del artículo 404 del Código civil se encuentran previstas dos causales para el divorcio consistentes en la separación del hogar conyugal, también lo es el hecho de que en ambas causales se prevé que la acción de divorcio solo puede ser invocada por el cónyuge que no se haya separado del hogar conyugal, lo que sujeta al cónyuge que se separó a continuar casado civilmente por tiempo indeterminado, siendo además nugatorio de sus derechos como la posibilidad de contraer nuevo matrimonio, el de celebrar ciertos actos de comercio, la adquisición de determinados créditos, por citar algunos.*

*Ahora bien en el supuesto de que el cónyuge que si puede demandar el divorcio no lo haga, cuya actitud pasiva podría a la vez acusar violencia intrafamiliar, en el sentido de maltrato psicológico, con la intención de dañar o humillar, los condena a ambos cónyuges a permanecer jurídicamente vinculados en una relación matrimonial inexistente e ineficaz.*



*No escapa al análisis de quienes dictaminamos el supuesto de que cuando los cónyuges desean permanecer unidos en matrimonio cohabitando y conviviendo, procuran dicha unión o por lo menos se demuestra dicho interés por uno de ellos, por lo que es claro que cuando el cónyuge que no se separó no actúa para recuperar dicha unión y convivencia es que ha perdido también el interés...”*

*“...Ahora bien, nos preguntamos qué ocurre cuando han transcurrido ambos plazos, el de seis meses y el de un año y el cónyuge que no se separó no solicita la reincorporación de su cónyuge al hogar conyugal, ni tampoco demanda el divorcio, pues es claro que no tiene interés en ninguna de las dos cosas y por tanto lo que en un principio se concibió como una forma de tutelar el bienestar de la familia como célula de la sociedad, aunque parcialmente, se ha invertido como atropello a los derechos fundamentales de las personas y en agravio en las garantías individuales de libertad que estamos ciertos el Legislador debe corregir.*

*Considerando que el matrimonio como institución jurídica ha sido concebida para propiciar el mejor desarrollo del ser humano y no su detrimento, es de considerarse a su vez que si una persona se encuentra impedida para el ejercicio de sus derechos por la voluntad de un tercero, cuando de facto ya no existe entre éstos un interés personal, un vínculo familiar, una interacción personal continua o tan siquiera causal, sino que al contrario, está propiciando situaciones de hecho que podrían considerarse ilícitas, pero que antropológicamente son inherentes a la persona humana, entendemos que es nuestro deber actualizar las disposiciones jurídicas de tal manera que, de forma ordenada, el derecho, como ciencia jurídica, prevalezca al servicio del hombre y no al revés...”*

Se indica en el dictamen que todos los años, por conducto del Registro Civil, se realizan campañas de matrimonios colectivos y de registros extemporáneos de nacimiento, para regularizar las situaciones irregulares en las que viven muchos jaliscienses mediante las cuales se invita a quienes viven en concubinato o en unión libre a que contraigan matrimonio y a que reconozcan a sus hijos como tales, lo que evidencia que el Estado reconoce dichas instituciones de hecho que se generan en nuestra sociedad jalisciense, al tiempo de orientar su quehacer social y político a su protección, para luego acotar:

*“...Sin embargo, para muchas personas este beneficio es inalcanzable ante la imposibilidad de disolver un matrimonio anterior, por la falta de interés, la ausencia de disposiciones jurídicas adecuadas y a veces, hasta la venganza o resentimiento de uno de los cónyuges, lo que nos lleva a sumarnos a la protesta planteada por el Diputado Ponente en su iniciativa, salvaguardando los demás derechos que les pudieran corresponder a las partes, como alimentos o incluso la acción penal por abandono o pérdida de patria potestad.”.*

Como puede observarse la reforma alude como punto toral que el matrimonio es un acto de elección libre y que los cónyuges conservan siempre la libertad para determinar la totalidad de los aspectos concernientes a su relación matrimonial, y que el ejercicio de la libertad de los cónyuges para dar inicio a su relación matrimonial es igual para su terminación. Que cuando no existe convivencia entre ellos, desaparece de forma natural dicha comunidad y el matrimonio deja de tener objeto y finalidad.

Que a virtud de que el legislador jalisciense se ha distinguido en crear disposiciones legales muy específicas para brindar seguridad jurídica a la familia, la que se basan en el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Que por ello, la circunstancia de que en las fracción VIII y IX del artículo 404 del Código civil, relativas a causales en las que se involucra la separación del hogar conyugal en cuanto a que estas solo pueden ejercerse por el cónyuge que no se separo del mismo, provoca que el otro, el abandonante quede sujeto a continuar casado civilmente por tiempo indeterminado, lo que hace nugatorios diversos derechos. Que la exclusividad de la legitimación para el abandonado, si no ejercita la acción de divorcio, implica que tal actitud pasiva puede acusar violencia intrafamiliar, en el sentido de maltrato psicológico, con la intención de dañar o humillar al otro, que se propician situaciones de hecho que podrían considerarse ilícitas, pero que antropológicamente son inherentes a la persona humana; que la exclusividad de la acción al abandonado limita al abandonante a grado tal ente su imposibilidad de disolver el matrimonio, ya sea por falta de interés, la ausencia de disposiciones jurídicas adecuadas y en ocasiones hasta la venganza o resentimiento de uno de los cónyuges, lo que implica una condena para ambos a permanecer jurídicamente vinculados en una relación matrimonial inexistente e ineficaz, y lo que inicialmente se considero como una forma de tutelar el bienestar de la familia como célula de la sociedad, aunque parcialmente, se ha invertido en un atropello a los derechos fundamentales de las personas y en agravio en las garantías individuales de libertad de los seres humanos; motivos que descansan sustancialmente en el respeto de uno de los derechos fundamentales del hombre, la libertad de elección.

Ahora bien, el cambio de dicho estatus jurídico sobre esta causal y la prevista en la fracción IX, nos conducen a estimar que toda la doctrina e interpretación de las causales en su texto original, queda alterado, pues si en la actualidad cualquiera de los cónyuges, el abandonado o el abandonante

son titulares de la acción que generan estas causas, o sea que uno o el otro las pueden hacer valer, poco importara si existió o no causa justificada, lo que nos conduce también a estimar que en todo caso, cuando se efectuó la reforma de merito lo correcto hubiese sido el que el texto de la causal se modificara y se suprimiera la última frase relativa a “sin causa justificada”, ya que continua con su texto de génesis y señala: La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada. Por otra parte, bajo tal sentido de cosas, tampoco importara si permaneció o no el domicilio conyugal por más de seis meses después de la separación.

#### **5.9.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Esta es una de las causales de divorcio mas socorridas en los juicios de disolución del vínculo matrimonial -empero con la inclusión de la nueva causal que consigna la fracción XIX, es factible que baje su invocación- el uso frecuente de la misma se considera que se debe al hecho de que sus elementos son de accesible acreditación. Los medios convictivos que se estiman pertinentes para acreditar esta causal, son las documentales para justificar la existencia del matrimonio, del domicilio conyugal, y aun bajo la nueva directriz en cuanto a que la causal puede ser invocada por cualesquiera de los esposos, será menester ofertar testimoniales o confesional para acreditar el hecho del abandono injustificado, su data y falta de reincorporación al hogar de parte del abandonante.

#### **5.10 Separación del hogar por más de un año sin el consentimiento del otro.**

Esta causal al igual que la anterior, estaba concedida a favor del cónyuge que permanecía en el hogar, o sea el abandonado y no al separado,

sin embargo por la reforma expresada sobre la adición a un segundo párrafo del 410 citado, el divorcio puede demandado por cualquiera de los cónyuges. Lo que implica que ante el cambio de la titularidad del ejercicio de la acción basado en esta causa, también modifica los criterios que se tenían hasta antes de su reforma, ya que si en la actualidad cualquiera de los cónyuges, el abandonado o el abandonante son los titulares de la acción que generan estas causas, o sea que uno o el otro las puedan hacer valer, poco importara si hubo o no consentimiento del otro consorte, si existe o no causa justificada, etcétera.

Lo mismo acontece en cuanto al requerimiento para su reincorporación, pues si atendemos al sentido literal de la causal implica que el cónyuge que se separaba, aun en el supuesto de que inicialmente hubiere sido con el consentimiento del otro o bien por alguna orden judicial, una vez que el cónyuge que se quedo en el hogar conyugal lo requiriera para su reincorporación y pese a ello no lo haga, a partir de esta data inicia el termino de un año a que alude la causa para tener por abandonado el domicilio conyugal; a lo que hoy valdría preguntarse, si uno y otro tienen la legitimación para demandar el divorcio, el abandonado y el abandonante, el requerimiento en cuestión representa una carga para el abandonado, pero no para el que se separo, o que en todo caso es inequitativo.

#### **5.10.1 Elementos.**

Los elementos o condiciones sine qua non, para el ejercicio de la acción basada en esta causal y que deben de acreditarse por quien la haga valer, además de justificar la existencia del matrimonio, son los siguientes:

- a) La existencia del hogar conyugal.

- b) La separación de uno de los cónyuges del hogar conyugal por más de un año. El que debe contabilizarse a partir de la data de la interpelación.
- c) Que dicha separación se presento sin el consentimiento del otro cónyuge.
- d) La interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal

Tomando en consideración la similitud de los elementos de esta con la anterior causal (fracción VIII) sirven de argumentos los que ya se han vertido respecto de la existencia del domicilio y sus características, su establecimiento y existencia posterior al abandono, así como al supuesto de que hayan vivido en conjunto con otra familia o de “arrimados”, pues en todos estos aspectos se tiene la misma connotación jurídica.

De la misma manera, en ambas causales debe de considerarse que el abandono fuera injustificado, o sea que la separación de uno de ellos, no dimanase de necesidades laborales<sup>363</sup>, de una orden judicial, de convenio entre ellos, etcétera, pues de ser así, en el primer caso, la separación no corresponde en su esencia a la que genera la causal y amerita sanción que se presenta cuando crea un estado que impide el cumplimiento de los fines y obligaciones del matrimonio, que está rota la convivencia matrimonial, por haberse producido entre ellos circunstancias que les impiden mantenerla, lo que no se presenta si la separación es por motivos laborales, pero subsiste la contribución al sostenimiento del hogar, a la alimentación y educación de la familia, integrada por el otro consorte y sus hijos, lo que en todo caso deja en

---

<sup>363</sup> [J] VII.1o.C.85 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Novena Época, Registro: 168933, Civil, septiembre de 2008, p. 1259. Divorcio necesario por separación de los cónyuges. Si ésta se debió a cuestiones de trabajo, pero el quejoso continuó contribuyendo al sostenimiento del hogar (familia), a pesar de vivir en distinta ciudad del domicilio conyugal, queda desvirtuada dicha separación para efectos de aquél (inaplicación de la jurisprudencia 1a./j. 173/2007).

claro que la separación es justificada por motivos de índole laboral; de la misma manera cuando la separación de uno de ellos del domicilio conyugal es producto de convenio entre los consortes, lo cual puede hacerse ya que no resulta violatorio de disposiciones de orden público, pues afecta únicamente los intereses particulares de ambos cónyuges, ello per se, no es motivo ni genera la precedencia de la causal, y en todo caso el cónyuge que se quedo en el domicilio debe previamente requerir al otro para que se reincorpore al domicilio conyugal<sup>364</sup> y si a partir de ese requerimiento transcurrido el termino de ley no se reincorpora, a partir de tal fecha, iniciara el termino para el abandono.

Como se observa la diferencia entre esta causal y la anterior estriba en la obligación de efectuar la interpelación ya sea judicial o notarial que debe hacerse al cónyuge que se separo del domicilio, a fin de que se reincorpore al mismo, por lo que si hecho esto y un año después no se incorporo, es el momento en que nace el derecho al que se quedo en el domicilio conyugal, para el ejercicio de la acción de divorcio con base en esta causal.

Empero, como antes se dice, si la causal puede ser invocada por cualquiera de los esposos, es incuestionable que atendiendo al contenido literal de la causal, en cuanto a que el plazo de un año debe contarse a partir de la interpelación judicial o extrajudicial, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal, tal carga solo será para el cónyuge abandonado, por lo que el punto a dilucidar es a partir de cuándo debe de considerarse el plazo de un año para el cónyuge que abandono el domicilio, si este no está obligado a requerir a su consorte. Lo pertinente debió ser que al unísono se adecuara esta causal al nuevo orden de cosas o bien su derogación, pues en el mismo decreto se creó la causal XIX relativa a la

---

<sup>364</sup> [J] Tesis aislada. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IV, Segunda Parte-2, Octava Época, Registro: 227727, Civil, julio a diciembre de 1989, p. 712. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de. Separación de común acuerdo.

separación de los cónyuges por más de dos años, cualquiera que hubiera sido la causa, que por sus características, como luego se analizara, con el transcurso del tiempo será una de las mas socorridas.

#### **5.10.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Al igual que la anterior, los medios convictivos que se estiman pertinentes para acreditar esta causal, son las documentales para acreditar la existencia del domicilio conyugal, las testimoniales y confesional para el hecho del abandono; y cuando la ejercite el cónyuge abandonado, la documental publica que puede consistir en las actuaciones judiciales o la actuación notarial, en donde conste de manera fehaciente la interpelación que se hizo al otro cónyuge, para su reintegración al hogar conyugal y a partir de la data del requerimiento, contabilizar el periodo del año, para estar en aptitud del ejercicio de la acción con base en esta causa.

#### **5.11 Declaración de ausencia.**

El concepto jurídico que se maneja en torno a la ausencia es aquel que se refiere a la situación en que se encuentra una persona que ha abandonado el lugar de su residencia ordinaria y que no habiendo constituido apoderado, se ignora el lugar donde se halla y no se tienen noticias ciertas de su vida o de su muerte.

No basta que una persona no se encuentre en su domicilio para considerarla como ausente desde el punto de vista jurídico. No se configura la ausencia por ese sólo hecho, es necesario que el ausente no haya dejado quien lo represente, que se ignore su paradero y que no se tenga certeza sobre su existencia o fallecimiento.



El estado de incertidumbre es lo que caracteriza la ausencia que se ve acentuado cada vez más con el transcurso del tiempo, así lo que originalmente es un estado de incertidumbre va dando lugar a una sospecha, y más tarde a una presunción “*juris tantum*”<sup>365</sup> (muerte presunta)<sup>366</sup>.

La figura jurídica de la declaración de ausencia y la de presunción de muerte del ausente, se encuentran comprendidas en el título segundo del libro segundo del código civil, y sus dispositivos abarcan del 87 al 160.

De cuyo contenido se puede determinar que la ley prevé los procedimientos a seguir cuando una persona haya desaparecido y se ignore quien la represente, caso en el que a petición de parte o de oficio el juez nombrará un representante provisional y depositario de sus bienes; llevando a cabo los tramites que en específico se prevén, que van desde la citación por edictos publicados en los términos de ley, el señalamiento de un término para que se presente, así como la búsqueda del presunto ausente por medio de la policía en aquellos lugares en donde se presume se encuentre y otros mas, estableciendo que si cumplido el término del llamamiento, el citado no compareciere por sí, ni por apoderado legítimo, ni por medio del tutor o de pariente que pueda representarlo, se procederá al nombramiento de representante.

Para este tipo de asuntos, en caso de que el ausente tenga hijos menores que estén bajo su patria potestad, y no hubiera ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario ni legítimo se les nombrará tutor en los términos previstos para la designación del tutor dativo.

---

<sup>365</sup> Calificativo de las presunciones que admiten prueba en contrario. Véase, Cisneros Farías, Germán, *op. cit.*, nota 131, p. 61.

<sup>366</sup> Buenrostro Báez, Rosalía, *Derecho de Familia*, México, Editorial Oxford, 2006, p. 123.

De la misma manera se dispone que si pasado un año desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia y que en caso de que ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados dos años, que se contarán desde la desaparición del ausente, si en este período no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas.

Sobre el punto particular, pueden pedir la declaración de ausencia los presuntos legítimos herederos del ausente; los herederos instituidos en testamento público abierto; y el Agente de la Procuraduría Social. Efectuado el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la ley en cita, pasados dos meses desde la fecha de la última publicación, si no hubiere noticias del ausente ni oposición de algún interesado, el juez declarará en forma la ausencia, la cual debe de publicarse en términos de ley.

En tanto que por lo que corresponde a la presunción de muerte del ausente, esta se presenta cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Como casos de excepción, en los que no se requiere que previamente se declare la ausencia y es factible que se declare la presunción de muerte, son y se presentan en las hipótesis que se establecen en el segundo párrafo del numeral 146, que textualmente dispone:

*“Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, inundación, terremoto o catástrofe aérea, ferroviaria o de automotores u otro siniestro semejante o se trate de la víctima en el delito de secuestro y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, o a bordo de las naves*

*y vehículos accidentados, bastará el transcurso de tres meses contados a partir del acontecimiento para que el juez declare la presunción de muerte. En estos casos la autoridad judicial acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte en un periódico de amplia circulación en el Estado, por dos veces con un intervalo de quince días”.*

Sobre el tema concreto, Acosta Romero, acota:

*“...Hay que distinguir entre la declaración de ausencia y la presunción de muerte del ausente. El artículo 705 del Código establece que no es necesario hacerse la declaración de ausencia en los siguientes dos casos:*

*1.- Cuando el individuo haya desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante. En este caso bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte.*

*2.- Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe. En este caso bastará el transcurso de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte.”<sup>367</sup>*

La ausencia hace imposible la realización de los fines matrimoniales. Es conveniente recordar que ni la declaración de ausencia ni la declaración

---

<sup>367</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, pp. 261 y 262.

de muerte ponen término al matrimonio, solamente son causales de divorcio en los términos de la fracción aludida.<sup>368</sup>

Por su parte, sobre esta causal en específico, Pallares, señala:

*“...Puede censurarse al legislador que otorgue la acción de divorcio contra una persona que se presume ya muerta. En efecto, por una parte la muerte disuelve el vínculo matrimonial por lo que no hay necesidad del juicio de divorcio para obtener la ruptura de dicho vínculo; por otra parte, el juicio de divorcio concluye igualmente por el fallecimiento de cualquier de los cónyuges, todo lo cual demuestra que es antijurídico el sistema establecido por el legislador en esta materia.*

*¿Qué efectos producirá sobre la sentencia ejecutoria que declare el divorcio, sea por ausencia o por presunción de muerte, en los casos en que el cónyuge declarado ausente o presumido muerto, se presente y haga valer sus derechos?*

*La ley es omisa sobre este problema, que no es solamente imaginario, ya que se han dado casos en que el esposo que se creía muerto o legalmente declarado ausente, retorna y pretende tener derechos conyugales respecto al otro cónyuge.*

*Si la sentencia de divorcio ha causado la autoridad de la cosa juzgada material, no hay razón alguna para que se desconozca su obligatoriedad, en el caso supuesto. La presunción de muerte o la declaración de ausencia son consideradas como causas suficientes para demandar el divorcio, y si bien la declaración establece una simple presunción de muerte el Código Civil ha creado un sistema que da a dicha presunción el carácter de absoluta, es decir, que contra ella no cabe prueba alguna en contrario.*

---

<sup>368</sup> Paz y Fuentes, Víctor M. De La, *op. cit.*, nota 74, p. 53.

*Aunque esto parezca injusto e irracional, en el caso de que la persona a quien se supone muerta, demuestre que no lo está con su sola presencia, lo cierto es que en el Código no existe ningún precepto por virtud del cual pueda pedir el supuesto muerto la nulidad o revocación de la presunción de que se trata, ni tampoco que las cosas vuelvan al estado jurídico anterior a su declaración de muerte, Una vez más, predomina el principio de la seguridad jurídica sobre los derechos del resucitado.”* <sup>369</sup>

#### **5.11.1 Elementos.**

Si atendemos a su contenido literal, se desprenden como elementos de esta causal, los siguientes:

- a) El matrimonio celebrado entre los contendientes,
- b) La sentencia que declare la ausencia de uno de los cónyuges, o bien,
- c) La declaración judicial de presunción de muerte, en aquellos casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta, que primeramente se efectuó la declaración de ausencia.

Un aspecto que debe resaltarse es el que implica el emplazamiento a la parte reo, ya que es evidente que ello no podrá ser en la persona del demandado, pues justamente es ausente, por lo que en todo caso, el llamado a juicio deberá hacerse por medio de la persona que el juzgador haya designado como su representante en el trámite judicial en que se determino tal declaración.

---

<sup>369</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, pp. 81 y 82.

### **5.11.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Esta causal de divorcio es casi obsoleta, y como otras tantas, solo es posible acreditarla con la documental publica inherente a las actuaciones judiciales que corresponden a cualesquiera de ambos supuestos, ya sea la sentencia que declara la ausencia del cónyuge, o bien la que declara su presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se requiere que previo a esta declaración, exista la de ausencia.

## **CAPÍTULO VI**

### **EL DIVORCIO CONTENCIOSO.**

#### **6.1 Violencia intrafamiliar.**

Esta causal de reciente creación, por su contenido y entrada en vigor, en opinión de la suscrita concentra o engloba causales ya derogadas, que en su momento estaban inmersas en las fracciones XI y XII del citado artículo 404 del código civil, inherentes a la sevicia, la difamación, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro o para sus descendientes y la tortura psíquica, que fueron derogadas por el decreto referido.

La hoy denominada causal de violencia intrafamiliar, por ser reciente, ha generado poco material de interpretación jurídica específica, sin embargo atento a su connotación es patente que la doctrina y visión del poder judicial federal sobre las causales derogadas, son y resultan aplicables por encuadrar ampliamente en el concepto de violencia ya sea física o emocional.

La violencia intrafamiliar<sup>370</sup> es aquella que se da dentro de la familia, puede ser que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, este tipo de violencia comprende violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual; no es menester atender a las causas<sup>371</sup> que motivan la

---

<sup>370</sup> Espacios Poder Joven, Instituto mexicano de la Juventud, <<http://espacios.imjuventud.gob.mx/contenidos.php?idsubcontenido=1>>, página visitada el 15 de noviembre de 2012.

<sup>371</sup> Conceptualmente podemos definir la agresión humana como una respuesta comportamental multifactorial, condicionada por elementos biológicos, ambientales y psicológicos. La Organización Mundial de la Salud en el año 1996 definió la violencia como el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar

violencia, sino a la violencia misma que deviene de una persona hacia otra, cónyuge o hijos, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido.

En este tipo de violencia suelen intervenir varios factores, dependiendo del entorno social en que se desenvuelve y desarrolla el sujeto.

---

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Históricamente han confluído dos modelos que han tratado de explicar la génesis y la expresión de la violencia: los modelos sociales y los biológicos. Los modelos sociales contemplan a la violencia como un fenómeno puramente social, aplicando a su análisis diversos marcos teóricos precisos a partir de los cuales elaboran diversas teorías.

*Teorías ecológicas:* Establecen un paralelismo entre la creación de los nuevos centros urbanos y la criminalidad de los mismos, argumentando que la ciudad produce delincuencia. Dentro de ellas se incluyen también las que evalúan las áreas sociales y emplean métodos estadísticos multivariados para instrumentar el análisis de la distribución espacial de los delitos.

*Teoría de la anomia:* Relaciona el crimen con las estructuras sociales, con fenómenos ordinarios de la vida, subrayando la normalidad del delito, su inextirpabilidad, sin necesidad de invocar patologías individuales o complejos conflictos sociales.

*Teoría del conflicto:* Presupone la existencia en la sociedad de una pluralidad de grupos y subgrupos que eventualmente discrepan en sus pautas valorativas.

*Teorías subculturales:* Se basan en la suposición de que en cada grupo o subgrupo existen sus propios códigos de valores, que no siempre coinciden con los mayoritarios y oficiales y que cada grupo trata de hacerlos valer frente a los restantes.

*Teorías del proceso social:* Argumentan que el comportamiento criminal se aprende de la misma manera que un individuo aprende otras conductas y actividades ilícitas en su interacción con grupos y personas y a través de un complejo proceso de comunicación, que todo individuo puede actuar criminalmente, si bien dicho potencial delictivo es neutralizado por sutiles vínculos sociales y dentro de esta forma de explicación se encuentra también la denominada teoría del etiquetamiento donde el hombre se convierte en delincuente no por haber realizado una conducta desviada, sino por determinadas instituciones que lo han etiquetado como tal. Dicho estatus criminal es distribuido por las agencias de control social que lo distribuyen de forma selectiva y discriminatoria. Véase, Méndez Luévano, Tanya Elizabeth y Reynoso Orozco, Orlando, *op. cit.*, nota 318, *passim*.



En el fenómeno de la violencia familiar, resulta de fundamental importancia tratar el tema de los grupos vulnerable, puesto que existen personas en la familia, que tienen mayor riesgo de sufrir un menosprecio en sus derechos fundamentales y su dignidad humana, en su integridad física, psicológica y sexual. Dichas personas pertenecen a tres grupos, correspondientes a los niños, la mujer en la relación de pareja o matrimonio y los ancianos fundamentalmente<sup>372</sup>.

Actualmente la mujer es la más propensa a sufrir este tipo de violencia, pero datos recientes revelan que el hombre también tiende a padecerla de manera frecuente, siendo víctima tanto de hombres como de mujeres.

En la violencia intrafamiliar las víctimas pueden ser los hijos, padres, hermanos, primos, tíos, etcétera. En la familia, a veces sólo hay una víctima, puede ser atacada por el resto de la familia o defendida por algunos integrantes.

Este tipo de violencia se ejerce en el ámbito doméstico o fuera de él, pero siempre por parte de un familiar o exfamiliar consanguíneo o político (padre, madre, padrastro, madrastra, esposo(a) o concubino(a), tíos(as), primos(as), suegro(as), etcétera).

Consecuencias<sup>373</sup>. La violencia intrafamiliar puede heredarse a los hijos, a través de la repetición de patrones, esto propicia que en un futuro sus relaciones familiares sean violentas; también puede provocar traumas en las

---

<sup>372</sup> Pérez Contreras, María de Monserrat, "Violencia Familiar", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, nueva serie, año XXXII, núm. 95, mayo-agosto de 1999, *passim*.

<sup>373</sup> *Ibidem*.

victimias, trastornos físicos y mentales, mal desempeño de las labores escolares, en el trabajo y en las relaciones sociales en las que la víctima se desenvuelve, así como:

- Depresión, Estrés.
- Divorcio o separación.
- Golpes, que en ocasiones, dejan incapacitada a la víctima.

Algunos datos estadísticos<sup>374</sup>:

En el 21% de los hogares donde habitan los(as) jóvenes hay insultos constantes y en el 9% de los mismos, hay golpes (Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, 2007).

De cada 100 hogares donde el jefe es hombre, en casi 33% se registra algún tipo de violencia por 22 de cada 100 de los dirigidos por mujeres.

Los miembros más frecuentemente agresores son el jefe del hogar, 49.5% y la cónyuge, 44.1 por ciento.

Las expresiones más frecuentes de maltrato emocional son los gritos y los enojos mayores; 86% de los hogares con presencia de agresiones de tipo emocional sufrieron gritos y 41%, enojos mayores.

Las formas de maltrato que con más frecuencia se presentan en la violencia física, fueron los golpes con el puño, 42%, bofetadas, 40% y golpes con objetos, 23%.

---

<sup>374</sup> *Ibídem.*

En nuestro tema concreto, bajo un sentido amplio, se considera que todas y cada una de las causales de divorcio tienen una connotación de violencia, en menor o mayor grado, como en su momento lo represento el concepto de injuria, del mismo modo que lo son las que en un gran número se consignan en las diversas fracciones del 404, que aunque evidentemente revelan, lato sensu, esto es, en el más amplio sentido de la expresión, una conducta que implica una evocación de violencia de un cónyuge para el otro, no están, sin embargo, agrupadas bajo en denominador común, que en el caso lo sería el de violencia intrafamiliar a que se contrae, *strictu sensu*<sup>375</sup>, la fracción que nos ocupa, sino que en todo caso están individualmente tipificadas en las diversas fracciones del referido artículo 404.

Sobre el tema específico de la sevicia, Pallares señala que:

*“...Para que haya sevicia, según la definen los diccionarios, es necesario que se trate de un acto de crueldad excesiva, pero nuestra ley no exige este requisito al considerar como delitos los ya mencionados y, sobre todo, los golpes que no siempre implican la crueldad excesiva. Por lo contrario, muchas veces constituyen la reacción casi involuntaria de una persona contra algo que le molesta mucho o le ofende. Cabe recordar a este respecto que en las clases inferiores de la sociedad mexicana, existe la costumbre muy generalizada de que los hombres golpeen a sus mujeres hasta por causas insignificantes, y que ellas frecuentemente estiman los golpes como una demostración de cariño y aún reaccionan contra las terceras personas que intervienen para defenderlas.*

*Aunque el delito de golpes simples es elemento constitutivo, el que se ejecuten para ofender o injuriar a la persona que los recibe,*

---

<sup>375</sup> En sentido estricto. Véase, Cisneros Farías, Germán, *op. cit.*, nota 131, p. 102

*tratándose de la sevicia que el Código considera como causa de divorcio, no es necesario que exista ese elemento. Los actos de crueldad o de golpes pueden ejecutarse con el propósito de hacer sufrir a quien los recibe y no con el de ofenderlo. Así acontece en nuestros medios sociales inferiores, donde la sevicia puede llegar hasta los extremos de convertirse en un acto de sadismo.*

*Es discutible si bastará un solo acto de sevicia para que se produzca la causal de divorcio que se analiza, en concepto del autor, si se tiene en cuenta lo que tradicionalmente se ha considerado como tal, la sevicia existe cuando haya malos tratos o diferentes actos de crueldad, pero bastará uno sólo si es de tal gravedad que revela en la persona que lo ejecuta una perversión moral indudable. La H. Suprema Corte de Justicia ha resuelto lo contrario. En este caso, como cuando se trata de las injurias, los tribunales tienen un amplio poder de apreciación.<sup>376</sup>*

### **6.1.1 Elementos.**

Para efecto de que se presente esta causa se deben presentar los siguientes supuestos:

- a) Que uno de los cónyuges ejerza actos de violencia ya sea, física o psicológica.
- b) Que tal maltrato se infiera de un cónyuge a otro o bien, contra sus descendientes.

---

<sup>376</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, pp. 85 y 86.

Esta causal de divorcio, requiere para su procedencia al igual que casi todas, que la parte actora señale con claridad y precisión desde su demanda inicial, no sólo los hechos en que basa su causal, sino también el lugar, tiempo y modo en que estos eventos acontecieron<sup>377</sup>; sin que pueda efectuarlo en otra etapa procesal, porque sólo así la parte demandada puede justificar un hecho contrario sucedido en ese mismo lugar y tiempo que desvirtúe el invocado por la actora constitutivo de su acción, o bien acreditar un hecho distinto que destruya el relatado en la demanda; por lo que sí esta condición no se cumple, es evidente que el demandado queda en estado de indefensión, ya que la demanda se funda en hechos que fueron ocultados al pasivo.

Como regla general tenemos que nuestra Constitución Federal en su artículo 29 prohíbe en forma expresa la tortura, por el contrario establece a las personas las garantías del derecho a la vida y a su integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Es el derecho de toda persona a ser protegida en su integridad física, psíquica y moral. La tortura como tal constituye una forma agravada y deliberada de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el caso concreto es evidente que no estamos ante la presencia de la figura de la tortura desde su connotación en materia penal, sino en materia constitucional y civil, como una conducta que atenta contra los derechos fundamentales, así como los derechos de personalidad de las personas y en el caso específico que quebranta los derechos y obligaciones entre los cónyuges y su prole. De la misma manera es preciso distinguir la

---

<sup>377</sup> [J] 1a./J. 69/2006, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Novena Época, Registro: 173572, Civil, enero de 2007, p. 173. Divorcio necesario. Cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de violencia intrafamiliar, en la demanda deben expresarse pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.

violencia o tortura desde el punto de vista físico así como desde el aspecto psíquico.

Los derechos de personalidad se consignan en el contenido de los numerales 24 y 25 de nuestra legislación civil; así tenemos que los derechos de personalidad, tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano, como integrante de un contexto social, en sus distintos atributos, esencia y cualidades, con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado. Que los derechos de personalidad, por su origen, naturaleza y fin, no tienen más limitación que los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres. Como consecuencia, deben ser respetados por las autoridades y particulares.

El numeral 26, clasifica a los derechos de personalidad con las siguientes características:

- I. Esenciales, en cuanto que garantizan el desarrollo individual y social, así como la existencia digna y reconocida del ser humano;
- II. Personalísimos, en cuanto que por ellos alcanza su plena individualidad la persona humana;
- III. Originarios, ya que se dan por el sólo nacimiento de la persona, sin importar el estatuto jurídico que después pueda corresponder a la misma;
- IV. Innatos, ya que su existencia no requiere de reconocimiento jurídico alguno;
- V. Sin contenido patrimonial, en cuanto no son sujetos de valorización pecuniaria;
- VI. Absolutos, porque no es admisible bajo ningún concepto su disminución ni su confrontación y valen frente a todas las personas;
- VII. Inalienables, porque no pueden ser objetos de enajenación;

- VIII. Intransmisibles, porque son exclusivos de su titular y se extinguen con la muerte;
- IX. Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo; e
- X. Irrenunciables, porque ni siquiera la voluntad de su titular basta para privar su eficacia.

En tanto que el numeral 28, dispone de manera clara que toda persona tiene derecho a que se respete:

- I. Su vida;
- II. Su integridad física y psíquica;
- III. Sus afectos, sentimientos y creencias;
- IV. Su honor o reputación, y en su caso, el título profesional, arte, oficio u ocupación que haya alcanzado. No será objeto de demostración o manifestación que cause deshonra, desprecio y ofensa que le conlleve descrédito;
- V. Su nombre y, en su caso, seudónimo;
- VI. Su presencia física;
- VII. El secreto epistolar, telefónico, profesional, de comunicación teleimpresa y el secreto testamentario; y
- VIII. Su vida privada y familiar.

En relación con los deberes y derechos del matrimonio el artículo 273 de la ley sustantiva civil, dispone que los cónyuges deben contribuir, cada uno por su parte, a los fines del matrimonio, en tanto que los numerales 278 y 279 claramente señalan los deberes y obligaciones que nacen del matrimonio, ya citados en este texto.

La violencia o tortura psíquica debe entenderse como el comportamiento de un cónyuge hacia el otro o bien hacia sus descendientes, que por su naturaleza constituya una conducta que violente los derechos personalísimos del cónyuge o de la prole, en cuanto a su integridad psíquica, que corresponda a una forma agravada y deliberada de trato cruel, inhumano o degradante, que produzcan en el consorte o en los hijos un estado psicológico de inestabilidad emocional. Por su parte el maltrato físico no requiere de mayor explicación, pues consiste en actos que vulneran la integridad corporal, como pueden serlo entre otros los castigos proferidos con dureza tal que llegan a producir lesiones; sin embargo el maltrato o tortura psicológica, no puede definirse con tanta facilidad dado que puede presentarse de maneras distintas, por ejemplo, con hostigamiento, recriminaciones, actos vejatorios de palabra u obra, menosprecio, trato cruel, etcétera. La violencia emocional, consiste en enviar mensajes y gestos, o actitudes de rechazo, es la intención de humillar, avergonzar, hacer sentir insegura y mal a una persona, deteriorando su imagen y su propio valor o autoestima, y que en términos generales daña su psiquis.

La violencia como tortura en este sentido, puede presentarse verbal o no verbal; en la primera se representa el uso de la palabra, ya sea escrita u oral, la segunda toma su forma a través de las actitudes corporales, ambas tienen la intención de ridiculizar, humillar, amedrentar, menospreciar, etcétera a una persona, y puede presentarse en la intimidad, o bien ante la presencia de terceros. Por sus características es y representa violencia doméstica, el abuso psicológico o tortura emocional, puede en un momento dado preceder o acompañar la violencia física como una forma de control a través del miedo, de la degradación, los especialistas indican que ello se representa por medio de un sin fin de conductas, que van desde la amenaza de daño, aislamiento físico y social, celos y posesividad extremas, insultos, críticas y menosprecios constantes, acusaciones falsas, culpar de todo, ignorar o ridiculizar a la



persona, manipularla, control económico, en fin, una serie de actos y conductas que se traducen en dañar el estado emocional de una persona.

La violencia intrafamiliar de índole psicológico<sup>378</sup>, desde el escrito inicial debe señalar con claridad y precisión cuáles son los hechos que la constituyen, tanto para que el cónyuge demandado esté en posibilidad de formular sus defensas, así como para que en su oportunidad, el juzgador este en posibilidad de poder apreciar si efectivamente se han demostrado tales hechos, y si por su naturaleza y gravedad, continuidad o persistencia, se traducen en tortura mental para uno de ellos o bien para los hijos, de forma tal que justifican la disolución del matrimonio. También se hace necesario que la parte accionante manifieste de una manera explícita cuál o cuáles son los comportamientos que asume su cónyuge y considera o estima que consisten la violencia o tortura psíquica, así como que tal comportamiento genera en la parte demandante o en su prole, un estado anímico-psicológico que provoca y conduce a que sea imposible la vida en común, pues quien asume la conducta de torturador hacia su consorte violenta las obligaciones y fines del matrimonio, que como se ha visto consisten en cultivar y promover el conocimiento, comprensión y concientización de lo que significa el estado social del matrimonio, la fidelidad sexual y afectiva, así como el procurar, respecto del otro su superación personal, guardarle y hacer que se guarden las debidas consideraciones a su persona y proporcionarle en las mejores condiciones, satisfactores de salud y bienestar, lo que evidentemente no se logra ni en forma por demás remota, si uno de los consortes utiliza la violencia psíquica contra su cónyuge; lo mismo acontece cuando tal comportamiento del torturador se presenta hacia sus hijos, pues con ello no se cumplen con las obligaciones de los progenitores, y si por el contrario se

---

<sup>378</sup> [J] II. 2o. C. T. 9 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Octava Época, diciembre de 1994, p. 369. Divorcio necesario. Por maltrato físico o mental a los hijos, elementos de la acción de (legislación del Estado de México).

quebrantan los derechos de los hijos, mas aun cuando estos son menores de edad.

Cuando se invoca esta causal en esta modalidad, como se ha dicho, es necesario que la parte actora manifieste cuáles fueron los efectos psicológicos que los hechos acontecidos causaron en su persona o en la de sus hijos, pues si bien es al juzgador a quien propiamente corresponde la calificación de los hechos que según el actor afectaron su salud psicológica, es indispensable que al ejercitarse la acción respectiva se indique con toda claridad cuáles son los hechos o actos que a juicio de la parte accionante se estiman como violencia psicológica y que con ellos se afecto la salud mental con relación al honor o dignidad de la persona y que conducen a la imposibilidad de la vida en común con su consorte y sus hijos, en caso de que la violencia sea hacia ellos.

Resulta pertinente señalar que los seres humanos no reaccionamos de la misma manera, por lo que la imputación de un hecho para una persona podrá representar tortura psíquica y para otra, el mismo hecho no lo es; por ejemplo, una injuria podrá ser para un individuo un grave impacto desde el punto de vista psicológico que lo lleve a perder el amor, respeto y afecto hacia su cónyuge que haga imposible la vida en común, mientras que para otro esa misma injuria puede ser superada con un simple perdón por quien la profirió y continuar la convivencia conyugal, o bien que por su sistema de vida, el uso de ciertas palabras es común y cotidiano y no persigue la finalidad de dañar al otro, y en ese sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación.<sup>379</sup> Por tanto, es lógico y jurídico sostener que para poder hacer la calificación de los hechos que puedan estimarse como

---

<sup>379</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, febrero de 1992, p. 180. Divorcio, injuria grave como causal de. Debe analizarse si las frases proferidas ofenden o son de uso normal, tomando en cuenta el grado de educación.

violencia psíquica que produzcan una afectación psicológica al decoro, honor y dignidad de la persona a quien se le profieren, y que lógicamente se tenga como consecuencia una violación a los fines y deberes del matrimonio que torna en imposible la vida en común<sup>380</sup>, el juzgador debe contar con todos y cada uno de los motivos que exprese la parte actora sobre el particular y que sea debidamente probado en autos que la conducta desplegada por el reo corresponde a haber ejercido violencia psicológica a la parte accionante o a sus descendientes, puesto que de no hacerlo así, se estaría juzgando exclusivamente desde el punto de vista o criterio particular que de dichos eventos tenga en lo personal, pero no desde el punto de vista objetivo y real, respecto de si se presenta o no ese daño psicológico.

Es por ello, que habrá que determinar cuidadosamente en cada caso concreto, atendiendo a la naturaleza de los actos que se invoquen como constitutivos de violencia mental, si con ello se persigue el propósito deliberado de provocar sufrimiento al cónyuge que los padece o a los hijos que la sufren y tales actos traen como consecuencia la imposibilidad de continuar la vida en común de los cónyuges; por lo tanto, debe concluirse que si los actos mencionados no provocan una afectación psicológica al decoro, honor y dignidad de la persona a quien se le profieren y que ello no se traduce en un distanciamiento profundo entre los consortes, hasta el extremo de hacer imposible la vida en común, entonces no habrá lugar a decretar el divorcio; aseveración ésta que se funda en las circunstancias de que la conservación del matrimonio es de interés público y sólo excepcionalmente se autoriza la disolución, cuando existen causas debidamente probadas, que obstaculizan la vida en común de la pareja.

---

<sup>380</sup> [J] II. 2o. C. T. 9 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Octava Época, Registro: 209724, Civil, diciembre de 1994, p. 369. Divorcio necesario. Por maltrato físico o mental a los hijos, elementos de la acción de (legislación del Estado de México).

Por otra parte no podemos soslayar que por decreto número 21917/LVIII/07 de fecha 23 de octubre del año 2007, se derogan los capítulos II, III y IV del Título Décimo Quinto, así como los artículos 198, 199, 200, 201, 202, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del art. 203 y el art. 204 del Código Penal, lo que generó que se derogaran los delitos de injurias, difamación, amenazas y calumnias, empero es pertinente aludir a los conceptos que de las tres primeras figuras jurídicas señalaba el código penal, para tener una noción de su connotación jurídica.

En cuanto a las injurias el derogado artículo 198, disponía que: Se impondrán de tres días a un año de prisión o multa por el importe de dos a cuatro días de salario, al que por medio de cualquier expresión o acción, causare alguna ofensa grave a alguien.

Sobre la difamación el derogado artículo 199, preveía: se impondrán de dos meses a dos años de prisión o multa por el importe de dos a ocho días de salario, al que comunicare, a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causar deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien.

En cuanto a las amenazas el artículo 188 vigente del código penal del Estado, refiere que se impondrán de quince días a un año de prisión o multa por el importe de dos a ocho días de salario, al que de cualquier modo, anuncie a otro su intención de causarle un mal futuro en su persona, honor, prestigio, bienes o derechos, o en la persona, honor, prestigio, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado el ofendido por algún vínculo.

Ahora bien, como una forma específica de violencia intrafamiliar psicológica, podemos atender a la figura jurídica de las injurias<sup>381</sup> de un cónyuge al otro o hacia los hijos, y que atentan contra la mutua consideración, respeto y afecto que se deben los esposos y hacia sus descendientes, teniendo como consecuencia el que se imposibilite continuar la vida conyugal. En un juicio de divorcio contencioso la a *injuria grave*, como se constituye por la expresión, acto o conducta, productores de vejación, menosprecio, ultraje u ofensa en contra de la mutua consideración, respeto y afecto que ambos cónyuges se deben proporcionar y que hagan imposible la vida conyugal, debido a la intención con la que se profieren, o sea para humillar y desprestigiar al ofendido con el fin de causarle menosprecio ante la sociedad en su posesión o dignidad. De la misma manera, si tenemos que el más alto Tribunal del País, a emitido opinión en el sentido de que no es necesario que se acrediten todas y cada una de las injurias que se invoquen por la parte actora en la demanda de divorcio, pues basta que se acredite una de ellas de naturaleza grave para que opere la causal de divorcio y justifique legalmente la disolución del vínculo matrimonial, siempre y tal injuria traiga como consecuencias las circunstancias antes referidas, es patente que la injuria como tal, es violencia intrafamiliar.

Retomando el contenido original de la causal, pues las circunstancias que se invocan contienen su grado de violencia, Pallares indica:

*“... Las injurias deben ser graves para que generen la acción de divorcio, y es lógico que en este particular, los tribunales tengan un amplio poder de apreciación respecto de la gravedad del hecho injurioso.*

---

<sup>381</sup> [J] Tesis: II.3o. J/7, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, Registro: 220013, Civil, marzo de 1992, p. 94. Gaceta núm. 51, marzo de 1992, p. 50. Divorcio. Injurias graves como causal de. Concepto.

*Como queda dicho, la injuria puede consistir tanto en palabras como en hechos, y en concepto del autor en omisiones, aunque sea indiscutible esta última afirmación. Cuando la injuria se hace verbalmente, hay que tener en cuenta para determinar su gravedad e incluso su existencia, la clase social de las personas de que se trate, sus costumbres y el lenguaje habitual que usen, ya que este último cambia mucho de acuerdo con la educación y el medio en que se vive. Determinadas palabras en personas de refinada educación pueden constituir una injuria, pero no tienen tal naturaleza en los medios sociales inferiores, donde con demasiada frecuencia en lenguaje se caracteriza por su procacidad. En el libro que causó tanta sensación, “Los hijos de Sánchez”, el idioma empleado por ellos es demasiado grosero, y sin embargo no lo usaban con el propósito de ofender, sino como el producto de su poca educación y cultura”.<sup>382</sup>*

Es pertinente señalar que las injurias como violencia intrafamiliar, no constituyen una causal de tracto sucesivo, ya que la injuria en sí, siempre se profiere en un momento perfectamente determinado o determinable en el tiempo, ya sea que la injuria se manifieste por palabras o hechos, puesto que en ambos casos, la actitud ofensiva de un cónyuge para con el otro tiene una expresión material que sucede en un momento histórico, y a partir de este momento se inicia el término de caducidad.

Para ubicar que en esta causal de violencia intrafamiliar, antes injurias, sevicia y amenazas y como la mayoría de las causales de divorcio, son injuriosas en mayor o menor grado, nos remitimos al señalamiento que sobre Planiol hace Acosta Romero:<sup>383</sup>

---

<sup>382</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 84.

<sup>383</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 264 y 265.

*“Marcel Planiol enumera una serie de hechos injuriosos del matrimonio después de haberse celebrado el civil.*

*1.- La negativa de consentir en la celebración religiosa del matrimonio después de haberse celebrado el civil.*

*2.- La negativa voluntaria y persistente de uno de los esposos para consumir el matrimonio.*

*3.- El contagio voluntario de la sífilis por un cónyuge contra el otro.*

*4.- El abandono voluntario de uno de los esposos para el otro.*

*5.- La simple tentativa de adulterio.*

*6.- La negativa del marido para que se bauticen a los hijos comunes.*

*7.- La vigilancia abusiva ejercida sobre la correspondencia de la mujer.*

*8.- El hábito del juego que origine deudas y mala conducta.*

*Como puede apreciarse, en la actualidad algunos de los hechos señalados por Planiol como injuriosos, ya no son operantes, tal sería el caso de la negativa de celebrar el matrimonio religioso después del civil, o la negativa del marido para que se bauticen a los hijos comunes.”*

También se puede atender a la figura de las amenazas entendiendo esta como violencia intrafamiliar y en todo caso consiste en actos o expresiones que indiquen el propósito de ocasionar un daño a su consorte o bien a los hijos; para la disolución del vínculo matrimonial se requiere que las amenazas sean graves, por lo que debe de exponerse desde la demanda la gravedad de estas, establecer con claridad y precisión en qué consistió el mal que se causaría, y si bien se expresan genéricamente, estos actos o expresiones deben ser concretos al grado que provoquen un profundo y

radical temor al cónyuge o al hijo que se amenazo, lo que tendrá como consecuencia una conducta insostenible para la permanencia que requiere la vida en matrimonio. Por lo tanto, se debe acreditar plenamente que la parte demandada haya realizado actos tendientes a concretar el deseo de ocasionar un daño en particular a su cónyuge o a los hijos.

Al igual que el punto anterior, la difamación puede seguirse considerando como una de las manifestaciones de esta causal de violencia intrafamiliar, por ello atenderemos a las características de esta especie de violencia. Este vocablo deviene del latín *diffamare*, y por ella se entiende hacer perder el crédito y la buena fama a una persona.

Así las cosas, la acción de difamar presupone un ataque a la reputación de una persona, rebajar a alguien en la estima o concepto que los demás tienen de él; su finalidad es la de ofender logrando por este medio que se cause un descrédito, una deshonra, un perjuicio, exponiendo a la persona al desprecio de alguien o de los demás. La difamación va encaminada a lograr como fin el que se lesione o dañe el prestigio de un sujeto, el honor de una familia, la imagen de una empresa, etcétera; también tiene como elemento la divulgación o publicidad que se da al acto de difamar o sea es la comunicación a una o varias personas de la imputación de hechos, ya sean ciertos o falsos, con la que se trata de perseguir de mala fe, una lesión a la reputación ya sea personal, familiar o profesional; su esencia es el *animus diffamandi*. De la misma manera la comunicación a que se hace referencia puede presentarse en distintas formas, puede ser por medio de la palabra, escrita u oral, por gestos o ademanes, etcétera, en fin cualquier medio de comunicación que tenga la particularidad de que sea percibida por la persona o personas a las que se dirige.

Este concepto de agresión al igual que el anterior, no es de tracto sucesivo y que por lo tanto si tiene término de caducidad, ello tomando en



consideración que los hechos constitutivos de la difamación también se producen en un momento determinado, y no puede decirse que éstos impliquen una situación continua y permanente, pues aunque sean frecuentes o habituales de ninguna manera dejan de ser actos aislados en los que a partir de ese momento se inicia el término de la caducidad, por lo tanto, es una causal que debe de hacerse valer en los tiempos a que alude el numeral 410 de la Ley Sustantiva Civil de la Entidad, y por consecuencia en la demanda debe de establecerse con claridad y precisión las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que acontecieron; ello con los mismos objetivos del resto de los elementos que conforman esta causal, o sea que la parte demanda pueda preparar su contestación y defensas, que las pruebas se ofrezcan y rindan sean en relación precisa con la litis establecida; así como para poder determinar el tiempo que ha transcurrido y saber si la causal por este motivo ha caducado o no.

Sobre la violencia intrafamiliar de naturaleza física, válidamente podemos apoyarnos en las definiciones que hasta hoy se han efectuado de la figura que corresponde a la sevicia, y que representa una de sus modalidades, pues debemos recordar que la sevicia, como violencia intrafamiliar, significa la crueldad excesiva que hace imposible la vida en común y no un simple altercado o un golpe aislado que pueden ser tolerados. Estos malos tratamientos o crueldad excesiva que se presenten de un cónyuge para el otro o hacia su prole, requiere la justificación de hechos positivos que induzcan a considerar actualizadas esas situaciones de modo persistente, que revelen la inutilidad de que subsista el matrimonio como institución social y civil, por la imposibilidad de alcanzar los fines del matrimonio. Cuando se invoque esta causal bajo esta circunstancia, se debe determinar con exactitud la naturaleza y las modalidades de los malos tratamientos, ello para que la contraria este en posibilidad de defenderse, así como para que el juzgador se encuentre en aptitud de calificar su gravedad y si en realidad tales hechos configuran o no la causal.

Como puede observarse, todas las características, de las injurias, amenazas, sevicia, difamación encuadran perfectamente bajo el concepto de violencia intrafamiliar, por lo que los hechos que en ellas se basen son generadores de esta causal del divorcio, y en cada uno de ellos, debe de expresarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron<sup>384</sup>, narrando de manera clara y sucinta los hechos que la motivan, el evento de la data en que aconteció el hecho sobre cualesquiera de los conceptos materia de análisis, es y resulta importante, para los efectos de la caducidad<sup>385</sup>.

Si atendemos a las características de la causal desde la perspectiva de la sevicia, amenazas, injurias, podemos considerar los criterios emitidos por el más alto Tribunal del País, establecen que es inexacto que esta causal de divorcio sea de tracto sucesivo<sup>386</sup> y que por lo tanto no tiene término de caducidad, ello tomando en consideración que los hechos de violencia intrafamiliar constitutivos de sevicia se producen en un momento determinado, y no puede decirse que éstos impliquen una situación continua y permanente, pues aunque sean frecuentes o habituales de ninguna manera dejan de ser actos aislados en los que a partir del momento que se presenta

---

<sup>384</sup> [J] VI.2o. J/227, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 59, Octava Época, Registro: 217861, Civil, noviembre de 1992, p. 70. Divorcio, sevicia e injurias graves como causal de. Deben expresarse en la demanda los hechos en qué consisten y el lugar, tiempo y modo en que acontecieron.

<sup>385</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 109-114, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241006, Civil, p. 102. Informe 1978, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 71, p. 50. Divorcio, sevicia, amenazas e injurias graves, como causales de. El término para el ejercicio de la acción empieza a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos (legislación del estado de Veracruz).

<sup>386</sup> [J] XX.429 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XV-I, Octava Época, Registro: 209164, Civil, febrero de 1995, p. 267. Sevicia como causal de divorcio. No es de tracto sucesivo la.

se inicia el término de la caducidad, por lo tanto, es una causal que debe de hacerse valer en los tiempos a que alude el numeral 410 de la Ley Sustantiva Civil de la Entidad, y por consecuencia en la demanda debe de establecerse con claridad y precisión las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que acontecieron; lo anterior para que la parte reo pueda preparar su contestación y defensas, al igual que las pruebas se ofrezcan y rindan sean en relación precisa con la litis establecida; así como para poder determinar el tiempo que ha transcurrido y saber si la causal ha caducado o no, o sea que el juzgador pueda estudiar o examinar si la acción se ejercitó en tiempo, es decir, antes de su caducidad.

El Código Penal del Estado, en su Título Décimo Segundó, contiene la normatividad de los delitos contra el orden de la familia y en su capítulo primero establece el denominado “De la Violencia Intrafamiliar”. En el que se describe que comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno o varios miembros de su familia, tales como cónyuge, pariente consanguíneo hasta cuarto grado, pariente afín hasta cuarto grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado.

Indicando que se debe entender por maltrato los actos u omisiones que causen un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas, independientemente de que se cometa o no otro delito.

Empero, debemos atender que por la naturaleza de las materias, la violencia intrafamiliar como causal de divorcio no nos condiciona a los ordenamientos penales, ni exige como condición la existencia de una sentencia penal condenatoria firme<sup>387</sup>, para tener por actualizada la violencia

---

<sup>387</sup> [J] XI. 1o.T.Aux.18 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII, Novena Época, Registro: 162865, Civil, febrero de 2011, p. 2306. Divorcio. Para que proceda la acción por violencia familiar, es innecesaria la

intrafamiliar, por lo que no es necesario que exista sentencia condenatoria del orden penal donde se considere culpable a la parte demanda del proceso de divorcio, pues para los Jueces familiares solo debe importar se determine si para efectos del derecho civil es o no un acto ilícito, establecer si quedo probado que la violencia cometida por un cónyuge hacia otro, se presenta al grado de trastocar el derecho privado, pues el acto ilícito sólo se considera en relación con el daño causado, prescindiendo de la idea de hecho punible penalmente, en virtud de que la tutela jurídica en materia civil se dirige a sancionar una acción entre particulares que aun sin ser o declararse ilícita en el ámbito criminal, es reprochable por la sociedad y susceptible de producir consecuencias de derecho entre los particulares afectados.

La violencia intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones, genera que al interior del núcleo familiar se presenta una desavenencia total entre los consortes. Los rasgos o perfiles del agresor en la violencia intrafamiliar, en la relación de pareja, se hacen presentes diversos síntomas en ambos consortes, estos se reflejan en la victima en diversos padecimientos, como una alteración en su conducta, salud y relaciones sociales, que pueden ser diagnosticables a través de diversas manifestaciones, como puede ser: la depresión, la devaluación, la inapetencia, la inseguridad, por ejemplo: la necesidad de recurrir a terapia de índole psicológico o de algún tratamiento médico especial para el caso concreto, ante la ausencia de una vida plena y satisfactoria por la conducta asumida por el conyugue violento; los mismos estudios señalan que entre los síntomas del agresor, se encuentran: el ejercicio del control, la manipulación, la negación de los actos, la irresponsabilidad, la evasión de la verdad, el miedo al abandono, la derivación hacia otros de la propia responsabilidad, etcétera; finalmente debe decirse que cuando la victima de las agresiones de índole familiar, entratandose de

---

existencia previa de una sentencia condenatoria penal donde se considere culpable al demandado en el juicio civil (legislación del estado de Michoacán).

matrimonios, decide buscar apoyo y una solución a tales problemas, es justamente porque ha llegado al umbral de su propia tolerancia, (y que en términos generales evidencia que ha soportado una vida indigna) y que se traduce en que a la sazón, es imposible restablecer la armonía conyugal, pues esta se encuentra totalmente deteriorada. Sin olvidar que es factible *“...aceptar, por lo tanto, que la violencia emerge, usualmente, en espacios relacionales donde predominan las interacciones dinámicas de poder, discriminatorias y de desigualdad y exclusión social, consensualmente no siempre significadas y representadas como tales, es decir, sin su carga valorativa de negatividad y rechazo...”*<sup>388</sup>.

Pérez Contreras, sobre el tema, señala: *“...En la doctrina, el fenómeno de la violencia familiar se ha explicado como aquel que nace del ejercicio desigual de la autoridad en las relaciones de poder que surgen entre los miembros del núcleo familiar, cuya aplicación se concreta mediante la ejecución cíclica o sistemática de actos que vulneran la integridad física, psicológica o sexual de uno o varios miembros de la familia. Tales actos están dirigidos a mantener un estado de jerarquía frente al receptor y de subordinación del mismo.”* Señala además, que la violencia intrafamiliar tiene tres fases, a saber: *“...La de tensión, la de violencia y la de luna de miel, Dichas fases se repiten cíclica y sistemáticamente. Este proceso lleva necesariamente a que la víctima devalué su propia imagen y su autoestima, lo que producirá en ella una incapacidad emocional y física para enfrentar o resistir las agresiones; para denunciar la violencia y enfrenarla frente a sus familiares, amistades y las propias autoridades. Por esto resulta importante un adecuado y eficiente programa de educación, así como un sistema de información acerca del fenómeno y de las posibilidades legales y asistenciales con que cuenta una víctima de la violencia intrafamiliar.”*<sup>389</sup>.

---

<sup>388</sup> Méndez Luévano, Tanya Elizabeth y Reynoso Orozco, Orlando, *op. cit.*, nota 318, *passim*.

<sup>389</sup> Pérez Contreras, María de Monserrat, *Aspectos jurídicos de la Violencia contra la Mujer*, México, Editorial Porrúa, 2001, pp. 59 y 63.

### **6.1.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Por la amplitud de la naturaleza de la causal, se considera que todos los medios de prueba establecidos por la ley son pertinentes para acreditarla; se debe poner especial atención en cuanto al hecho que se invoca como causa de violencia intrafamiliar, pues si es de índole psicológico, será menester la prueba pericial medica psicológica correspondiente que demuestre tanto el comportamiento agresor del reo, como el daño causado al cónyuge inocente o a sus hijos, así como el efecto dañino, ya sea inmediato o mediato, producido en la víctima.

En cuanto a las agresiones físicas, debe tomarse en consideración que las documentales inherentes a partes médicos de lesiones, no acreditan por si solos la conducta de agresión, sino en todo caso las lesiones que presento la víctima en la data respectiva, por lo que es menester concatenar esta probanza con alguna otra, como la testimonial o la confesional, para acreditar fehacientemente que las lesiones descritas fueron producto de los actos de violencia física del cónyuge agresor<sup>390</sup>. Igual cuidado debe tenerse con las constancias de índole penal, ya se averiguación previa o juicio penal, pues estas tan solo tienen efectos indiciarios en los procesos civiles, por lo que deben de ofertarse otros elementos probatorios que unidos a tales actuaciones produzcan convicción de la certeza del hecho agresivo que se imputa al demandado como causa generadora de la acción de divorcio.

---

<sup>390</sup> [J] 1a./J. 98/2006, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Novena Época, Registro: 173319, Civil, febrero de 2007, p. 277. Divorcio necesario. Cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de injurias graves, corresponde a ambos cónyuges aportar todos los elementos de convicción que permitan al juzgador examinar tanto su existencia como su gravedad.

Todas las pruebas<sup>391</sup> que marca la ley son idóneas para acreditar esta causal, de la misma manera que las presunciones tanto legales como humanas que emerjan de las actuaciones<sup>392</sup>, pues no debemos olvidar que por las características de la causal –como otras mas- se debe atender a la lógica y a la experiencia ya que no es todas las ocasiones es factible exigir pruebas directas de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que dan lugar a la violencia entre los cónyuges, dada la dificultad de que se desarrolle ante testigos y si por sus características, la mayoría de las veces se desarrolla dentro del hogar al amparo de la intervención de terceros, por lo que en estos supuestos el juez debe atender al resultado de las presunciones o indicios que emergen de las propias actuaciones que resultan esenciales, ya que pueden crear convicción en el ánimo del juzgador sobre el caso particular.

Como hemos visto la violencia intrafamiliar, además de causal de divorcio, genera una serie de conductas delictivas, es en resumen un problema que aqueja a nuestra sociedad, y como expresa Antonia de la O. *“...es necesario buscar respuestas a una serie de problemas que se generan en el seno de la familia donde se configuran conductas tales como el maltrato de menores, la violencia física o psicológica entre cónyuges, el abandono de familia, lesiones, injurias, y una serie de conductas antijurídicas que en nuestra comunidad no siempre son denunciadas por parte de la ciudadanía,*

---

<sup>391</sup> [J] Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Octava Época, julio de 1994, p. 626. Injurias, malos tratos y amenazas, testimonial para demostrar la causal de divorcio de.

<sup>392</sup> [J] I.3o.C.643 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, Novena Época, Registro: 171032, Civil, octubre de 2007, p. 3289. Sevicia, amenazas o injurias graves como causa de divorcio. Se acredita con prueba de presunciones.

*ocasionando una percepción de inseguridad y desconfianza hacia las instituciones de procuración y de administración de justicia.”<sup>393</sup>.*

## **6.2 Incompatibilidad de caracteres.**

El término incompatibilidad (o incomunicación) de caracteres, de uso popular y más bien propio del lenguaje jurídico, describe algunos orígenes de los conflictos de la pareja que se explican por motivos psicológicos, ubicados en el campo interpersonal. No conocemos que se hayan precisado a fondo los mecanismos de estos motivos. Ni tampoco conocemos estudios psicológicos completos respecto a la diferencia entre ambos sexos que se puedan encontrar en sus orígenes<sup>394</sup>.

Conforme al diccionario la palabra Incompatibilidad, significa una antipatía de caracteres, diferencia esencial que hace que no puedan asociarse dos cosas. Incompatible; es adjetivo cuya connotación para el caso que nos ocupa es que impide que dos personas estén de acuerdo. La palabra Carácter deviene del griego *kharakter*, de *kharassein*, grabar, y en su esencia significa signo escrito o grabado. También significa un rasgo distintivo, modo de ser de una persona o pueblo, genio de una persona, por su parte característico es la particularidad de una persona o de una cosa que lo hace diferente a los demás.

---

<sup>393</sup> De la O, Antonia, “El bien jurídico tutelado y la conducta típica del delito de violencia familiar en el Estado de Nuevo León”, *Conocimiento y Cultura Jurídica*, UANL-FACDYC-Centro de Investigación de Tecnológica Jurídica y Criminológica, San Nicolás de los Garza, Segunda Época, año 3, núm. 5, enero-junio de 2009, p. 158.

<sup>394</sup> BBC Mundo, Analítica.com, *Incompatibilidad de caracteres*, disponible en <[www.analitica.com/media/9864286.pdf](http://www.analitica.com/media/9864286.pdf)>, página visitada el 17 de noviembre de 2012.



Etimológicamente<sup>395</sup>, el término incompatibilidad se origina en cinco raíces;

*In* - prefijo de significado negativo.

*Com* - prefijo que significa unión.

*Pathos* - raíz griega que significa sufrimiento, patología o sensibilidad.

*Able* - que significa hacer.

*Idad* - sufijo que transforma un término concreto en un concepto abstracto.

En el campo de las relaciones humanas, incompatibilidad significa, basados en la etimología del término, la falta de unión en el sentir, experimentar o sufrir juntos sin posibilidad de acuerdo a través de los recursos naturales.

Esta incompatibilidad puede aplicarse a las relaciones humanas, sobre todo en diversos campos psicológicos. He aquí algunos casos:

En sentido jurídico, De Ibarrola<sup>396</sup> refiere a la incompatibilidad de caracteres “...*en una divergencia constate e insuperable producida entre los cónyuges como consecuencia de su diverso temperamento, de su diversa educación y de sus diversas costumbres...compatibilidad en efecto, significa antipatía de caracteres, diferencias esenciales que hacen que no puedan asociarse dos cosas o que impidan que estén de acuerdo dos personas; la incompatibilidad se debe a la conducta y al modo de ser de ambos.*”.

---

<sup>395</sup> *Ibídem.*

<sup>396</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, pp. 360 y 361.

La suprema corte ha definido la incompatibilidad de caracteres como la intolerancia de los cónyuges, exteriorizada en diversas formas, que revela una permanente aversión que hace imposible la vida en común, que incompatibilidad significa antipatía de caracteres, diferencias esenciales que hacen que no puedan asociarse dos cosas o que impiden que estén de acuerdo dos personas<sup>397</sup>, por lo que es lógico y forzoso reconocer que la incompatibilidad se debe a la conducta y al modo de ser de ambos, y que por ende las causas que la originan radican en los dos cónyuges y no en uno solo, por lo que a ambos debe considerárseles como culpables del divorcio originado por esa causal.

### **6.2.1 Elementos.**

Para que proceda esta causal se requiere, además de la acreditación de la existencia del matrimonio, los siguientes elementos:

- a) Que la parte actora exprese desde el escrito de demanda, con claridad y precisión cuáles son los hechos que la constituyen;
- b) Que la parte accionante manifieste de una manera explícita cuál es el carácter de su cónyuge así como el suyo, de tal manera que de dicha narración se desprenda que cada uno de los cónyuges tiene una personalidad que se opone entre sí;
- c) Que la incompatibilidad provoca la antipatía de caracteres, diferencias esenciales que hacen que no puedan asociarse dos cosas o que impiden que estén de acuerdo dos personas, y que ello haga imposible entre los consortes la vida en común;

---

<sup>397</sup> [J] Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Octava Época, julio de 1994, p. 555. Divorcio incompatibilidad de caracteres como causal de.

- d) Que se haga valer dentro del término a que alude el numeral 410 del Código Civil.
- e) Que se pruebe plenamente la incompatibilidad y sus efectos.

Para que la presente causal proceda es menester que el cónyuge que la hace valer, exprese con claridad y precisión en escrito inicial de demanda cuáles son los hechos que la constituyen, tanto para que el cónyuge demandado esté en posibilidad de formular sus defensas, cuanto para que, en su oportunidad, el juzgador este en posibilidad de poder apreciar si efectivamente se han demostrado, y si por su naturaleza y gravedad hacen imposible la vida en común y justifican la disolución del matrimonio<sup>398</sup>. También se hace necesario que la parte accionante manifieste de una manera explícita cuál es el carácter de su cónyuge así como el suyo<sup>399</sup>, de tal manera que de dicha narración se desprenda y en su momento se acredite plenamente que cada uno de los cónyuges tiene una personalidad que se oponen entre sí y que por sus características, haga imposible entre ambos la vida en común, que dicha incompatibilidad provoca que se presente de manera continua y permanente una aversión que hace imposible su mutua convivencia.

---

<sup>398</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 103-108, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241080, Civil, p. 123. Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 85, p. 95. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de (legislación del estado de Campeche).

<sup>399</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. III, Segunda Parte-1, Octava Época, Registro: 228338, Civil, enero - junio de 1989, p. 290. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de (legislación del estado de Tlaxcala).

Esta causal por su naturaleza, es de tracto sucesivo<sup>400</sup>, ya que se refiere a una situación continua que se da cuando los cónyuges hacen vida en común, y que por ende sería lógico suponer que pierde ese carácter cuando los esposos quedan separados y que en consecuencia es a partir del momento en que se da la separación en que iniciaría el período de caducidad de la acción que señala el numeral 410 del Código Civil; sin embargo se considera que tal interpretación no es aplicable a todos los casos que se presentan, ya que se debe de atender a las características y circunstancias especiales que a cada caso se presenten y que como tal lo hacen diferente de los demás, ya que válidamente se pueden presentar un sin fin de situaciones en las que aunque los consortes no vivan juntos, por el hecho de haber procreado hijos, pueden estar en continuo contacto y comunicación para ventilar y decidir las diversas situaciones que se presentan en la vida cotidiana en relación con sus hijos, y que lógicamente ello les obliga a tener una comunicación permanente y continua, misma que al igual que cuando vivían juntos, puede seguir generando una incompatibilidad de caracteres, pues ésta no cesa por el hecho de ya no cohabitar, sino que al contrario, en muchas ocasiones tales discordancias tienden a acrecentarse y se endurecerse, y continua siendo un motivo central de desavenencias entre ellos a grado tal, que justamente continúan viviendo por separado sin estimar ni siquiera en forma remota el reintentar la vida en común; y así por ejemplo, puede presentarse el caso de que los cónyuges aunque no vivan juntos, por cuestiones de naturaleza familiar, económica, social, laboral etcétera, su comunicación tenga que ser continua y permanente y no por el hecho de ya no cohabitar, ser concordantes en sus puntos de vista, sino que tal convivencia continua generando dicha incompatibilidad de caracteres, y provocando en ellos discordancias que es en si el motivo principal por el cual ambos estiman que es mejor el permanecer viviendo cada cual por su lado,

---

<sup>400</sup> [J] Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, marzo de 1992, p. 187. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de, cómputo del término para la caducidad de la acción (legislación del estado de Tlaxcala).

sin pretender reintentar una vida en unión; en resumen, si permanecen en su actitud de vivir separados, con motivo de la incompatibilidad de caracteres, es evidente que esta causal subsiste y permanece. Todo ello, nos conduce a estimar que según las circunstancias del caso que se presente, se tendrá que analizar si esta causal de divorcio cesó en el momento en que dejaron de cohabitar los consortes o bien, a la fecha de la presentación de la demanda se encuentra en vigencia, ello para estar en posibilidad de estimar si se presenta o no la caducidad de la causal que señala el numeral 410 del Código Civil.

### **6.2.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Por la naturaleza de la causal, es evidente que la prueba idónea para acreditarla sea la pericial psicológica conductual o de características de personalidad de ambos cónyuges, en la que además se determine por los peritos si se presenta o no la incompatibilidad, el grado de la misma, y si ella produce la imposibilidad de la vida en común. Empero, no podemos soslayar que otras probanzas, como la testifical, la confesional, las presunciones tanto legales como humanas, de forma concatenada pueden crear convicción en el ánimo del juzgador para decretar su procedencia.

### **6.3 Negativa de proporcionar alimentos.**

Como puntualización, mencionamos el texto de Rojina Villegas<sup>401</sup>, quien dice que, en principio, el incumplimiento de esta obligación que es necesaria al estado matrimonial, no es causa de divorcio si hay la posibilidad de que el cónyuge acreedor pueda embargar bienes para que el cónyuge

---

<sup>401</sup> Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, p. 380.

deudor cumpla con su obligación alimentaria; sólo que exista esa imposibilidad, habrá causa de divorcio.

Conforme a diversos criterios emitidos por el Poder Judicial Federal, esta causal, se actualiza con la acreditación de la omisión de ministrar alimentos por parte del reo<sup>402</sup>, ya que atento a la redacción que prevalece en este momento, es con la intención de eximir al acreedor alimentario de promover requerimiento alguno y no solamente en forma limitada al de tipo judicial. De la misma manera, la falta de ministración alimenticia, como causal de divorcio prevista en la fracción XIV del artículo 404 de la Ley Civil del Estado, al referirse a una obligación de actuar y hacer, es indudable que la demostración de que sí se proporcionan es a cargo del demandado, porque no pueden demostrarse hechos negativos, como en el caso aquél opone como medio de defensa que sí los proporcionaba.

El artículo 404 en su fracción XIII del Código Civil establece esta causal de divorcio, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos. Para el caso de que no se alegue un incumplimiento total, sino parcial, que se hace consistir en que el demandado no da suficiente dinero a la actora<sup>403</sup>, ese hecho basta para que se surta la hipótesis aludida, toda vez que, los alimentos de conformidad con el artículo 439 del Código Civil comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad y respecto de los menores, los alimentos comprenden además, los gastos necesarios para la educación

---

<sup>402</sup> [J] VI.2o. J/206, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 55, Octava Época, Registro: 218873, Civil, julio de 1992, p. 49. Divorcio. Alimentos. Negativa injustificada a proporcionarlos como causal de. (legislación de Puebla).

<sup>403</sup> [J] IX.1o.17 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, junio de 1997, p. 718. Alimentos, pagos esporádicos realizados por concepto de. No acreditan el cumplimiento de la obligación alimenticia (legislación del estado de San Luis Potosí).

primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales; además de que, la institución del matrimonio es de orden público, por lo que la sociedad está interesada en su mantenimiento y sólo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo matrimonial; de ahí que en los divorcios necesarios sea preciso que la causal invocada quede plenamente especificada y se acredite la negativa del obligado, a fin de que el juzgador pueda apreciar la gravedad del incumplimiento que ponga de manifiesto el desprecio, desapego, abandono o desestimación al cónyuge actor o a sus hijos, y que haga imposible la vida en común; gravedad que no se justifica cuando en forma imprecisa se alega que la parte demandada no ha cumplido en su totalidad con la ministración de alimentos.

Ahora bien, para invocar esta causal al promoverse el juicio de divorcio necesario, es suficiente con referir que los alimentos no se proporcionan debidamente para cubrir las necesidades respectivas, sin que sea menester señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar, que son exigencia en casi la totalidad de las causales, pues es evidente que por sus carácter de cotidiano estos requisitos no son necesarios.

Es importante distinguir esta causal como acción de divorcio y de petición de alimentos entre cónyuges, ya que una y otra tienen procedimientos diversos y reglas propias de comprobación, diferencias que provienen fundamentalmente de que persiguen distintas finalidades en una y otra, pues mientras la primera destruye el matrimonio la segunda tiende a conservarlo. El concepto objetivo de diferenciación radica en el grado, calidad o gravedad del incumplimiento. Así, cualquier falta aunque sea mínima al deber de proporcionar alimentos, funda la acción de petición de alimentos o de aseguramiento en contra del cónyuge incumplido; en cambio, los elementos de la causal de divorcio especificada en la fracción de mérito, son

en primer lugar, la negativa injustificada a cumplir con las obligaciones de ministrar los alimentos, y en segundo, que ese incumplimiento tenga la gravedad suficiente para poner de manifiesto el desprecio, desapego, abandono o desestimación al cónyuge actor y a sus hijos, que hagan imposible la vida en común.

De conformidad a lo previsto en los artículos 432, 433, 434 y 442 la Ley Sustantiva Civil del Estado de Jalisco, los alimentos comprenden un deber recíproco, son personales e intrasmisibles, corriendo dicha obligación a cargo de los padres hasta que sus hijos alcancen la mayoría de edad o llegando a ella sean incapaces, y en forma recíproca entre los cónyuges.

### **6.3.1 Elementos.**

Por tanto en términos de los numerales antes citados relacionados con el artículo 694 y correlativos del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, para acreditar la obligación alimentaria, debe acreditarse los siguientes elementos:

- a) La relación de parentesco entre acreedor y deudor alimentista; y,
- b) Que se justifique la negativa a proporcionarlos por el deudor alimentista.

Esta causal es la invocada con mayor frecuencia, según se dejó en claro en el capítulo primero. En mi opinión, ello se debe a que es patente que por sus características requiere un mínimo de prueba, ya que el derecho de recibir alimentos se funda en derecho establecido por la ley, por lo que únicamente se debe acreditar que es titular del mismo y que el obligado se



niega a cumplir con ello<sup>404</sup>, lo que en los casos de divorcio se justifica con la exhibición de las partidas del registro civil inherentes al acta de matrimonio y de registro de nacimiento de los hijos procreados, que en todo caso el primer documento resulta ser fundatorio de la acción y los segundos por lo general se anexan desde la demanda.

La causal como se ha indicado procede pese a que se justifique por el reo que cumple parcialmente, ya que la obligación alimentaria no es ni debe ser por etapas o periodos, sino que por su propia naturaleza es continua, es una obligación de tracto sucesivo y no opera en ella la caducidad<sup>405</sup>. Si atendemos a que por las características de la causa, es y corresponde al acreedor alimentario el justificar que sí cumple de manera continua, permanente y debida con todos y cada uno de los conceptos que integran los alimentos, conforme lo establece el numeral 439 del Código Civil, o sea, que los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son: la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad; que en relación con los menores de edad, los alimentos comprenden además de los anteriores conceptos, los gastos para la educación de jardín de niños, primaria y secundaria del acreedor alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, al igual que las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales; por lo que si no se justifica por el demandado que hubiera cumplido en forma continua y

---

<sup>404</sup> [J] III.1o.C.100 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XI, Novena Época, Registro: 192537, Civil, enero de 2000, p. 992. Divorcio. Negativa injustificada a suministrar alimentos (legislación del estado de Jalisco).

<sup>405</sup> [J] 1a./J. 18/95, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Novena Época, Registro: 200439, Civil, diciembre de 1995, p. 273. Divorcio, por incumplimiento de ministrar alimentos, no requiere término para su ejercicio. (legislación del estado de Puebla).

permanente, es evidente que se acredita la procedencia de esta causal de divorcio, ya que en esta causal especifica la carga de la prueba, en cuanto a su cumplimiento, corresponde al reo.

### **6.3.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Los medios de prueba necesarios e indispensables para acreditar la procedencia de la causal en comento, corresponden a las partidas del registro civil relativas al matrimonio y al registro de nacimiento de los hijos, en tanto que la negativa del cónyuge demandado a proporcionar alimentos puede acreditarse con pruebas como la testimonial o la confesional. Por otra parte no debemos olvidar que acorde a las características<sup>406</sup> de la obligación inmersa en la causal, corresponde al demandado, en su carácter de deudor alimentista, acreditar el debido cumplimiento de su obligación alimentaria hacia sus acreedores alimentarios, pues de lo contrario se estaría imponiendo indebidamente al acreedor alimentista la carga de probar un hecho negativo, lo cual iría en contravención de lo dispuesto por el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que dispone: "El que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelve la afirmación expresa de un hecho."

Se debe precisar qué cosa diversa acontece para el caso de la fijación de alimentos, pues en este supuesto deben de ofertarse todos los medios de prueba que establece la ley y que resulten idóneos para acreditar las necesidades de los acreedores alimentarios y las posibilidades económicas del deudor.

---

<sup>406</sup> [J] 1a./J. 16/99, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IX, Novena Época, Registro: 194070, Civil, mayo de 1999, p. 100. Divorcio. Incumplimiento de la obligación alimentaria. Carga de la prueba (legislación del estado de Puebla).

#### **6.4 Acusación calumniosa por un cónyuge contra el otro.**

Señala Rojina Villegas<sup>407</sup>, que para que se dé la acusación calumniosa de un cónyuge contra el otro, es necesario que la acusación sea grave, por imputar calumniosamente un cónyuge al otro, un delito que merezca una pena de prisión mayor de dos años, en este caso el cónyuge calumniado, previo juicio penal que pronuncie sentencia declarándole inocente, tendrá comprobada plenamente su causa de divorcio.

Para que esta causal de divorcio se presente, se requiere que concurren las circunstancias siguientes: Que uno de los cónyuges acuse al otro de ciertos hechos que pueden ser delictivos, a sabiendas de que no son ciertos o de que este no los cometió, y con el fin de dañarlo en su reputación, y en la consideración que merece de la sociedad, hechos que tienen que referirse a actos que dentro de la ley penal, estén considerados como delito, y que ese delito tenga señalada una sanción mayor de dos años de prisión.

Como se indico con antelación por decreto número 21917/LVIII/07 de fecha 23 de octubre del año 2007, se derogan los capítulos II, III y IV del Título Décimo Quinto, así como los artículos 198, 199, 200, 201, 202, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del art. 203 y el art. 204 del Código Penal, lo que genero que se derogaran entre otros, el delito de calumnias, sin embargo, se estima necesario recurrir al concepto de dicha figura para tener una noción de su connotación jurídica.

Sobre la calumnia, el numeral 201, establecía que se impondrán de seis meses a dos años de prisión o multa por el importe de dos a ocho días de salario, al que impute a otro falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso, o inocente la persona a quien se le atribuya. Igual sanción se impondrá

---

<sup>407</sup> Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, p. 380.

al que, para hacer que un inocente aparezca como culpable de un delito, ponga en las vestiduras del calumniado, en su casa, en su vehículo, o en cualquier lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicio o presunciones de responsabilidad.

La acción de calumniar, se enfoca en cuanto a que una persona impute a otro falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso, o inocente la persona a quien se le atribuya, lo mismo en cuanto aquel que para hacer que un inocente aparezca como culpable de un delito, ponga en las vestiduras del calumniado, en su casa, en su vehículo, o en cualquier lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicio o presunciones de responsabilidad.

Como excepción a la regla se debería de atender que aunque se acredite la inocencia del calumniado, o que resultaren falsos los hechos en que se apoyo la denuncia, la queja o la acusación, no se castigaría como calumniador al que las hizo, si probare plenamente haber tenido causas bastantes para incurrir en error; o bien, que tampoco se aplicaría sanción alguna al autor de una denuncia, queja o acusación, si los hechos que en ella se imputan son ciertos, aunque no constituyan un delito y él, errónea o falsamente, les haya atribuido ese carácter.

De la misma manera las disposiciones derogadas indican que aunque se acredite la inocencia del calumniado, o que son falsos los hechos en que se apoya la denuncia, la queja o la acusación , no se castigará como calumniador al que las hizo, si probare plenamente haber tenido causas bastantes para incurrir en error y que tampoco se aplicaría sanción alguna al autor de una denuncia, queja o acusación, si los hechos que en ella se imputan son ciertos, aunque no constituyan un delito y él, errónea o falsamente, les haya atribuido ese carácter.

Esta causal de divorcio, es de realización instantánea, pues tiene su origen en una sola conducta del cónyuge acusador, en consecuencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 410 del Código Civil, debe de ejercerse dentro de los seis meses siguientes a partir de la fecha en que el afectado tuvo conocimiento de los hechos en que fundó su demanda, de no ser así, se actualiza en su perjuicio la caducidad<sup>408</sup> de la acción.

De la misma manera, no es necesario que ésta acusación dé lugar a la instrucción de un proceso y al pronunciamiento de una sentencia absolutoria del acusado, ya que es factible que la acusación se archive por el Ministerio Público y no se consigne a la autoridad judicial o bien se obtenga una sentencia absolutoria<sup>409</sup>, o sea que en todo caso, es independientemente la suerte que corra la acusación desde el punto de vista de la materia penal; ya que esta sí puede en un momento dado tener la característica de calumniosa para los efectos del divorcio, atento a que la apreciación de sí la acusación es o no calumniosa corresponde al juez civil o familiar, según sea el caso, por lo que el juzgador deberá de apreciar en cada asunto particular, tomando en cuenta que la imputación que hace un cónyuge al otro de haber cometido un delito que merezca pena mayor de dos años de prisión, se haya hecho a sabiendas de que es inoperante, que esté inspirada en el propósito de dañarlo en su reputación, y en la consideración social que merece, circunstancias todas estas que conducirán a estimar si existe o no una odiosidad y de una falta de estimación entre los cónyuges que haga imposible la vida en común. Por lo tanto debe quedar fehacientemente demostrado que

---

<sup>408</sup> [J] Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIII, Octava Época. Instancia, marzo de 1994, p. 324. Causal de divorcio prevista en la fracción XIII del artículo 263 del Código Civil. Debe ejercerse dentro de los seis meses siguientes a partir de la fecha en que tuvo conocimiento el afectado de los hechos de la acusación, so pena de que caduque la acción en su perjuicio. (legislación del estado de Chiapas).

<sup>409</sup> [J] Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XII, Octava Época, julio de 1993, p. 203. Divorcio, acusación calumniosa como causal de.

la parte querellante, a sabiendas de que su cónyuge es inocente por ser falsas las imputaciones, procede en su contra, pues sólo de esa manera se acreditará la intención del denunciante de dañar a su cónyuge en su reputación o en la consideración social que merece, lo que tendrá como consecuencia la imposibilidad de la vida en común por parte de los consortes. Para que se estime como calumniosa la acusación, se debe acreditar que el calumniador obró a sabiendas de que procede contra su víctima sin contar en su apoyo con ningún elemento de responsabilidad efectiva, imputable al calumniado, dejándose guiar tan solo por su malevolencia, atento a que lo que se castiga en la acusación calumniosa, no es la queja o la denuncia, sino la intención dolosa del que la hace con el conocimiento de la inocencia del que se propone perjudicar<sup>410</sup> y no puede imponerse pena alguna al autor de la calumnia aunque se compruebe la inocencia del acusado, si se probare plenamente que el acusador tuvo motivo bastante para incurrir en error.

La circunstancia de que se obtenga un auto de libertad auto de libertad por falta de elementos para procesarlo<sup>411</sup>, o bien que se haya concedido al actor el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión, no resulta suficiente para establecer la existencia de la intención dolosa del presunto calumniador, porque ese auto es con la reserva de proceder nuevamente en contra del indiciado, si aparecen pruebas que lo ameriten, y por ello no constituye cosa juzgada, y aun en el caso de que obra una sentencia absolutoria, de ello no puede deducirse que la acusación sea calumniosa o que el consorte se haya conducido con dolo, pues como se ha

---

<sup>410</sup> [J] XX. J/10, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Novena Época, Registro: 203910, Civil, noviembre de 1995, p. 366. Divorcio. Acusación calumniosa como causal de, para que opere se necesita acreditar en el juicio que la denuncia se hizo a sabiendas de que era inoperante y con el único propósito de dañar al cónyuge en su reputación. (legislación del estado de Chiapas).

<sup>411</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 9, Cuarta Parte, Séptima Época, p. 27. Divorcio, calumnia como causal de. Influencia del auto de libertad por falta de méritos.

indicado lo que tiene que justificarse en el proceso civil es la intención dolosa del denunciante o del querellante, por lo que debe ser examinada por el juzgador a la luz de la denuncia, de la querella o de la acusación y demás pruebas conducentes, para conocer el móvil de la imputación.

#### **6.4.1 Elementos.**

De la interpretación armoniosa de este precepto, para que se surta la causal de divorcio que nos ocupa, se requiere que concurren las circunstancias siguientes:

- a) Que uno de los cónyuges acuse al otro, de actos que dentro de la ley penal, estén considerados como delito;
- b) Que tal acusación sea a sabiendas de que tales hechos no son ciertos o de que el cónyuge no los cometió;
- c) Que ello sea con la intención de dañarlo en su reputación, y en la consideración que merece de la sociedad;
- d) Que el delito que se imputa tenga señalada una sanción mayor de dos años de prisión.

#### **6.4.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Por las particularidades de la causal se hace patente que es de difícil acreditación, motivo por el cual es factible que su ejercicio sea casi nulo, lo que se justifica con el resultado de la estadística analizada en el capítulo primero. Si atendemos al sentido literal de la norma, es claro que como

prueba apta es la documental inherente a la denuncia presentada por el cónyuge en contra del otro, ante el Ministerio Público, de cuyo contenido debe desprenderse, que la acusación corresponde a actos que la ley penal reputa como delito, y que este tenga señalada una sanción mayor de dos años de prisión. La dificultad del resto de los elementos de la causal, que corresponde al punto de la calumnia y la intención de dañar en su reputación al consorte en la consideración que merece de la sociedad, puede ser acreditada con medios de prueba directos o indirectos, por ende es factible aportar cualesquiera de las probanzas que señala la ley procesal<sup>412</sup>; sin olvidar que la ley quiere que para que sea calumniosa la acusación, el calumniador obre a sabiendas de que procede contra su víctima, sin contar en su apoyo con ningún elemento de responsabilidad efectiva, imputable al calumniado, dejándose guiar tan sólo por su espíritu de reconocida malevolencia, que lo lleva a discurrir imputaciones y a urdir apariencias condenatorias para el calumniado, en el entendido que lo que se castiga en la acusación calumniosa como causal, no es la queja o denuncia, sino la intención dolosa del que la hace con el conocimiento de la inocencia del que se propone perjudicar.

### **6.5 La comisión de un delito por uno de los cónyuges.**

La extinta tercera sala del más alto Tribunal del País<sup>413</sup> ha reiterado que para establecer cuales delitos se consideran infamantes, se debe remitir a la fracción IV del artículo 95 constitucional, quien revela el criterio del Constituyente en esta materia al señalar en su segundo párrafo como

---

<sup>412</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. XXXVII, Cuarta Parte, Sexta Época, p. 55. Divorcio, calumnia como causal de.

<sup>413</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 121-126, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 240900., Civil, p. 21. Informe 1979, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 28, p. 25. Divorcio, delitos como causales de, previstas en las fracciones XIV y XVI del artículo 425 del Código Civil del estado de Sonora.



infamantes, los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, y que ello debe ampliarse con el delito de traición a la patria señalado en el último párrafo del artículo 108 de la Carta Magna.

Sobre las penas infamantes, Pallares, refiere:

*“...Las penas infamantes están prohibidas por el Art. 22 de la Constitución Gral. De la Rep., y de esta circunstancia pudiera inferirse que tampoco hay delitos infamantes ante la ley. En el Cód. Penal no existe ninguna norma de la cual pueda basarse la calificación de esta especie de delitos. Cabe preguntar: ¿qué debe entenderse por delito infamante?*

*De acuerdo con los diccionarios, la palabra infamia significa: descrédito, deshonor, vileza en cualquier línea, acción infame, palabra sumamente injuriosa. De atenderse, por tanto al mero sentido gramatical de las palabras “delito infamante”, que emplea la fracción XIV que se comenta, deberá considerarse como tal el que tenga algunas de las notas mencionadas o sea el delito que causa deshonor, descrédito, vileza en cualquier línea, etc., pero la ciencia del derecho no se reduce a conocer, interpretar y aplicar gramaticalmente las normas jurídicas, por lo que queda en pie el problema de la debida determinación de las que han de considerarse como delitos infames. Por fortuna, el legislador ha realizado esta tarea en el artículo 95 de la Constitución Gral. de la República, que considera como tales, “robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena”.<sup>414</sup>*

---

<sup>414</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 90.

El delito infamante puede consistir en cualquier infracción a la ley penal cometida por uno de los cónyuges, ya sea en perjuicio del otro o de persona extraña al matrimonio. Requiere además, que se sancione con una pena mayor de dos años de prisión, por lo que para que esta causal proceda es evidente que también tiene que justificarse, que previamente se dicto resolución por la autoridad judicial penal correspondiente, que existe una sentencia ejecutoriada de naturaleza condenatoria en la cual se le hubiera impuesto una pena de prisión mayor de dos años<sup>415</sup>.

Antes de la reforma a la causal que se consigna en la fracción XVII, podía entenderse que la causal se generaba porque el delito en cuestión se hubiese cometido por un cónyuge hacia el otro, sin embargo, atento a la adicción a la fracción referida, debemos considerar que la que nos ocupa solo corresponde cuando la víctima del delito es un tercero.

#### **6.5.1 Elementos.**

En consecuencia, para que proceda esta causal, se debe acreditar, además del matrimonio, los siguientes elementos:

- a) Que el consorte demandado cometió un delito, en perjuicio de persona extraña al matrimonio,
- b) Que dicho delito sea de los considerados infamantes,

---

<sup>415</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 85, Cuarta Parte, Séptima Época, p. 35. Divorcio, delito cometido por uno de los cónyuges como causal de, prevista en la fracción XIV del artículo 323 del Código Civil. (legislación del estado de Guanajuato).

- c) Que existe por resolución judicial, sentencia ejecutoriada de naturaleza condenatoria, y
- d) Que se hubiera impuesto como sanción de una pena de prisión mayor de dos años.

Sobre la causal en comento, Acosta Romero, señala:

*“...En cuanto a que el delito no sea político, recordando a Olea y Leyva, ministro de la Suprema Corte de México que funcionó en el año de 1946, resulta una cuestión muy espinosa, saber donde comienza lo político y dónde acaba lo jurídico; o dónde comienza lo jurídico y dónde acaba lo político. Tratar de formular un concepto satisfactorio, válido para todos los pueblos, del delito político es una empresa difícil. El carácter que un Estado le otorga a determinada conducta como delito político es muy circunstancial, y puede no ser calificado como tal en otro Estado.*

*Por otra parte es muy frecuente que el ofensor refugiado en otro Estado alegue que el Estado requirente lo persigue por delitos de carácter exclusivamente político, para evitar con ello su extradición, y eventualmente acceder al asilo diplomático o territorial, si el Estado que lo acogió, momentáneamente, está obligado por algún tratado o convención a otorgarlo.*

*Por otro lado, algunas conductas antijurídicas en cuanto a delitos comunes, pueden conjugarse con delitos políticos. ¿A qué conducta se le va a dar prioridad?, ¿Qué tratamiento le va a dar el juez a aquella persona que ha delinquido comúnmente y al propio tiempo ha cometido un delito político? ¿Si se atenta contra el jefe de un Estado o contra un aspirante a la Presidencia de la República, debe ser considerado ese atentado como un delito político o como un crimen común?*

*Doctrinalmente se han considerado como delitos políticos a aquellos delitos contra la seguridad de la nación, como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración. Sin embargo, algunos países excluyen del catálogo de delitos políticos al terrorismo.*

*Si el artículo 22 constitucional prohíbe las penas de mutilación y de infamia, y la infamia es precisamente el deshonor, el desprestigio público, producto de una sentencia, en consecuencia, surge una antinomia en el texto constitucional, porque delitos infamantes, en este caso, serían todos aquellos que han sido debidamente comprobados y a los que recaiga una sentencia condenatoria, debido a lo deshonroso que resulta para una persona al haber sido sentenciado con una pena de prisión. Por lo tanto, para los efectos de la fracción XIV del artículo 267 del Código que analizamos, se podría asegurar que delitos infamantes son todos, con exclusión de los políticos, que traigan aparejada una condena de prisión mayor de dos años. Sin embargo, la Suprema Corte, en una interpretación torcida de la fracción IV del artículo 95 constitucional –ya que este precepto sólo se refiere a los delitos que hayan cometido los aspirantes a ser electos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, restringe nuestro criterio al considerar sólo como delitos infamantes los del fraude, falsificación, abuso de confianza y otros que lastimen seriamente la buena fama en el concepto público, y agrega uno más, que doctrinalmente se considera como delito político; traición a la patria, al tenor de la siguiente tesis: DIVORCIO, CAUSAS PREVISTAS POR LAS FRACCIONES XIV Y XVI DEL ARTÍCULO 425 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA.<sup>416</sup>*

---

<sup>416</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, pp. 268, 269 y 270.

La doctrina estima como delitos infamantes, los que se encuentran los contenidos en el Título Décimo Quinto, llamados delitos contra el honor y que anteriormente correspondían a los golpes simple, difamación y calumnias, sin embargo atento a que los dos últimos fueron derogados y que el primero que está en vigor, su sanción es menor a dos años de prisión, tiene como resultado que no se configure la causal.

De la misma manera, es fácil advertir que la causal nace al momento en que la sentencia penal respectiva, causa ejecutoria y que el cónyuge se da cuenta de ello, por lo que en todo caso, el termino para que no opere la caducidad de la causal, dependerá de estos factores; igualmente se debe atender a que la condena corresponde a sufrir pena de prisión mayor de dos años, por una conducta antisocial específica, mas no puede generarse con la suma de otro delito cometido por el cónyuge tiempo después<sup>417</sup> o de manera separada, ello atento a que en el divorcio la interpretación es estricta.

#### **6.5.2 Medios de prueba para su acreditación.**

Por la peculiaridad de la causal, al igual que otras, solo es factible acreditarla con la documental publica que corresponde a las actuaciones judiciales, específicamente la sentencia definitiva y el auto que la declara ejecutoriada, del proceso penal en donde se condene al cónyuge por la comisión de un delito, que este sea de los estimados infamantes, y que la sanción haya sido con pena de prisión mayor de dos años. El resto de las pruebas serán inconducentes.

---

<sup>417</sup> [J] Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil el Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación. 181-186, Sexta Parte, Séptima Época, p. 72. Divorcio, delito infamante como causal de (fracción XIV del artículo 267 del Código Civil) no se configura sumando penas menores.

## **6.6 Hábitos de juego, de embriaguez o uso de drogas.**

Acota Rojina Villegas: *“...en esta causal no se está en la misma hipótesis de las enfermedades, pues en esta causal estamos en presencia de vicios que implican indiscutiblemente hechos ilícitos, hechos imputables en los que hay culpabilidad y que se separan de los delitos o de los hechos inmorales.”*<sup>418</sup>.

Si atendemos al contenido literal de la causal, esta implica tres supuestos diversos, por lo que se atenderá a cada uno de ellos en forma específica.

### **6.6.1 Elementos en cuanto al hábito de la embriaguez.**

Para que proceda esta causal de divorcio en esta modalidad, se debe de acreditar de manera plena, los siguientes requisitos:

- a) Que el consumo de bebidas alcohólicas no es tan sólo ocasional o esporádico, sino habitual, es decir, por costumbre: hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie;
- b) Que ese consumo habitual de bebidas alcohólicas no sólo es moderado, sino que es abusivo, de tal manera que provoque embriaguez, es decir borrachera, perturbación pasajera del uso racional de los actos volitivos, dimanada de la abundancia con que se ha bebido vino u otro licor; enajenación de ánimo;
- c) Que como consecuencia de este hábito, se amenaza o se causa la ruina de la familia, o bien constituye un continuo motivo de desavenencias conyugales, pues no basta que existan desavenencias aisladas u ocasionales, sino que debe haber una mortificación o

---

<sup>418</sup> Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, p. 385

continúa desavenencia en el hogar entre los cónyuges, que realmente haga la vida imposible entre ellos.

Por otro lado, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en un reciente informe reconoce que en un 25% de los problemas de maltrato a la madre y desavenencias conyugales, se debe al alcoholismo en el marido. Cuando una madre o padre es alcohólico, el DIF los canaliza a instituciones donde los puedan atender, ya sea por alcoholismo o farmacodependencia. El DIF asegura que también se dan casos, aunque en un porcentaje menor a los padres, de madres alcohólicas. La falta de empleo, la promiscuidad y la carencia de ingresos orillan a los cónyuges al alcoholismo, arrastrando con ese vicio a los hijos en sus disputas y desavenencias conyugales.<sup>419</sup>

#### **6.6.2 Elementos en los hábitos de juego.**

Para la procedencia de esta causal de divorcio en esta modalidad, se debe de acreditar de manera plena, los siguientes requisitos:

- a) que la parte demandada tenga el hábito del juego,
- b) Que tal práctica no sea ocasional o esporádica, sino habitual por repetición de actos de la misma especie
- c) Que como consecuencia de esta conducta habitual, se amenaza o se causa la ruina de la familia, o bien constituye un continuo motivo de desavenencias conyugales, pues no basta que existan desavenencias aisladas u ocasionales, sino que debe haber una mortificación o continúa desavenencia en el hogar entre los cónyuges, que realmente haga la vida imposible entre ellos.

---

<sup>419</sup> Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 54, p. 271.

El hábito del juego, representa un vicio o reiterada práctica del juego a que se dedique la persona de tal manera que no ejecute otras actividades tendientes a adquirir lo necesario para el sostenimiento del hogar y de su familia, así como la circunstancia de que dicha conducta o actos ejecutados al practicarse el juego, amenazara causar la ruina de la familia y que como consecuencia de ese hábito o vicio, viviera el matrimonio en una continua desavenencia conyugal. Por lo que al igual que la anterior, no es bastante el que se presentes desavenencias conyugales aisladas o en una o varias ocasiones, sino que debe haber una mortificación o continua desavenencia en el hogar entre los cónyuges, que realmente haga imposible la vida de los consorte y su familia<sup>420</sup>.

#### **6.6.3 Elementos sobre el uso indebido y persistente de drogas enervantes.**

- a) Que el uso indebido y persistente de drogas enervantes, no se presente de manera ocasional o esporádica, sino que sea persistente, duradero, es decir, de manera constante.
- b) Que ese uso rutinario de drogas enervantes, sea indebido y con fines no terapéuticos; o sea que la sustancia de que se usa, sea de las consideradas indebidas, por lo que deberá especificarse y acreditarse cuál es la sustancia que se utiliza por el demandado, y que además su consumo no se presente como resultado de fines curativos, sino ajeno a cuestiones de tal naturaleza.
- c) Que como consecuencia de ese uso indebido y persistente de drogas enervantes, bien se amenaza o se causa la ruina de la familia, o bien constituye un continuo motivo de desavenencias conyugales, pues no basta que existan desavenencias aisladas u ocasionales, sino que debe tener como consecuencia el que exista una mortificación o

---

<sup>420</sup> [J] Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Cuarta Parte, Sexta Época, p. 167. Divorcio, hábito de juego como causal de. (Legislación de Nuevo León).



continua desavenencia en el hogar entre los cónyuges, que realmente haga la vida imposible entre ellos.

En un primer término, cuando se ejercita esta causal en cualquiera de sus tres modalidades, la parte demandante debe expresar los hechos invocados como constitutivos de la acción relativa a la demanda de divorcio necesario, por lo que es menester que se expresen en forma clara y concisa las circunstancias necesarias de lugar, tiempo y modo integradoras de la conducta reprochada a la parte demandada, y que consistan ya sea en su hábito de embriaguez, de juego o bien de uso de drogas enervantes con fines no curativos, que hace que el consorte actúe con agresividad; por lo que si sólo se aducen hechos ambiguos e imprecisos que no configuran los concretos y necesarios para la procedencia de la casual invocada, es evidente que el juzgador carecerá de elementos de peso que pudiera determinar la procedencia de la acción<sup>421</sup>, por lo que es necesario que desde el escrito inicial de demanda se expresen tales circunstancias.

De la misma manera, para la procedencia de esta causal de divorcio, es imprescindible demostrar no sólo la existencia del vicio de embriaguez, del juego o del abuso de drogas, sino su habitualidad<sup>422</sup>, lo que corresponde a la reiterada práctica de lo mismo y que con ello se amenace causar la ruina de la familia o constantes desavenencias conyugales; por lo que no es suficiente que se acredite sólo su existencia y menos que se ingieran bebidas

---

<sup>421</sup> [J] Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. VI, Segunda Parte-2, Octava Época, julio a diciembre de 1990, p. 518. Divorcio, hábito de la embriaguez como causal de, deben expresarse las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la conducta.

<sup>422</sup> [J] Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación. I, Segunda Parte-1, Octava Época, enero a junio de 1988, p. 270. Divorcio, embriaguez como causal de. Además de su habitualidad, debe justificarse que amenaza la ruina de la familia.

embriagantes o drogas de manera esporádicamente o el juego aislado, sino además debe justificarse que tal conducta cause o amenace la ruina o inestabilidad de la familia y que como consecuencia se haga imposible la vida entre los consortes<sup>423</sup>.

La clasificación de las denominadas drogas enervantes, podemos encontrarlas en el artículo 234 de la Ley General de Salud.<sup>424</sup>

Deben destacarse algunas hipótesis que pueden presentarse, en el caso de que uno de los cónyuges adolezca de una o más de estas adicciones y que por su particularidad de hábito, es de tracto sucesivo, sin embargo puede darse el supuesto de que la persona busque la corrección a su mal y logre salir adelante, en esta hipótesis se considera que la causal si no se hace valer en forma oportuna, en ella opera la caducidad. Dicho en otras palabras, si la persona estuvo en tratamiento para su cura y deja atrás la adicción, no puede el cónyuge hacerla valer sino dentro de los seis meses siguientes so pena de que la misma se declare caduca. Cosa diversa, en el supuesto de que no logre la rectificación de su conducta o bien en aquellos sujetos que no han hecho esfuerzo alguno para dominar su inclinación viciosa, pues será evidente que se trata de un vicio incorregible y por supuesto se presenta la vigencia de la causal.

Sobre los supuestos que conforman esta causal, Pallares, refiere:

---

<sup>423</sup> [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. 145-150, Sexta Parte, Séptima Época, Registro: 250842, Civil, p. 106. Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 16, p. 339. Divorcio, hábito de la embriaguez como causal de.

<sup>424</sup> Véase, Ley General de Salud, *Diario Oficial de la Federación*, 24 de abril de 2013, art. 234.

*“...El juego que menciona esta norma ha de ser de los llamados juegos de azar, porque son los que, por las pérdidas económicas que producen, causan la ruina de la familia. Tal era por lo menos la interpretación que durante muchos años se dio a ese vocablo, pero cabe observar que también los deportes, cuando dan nacimiento a un verdadero vicio, pueden ser causa tanto de los disgustos conyugales como de la ruina de la familia.*

*El vicio de la embriaguez degenera de tal modo al que lo tiene, que por sí solo convierte a su víctima en un ser inepto para cumplir sus obligaciones familiares. Además, el ejemplo que da el dispsómano (Sic.) a sus hijos, es funesto, porque con frecuencia se entregan también a dicho vicio. Agréguese a lo anterior la herencia patológica que reciben los hijos engendrados por los ebrios consuetudinarios, y se comprenderá la sabiduría de la norma que se analiza.*

*Otro tanto puede decirse del uso indebido de las drogas enervantes, pero cabe censurar al legislador en la limitación formulada respecto de ellas que consiste en que dicho uso únicamente será causa de divorcio cuando amanece producir la ruina de la familia u origine frecuentes disgustos conyugales. El autor piensa que el drogadicto no puede cumplir ni como esposo ni como padre, por lo cual debería suprimirse la mencionada condición.<sup>425</sup>*

#### **6.6.4 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

Aun cuando en términos generales la prueba idónea para acreditar el hábito de embriaguez o de uso de drogas enervantes y aun la de adicción al juego, sería la prueba pericial médica respectiva así como la pericial

---

<sup>425</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, pp. 93 y 94.

psicológica<sup>426</sup>, también es verdad, que en cuanto a la embriaguez o uso de drogas, no es el único medio de convicción con el que puede demostrarse ello, en vista de que al ser el hábito el modo especial de conducirse o proceder de una persona, adquirido por repetición de actos semejantes, es dable considerar que este tipo de hábitos puede ser justificado por otros medios de prueba, por ejemplo: constancias de internación para el tratamiento de la adicción, o cualquier documentación relacionada con el tipo de adicción en referencia directa al cónyuge; este punto puede robustecerse con atestes que son conocedores de la conducta o modo de proceder en forma asidua de un individuo,<sup>427</sup> por lo que los testigos pueden informar sobre ello.

Respecto del uso indebido de drogas enervantes,<sup>428</sup> se debe entender que el resultado de un examen toxicológico, por si solo no es eficaz, pues el uso de tales sustancias debe ser indebido y persistente, o sea reiterado, aspecto que no es factible acreditar con el resultado que arroje el dictamen toxicológico, lo que en todo caso solo implicar una presunción, mas no prueba plena y eficaz.

En cuanto al elementos relativo a que tal conducta trae como consecuencia que se amenaza o se causa la ruina de la familia, o bien

---

<sup>426</sup> [J] XX.430 C, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XV-I, Octava Época, febrero de 1995, p. 182. Embriaguez como causal de divorcio. Es necesario el diagnostico y reconocimiento de un médico especializado para acreditar la.

<sup>427</sup> [J] Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación. VII, Octava Época, enero de 1991, p. 58. Divorcio, hábito de embriaguez como causal de.

<sup>428</sup> [J] XV.2o.29 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Novena Época, Registro: 163363, Civil, diciembre de 2010, p. 1760. Dictamen toxicológico. Es inconducente para demostrar la causal de divorcio prevista en la fracción XV del artículo 264 del Código Civil para el estado de Baja California.

constituye un continuo motivo de desavenencias conyugales, que realmente haga la vida imposible entre ellos, todos los medios de prueba resultan aptos para su acreditación.

Como se ha visto a lo largo de este capítulo y el anterior, surgen datos relevantes de la búsqueda y análisis de los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación con relación a las causales de divorcio; la poca generación de ellas denota el escaso uso de diversas causales, en contrapartida el exceso de tesis de interpretación de otras, es un indicador de cuáles son las más socorridas. En el caso concreto, pese a que no puede desconocerse la problemática social y familiar que se presenta por el incremento de la embriaguez, el uso cada vez más frecuente de drogas enervantes y el crecimiento de las practicas de juego, a virtud de la permisión de casinos a lo largo y ancho del país, la causal es de poca invocación, por ello se presenta un mínimo de tesis de interpretación sobre la misma, pero destaca que las más añejas corresponden al hábito de la embriaguez y la ultima al uso de drogas.

#### **6.7 Cometer un cónyuge contra el otro un delito o bien, un acto que sería punible si fuera un tercero.**

De la interpretación literal del precepto aludido, se infiere que para que dicha causal pueda operar, el acto que se atribuya al cónyuge demandado se consideró como delito en contra de su cónyuge o de sus bienes por sentencia ejecutoria que así lo declare, o bien que el acto que se atribuye al reo, no es susceptible de sancionarse penalmente por ser cónyuges, pero que sí lo sería si se cometiere por un tercero.

En el primer supuesto, que fue materia de reciente incorporación, es claro en cuanto a que la conducta desplegada por cónyuge contra el otro o

sus bienes, debe ser de las consideradas como delito, tener una sentencia que así lo declare y que el hecho delictivo tenga señalada en la ley penal, una sanción con pena que exceda de un año de prisión.

#### **6.7.1 Elementos de la primera modalidad.**

Respecto de la primera hipótesis, poco hay que explicar pues es claro que la conducta que se reprocha es aquella en la que uno de ellos comete hacia el otro consorte o sus bienes, se considera tipificada como delito, que la misma tenga una sanción privativa de la libertad de más de un año de prisión y que exista sentencia ejecutoriada que haya hecho la declaración de culpabilidad, por ende sus elementos son:

- a) Conducta desplegada por un cónyuge contra el otro o sus bienes, que corresponda a un hecho delictivo, por lo que debe estar previsto y sancionado en la ley penal.
- b) Que dicha conducta tenga señalada en la ley penal una sanción de más de un año de prisión.
- c) Que exista sentencia ejecutoriada que así lo declare.

#### **6.7.2 Elementos de la segunda modalidad.**

La dificultad se presenta en este segundo supuesto, en el que es indispensable que el acto atribuido al cónyuge culpable encuadre en determinada conducta que se encuentre tipificada como delito dentro de nuestra legislación penal, pero que tal conducta no pueda ser materia de ejercicio de la acción penal justamente porque fue efectuada por uno de los consortes, y que en el caso de que se hubiera realizado hacia un tercero, evidentemente si sería posible su sanción en materia penal, o sea, que el

hecho delictivo, se encuentre previsto y sancionado en la ley penal con más de un año de prisión, que debe ser atribuido a uno de los cónyuges en perjuicio de la persona o bienes del otro, pero requiere que, por disposición expresa de la ley de la materia, no sea punible para su autor precisamente por producirse entre consortes.

De lo reseñado se infiere que para esta modalidad de la causal, se deben de probar estos supuestos:

- a) Que el hecho sea delictivo, por lo que debe estar previsto y sancionado en la ley penal,
- b) Que dicha conducta tenga señalada en la ley penal una sanción de más de un año de prisión,
- c) Que sea atribuido a uno de los cónyuges en perjuicio de la persona o bienes del otro,
- d) Que por disposición expresa de la ley de la materia, no sea punible para su autor, precisamente por producirse entre los consortes.

En relación con el tema que nos ocupa, Pallares sostiene: *“...Esta norma se refiere a cierta clase de delitos que no son punibles cuando los comete un cónyuge en contra del otro, por ejemplo, el llamado erróneamente “robo de infante”, que no es castigado cuando lo comete la persona que ejerza la patria potestad sobre el infante, como lo previene la fracción V del Art. 366 del Cód. Penal, que dice: “Se impondrán de cinco a cuarenta años de prisión y multa de cien a diez mil pesos, cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro en alguna de las siguientes formas: Fracción V. Cuando se cometa el robo de infante menor de doce años por quien sea extraño a su familia y no ejerza la patria potestad sobre él.” Gracias a esta impunidad de que gozan los ascendientes, es frecuente en México que personas*

*desnaturalizadas roben a sus esposas los hijos, y no permiten que los vean, durante años enteros.*<sup>429</sup>

Como antecedentes históricos el Código Penal de 1871 del Distrito Federal contenía excusas absolutorias, al establecer casos en los que aun habiendo delito, no había pena; se asume que por razones de política criminal, el legislador consideró que el mal de la pena no venía sino a agravar el mal del delito y volvió excusa absoluta el robo, el abuso de confianza, el fraude, etcétera, cuando estos eran cometidos entre los cónyuges; lo que implicaba que podía darse el caso de la comisión de un hecho objetivamente punible pero como era cometido entre cónyuges, la acción penal permanecía inerte, no era posible investigar ese delito y si en cambio imposible ejercitar la acción pública, y por lo mismo, no se llegaba a la sentencia que declarara cometido el delito, empero, no porque aquel hecho no fuera punible, el cónyuge víctima del delito se hallaba imposibilitado para ejercitar la acción de divorcio, pues la paz conyugal y la convivencia serían imposibles y convenía al interés social que tal hecho constituyera causa de la disolución del vínculo matrimonial.

Actualmente sobre los delitos en mención, en la mayoría de los códigos penales desaparecieron las excusas absolutorias, y en todo caso si se consideran como delito cometido entre cónyuges, solo que lo condiciona a que puede perseguirse mediante querrela de parte, pero siempre es punible; ejemplo de ello es el contenido del artículo 238 del código penal que dispone que el robo cometido, entre otros, por un cónyuge contra el otro, si estuvieran casados bajo el régimen de separación de bienes, produce responsabilidad penal, pero no se podrá proceder contra el responsable, sino a petición del agraviado.

Por su parte, en cuanto al adulterio, previsto en el artículo 182 del

---

<sup>429</sup> Pallares, Eduardo, *op. cit.*, nota 66, p. 94.



código en cita, establece que impondrán de quince días a dos años de prisión al hombre o mujer que tengan entre sí relaciones sexuales, bien sea en el domicilio conyugal o causando escándalo, sabiendo que uno de ellos o los dos están casados con otra u otras personas. Este delito se sancionará por querrela del ofendido, pero el perdón del último beneficiará a ambos responsables, siempre que se otorgue hasta antes de dictar sentencia.

Como puede analizarse, estos ejemplos claramente indican que el delito si se presenta cuando el cónyuge que actuó como sujeto activo puede ser sancionado, pues para que opere el motivo de disolución en cita, es requisito ineludible que ello no ocurra, o sea, que no se castigue dicha conducta.

En cuanto al delito de violación, este ha tenido un sentido adecuado a la realidad y acorde a los derechos fundamentales, pues antaño se estimaba que cuando uno de los cónyuges imponía al otro la cópula normal de manera violenta, atento a la obligación de cohabitar, no se configuraba el delito de violación, pese a la utilización de los medios típicos previstos para su integración, pues esto tan solo sería el ejercicio indebido de un derecho, según tesis de jurisprudencia número 1a./J. 10/94<sup>430</sup>. En la actualidad se considera que en el delito de violación, el bien jurídico tutelado es el derecho que al ser humano corresponde de copular con la persona que libremente su voluntad elija y de abstenerse de hacerlo en un momento determinado o por circunstancias específicas personales o con quien no fuere su voluntad, resultando de lo anterior que el objeto jurídico protegido es la libertad sexual y el consentimiento que los cónyuges convienen al contraer matrimonio, en particular la mujer para cohabitar con su marido, no es un consentimiento

---

<sup>430</sup> [J] 1a./J. 10/94, Jurisprudencia, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 77, Octava Época, Registro: 206115, Penal, mayo de 1994, p. 18. Apéndice 1917-1995, t. II, Materia Penal, Primera Parte, tesis 381, p. 210. Violación entre cónyuges, sino de ejercicio indebido de un derecho. No configuración del delito de.

absoluto sin posterior libertad de elección sexual en cuanto al momento, sino un consentimiento primero para la elección de esposo, y consumada la unión matrimonial, ésta no la priva de su libertad frente al marido, de acceder o de negarse a la copulación cuando su cuerpo o ánimo no lo desea, resulta pues que cada copulación matrimonial debe de ir precedida o simultáneamente acompañada de un consentimiento expreso o tácito; y, vencer por la violencia la voluntad contraria de la esposa en un momento dado es incidir en una conducta lesiva de su constante interés jurídico a la libertad sexual y dicha conducta no puede ser considerada como el ejercicio de un derecho, pues el artículo 17 Constitucional dispone que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar un derecho", a virtud de lo cual el acceso carnal violento aun dentro del matrimonio es ilícito y constituye una violencia que encuadra en el delito de violación.<sup>431</sup> En la ejecutoria que dio origen al criterio en comento, en su parte final se dejó libertad a las entidades federativas para determinar si conforme a sus legislaciones era o no aplicable dicha tesis, por lo que para tal fin debe de recurrirse a los ordenamientos legales vigentes en el Estado de Jalisco y compararlos con los del Estado de Puebla, para poder determinar su aplicación en nuestra Entidad.

a) El delito de violación previsto en el artículo 175 del Código Penal del Estado, está redactado en similares términos al diverso numeral 267 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, pues también exige para su integración la cópula por medio de violencia física o moral, con una persona, sea cual fuere su sexo;

---

<sup>431</sup> [J] 1a./J. 10/94, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Novena Época, Registro: 176065, Penal, enero de 2006, p. 658. Violación. Se integra ese delito aun cuando entre el activo y pasivo exista el vínculo matrimonial (legislación del estado de Puebla).

b) En ninguna de las dos legislaciones existe excepción alguna, ni en el tipo penal básico del ilícito de violación, ni en sus modalidades agravadas o equiparables, en relación con la circunstancia de que el activo y el pasivo sean cónyuges.

c) El código civil del Estado de Jalisco no contiene disposición normativa en el marco del vínculo matrimonial, que obligue al acceso carnal en contra de la expresa voluntad del cónyuge.

En tal virtud, al existir coincidencia con las disposiciones en comento, es patente que la tesis jurisprudencial en comento, sí tiene exacta aplicación y es de observancia obligatoria al Estado de Jalisco, acorde a lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo; lo que genera como conclusión que en nuestra entidad federativa cuando uno de los cónyuges obtiene la cópula por medios violentos -sean éstos físicos o morales-, queda debidamente integrado el delito de violación.

El pequeño análisis de diversas conductas antijurídicas, como las enunciadas, al ser consideradas como delitos, encuadran en todo caso en la primera hipótesis a que se refiere la causal en comento.

Por otra parte, respecto del segundo supuesto, tenemos que conforme a la ley penal de Jalisco, las conductas que pueden presentarse entre los cónyuges y que serían considerados como delitos, pero que no se estiman como tal por existir excusa absolutoria cuando se presentan entre consortes, tenemos las siguientes:

En el delito de allanamiento de morada, artículo 191 del código penal, se establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión al que, sin motivo justificado y sin orden de autoridad competente, se introduzca a un

departamento, vivienda, aposento o casa habitada o a sus dependencias y que si en el allanamiento media la furtividad, el engaño o la violencia, la pena aplicable será de uno a tres años de prisión; por lo que si se presentaran con las características ultimas, estaríamos en la presencia de un delito sancionado con más de un año de prisión; sin embargo cuando los cónyuges no divorciados legalmente, no puede consumarse el delito de allanamiento de morada, porque existe justificación tanto de parte de la esposa, como del esposo, para introducirse aun por la fuerza, o sin el debido consentimiento necesario, en sus domicilios, a la casa en que habita su consorte, pese a que se encuentren separados, si no existe resolución judicial que hubiera autorizado esa separación, ya que bajo tales condiciones, el objeto de la búsqueda de un cónyuge a otro lógicamente conduce a establecer que tratan bien de conciliarse o de arreglar sus situaciones, ya pecuniaria o de sus hijos si es que los hubieren tenido; de tal manera que cuando uno de los cónyuges, ocurre a la casa en que mora su consorte, no puede sostenerse que cometa el delito de allanamiento de morada, puesto que existe justificación de su parte para introducirse a esa casa<sup>432</sup>.

El robo en caso de que estén casados en sociedad legal<sup>433</sup>, se presenta una excusa absolutoria que impide que el sujeto activo sea objeto de aplicación de la ley penal, ya que a merced a la existencia del matrimonio bajo dicho régimen, se actualiza ese impedimento legal y no hay sanción; en tanto que en el delito de fraude en los casos de la sociedad conyugal, no se configurarían ninguno de los delitos si los bienes muebles forman parte de las capitulaciones matrimoniales.

---

<sup>432</sup> [J] Tesis Aislada, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación. CXI, Quinta Época, Registro: 298113, Penal, p. 2232. Allanamiento de morada (cónyuges).

<sup>433</sup> [J] II.1o.C.153 C, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VII, Novena Época, enero de 1998, p. 1088. Divorcio. La hipótesis prevista en el artículo 253, fracción XVI, del código civil del estado de México, requiere que no exista sanción para la conducta delictuosa atribuida al consorte demandado.

Se refiere al caso sancionable del delito de robo entre consortes, si ese robo por su cuantía, tratándose de una persona extraña, fuere perseguible con más de un año de prisión, constituye causa de divorcio<sup>434</sup>.

Respecto al delito de sustracción de menores, que se contempla en el numeral 179 de la ley penal, el que dispone que se impondrá de dos a seis años de prisión al que sustraiga a un menor de dieciocho años, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga, o bien que lo retenga sin voluntad de éste. Si la víctima de este delito es un menor de doce años de edad, al responsable se le impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión.

En su segundo párrafo se señala que cuando el delito lo efectúen los padres, abuelos o bisabuelos que no ejerzan la patria potestad, o terceros, por encargo de alguno de éstos, la sanción será de seis meses a dos años de prisión. En este caso el delito sólo se perseguirá a petición del legítimo representante de la parte ofendida. Con lo anterior, queda en claro que si uno de los conyugues sustrae al hijo menor de edad de la casa que habita en compañía del otro progenitor, pero está en pleno ejercicio de la patria potestad, no se presenta dicho delito, lo que implica una causa absolutoria y por ende una conducta de esta naturaleza puede incluirse en la segunda hipótesis, empero en caso de que alguno de los esposos no ejerza legalmente la patria potestad sí se configuraría el delito y estaríamos en la primera teoría.

---

<sup>434</sup> Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, p. 368 y 369.

### **6.7.3 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

En el primer supuesto la prueba idónea para la acreditación de la causal, serán las actuaciones judiciales del proceso penal en el cual se determine la culpabilidad de uno de los cónyuges en contra del otro, por delito cuya sanción sea de más de un año de prisión.

En cuanto a la segunda hipótesis el grado de dificultad se amplía, en este puede hacerse uso de todos los medios de prueba que resulten aptos y deben ser tendientes a acreditar que el hecho o conducta del consorte demandado hacia su cónyuge o los bienes de este, que encuadra en las consideradas como un hecho delictivo que como tal está previsto y sancionado en la ley penal con más de una año de prisión, pero que por disposición o interpretación de la misma ley, no es punible por producirse entre esposos.

### **6.8 Separación por más de dos años.**

Esta causal de naturaleza objetiva, es de reciente incorporación a la legislación de Jalisco, fue tema de discusión en la elaboración del nuevo código civil que entro en vigor en el año de mil novecientos noventa y cinco, sin embargo no se incluyo como causal por diversos atavismos, como puede apreciarse de la exposición de motivos, en la que se argumento para su no inclusión, que:

*“...Una exposición de motivos normalmente es una síntesis de las ideas que tuvieron los redactores de la legislación para plasmar los criterios y directrices seguidos en la misma, sin embargo, para confirmar esa regla hoy vamos a señalar un caso de excepción al indicar lo que no se*

*quiso incluir, después de ponderarse la realidad de la comunidad jalisciense frente a otras realidades que se dan en diferentes entidades federativas. Este esfuerzo legislativo tiene como su principal autor al pueblo jalisciense, que va a ser el protagonista de su aplicación histórica y por ello, en los diversos foros de consulta ciudadana que se verificaron, se recibieron las propuestas de distinguidos juristas que indicaban la necesidad de establecer como causal de divorcio, el hecho de la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos, tal como se contempla en el Código civil para el Distrito Federal en el artículo 267° , fracción XVIII.*

*Tenemos que al visitar las poblaciones fuera de la capital del Estado, se encontró con que muchas familias de las reas rurales están desintegradas, por que los jefes de familia con el propósito de buscar mayor bienestar económico para las mismas, trasladaron su residencia ocupacional a los Estados Unidos de América y la realidad los enseñó, que en esas relaciones familiares, al principio se cumplieron con los objetivos propuestos, pero con el transcurso del tiempo, la comunicación familiar y envió de ayuda económica se fueron espaciando hasta extinguirse. Los padres de familia ausentes, encontraron en aquellas latitudes otros afectos y establecieron nuevas relaciones familiares. De establecerse en el Código Civil esa casual de divorcio, sería tanto como premiar a quienes olvidándose de sus elementales obligaciones hacia la familia y quebrantando su promesa de mejoría económica, ahora simplemente con la mayor facilidad pudieran desbaratar esa relación familiar y formalizar la que tienen más allá de nuestras fronteras, dejando así en una forma de total desamparo al cónyuge que quedó a cargo del cuidado de la familia con*

*la ilusión de una mejoría económica. Ninguna legislación puede prohiar la injusticia...”.*

Década y media después, los argumentos para su inclusión por parte de los legisladores son del tenor:

*“...Por otro lado, coincidimos con el diputado ponente en la necesidad de la adición planteada, toda vez que si bien es cierto que en las fracciones VIII y IX del artículo 404 del Código Civil se encuentran previstas dos causales para el divorcio consistente en la separación del hogar conyugal, también lo es el hecho de que en ambas causales se prevé que la acción del divorcio sólo puede ser invocada por el cónyuge que no se separó a continuar a casado civilmente por un tiempo indeterminado, siendo además nugatorio de sus derechos como la posibilidad de contraer nuevo matrimonio, el de celebrar cierto actos de comercio, la adquisición de determinados créditos, por citar algunos.*

*Ahora bien, en el supuesto de que el cónyuge que si puede demandar el divorcio no lo haga, cuya actitud pasiva podría ser a la vez acusar violencia intrafamiliar, en el sentido de maltrato psicológico, con la intención de dañar o humillar, los condena a ambos cónyuges a permanecer jurídicamente vinculado en una relación matrimonial inexistente e ineficaz.*

*No escapa del análisis de quienes dictaminamos el supuesto de que cuando los cónyuges desean permanecer unidos en matrimonio, cohabitando y conviviendo, procuran dicha unión o por lo menos se demuestra dicho interés por uno de ellos, por lo que es claro que cuando el cónyuge que no se separó no actúa para recuperar dicha unión y convivencia es que ha perdido también interés.*



*Tan es así que el Legislador previó lapsos determinados de tolerancia para que el cónyuge que no se separó tuviera acceso a la administración de la justicia en su favor, estableciendo que puede demandar el divorcio, y con éste acceder a disolver su vínculo matrimonial y estar apto para contraer uno nuevo, si su cónyuge se separa del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada; o bien, si la separación del hogar conyugal es por más de un año sin su consentimiento.*

*Tampoco escapa de nuestra atención el hecho de que el Legislador estableció que éste último plazo de un año empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que haga el interesado a su cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal, lo que evidencia que ambas causales sólo pueden ser invocadas por el cónyuge que no se separó.*

*Ahora bien, nos preguntamos qué ocurre cuando ha transcurrido ambos plazos, el de seis meses y el de un año y el cónyuge que no se separó no solicita la reincorporación de su cónyuge al hogar conyugal, ni tampoco demanda el divorcio, pues es claro que no tiene interés en ninguna de las dos cosas y por tanto lo que en un principio se concibió como una forma tutelar el bienestar de la familia como células de la sociedad, aunque parcialmente, se ha invertido como un atropello a los derechos fundamentales de las personas y en agravio de las garantías individuales de libertad que estamos ciertos el Legislador debe corregir.*

*Considerando que el matrimonio como institución jurídica ha sido concebida para proporcionar el mejor desarrollo del ser humano y no su detrimento, es de considerar a su vez que si una persona se encuentra impedida para el ejercicio de sus derechos por la voluntad de un tercero, cuando de ipso ya no existe entre éstos un interés personal,*

*un vínculo familiar, una interacción personal o tan siquiera causal, sino que al contrario, está proporcionando situaciones de hechos que podrían considerarse ilícitas, pero que antropológicamente sin inherentes a la persona humana, entendemos que nuestro deber actualizar las disposiciones jurídicas de tal manera que , de forma ordenada, el derecho, como ciencia jurídica, prevalezca al servicio del hombre y no al revés.*

*A este respecto cabe señalar que todos los años, las administraciones municipales, a través de sus oficinas del Registro Civil, realizan campañas de matrimonio colectivos de registros extemporáneos de nacimiento, para regular las situaciones irregulares en la que viven muchos jaliscienses mediante las cuales se invita a quienes vienen en concubinato o en unión libre a que contraigan matrimonio y a que reconozcan a sus hijos como tales, lo que evidencia que el Estado reconoce dichas situaciones de hecho que se generan en nuestra sociedad jalisciense, al tipo de orientar su quehacer social y político a su protección.*

*Sin embargo, para muchas personas este beneficio es inalcanzable ante la imposibilidad de disolver un matrimonio anterior, por la falta de interés, la ausencia de disposiciones jurídicas adecuadas y a veces, hasta la venganza o resentimiento de uno de los cónyuges, lo que nos lleva a sumarnos a la propuesta planteada por el Diputado ponente en su iniciativa, salvaguardando los demás derechos que le pudieran corresponder a las partes, como alimentos incluso la acción pernal o pérdida de patria potestad.*

*Por cuando a su procedimiento, estimamos que lo conducente es que siga la suerte de los juicios civiles ordinarios, debiéndose acreditar, además de los requisitos previstos por el Código de Procedimientos*

*Civiles, la separación conyugal por más de dos años de manera ininterrumpida, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.*

*Estimamos que merecerá el mismo trato que la causal de incompatibilidad de caracteres, en donde no hay cónyuge inocente, ni culpable y no hay condena en gastos y costas; ambos cónyuges general la causal: uno activo, por que separó por más del tiempo permitido por la ley (dos años), y el otro por omisión, por que teniendo el derecho de solicitar su reincorporación o de ejercitar la acción de divorcio y demandarlo, no lo hizo en el tiempo previsto por la ley (hasta dos años). Al causar estado la sentencia, ambos pueden contraer nuevo matrimonio trascurrido un año.*

*En aras de evitar confusiones, estimamos pertinente precisar que solamente podrá ser invocada esta causal si pudiendo demandar el cónyuge inocente el abandono por causales previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 404, no haya entablado juicio de divorcio y hayan trascurrido los dos años comprobables de la separación. Asimismo, cabe señalar que solo podrán demandar el divorcio invocado una sola de las causales de separación a la vez...”.*

Así entonces, en Jalisco ya es factible obtener la disolución del vínculo matrimonial en uso de esta causal, que efectivamente se presenta cuando los cónyuges han vivido separados en forma ininterrumpida por más de dos años sin causa alguna que la justifique, o sea que se presenta por el solo hecho de que la separación dure el lapso previsto en la norma, ya que su finalidad es resolver jurídicamente situaciones inciertas, partiendo de que las relaciones humanas y las relaciones jurídicas requieren de certeza y de que toda incertidumbre debe resolverse, sin que su actualización dé lugar a la culpabilidad de alguno de los cónyuges, por ello, una vez trascurrido el

tiempo, sin que en nada importe el motivo de la separación, puede hacer valer; el tiempo inicia en la data de la separación, pasados los dos años referidos, si el consorte que tiene el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho, o sea el que se quedó en el hogar conyugal, entonces podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges.

Sobre esta causal, Martha Stilerman y María Teresa de León, señalan: *“... Quien demanda invocando una causal objetiva ha realizado una opción, prevista por la ley, en el sentido de mantener en el ámbito privado las circunstancias que condujeron a la separación, y consideramos que el derecho del cónyuge demandado en estos términos se limita al de alegar y probar no haber dado causa a la separación, sin poder alterar la naturaleza del proceso transformándolo en uno calificado como de divorcio sanción. La diferencia práctica de una y otra interpretación no es pequeña: Frente a la alegación de no haber dado causa a la separación, a diferencia de lo que ocurre ante la reconvención por causal, el allanamiento del reconvenido no estaría proscrito por la norma legal en razón de estar en juego sólo consecuencias de orden patrimonial y no la declaración misma de divorcio o separación personal.”*<sup>435</sup>.

#### **6.8.1 Elementos.**

Los elementos o condiciones sine qua non, para el ejercicio de la acción basada en esta causal y que deben de acreditarse por quien la haga valer, además de justificar la existencia del matrimonio, son los siguientes:

---

<sup>435</sup> Stilerman, Martha y León, María Teresa de, *Divorcio. Causales objetivas*, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1994, p. 51.

- a) La existencia del hogar conyugal.
- b) La separación de los cónyuges del hogar conyugal por más de dos años, sin causa justificada.
- c) El término debe contabilizarse a partir de la data de la separación.
- d) Que en el lapso de esos dos años de separados, el cónyuge que tenga el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo haya ejercitado tal derecho.

Ahora bien, atento a que esta causal entro en vigor mediante el decreto número 23032/LVIII/09, que fue publicado en el Periódico oficial del Estado el día 29 de diciembre del año 2009, y conforme a su artículo primero transitorio entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de la entidad, es decir, el día 30 del mismo mes y año, aspectos que en su momento generaron diversos criterios de interpretación sobre el cómputo del término para que se configure la referida causal, si inicia desde el momento en que se reguló dicho supuesto de disolución del vínculo matrimonial, esto es, con posterioridad al inicio de su vigencia, pues considerar lo contrario implicaría otorgar efectos retroactivos al invocado artículo en la referida fracción, lo cual vulneraría el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, en contrapartida, otros criterios estimaron que no se vulneraba tal norma constitucional, finalmente el punto debatido fue definido por Criterio Jurisprudencial en el sentido de que su aplicación no es retroactiva y por ende si aplicable, atendiendo a la fecha del abandono<sup>436</sup>.

---

<sup>436</sup> [J] 1ª/J.5/2012 (10ª.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación. Libro VI, Decima Época, marzo de 2012, t. I, p. 97. Divorcio. Separación de los cónyuges por más de dos años, no existe aplicación retroactiva de la fracción XIX del artículo 404 del Código Civil para el estado de Jalisco cuando la separación ocurrió antes de la entrada en vigor de dicho precepto, es continua y se cumple el plazo previsto.

La connotación primordial de esta causal de divorcio, estriba en que acorde a las disposiciones del divorcio en la legislación civil, el cónyuge no poder demandar el divorcio fundándose en sus propios hechos, lo cual es aplicable a la mayoría de las causales de divorcio que establece el artículo 404, y justamente la inclusión de esta causal específica, constituye una excepción a la regla, ya que opera por el solo hecho de que los consortes ya no vivan en el mismo domicilio por más de dos años, independientemente del motivo que lo haya originado, sin importar cuál de ambos consortes lo hubiese provocado<sup>437</sup>.

De las circunstancias especiales que pueden presentarse en uso de esta causal, es en cuanto a si la separación de los cónyuges es legítima, ejemplo: separación o deposito de personas, convenio entre los cónyuges, existe tesis aislada, que señala que si la separación es legítima, la causal no procede ya que en tales supuestos existe causa justificada sobre dicha separación, pero que cosa diversa se presenta cuando en el trámite judicial que hubiera generado la separación de los cónyuges queda sin efecto alguno, ya sea por caducidad, por que se levanto la medida o causa análoga, pues en todo caso los efectos de una declaración de tal índole, es el de anular todos los actos procesales verificados, lo que implica que esas actuaciones pierden toda eficacia, pues los efectos que provisionalmente crearon se destruyeron cuando se hizo dicha declaratoria respectiva<sup>438</sup>, en consecuencia

---

<sup>437</sup> [J] XVI.5o.6 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, Novena Época, Registro: 185187, Civil, enero de 2003, p. 1770. Divorcio, separación de los cónyuges por más de dos años como causal de. No es requisito indispensable acreditar el ánimo en la separación (legislación del estado de Guanajuato).

<sup>438</sup> [J] II.3o.C.28 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIII, Novena Época, Registro: 189967, Civil, abril de 2001, p. 1064. Divorcio. Separación por más de dos años como causal. Es procedente si se demuestra que el mandato judicial que autorizaba la separación de los cónyuges, perdió sus efectos en atención a la declaratoria de caducidad (legislación del Estado de México).

se si se demuestra que ya no existe una causa legal o mandato judicial que impida la actualización de esta causal de divorcio, la misma debería ser procedente.

En contraposición y superando el anterior criterio se encuentra el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 173/2007, que aunque alude a la normatividad de los Estados de Veracruz, en cuya causal se indica que esta se da "independientemente del motivo que le haya dado origen", así como la del Estado de Chihuahua, en donde el legislador no condicionó expresamente en la fracción XVII del numeral 256 de su normatividad sustantiva civil, que la causal de divorcio ahí dispuesta debe actualizarse sólo cuando la separación se dé "por causa injustificada", su contenido sólo puede entenderse en el sentido de que, una vez transcurrido ese término, procede el divorcio, con independencia del motivo que haya dado lugar a la separación de los cónyuges, desde luego tomando en cuenta que ha quedado demostrada la diversa condicionante de que habla dicho numeral para que proceda el divorcio, estableciendo que las causales mencionadas producen el divorcio por el solo hecho de que la separación dure el lapso previsto en cada norma, pues su finalidad es resolver jurídicamente situaciones inciertas, partiendo de que las relaciones humanas y las relaciones jurídicas requieren de certeza y de que toda incertidumbre debe resolverse, sin que su actualización dé lugar a la culpabilidad de alguno de los cónyuges, pues<sup>439</sup> la inclusión de las causales objetivas significa un avance hacia el resguardo de la intimidad de la vida familiar, que es de especial importancia cuando, aun existiendo fractura de la unión, uno de los cónyuges no desea o no admite el divorcio, y el que lo pretende no desea acudir a la invocación y prueba de la causal existente en razón de que tal actitud contraría acendrados conceptos morales que le son propios o en resguardo de la imagen del matrimonio y la de ambos padres, que pretende preservar para sus hijos.

---

<sup>439</sup> Stilerman, Martha y León, María Teresa de, *op. cit.*, nota 435, p. 113.

Por lo que al margen de la causa de la separación, ya sea legítima o ilegítima, por causa legal o mandato judicial, como el depósito judicial, basta que ésta sea por el término establecido para que resulte procedente el divorcio cuya demanda se entable, pues en este caso específico solo el avenimiento o reconciliación de los cónyuges representa la única situación que, per se, interrumpiría los términos a que se refieren los aludidos dispositivos, dado que a través de éstas se demuestra claramente la verdadera intención de los consortes de unirse nuevamente, cohabitando con todas las obligaciones inherentes al matrimonio<sup>440</sup>.

Otro aspecto, corresponde a la necesidad o no de justificar la fecha de la separación y que al igual que en causales anteriores, en punto a elucidar será en relación con el tiempo transcurrido de la separación a la fecha de la presentación de la demanda, por lo que será innecesario precisar y acreditar el día exacto en que aconteció la separación, si la misma se ha dado en exceso, y como excepción a la regla, ello debe de expresarse y justificarse, cuando el indicado lapso no hubiese transcurrido en demasía<sup>441</sup>.

Como elementos que se debe atender en forma específica, en nuestra Entidad, el legislador agrego a la causal la circunstancia de que podría ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de

---

<sup>440</sup> [J] 1a./J. 173/2007, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Novena Época, Registro: 170094, Civil, marzo de 2008, p. 15. Divorcio. Por separación de los cónyuges por tiempo determinado como única o una de las condiciones que se prevén en los códigos sustantivos civiles para que se actualice la causal correspondiente. El lapso respectivo no se obstaculiza o interrumpe con el depósito de personas, sólo la reconciliación o el avenimiento de los consortes es apto para ese efecto.

<sup>441</sup> [J] VII.3o.C.45 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Novena Época, Registro: 180896, Civil, agosto de 2004, p. 1596. Divorcio necesario basado en la separación de los cónyuges por más de dos años. Caso en que debe acreditarse la fecha exacta de separación (legislación del estado de Veracruz).



separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho, lo que en todo caso, denota que en el caso de que alguno de ellos de forma previa hubiera intentado la acción de divorcio basándolo en una de las causas que señalan las fracciones aludidas, el otro no podrá hacer valer esta causal. Empero, se estima que dependiendo del resultado del primer juicio, es factible estimar el camino a seguir, dicho en otras palabras, si el cónyuge obtiene sentencia favorable respecto de cualquiera de dichas fracciones, es obvio que no es menester promover nada mas, empero, en caso de que el divorcio no fuera decretado, el demandado podrá ampliamente hacer valer esta causal.

La admisión de la separación de hecho como causal de separación personal o de divorcio corresponde a un estadio avanzado de la evolución jurídica, que resultaba impensable en el marco de los rígidos conceptos del siglo pasado. Su elevación a la categoría de causal de divorcio es más o menos reciente en todas las legislaciones que, a la fecha, la admiten<sup>442</sup>.

#### **6.8.2 Medios de prueba posibles para su acreditación.**

En los términos de redacción de esta causal, solo deberá de acreditarse el matrimonio y que los consortes tienen más de dos años separados, por lo que las probanzas pertinentes corresponden a documentales, testimoniales y confesionales.

---

<sup>442</sup> Stilerman, Martha y León, María Teresa de, *op. cit.*, nota 435, p. 99.

## **6.9 Cuando el cónyuge hubiera perdido juicio de divorcio o de ilegitimidad del matrimonio.**

Esta causa de divorcio se contempla en el artículo 405 del Código Civil del Estado de Jalisco y en si representa una sanción a quien habiendo demandado a su consorte, ya sea por el divorcio o la nulidad del matrimonio, no obtuvo sentencia favorable o caduco el juicio, pues de ser así, su contraria, tendrá el derecho de obtener el divorcio.

### **6.9.1 Elementos.**

Del sentido literal del contenido de la norma, se desprende que se compone de los siguientes elementos:

- 1.- Un juicio previo en el que uno de los esposos hubiera demandado el divorcio o la ilegitimidad del matrimonio y no hubiera obtenido sentencia favorable o bien hubiera caducado el juicio.
- 2.- El demandante de dicho juicio, tiene el derecho del ejercicio de la acción de divorcio contra su conyugue.
- 3.- Tal derecho debe hacerse valer tres meses después de la notificación en que causó estado la sentencia del primer proceso, o del auto que decreta la caducidad de la instancia.

En esta causa de divorcio el único punto que ha sido materia de interpretación es lo relativo en cuanto a determinar con precisión cuándo inicia el término de los tres meses que deben transcurrir a efecto de estar legitimado para emprender el divorcio, pues a partir de entonces la demanda deberá de

presentarse dentro de los siguientes seis meses a fin de que no opere la caducidad de la acción en términos del artículo 410 del código civil.

La problemática se presenta a virtud de los diversos supuestos que pueden presentarse una vez emitido el auto que decreta la caducidad o bien la sentencia del juicio inicial, pues una y otra pueden ser objeto de recursos. Por ejemplo, si decreta el divorcio se remite a segunda instancia para la revisión de oficio, si se confirma, es obvio que el divorcio se decreto y esta causa no se presenta, amén de que sería inútil, pero puede presentarse su revocación y determinar la improcedencia de la acción, la resolución de segundo grado puede ser materia de amparo y esto generar una nueva situación de cosas. Si la sentencia origen niega el divorcio, puede ser materia de apelación y de la misma manera la de segunda instancia impugnada vía amparo, etcétera, lo que provoca confusión sobre cuál es el momento real en que debe de iniciar el computo de los aludidos tres meses.

Sobre este aspecto específico, en caso de la interposición de amparo, existen diversos criterios del Poder Judicial de la Federación, en el que se señalan los supuestos que al respecto pueden presentarse para atender cual debe ser la sentencia ejecutoriada, bajo el entendido de que el sobreseimiento y la negativa de amparo producen el mismo efecto jurídico, y que bajo tal orden de ideas la notificación de la sentencia que establece la cosa juzgada, debe ser la de amparo y no la de segunda instancia, debiendo distinguirse entre amparo negado o sobreseído y amparo concedido.

En caso de que se niegue o se sobresea el juicio de garantías, el término de tres meses principia desde la fecha en que la ejecutoria de amparo queda notificada por conducto de la autoridad responsable.

Cuando el amparo se concede, la fecha de iniciación del cómputo, es desde que la autoridad responsable, el tribunal de segunda instancia, en

cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pronuncie y notifique su nueva resolución, dejando sin efecto la reclamada y ajustándose a los términos de la ejecutoria a cumplimentar

En consecuencia, cuando se interpone el juicio de garantías, el término de caducidad de seis meses, que para el ejercicio de la acción se requiere, principia después de transcurridos los tres meses, contados a partir de la notificación o cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos indicados<sup>443</sup>.

Por otra parte, si bien el dispositivo indica, que la causa procede contra aquel que demandó el divorcio o ilegitimidad del matrimonio, no obtuvo sentencia favorable, o bien se decretó la caducidad, no debemos olvidar que en todo caso la caducidad solo podrá presentarse en cuanto al segundo supuesto, pero no sobre el juicio de divorcio, pues en el no cabe la caducidad por disposición expresa del artículo 29 bis, de la ley procesal civil en el Estado de Jalisco.

### **6.9.2 Medios de prueba para su acreditación.**

Por las características de la causa de divorcio, es claro que la probanza esencial son las actuaciones del juicio previo, específicamente el auto que decreta la caducidad (en el juicio de ilegitimidad del matrimonio) o bien la sentencia que niega el divorcio o ilegitimidad del matrimonio, junto con la notificación respectiva, para los efectos de computar, tanto el momento en que

---

<sup>443</sup> [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 97-102 Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241172, Civil, p. 73. Divorcio. Fecha en que principian los términos de ejercicio y caducidad de la acción, cuando se promovió amparo, en el caso del artículo 268 del Código Civil para el Distrito Federal.

inicia el derecho para el ejercicio de la acción y luego la oportunidad en la presentación de la demanda, para verificar que no ha caducado.

## CAPÍTULO VII

### UN NUEVO MODELO DE DIVORCIO

#### 7.1 El divorcio incausal, un modelo garantista.

Como se analiza a lo largo de esta investigación, la normatividad inherente a los procesos de divorcio que está vigente en el Estado de Jalisco, no proporciona una respuesta efectiva a la demanda ciudadana, ciertamente las normas que la regulan se encuentran en nuestro derecho dispositivo, pero vale la pena preguntarse, si reúnen los tres criterios de interpretación de la norma, en cuanto a que tiene que ser justa, válida y eficaz.

Ya se indico que es justa cuando tiene correspondencia a los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico, que equivale a preguntarse si esa norma es apta para realizar los valores históricos que inspiran ese ordenamiento jurídico, concreta e históricamente determinado, es juicio de valor sobre su contenido de justicia.

En cuanto a la validez de las normas del divorcio, estas cumplen con los requisitos que para tal fin se requiere, pues el problema de la validez se resuelve con un juicio de existencia o de hecho, la validez jurídica de una norma equivale a existencia de esa norma como norma jurídica y para determinar si la una norma es válida, dice Bobbio<sup>444</sup>, que es necesario realizar tres operaciones:

*“...1. Determinar si la autoridad que la promulgó tenía el poder legítimo para expedir normas jurídicas, es decir, normas vinculantes en ese determinado ordenamiento jurídico (esta investigación conduce inevitablemente a remontarse a la norma fundamental, que es la base de la validez de todas las normas de un determinado sistema).”*

---

<sup>444</sup> Bobbio, Norberto, *op. cit.*, nota 26, pp. 34 y 35.

*2. Comprobar si no ha sido derogada, comoquiera que una norma puede haber sido válida, en el sentido de haber sido promulgada por un poder autorizado para hacerlo, pero esto no quiere decir que lo sea todavía, lo que sucede cuando una norma posterior en el tiempo la ha derogado expresamente o ha regulado la misma materia.*

*3. Comprobar que no sea incompatible con otras normas del sistema (lo que también se llama derogación implícita), particularmente con una norma jerárquicamente superior (una norma constitucional es superior a una ley ordinaria en una constitución rígida) o con una norma posterior, comoquiera que en todo ordenamiento jurídico rige el principio de que dos normas incompatibles no pueden ser válidas a un mismo tiempo (así como en un sistema científico dos proposiciones contradictorias no pueden ser válidas). El problema de la validez jurídica presupone que se haya dado respuesta a la pregunta: ¿qué se entiende por derecho? Se trata, queriendo adoptar una terminología familiar entre los filósofos del derecho, del problema ontológico del derecho.”*

En cuanto a la eficacia de la norma, se alude a si ella es o no cumplida por los destinatarios de la norma jurídica, y que en el supuesto de que sea violada, se le haga valer con medios coercitivos por la autoridad que la ha impuesto.

La norma por sí sola no implica su cumplimiento, el mismo autor, indica que hay normas que son cumplidas universalmente de manera espontánea (y son las más eficaces); que otras se cumplen, por lo general, sólo cuando van acompañadas de coacción; otras no se cumplen a pesar de la coacción, y las hay que son violadas sin que ni siquiera se aplique la coacción (y son las más ineficaces).

En cuanto a la Justicia y el Derecho, Campillo Sáinz<sup>445</sup>, señala:

*“Couture dice que en el derecho hay otros valores involucrados; pero el que lo define esencialmente es justicia. La justicia nos manda tratar igual a los iguales y de manera proporcionalmente desigual a los desiguales; pero esta norma general va llenándose de contenido y ensanchando su significación por la historia y los afanes de los hombres. El derecho no es un fin en sí mismo, es un medio de realizar la justicia y otros valores que también afectan a la vida de la colectividad. Por eso, los tribunales en que se aplica no reciben en su jerarquía máxima el nombre de tribunales de derecho, sino, como en nuestro país, se titulan Suprema Corte de Justicia.*

*De ahí el mandato al abogado: cuando en el fondo de tu conciencia surja el conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia; lucha por ella procurando que la fórmula jurídica, al aplicarse al caso concreto, se rija por los dictados de la justicia. Lucha por ella cuando la ley te parezca injusta y reclama su modificación para hacer del derecho no un coto definitivamente cerrado, sino instrumento de cambio, de superación, de bienestar y de justicia.”*

Bajo tales criterios de interpretación diremos que la normatividad vigente relativa al divorcio en el Estado de Jalisco, es válida, porque existente, cumplió con las expectativas históricas de cuando fue creada, empero, en la actualidad resulta obsoleta, no encaja en el contexto del mundo real del siglo veintiuno y los reclamos ciudadanos; podemos decir que no resulta justa, ya que en los términos en que se encuentra y ha sido interpretada, como se ha visto a lo largo del trabajo de investigación, está llena de visicitudes procesales y sustantivas que distan mucho de cumplir con los derechos

---

<sup>445</sup> Campillo Sáinz, José, *op. cit.*, nota 24, pp. 9 y 10.



fundamentales del ser humano, y en la práctica, tampoco resulta eficaz, pues el incumplimiento de la normatividad respectiva, no contiene coacción alguna. Por ende, es menester reformar la normatividad relativa al divorcio, a fin de que la misma cumpla con tales requisitos, de norma justa, válida y eficaz en el momento histórico que se vive y no depender del pasado, para tal fin, se analiza la inclusión de los métodos alternos de solución de conflictos y el divorcio incausal.

La familia es el núcleo social, mas no puede ser el ancla que sostenga los criterios estrechos y arcaicos que el matrimonio tiene que ser para toda la vida, las personas de voluntad propia externalizan su consentimiento para unirse en matrimonio, en los mismo términos debe expresarse la norma para su disolución, o sea, debe prevalecer la voluntad de las partes para la obtención del divorcio, sin más limitaciones que el cumplimiento a las obligaciones que se producen como efectos del divorcio. Si el matrimonio como contrato debe sujetarse, no a la teoría de la imprevisión, sino al sistema que sigue el propio Código Civil, que en forma genérica adopta la tesis *pacta sunt servanda*, que implica que debe estarse a la voluntad de las partes, la misma regla normativa debe incluirse en el divorcio.

Como antecedentes, tenemos que la llamada “disolución rápida” del matrimonio en el Estado de California EEUU<sup>446</sup>, para la cual se deben de cumplir con los siguientes requisitos:

Los cónyuges deben<sup>447</sup>:

---

<sup>446</sup> Telemundo, Todo sobre el divorcio en Estados Unidos, <<http://www.telemundodallas.com/inmigracion/tu-consulta-gratis/El-divorcio-en-Estados-Unidos-132567688.html>>, página consultada el día 9 de enero de 2013.

<sup>447</sup> El proceso de divorcio en los EE.UU. es diferente en muchos de sus estados. La duración de todo el proceso puede variar de un sitio a otro. Normalmente, las parejas que quieran divorciarse, deben realizar, además de los pasos anteriormente mencionados, que sólo aplican al llamado divorcio rápido siguientes pasos:

- Haber estado casados por menos de 5 años
- No tener hijos en pareja, que hayan sido adoptados o que hayan nacido antes del matrimonio (la esposa no debe estar embarazada)
- No ser dueños de bienes inmuebles o tener intereses en este tipo de propiedades
- No tener más de \$4.000 USD en deudas acumuladas a partir de la fecha de matrimonio.
- No tener bienes por separado que valgan más de \$32,000 USD
- Estar de acuerdo en que ninguno de los cónyuges recibirá manutención del otro
- Deberán firmar un acuerdo de división de bienes y deudas, antes de presentar la petición conjunta para la disolución rápida de matrimonio
- Por lo menos uno de los cónyuges debe haber vivido en California por los últimos 6 meses y en el condado en el que piensa presentar el caso por los últimos 3 meses.

Sobre los tiempos de este proceso, se hace la pregunta, ¿Cuánto tiempo tarda un proceso de divorcio rápido en California? Teniendo como

---

-Presentación de la Petición: este es el primer paso en el proceso de divorcio.

- Custodia de los hijos: el juez decide cuál de los padres tendrá la custodia de los hijos, si hay o no custodia compartida, y también el régimen de visitas.

- Distribución de propiedad: las propiedades de la pareja se distribuyen de acuerdo a las normas y reglamentos de la ley en cada estado.

- Pensión alimenticia: esta es la cantidad de dinero que recibe el cónyuge como "mantenimiento". Hace tiempo, solo era la mujer la que obtenía esta pensión pero de acuerdo con las nuevas leyes, en algunos estados, el miembro con más ganancias será el que proporcione apoyo financiero a la pareja. *Ídem*.

respuesta que un acta de divorcio puede ser otorgada inmediatamente, si las partes interesadas llegan a acuerdos.<sup>448</sup>

En cuanto a costos, a grosso modo, un juicio rápido en California, de no más de 5 horas, puede tener un costo de 1.900 dólares, más el acuerdo al que se llegue con la otra parte. Sin embargo, la minuta del abogado va subiendo en función de lo que dure el juicio, a lo que habría que sumar el pago de 500 dólares por cada citación, 1.500 dólares por la documentación y otros tantos gastos imprevistos que podrían elevar la factura a más de 60.000 dólares.<sup>449</sup>

Ahora bien, en el Estado de Jalisco el divorcio tradicional no ha dado una respuesta efectiva, no soluciona el problema jurídico y emocional de los divorciantes, y si por el contrario acrecienta el conflicto entre ellos olvidando la comunión que antes tuvieron, pues como lo refiere Pérez Palma<sup>450</sup> *“...Es sabido que los lazos que forman y que unen a la familia son de amor, de respeto y de consideraciones mutuas, de socorro, de auxilio de los unos para con los otros, de comprensión, de buena fe y de buena voluntad; pero cuando se rompe la paz y el orden familiar, todos estos buenos sentimientos se convierten en uno solo: el odio, de unos hacia los otros, la experiencia revela a que grado son pasionales algunos divorcios, o las controversias sobre la posesión de los hijos, o los pleitos en cuestiones de dinero. Son ellas*

---

<sup>448</sup> En caso de que no sea así, entonces se celebrarán audiencias y probablemente sea necesario celebrar un juicio, presidido por el juez que resulte asignado. Puede ser cuestión de meses o inclusive un año. Antes de proceder a una audiencia de conciliación o a un juicio, las partes interesadas en un divorcio deben someterse a una diligencia de mediación o a un arbitraje que les ayude a superar sus desacuerdos. *Ídem*.

<sup>449</sup> El Espectador.com, *El divorcio en Estados Unidos ya es un lujo*, disponible en, <<http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo102647-el-divorcio-estados-unidos-ya-un-lujo>>, 28 de diciembre de 2008, página visitada el 01 29 de abril de 2013.

<sup>450</sup> Pérez Palma, Rafael, *op. cit.*, nota 27, p. 881.

*controversias que, con buena voluntad, resultan de fácil solución, pero mientras esté la pasión de por medio y haya sentimientos de malquerencia, los aventamientos de que habla el precepto, no representan sino la buena voluntad del legislador.”*

En contraposición la mediación y el divorcio uncausal tienen, entre otros objetivos, la solución del conflicto desde el punto de vista real, emocional y jurídico el primero, y el segundo, la solución jurídica mediante la agilización de la disolución matrimonial y evitar daños morales y económicos a las partes y a los hijos, pues basta la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges de no continuar con el matrimonio, sin que exista necesidad de señalar la razón o motivo que genera el divorcio, lo que redundaría en la disminución de costos y tiempos tanto para el Poder Judicial estatal como para los propios divorciantes, debiendo convenir o resolverse posteriormente, respecto de las obligaciones que nacieron del matrimonio y evitar así, dañar aun mas, la relación de la familia y los hijos, en caso de que tengan.

## **7.2 Debate sobre la inclusión del divorcio incausal en el Distrito Federal.**

En la *Gaceta Oficial* del Distrito Federal el 3 de octubre de 2008<sup>451</sup>, se publicaron las reformas que crean el nuevo sistema de divorcio en el Distrito Federal; este corresponde al denominado divorcio exprés también conocido como divorcio incausal. La característica primordial es que se suprime el

---

<sup>451</sup> Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, Gaceta Parlamentaria, <<http://www.aldf.gob.mx/gaceta-parlamentaria-903-1.html>>, página visitada el 26 de abril de 2013.

divorcio necesario y las causales de divorcio y establece el trámite judicial para este proceso.

Por su trascendencia, es relevante transcribir los puntos esenciales por los cuales la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sometió para a votación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa que considero viables las reformas al divorcio, se indica como antecedentes que se recibieron dos proyecto de decreto que contienen reformas sobre el divorcio, el día 29 de noviembre del año dos mil siete, por el Diputado Juan Ricardo García Hernández que propone dejar sólo tres casuales de divorcio, tales como: la separación del cónyuge por más de un año, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos; a solicitud expresa de uno de los cónyuges, que formule al otro cónyuge; y como última causal, la violencia familiar cometida por uno de los cónyuges contra el otro, contra los hijos de ambos, o de uno de ellos; y la iniciativa presentada el día 20 de mayo del año dos mil ocho, por los Diputados Daniel Ordóñez Hernández, Nazario Norberto Sánchez y Víctor Hugo Círiga Vásquez, la cual propone eliminar las veintiún causales de divorcio establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal, en virtud de que, lo único que ha venido provocando a través del tiempo es un incremento de violencia familiar, dado que cada causal que se invoque por alguno de los cónyuges con la finalidad de disolver el vínculo jurídico del matrimonio debe probarse plenamente y como es sabido en mucho de los casos se carece de medio probatorio, pero siguiendo la base fundamental de la voluntad al celebrarse el matrimonio, también de una manera sana, responsable, respetuosa y digna será suficiente con exteriorizar la voluntad de negarse a continuar con ese matrimonio. En ese supuesto también hay beneficios para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por requerirse menos recursos materiales y tiempo de los órganos para resolver la conflictiva; así mismo para las partes, menos afectación en su economía y prontitud en la solución de su conflicto y las situaciones de hijos se resolverían en la controversia del Orden Familiar, y respecto de los bienes en el Juicio

Ordinario Civil; que bien podrían celebrar convenio al momento de ratificar el escrito correspondiente a ese respecto.

Esta nueva causal apoyará lo sostenido por los enciclopedistas del siglo XVIII que afirmaban que el matrimonio no es más que un contrato civil y que por tanto siendo un contrato civil, puede terminarse por voluntad de quienes lo contrajeron.

En los puntos considerativos relevantes, como exposición de motivos, después de hacer un análisis de los diferentes tipos de relaciones entre las personas, se establece que:

*“...En México, como en el resto del mundo, en torno al estado de derecho se han creado diversas instituciones jurídicas que garantizan los derechos políticos y civiles de los ciudadanos; particularmente la institución jurídica del divorcio, la cual hace posible que las parejas que en un momento decidieron unirse para convivir y tener familia, decidan después separarse para así retomar su camino. A pesar de que en el transcurso del tiempo han surgido fuertes críticas y una oposición a esta institución jurídica parte de personas que creen que el matrimonio es para toda la vida, ésta ha subsistido debido a que los legisladores tienen el deber de crear leyes que protejan nuestros valores y derechos, por lo que, aunque el Estado pondera la integración de la familia, también se está consciente de la realidad en la que vivimos y de la necesidad del divorcio, por lo tanto, si las parejas ya no quieren estar dentro de esa relación en la que ocurren situaciones que solo ellos conocen, se les otorgan los medios para disolverla.*

*El Estado Mexicano pugna por la organización y desarrollo de la familia plasmándola en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero a la vez, reconoce derechos naturales como la libertad, por lo que los cónyuges pueden optar por divorciarse*

*y hacer valer el derecho constitucional que tiene toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar...”*<sup>452</sup>

Posteriormente se efectúa una serie de referencia al matrimonio y a la figura actual del divorcio, para señalar que las propuestas de los diputados van encaminadas a modificar la ley en cuanto a la del divorcio voluntario y contencioso, eliminando las causales de divorcio, para surgir la creación de un proceso único para demandar el divorcio y el convenio que deberá de presentarse para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial.

Se establece que es menester actualizar la legislación familiar en los temas del divorcio, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, ya que la última época la institución del matrimonio ha venido en decadencia, que por ello, se está de acuerdo en que;

*“...el matrimonio es una institución del Derecho Civil que parte de la base de la autonomía de la voluntad de las personas y que el Estado no debe empeñarse en mantener, de forma ficticia, un vínculo que en la mayoría de los casos resulta irreconciliable. La voluntad de las partes, al ser considerado como un elemento esencial del contrato de matrimonio, debe ser tomada en cuenta para decidir si este seguirá existiendo o se disolverá. Esta voluntad no debe ser considerada y tomada en cuenta solo al momento de celebrar el matrimonio, sino durante su subsistencia y una vez llegado el divorcio. Lo anterior cada día se hace más grave, cuando nos empeñamos en tener leyes rigurosas que colocan a los cónyuges en un constante riesgo de rompimiento dando paso al divorcio, en donde las causales están inmersas unas con otras; algunas carecen de aplicación práctica y otras*

---

<sup>452</sup> *Ídem.*

*tienden a denostar a alguno de los cónyuges, siendo esto contrario a los fines del matrimonio.*

*Por ello, esta Comisión Dictaminadora considera positiva y jurídicamente viable la propuesta de reforma, respecto de la cual se propone como novedoso y vanguardista la eliminación de las hipótesis para el divorcio necesario y los artículos relativos y concordantes del Código Civil y, de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, lo que conllevaría a evitar mayores afectaciones entre las partes, ya que el divorcio representa uno de los eventos más traumáticos en la vida de cualquier persona, siendo los niños la población más vulnerable...”.*

Se indica que solo los esposos pueden decidir lo que consideran una causal bastante para divorciarse, ya que ellos son los que saben cómo se desenvuelve su matrimonio, en tanto que una autoridad judicial no tiene el conocimiento para decidir si esa causa es bastante, pues no está involucrada en la vida cotidiana de los divorciantes, que por ello el divorcio debería concederse con la simple alegación de NO querer seguir casado, lo que implica que ya no existe la voluntad como uno de los elementos del matrimonio<sup>453</sup>. Que en la práctica no todas las causales invocadas para la disolución del vínculo pueden ser demostradas, lo que impide otorgar el divorcio, lo que genera un estado de indefensión al solicitante. Que las reformas presentan una alternativa que permite disolver el matrimonio, con la

---

<sup>453</sup> Se critica que La Asamblea local del DF pretendió ser innovadora y estar a la vanguardia, al copiar el modelo de países europeos, concretamente de España. El problema radica en que los diputados partieron de un supuesto erróneo, al considerar esa unión como un contrato, susceptible de disolverse por la voluntad de uno de los consortes. En realidad se trata de un acto jurídico familiar, que involucra a ambos cónyuges en la toma de decisiones. No debe olvidarse el origen de la relación, es decir, el consentimiento de dos sujetos, con la intervención del Estado, que jurídicamente sanciona y reconoce ese vínculo, indicó la universitaria.



sola expresión de ser esa la voluntad de ambas o de uno solo de los cónyuges, sin causa alguna, por lo que el divorcio deberá otorgarse cuando se alegue no querer continuar con el matrimonio, solicitud a la cual se debe agregar el convenio para garantizar los derechos y obligaciones derivados del matrimonio en el mismo juicio.

Se hace referencia a que en el derecho comparado, los Estados Unidos, en particular en el estado de California, ha sido severamente criticado como liberal al hacer accesible el divorcio. Se indica que el divorcio sin culpa, ha demostrado su efectividad aunque enfrenta aun problemas atribuibles más a cuestiones culturales que jurídicas<sup>454</sup>, al ser expedito y evitar los problemas

---

<sup>454</sup> El divorcio exprés es una buena intención, pero en la Ciudad de México cuando una pareja se separa, el cónyuge solicitante no suele responsabilizarse de su familia; entonces, esta reforma en lugar de ser positiva encubre y acentúa varios problemas, señaló la directora del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, María Leoba Castañeda Rivas.

Continúa la especialista diciendo que con esta modalidad de divorcio, una sola persona actúa, sin oportunidad para que el otro pueda objetar; por tanto, este criterio denota falta de sistematización y ausencia de técnica legislativa”.

En 2008, se aprobó la reforma a los artículos 266 y 267 del Código Civil de la capital, entre otros, que dio paso al divorcio unilateral, voluntario o exprés, en el que uno de los cónyuges, sin dar explicaciones ni proveer causales, puede disolver el matrimonio.

Esta modificación del Legislativo local tenía una buena intención, porque un proceso de separación que dura entre nueve y 30 días puede ser sano, debido a que evita que la pareja participe de un proceso largo, desgastante y costoso, sin embargo, se descuidan aspectos importantes como alimentos, guarda y custodia de los hijos; visitas y convivencias y, en general, diversas cuestiones trascendentes para la célula familiar.

Una vez decretada la separación surgen las dificultades, porque los desposados deben desahogar los incidentes o juicios independientes, ya sea de controversias del orden familiar u ordinarios civiles; es decir, el juez sustanciará, a petición de la parte interesada, la cuestión alimenticia de los menores y/o del otro cónyuge, la división de los bienes y la custodia de los hijos, entre otros aspectos, que son los efectos del matrimonio y de su disolución.

causados por la confrontación de los esposos, pues la legislación actual en los diversos tipos de divorcio, administrativo, voluntario y necesario, (mismos que contempla el Estado de Jalisco) no resulta efectiva, preguntando que si al contraer matrimonio, intervino la voluntad de los cónyuges, porque ésta no se toma en cuenta para divorciarse, y si por el contrario se exigen una serie de requisitos y causales para solicitar el divorcio, sin considerar que quien lo peticiona lo hace porque es su voluntad ya no continuar con el matrimonio.

Se señala que eexisten diversos intentos efectuados en la legislación de los Estados de la República Mexicana para hacer más accesible el divorcio, incorporando la causal de incompatibilidad de caracteres, pero se falla en el intento al obstaculizar sus propias propuestas por las arraigadas ideologías conservadoras que mantienen el matrimonio y su fin protector de la familia.

Que según el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los últimos años, se han registrado alrededor de 14,042 demandas de divorcio necesario, por lo que las reformas al divorcio ponen al Distrito Federal a la vanguardia, al establecer procedimientos de divorcio más fáciles y sencillos.

Que cuando se llega al divorcio, el matrimonio pierde sus fines y en consecuencia la familia sufre cambios en su estructura, que si bien la familia es considerada a nivel nacional e internacional como el elemento fundamental de la sociedad y en ello justifica el Estado la protección que le brinda, el Estado debe proteger ante todo a los individuos, ya que si ellos están bien, también lo estará la familia de la que forman parte y por consiguiente, la sociedad, señalando de manera expresa que:

---

*“... No puede justificarse el obligar a un cónyuge a permanecer casado solo porque la sociedad así lo requiere, ya que se violan sus garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. El divorcio no destruye a las familias, lo que las destruye son los problemas generados por la lentitud en su resolución y las circunstancias negativas que se producen durante este tiempo, en consecuencia, tal y como lo mencionan los proponentes en la exposición de motivos de su iniciativa: “El proyecto de reforma que se presenta lejos de atentar contra la cohesión social, tiene como objeto el facilitar los canales de entendimiento entre quienes viven los procesos de divorcio; es decir, se hace más dinámico el proceso, y su respectivo procedimiento, donde la autoridad jurisdiccional podrá utilizar este tiempo en el perfeccionamiento de sus resoluciones, es decir, se elimina un motivo mayor de enfrentamiento entre seres en conflicto...”<sup>455</sup>.*

Se establece que como parte de la problemática del matrimonio y los diversos tipos que el divorcio es el instrumento para concluir un matrimonio, empero, se establecen una serie de restricciones que en ocasiones hacen imposible el divorciarse o los procesos son tan tardíos que duran más tiempo en conseguir el divorcio que el tiempo que estuvieron casados, que ante ello, los involucrados, en su mayoría mujeres<sup>456</sup> se encuentran hartos de las

---

<sup>455</sup> *Ídem.*

<sup>456</sup> *En su mayoría mujeres, las solicitantes del divorcio exprés.* De acuerdo con datos de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el período de diciembre de 2008 a noviembre del 2009, se registraron 24 mil 315 solicitudes de divorcio exprés; de ellas, 51 por ciento fueron efectuadas por mujeres; 32 por ciento por varones, y sólo el 17 por ciento fue una comparecencia de común acuerdo. En un inicio, se pensó que el sector femenino sería el más afectado y quedaría desprotegido; sin embargo, su incidencia se podría interpretar como una alternativa para liberarse de la posible violencia familiar. Sin embargo, se debe volver a la premisa original, la familia; normalmente, las mujeres se convierten en jefas de familia, deben sostener a los hijos, cubrir los gastos y,

dilaciones procesales, de la burocracia, de los factores culturales, políticos, sociales y religiosos<sup>457</sup>.

Que estos aspectos no son exagerados, y si en cambio, generan una serie de preguntas alrededor del problema que resulta el divorciarse:

*“...¿Si el divorcio es un contrato en el que interviene la voluntad de las partes para unirse en matrimonio, porque no se establece como causal o requisito para solicitarlo, la falta de esa voluntad por parte de uno solo de los cónyuges de seguir con el matrimonio? ¿Si uno de los cónyuges no quiere seguir casado, por qué no puede invocar este deseo para solicitar el divorcio? ¿Porque al ya no existir la voluntad por parte de uno de los cónyuges de continuar con el matrimonio, no se termina con este contrato por medio de una rescisión? ¿Porque en el divorcio necesario se piden una serie de causales que a veces no se pueden comprobar?, ¿y si la mujer está en cinta, tienen hijos, no tienen más de un año de casados, no encuadra cualquiera de los cónyuges en alguna de las causales del divorcio necesario y solo uno de ellos quiere divorciarse, no va a poder hacerlo? ¿Si se solicita el divorcio necesario por violencia familiar u otra causal requerida y no se puede comprobar, el cónyuge debe aguantarse y seguir casada o casado?, ¿no puede solicitarse el divorcio simplemente porque ya no se quiere seguir en matrimonio, sin tener que comprobar malos tratos, adulterio, o bigamia, etc.?...”*

---

por tanto, toman esa decisión sin responsabilizar al ex esposo, quien en algunas circunstancias sólo se hace cargo de los hijos por breves períodos, explicó la investigadora.

<sup>457</sup> La reforma del Código Civil –que incluye el divorcio exprés, la fertilización asistida, el alquiler de vientres y la adopción por parte de parejas del mismo sexo– es resistida hace meses por la Iglesia Católica. INFONews, *Torquemada siglo XXI*, disponible en <<http://veintitres.infonews.com/nota-5277-politica-Torquemada-siglo-XXI.html>>, página consultada el 27 de abril de 2013.

Como punto esencial de la exposición de motivos se indica que con el divorcio incausal, el legislador:

*“...dará la oportunidad a los involucrados de proteger su intimidad, respecto de los actos de conflicto que hayan padecido y que consideran que el hecho de exponer ante un tribunal sus motivos o causales de divorcio afectaría su dignidad, imagen y reputación social, por ello, se considera que no debe de exigírseles exponer las causales que han tenido para demandar el divorcio. Por lo tanto, ante una realidad de incumplimiento a los deberes y derechos que nacieron del matrimonio, se llega a convertir en indigno, injusto y fuera de toda ética moral la de mantener dicho vínculo jurídico, pues les trunca el camino para llegar al divorcio de una manera sana y respetuosa, y que a futuro puedan intentar una nueva unión lícita que bien pudiera ser más estable o benéfica que la anterior...”.*

Se apunta que los matrimonios en crisis, produce en ellos un conflicto emocional, consistente en la frustración que surge ante el medio que rodea a los divorciantes, de cómo se enfrentaran las críticas de ese rompimiento ante los familiares de cada cónyuge, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que nadie quiere que los demás se enteren de los conflictos íntimos; sin embargo estos se agrava al tener que expresar en la demanda la exposición de las causales y los hechos que las generan, haciendo una narración circunstanciada de todos y cada uno de los acontecimientos y además aportar una serie de pruebas al Juez, en la que se tendrá que llevar a aquellas personas que presenciaron alguno de los hechos, lo que implica un temor a enfrentar un procedimiento en tales condiciones, además de tener que enfrentar al cónyuge y revivir constantemente las vivencias de maltrato.

En la exposición en comento, se indica que la propuesta de reforma es una iniciativa que pugna porque haya un remedio más sano, para con,

facilidad, disolver el vínculo jurídico matrimonial. Que se sabe que siempre hay una causa para solicitar el divorcio, pero que con el divorcio incausal:

*“...se tendrá la seguridad que los acontecimientos dados en la intimidad del hogar seguirán resguardándose si no se quiere exponerlos ante un tribunal y una sociedad que llegue a emitir críticas erróneas, por no conocer la verdad histórica de ese matrimonio y desde el punto de vista procesal, solo se tendrá que acreditar y reafirmar esa voluntad de divorciarse, sin violentarle la garantía del otro cónyuge de llamarlo a juicio...”.*

Como resumen del procedimiento propuesto para el divorcio por voluntad unilateral, se establece que en caso de que el otro cónyuge, al contestar la petición, no esté de acuerdo con el convenio regulatorio de las consecuencias del divorcio, se resolverá lo conducente de acuerdo con las pruebas que se aporten y cuando así se justifique, lo inherente a la distribución de los bienes comunes, pago indemnizatorio, alimentos, guarda y custodia y convivencias respecto de menores e incapaces.

Que en materia procesal, se destaca la intención de que no proceda el recurso de apelación cuando sólo se trate de la declaración de divorcio y que solo en caso de que no se decrete el divorcio o se impugne lo resuelto sobre la distribución de los bienes comunes, pago indemnizatorio, alimentos, guarda y custodia y convivencias respecto de menores e incapaces, si procederá la apelación.

En relación con los alimentos (los alimentos son; según Laura Chapre)<sup>458</sup> en el divorcio por voluntad unilateral, la pensión para el cónyuge

---

<sup>458</sup> Dentro del derecho de familia y de dónde surge el derecho, deber de peticionarlos y proveerlos. Los alimentos constituyen una obligación legal que implica un conjunto de medios materiales destinados a proveer los recursos necesarios para la subsistencia física y moral de

que ha sido dependiente económico, tendrá igual duración a la que tuvo el matrimonio, salvo pacto en contrario y que cesará cuando el acreedor alimentario contraiga matrimonio, se una en concubinato, u obtenga un empleo o fuente de ingresos que le permita la plena subsistencia alimentaría.

Que contestada la solicitud de divorcio o, en su defecto, haya precluido el término para contestar la demanda, el juez citará a las partes para promover el acuerdo entre las pretensiones expuestas en los convenios propuestos con la demanda y su contestación. De no darse esto, se procederá en los términos de lo dispuesto por el propio Código de Procedimientos Civiles.

Se propone suprimir el término de indemnización (figura que no se contempla en el Estado de Jalisco) por el de retribución económica dado que la indemnización opera cuando es resultado de un daño o perjuicio ocasionado y el hecho de dedicarse al hogar o al cuidado y educación de los hijos por sí solo no se ocasionan daños.

Finalmente, se indica que con esta reforma, se intenta que sea más expedito el trámite de un divorcio, que:

*“...Se propone como solución a las mujeres y hombres que se encuentran en la indefensión por no poder demostrar que eran objeto de violencia por parte de sus cónyuges, que fueron dañados por infidelidad, violencia, etcétera. Con la aprobación del dictamen, se tiene una relevancia social, ya que se disminuiría el costo de los procesos de divorcio, fomentaría la armonía entre los involucrados directa o indirectamente en el matrimonio que se quiera disolver, se lograría una*

---

una persona. Las prescripciones atinentes a esta materia, surgen de la vocación social por asegurar la solidaridad familiar y los legítimos afectos que se derivan de las relaciones de parentesco. El concepto de parentesco está previsto en nuestro Código Civil.

*mayor estabilidad emocional de los hijos y de la familia y se obtendría un progreso en esta materia. Además se benefician los cónyuges, los hijos, los familiares, los amigos y aquellos que en el futuro se encuentren ante la necesidad de solicitar un divorcio...”.<sup>459</sup>*

Acto continuo se propone la reforma de los siguientes artículos: 266, 267, 271, 277, 280, 282, 283, 283 Bis, 287, 288; y se derogan los artículos 273, 275, 276, 278, 281, 284, 286 y 289 Bis, todos del Código Civil para el Distrito Federal, y se establece en qué términos deben quedar.

Posteriormente da inicio el debate del dictamen de iniciativa con argumento a favor y en contra, en contra se expresa el diputado José Antonio Zepeda, quien en resumen, expresa que, la iniciativa es aberrante al borrar de un plumazo las causales de divorcio, que al partido Acción Nacional le interesa proteger a la familia, pero con argumentos de técnica jurídica precisos y exactos que no están en el dictamen, que les interesa una correcta política social y eliminar los mecanismos que cargan de manera innecesaria de trabajo al órgano jurisdiccional, pero que el dictamen es “*..irse hasta la cocina y más allá...*”, que se reconoce la circunstancia de la crisis del matrimonio, pero ello no da derecho a eliminar las causales que están establecidas para protección, defensa de los derechos de una o de las dos partes. Que es sabido que un contrato genera obligaciones y derechos para ambas partes y que la rescisión del mismo no puede darse por voluntad de una de ellas, pues se violentan derechos constitucionales, como es la de acción y la excepción en la defensa, la de un debido proceso, pues se violan de forma flagrante los artículos 14 y 16 Constitucionales que establecen en

---

<sup>459</sup> *Ídem.*



pocas palabras, que nadie puede ser privado de derecho alguno sin juicio previo.<sup>460</sup>

Que en la propuesta es claro que no hay juicio, sino solo la petición, que si es voluntario ya existe su regulación y que incluso es más ágil. Que

---

<sup>460</sup> Crítica. *Un retroceso en la materia*. Por la directora del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, María Leoba Castañeda Rivas. Este proceso es armonioso sólo si ambas partes están de acuerdo en concluir el vínculo matrimonial, porque sólo así se puede hablar de divorcio voluntario; “si la situación es contraria, la consecuencia de la solicitud unilateral agrede a la otra parte, pues sin importar su opinión, el juez dicta la sentencia”. Es preocupante que haya un retroceso en la materia porque se desprotege a la familia. La jurista recordó que históricamente México se había caracterizado por incluir en su legislación una sistemática adecuada, que definía claramente quién se encargaría de los efectos del matrimonio una vez efectuado el divorcio. Por esa situación, el país fue reconocido por naciones como Argentina, Chile o España, que tuvieron sus leyes concernientes a finales del siglo XX. “La sistemática mexicana era cuidadosa y pulcra en la protección del entorno familiar, al regular lo que ocurrirá en relación a los hijos, los bienes y los cónyuges separados”. En el país, desde 1914 se contaba con la Ley del Divorcio Vincular, impulsada por Venustiano Carranza, que rompe la unión matrimonial y permite contraer nuevas nupcias, “Al quedar libres, se calificaban los efectos del divorcio, porque a ninguna persona se le puede tener “*a fortiori*” en una relación conyugal no deseada, pero debe protegerse el interés de los hijos y de los divorciados”. En esa ley, se creó un catálogo exhaustivo de causales para probar los motivos de la disolución del vínculo, lo que con el tiempo, desencadenó procesos largos, costosos y que agravaban el conflicto entre la pareja. Posteriormente, en 1917 la regla fue incluida en la Ley Sobre Relaciones Familiares, para proteger el entorno familiar, porque determinaba la custodia de los hijos, el derecho de convivencia, la manutención y el techo, entre otros. Con la creación del Código Civil de 1928 (que entró en vigor en 1932), y poco a poco, con una serie de reformas y experiencias en la materia, el catálogo de causales se hizo casuístico, y los procedimientos largos, por lo que la Asamblea capitalina tomó cartas en el asunto, pero faltó el elemento de la tramitación de los efectos del matrimonio y de la separación frente a los descendientes, los bienes y los divorciados. El divorcio exprés es una puerta falsa, que desprotege a la familia; cuando sólo un cónyuge se hace responsable del hogar y el otro queda totalmente liberado se violenta el orden público y el interés social. “Esta reforma tiene sus bondades, pero cuando se efectúa por acuerdo mutuo; por tanto, el Legislativo local debió garantizar la organización familiar”.

tema más grave y lamentable, es que al no existir ninguna causal, los derechos de la mujer se eliminan y se pregunta;

*“...¿no quedamos que muy plurales y muy defensores de los derechos de la mujer? Hace algunos meses en esta Tribuna se discutió el tema de la indemnización en caso de divorcio, cuando el cónyuge culpable era el hombre. Si hoy se aprueba así como está este dictamen, una mujer jamás, jamás, jamás, jamás va a poder demandar indemnización debido a que si no existen causales no podrá actualizar la de violencia intrafamiliar. Esto es lo que están aprobando los defensores y promotores de los derechos de la mujer, los defensores de las garantías de igualdad y seguridad. Estas son las propuestas que se dicen llamar de avanzada, propuestas progresistas, que en el papel lo único que hacen es violentar de manera grave los derechos de la mujer. Ahí está la propuesta. Dejo a la crítica pero también hago una propuesta y la pongo sobre la mesa, revisemos las causales de divorcio una por una, eficientemos y eliminemos las que están de manera innecesaria ahí, pero no aprobemos estas cosas que están generando certeza para la ilegalidad...”*<sup>461</sup>

En tanto que en pro<sup>462</sup>, el diputado Daniel Ordóñez, hace el uso de la voz y en resumen, expresa que el artículo 4º Constitucional señala que toda

---

<sup>461</sup> Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, *op. cit.*, nota 451.

<sup>462</sup> Argumentos a favor. Constitucional divorcio exprés según la actual Suprema Corte. Ciudad de México, México, sep. 23, 2009.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia avaló el divorcio sin causales, llamado también "divorcio exprés", vigente en el Distrito Federal. Los ministros determinaron que este no atenta contra la sociedad ni la familia, sino todo lo contrario, porque evita conflictos y enfrentamientos con todo lo que implican como odios, violencia, egoísmo y acciones maliciosas. Así los ministros le dieron la razón a un esposo que pidió el divorcio unilateralmente, en contra de la voluntad de su mujer; ella impugnó la disolución del vínculo argumentando que se viola la Constitución porque ésta protege la organización y el desarrollo de la familia. Sin embargo, los ministros avalaron la

persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, que si dos personas que se unieron en matrimonio ya no pueden convivir, por qué el Estado los va a obligar a que continúen, por qué el Estado va a obligar a que acrediten los extremos de una de las causales, que la acreditación de estas trae como consecuencia, que por instrucciones del abogado hay que inventar las pruebas para acreditar las causas, porque si no se acreditan las causas no les conceden la disolución del vínculo matrimonial, que se toman de rehenes a los hijos, que los bienes de la sociedad también son utilizados como moneda de cambio. Que no se violenta la garantía de audiencia, porque la otra parte es emplazada y notificada de la demanda, para acudir a contestarla. Que la propuesta de disolución del vínculo matrimonial se va a decretar de manera pronta, sin necesidad de acreditar alguna causa, sin necesidad de acreditar que hubo adulterio o que hubo alguna otra de las causales de divorcio, que el resto de los efectos del divorcio, sobre bienes e hijos se llevara por separado, pues no se mezclan uno con lo otro.

El diputado Nazario Norberto, argumenta en contra, y dice que no se desconoce el exceso de formalismos en el Código Civil y en el de Procedimientos Civiles para el divorcio, que tanto la ley como la jurisprudencia exigen una serie de elementos para acreditar las causales, por lo que estaría de acuerdo en suprimir las causales, pero no en cuanto a que el divorcio se decrete unilateralmente por la voluntad de uno de los cónyuges, privando al otro consorte la posibilidad de manifestarse en contra de éste de quien

---

constitucionalidad del Código Civil para el Distrito Federal que establece que uno de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin mayor argumento que el de no querer continuar con el matrimonio, y dijeron que esto evita afectar el desarrollo psicosocial de la familia, además de que nadie, ni el estado, puede empeñarse en mantener vigente un matrimonio en el que una de las partes considera que su situación es irreconciliable. México Legal, Constitucional divorcio express según la actual Suprema Corte, <<http://www.Méxicolegal.com.mx/cafeteando-ver.php?id=423>>, 23 de septiembre de 2009, página visitada el 12 de diciembre de 2012.

pretende divorciarse, lo que lo priva del derecho constitucional a la defensa, pues suprime su garantía de audiencia y deja abierta la situación para un proceder arbitrario de la autoridad, lo que además genera la liberación de observar, cumplir y hacer cumplir el procedimiento, violentando las garantías de legalidad, seguridad, derecho a la amplia defensa y de la exacta aplicación de la ley, previstos en los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales.

Que ciertamente el matrimonio nunca dejó de considerarse como un contrato, pero de ninguna manera deja de ser bilateral, que la no existencia de cónyuge culpable presentara incertidumbre en cuanto al derecho a alimentos del inocente. Que la regla general en el derecho civil mexicano es que las relaciones jurídicas no pueden disolverse por la voluntad de una sola de las partes, a menos que se trate de una disolución forzosa, que sobrevenga por una causa justificada por la ley. Que si se discute la pertinencia de suprimir del las causales de divorcio, no se debe violentar el Estado de Derecho, por lo que se pronuncia en el sentido de que en la demanda de divorcio necesario se expresen los hechos que la motivan, dar posibilidad al demandado a que se defienda, exista el periodo probatorio y se emita la sentencia respectiva. (Que en si corresponde al procedimiento ordinario, cuya derogación se propone).

Por su parte, el diputado Juan Ricardo García, de la Coalición de Izquierdas (coautor de la iniciativa), expresa que la discusión gira en torno del fortalecimiento y desarrollo armónico de la familia como núcleo social, porque a través de ella se desarrollan los valores y los principios de educación que fortalecen al individuo y a la sociedad, pero ante la crisis de valores que actualmente existen, en todo procedimiento de divorcio se debe cuidar la protección de los integrantes de la familia y que cuando es inevitable la separación de los cónyuges, se debe dotar de mecanismos jurídicos que permitan que el procedimiento de divorcio se efectúe con pleno respeto a los derechos de los cónyuges y de los menores hijos.

Que el fin de la iniciativa es el regular de mejor manera:

*“...el tortuoso, extenso y complicado procedimiento del divorcio, el cual afecta la integridad, los derechos de los cónyuges, ocasionándoles graves daños económicos e incluso de carácter emocional. Las estadísticas en el país señalan que de cada uno de cada 13 matrimonios en México termina en divorcio; en el Distrito Federal el promedio es de uno de cada 8, según la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México.*

*Los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática han arrojado cifras que se traducen en el aumento progresivo del divorcio, lo cual implica y refleja la crisis por la que está pasando el matrimonio y por ende la familia.*

*Para el año 2003 se registraron 64 mil 284 divorcios; en el 2004, 67 mil 575 divorcios, y para el 2005 la cifra fue de 70 mil 154 divorcios.*

*Las causales de divorcio previstas en el Artículo 267 son un verdadero obstáculo para que los ciudadanos de nuestra Capital regularicen una situación que de facto está dada. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha registrado en los últimos años alrededor de 14 mil 42 demandas de divorcio necesarios invocándose en las causales establecidas en el Artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal. Los datos reflejan a toda luz que los factores que originan el divorcio hacen inoperante y obsoletas a las causales establecidas por el Artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, aunado a que en la práctica del procedimiento judicial es tan rígido y tan austero que no permite y dificulta acreditar plenamente las causales del divorcio...”*<sup>463</sup>

---

<sup>463</sup> *Ibídem.*

Que las reformas que se proponen agilizan al proceso y se establece una serie de disposiciones que preservan los derechos de las partes, que se regula de mejor manera el procedimiento civil, estableciendo las bases para que se realice con pleno respeto a los derechos de los cónyuges y que se eliminan vicios que existen en el procedimiento actual.

En uso de la palabra el diputado Martín Carlos Olavarrieta, externa como voto razonado, que al interior de la comisión, expuso los principios normativos que protegen a la familia establecidos en el Código Civil, en específico en el artículo 138 que establece que las disposiciones a que se refiere a la familia son de orden público, interés social y tienen por objeto proteger su organización y desarrollo integral entre sus miembros, basados en el respeto y en la dignidad. Que aludió al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad. Que para brindar mayor certeza jurídica al procedimiento propuesto, le que ya no es controversial, para no dejar en estado de indefensión ni haya impugnaciones, presentara las reservas de diversos artículos, para que las partes puedan presentar en su oportunidad los convenios propuestos y que con ello no se vulnera ninguna garantía individual.

En la materia procesal se reforma elimina las causales y las acomoda en un divorcio mal llamado unilateral, pero que es voluntario y que permite a las partes rápidamente, ver el divorcio como mutuo consentimiento, pero también lo importante, se quedan protegidos los derechos de los menores, tanto para la salva, guarda y custodia de ellos, queda también protegido el ámbito patrimonial.

Por su parte la diputada Laura Piña, en uso de la palabra denuncia un caso de una amiga que no logro obtener el divorcio necesario y las penurias

que paso, y exterioriza que si alguien ya no quiere vivir con el otro, eso es lo que debe determinarse por el juez. Que la mujer debe callar, por vergüenza, las vejaciones que les propinan, que no se atreven a denunciar los hechos ante el Ministerio Público, y de hacerlo, pasan por otra serie de vergüenzas y exigencias de la ley. Que cuando ya dos personas no desean vivir juntas tienen el pleno derecho para decidirlo.

El diputado Arturo Santana, expresó que actualmente la familia atraviesa una grave crisis por convivencias anómalas, que luego genera un largo proceso de divorcio, derivado de las etapas procesales a las que se enfrentan los divorciantes, por lo cual es necesario que los procesos sean más expeditos. Que el dictamen adolece de fallas técnicas jurídicas, que es menester revisar y hacer las correcciones, las modificaciones y adecuaciones a los órganos sustantivos y a los adjetivos que rigen la materia, ya que es perfectible, que debe proponerse un procedimiento que cumpla cabalmente la finalidad para lo que fue creado, que por ejemplo, en el artículo 177, se determina la separación de los cónyuges cuando no quieren solicitar el divorcio por alguna de las causales determinadas, empero se pregunta; *“...¿Pero no el matrimonio nos habla de una comunidad de vida? ¿Dicha comunidad de vida no se romperá al solicitar la suspensión de cohabitar? Por lo que estamos cayendo de nueva cuenta en el error...”*.

Igualmente hace una serie de observaciones en cuanto al contenido de los artículos 282, 287 del código civil, pues estima que se violentarías los derechos de las personas que no desean el divorcio y en cuanto a las reformas del Código de Procedimientos Civiles, particularmente del artículo 272-A que habla de la reconvencción, lo que es contradictorio, pues si no hay causales a quién se va a reconvenir, al igual que en lo relativo al conciliador adscrito al juzgado, pues no existe dicha figura jurídica y ninguna parte del texto, ni aún en los artículos transitorios, se señala la creación del mismo. Manifestando su inconformidad con el contenido del artículo Cuarto

Transitorio, ya que no se acota que las disposiciones derogadas permanecerán vigentes hasta en tanto hayan concluido en su totalidad los juicios de divorcio que actualmente se ventilan ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Señala que está de acuerdo en un procedimiento más expedito y menos tortuoso, pero que no esté plagado de inconsistencias, que podrían generar una avalancha de amparos en contra de la ley, por lo que propone que se regrese el dictamen para su estudio y perfeccionamiento y que se tomen en consideración los argumentos que se han planteando en el debate.

El diputado José Antonio Zepeda, nuevamente en uso de la voz, apunta que deben centrarse en la discusión y dejar fuera juicios de valoración, que con la propuesta el *“...divorcio necesario es más voluntario que el voluntario; porque el voluntario se requiere el acuerdo de dos partes y en el necesario ahora bastará una de las dos...”*.

Responde a la anécdota expresada por la diputada Laura Piña Olmedo, y alude a que en todo caso sería un error del juez, que no se trata de definir por decreto cuándo se acaba o no el amor, pero que no se puede determinar en qué momento se va a terminar de manera unilateral un acto cuya naturaleza y origen fue bilateral.

Qué al no haber causales, ni litis, no hay tema de discusión y se viola el derecho fundamental de controvertir, se viola la garantía del debido proceso.

En uso de la voz el Diputado Daniel Ordoñez Hernández, expresa que en respuesta al diputado Arturo Santana, hace algunas precisiones sobre el artículo 272-A del Código de Procedimientos Civiles, pues efectivamente no tendría por qué haber reconvención si no hay el planteamiento de una cuestión, pero tal dispositivo se refiere a las reglas generales del



procedimiento, no para el divorcio y que aparece en el dictamen por que se especifico la palabra “días” después del numero 10, que no estaba en la redacción anterior, pero nada tiene que ver con el procedimiento de divorcio. Que en el proyecto si estaba el cuarto transitorio, pero que en el dictamen fue suprimido, al percatarse de su inconsistencia y hoy aparece con mucha precisión.

De la misma manera da respuesta a otras de las intervenciones de los diputaos, exterioriza que si está contemplada la compensación en el artículo 267, que si se protege a la mujer que se dedica a las labores preponderantemente del hogar, en el contenido del Artículo 282, que el juez va a ordenar, cuando existan bienes que pertenezcan a ambos cónyuges la anotación respectiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la revocación o suspensión de los mandatos que se hubieren otorgado los cónyuges, acorde al artículo 2596 del Código de Procedimientos Civiles; y continua con una narración de la normatividad planteada en el dictamen.

El Diputado Martín Olavarrieta, advierte que se reserva el contenido de los artículos 267, 271, 280, 282, 283 Bis, 114 del Código Civil, y del Código de Procedimientos Civiles el 255, 260, 272A, 272B, únicamente.

Finalmente se somete a votación el dictamen y de su resultado se obtiene: 36 votos a favor, 12 votos en contra, 2 abstenciones, por lo que el Presidente da por aprobado el dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Acto continuo se procede al desahogo de los artículos reservados por el diputado Martín Olavarrieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien hace observaciones al contenido del artículo 267 en lugar de que diga “acompañar a su petición la propuesta de

convenio” debe decir “la solicitud”, que en las modificaciones que propone, son para que la solicitud de divorcio sea acompañado con un convenio propuesto y el juez espere la contestación de esa solicitud de divorcio con otro convenio propuesto para que pueda en ese momento dictar cualquier determinación respecto con los menores, respecto con la guarda y custodia y sobre las cuestiones patrimoniales, que son los aspectos de conflicto que hay que superar aparte de la simple disolución del vínculo matrimonial, con lo que se protege a la familia.

Que en el artículo 271 establece las limitaciones formales de las pruebas que en el caso de divorcio deben presentarse con el convenio propuesto y también con la contestación del convenio propuesto. El artículo 280, no es juicio sino es un procedimiento, por lo que solicita su modificación.

Sobre el artículo 282, sugiere que es importante señalar que acorde a su redacción, el juez de oficio puede proceder, pero que solicitan que el juez esté impedido a decretar o determinar alguna cosa hasta en tanto no tenga el otro convenio propuesto por la otra parte, para que el juez pueda valorar las dos propuestas reguladoras y en su momento determinar lo conducente, y evitar un desequilibrio entre las partes.

Refiere que en el Apartado 283-bis, hace mención que es un simple error mecanográfico, porque habla acerca de la fracción II del Apartado B y no así de la fracción VI del Apartado 282. En el artículo 255 establecemos ya los casos de divorcio, ya no son juicios, son casos de divorcio en los cuales deben incluirse la propuesta de convenio del 267 y establece los mismos requisitos que se establecían anteriormente al divorcio por mutuo consentimiento. Entonces se presenta el convenio, aquí le llaman “regulador”, que ya se omitió también, por lo que solicito se quite lo del “convenio regulador”, porque ya hay dos convenios, el del que solicita y el otro que es su contrapropuesta, para que el juez pueda dictaminar.

Señala que el 260 no lesiona ni se vulnera ninguna garantía individual debido a que se le da vista a la parte, se le corre traslado y por ello agrego la cuestión de la contrapropuesta. Es decir, debe el juez recibir la propuesta de la otra parte de la persona que no se está divorciando.

Sobre el contenido del artículo 272, también hace observaciones relacionadas con el convenio de cada parte, o bien la preclusión, el allanamiento o cuando ambas partes presentes el convenio voluntario.

Finalmente recomienda que tratándose de divorcio el juez lo decretará una vez que haya contestado la solicitud presentada o en su defecto haya precluído el término para contestarla. Con eso estima que se brindaría certeza jurídica y garantiza este procedimiento especial, que no es conflicto ni litigio, sino una solicitud de divorcio exclusivamente para la disolución del vínculo matrimonial, sin causales, que beneficiaría muchísimo a las personas que se encuentran inmersas en esta problemática.

Sin oradores ni a favor ni en contra, se somete a votación económica y votación nominal el conjunto de los artículos reservados, efectuada la misma, el Diputado Presidente, indica que el resultado es el siguiente: 36 votos a favor, 12 votos en contra, 0 abstenciones. Por lo cual se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos para el Distrito Federal<sup>464</sup>.

---

<sup>464</sup> Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, *Gaceta Parlamentaria*, 3 de octubre de 2008.

Motivo de dichas reformas, el divorcio incausal, quedo establecido en el Distrito Federal, y con el paso del tiempo, muchas de las dudas o impugnaciones efectuadas, han quedado solventadas a través de la interpretación de la norma que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como luego se verá.

### **7.3 El proceso de divorcio incausal en el Distrito Federal.**

En la actualidad el Código Civil para el Distrito Federal, en su arábigo 146 señala que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente código.

En tanto que de lo dispuesto por el numeral 266 del Código en cita, se advierte que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.

Asimismo, que el divorcio podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo y que solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el numeral 267 del cuerpo de leyes en cita, el cual establece lo siguiente:

Que el cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos:

I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces;

II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos;

III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento;

IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje;

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición;

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos o que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo las circunstancias especiales de cada caso.

Por otra parte el numeral 271 del citado cuerpo de leyes sustantivas, señala que los jueces de lo familiar están obligados a suplir la deficiencia de las partes en el convenio propuesto y que las limitaciones formales de la prueba que rigen en la materia civil, no deben aplicarse en los casos de divorcio respecto del o los convenios propuestos.

El tanto que el artículo 277, establece que la persona que no quiera pedir el divorcio podrá, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligación de cohabitar con su cónyuge, cuando éste se encuentre en alguno de los siguientes casos:

I.- Padezca cualquier enfermedad incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria;<sup>465</sup>

II.- Padezca impotencia sexual irreversible<sup>466</sup>, siempre y cuando no tenga su origen en la edad avanzada; o

III.- Padezca trastorno mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge enfermo;

Y en estos casos, el juez, con conocimiento de causa, podrá decretar esa suspensión; quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el matrimonio.

---

<sup>465</sup> Se entiende por enfermedad incurable, el padecimiento de una persona cuyo tratamiento la ha rebasado las posibilidades de la ciencia médica.

<sup>466</sup> La impotencia sexual se define como la incapacidad reiterada o continua (durante un periodo de al menos tres meses) para lograr y mantener una erección suficiente que permita completar una relación sexual satisfactoria. También, a la incapacidad de realizar el acto sexual por no alcanzar o mantener la suficiente erección del pene para introducirlo o mantenerlo introducido en la vagina de la mujer durante el coito.

Por otro lado, el numeral 280, establece que la reconciliación de los cónyuges pone término al procedimiento de divorcio en cualquier estado en que se encuentre y que para tal efecto los interesados deberán comunicar su reconciliación al Juez de lo Familiar.

El artículo 282, dispone que desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; y que asimismo, en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes:

A. De oficio.<sup>467</sup>

I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas;

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda;

---

<sup>467</sup> Se denomina actuación de oficio a un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte, disponible en Wikipedia, <[http://es.wikipedia.org/wiki/De\\_oficio](http://es.wikipedia.org/wiki/De_oficio)>, página visitada el 16 de enero de 2013.

III.- Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes;

IV.- Revocar, es decir, según Pina Vara, dejar sin efecto un acto jurídico<sup>468</sup> o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2596 del Código Civil para el Distrito Federal;

B. Una vez contestada la solicitud:

I.- El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte<sup>469</sup>, y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia.

II.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio.

---

<sup>468</sup> Pina Vara, Rafael De, *op. cit.*, nota 326.

<sup>469</sup> Por audiencia de parte se entiende el complejo de peticiones y actos que realizan las partes en juicio



En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad.

Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.

III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres;

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición.

Durante el procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise; y

V.- Las demás que considere necesarias.

Por lo que ve al artículo 283, este establece que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de edad para lo cual deberá contener las siguientes disposiciones:

I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad su pérdida, suspensión o limitación; a la guarda y custodia, así como a las obligaciones de crianza y el derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores.

II.- Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia familiar física o psíquica o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y pleno.

III.- Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos con sus padres, misma que sólo deberá ser limitada o suspendida cuando exista riesgo para los menores.

IV.- Tomando en consideración, en su caso, los datos recabados en términos del artículo 282 de este Código, el Juez de lo Familiar fijará lo relativo a la división de los bienes y tomará las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los excónyuges tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos.

V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias necesarias para corregir los actos de violencia familiar en términos de la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar y Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el Distrito Federal. Medidas que podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

VI. Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los excónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección;

VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia de la compensación que prevé el artículo 267 fracción VI, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.

VIII.- Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés de los hijos menores de edad.

Asimismo, se señala que para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio o a petición de parte interesada, durante el procedimiento el Juez se allegará de los elementos necesarios, debiendo escuchar al Ministerio Público, a ambos padres y a los menores.

Sobre el dispositivo anterior, debemos considerar el contenido del artículo 578 del Según el Código Civil del Estado de Jalisco, que señala: Se entiende por patria potestad la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre, y por otra, los hijos menores no emancipados, cuyo objeto es la custodia de la persona y los bienes de esos menores, entendida ésta en función del amparo de los hijos.<sup>470</sup>

El tanto que el arábigo 283 Bis, establece que en caso de que los padres hayan acordado la guarda y custodia compartida en términos de lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 282, el Juez, en la sentencia de divorcio, deberá garantizar que los divorciantes cumplan con las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana para los hijos.

---

<sup>470</sup> Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, art. 578.

En esa orden de ideas, el numeral 287, refiere que en caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 267 y éste no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia; y de no ser así, el juez decretará el divorcio mediante sentencia, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio.

Por otro lado, el numeral 288, señala que en caso de divorcio, el Juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes circunstancias:

- I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges;
- II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;
- III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;
- IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;
- V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y
- VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.

En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio.

En cuanto a las reglas procesales para el trámite del divorcio contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debemos atender a la siguiente normatividad:

En el dígito 59, se establece que las audiencias en todos los procedimientos, en lo que ve a la fracción I del numeral serán públicas, pero el tribunal podrá determinar que aquéllas que se refieran a divorcio, nulidad de matrimonio, o las demás en que a su juicio convenga, sean privadas, y que en todos los supuestos en que no se verifiquen públicamente, se deben de hacer constar los motivos para hacerlo en privado, así como la conformidad o inconformidad de los interesados, siendo el acuerdo respectivo reservado.

Por su parte el numeral 114, señala en sus fracciones I, III, IV y VIII, establece que será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes:

I.- El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el procedimiento, de diligencias preparatorias o de jurisdicción voluntaria en que se deba hacer saber de las mismas a la otra parte;

III.- La primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar por más de seis meses por cualquier motivo;

IV.- Cuando se estime que se trata de un caso urgente y así ordene;

VIII.- En los procedimientos de competencia de los jueces de lo familiar, hecho el emplazamiento y obrando contestación a la demanda o solicitud de divorcio, quedarán obligadas las partes, ya sea en forma personal o por conducto de sus representantes legales, a enterarse de todas las actuaciones que se dicten en el procedimiento a través del Boletín judicial, salvo que el Juez considere otra cosa, con excepción de lo señalado en las fracciones I, III y IV; asimismo, para el supuesto de que dicha diligencia se refiera a entrega de menor, la misma se practicará en el lugar en donde reside el requerido.

El numeral 156, refiere en su fracción XII que en los juicios de divorcio, es Juez competente el del domicilio conyugal, y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado.

En tanto que el artículo 255 señala que toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual se expresaran los puntos ahí establecidos, y en su fracción X, refiere que en los casos de divorcio deberá incluirse la propuesta de convenio en los términos que se establece en el artículo 267 del Código Civil, con excepción de lo preceptuado en el segundo párrafo de la fracción V de ese artículo (el cual establece que “*Asimismo debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión*”), debiendo ofrecer todas las pruebas tendientes a acreditar la procedencia de la propuesta de convenio.

Por su parte, el artículo 260, señala que en los casos de divorcio, el demandado al formular la contestación a la demanda podrá manifestar su conformidad con el convenio propuesto o, en su caso, presentar su contrapropuesta, debiendo anexar las pruebas respectivas relacionadas con la misma.

Por lo que ve al numeral 272 A, se establece que una vez contestada la demanda, y en su caso, la reconvenición<sup>471</sup> el Juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de conciliación dentro de los diez días siguientes, dando vista a la parte que corresponda con las excepciones que se hubieren opuesto en su contra, por el término de tres días. Que si asistieran las dos partes, el juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y luego se procederá a procurar la conciliación que estará a cargo del conciliador adscrito al juzgado. Que el conciliador preparará y propondrá a las partes, alternativas de solución al litigio. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. Y en los casos de divorcio, si los cónyuges llegan a un acuerdo respecto al convenio, el juez dictará un auto en el cual decreta la disolución del vínculo matrimonial y la aprobación del convenio, sin necesidad de dictar sentencia. Que en caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el juez, que dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, examinará en su caso, las excepciones procesales que correspondan.

Asimismo, se establece que en los casos de divorcio, no se abrirá el periodo probatorio a que se refiere el artículo 290 de este código, toda vez que las pruebas relacionadas con el convenio propuesto debieron ofrecerse al momento de presentarse la solicitud y, en su caso, la contestación a la misma, por lo que únicamente se ordenará su preparación y se señalará fecha para su desahogo en el incidente correspondiente.

El artículo 272 B, señala que tratándose de divorcio, el juez lo decretará una vez que se haya contestado la solicitud presentada o en su defecto, haya

---

<sup>471</sup> Reclamación formulada por el demandado contra el demandante, al tiempo de contestar la demanda, se acumula a esta para discutirse en conjunto y resolverse en la misma sentencia.

precluído<sup>472</sup> el término para contestarla. Y en caso de diferencias en los convenios propuestos, el juez, dentro de los cinco días siguientes, citará a las

---

<sup>472</sup> Es necesario distinguir entre tres términos de importancia en el derecho procesal: la prescripción, la preclusión y la caducidad. Al respecto, véase, Arellano García, Carlos, *Teoría General del Proceso*, México, Editorial Porrúa, 1998, *passim*; donde hace las siguientes señalizaciones:

En su carácter de derechos, las acciones también pueden prescribir por el transcurso del tiempo.

La palabra “preclusión” es un vocablo típicamente jurídico cuyo significado alude a la sanción que trae consigo el desaprovechamiento de los términos por la parte interesada. La regla es que si no ejercita el derecho dentro del término legal que le ha sido fijado, se extingue ese derecho en su perjuicio.... Es la institución jurídica en virtud de la cual, la parte dentro del proceso está imposibilitada para ejercer un derecho fuera del momento oportuno en que pudo haberlo hecho.

En el vocabulario jurídico se ha introducido el vocablo “caducidad” para significar una de las especies de extinción del proceso, sin llegarse a la sentencia definitiva, por causa de inactividad de quien ha de preocuparse de incrementar la dinámica de ese proceso...

La caducidad es sinónimo de perención y es la extinción de la instancia procesal porque las dos partes abandonen el ejercicio de la acción procesal. El abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para que éste llegue a su fin.

Por último señala que con la caducidad se pone fin a la instancia, no a la acción, por lo que esta puede ser intentada nuevamente, siguiendo las reglas de su propia prescripción.

Por su parte, el maestro Cipriano Gómez Lara apunta que: El concepto de preclusión está íntimamente ligado con los aspectos temporales del proceso. Entendemos por preclusión la pérdida de los derechos procesales por no haberlos ejercido en la oportunidad que la ley da para ello... así, precluye un derecho al no contestarse una demanda, al no ofrecerse pruebas, al no impugnarse una resolución, dentro de los plazos y oportunidad que la ley procesal fija para ello.

La caducidad, no es, al parecer, una institución exclusivamente procesal, pues encontramos ejemplos... en derecho mercantil.

En el proceso es necesario plantear la diferencia entre la preclusión y la caducidad; ambas instituciones tienen la misma naturaleza y esencia, la única diferencia entre ellas es de grado, ya que la caducidad podría considerarse una preclusión máxima, es decir, si la preclusión es la pérdida de un derecho procesal, la caducidad es la pérdida de todos los derechos



---

procesales, a causa de la inactividad de las partes, inactividad total y bilateral, y opera una vez que transcurre determinado plazo que la ley señala...

Generalmente, al decretarse la caducidad de un proceso, se tiene a la prescripción como no interrumpida, en otras palabras, como si no se hubiera presentado la demanda que inició el proceso...

A su vez, José Ovalle Favela indica:

La preclusión se define, al decir de Couture, “como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” Esta pérdida, extinción o consumación puede resultar de tres situaciones diferentes: “a) por no haber observado el orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha)”. Al hablar de los plazos, menciona que los hay no perentorios, y a los perentorios los identifica con los preclusivos: esto es, que una vez concluidos los términos para realizar alguna actuación procesal, ya no se puede realizar.

Cabe aclarar que así como la inactividad de una o de ambas partes durante el plazo que se les señaló para realizar determinado acto procesal, trae consigo como consecuencia la preclusión o pérdida del derecho que tuvieron para llevar a cabo dicho acto, la inactividad procesal de ambas partes—ya no respecto de un acto procesal determinado sino de todo el proceso—durante un periodo prolongado, tiene como consecuencia la caducidad de la instancia o extinción anticipada del proceso, de tal modo que quedan sin efecto legal todos los actos procesales realizados en la instancia de que se trate.

Por último, se puede mencionar que Luís Guillermo Torres Díaz apunta que:

La finalidad inmediata del proceso es la resolución del litigio mediante la sentencia...en vista de lo cual se hace imperativo sancionar la inactividad procesal imputable a las partes mediante la preclusión y la caducidad.

Preclusión es la pérdida del derecho a ejecutar un acto procesal por haber transcurrido el plazo o vencido el término que la ley concede a una parte para su ejercicio, sin que lo haya verificado, por haber ejecutado otro incompatible con el eficaz a su cargo, o bien, por haber agotado el acto procesal sin posibilidad de repetición.

En este caso, Torres Días se atiene a la definición citada de Couture.

La caducidad es también una sanción a la inactividad procesal de las partes reconocida en la legislación como una forma de extinción del proceso sin sentencia... por falta de promoción de las partes que impliquen impulso al proceso. Ver el documento completo disponible en <http://lusquarens10.wordpress.com/2010/05/29/prescripcion-preclusion-y-caducidad/>, 31 de marzo de 2012, página visitada el 25 de noviembre de 2012.

partes para promover el acuerdo entre las pretensiones expuestas en los citados convenios. Que de no ser así, se procederá en los términos del artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, y 88 de ese Código Procesal Civil.

El numeral 274, señala que cuando el demandado se allane a la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la contestación de ella, se citará para sentencia, previa ratificación del escrito correspondiente, ante el juez de los autos si se trata de juicio de divorcio, sin perjuicio de lo previsto en la parte final del artículo 271, y en caso del allanamiento judicial expreso que afecte a toda la demanda, produce el efecto de que el juez otorgue en la sentencia un plazo de gracia al deudor después de efectuado el secuestro y a reducir las costas.

Por lo que ve al artículo 290, este establece que el mismo día en que se haya celebrado la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, si en la misma no se terminó el juicio por convenio o a más tardar al día siguiente de dicha audiencia, el Juez abrirá el juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas, que es de diez días comunes, que empezarán a contarse desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación a todas las partes del auto que manda abrir el juicio a prueba.

En la legislación procesal se encuentra la normatividad relativa a las pruebas, su oferta, desahogo o recepción y práctica, y al respecto se puede advertir que:

El numeral 299, señala que el Juez, al admitir las pruebas ofrecidas procederá a la recepción y desahogo de ellas en forma oral. Que la recepción de las pruebas se hará en una audiencia a la que se citará a las partes en el auto de admisión, señalándose al efecto el día y la hora teniendo en

consideración el tiempo para su preparación y que deberá citarse para esa audiencia dentro de los treinta días siguientes a la admisión.

Que la audiencia se celebrará con las pruebas que estén preparadas, dejándose a salvo el derecho de que se designe nuevo día y hora para recibir las pendientes, y para ello se señalará, en el acta que para dicho efecto se levante, la fecha para su continuación, la que tendrá verificativo dentro de los veinte días siguientes, misma que no podrá diferirse por ninguna circunstancia, salvo caso fortuito o fuerza mayor o que existan disposiciones dentro de este Código en cuanto al desahogo de las pruebas, que permitan su diferimiento. En este caso no hay que seguir el orden establecido para la recepción de las pruebas.

Si llamado un testigo, perito o solicitado un documento, que hayan sido admitidos como pruebas, no se desahogan éstas a más tardar en la audiencia o en su único diferimiento no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas.

En caso de que la continuación de la audiencia se difiera por caso fortuito o fuerza mayor o bien por así disponerlo este Código; en el acta en que se señale tal diferimiento se indicará la fecha de su continuación, que será dentro de los diez días siguientes, siempre que quede demostrado el caso fortuito o fuerza mayor.

El numeral 346, establece que en tratándose de asuntos en materia familiar en los que se requiera el desahogo de una pericial, no le surtirán las reglas del presente capítulo, con excepción de lo dispuesto por el artículo 353 del código procesal, debiendo el Juez señalar perito único de las listas de Auxiliares de la Administración de Justicia o de institución pública o privada.

La fracción II del artículo 615, señala que no se pueden comprometer en árbitros los divorcios, excepto en cuanto a la separación de bienes y a las demás diferencias puramente pecuniarias.

Por su parte, el numeral 685-bis, establece que únicamente podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados y la que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable.

En el arábigo 940, se señala que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad.

Mientras que el numeral 941, establece que el Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Que en todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. Y que en los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento.

Por lo que ve al artículo 941 Bis, este señala que cuando a petición de parte interesada, se deba resolver provisionalmente sobre la custodia y la convivencia de las niñas y los niños con sus padres, previamente se dará vista a la parte contraria y, en caso de desacuerdo, se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia que resolverá sobre la custodia y la convivencia de los menores misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes.

Que en la sesión donde sean escuchados los menores deberán ser asistidos por el asistente de menores correspondiente, adscrito al Sistema Integral de la Familia del Distrito Federal, quien no requerirá comparecer para protestar el cargo. Y que para que tenga verificativo la audiencia respectiva el Juez de lo Familiar tomará en consideración la programación de audiencias que tenga la Institución.

Que quien tenga a los menores bajo su cuidado, los presentará a la audiencia, para que sean escuchados por el Juez y el Ministerio Público adscrito y que el Juez de lo Familiar oyendo la opinión del Representante Social y valorando todos y cada uno de los elementos que tenga a su disposición, pudiendo incluir valoración psicológica del menor y de las partes que solicitan la custodia, determinará a quién de los progenitores corresponderá la custodia provisional de los hijos menores de edad.

Que a falta o imposibilidad de los progenitores para tener la custodia de los menores se considerarán las hipótesis previstas en los artículos 414 y 418 del Código Civil y que las medidas que se tomen deberán tener como principio fundamental el interés superior del menor.

Que cuando cambie de domicilio el ascendiente que conserva la guarda y custodia, éste tiene la obligación de informar al Juez y a quien no ejerce la custodia los datos del nuevo domicilio y número telefónico para efecto de mantener la comunicación del menor y del ascendiente que no ejerza la guarda y custodia, y que el incumplimiento de esta disposición dará lugar a lo establecido en el artículo 73 del código procesal civil.

Por otro lado, el artículo 941 Ter, señala que el ascendiente que no le sea otorgada la custodia podrá convivir tal y como lo fije el Juez, diversos días de la semana, fuera del horario escolar y sin desatender las labores escolares y debiendo auxiliarlo en dichas actividades.

Asimismo, que en forma equitativa, se podrá regular la convivencia en fines de semana alternados, periodos de vacaciones escolares y días festivos; cuando estos ya acudan a centros educativos.

Que el Juez de lo Familiar, antes de regular el derecho de convivencia de manera provisional, deberá tomar en cuenta todos los elementos que estén a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del menor. En especial valorará el hecho de que una de las partes manifieste que ha habido violencia familiar, pudiendo solicitar valoración psicoemocional que determine si existen síntomas en el menor, de haber vivido cualquier tipo de violencia familiar, ya sea psicológica, física o sexual, independientemente de que exista o no indagatoria al respecto, a fin de proteger la integridad física y psicológica de los hijos.

Que en caso de duda, y para salvaguarda de los hijos menores de edad o incapaces, deberá ordenar que las convivencias se realicen en los Centros e Instituciones destinados para tal efecto, únicamente durante el procedimiento. Las convivencias de manera provisional no se otorgarán por el Juez de lo Familiar cuando exista peligro para la integridad física, sexual y psicológica de los hijos menores de edad.

El dígito 942 señala que no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial y que esta disposición no es aplicable a los casos de divorcio o de pérdida de la patria potestad.

Que tratándose de violencia familiar prevista en el Artículo 323 Ter del Código Civil para el Distrito federal en materia común y para toda la República en materia federal, el juez exhortará a los involucrados en audiencia privada, a fin de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hicieran en la misma audiencia el juez del conocimiento determinará las medidas procedentes para la protección de los menores y de la parte agredida. Al efecto, verificará el contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público.

El numeral 943, establece que podrá acudir al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate. Las copias respectivas de la comparecencia y demás documentos, serán tomados como pruebas, debiendo relacionarse en forma pormenorizada con todos y cada uno de los hechos narrados por el compareciente, así como los medios de prueba que presente, haciéndole saber el Juez al interesado que puede contar con el patrocinio de un defensor de oficio para conocer de su procedimiento y como consecuencia, éste ordenará dar parte a la institución de Defensoría de Oficio para que, en su caso, asesore o patrocine a éste. Una vez hecho lo anterior se correrá traslado, a la parte demandada, la que deberá comparecer, en la misma forma dentro del término de nueve días. En tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el juez deberá señalar el día y hora para la celebración de la audiencia respectiva. Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la ley, el juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio.

Que será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con cédula profesional. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitarán de inmediato los servicios de un Defensor de Oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de un término que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un término igual.

El artículo 944, establece que en la audiencia las partes aportarán las pruebas que así procedan y que hayan ofrecido, sin más limitación que no sean contrarias a la moral o estén prohibidas por la ley.

Mientras que el precepto legal 945, señala que la audiencia se practicará con o sin asistencia de las partes, y que para resolver el problema que se le plantee, el juez se cerciorará de la veracidad de los hechos y los evaluará personalmente o con auxilio de especialistas o de instituciones especializadas en la materia. Estos presentarán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser interrogados tanto por el juez como por las partes. La valoración se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 402 del mismo Código y en el fallo se expresarán los medios de prueba en que haya fundado el juez para dictarlo.

En el numeral 946, se establece que el juez y las partes podrán interrogar a los testigos con relación a los hechos controvertidos, pudiéndoles hacer todas las preguntas que juzguen procedentes con la sola limitación a que se refiere el artículo 944.

Mientras que el artículo 947, señala que la audiencia se llevará a cabo dentro de los treinta días contados a partir del auto que ordene el traslado, en la inteligencia de que, la demanda inicial deberá ser proveída dentro del término de tres días.



Por su parte, el 948, señala que si por cualquier circunstancia la audiencia no puede celebrarse, ésta se verificará dentro de los ocho días siguientes. Que las partes deberán presentar a sus testigos y peritos. De manifestar bajo protesta de decir verdad no estar en aptitud de hacerlo, se impondrá al actuario del juzgado la obligación de citar a los primeros y de hacer saber su cargo a los segundos, citándolos asimismo, para la audiencia respectiva, en la que deberán rendir dictamen. Dicha citación se hará con apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas, de no comparecer el testigo o el perito sin causa justificada y al promovente de la prueba, de imponerle una multa que no podrá ser inferior de quinientos pesos ni superior de dos mil pesos, a favor del colitigante, dicho monto se actualizará en la forma prevista en el artículo 62, en caso de que el señalamiento de domicilio resultare inexacto o de comprobarse que se solicitó la prueba con el propósito de retardar el procedimiento, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad resultante. Las partes en caso de que se ofrezca la prueba confesional, deberán ser citadas con apercibimiento de ser declaradas confesas de las posiciones que se les articulen y sean calificadas de legales, al menos que acrediten justa causa para no asistir.

El artículo 949, establece que la sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los ocho días siguientes.

Mientras que el dígito 950, señala que las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código.

Que cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas

disposiciones por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore.

El numeral 951, establece que salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata y que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía.

Por su parte el artículo 952, señala que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta y que son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes.

El artículo 953, refiere que la recusación no podrá impedir que el juez adopte las medidas provisionales sobre el depósito de personas, alimentos y menores.

Mientras que el precepto 954, señala que ninguna excepción dilatoria podrá impedir que se adopten las referidas medidas, y que tanto en este caso como en el del artículo anterior, hasta después de tomadas dichas medidas se dará el trámite correspondiente a la cuestión planteada.

Mientras que el artículo 955, establece que los incidentes se decidirán con un escrito de cada parte y sin suspensión del procedimiento y que si se

promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre que verse, y se citará dentro de ocho días, para audiencia indiferibles, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y se dicte la resolución dentro de los tres días siguientes.

Por otro lado el numeral 956, señala que en todo lo no previsto y en cuanto no se opongan a lo ordenado por el presente capítulo, se aplicarán las reglas generales de este Código.

De la panorámica de la normativa actual del divorcio en el Distrito Federal, queda claro que solo persiste la separación de cuerpos y el divorcio, que este último es mediante el trámite del divorcio incausal o exprés, que representa un procedimiento ágil en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial y sus consecuencias si las partes están conformes con el convenio y el mismo se encuentra ajustado a derecho, o bien, si no existe el acuerdo, un procedimiento incidental para acreditar y resolver sobre las consecuencias sobre las que existe discusión.

La entrada en vigor de este nuevo trámite para la disolución del vínculo matrimonial, ha generado que el Poder Judicial Federal interprete la normatividad respectiva y como se dijo, muchas de las interpretaciones existentes, dan respuesta a las objeciones que se hicieron a la propuesta de decreto de reformas. El primer aspecto relevante, surge de la interpretación para determinar si el divorcio sin causa es o no constitucional, y al respecto se determino<sup>473</sup> que el divorcio constituye uno de los medios previstos en la ley para extinguir el vínculo matrimonial; que en conformidad con el dígito 146 del Código Civil para el Distrito Federal, la voluntad libre de quienes contrajeron

---

<sup>473</sup> [J] I.4o.C.207 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165564, Civil, enero de 2010, p. 2107. Divorcio exprés. La voluntad de uno solo de los cónyuges es suficiente para ejercer la pretensión.

matrimonio fue la causa para que se produjera la unión conyugal, que en virtud de que la creación del vínculo y su duración (que es por tiempo indeterminado, porque no hay disposición alguna en la Constitución o en la ley que prescriba que la duración del vínculo matrimonial sea perpetua o vitalicia) se sustentan en la libre voluntad de los cónyuges, por lo que se considera como una consecuencia natural que en pleno ejercicio de ella y de conformidad con la nueva legislación, cualquiera de los esposos puede hacer cesar esa unión.

Asimismo se cuestionó si la nueva legislación se ajusta o no a la Norma Constitucional, inicialmente y mediante tesis aislada<sup>474</sup> se determinó que la redacción de los dispositivos respectivos presentan inconsistencias, que pueden dar una interpretación contraria a la Ley Fundamental, pero que bajo la interpretación gramatical, sistemática y funcional de la preceptiva del proceso de divorcio, tanto del Código Civil como del de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es permisible conducirla por cauces conformes a la Constitución Federal, si se ajusta a ciertas líneas jurídicas, efectuando un análisis de las diversas fases del trámite y los posibles supuestos que pueden originarse, indicando que los criterios a seguir son:

Que en la fase postulatoria, se pueden presentar tres hipótesis:

a) Que no exista controversia respecto a la integración de la relación procesal, ni sobre los elementos de la pretensión de divorcio (existencia del matrimonio, el lapso mínimo de un año de duración y la voluntad de concluirlo) por haberse exhibido la documentación necesaria, sin haber sido ésta objeto de controversia y partes lleguen a un convenio apegado a

---

<sup>474</sup> [J] I.4o.C.260 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165275, Civil, febrero de 2010, p. 2843. Divorcio exprés. Interpretación de su normatividad para que resulte constitucional.

la ley sobre las consecuencias de la disolución matrimonial. En este caso, el Juez debe emitir la sentencia de divorcio y aprobar el convenio, con lo que concluirá el proceso

Que solamente en este supuesto, bajo una óptica constitucional, quedarán satisfechos los requisitos del debido proceso legal y respetado el derecho a la jurisdicción, al existir el emplazamiento a la demandada y haberse dado a ésta la oportunidad para que produjera su contestación, ofreciera pruebas y enfrentara las de su contraria, por lo cual resultaría innecesario continuar con un procedimiento de instrucción con relación al divorcio.

b) Que no exista controversia respecto a la relación procesal ni en cuanto a los elementos del divorcio, pero las partes no logren un convenio sobre las pretensiones inherentes a la disolución del vínculo.

Este punto daría lugar a la escisión del proceso, para que el Juez emita una sentencia definitiva de divorcio, y tocante a sus consecuencias, cite a las partes a una audiencia de conciliación, en términos de los artículos 287 del Código Civil y 272 B del Código de Procedimientos Civiles, y

c) Que se suscite oposición por alguno o varios elementos de la relación procesal o de la pretensión de divorcio. En este supuesto, se iniciará la fase de conciliación y depuración del procedimiento, por toda la materia del proceso.

Cuando se presenta esta situación, no es factible emitir sentencia, como aparentemente lo indica la letra de la ley, pues se conculcaría el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que faltaría dilucidar lo relativo a la relación procesal y/o los elementos de la pretensión de divorcio a través del depuramiento en las etapas posteriores, de conciliación y depuración del

procedimiento y de pruebas; por lo que si se presenta esta hipótesis, se debe disponerse la prosecución del procedimiento, para resolver sobre la disolución de la relación conyugal pretendida, en otra oportunidad, en que ya estén satisfechos los elementos del debido proceso legal.

Que en el supuesto del inciso b) respecto a las consecuencias inherentes al divorcio, la audiencia autocompositiva tendrá verificativo cinco días posteriores al dictado de la sentencia definitiva de divorcio, en la cual a su vez, se pueden presentar dos alternativas:

- 1) Que las partes lleguen a un convenio, apegado a la ley, en el cual, en términos del artículo 272 B, el Juez lo aprobará y finalizará el proceso, con una resolución que ponga fin a la segunda parte de la escisión, y
- 2) Que no se logre el convenio, en cuyo caso, con fundamento en los artículos 287 del Código Civil, 272 B y 88 del Código de Procedimientos Civiles, el Juez ordenará la preparación de las pruebas ofrecidas por las partes en la demanda y contestación, con relación a las consecuencias del divorcio, y citará para audiencia dentro del plazo de diez días, en la que se recibirán las pruebas, se oirán alegatos y se citará para sentencia definitiva con relación a las pretensiones todavía no resueltas;

En cuanto a la fase ordinaria de conciliación y depuración, acorde a la interpretación conforme a la Constitución, del artículo 287 del Código Civil correlacionado con lo previsto por el artículo 272 A del Código de Procedimientos Civiles, debe iniciar cuando hay controversia sobre elementos de la relación procesal y/o elementos de la pretensión de divorcio, y se identifican los siguientes casos:

A) Acreditación de que falta uno o más presupuestos procesales: el Juez debe emitir una sentencia que absuelva de la instancia.

B) Que se supere la controversia respecto a presupuestos procesales, los elementos del divorcio quedan probados, y las partes lleguen a un convenio: el Juez debe decretar el divorcio y aprobar el convenio, de ser legalmente procedente.

C) Que no estén acreditados los elementos del divorcio, el Juez ordenará la preparación de las pruebas ofrecidas en la demanda y contestación, y señalará fecha para su desahogo en la audiencia prevista por el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, y al terminar ésta pasará a la etapa conclusiva, en la cual resolverá el litigio en su integridad, con sentencia definitiva.

D) Por último, en el caso de que se satisfagan los requisitos de la relación procesal y los elementos del divorcio, pero no haya convenio entre las partes, el Juez decretará el divorcio en sentencia definitiva, ordenará la preparación de las pruebas ofrecidas en la demanda y contestación, y fijará fecha para su desahogo dentro de la audiencia prevista por el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles; hecho lo cual, abrirá la etapa conclusiva, donde dictará sentencia definitiva respecto a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial.

Finalmente, se determina que respecto de la situación de los hijos menores de edad y la compensación, sólo deben ser resueltas en la sentencia que decida la pretensión de regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, mas por ningún motivo, en la que sólo se decrete el divorcio.

En esta fase se pueden presentar las siguientes situaciones. Primera:  
a) Que estén satisfechos los elementos de la relación jurídico procesal, al no haber controversia sobre ellos y considerarse acreditados por el Juez, y acreditados los elementos de la pretensión del divorcio (existencia del matrimonio, el lapso mínimo de un año de duración y la voluntad de concluirlo) por haberse exhibido la documentación necesaria, sin haber sido ésta objeto de controversia

Lo anterior, nos permite distinguir las posibles fases o etapas que puede generar el divorcio exprés:

### **Fase postulatoria.**

Escisión del proceso, cuando no existe conformidad en el convenio, el Juez debe emitir sentencia definitiva de divorcio, y citar a las partes a la audiencia de conciliación, en términos de los artículos 287 del Código Civil y 272 B del Código de Procedimientos Civiles, para resolver lo tocante a sus consecuencias.

Fase ordinaria de conciliación y depuración, acorde a la interpretación conforme a la Constitución, del artículo 287 del Código Civil correlacionado con lo previsto por el artículo 272 A del Código de Procedimientos Civiles, cuando controversia respecto a la integración de la relación procesal o sobre los elementos de la pretensión de divorcio.

Además, se deja en claro que en el proceso, cuando se presenta su escisión puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una, en la que se decida la totalidad del litigio.

Esta visión e interpretación del procedimiento y sus diversas fases, según el contenido de los artículos 287 del Código Civil y 272 B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que señalan que cuando exista



acuerdo entre las partes sobre el convenio, se debe decretar el divorcio y aprobar el convenio, y que en caso de desacuerdo sobre las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, se reservarán los derechos de los litigantes para que se hagan valer en la vía incidental; se considera que es acorde al espíritu de justicia rápida y expedita expuesta por el legislador el proponer la reforma, pues como se ha indicado si se presenta el primer supuesto, no existe controversia alguna, pues las partes logran la autocomposición del conflicto mediante un acuerdo en el que quedan resueltos los diferentes temas atinentes a las consecuencias del divorcio, y como ha quedado indicado el Juez deberá de sancionarlo conforme a la ley. El problema se presenta cuando no existe esa conformidad, empero la expresión de dejar expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, no implica que deba ser por separado, sino sólo constituye un enunciado dirigido a enfatizar que el procedimiento debe continuar, por un cauce distinto al de la vía ordinaria, que tienda a ser más breve y ágil, como son los trámites dados originalmente para los incidentes, en donde la materia sustancial seguirá siendo la planteada en la litis principal y no una cuestión accesoria de naturaleza propiamente incidental, pues la pretensión es regular las consecuencias del divorcio, lo que se encuentra en relación de subordinación necesaria a la disolución del vínculo, que queda incorporada a la litis principal, desde el momento en que la ley impuso a las partes la carga de fijar una posición sobre ella en sus escritos iniciales, y de ofrecer los medios de prueba conducentes, lo que brinda a las partes la oportunidad de continuar el proceso ya iniciado, haciendo valer los derechos planteados desde la demanda y la contestación, y de allegar al expediente los medios de prueba ofrecidos en tales escritos, mediante un mecanismo procesal pronto y expedito, pues el fin es el imprimir mayor celeridad al asunto, y abrir a las partes un atajo procedimental, interpretación que es acorde a los postulados constitucionales relativos al debido proceso legal, garantizado en el artículo 14 constitucional, y el de acceso a la jurisdicción del Estado, asegurado en el artículo 17 de la Ley Fundamental.

De la misma manera, en diversa tesis<sup>475</sup>, se establece que la normatividad del divorcio exprés no es conculcatorio del artículo 1o. constitucional, que prevé el derecho fundamental a la no discriminación, y que ello es así, por que según el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo "discriminar" significa seleccionar excluyendo. En una segunda acepción, discriminar es dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera; que sobre este sentido de cosas, la nueva regulación del divorcio no contiene disposición alguna que implique excluir, separar, distinguir o diferenciar selectivamente a una de las partes en un juicio de divorcio de otros gobernados que se encuentren en la misma situación de enjuiciados en otros procesos o que a una de dichas partes se le dé un trato de inferioridad en atención a la raza, el sexo, las creencias religiosas o políticas, a la posición socioeconómica, al estado civil, etcétera, con la que se le ubique en calidad de inferioridad respecto de su contraparte; concluyendo que la normatividad relativa no implican discriminación para alguno de los consortes, porque en modo alguno dan lugar a que por motivos de edad, raciales, religiosos, políticos, de posición social, de estado civil, etcétera, se dé a alguno de ellos un trato de inferioridad que se traduzca en una forma de discriminación que proporcione ventajas a uno de los consortes respecto del otro.

Otro aspecto relevante, surgió de la interpretación del artículo tercero transitorio del decreto de reformas para la implementación del divorcio exprés, en la ejecutoria se señala que si se está ante la presencia de un divorcio incausal, cuyo convenio debe de contener, lo siguiente:

---

<sup>475</sup> [J] I.4o.C.206 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165562, Civil, enero de 2010, p. 2108. Divorcio exprés. Su regulación no es discriminatoria para las partes.

- a) La fijación de la guarda y custodia de los menores hijos o incapaces cuando ambos padres mantienen el ejercicio de la patria potestad.
- b) El derecho de visitas de los hijos con los progenitores.
- c) La pensión alimenticia para los hijos y los cónyuges y la garantía respectiva.
- d) El uso del domicilio conyugal y del menaje, y
- e) La administración de los bienes de la sociedad conyugal y la liquidación o la compensación tratándose del régimen de separación de bienes.

Por lo que, si acorde al contenido del artículo tercero transitorio de las reformas de mérito, en los juicios de divorcio en trámite, será potestativo para cualquiera de las partes acogerse a las reformas establecidas en el decreto, por lo que el juzgador tiene facultades para resolver sobre la disolución del vínculo matrimonial bajo las reglas del divorcio incausado, sin embargo no podía ser general o total, ya que se debe considerar que respecto de la pérdida de la patria potestad este aspecto no se encuentra contemplado en los supuestos del convenio aludido<sup>476</sup>, pues constituyen derechos irrenunciables en términos de la propia ley civil<sup>477</sup>, que por lo tanto, si se demandó el divorcio pero también se reclamo la pérdida de la patria potestad, la sentencia que disuelva la relación matrimonial sin causa, no podrá ocuparse de resolver sobre la pérdida del ejercicio de la patria potestad por no ser

---

<sup>476</sup> [J] I.13o.C.42 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165561, Civil, enero de 2010, p. 2109. Divorcio sin causa. Es potestativo para cualquiera de las partes sujetarse al mismo en procedimientos jurisdiccionales iniciados con anterioridad a su vigencia; empero, cuando se hubiese demandado conjuntamente la pérdida de la patria potestad en la vía ordinaria, debe decretarse la disolución del vínculo matrimonial incausado y continuar el procedimiento por lo que respecta a la pérdida de la patria potestad.

<sup>477</sup> Según Código Civil para el Distrito Federal, *Gaceta Oficial del Distrito Federal*, 18 de agosto de 2011, arts. 444 fracción II y 448.

materia ni del divorcio incausal ni del convenio respectivo; que por lo tanto, los derechos relativos a ésta acción deberán continuar el procedimiento ordinario en que se resuelva la litis planteada. Interpretación que deja en claro que aun con la potestad que confiere el artículo tercero transitorio para optar por el nuevo procedimiento, ello solo deberá admitirse en cuanto a los puntos de la litis del juicio ya iniciado, sean objeto del divorcio en sí y de los puntos sobre los cuales debe versar el convenio, pues de existir otras acciones ajenas a ello, el juicio debe de continuar para resolver lo pertinente en el propio proceso ordinario.

La normatividad de este nuevo tipo de divorcio y su agilidad procesal, representa un atractivo para que personas de otras Entidades Federativas, pues con ello podrían obtener una disolución rápida y efectiva, lo que ha generado que intenten el divorcio en el Distrito Federal, empero al respecto y sobre la competencia, existe tesis aislada<sup>478</sup> que señala que acorde a la fracción IV del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es Juez competente el del domicilio del demandado si se trata de acciones personales o del estado civil, en tanto que la fracción XII del dispositivo en cita, dispone de manera expresa que tratándose de juicios de divorcio, es Juez competente, el del domicilio conyugal, y en caso de abandono del hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado, lo que hace incuestionable que es contrario a las normas referidas, que aquellos cónyuges cuyo domicilio se encuentre en otra entidad federativa se trasladen al Distrito Federal con la finalidad de tramitar la disolución del vínculo matrimonial sin expresión de causa, pues las reformas que sufrió el Código Civil no son aplicables a quienes tienen establecido su domicilio conyugal en otra entidad federativa. El contenido de esta ejecutoria deja en claro que el procedimiento

---

<sup>478</sup> [J] I.2o.C.45 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 164796, Civil, abril de 2010, p. 2728. Divorcio incausado, competencia por razón de territorio.

del divorcio exprés ha sido intentado por personas cuyo domicilio conyugal no se encuentra en el Distrito Federal, pero cuya actitud, aunque no jurídica, deja entrever que este nuevo proceso resulta atractivo y de posible aceptación para los habitantes de otros Estados de la República.

La entrada en vigor de las normas en comento genero, como es natural, diversas interpretaciones por parte de los juzgadores, sobre diversos tópicos, esencialmente sobre el convenio o la falta de acuerdo sobre las consecuencias de la disolución del vínculo, lo que provoco que se desecharan solicitudes o demandas, que no se resolviera sobre el divorcio o bien que se decretara este y se indicara a los interesados que en proceso por separado promovieran lo pertinente, o se decretaba el divorcio y se aprobaba el convenio sin mayor preámbulo; todo ello ha conducido a que con el transcurso del tiempo se vayan definiendo los aspectos jurídicos procesales respectivos. En tesis de Jurisprudencia<sup>479</sup> se determinó en forma clara que acorde a la nueva normatividad para la disolución del matrimonio, cualquiera de los cónyuges puede unilateralmente reclamar del otro la disolución del vínculo matrimonial, sin necesidad de invocar alguna causa y sin importar la posible oposición del cónyuge demandado; que en la demanda relativa y en el escrito de contestación, el actor y el demandado deben ofrecer las pruebas para acreditar la propuesta o contrapropuesta del convenio que regule las consecuencias derivadas de la disolución del matrimonio, que como se ha visto, corresponde a los aspectos jurídicos relacionadas con los hijos

---

<sup>479</sup> [J] 1a./J. 137/2009, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 164795, Civil, abril de 2010, p. 175. Divorcio por declaración unilateral de voluntad. Ante la falta de acuerdo de las partes respecto del convenio para regular las obligaciones que persisten después de disuelto el matrimonio, el juez de lo familiar debe decretar aquél y reservar para la vía incidental la resolución de todas las demás cuestiones (legislación del Distrito Federal vigente a partir del 4 de octubre de 2008).

menores e incapaces, así como entre los propios esposos; empero, la conformidad de los cónyuges respecto del convenio, no sería bastante para su aprobación, sino que debe satisfacer los requisitos de ley y para verificarlo, el juzgador debe apoyarse en las pruebas que las partes hubieren ofrecido en los escritos de demanda y contestación y que deben desahogarse en la vía incidental. Que si el demandado está de acuerdo con la propuesta de convenio presentada por su contraparte y este se ajusta a la ley, el juez lo aprobará y decretará el divorcio, sin necesidad de dictar sentencia, pues en realidad no decide alguna cuestión litigiosa. Que ante la falta de acuerdo sobre el convenio, el juez únicamente deberá decretar el divorcio y reservar para la vía incidental la resolución de las demás cuestiones debatidas ya que el exacto cumplimiento de los requisitos del convenio debe sustentarse en las pruebas ofrecidas por las partes; que de estimarse lo contrario, implicaría permitir que el juez resuelva sobre aspectos que deben ser materia de convenio, sin contar con pruebas admitidas y desahogadas conforme a las formalidades legales correspondientes, lo que viola el derecho de contradicción de los cónyuges y rompe con las condiciones de impartición de justicia imparcial.

Como se ha indicado el convenio, la falta del mismo, o la no aceptación del presentado, son aspectos que han generado diversas interpretaciones, según las hipótesis que pueden presentarse en este nuevo proceso de divorcio. Así tenemos, que se emitió tesis aislada<sup>480</sup> en la que se advierte de manera clara que este tipo de tramite tiene como principal objetivo la obtención de una resolución expedita y que atento a lo previsto por el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, en una interpretación literal, se

---

<sup>480</sup> [J] I.4o.C.272 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Novena Época, Registro: 163822, Civil, septiembre de 2010, p. 1252. Divorcio exprés. Obligación de exhibir la propuesta de convenio cuando ambos cónyuges presenten la demanda.

podría conducir a estimar, *prima facie*<sup>481</sup>, que la obligación de exhibir la propuesta de convenio solamente rige en caso de que sea un solo cónyuge el que demande el divorcio, empero, a través de la interpretación sistemática se llega a una diversa conclusión, pues si se atiende a lo normado por el artículo 266 del mismo ordenamiento que prevé que la demanda de divorcio puede plantearse por uno o ambos cónyuges, y que sólo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el citado artículo 267, es claro que si este dispositivo exige la exhibición de la propuesta de convenio, esa obligación existirá tanto en el caso de que sea uno o los dos cónyuges quienes presenten la demanda, que bajo tal sentido, ya no será, en este último supuesto, un divorcio por declaración unilateral de voluntad, sino un divorcio consensuado, pero no por ello dejará de ser un divorcio exprés, pues se lograra el objetivo de la rapidez ya que se acorta la fase postulatoria, por no ser necesarios el emplazamiento y la contestación a la demanda, así como la posible necesidad de celebrar la audiencia de conciliación. Que ante la ausencia de controversia respecto a la integración de la relación procesal, y sobre los elementos de la pretensión de divorcio, al haber llegado las partes a un convenio apegado a la ley sobre las consecuencias de la disolución matrimonial, lo que en todo caso es obligación del juez calificar, dado su papel de director del proceso, se dicte la sentencia de divorcio y apruebe el convenio para concluir el juicio.

De la misma manera se establece en un criterio de interpretación<sup>482</sup>, que en el supuesto que uno de los puntos del convenio no estuviera ajustado

---

<sup>481</sup> A primera vista. Específicamente en materia de medidas cautelares, da a entender la apariencia de un derecho pero sin que con ello se prejuzgue sobre el asunto. Véase, Cisneros Farías, Germán, *op. cit.*, nota 131, p. 86.

<sup>482</sup> [J] I.4o.C.318 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII, Novena Época, Registro: 162867, Civil, febrero de 2011, p. 2305. Divorcio exprés. Demanda presentada por ambos cónyuges. La ilegalidad de alguno de los puntos de la propuesta de convenio no es causa de desechamiento.

a derecho, no es motivo de desechar la demanda, que la obligación del promovente al presentar la demanda, es la de presentar una propuesta de convenio, dirigida a su cónyuge, con lo que se cumple la exigencia requerida en el artículo 266, mas no se exige que el contenido del convenio sea admitido por la contraparte y por el Juez, lo que puede corroborarse con lo dispuesto en el artículo 287, en el sentido de que, en caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 267 y éste no contravenga alguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, y dictará sentencia de divorcio, pero de no ser así, el Juez decretará el divorcio mediante sentencia, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio. Esto es, si existe convenio entre las partes, respecto a las consecuencias inherentes al divorcio, sin contravenir alguna disposición legal, se aprueba el convenio y se decreta el divorcio y si no hay acuerdo entre las partes sobre las consecuencias del divorcio o el que pacten contraviene la ley, de todas maneras se decreta el divorcio, y lo demás queda para la continuación incidental del proceso, pero en ninguno de esos supuestos procede desechar la demanda.

Otro aspecto que se determina mediante ejecutoria y que está relacionado con el convenio es respecto de los alimentos de los hijos mayores de edad, y se establece que la interpretación gramatical, unido al criterio sistemático, en la modalidad de interpretación conforme a la Constitución, del enunciado legal del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, hace patente que la propuesta de convenio que se anexe a la demanda de divorcio exprés, debe comprender los alimentos correspondientes a los hijos mayores de edad que permanezcan en el núcleo familiar y conserven ese derecho. Que ello es y debe ser así porque el numeral citado alude al modo de atender las necesidades de los hijos, mas no hace distingo alguno entre los menores y los mayores de edad que gocen de esa prerrogativa, esto aunado a la intelección que resulta conforme con el



derecho a la jurisdicción contemplado en el artículo 17 constitucional que contempla el principio de economía procesal, pues al incluirse en el convenio los alimentos de los miembros de la familia, para resolverse en conjunto con las demás consecuencias inherentes al divorcio se evita que los acreedores alimenticios mayores de edad, se vean obligados a promover juicios por separado, lo que conlleva a un detrimento del tiempo y la multiplicación de actuaciones y costos<sup>483</sup>.

También se han emitido ejecutorias sobre los diversos supuestos que se generan sobre el trámite del divorcio exprés; por ejemplo en aquellos casos en que exista rebeldía del demandado, y al respecto se indica la consecuencia de esa abstención es la prevista en el último párrafo del artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, o sea que la demanda se tendrá por contestada en sentido negativo, por lo que si al inicio del proceso tiene que acompañarse la propuesta de convenio, puede inferirse que está comprendido en esa contradicción o negación, lo que se traduce en que no habrá, acuerdo respecto del convenio si el demandado es declarado rebelde por dejar de contestar oportunamente la demanda, ya que para lograr ese consenso se requiere la voluntad de ambas partes, sin que pueda tenerse por expresada en forma positiva la del reo, dada la negativa que, como ficción legal, se habrá producido en el supuesto referido; lo que en todo caso debe de celebrarse la audiencia de conciliación a que se refieren los artículos 272 A y 272 B del citado código, pues en este momento pudiera lograrse el acuerdo en cuanto al convenio que no se ha conseguido ante la ausencia de contestación y dependerá del resultado para que el juez procede en términos de ley; pues si se logra el acuerdo, se emitirá sentencia singular que debe comprender la declaración del divorcio y la aprobación del convenio y en caso

---

<sup>483</sup> [J] I.4o.C.271 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Novena Época, Registro: 163823, Civil, septiembre de 2010, p. 1251. Divorcio exprés. La propuesta de convenio debe comprender los alimentos de los hijos mayores de edad con derecho.

de que no se logre, decretar el divorcio y proveer lo pertinente sobre la admisión y desahogo de las pruebas, señalando fecha para la audiencia incidental respecto de las consecuencias relativas<sup>484</sup>.

Se ha advertido a lo largo de este capítulo, que el divorcio exprés puede generar distintas sentencias, la que decreta el divorcio, la que determina sobre las consecuencias del mismo, en caso de no existir conformidad de las partes, vía incidental señala la ley, en cuyo caso se estaría ante la presencia de una sentencia interlocutoria, empero, como las sentencias, según su estatus jurídico procesal no son objeto de los mismos recursos, este punto ha generado diversas interpretaciones, especialmente para estar en aptitud de hacer valer el recurso idóneo, lo que ha provocado diversas interpretaciones por parte del Poder Judicial Federal, un criterio aislado<sup>485</sup>, apunta hacia un camino específico a señalar que la resolución o sentencia que se emite sobre las consecuencias del divorcio es de naturaleza definitiva, e indica que en el divorcio exprés se ventilan dos pretensiones, la primera es la disolución del vínculo matrimonial y la segunda, sobre la regulación de las consecuencias legales inherentes, que cuando se presenta la escisión, para la regulación judicial de esto último se encuentra comprendido en el litigio que se plantea con la demanda de divorcio, según lo ordenado por artículos 255 y 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ya que se exige al actor la propuesta de un convenio sobre dichas consecuencias de divorcio, la exposición de los hechos relativos y el

---

<sup>484</sup> [J] I.4o.C.198 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165567, Civil, enero de 2010, p. 2104. Divorcio exprés. Ante la falta de contestación a la demanda, el juez debe celebrar la audiencia de conciliación, y dependiendo de su resultado dictar la sentencia que corresponda.

<sup>485</sup> [J] I.4o.C.259 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165565, Civil, enero de 2010, p. 2106. Divorcio exprés. La resolución que lo decreta en la fase de depuración del procedimiento, es materialmente una sentencia definitiva y no una interlocutoria.

ofrecimiento de las pruebas conducentes, así como el que la parte demandada tiene la obligación de expresar su aceptación o rechazo a la propuesta, de formular una contrapropuesta en su caso, de exponer también sus hechos en correlación con los expuestos por el demandante, y de ofrecer también los medios de prueba con los que pretenda afianzar su posición; que es patente que la ley claramente apunta a que lo relativo a las consecuencias del divorcio no pueden estar sujetas a un juicio incidental que pudiera iniciarse en el curso del de divorcio, ni de un incidente, pues no se trata de cuestiones secundarias que surjan o puedan surgir en el curso del procedimiento principal, sino que ya están comprendidas en el juicio desde el principio y se fija la litis respectiva; que tampoco puede interpretarse en el sentido de que una vez dictada la sentencia de divorcio en la fase postulatoria, lo relativo a las consecuencias de la disolución matrimonial se remiten al inicio de un juicio incidental, porque acorde a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 272 A, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es claro que el objeto del proceso principal no ha concluido con antelación, al determinar que en él no debe abrirse un periodo probatorio, porque las pruebas relacionadas con el convenio propuesto deberán ofrecerse al momento de presentarse la demanda y la contestación, por lo que únicamente se ordenará la preparación y se señalará fecha para el desahogo, con lo que se hace patente que la litis planteada entre las partes, con la demanda y contestación originales, es la que sigue rigiendo el procedimiento y la que debe ser resuelta, en su caso, en la fase conclusiva.

Que si los incidentes culminan con una sentencia interlocutoria y el proceso principal con una sentencia definitiva, se debe considerar si la materia de la decisión después de la audiencia de pruebas y alegatos establecida para la hipótesis que se estudia, concierne sobre los puntos de la controversia principal, es indiscutible que la resolución que se emita es materialmente una sentencia definitiva, con independencia de la denominación con la que se refirió a ella el legislador; que el punto dilucidado es de importancia para

definir que contra el fallo de referencia, una vez agotado el recurso de apelación, aunque sólo haya resuelto sobre las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito.

La tesis anterior es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 135/2011, pendiente de resolverse por la Primera Sala, pues es contrario al criterio que se emitió por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia civil del Primer Circuito, en la que se interpretó, que por el contrario, las resoluciones que se emiten en el trámite incidental después de la disolución del vínculo matrimonial, referente a alimentos, guarda y custodia, liquidación de sociedad conyugal, compensación, etcétera, no se dictan en ejecución de esa sentencia, sino en un procedimiento autónomo, que tiene como finalidad resolver un nuevo estado de derecho entre los ex cónyuges, precisamente porque aquella resolución únicamente se ocupó de la disolución del vínculo matrimonial, indicando que se al tratarse de procedimientos autónomos, iniciados después de concluido el juicio, las decisiones dictadas durante su trámite pueden actualizar la procedencia del juicio de amparo indirecto prevista por el artículo 114, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Sin que hasta el momento, se haya definido la contradicción de tesis apuntada.

Sobre los recursos, se interpreta<sup>486</sup> que al determinar la propia ley que la sentencia que decreta el divorcio es inapelable, solo son recurribles las determinaciones que resuelven en vía incidental el o los convenios

---

<sup>486</sup> [J] I.7o.C.135 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXX, Novena Época, Registro: 166173, Civil, octubre de 2009, p. 1525. Divorcio incausado. Sólo las resoluciones que en vía incidental decidan respecto del o los convenios presentados por las partes son recurribles.

presentados por las partes, que acorde a lo dispuesto por el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que únicamente las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados por las partes podrán recurrirse, y que la sentencia que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, acorde al principio de especialización de la norma, por encima de las reglas contenidas en los artículos 685 y 691, debe subsistir la confeccionada para el divorcio "incausado", en donde únicamente son recurribles las determinaciones que resuelven en vía incidental el o los convenios presentados por las partes, lo que se ajusta a la intención del legislador de crear un procedimiento más ágil para lograr la disolución del matrimonio. Ejecutoria que también es objeto de denuncia por contradicción de tesis, bajo número 180/2011, pendiente de resolverse por la Primera Sala.

#### **7.4 Estadísticas del divorcio en el Distrito Federal, antes y después del divorcio exprés.**

A fin de tener una panorámica sobre la conformación del Poder Judicial en el Distrito Federal sobre la materia del derecho familiar, este se conforma por el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, el que ejerce la función judicial del fuero común, funciona en Pleno y en salas, en la actualidad el Tribunal se divide en 10 salas civiles, 4 salas familiares, 9 salas penales y 2 de justicia para adolescentes.

En materia familiar existen 42 juzgados familiares. En los últimos años, el número de demandas recibidas en materia Familiar<sup>487</sup>, corresponde a:

---

<sup>487</sup> Poder Judicial del Distrito Federal, *Anuario General Estadístico*, disponible en <[http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/comunicados/anuario%20estadistico/anuario\\_general.pdf](http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/comunicados/anuario%20estadistico/anuario_general.pdf)>, página visitada el 03 de mayo de 2013.

Año 2005 .....	51,991
Año 2006 .....	53,000
Año 2007 .....	55,979
Año 2008 .....	55,775
Año 2009 .....	68,379
Año 2010.....	40,234

Las cargas de trabajo de los juzgados de lo familiar, frente a otras materias en el Distrito Federal, pueden reflejarse nítidamente en cuadros estadísticos. Anexo 8 y 13.

Las cargas de trabajo en el año 2009 se pueden medir diariamente, Anexo 14, de esta manera conocemos que los juzgados familiares son lo que tienen el mayor número promedio de acuerdos realizados por día con 122, seguidos por los juzgados civiles con 109, los de la materia penal con 61, los de arrendamiento y paz civil con 55 cada uno, los de paz penal con 22 y justicia para adolescentes con 19<sup>488</sup>.

En tanto que en el año 2010, los juicios familiares, se incrementaron en 5.6 por ciento, al pasar de 68,379 en el año judicial 2009, a 72,227 en el 2010. De la misma manera se incremento el pronunciamiento de sentencias en materia de familia, en un 8.2 por ciento, al pasar de 43,397, a 46,937<sup>489</sup>.

Con la finalidad de establecer el estado de cosas antes y después de la entrada en vigor del divorcio exprés, y poder tener algunos indicadores, es pertinente analizar los datos que reporta el INEGI<sup>490</sup> sobre el divorcio en el

---

<sup>488</sup> *Ídem.*

<sup>489</sup> Poder Judicial del Distrito Federal, *Tercer informe*, disponible en <<http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/noticias/tercer%20informe%202010.pdf>>, página visitada el 03 de mayo de 2013.

<sup>490</sup> INEGI, *op. cit.*, nota 7, *passim*.

Distrito Federal, haciendo un comparativo de tres años antes y tres después de su entrada en vigor.

Del comparativo de la estadística de divorcios, anexos 2, 3, 4, 6, y 8, específicamente respecto del Distrito Federal, se pueden desprender diversos indicadores; por ejemplo, es patente que en Jalisco por cada anualidad cotejada, es superior el porcentaje de divorcios por mutuo consentimiento en tanto que en el Distrito Federal es mayor el número de juicios de divorcio contencioso, que en ambos lugares, la causales que en mayor número se acreditan y proceden, corresponden a la separación del domicilio conyugal de uno de los cónyuges, seguida por la negativa a otorgar alimentos y la sevicia amenazas e injurias o violencia intrafamiliar, infidelidad o adulterio. El resto de las causales, en ambas partes resulta mínima su acreditación.

Por otra parte, es patente que en el Distrito Federal se incremento el porcentaje de divorcios decretados, después de la entrada en vigor del divorcio exprés, así tenemos que:

Año 2005.....**7, 106** divorcios decretados.

Año 2006..... **6,924** divorcios decretados.

Año 2007..... **7,035** divorcios decretados.

Año 2008..... **7,692** sentencia de divorcio. (83 corresponden al voluntario unilateral o exprés)

Año 2009..... **9,386** sentencias de divorcio. (De las cuales 5,546 corresponden al voluntario unilateral o exprés)

Año 2010..... **11,053** sentencias del divorcio. (De las cuales 8,147 corresponden al voluntario unilateral o exprés).

#### **Anexo quince.**

Otro punto a destacar es que si bien del año 2005 al 2008 las causales que fueron acreditadas y por ende decretado el divorcio, corresponden por

orden descendente a: la separación del hogar por más de un año, el abandono del domicilio conyugal, la negativa a contribuir al sostén del hogar, la sevicia, amenazas e injurias o violencia intrafamiliar, la incitación a la violencia y el adulterio, a partir del año 2009 el divorcio por mutuo tiende a desaparecer (191), la procedencia del divorcio por acreditación de causales disminuyen notablemente, y por el contrario crece el número de sentencias sobre el divorcio incausal, así tenemos que de las 6,444 sentencias que se emiten en juicio de divorcio, 5,546 corresponden al voluntario unilateral o exprés, en tanto que solo aparecen 773 en relación a la separación del hogar, 41 por que ve a la negativa a contribuir voluntariamente a por sentencia del juez familiar al sostén del hogar y solo 38 respecto de la sevicia, amenazas, injurias o violencia intrafamiliar; en tanto que en el año 2010, de 8,232 sentencias de divorcio, solo 14 se generaron en el divorcio mutuo consentimiento y de las 8,218 que se emitieron en juicio de divorcio, 8,147 corresponden al voluntario unilateral o exprés, sobre causales, solo 39 en relación a la separación del hogar, 9 respecto de la sevicia, amenazas, injurias o violencia intrafamiliar y 5 por lo que ve la negativa a contribuir voluntariamente a por sentencia del juez familiar al sostén del hogar.

Esto genera el mensaje, que de tener un proceso de divorcio contencioso tradicional, -cuyas características son de difícil acreditación, según se ha visto a lo largo de esta investigación- hoy reformado para la obtención de un procedimiento rápido y sin causa alguna, la respuesta de la población es positiva, pues ha recurrido en mayor medida al trámite de la disolución del vínculo matrimonial incausal.

Lo mismo podemos decir, en relación con las consecuencias del divorcio, pues si comparamos la estadística del año 2005 respecto de la del año 2010, sobre a quién o a quienes se determinaba la patria potestad y los alimentos encontramos diferencias importantes. De ello podemos colegir que también en los aspectos relacionados con las consecuencias legales se han



modificado en forma positiva a partir del divorcio exprés, pues basta comparar que el año 2005 la sentencias en que se decreto que la patria potestad la ejercían ambos progenitores correspondió a la cifra de 2,851 casos, misma que se duplico en el año 2010 en la cual en 5,179 sentencias se otorgó a ambos padres.

Lo mismo puede observarse en relación con los alimentos, pues en el año 2005 en 2,816 sentencias se decretaron a favor de los hijos, en contrapartida, en el año 2010 fueron 4,790 los casos en que los alimentos se fijaron a favor de los hijos.

Con el análisis del comportamiento de las estadísticas del Distrito Federal en los últimos años, antes y después de la entrada en vigor del divorcio incausal, nos permite concluir que al haberse incrementado el número de divorcios decretados, así como el aumento de resoluciones a favor de ambos padres para el ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores de edad y el incremento de pensiones a favor de los hijos, deja en claro, que el actual proceso de divorcio incausal, ha sido bien recibido por los justiciables, con beneficio directo para ellos y para la prole.

La reforma del Distrito Federal sobre el divorcio incausal, aun con los criterios de interpretación que al respecto ha dado el Poder Judicial de la Federación sobre la Constitucionalidad de la normatividad respectiva, sigue generando cuestionamientos legales, éticos, sociales y hasta morales, simpatías y antipatías; empero no debemos dejar de considerar el resultado de la lectura de la estadística referida, que se refleja de manera específica en el aumento de disolución del vinculo matrimonial en base al divorcio incausal, y no solo eso, sino que aun cuando el proceso de divorcio exprés, puede escindirse sobre las consecuencias legales del divorcio, en caso de no existir conformidad de las partes divorciantes sobre los aspectos relacionados con los hijos y los de índole patrimonial del matrimonio, sin embargo, el

incremento de resoluciones a favor de ambos sobre el ejercicio de la patria potestad y de los alimentos para los hijos, hacen fundadamente suponer, que al encontrar la ventaja de un proceso ágil y dinámico para la obtención de la disolución del vínculo matrimonial, se convencen por si mismos que las mismas ventajas se presentan para resolver de manera ajustada a derecho y sin litigio de por medio de las consecuencias jurídicas del divorcio. Todo esto deja en claro la aceptación que de este juicio se ha tenido por los justiciables al poder acceder a la justicia mediante un proceso fresco, pronto y osado, en donde se privilegia la voluntad de las personas y se protege su intimidad o vida privada, la cual queda como tal y no descubierta a los ojos de terceros ajenos, un proceso que se despoja de la maraña de requisitos procedimentales y de fondo, para dar paso al respeto de las personas en plena concordancia con los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 14 y 17 de la Constitución General de la República.

## CAPÍTULO VIII

### HACIA UN MODELO IDÓNEO PARA UN PROCESO DE DIVORCIO.

#### 8.1 Panorama actual del divorcio<sup>491</sup>.

De la Paz y Fuentes señala que “...En nuestro país, hasta antes de las leyes de reforma, predominó la legislación canónica en cuanto el matrimonio, admitiendo por lo tanto solamente la separación de los cónyuges establecida por dicho sistema jurídico, ya en la ley de 23 de julio de 1859 se estableció el divorcio, pero con la condición de que los divorciados no contrajeran nuevo matrimonio mientras viviera alguna de ellos, es decir, sólo como separación de cuerpos, igualmente fue regulado el divorcio en los códigos civiles de 1870 y 1884, así fue como el último de los mencionados estipulaba que el divorcio no disolvía el vínculo matrimonial, solo suspendía alguna de sus obligaciones civiles, pero ya en la ley de relaciones familiares se estableció el divorcio como disolución del vínculo que deja en aptitud de contraer otro nuevo matrimonio, reconociendo numerosas causas de divorcio, y por último, contemplando también el mutuo consentimiento de los cónyuges”.<sup>492</sup>

---

<sup>491</sup> La hipótesis jurídica del divorcio en México ha experimentado diversas modificaciones a lo largo de la historia. El divorcio fue introducido en la legislación civil mexicana, por decreto del 29 de diciembre de 1914, publicado el 2 de enero de 1915 en El Constitucionalista, periódico oficial de la federación que se editaba en Veracruz, sede entonces del Primer Jefe del Ejecutivo Constitucionalista, Venustiano Carranza. En ese decreto, se modificó la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 14 de diciembre de 1874 reglamentaria de las adiciones y reformas de la Constitución Federal decretadas el 25 de diciembre de 1873. Véase, Instituto Nacional de Estudios Políticos A. C., *Memoria política de México. 1914. Ley sobre el divorcio. DVD*, INEP A. C., México, 2012, *passim*.

<sup>492</sup> Paz y Fuentes, Víctor M. de la, *op. cit.*, nota 74, pp. 46 a 47.

Respecto de la evolución del divorcio y sus procesos en el Estado de Jalisco, poco ha variado desde su génesis; en la Ley de Divorcio, expedida mediante decreto numero 63 de fecha 22 del mes de mayo de 1915 y promulgada por Manuel Aguirre Berlanga, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en virtud de las amplias facultades de que me hallo investido, en respuesta al decreto de 29 de fecha diciembre de 1914, expedido por la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista en el cual se modificó la fracción IX del Artículo 23 de la Ley de 24 de diciembre de 1874, que establecía que el matrimonio legítimamente contraído sólo podía disolverse por la muerte de uno de los consortes y únicamente autorizaba la separación de cuerpos, cuya reforma ya contempla que el matrimonio puede disolverse durante la vida de los cónyuges por mutuo y libre consentimiento de las partes o por las causas graves que determinaren las leyes locales, motivo por el cual era pertinente adecuar la norma local y realizar las modificaciones para incluir en nuestra ley sustantiva civil el divorcio vincular.

En cuya exposición de motivos se señala que las causas establecidas para la separación de los consortes que enumeraba el antiguo artículo 227 del Código Civil, podrían servir de sustento y aceptarse en su generalidad como causas de disolución del vínculo matrimonial, ya que si habían sido soporte para la autorización de separación por toda la vida de los consortes, eran indicativos de que la vida en común era ya imposible y tan solo dejan excluida la inherente a la infracción a las capitulaciones matrimoniales, por estimar que es de índole patrimonial, estableciendo textualmente que:

*“...Que no obstante, no se estima causa suficiente para el divorcio que disuelve el vínculo la que señalaba la fracción XII del artículo 227, es decir, la infracción a las capitulaciones matrimoniales; porque aparte de que ella no indica, ni mucho menos hace presumir que los consortes se hayan perdido el afecto de una manera irremediable, o que los altos fines del matrimonio se hayan hecho imposibles, hay necesidad de no*

*dar a los intereses meramente pecuniarios un valor exagerado, hasta el grado de sobreponerlos a los intereses morales y sociales de los consortes...*<sup>493</sup>.

Por lo cual en dicha época se determina, además del divorcio por mutuo consentimiento, diez causales de divorcio, siendo estas las siguientes:

“Artículo 227.- Son causas de divorcio:

I.- El adulterio de alguno de los cónyuges;

II.- El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrar el contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo;

III.- La perversión moral de alguno de los cónyuges, demostrada; por actos del marido para prostituir a la mujer, no sólo cuando lo haya hecho directamente, sino también cuando haya recibido cualquiera remuneración con el objeto expreso de que otro tenga relaciones ilícitas con ella; por la incitación del uno al otro para cometer algún delito aunque no sea de incontinencia carnal; o por algún otro hecho inmoral tan grave como los anteriores;

IV.- Ser cualquiera de los cónyuges incapaz para llenar los fines del matrimonio, o sufrir sífilis, tuberculosis, enajenación mental, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable, que sea, además, contagiosa o hereditaria;

---

<sup>493</sup> Poder Legislativo del Estado de Jalisco, *Biblioteca Virtual*, disponible en <[http://congresoweb.congreso.jalisco.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador\\_leyes\\_es\\_tatales.cfm](http://congresoweb.congreso.jalisco.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador_leyes_es_tatales.cfm)>, página consultada el 15 de diciembre de 2013.

V.- El abandono injustificado del domicilio conyugal por cualquiera de los consortes, durante seis meses consecutivos;

VI.- La ausencia del marido por más de un año, con abandono de las obligaciones inherentes al matrimonio;

VII.- La sevicia, las amenazas, las injurias graves o los malos tratamientos de un cónyuge para el otro, siempre que éstos o aquellas sean de tal naturaleza que hagan imposible la vida común;

VIII.- La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de cinco años de prisión;

IX.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito por el cual tenga que sufrir una pena de prisión o destierro mayor de diez años;

X.- El vicio incorregible de la embriaguez;

XI.- El mutuo consentimiento”.

Las causales de divorcio se fueron incrementando, así vemos que en el código civil publicado el 14 de mayo del año de 1935 en el Suplemento al número 32 del tomo CXXXI, que entro en vigor el primero de enero del año de 1936, contempla, además del mutuo dieciséis causales de divorcio, para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 322.- Son causas de divorcio:

I.- El adulterio de uno de los cónyuges;

II.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo;

III.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer;

IV.- La incitación o la violencia, hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal;

V.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción;

VI.- Padecer sífilis, tuberculosis o cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria; hallarse uno de los cónyuges comprendido en los casos que prevé la fracción VII del artículo 145 o padecer impotencia incurable, siempre que no esté en alguna de las excepciones señaladas por el citado artículo o que dicha impotencia, aun cuando exista en uno de los cónyuges, no haya sobrevenido después de celebrado el matrimonio y como consecuencia natural de la edad;

VII.- Padecer enajenación mental incurable;

VIII.- La separación de la casa conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;

IX.- La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio;

X.- La declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta que preceda la declaración de ausencia;

XI.- La sevicia, las amenazas, o las injurias graves de un cónyuge para el otro;

XII.- La negativa de los cónyuges de darse alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153, siempre que no puedan hacer efectivos los derechos que les conceden los artículos 154 y 155;

XIII.\_ La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;

XIV.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;

XV.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal;

XVI.- Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión;

XVII.- El mutuo consentimiento”.



Finalmente, la legislación actual de Jalisco, prevé 19 causales de divorcio, incluyendo el divorcio por mutuo consentimiento, siendo estas las siguientes<sup>494</sup>:

**“Artículo 404.-** Son causas de divorcio:

I. La infidelidad sexual<sup>495</sup>;

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad<sup>496</sup>;

---

<sup>494</sup> *Ídem.*

<sup>495</sup> No se olvide que la SCJN, reconoce y da validez a la prueba indirecta.

<sup>496</sup> *“...no hay delito alguno en que la mujer oculte al futuro marido que se encuentra encinta de un tercero, pero sí hay un grave hecho inmoral, también existe una injuria que se causa al marido al momento de celebrar el matrimonio, por cuanto resultará deshonor para éste...*

*Por lo anterior, los efectos del matrimonio respecto a los hijos, se aprecian desde los siguientes puntos de vista: a) Para atribuirles la calidad de hijos legítimos. b) Para legitimar hijos naturales mediante el matrimonio de sus padres. c) Para originar certeza respecto de los derechos y obligaciones que impone el ejercicio de la patria potestad. Son hijos legítimos: I. los hijos nacidos después de 180 días contados después de la celebración del matrimonio. II. Los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tengan como nacidos de matrimonio los hijos habidos antes de su celebración. ”. Baqueiro Rojas, Edgar, *Derecho Familiar*, México, Editorial Oxford, 1999, p. 173.*

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa<sup>497</sup>;

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito;

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión<sup>498</sup>;

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente<sup>499</sup>;

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;

---

<sup>497</sup> "...normalmente tiene lugar del marido respecto de la prostitución de su mujer y que no sólo se da por la propuesta, sino también cuando ha recibido dinero o cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer. Esta conducta constituye un delito, lenocinio, por la explotación del cuerpo de uno de los cónyuges por el otro." *Ibidem*, p. 174.

<sup>498</sup> "...Estos actos pueden llegar a constituir delito especial de corrupción de menores, o bien el hecho inmoral que ello conlleve, en algunos casos aun cuando se trate de mayor de edad". *Ídem*.

<sup>499</sup> "...Tiene el mismo tratamiento que las otras enfermedades: pero requiere la propia declaración de interdicción de enfermo." Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, p. 233.

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;

XVIII. El mutuo consentimiento; y

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho.<sup>500</sup>

El comparativo de las normas legales que contienen las causales de divorcio que han regido nuestra entidad federativa, a partir del reconocimiento del divorcio vincular, deja en claro que estas se han ido

---

<sup>500</sup> “... De tal manera que al cesar la vida en común por cierto tiempo, se permite el divorcio, no obstante que no haya una culpa o hecho imputable a los cónyuges. Esta separación no quiere decir necesariamente el abandono de todas las obligaciones conyugales, es por esto que el Código Civil no nos dice abandono por más de seis meses sin causa justificada, sino separación del hogar conyugal sin tener causa”. Rojina Villegas, Rafael, *op. cit.*, nota 255, p. 345.

incrementando, y por el contrario ninguna de ellas se ha suprimido o derogado, aunque sean obsoletas y difícil acreditación, en tanto que la evolución de algunas otras consiste en la modificación a su contenido para adecuarlas a la realidad social que se vive, o bien para tratar de que no exista discriminación y la conducta sea reprochable en igualdad o similitud de circunstancias, tanto para el cónyuge varón como la mujer. Algunas de las reformas que han sufrido diversas causales, según se analizó en los capítulos tercero y cuarto en forma específica, han sido benéficas, en tanto otras, aun cuando el sentido o espíritu del legislador fue la igualdad entre los cónyuges, no logran su objetivo primordial, y si por el contrario, se considera de difícil acreditación, lo que en todo caso provoca su escaso o nulo planteamiento en los procesos de divorcio, con las consecuencias referidas.

Por otra parte el sinfín de reformas a las causales de divorcio que se ha presentado en últimos tiempos, aunque desafortunadas algunas de ellas, dejan en claro que los legisladores conocen la problemática y el incremento del divorcio, empero no entienden los procesos pues no han podido legislar de forma tal, que el conflicto se solucione de la mejor manera para los propios involucrados y su progenie.

A lo largo de la investigación tanto doctrinaria, como estadística y de campo, se ha intentado dar una visión panorámica de la evolución de esta figura jurídica, lo que nos conduce a establecer que es palmario el incremento que existe de los procesos de divorcio y que en Jalisco se opta en mayor número por el divorcio por mutuo consentimiento en tanto que en el Distrito Federal es mayor el porcentaje de juicios de divorcio de índole contencioso. Y aunque el número de demandas cada vez es mayor, no por ello se obtiene un mejor porcentaje de sentencias de divorcios, sino por el contrario, el poco índice de las sentencias emitidas en juicio que lo decretan; igualmente se ha establecido que del cúmulo de causales, diecinueve según el contenido de los artículos 404 y 405 del código civil, las que más se intentan y resultan

procedentes, son las inherentes a la separación o abandono del domicilio conyugal, la negativa a proporcionar alimentos a los acreedores alimentarios, la violencia intrafamiliar o sevicia, amenazas e injurias, la infidelidad sexual, en contrapartida es casi nulo el ejercicio del resto de las causales y algunas de ellas, han caído en total desuso.

Podrá estarse o no de acuerdo con el divorcio que históricamente se ha polarizado, entre divorcistas y antidivorcistas, al respecto Zannoni, apunta:

*“...Los primeros niegan o al menos relativizan la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Los segundos, en cambio, erigen el principio de la indisolubilidad en axioma. La cuestión del divorcio, en efecto se plantea y resuelve en función de este principio y de la adhesión que él merezca. Lo que ocurre es que, como decimos, la indisolubilidad o la disolubilidad del matrimonio trasciende el ámbito jurídico y se proyecta hacia concepciones éticas, religiosas, culturales, sociológicas, etcétera.*

*El antidivorcismo reconoce, generalmente, la tradición del iusnaturalismo dogmático, aun cuando también se le formule recurriendo a conceptos puramente éticos o de moral laica. La unidad o indisolubilidad del matrimonio, desde esta perspectiva constituyen requerimientos del fin existencial del hombre y del fin social de la unión matrimonial: la crianza de hijos.*

*Respondiendo a este interrogante un eminente jurista católico, Simón Santoja, reflexiona con prudencia. “No podemos contentarnos – afirma- con una continuación del matrimonio meramente externa y legalmente impuesta. En situaciones entrañan un conflicto y repulsión profundas, el mantener unida por la sola sanción legal a una pareja puede resultar más destructivo para ellos mismos y sus hijos que al permitir su separación”.*

*Y continúa “Los matrimonios destrozados no los causan los divorciados. El rompimiento de matrimonio es ya un hecho, mucho antes de que sea jurídicamente establecido. En este sentido es ilusorio señalar el constante crecimiento de la proporción del divorcio y demandar una legislación más rígida sobre el divorcio. Las causas del rompimiento del matrimonio son profundamente personales a la vez que sociales. Aunque no poseamos estadísticas sobre el número de matrimonios desechos en los países en que se admite el divorcio, no es menor en países donde no se reconoce y donde la crisis matrimoniales se solucionan con la separación amistosa, el abandono familiar o el adulterio por compensación que cubra las apariencias externas.”<sup>501</sup>*

Sobre el tema de la divergencia de opiniones sobre la disolución del vínculo matrimonial, Augusto César Belluscio, señala:

*“...La disolubilidad del matrimonio en vida de los cónyuges por medio del divorcio absoluto o vincular es, quizás, el problema de derecho de familia que mayores divergencias ha causado entre los juristas, no sólo por su solución en sí sino porque muchas veces las ideas que a su respecto se sustentan influyen en las tesis que se adoptan acerca de otros temas estrictamente ajenos a él.*

*En general, pueden señalarse como argumentos adversos al divorcio absoluto los siguientes: a) el religioso, según el cual el divorcio disolutivo del vínculo no puede ser admitido en un país en que la gran mayoría de la población sustenta el culto católico, pues afectaría las ideas religiosas de esa mayoría, que considera al matrimonio como un sacramento e indisoluble; b) el del interés social, según el cual la indisolubilidad del matrimonio constituye la base de la organización de*

---

<sup>501</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, pp. 21 a 23.

*la familia y de la sociedad, cuyo interés exige que esa indisolubilidad se mantenga y debe privar sobre el interés individual; c) el del interés de los hijos, cuya educación o formación se vería afectada por su sometimiento a un padrastro o una madrastra, o por la situación de sus padres, casado cada uno por su lado, y d) finalmente, el incremento que el divorcio experimentaría al autorizarse legalmente la celebración de segundo matrimonio, lo que se traduce en la máxima de que “el divorcio engendra el divorcio”.*

*A esos argumentos cabe refutar con los siguientes: a) Las ideas religiosas de la mayoría no pueden ser las que determinen las soluciones de la legislación para problemas sociales; ni la mayoría católica debe imponer la indisolubilidad del vínculo ni la mayoría acatólica la disolubilidad, sino que el legislador debe decidir lo que según su conciencia consulte mejor el interés social. De lo contrario, todo el problema se reduciría a un cómputo de las ideas religiosas de la población, sin que pueda dejarse de lado que son numerosos los católicos partidarios del divorcio absoluto a pesar del dogma de la Iglesia. b) No es verdad inconcusa que el divorcio absoluto sea más acorde con el interés individual y el limitado con el interés social. La situación de los esposos divorciados sin posibilidad de nuevo matrimonio conduce falazmente, y en especial cuando son jóvenes, a las uniones ilegítimas, que ningún interés social aconseja favorecer. c) Tampoco es verdadero que el interés de los hijos se vea favorecido con el celibato impuesto a los padres separados. Por lo pronto, el mismo problema se presenta en el segundo matrimonio de los viudos y a nadie se le ha ocurrido prohibirlo; por otra parte, en numerosos casos los hijos pueden hallar en el nuevo compañero de su progenitor una guía más segura en su educación que la del padre o madre verdadero. d) Por último, no puede afirmarse que sea la admisión del divorcio vincular lo que ocasiona el aumento del número de divorcios. Se trata*



*de un fenómeno social de múltiples causas, que se produjo no sólo en los países que aceptaban el divorcio absoluto sino también en los que lo rechazaban, y que caracteriza a nuestra época.”*<sup>502</sup>

Las normas jurídicas que corresponden a los sistemas actuales del divorcio en Jalisco, están plagados de formalismos, que como dice Bobbio<sup>503</sup>, coincide con la concepción legalista de la justicia, cuando externa:

*“...En una primera acepción, se entiende por “formalismo jurídico” cierta teoría de la justicia en particular, la teoría según la cual acto justo es aquel que conforme a la ley, e injusto aquel que está en desacuerdo con ella. Más exactamente, se deberá llamar “formalismo ético” porque tiene en común con todas las teorías formalista de la ética la afirmación de que el juicio ético consiste en un juicio de conformidad de un acto con la norma, de donde bueno es el acto realizado para cumplir con la ley, y malo aquel que se realiza para transgredirla, el termino más común para designar esta teoría es “legalismo”. Podemos decir que en esta primera acepción el formalismo jurídico coincide con la concepción legalista de la justicia. Es indudable que parte de las acusaciones contra el formalismo jurídico están dirigidas contra la concepción legalista de la justicia, en defensa de una concepción que sepa distinguir el juicio de legalidad del juicio sobre la justicia o injusticia de las acciones y tenga conciencia del hecho de que los dos juicios divergen, y que no siempre la acción legal es justa, ni la justa legal.”*

---

<sup>502</sup> Belluscio, César Augusto, *Manual de Derecho de Familia*, 7ª ed., (1ª reimp.), Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Desalma, 2004, t. II, pp. 227 a 235.

<sup>503</sup> Bobbio, Norberto, *El problema del positivismo jurídico. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política*, México, Distribuciones Fontamara, 1991, p. 13.

El divorcio no es la solución definitiva a los problemas que aquejan a los matrimonios, sin embargo, debemos reconocer que en muchas ocasiones es la única vía posible para resolver el conflicto y que los involucrados logren una mejor fórmula de vida que la que han padecido, según la gravedad del caso, sin embargo los actuales sistemas de divorcio que se contemplan en la legislación de Jalisco, están agotados no tienen cabida en este siglo que inicia, pues distan mucho de resolver en forma expedita y eficaz el litigio planteado, lo que incide en acrecentar aun más el antagonismo de los contendientes, en perjuicio de ellos de su prole, así como el detrimento tanto del foro de abogados como de la impartición de justicia, motivo por el cual, es menester contemplar alternativas que den solución real al problema, ello no implica que se dé una total solución a la problemática planteada en esta investigación, pues ante los ojos de los defensores del matrimonio y opositores del divorcio, esto representa un retroceso.

Sin embargo, no debemos olvidar, que como lo expreso Kelsen,<sup>504</sup> *“...Si hay algo que la historia del conocimiento humano puede enseñarnos, la inutilidad de los intentos de encontrar por medios racionales una norma de conducta justa que tenga validez absoluta, es decir, una norma que excluya la posibilidad de considerar como justa la conducta opuesta. Si hay algo que podemos aprender de la experiencia espiritual del pasado es que la razón humanan solo puede concebir valores relativos, esto, es que el juicio con el que juzgamos algo como justo no puede pretender jamás excluir la posibilidad de un juicio de valor puesto. La justicia absoluta es un ideal irracional. Desde el punto de vista del conocimiento racional existen solo intereses humanos y, por lo tanto, conflicto de interés. Para la solución de los mismo existen solo dos soluciones: o satisfacer el uno a costa del otro o establecer compromiso entre ambos. No es posible demostrar que esta y no aquella es la solución justa. Si se supone que la paz social es el valor*

---

<sup>504</sup> Kelsen, Hans, *op. cit.*, nota 134, pp. 75 y 76.

*supremo, el compromiso aparecerá como la solución justa. Pero también la justicia de la paz es solo una justicia relativa y en ningún caso, absoluta.”.*

Tampoco podemos soslayar la lentitud de los procesos, Herrendorf dice que esto es común en jueces atosigados, que la justicia, al parecer, es lenta, fue lenta y nada indica que dejará de serlo, que a la parsimonia endémica debe sumarse la lentitud adicional que proporciona la burocracia judicial *ad hoc*, constituida en todas partes en máquina de impedir, y que en forma sistemática dilata todo lo dilatable, alude a la innumerable cantidad de recursos que el derecho procesal pone a disposición de los abogados inescrupulosos, que así retrasen el advenimiento de la sentencia y “ganan tiempo”, si es que eso es ganarlo en buena ley, concluye diciendo: “...La tardanza judicial es la consagración de la pérdida de tiempo; en este punto la tardanza es lesiva, y ya como costumbre judicial constituye una lesión continua que la magistratura ejecuta contra toda la sociedad. El derecho a una decisión judicial rápida y eficaz está consagrado por el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”<sup>505</sup>

## **8.2 Alternativas jurídicas posibles para los procesos de divorcio.**

Con el devenir del tiempo la humanidad ha refinado su trato y en particular la manera en que cada sujeto dirime su derecho, cuando se ven aparentemente afectados por los intereses de otro individuo. Históricamente han aparecido mecanismos de auto-defensa, para civilizar adecuadamente los extremos de las vindictas para ir superando la venganza pública y la

---

<sup>505</sup> Herrendorf, Daniel E., *op. cit.*, nota 20, p. 22.

privada que es respuesta a los sentimientos de agresión que lleva muy dentro el individuo.

Las primeras fuentes legales para dirimir el derecho se presentaron como meras fórmulas de auto-composición para arreglar los conflictos entre los contendientes, hasta llegar al proceso que es más perfectible dentro de ellas para poder asegurar la mayor y mejor imparcialidad dentro de la impartición de justicia, en que intervienen los protagonistas de la contienda pero con una garantía de un tercer elemento a cargo del Estado que satisface esa exigencia de no inclinarse a favor previamente de ninguno de ellos y basado en principios fundamentales dentro de esos procedimientos jurisdiccionales que durante siglos se ha preocupado, pero no instrumentando de la mejor manera posible para la consecución de la desiderata permanente como es la justicia.

Es un hecho innegable que en la actualidad no es factible que todas las contiendas se canalicen por los procedimientos jurídicos tradicionales, pues como ha quedado palmario, estos en múltiples ocasiones, por tecnicismos injustificados, formulismos ancestrales y de reciente creación, no cumplen los mencionados propósitos, o bien, se han dilatado en sus soluciones ante el incremento de asuntos en los juzgados familiares que aumentan en progresión geométrica, como una triste realidad, resultando así, que por eso se requiera que se investigue sobre nuevas formas jurídicas para poder así estar en aptitud de remediar todas esas situaciones de conflicto en donde los interesados no se puedan poner de acuerdo en sus pretendidos derechos o solucionar sus litigios.

Es importante distinguir la siguiente dicotomía o dualidad que se presenta, no con un carácter exclusivamente semántico o de una postura lingüística, sino con ramificaciones en el aspecto legal, como lo es la diferencia entre decir el derecho, o sea, como actividad de difusión,

información enseñanza, aprendizaje de esa fantástica ciencia jurídica, que lo puede realizar y satisfacer el catedrático universitario, el investigador, el jurista, el abogado a su cliente, etcétera y la realidad del decidir del derecho, que trae aparejada la ejecutoriedad por parte del Estado a través del auxilio de la fuerza pública, y que todo esto genera un alto grado de dificultad, ya que no puede quedar a la voluntad de las partes pues se convierte en impráctico, sino que debe ser investido con la facultad autárquica del Estado para hacer cumplir sus propias determinaciones. Recordemos que Stammler indica con elementos del derecho los siguientes: *“Querer (voluntad), entrelazante, autárquico e inviolable”*.<sup>506</sup>

Como primera premisa encontramos, y así ya lo hemos comentado, dentro del orden ontológico (del ser) y ante una incuestionable realidad, es que hay progresión geométrica alarmante en el número de juicios por resolver, conjuntamente ante una idiosincrasia no propicia para la aceptación de formulas conciliatorias, sino más bien reacias y hasta adversas, donde inciden diversas causas para provocar tales efectos, como podría ser la cultura que la controversia debe resolverse siempre a través del proceso (litigio); la resistencia en muchos casos del profesionista del derecho para solucionarlo por una vía diversa de la conocida, donde incluso, se propician deferencias o desavenencias aún más hondas y profundas que separan radicalmente a las partes en conflicto. Sobre el tema, Pérez Saucedo, Zaragoza Huerta y Barba Álvarez apuntan: *“...El experto abogado es un conocedor de las normas y formalismos jurídicos, lejos de la capacidad de argumentar, de consideraciones axiológicas y de ponderación, el Derecho se vuelve un trabajo técnico. ...En esta visión legalista, poca atención se presta a la comunicación, psicología, política, etc., en la formación jurídica. Los abogados tienen que ver solamente con aspectos donde las normas escritas o el proceso judicial intervengan, después o más allá de ello, compete a otras*

---

<sup>506</sup> Stammler, Rudolf, *El Juez*, México D. F., Editorial Nacional, 2001, p. 32.

*ramas del saber atender cualquier contingencia.*<sup>507</sup>; los diversos tecnicismos que abundan dentro del proceso que hacen valer los contendientes para alargarlo y así obtener todo el tiempo necesario para diferirlo antes que cumplir con sus respectivas obligaciones, porque esto es lo único que lamentablemente les interesa, sin preocuparse por una solución pertinente y de fondo.

Cuantas veces influye también la soberbia, egoísmo, orgullo de los sujetos en conflicto, o su mala fe y predisposición de convertirlo en un campo de gladiadores en luchas desgastantes en donde toman de rehenes a su prole, en que al final no hay ni ganador ni perdedor, pero que todos los miembros de la familia sufren sus consecuencias, en fin, en este ángulo del ser existen diversas causas que provocan la crítica destructiva para impedir el establecimiento o cumplimiento de diversos instrumentos alternos para la real solución del conflicto, se debe considerar un cambio de mentalidad, comprendiendo que ese enfrentamiento entre partes, crea o incrementa los malos entendidos, relaciones tensas, quizás por una escasa visión del problema, o por una pretensión de superioridad, de jactancia, en la que hay que superar la fase adversarial<sup>508</sup>, a lo cooperativo, a efecto de lograr una mutua colaboración de los sujetos en conflicto para su superación, entendimiento interpersonal definitivo. Por eso hay que contemplar los aspectos de un problema complejo que divide dos o más personas, que se refinan, no para obtener cada una su propia victoria, sino para solucionar, concordes, cuestión planteada. E igualmente, tomando muy en cuenta la siguiente situación:

*“...Que lo normal en nuestro mundo cotidiano es que el derecho se cumple, en la mayoría de los casos, espontáneamente, sin necesidad de acudir a la maquinaria judicial, y que sostener lo*

---

<sup>507</sup> Pérez Saucedo, José Benito *et al.*, *op. cit.*, nota 10, *passim*.

<sup>508</sup> *Ídem*.

*contrario, sería simplemente caótico. Y que esa cultura litigiosa es conveniente encauzarla o sublimarla hacia soluciones de pacificación...”*<sup>509</sup>

Como segunda premisa en este nuestro silogismo, encontramos ya dentro del campo deontológico (del deber ser), todo el apoyo teórico doctrinario para establecer convenientemente los instrumentos o medios jurídicos diversos, pero efectivos, con el respaldo de autoridades y ciudadanía, con la visión moderna de que primero y sobre todo se encuentra el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, entre ellos libertad de decisión de las personas, la protección de su vida íntima, la protección de la familia, bajo los nuevos estándares que existen; se debe tomar en cuenta como factores primordiales la estadística aludida en el capítulo anterior, en donde se deja en claro y de manera comprobada que cada vez hay más separaciones y divorcios, que el formato de matrimonio hasta la muerte, ha caducado o es obsoleto, por lo que la legislación debe adaptarse a los nuevos tiempos que corren y dar respuesta eficaz y expedita a un hecho social evidente: alargar un conflicto entre cónyuges es un sinsentido.

Realizado el análisis sobre las dificultades tanto sustantivas como procesales para la obtención de la disolución del vínculo matrimonial, cabe preguntarse cuál podría ser la solución de la problemática que se presenta sobre el tema planteado, y como respuesta, transitaremos por tres posibles rumbos jurídicos.

### **8.2.1 Divorcio Judicial Voluntario y con causa.**

Poco se puede innovar en cuanto al divorcio por mutuo consentimiento desde el punto de vista sustantivo, tan solo de índole procesal. Como se vio

---

<sup>509</sup> *Ibídem*, p. 35.

en el capítulo segundo, el “mutuo”, corresponde a una forma de disolución que se presenta como respuesta a la posición clásica y rígida del divorcio causal, pues como indica Zannoni, el derecho liberal moderno replanteó la cuestión del divorcio por mutuo consentimiento de los esposos, “...*El “mutuo consentimiento” se abre paso, pues, para resolver aquellos casos en que los cónyuges son plenamente conscientes de que seguir unidos es peor –para sí y para sus hijos- que separarse...*”.<sup>510</sup>

En cuanto al divorcio contencioso, puede plantearse la continuación de la doctrina clásica de la permanencia del divorcio sanción, pero con la modificación a la ley sustantiva para dejar de lado el catálogo de causales y simplemente establecer dos rubros de conducta indebida en forma genérica que conlleven causa para la obtención del divorcio, uno sería, aquella conducta que sea contraria a los fines del matrimonio o que no se cumplan estos, el otro título corresponde a cualquier conducta que por sus características implique violencia intrafamiliar, ya sea entre los cónyuges o los hijos de estos sean o no de ambos.

Esto no es novedoso ya que existe en otros países, sino tan solo una tendencia diferente, “...*Dentro de las pautas del divorcio-sanción se advierte también una tendencia a eliminar la enumeración taxativa de causas de divorcio. Es citable, así, el artículo 242 del Código Civil Francés que, luego de la reforma de 1975, establece que el divorcio puede ser demandado por un cónyuge en razón de hechos “imputables al otro cuando esos hechos constituyen una violación grave y reiterada de los deberes y obligaciones del matrimonio y hacen intolerable el mantenimiento de la vida en común”. Otro tanto ha ocurrido en el derecho italiano, aunque en materia de separación de cuerpos. El art. 151 del Cód. Civil., según el texto dispuesto por la ley de 1975, determina que “la separación puede ser pedida cuando se verifican,*

---

<sup>510</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, p. 11.



*aun independientemente de la voluntad de uno o de ambos cónyuges, hechos tales que hagan intolerable la prosecución de la convivencia o que ocasionen grave perjuicio a la educación de la prole”. Si bien este enunciado contiene también un divorcio sin imputación de culpas, los hechos que pueden fundarlo no la excluyen, pues si uno de los cónyuges lo solicita “el juez debe declarar a cuál de los cónyuges es imputable la separación en atención a su comportamiento contrario a los deberes que derivan del matrimonio” (art. 151, párr. 2º).<sup>511</sup>*

Sobre el primer aspecto, debemos dejar en claro que acorde a la ley civil el matrimonio es la manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie, bien sea para convertirse en sacramento como se admite en el derecho canónico, en un contrato como se considera en distintos derecho positivos o como un acto de naturaleza compleja en el que interviene además un funcionario público<sup>512</sup>

A diferencia del *Canónico*.- “La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento”<sup>513</sup>.

Es pues, el medio por el cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, cuyos fines<sup>514</sup> corresponden a:

---

<sup>511</sup> *Ibidem*, p. 75.

<sup>512</sup> Ibarrola, Antonio De, *op. cit.*, nota 63, *passim*.

<sup>513</sup> Navarrete, Urbano, *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid, Biblioteca autores cristianos, 2007, p. 232.

<sup>514</sup> Véase, Código Civil del estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, art. 259.

I. Es libremente electo, tanto por lo que corresponde a su celebración, como a la persona con quien se contrae;

II. Los cónyuges conservarán en todo tiempo, la libertad para determinar la totalidad de los aspectos concernientes a su relación matrimonial, dado que los vínculos que derivan de tal unión, son exclusivos de la pareja;

III. Con el matrimonio se funda legalmente la familia, que es la comunidad establecida naturalmente para la diaria convivencia;

IV. La estabilidad de la familia, base de las instituciones sociales, contribuye a la armonía social, por ello se inculcarán en su seno principios, valores y la cultura de la igualdad y equidad de género;

V. En las relaciones conyugales tiene manifestación la complementariedad de los seres humanos en los aspectos afectivo y biológico, ningún cónyuge es superior al otro y con la unión se hace posible el desarrollo de la potencialidad humana;

VI. El hijo debe ser la expresión del amor de sus padres;

VII. La familia constituye el medio natural para el desarrollo de las interrelaciones de responsabilidad y solidaridad humana;

VIII. En la familia debe buscarse el afecto y la fidelidad, así como darse apoyo recíproco; y

IX. El afecto familiar es reconocido como una dignidad, no como un sometimiento de un ser a otro, sino como un perfecto entendimiento sobre los valores de existencia humana.

Los esposos tienen el derecho natural e inalienable de fundar una familia y decidir responsablemente sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear.

Entonces, cualquier conducta desplegada por uno de los consorte que violente tales fines o que no cumpla con los mismos, pueda ser generadora de la causa que motive el divorcio necesario, y como ejemplo de una conducta contraria a tales fines y que actualmente se contemplan en el listado de causales, se encuentra la infidelidad que violenta la fracción VIII del artículo 259 del código civil, la separación del domicilio conyugal por más de seis meses, un año o dos años y la declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia, pues cuando se presenta, no se logra el objetivo que se contempla en la fracción III, en tanto que la negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos, violenta los fines consagrados en las fracciones IV, VI, VII, VIII y IX,

En tanto que el segundo rubro englobaría aquellas conductas que representan violencia intrafamiliar<sup>515</sup>, y que lógicamente por sus

---

<sup>515</sup> Véase, Espacios Poder Joven, Instituto mexicano de la Juventud, *op. cit.*, nota 370.. La violencia Intrafamiliar es aquella que se da dentro de la familia, puede ser que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, este tipo de violencia comprende violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. En este tipo de violencia suelen intervenir varios factores, dependiendo del entorno social en el que se desenvuelve y desarrolla el sujeto, Actualmente la mujer es más propensa a sufrir este tipo de violencia, pero datos recientes revelan que el hombre también tiende a padecerla de manera frecuente, siendo víctima tanto de hombres como de mujeres. En la violencia intrafamiliar las víctimas pueden ser los hijos, hermanos, primos, tíos, etcétera. Causas: La violencia intrafamiliar se da básicamente por tres factores, algunos de ellos son la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad de resolver problemas adecuadamente, además en algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas.

características, pueden coincidir con algunas de las causales del actual, ya que estas tienen una carga menor o mayor de violencia, así podemos decir que dicho comportamiento inadecuado y violento se presenta cuando se presenta propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa, así como la incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito, al igual que los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión, la propia violencia intrafamiliar, entendida como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido, al igual que la acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión, etcétera.

En ambas concepciones, tanto el divorcio causal como el voluntario, subsiste el aspecto del divorcio causal, pues, *“...en un caso, las “causas” son faltas, ilícitos atribuidos por un cónyuge al otro, en el segundo, las “causas” trascienden en su resultado objetivo; precisamente, la quiebra irremediable, el fracaso definitivo de la unión. Pero, con todo, esa quiebra, ese fracaso, son jurídicamente la causa del divorcio. El mutuo consentimiento, en cambio, opera con virtualidad propia: es, en el plano formal, la causa misma del divorcio. Lo recalamos; causa en el plano formal, la causa misma del divorcio. Lo recalamos; causa en el plano formal, pues seguramente subyacen las causas del conflicto que conducen a la decisión común de divorciarse.”*<sup>516</sup>.

---

<sup>516</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, pp. 12 y 13.

En cuanto a la reforma procesal, puede considerarse viable que en divorcio por mutuo consentimiento solo exista una audiencia, la cual verse tanto para la ratificación de la solicitud como para lograr el avenimiento de los peticionarios, y en caso de que esto no se logre, la emisión del fallo respectivo, lo que en todo caso al suprimir una de las dos comparecencias que actualmente rigen, puede generar ahorro de tiempo, tanto para las partes como para los órganos jurisdiccionales.

Por lo que corresponde al juicio de divorcio contencioso, las reformas serían mayores, ya que se tendría como finalidad lograr un proceso uniforme y más ágil. Las modificaciones factibles, consisten en que se disponga que en los juicios de índole familiar, cuando se intenten dos o más acciones, se deben ventilar en una misma vía (y no la multiplicidad de vías y procedimientos que actualmente existen), que en los casos en que se discutan o se encuentren inmersos derechos de menores, el juez de oficio y desde el inicio del proceso, puede ordenar y decretar todas las medidas y medios de prueba que estime pertinentes para resolver en pleno respeto al interés superior de la niñez, que el procedimiento sea similar a los que actualmente rigen para los juicios de desahucio o pérdida del ejercicio de la patria potestad, y que en sí corresponde a que en el propio escrito de presentación de la demanda y en su caso de la su contestación, (lo mismo en caso de reconvención) se oferten las pruebas por las partes, que concluida la fase inicial, en la etapa conciliatoria puedan las partes dirimir la controversia y llegar a un convenio en el cual se determine la voluntad de ambos para la disolución del vínculo matrimonial, en el cual se deban de especificar los puntos relativos a los aspectos de las consecuencias del divorcio, tanto de índole patrimonial como en relación a los hijos, si los hubiera, ya sean menores o mayores de edad, en caso de que estos últimos estén en etapa de formación educativa, convenio que debe estar ajustado a derecho y en su momento aprobarse por el juzgador y elevarlo a categoría de sentencia. Que de no llegarse a un convenio, se establezca una audiencia única para el

desahogo e integración de las pruebas admitidas, la cual podrá diferirse por una solo ocasión, concluida esta fase, abrir la de alegatos y citar para sentencia. Que la vista al agente social, solo se dé en aquellos casos en que exista controversia sobre los derechos de los menores, y que solo en los asuntos en que se presenten intereses encontrados entre los padres e hijos menores de edad o incapacitados, se designe tutor dativo para que represente a estos últimos.

Actualmente se da vista al agente social en la mayoría de los asuntos de divorcio, ya que la ley<sup>517</sup> dispone que los agentes de la Procuraduría Social intervendrán en todos los juicios en los que se afecten los intereses sociales; se afecte a la persona, bienes o derechos de menores, incapaces, adultos mayores o ausentes y en todos los casos que dispusiere la ley, y si bien la intervención de este funcionario lo faculta para recabar, ofrecer, desahogar, objetar pruebas; interponer y continuar recursos e incidentes, formular alegatos y en general solicitar al Juzgador la realización de todos los actos procesales para la continuación del juicio; así como el garantizar la legalidad del procedimiento y salvaguardar los derechos de sociedad, de los menores de edad, incapaces, adultos mayores y ausentes para lo cual podrá imponerse de los autos en la secretaría y podrá solicitar se le entreguen copias de los mismos; norma de reciente creación que entro en vigor a principios del año 2009<sup>518</sup>, que ha provocado que en un sin fin de procedimientos de esta índole, en los cuales no se había dado vista al agente social, se determine, ya sea por apelación o vía amparo, la insubsistencia de la sentencia emitida y la reposición del procedimiento para la vista respectiva, con un resultado idéntico, pues hecho ello, el representante social nada manifiesta al respecto, lo que deja de manifiesto que solo se produce una

---

<sup>517</sup> Véase, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 30, art. 68-ter.

<sup>518</sup> Decreto 22578/LVIII/09. Adición del artículo 68 ter. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.-Feb. 5 de 2009. Sec. III.

dilación innecesaria en el proceso judicial que violenta la norma constitucional contenida en el artículo 17 de la máxima ley del país; motivos por los cuales, se considera que se debe reformar este dispositivo y solo dar la intervención al agente social en aquellos casos en que realmente se presente controversia sobre los derechos de los menores o incapacitados, pues debemos de considera que en la práctica cotidiana se deja entrever que su intervención resulta casi un aliño procesal, que solo dilata e incrementa el burocratismo es los procesos judiciales; empero no debemos negar que la vista al agente social o ministerio público, según sea el caso, es atendible, pues “...*Su intervención es sumamente importante para proteger los derechos e intereses de carácter patrimonial de los menores de edad, así como para vigilar se cumplan los dispositivos legales relativos al divorcio.*”<sup>519</sup>.

Empero, aunque aparentemente las modificaciones o reformas a las normas del proceso, implicaran que este pudiera ser más rápido, no debemos perder de vista que continuar con el divorcio remedio o sanción, aun sin un listado de conductas específicas que se consideren causal de divorcio, no conlleva la solución práctica y rápida del conflicto, ya que evidentemente cualquier conducta que se reproche al consorte, deberá de ser expuesto de manera clara, sucinta y específica, señalando las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ella se ejecutó o se despliega dicho comportamiento, con la carga procesal de acreditar dentro del proceso tales hechos, cumpliendo a cabalidad los requisitos que al respecto marca la ley y se han establecido en jurisprudencia y tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación y que han quedado plasmados a lo largo y ancho de este trabajo de investigación. Motivos por lo que se considera que este no es el camino jurídico adecuado o correcto para que las partes en conflicto, solucionen de la mejor manera, en forma rápida y expedita sus problemas matrimoniales.

---

<sup>519</sup> Paz y Fuentes, Víctor M. De La, *op. cit.*, nota 74, p. 58.

## 8.2.2 Divorcio por medios alternativos.

Un segundo camino que se considera viable, sería la obtención del divorcio por medios alternativos de resolución de conflictos, Gorjón Gómez y Steele Garza sobre los métodos alternos de solución de conflictos, señalan: *“...El entorno donde se desarrollan los MASC es multidisciplinario y multifuncional, características que se consideran virtudes, pues la aplicación de la negociación, la mediación-conciliación y arbitraje no es privativa de los abogados. Antes bien, es necesario conocer el problema por resolver y su especificidad para determinar la profesión del negociador, del mediador y, en su caso, del árbitro. Así mismo los MASC operan en todos los niveles sociales, sin distinguir raza, sexo o edad, por lo que no deberá situarse en un estadio social determinado o en un rango temporal determinado. Lo anterior puede derivarse una clasificación muy amplia de tipos de mediación, conciliación y arbitraje; médico, de consumo, financiero, civil, familiar, comunitario o escolar, por mencionar solo algunos.”*<sup>520</sup>.

Es innegable que cada vez es más frecuente el tema de la resolución de conflictos a través de diversos medios alternativos, como lo son la mediación, la amigable composición, el arbitraje y que el Estado promueve su inclusión y aceptación por parte de la población en todos los ámbitos de la vida social a través de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco que entro en vigor el primero de enero del año 2008, y la creación del Instituto de Mediación así como el establecimiento de centros de mediación públicos y privados en nuestra Entidad.

En la justicia alternativa se presentan diversos principios rectores, algunos son coincidentes con la impartición de justicia, en tanto que otros son ajenos; estos principios relacionados con el proceso y con los prestadores del

---

<sup>520</sup> Gorjón Gómez, J. Francisco y Steele Garza, José G., *op. cit.*, nota 18, p. 14.



servicio, así tenemos que en relación con los procedimientos de esta índole, sus principios son los siguientes<sup>521</sup>:

**Voluntariedad:** Que implica la participación de los interesados en el método alternativo deberá realizarse con su consentimiento y bajo su absoluta responsabilidad.

**Confidencialidad:** Lo que significa que la información derivada de los procedimientos de los métodos alternativos no puede ser divulgada, por lo que esta es intransferible e indelegable.

Las actuaciones de esta índole se consideran reservados para efectos de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y como excepción a la regla general, las actuaciones que deriven de los procedimientos de métodos alternativos, solo pueden ser entregadas a petición de la autoridad ministerial y judicial.

**Flexibilidad:** Esta figura corresponde a que el procedimiento es susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades de los participantes.

**Legalidad:** Principio que rige al proceso pues solo podrán ser objeto del procedimiento previsto en dicha ley, los conflictos derivados por la violación de un derecho legítimo o por incumplimiento indebido de una obligación y que no afecten el interés público.

**Protección a los más vulnerables:** En cuanto a que los convenios finales que se suscriban deben de observar adicionalmente los derechos de las niñas, niños, adolescentes, incapaces, adultos mayores e indígenas, según corresponda al caso en conflicto.

---

<sup>521</sup> Véase, Ley de Justicia alternativa para el Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 202, art. 4.

**Economía:** Respecto de que los prestadores del servicio deben procurar el ahorro de tiempo y gastos a las partes.

**Ejecutoriedad:** Que implica que una vez sancionado y registrado el convenio en el Instituto de Justicia, se puede exigir su cumplimiento forzoso ante un juez de primera instancia en la vía y términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

**Inmediatez:** Figura de trascendencia, ya que el prestador del servicio tendrá conocimiento directo del conflicto y de las partes.

**Informalidad:** En estos procesos están ausente de las formas preestablecidas en los procedimientos jurisdiccionales, sujetándose únicamente a la ley de justicia alternativa y a la voluntad de las partes.

**Accesibilidad:** En cuanto a que toda persona, sin distinción de origen étnico, sexo, edad, condición social, religión ó estado civil tiene derecho a los métodos alternos de justicia, por lo que se debe facilitar su acceso principalmente a las personas o grupos más vulnerables de la sociedad.

**Alternatividad:** En cuanto a que el conciliador debe procurar el proponer diversas soluciones al conflicto, de manera que las partes tengan opción de escoger alguna alternativa conveniente para solucionar el conflicto.

En tanto que como principales características sobre el prestador del servicio, se debe atender que este cumpla con los principios de:

**Neutralidad:** Significa que prestador del servicio alternativo debe ser ajeno a los intereses jurídicos que sustenten las diversas partes del conflicto.

Imparcialidad: Una de sus características principales que rige en cuanto a las características del prestador del medio alternativo, quien debe proceder con rectitud sin predisposición en favor o en contra de cualesquiera de las partes.

Equidad: Se concentra sobre el prestador del servicio, quien debe de generar condiciones de igualdad para que las partes actúen dentro del procedimiento sin ventajas indebidas para alguno de los involucrados.

Honestidad: El prestador del medio alterno deberá excusarse de participar cuando reconozca que sus capacidades, limitaciones o intereses personales pueden afectar el procedimiento.

En innumerables ocasiones se ha indicado que los medios alternativos son de aplicación en materia de familia, y que su resultado es y debe ser en beneficio de los involucrados en el conflicto. “...*La mediación, los conflictos y el arbitraje son considerados factores de modernización y de internacionalización de todo sistema judicial. Esto significa que el sistema judicial que quiera considerarse la vanguardia deberá incorporar los MACS dentro de su esquema de impartición y procuración de justicia.*”<sup>522</sup>. Esta vía puede ser una respuesta a la solución de los conflictos matrimoniales, tomando en cuenta que la mediación es un procedimiento voluntario de naturaleza auto compositiva, por el cual dos o más personas denominadas mediados que están involucradas en un conflicto, buscan una solución amigable y aceptable, a través de la asistencia de un tercero llamado mediador, quien ajustándose a los principios rectores del método establecido por este ordenamiento, les auxiliará en la construcción de la solución a su disputa existente, empero, en necesario realizar un análisis de la propia ley y sus alcances para poder establecer, si tal postura es correcta.

---

<sup>522</sup> Gorjón Gómez, J. Francisco y Steele Garza, José G., *op. cit.*, nota 18, p. 34.

El artículo 5 de la ley citada, dispone que los métodos alternos serán aplicables a todos los asuntos del orden civil susceptibles de convenio o transacción. Cuando el procedimiento pueda afectar intereses de terceros, éstos deberán ser llamados para la salvaguarda de sus derechos, en tanto que en materia penal, señala el catalogo de conductas delictivas en los cuales no es factible acceder al trámite de los métodos alternativos y en el precepto 5 Bis se prevé que los conflictos en los que se cuestionen derechos de niños, adolescentes o incapaces, podrán someterse a los métodos alternos por conducto de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y que los convenios que pongan fin al conflicto se notificará al agente de la Procuraduría Social cuando las peticiones sometidas a los métodos alternos puedan afectar intereses públicos, versen sobre la persona o bienes de menores o incapaces, o cuando tengan relación con los derechos o bienes de ausentes, a fin de que manifiesten las consideraciones que estimen pertinentes.

En tanto que el precepto 8º prevé que la.- La prestación de los servicios de métodos alternos se someterá y regirá por diversos ordenamientos, entre ellos, naturalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales vigentes en la materia, así como la Constitución Política del Estado de Jalisco y en lo que nos importa en específico, lo dispuesto en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, con respecto a los asuntos del orden civil y familiar.

“Artículo 8.- La prestación de los servicios de métodos alternos se someterá y regirá por:

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales vigentes en la materia;
- II. La Constitución Política del Estado de Jalisco;
- III. Lo dispuesto en la presente Ley, y las demás disposiciones de carácter general que regulen métodos alternos;
- IV. Lo dispuesto en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, con respecto a los asuntos del orden civil y familiar;
- V. Lo dispuesto en los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, con respecto a los asuntos del orden penal;
- VI. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco;
- VII. La jurisprudencia, los principios generales del derecho, los usos y costumbres aplicables; y
- VIII. El acuerdo voluntario entre los participantes.”<sup>523</sup>

Sobre las reglas generales del proceso, estas se derivan del contenido de los artículo 42 al 76 de la ley en cita<sup>524</sup>, y en ellos se dispone lo relativo a la etapa preliminar y tramite.

---

<sup>523</sup> *Ídem.*

<sup>524</sup> Véase, Ley de Justicia alternativa para el Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 202, arts. del 42 al 76.

Se establece que el procedimiento en materia de medios de justicia alternativa es autónomo aunque el convenio que derive de un expediente pueda incidir en otro asunto; que puede iniciarse a petición de parte interesada, de su representante legal a propuesta del Ministerio Público o por remisión de autoridad judicial, subsistiendo en todo caso la voluntad de las partes en términos de esta Ley. Que el interesado debe elevar ante el Centro o sede regional su petición verbal o escrita, en el cual se tiene que expresar los antecedentes de la controversia que se pretenda resolver, el nombre y domicilio de la parte complementaria, terceros interesados, en su caso, y la declaración de someterse voluntariamente a resolver su asunto a través de alguno de los medios de justicia alternativa y que la remisión planteada por autoridad judicial sólo podrá realizarse respecto de los procesos o juicios que se encuentren bajo su jurisdicción.

En esta etapa, denominada preliminar, se establece que estudiada la solicitud de servicios de alguno de los medios de justicia alternativa, se determinará la viabilidad del método más adecuado para la solución de la situación planteada, que de ser procedente se notificará por escrito esta determinación al solicitante y, en su caso, se invitará a los demás involucrados a la entrevista inicial, que la invitación debe contener el nombre y domicilio de las partes, el número de asunto e invitación girada, el lugar y fecha de expedición, la indicación del día, hora y lugar de celebración de la entrevista inicial, el nombre de la persona que solicitó el servicio, el nombre del prestador con el que deberá tener contacto el invitado para confirmar su asistencia, o bien, señalar nueva fecha y el nombre y firma del director del Centro o sede regional. Cuya entrega podrá hacerse por cualquier persona o medio cuando ello facilite la aceptación de la parte complementaria a acudir a la entrevista inicial.

Si la parte invitada no concurre a la entrevista inicial se puede girar otra invitación a petición expresa de la parte interesada y si no acude de nuevo a la segunda invitación se archivará la solicitud, sin perjuicio de que lo soliciten posteriormente de común acuerdo. Lo que implica que la petición puede quedar en esta etapa de inicio, pues el procedimiento solo podrá seguirse en caso de que se acepte la invitación por el o los involucrados.

Se establecen las reglas que deben seguirse en la entrevista inicial, que consiste esencialmente en que el prestador debe presentarse ante los entrevistados, agradecer su asistencia, y debe explicarles el o los objetivos de la reunión y antecedentes, las etapas en qué consiste el procedimiento, los efectos del convenio, el papel de los prestadores del servicio, las reglas que deben observarse durante el procedimiento, el carácter voluntario, profesional, neutral, confidencial, imparcial, ágil y equitativo y la calidad de gratuidad del procedimiento, tratándose de un centro público, o la forma de fijar los honorarios si se trata de un centro o prestador privado, finalmente debe invitar a las partes para que con la información proporcionada por el prestador elijan el método de justicia alternativa que estimen más adecuado a su asunto y que se fijen las reglas y duración para el trámite elegido y lo plasmen en el acuerdo inicial.

A criterio del prestador la entrevista inicial puede llevarse a cabo con la sola presencia de la parte complementaria o de ambas y estas pueden acompañarse de su asesor jurídico.

Que en caso de que las partes no aceptan ninguno de los medios alternativos propuestos se dará por concluido el trámite.

Por el contrario, si las partes aceptan voluntariamente alguno de los medios alternativos propuestos, se asentará constancia por escrito del acuerdo inicial y del pacto de confidencialidad, haciéndoles saber que el

término del proceso será de hasta dos meses, pudiendo prolongarse por uno más si a juicio de las partes y del prestador se considera conveniente.

El proceso debe desarrollarse mediante sesiones orales, comunes o individuales, y por su confidencialidad no se debe levantar constancia de su contenido, ni menos aún de las aseveraciones que los participantes exponen, con excepción del acuerdo inicial y el convenio que ponga fin al conflicto o parte de este, que se asentará por escrito; que las declaraciones y manifestaciones que se realicen con motivo del procedimiento alternativo carecen de valor probatorio, y no pueden emplearse en un procedimiento judicial. Que si durante el procedimiento alternativo el prestador de servicios advierte la existencia de hechos delictivos, suspenderá el trámite y dará vista al Ministerio Público.

Que en el caso de que algún prestador del servicio se encuentre con circunstancias que impidan su ejercicio conforme a los principios que rigen los medios alternativos deberá excusarse de conocer del asunto.

Si el método elegido es el de la mediación, el prestador no deberá formular sugerencias, sin embargo, orientará e informará a los mediados sobre sus derechos y alcances jurídicos de las posibles soluciones; el conciliador por su parte, sí deberá realizar propuestas de soluciones equitativas y convenientes para los conciliados.

Que el prestador del servicio está obligado a dar por terminado un procedimiento de resolución de medio alternativo al tener conocimiento de que se ventila un asunto no susceptible de ser resuelto mediante un método alternativo, expidiendo para este efecto la declaración de sobreseimiento que corresponda.



Se establece la audiencia o sesión de conocimiento del conflicto, en la cual el prestador debe explicar la naturaleza y origen del conflicto, sin hacer señalamientos de responsabilidad, hecho ello, las partes deberán manifestar sus puntos de vista respecto al conflicto y las consecuencias, pudiendo solicitar las aclaraciones que consideren necesarias, y una vez que los interesados consideren suficientemente explicada la naturaleza y origen del conflicto, si el prestador de servicios estima que existen condiciones para desahogar la fase de resolución de conflicto, ésta se llevará a cabo conforme a lo señalado en la ley, se debe levantar un resumen de lo más destacado de la sesión o de los acuerdos a los que se hubieren llegado, en su caso y en caso de ser necesario se fijará día y hora para una siguiente sesión.

Que los acuerdos que se propongan deberán ser viables, equitativos, legales y convenientes y serán examinados por los participantes, ello tomando en consideración que el convenio del método alternativo que resulte, ya sea parcial o total, además de los requisitos establecidos en la legislación que regule la materia del conflicto, debe cumplir con los requisitos siguientes:

- I. Constar por escrito;
- II. Señalar hora, lugar y fecha de su celebración;
- III. Señalar los generales de las partes, así como el documento oficial con el que se identifiquen;
- IV. Contener la firma de quienes lo suscriben, del prestador de servicio y sanción del Instituto.

Sobre las características del convenio, este debe levantarse por escrito, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, y conservándose otro en los archivos de la entidad a la que pertenezca el prestador del servicio y otro tanto ante el Instituto que lo sancionó, especificar el contenido del acuerdo en forma clara y precisa, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cumplirán con las obligaciones contraídas por cada

una de las partes, deberá entregarse un ejemplar a cada una de las partes, y conservar otro en los archivos de la entidad a la que pertenezca el prestador del servicio y otro tanto ante el Instituto que lo sancionó.

Que las obligaciones de contenido ético o moral podrán constar en el convenio pero no serán susceptibles de ejecución coactiva, que los prestadores del servicio vigilarán que las partes sean personas con capacidad para obligarse legalmente y que estén debidamente legitimadas o representadas en la sesión de que se trate, y se cerciorarán de que la suscripción del convenio se realiza libre de vicios en el consentimiento de las partes. En la realización del convenio y tratándose de asuntos que afecten intereses de menores, incapaces o ausentes, se deberá dar vista al agente de la Procuraduría Social para efectos de su representación. Que el convenio sólo deberá suscribirse cuando se trate de materia objeto de algún método alternativo de solución de conflictos y no podrá contener cláusulas que atenten contra el orden público o afecten derechos de terceros.

Una vez ratificado y sancionado por el Instituto el convenio respectivo, se considerará como sentencia que hubiere causado ejecutoria, con todos los efectos que para la ejecución forzosa de la sentencias prevén las leyes. El Instituto comunicará el incumplimiento del convenio a la autoridad correspondiente para los efectos de continuar con el trámite de la averiguación previa o del proceso

Que en caso de que el convenio final del método alternativo presentado ante el Instituto para su sanción no reúna los requisitos que prevé esta ley, el Instituto prevendrá a las partes y al prestador del servicio para que dentro de un plazo de cinco días se subsanen las deficiencias señaladas. Si dentro del plazo señalado anteriormente no son solventados los requisitos y observaciones formuladas por el Instituto, éste acordará inmediatamente la no sanción del convenio final.

Por lo que corresponde a la ejecución forzosa del convenio sancionado, se debe acudir al Juez de Primera Instancia en la vía y forma que así proceda. Las excepciones oponibles a la ejecución del convenio sancionado se harán valer ante la autoridad judicial en los términos que dispone el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Realizada una panorámica de los sistemas alternativos de solución de conflictos, sus objetivos y procedimientos según se establecen en la propia Ley de Justicia alternativa del Estado de Jalisco, debemos de plantear si es factible que actualmente y bajo la normatividad existente y los criterios del Poder Judicial de la Federación se puede o no, disolver el matrimonio por estos sistemas alternativos. Como se ha indicado el artículo 5 de la ley citada, dispone que los métodos alternos serán aplicables a todos los asuntos del orden civil susceptibles de convenio o transacción y en materia penal señala un catalogo de conductas delictivas en los cuales no es factible acceder al trámite de los métodos alternativos, en tanto que el precepto 5 Bis prevé que en los conflictos que versen sobre los derechos de los menores e incapaces, pueden someterse a los métodos alternos por conducto de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y que los convenios que pongan fin al problema, se notificarán al agente social, a fin de que manifiesten las consideraciones que estimen pertinentes, por su parte el numeral 8º señala cuales son las leyes que deben regir en la prestación de los servicios de métodos alternos, entre ellas se señala el Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, respecto a los asuntos del orden civil y familiar.

Sentado lo anterior, acorde a la legislación civil sustantiva del estado, el procedimiento de divorcio administrativo es el único que puede ventilarse bajo una vía alterna, acorde a lo previsto por el artículo 405-Ter, que dispone que el trámite previsto en el artículo anterior (divorcio administrativo ante el Oficial del Registro Civil) se podrá llevar a cabo mediante método alterno,

conforme a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, dispositivo de reciente creación<sup>525</sup>, por lo cual es difícil establecer los resultados que se hayan obtenido con esta reforma. Sin embargo, los medios alternativos empiezan a ser del conocimiento público y de manera pausada va adquiriendo eficacia. La posibilidad de obtener el divorcio administrativo por vía alterna, favorece no solo a los interesados, en cuanto al ahorro de tiempo y costos, sino como ahorro de tiempo laboral de los oficiales del registro civil.

Del contenido de la propia Ley de Justicia Alternativa, deja en claro que sobre el resto de los procesos de divorcio, mediante vía judicial, no pueden tramitarse en vías alternas de solución de conflictos, pues como se analizó en el capítulo quinto, si se ha determinado en diversos criterios del Poder Judicial Federal que no es factible que una controversia judicial de divorcio concluya con convenio celebrado por las partes en la audiencia conciliatoria, en la cual se determine su voluntad para la disolución del vínculo matrimonial, pues se considera que ello representa un fraude a la ley y que se trastocan diversas prohibiciones legales<sup>526</sup>, señalando que ello implica la variación de un juicio contencioso a uno voluntario y que además implica un convenio de transacción<sup>527</sup> que violentan normas inherentes al estado civil de las personas<sup>528</sup>, así como en lo relativo a los alimentos, ya que la ley dispone que serán nulas las transacciones que versen, entre otras cuestiones, las del

---

<sup>525</sup> Decreto 23933/LIX/11. Se adiciona el art. 405-Ter. al Código Civil del Estado de Jalisco, 27 de diciembre de 2011. Sec. V.

<sup>526</sup> [J] III.5o.C.111 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Novena Época, Registro: 173315, Civil, febrero de 2007, p. 1700. Divorcio. Se cataloga como fraude a la ley que los consortes promuevan un juicio contencioso de esa naturaleza y luego decidan de motu proprio que concluya como voluntario (legislación del estado de Jalisco).

<sup>527</sup> Véase, Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, art. 2637. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre la validez del matrimonio.

<sup>528</sup> *Ibidem*, art. 80. El estado civil de las personas es de orden público y no puede ser objeto ni de transacción, convalidación, disminución o desconocimiento.

derecho de recibir alimentos, pero no la transacción que versare sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos caídos pero no pagados<sup>529</sup>, y que por ende, en todo caso los interesados deben recurrir al divorcio por mutuo consentimiento, mas no decretarse la disolución del vinculo en el juicio ordinario, postura clásica y rígida que hasta el momento no ha sido modificada, y que además soporta la interpretación de que no es factible la obtención de la disolución del vinculo matrimonial vía métodos alternos, en los procesos judiciales de divorcio por mutuo o contenciosos.

Lo que una vez más, nos deja en una situación de interpretaciones severas y sombrías, pues no conducen a una práctica solución del conflicto. En todo caso será menester, modificar diversos ordenamientos, la Ley de Justicia Alternativa, para que señale de manera expresa que el divorcio puede ser materia de convenio en los conflictos de índole matrimonial que se ventilen en los medios alternos, y por supuesto la legislación procesal y sustantiva, para que en ellos se reconozca esta nueva fórmula de obtención del divorcio vincular, mientras eso no acontezca, no es factible considerar que las controversias judiciales que persiguen la disolución del vinculo matrimonial, puedan resolverse por convenio que derive de los medios de justicia alternativa y finalmente la Ley del Registro Civil<sup>530</sup> para que se adecue a esta nueva fórmula de obtención de la disolución del vinculo, pues

---

<sup>529</sup> *Ibidem*, art. 2639, fr. V.

<sup>530</sup> Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, *Periódico Oficial del Estado de Jalisco*, 15 de diciembre de 2011, art. 98. La sentencia ejecutoria que declare un divorcio, se remitirá en copia certificada al Archivo General del Registro Civil y al oficial del Registro Civil del lugar donde se celebró el matrimonio, para que levante el acta correspondiente.

Artículo 98 Bis.- El Oficial del Registro Civil ante quien se presente una solicitud de divorcio administrativo que reúna los requisitos previstos por el Código Civil del Estado, dará curso a la misma en los términos establecidos por dicho ordenamiento, resolverá lo conducente y en su caso, los declarará divorciados, levantará el acta de divorcio y hará las anotaciones correspondientes.

actualmente las actas de divorcio solo se generan a través de la sentencia ejecutoria que lo declara y mediante el trámite administrativo, ante el propio oficial del registro civil o el Instituto de Justicia Alternativa, para los divorcios administrativos.

Lógico será, que el convenio que se celebre en los medios alternos, además de las características que la propia ley señala, deberá de contener la solución de las diferencias surgidas entre ellos, la declaración de la disolución del vínculo matrimonial que les une, así como los aspectos relativos a las cuestiones derivadas de su régimen patrimonial y de los hijos si los hubiera en términos de lo dispuesto por el precepto legal 415 de la Ley Sustantiva en los que se prevé los efectos del divorcio, o sea, deberá de contener en forma clara y específica cómo queda la situación de los hijos de los divorciantes en términos de las disposiciones aplicables, sin vulnerar ninguno de los derechos de los menores y si en cambio dejarlos plenamente establecidos, con las cargas, derechos y obligaciones que hacia sus hijos tienen sus progenitores, cuidando que no se involucren derechos de terceros, irrenunciables o de cuestiones de orden público o que puedan fundar una obligación imposible o contraria a las buenas costumbres.

Sobre el sistema adversarial y el de mediación, Marlow, señala; *“...Desde el punto de vista de nuestro sistema jurídico adversarial, ¿cuál es ese objetivo? Asegurar que se protejan los derechos legales de cada una de las partes y que obtengan un acuerdo que sea justo y equitativo. Al definir la mediación como un medio alternativo de resolución de disputas, un abogado matrimonialista, por consiguiente, está dando por supuesto que el objetivo de una mediador es el mismo que el suyo, que él también está interesado en que se protejan los derechos legales de las partes y en que se obtenga un acuerdo justo y equitativo. Un mediador llevaría a las partes a ese mismo lugar tomando simplemente una ruta diferente. Es por esta razón por lo que un abogado supone que es apropiado juzgar la mediación con el mismo*

*criterio que se aplica para juzgar los procedimientos adversariales de divorcio, que el acuerdo final que concluyan las partes sea justo y equitativo como la ley lo definiría. Es por ello que también supone que se deban aplicar las mismas garantías, que cada una de las partes debe estar representada por un abogado distinto e independiente.....Un mediador no está intentando llevar a la pareja al mismo lugar, está intentando llevarlos a uno muy diferente. Por consiguiente, no se le ocurrirá usar ni el mismo mapa de carreteras (procedimiento) ni juzgar los dos resultados con el mismo criterio (patrón). Por la misma razón, no cree que tenga sentido emplear las mismas garantías, ya que no está intentando alcanzar los mismo fines.<sup>531</sup>*

Las reformas que pudieran efectuarse para tal fin, deja claro los beneficios que pudieran obtenerse para diversos sectores, entre otros, y como primordiales, se encuentra, la intervención de un prestador del servicio como especialista en los métodos alternos para la solución del problema entre los contendientes. El mediador, nos dicen, Gorjón Gómez y Steele Garza, “...no es un psicólogo o terapeuta, pero cuenta con un conjunto de herramientas y conocimientos que le habilitan para facilitar la comunicación interpartes al reconocer las emociones, angustias y sentimientos, buscando armonizar las diferencias de los conflictuados. Un mediador debe reunir las características siguientes:

- *Capacidad para motivar.*
- *Habilidad para generar confianza.*
- *Ser una persona de mente abierta, equilibrada y realista.*
- *Flexibilidad en las ideas.*
- *Paciencia como actitud general.*
- *Neutralidad e imparcialidad.*

---

<sup>531</sup> Marlow, Lenard, *op. cit.*, nota 208, pp. 33 y 34.

- *Comprensión empática, que supone ponerse en el lugar del otro. Congruencia, que significa la capacidad para armonizar las palabras con los hechos.*
- *Respeto a las personas y a sus conflictos.”*<sup>532</sup>

Pérez Saucedá, Zaragoza Huerta y Barba Álvarez, acotan; “...Los MASC son por naturaleza, un encuentro de profesiones y de conocimientos. El prestador de servicios de métodos alternos de solución de controversias debe ser un especialista en las técnicas de comunicación para poder entablar un diálogo constructivo con las partes, un conocedor de la psicología para poder entender el porqué de las conductas que se dan en una negociación o mediación, un jurista para analizar las consecuencias jurídicas de los actos que se están realizando así como la idoneidad y legalidad de los acuerdos alcanzados, entre otros tantos conocimientos necesarios”<sup>533</sup>.

El cambio de sistema no solo tiene que ver con la legislación, pues es patente que el abogado tradicional o positivista, si no modifica su comprensión sobre el estado actual y las nuevas formulas para la solución de los conflictos, quedara rezagado pues frente a un conocimiento estrictamente legalista, se presenta el operador de los métodos alternos de solución de conflictos, que dentro de sus competencias específicas ya sea como mediador o conciliador, su preparación estriba en que:

- *“Conocen e identifican las materias que son susceptibles de mediar y conciliar.*
- *Conocen los diferentes modelos de negociación y sus técnicas.*
- *Distinguen entre los diferentes modelos de mediación y/o conciliación.*

---

<sup>532</sup> Gorjón Gómez, J. Francisco y Steele Garza, José G., *op. cit.*, nota 18, p. 45.

<sup>533</sup> Pérez Saucedá, José Benito *et al.*, *op. cit.*, nota 10.



- *Conocen las técnicas de la mediación y de la conciliación.*
- *Son capaces de reestructurar la comunicación de las partes a través de técnicas de comunicación.*
- *Desarrollan el sentido de la escucha activa.*
- *Desarrollan la técnica del parafraseo.*
- *Conocen y aplican la técnica del Caucus como elemento sine qua non de la mediación-conciliación.*
- *Conocen y aplican la técnica de control de la ira durante el procedimiento de mediación-conciliación.*
- *Conocen y aplican la técnica del rapport.*
- *Son capaces de reestructurar la comunicación de las partes a través de técnicas de comunicación.*
- *Estructuran el plan de mediación y conciliación.*
- *Conocen las distintas etapas procedimentales desde el planteamiento de conflictos hasta el acuerdo.*
- *Son capaces de comprender la historia del conflicto para detectar si es susceptible de iniciar la mediación o conciliación.*
- *Detectan las posiciones de las partes en conflicto.*
- *Detectan los intereses de las partes.*
- *Definen y distinguen las técnicas, teorías y conceptos asociados de control de crisis en un conflicto.*
- *Son capaces de motivar opciones para la solución del conflicto por parte de los involucrados.*
- *Concretan las opciones que favorezcan a las partes, que sean susceptibles de convenir y que no alteren el orden público.*
- *Son capaces de sustraer los intereses y necesidades mutuas de los protagonistas del conflicto.*
- *Elaboran el acuerdo o convenio en el que las partes se cercioran de que sus pretensiones han sido satisfechas.*<sup>534</sup>

---

<sup>534</sup> Gorjón Gómez, J. Francisco y Steele Garza, José G., *op. cit.*, nota 18, pp. 25 y 26.

La implementación de los métodos alternos de solución de conflictos para el divorcio en general y no solo el administrativo, representa además ahorro de tiempo por una pronta solución al conflicto, puede suavizar la confronta de los esposos, para dar pauta al proceso de recuperación emocional y psicológica entre ellos y sus hijos; de la misma manera, de recurrir a un Centros de Mediación Publico, se presenta ahorro económico para los interesados; por otra parte, de tener aceptación social, tendría un impacto directo en aligerar las extenuantes cargas de trabajo de los juzgados que conocen de la materia familiar.

*“...la finalidad esencial de los métodos alternativos para la solución de conflictos es resolver conflictos de una forma amigable para evitar que se llegue a los procedimientos judiciales que, en gran medida desactivan la acción de los interesados por su complejidad, así como por el desgaste físico y económico que ocasionan las partes. Los MACS constituyen un modo más sencillo para resolver los conflictos, ya que resultan transparentes y no generan costos onerosos a los protagonistas de una disputa. La aplicación de los MASC constituye un modo más sencillo para resolver los conflictos, ya que resultan transparentes y no generan costos onerosos a los protagonistas de una disputa. La aplicación de los MASC en el mediano y largo plazo ocasionará que se incremente su utilización. Por ello, es importante difundir la mediación y el arbitraje como medios ideales en situaciones previos a los litigios,”<sup>535</sup>.*

Marlow señala que una pareja de esposos, en el transcurso de su matrimonio han tomado una serie de decisiones importantes en su vida en común, buenas o malas, y no recurrieron para ello a la opinión o consejo de un abogado, que por lo tanto desde la perspectiva de un mediador, cuando la pareja enfrenta problemas de divorcio, pueden hacerlo como siempre lo han

---

<sup>535</sup> *Idem*, p. 175.

hecho, resolverlo por sí mismo o bien recurrir a un medio alternativo de resolución de la disputa, en donde la función del mediador será devolverles algo que ellos han perdido: “...Desde el punto de vista de un mediador, lo que ellos han perdido, lo que ellos serían incapaces de hacer o se sentirían incómodos si intentaran hacerlo, es la habilidad de hacer lo que ellos siempre han hecho en el pasado, a saber, sentarse y tomar esas decisiones por sí mismos. Mas importante y a diferencia de un abogado, un mediador no va a invocar un nuevo criterio, y mucho menos su propio criterio subjetivo, acerca de lo que es o no apropiado para juzgar las decisiones de la pareja. Por el contrario él va a animarles a que juzguen por sí mismos esas decisiones, en gran medida, sobre la misma base que siempre utilizaron en el pasado, En otras palabras, él le va a animar a juzgar esas decisiones, no según las normas jurídicas que son importantes para los abogados, sino sobre la base de las consideraciones personales que son, y siempre han sido, importantes para ellos.”<sup>536</sup>.

### **8.2.3 Divorcio incausal o exprés.**

No se puede desconocer que es punto menos que imposible la solución de los conflictos matrimoniales por medio de los métodos alternos, por ende, es menester la implementación de un sistema judicial para la disolución del vínculo matrimonial, la opción viable y oportuna de la inclusión del divorcio incausal en Jalisco, que representa en sí al divorcio remedio, aquel en que el conflicto es, él mismo, la causa del divorcio, sin que importen las causas de ese conflicto. La ley en materia de divorcio requiere inobjetablemente una reforma y así lo entendió el Gobierno del Distrito

---

<sup>536</sup> Marlow, Lenard, *op. cit.*, nota 208, p. 42.

Federal, según se analizó en el capítulo anterior, cuya Asamblea Legislativa aprobó las reformas para dar paso al llamado divorcio exprés.

En cuanto al divorcio por quiebra irremediable o definitiva del matrimonio, Zannoni, señala que prácticamente, no se decreta en ninguna legislación, por mera alegación del fracaso matrimonial que haga un cónyuge, pues en tal sistema la regulación legal y los criterios judiciales de aplicación, muestran las mayores dificultades. *“...El control judicial de la quiebra matrimonial puede comportar un margen muy grande de incertidumbre: apreciación arbitraria –o demasiado subjetiva- del magistrado; en todo caso, una intrusión, que en una época que se esfuerza por preservar la intimidad de la vida privada, algunos encontrarán insoportable. Se propone, entonces, que el juez sea llamado, no a investigar la situación personal, de manera necesariamente subjetiva, sino a comprobar, objetivamente, la ruina, el fracaso, en todo caso el fin de la unión matrimonial: entonces podrá legítimamente hablarse de divorcio comprobación del fracaso”*<sup>537</sup>.

Este tipo de divorcio no puede confundirse con el incausal o exprés, pues en el debe quedar evidenciada alguna circunstancia que se haya presentado en el matrimonio, ya sea el adulterio del cónyuge demandado o bien conductas y comportamientos indebidos que impidan la continuación de una convivencia matrimonial armoniosa, el abandono o separación del domicilio conyugal, etcétera.

Como se indicó, este sistema representa rapidez (de uno a tres meses, según las cargas de labores de los tribunales) en situaciones de conformidad entre ambas partes, tanto en la disolución del vínculo como sobre las consecuencias del divorcio de índole patrimonial y las inherentes a los hijos, en caso de haberlos, por lo que la reducción de los plazos tiene como

---

<sup>537</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, p. 14.

consecuencia ahorro en tiempo y costos económicos, con todos los beneficios que ello conlleva. De la misma manera, el nuevo proceso respeta el derecho fundamental de la libertad de decisión, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, así como el respeto irrestricto a los derechos de personalidad de las personas al proteger su vida personal e íntima, ya que no es menester señalar causa o motivo alguno sobre la ruptura matrimonial.

El proceso de quiebre de la convivencia suele ser muy difícil para los afectados y su familia, ya que supone una transformación completa del modo de vida entre ellos, sus hijos y las familias de origen. En algunos casos, incluso, es necesaria la ayuda psicológica para superar los efectos de esta nueva situación personal y colectiva. En este sentido, contar con una posibilidad de concluir la confronta en un mínimo de tiempo, produce la posibilidad de concluir cuanto antes con la situación imperante y empezar de nuevo.

Por ello, es que la vía del divorcio como la solución jurídica a los conflictos entre los esposos, de forma rápida, sin problemas y amistosa, es precisamente el divorcio exprés, el que en resumen. implica como punto total la voluntad de los cónyuges para la obtención de la disolución del vínculo, conjuntamente con el acuerdo que determine la situación sobre los alimentos, custodia y régimen de visitas a los hijos y liquidación de la sociedad patrimonial, según la elegida en el matrimonio; de cumplirse lo anterior, es patente que el proceso es ágil y pertinente, pues solo quedara a cargo del juzgador la sanción del convenio en términos de ley y decretar el divorcio; o bien en el supuesto en que la demanda se presente por uno solo de los consorte y el otro no la acepta o bien manifieste inconformidad con el convenio regulador sobre las consecuencias del divorcio, se decreta el divorcio y posteriormente se inicia la litis sobre los puntos cuestionados, bajo

las reglas procesales aludidas<sup>538</sup>. Con esto se pretende agilizar el proceso de disolución del matrimonio y aliviar la carga de trabajo de los tribunales.

Para que se presente el divorcio debe existir el matrimonio, lo que nos remite a la naturaleza de este, De la Paz y Fuentes, cita a Bonnecase, e indica que para este autor el acto jurídico del matrimonio funciona “Como Institución” pues dice: *“El matrimonio es una institución constituida por un conjunto de reglas de derecho esencialmente imperativas, cuyo objeto es dar a la unión de los sexos, y por tanto a la familia, una organización social y moral que corresponda a las aspiraciones de momento y a la naturaleza permanente del hombre como también a las directrices que en todo momento irradian de la noción del Derecho”*<sup>539</sup>.

En cuanto a los que estiman que al matrimonio como contrato ordinario, señala el autor, que se encuentra Planiol, quien considera *“...al matrimonio de carácter contractual, y se basa él y sus seguidores en que el matrimonio tiene los mismos elementos esenciales de validez que un contrato y que por lo tanto deben de observarse en un acto jurídico capacidad, ausencia de vicios de la voluntad, licitud y fin del acto...”*<sup>540</sup>. La inclusión del divorcio exprés nos posiciona una vez más bajo el matrimonio como contrato ordinario, en donde prevalece la voluntad de los contratantes.

Con el paso del tiempo, el divorcio sanción, que se funda en causales inherentes al incumpliendo de los fines y deberes del matrimonio se ha debilitado, para dar paso a una nueva óptica de respeto a los derechos Fundamentales, al respecto Eduardo Zannoni, señala que *“...Aunque todavía no prevalece –como ya ocurre en ciertas legislaciones avanzadas, como la de los países nórdicos- la posibilidad de que el divorcio se decrete a pedido*

---

<sup>538</sup> Ver Capítulo 7.

<sup>539</sup> Paz y Fuentes, Víctor M. De La, *op. cit.*, nota 74, p. 11.

<sup>540</sup> *Ídem*, p. 13.

*unilateral de cualquiera de los esposos, se coincide cada vez más en favorecer el acceso a la justicia de los cónyuges en situación de conflicto sin obligárseles a explicar “causas”, porque las que hubiere, sea cuales fueren, se reputan reservadas a las esfera de la intimidad de ambos.”<sup>541</sup>.*

Concluye reflexionando que la diferencia sustancial entre la concepción del llamado divorcio-sanción y del divorcio-remedio, reside en que la primera considera que la causa del conflicto conyugal es la causa del divorcio, mientras la segunda entiende que el conflicto es, él mismo, la causa del divorcio, sin que interesen las causas de ese conflicto.

#### **8.2.4 La misión de los Operadores Jurídicos.**

Campillos Sáinz,<sup>542</sup> señala: “...*El derecho persigue fines enlazados entre sí; la justicia, el orden, la seguridad, la libertad y la paz que, finalmente, se concretan en servir al perfeccionamiento y realización del hombre en toda su plenitud e integridad. Sin orden y sin seguridad, una sociedad no podría existir y, por ello, se dice que el derecho es instrumento indispensable de la convivencia humana. Pero, un orden que no fuera justo sería un grave desorden moral que no realizaría los fines del derecho y una seguridad fundada en la arbitrariedad sería mera violencia sin justicia.*”.

Por ello, se pone de manifiesto que el abogado, debe dejar atrás su visión legalista del derecho positivo y ser un intermediario eficaz para la solución del conflicto o un abogado con la preparación adecuada para el planteamiento y búsqueda de la resolución efectiva de la disputa, un mediador con los conocimientos de las herramientas necesaria y preparación

---

<sup>541</sup> Zannoni, Eduardo A., *op. cit.*, nota 42, p. 18.

<sup>542</sup> Campillo Sáinz, José, *op. cit.*, nota 24, p. 6.

multidisciplinaria para lograr llevar por el mejor camino a las partes en conflicto, a la búsqueda correcta de la solución del mismo, juzgadores con los conocimientos necesarios, con vocación de servicio, que no resuelvan de manera mecánica, como con acierto lo dice Rafael Luviano González, quien indica que las resoluciones judiciales carecen de la interpretación y argumentación jurídica necesaria, pues se limitan a la aplicación de la ley, pero carecen del sentido de justicia, “...*Falta que los jueces de nuestro país, al dictar sus resoluciones apliquen la justicia en lugar del derecho. No sólo a lo que está escrito en la ley, sino también a los principios generales del derecho; que son el cimiento de los derechos fundamentales; porque éstos están por encima de cualquier orden jurídico; en una plena autonomía de su decisiones.*”<sup>543</sup>.

La inclusión de los métodos alternos de resolución de conflictos y la implementación del divorcio exprés, serian de un gran avance en el sistema de justicia, empero, de poco o nada servirán si abogados, mediadores y funcionarios judiciales, no cambian su óptica de ver, analizar y aplicar el derecho; con una nueva y responsable formación deontológica y hermenéutica de los operadores jurídicos, el avance será en beneficio de la colectividad y por supuesto del derecho.

No se desconoce, que en la actividad cotidiana del juez, es un multiusos. Con las excesivas cargas de trabajo, no dan abasto a su tarea, pues se encuentran abrumados por las múltiples actividades que como tal deben de hacer, pues dentro de su tarea jurisdiccional deben atender a todos los asuntos que se les plantean, pequeños o grandes; para efectos de resolución además de la aplicación de la norma vigente, tiene que estar al

---

<sup>543</sup> Luviano González, Rafael, “Justicias, Jueces y Derechos. Su interpretación y argumentación”, *Revista Jurídica Jalisciense*, Universidad de Guadalajara, Tercera Época, año XX, núm. I, p. 44.



pendiente de reformas, adiciones o derogaciones de la ley, aunado a eso, se enfrentan a un sin fin de criterios jurisprudenciales desordenados, contradictorios, etcétera. Amén de la serie de actividades de índole administrativo que también tienen que solventar, todo ello conlleva en buena parte, el retardo judicial, que como es sabido, se considera como una denegatoria de justicia.

En Jalisco la creación de nuevos tribunales en materia familiar, no ha sido una respuesta positiva, pues el incremento de asuntos judiciales, junto con la burocratización administrativa, de les permite el tiempo necesario para cumplir a cabalidad con la alta función que desempeñan.

Sobre la creación del derecho por el Juez, Bobbio<sup>544</sup> refiere en un primer término, que es común escuchar que el positivismo jurídico es la teoría que considera al juez como un autómatas que solo usa la norma aplicable al caso, y a la decisión judicial como un silogismo, después alude a la crítica del positivismo y acota que aun presidiendo de la discusión programática acerca de si está bien o mal conceder mayor libertad al juez la búsqueda del derecho, el juez crea derecho, pese a la supremacía de la ley y de la obligación de decidir conforme a las reglas previamente establecidas, e indica:

*“...La creación del derecho por la parte del juez, más que ser una exigencia que podría conducir a modificar el sistema, es una realidad dentro del sistema mismo, contra la cual se estrellan los argumentos éticos con las flechas contra la muralla. Aun los más fieles ortodoxos sostenedores del positivismo jurídico no han podido hacer otra cosa que tener en cuenta esta realidad: la teoría mecanicista de la interpretación está abandonada casi completamente. El mismo Kelsen ha dado un buen ejemplo. Y si hay que juzgar por el interés suscitado*

---

<sup>544</sup> Bobbio, Norberto, *op. cit.*, nota 503, pp. 57 y 58.

*en Italia en estos últimos años, en la fortaleza en un tiempo inexpugnable de los juristas, por las teorías de la jurisprudencia sociológica y la discusión, alrededor de los juicios de valor en la decisión judicial, hay que reconocer que tiene razón Carnelutti cuando desde hace un tiempo repite que finalmente también nosotros hemos cubiertos que en momento decisivo de la vida del derecho es el fallo judicial. Con esto no se quiere condenar ostracismo a la concepción mecanista de la interpretación; pero se da le puesto que merece, que no es ya el de ser el fiel reflejo de aquello que sucede de hecho en los sistemas de predominio legislativo, si no de una de las posibles actitudes que el juez puede asumir frente a las reglas que debe aplicar.*

Herrendorf<sup>545</sup> hace una agria crítica sobre el juez cómodo, refiere que pensar no es una muy divulgada y que sería un abuso de lenguaje suponer que todos los jueces lo hacen; que la función de pensar no es espontánea, ni brota como feliz ocurrencia, por lo que es patente que los asuntos que requieren de solución judicial, no pueden estar a la espera de ocurrencias felices y eventuales, sino por el contrario: "...los jueces han de tener capacidad peculiar, muy propia de los científicos de las ciencias humanas: intuición intelectual y capacidad de comprensión en el sentido egológico de dicha comprensión, que es el sentido que la fenomenología atribuyó acertadamente al conocimiento e los objetos culturales. Dilthey lo explicó con inmejorable economía de palabras: *La naturaleza se explica. La cultura se comprende.*"

Por su parte Calamandrei<sup>546</sup> cuando alude a ciertas tristezas en la vida de los jueces, dice que el verdadero "drama del juez", no es el que enfrenta

---

<sup>545</sup> Herrendorf, Daniel E., *op. cit.*, nota 20, p. 34.

<sup>546</sup> Calamandrei, Piero, *op. cit.*, nota 12, pp. 254 y 255.

ante la lucha enfática entre los deberes del oficio y las pasiones del hombre, que el drama del juez es la soledad, la cotidiana contemplación de las tristezas humanas y la costumbre que lo ha convertido en un simple administrador ordinario, y dice: *“...El juez que se habitúa a hacer justicia, es como el sacerdote que se habitúa de decir misa. Feliz ese anciano párroco de pueblo que hasta el último día siente, al acercarse con vacilante paso senil al altar, la sagrada turbación que experimentó, sacerdote novel, en su primera misa; feliz el magistrado que, hasta el día que precede a su jubilación por edad, experimenta al juzgar el sentimiento casi religioso de consternación que le hizo estremecer cincuenta años atrás, cuando, en su primer nombramiento de Pretor, hubo de pronunciar su primera sentencia”*.

Sobre el actuar de oficio por parte del juzgador en materia de familia Gómez Lara<sup>547</sup> aduce que *“...puede llegar a implicar una intervención exagerada del Estado en la vida de los particulares, además de que puede cuestionarse la posibilidad de que un juez de lo familiar iniciara un proceso, sin que hubiera previamente una petición de parte, pues esto llegaría a desnaturalizar la propia función jurisdiccional que, por esencia y principio, no puede desenvolverse sino mediante dicha petición de parte o excitación. Concluye Pallares Ronquillo al considerar que deben limitarse muchas de las atribuciones otorgadas a los jueces de lo familiar por que los juzgadores desconocen las causas y la magnitud de los problemas que se les plantean, además que no se cumple con el principio de inmediación procesal y se carece de la experiencia y sensibilidad necesarios para comprender y resolver los asuntos de forma que realmente se pueda preservar a la familia y proteger a sus miembros, especialmente a los menores que por lo general son ajenos a los problemas, de los padres. ... el problema fundamental radica en los extremos: primero, en la falta de capacidad, preparación y sensibilidad de la mayoría de los jueces, que en materia de controversias de orden familiar*

---

<sup>547</sup> Gómez Lara, Cipriano, *op. cit.*, nota 29, pp. 322 y 323.

*podrían llegar a usar forma inadecuada o desmedida los amplios poderes de que están investidos; y segundo, aunque dichos poderes estén otorgados por la ley, en la mayoría de los casos constituyen letra muerta, pro los juzgadores no están educados ni acostumbrados a un uso pleno de dichas facultades y, sobre todo, desgraciadamente la actuación de la judicatura es timorata y vacilante, todo ello por la carencia de una genuina carrera judicial.*

Una vez más, citando a Calamandrei,<sup>548</sup> cuando alude a ciertas semejanzas y diferencias entre jueces y abogados, dice que los defectos de los abogados repercuten sobre los jueces, y viceversa, que:

*“...El abogado oscuro, prolijo, caviloso, induce al juez a la desatención y al aislamiento mental; insensiblemente el juez, extendiendo a todos los abogados la desconfianza originada por los defectos de uno de ellos, se habitúa a desdeñar, ya que no a despreciar completamente, a los defensores y a considerarlos como males necesarios del proceso, que es preciso tolerar con pasiva resignación, llevada hasta el sopor. Así el juez, por culpa de un mal abogado, renuncia a valerse del preciso auxilio que diez buenos abogados serían felices de poderle ofrecer.*

*Pero a su vez, el juez desatento y desidioso induce al abogado a la superficialidad, y a veces hasta a la corruptela procesal. ¡A cuántas excepciones de incompetencia, a cuántas peticiones de pruebas testimoniales innecesarias, no estarían dispuestos a renunciar los abogados si la experiencia no les hubiese demostrado que, con tal de no estudiar profundamente el mérito de la causa, ciertos jueces están prontos a acoger a ojos cerrados toda excepción procesal o a poner buena cara al medio instructorio que, para ser admitido, exige solamente la levísima fatiga de una interlocutoria de cuatro renglones!*

---

<sup>548</sup> Calamandrei, Piero, *op. cit.*, nota 12, pp. 38 y 39.

Y acota: “...Sería necesario que el abogado ejerciera de juez dos meses al año, y que el juez hiciera de abogado un par de meses también cada año. Aprenderían así a comprender y a compadecerse: y se estimarían más mutuamente.”<sup>549</sup> (Pág. 46)

Como una exigencia sobre el actuar de los jueces Harrenfort<sup>550</sup>, indica que en la actividad de los jueces es preciso:

“...a) que el juez esté “vitalmente” capacitado para ser un buen juez; vitalmente quiere decir: que no sea un pusilánime, que no sea un genuflexo, que no tenga todas las aptitudes burocráticas que existen. Su vida debe estar incardinada con “hacer justicia” de la misma manera en que la vida de un médico se incardina con la salud del prójimo, y la de un artista con la belleza de su obra. Existencialmente, debe haber programado su vida de tal modo que la justicia le importe vitalmente. Todo esto está en su buena conciencia, conciencia por la cual la sociedad lo unge juez y no otra cosa.

b) Debe saber que trata con conductas humanas, y que debe tenerlas a la vista de modo indubitable y claramente. No puede prescindir de ellas como no puede prescindir de sí mismo. Juzga conductas, y debe tratar con ellas. En ellas debe advertir lo que hay de valioso y disvalioso. Debe ver además la situación en la cual fue desplegada esa conducta con todos sus detalles.

c) Debe llevar dentro como una forma de su animus una idea clara del proyecto existencial que la sociedad escogió para sí. Las decisiones judiciales no pueden violentar el programa de existencia que la sociedad elige con vitalidad. De acuerdo a la doctrina clásica, es un representante del pueblo elegido en tercer grado de soberanía, y está sujeto a respetar las formas de vida usuales –no “su” forma de vida- y

---

<sup>549</sup> *Ibídem*, p. 46.

<sup>550</sup> Herrendorf, Daniel E., *op. cit.*, nota 20, pp. 54 y 55.

*el modo de lanzarlas hacia el porvenir. No se trata de que preserve “su” moral o “sus” costumbres, sino que sea capaz de preservar las que todos admiten para poder vivir y seguir viviendo en sociedad. De otro modo estaría traicionando a la sociedad que lo ungió juez.”*

Retornando a Bobbio<sup>551</sup> cuando alude al juez como creador del derecho, indica: “... Por lo que se refiere al nuevo y mayor énfasis que las escuelas sociológicas dan a la figura del juez creador del derecho, aquí nace solamente el problema de si se puede considerar verdadero derecho al derecho viviente o en formación, al derecho que nace espontáneamente de la sociedad, a la cual recurren los teóricos de la corriente sociológica del derecho. A este propósito es necesario distinguir entre fuentes de conocimiento y fuentes de calificación del derecho. El derecho vivo es pura y simplemente un hecho o una serie de hechos de los cuales el juez saca el conocimiento de las aspiraciones jurídicas que se van formando en la sociedad. Pero para que estas aspiraciones se vuelvan reglas jurídicas, es necesario que el juez las recoja y les atribuya la autoridad normativa que va unida a su función de órgano capaz de producir normas jurídicas. El derecho viviente no es aún derecho, es decir, norma o conjunto de normas de ese sistema, sino que es solamente eficaz. Lo llega a ser cuando el juez, en cuanto sea reconocido como creador de derecho, le atribuye también la validez. En realidad, se puede hablar de un juez creador de derecho únicamente en cuanto las reglas que él descubre en la realidad social no son todavía reglas jurídicas, y no lo son hasta que él no las reconoce y les atribuye fuerza coactiva. También las famosas opiniones dadas por el Juez Holmes, en su actividad como juez, aunque deducidas de la observación de la realidad social, fueron más sensibles al llamado derecho en formación que las sentencias de sus colegas, mas no llegaron a ser derecho positivo de los

---

<sup>551</sup> Bobbio, Norberto, *op. cit.*, nota 26, pp. 50 y 51.

*Estados Unidos, mientras él las defendió sin lograr la mayoría. En el sistema era derecho solamente el reconocido por la mayoría de la Corte. Si el derecho viviente puede ser considerado como fuente de conocimiento jurídico, sólo el juez (y con más razón el legislador) puede ser considerando como fuente de calificación. (Páginas 50 y 51)*

Alcalá-Zamora<sup>552</sup> refiere: “...Glosando el título del célebre libro de Ossendowski, diríamos que si los justiciables suelen ser hombres y en ocasiones bestias, por la ferocidad o perversidad de sus instintos y pasiones, lo jueces tendrían que ser dioses, y por desgracia, no lo son. ¿Conclusión pesimista? No: enérgico llamado de atención para que se ponga al máximo cuidado de la selección y formación del personal judicial, tanto en orden a sus conocimientos técnicos como a sus cualidades de independencia, moralidad y rectitud. Y al mismo tiempo, procúrese, mediante esa acción de la crítica a que en el núm. 2.6.2.12 nos referimos, a mantener siempre despierta la inquietud del magistrado por hallar la justicia, frente a los riesgos adormecedores de la rutina profesional.

Para cerrar el tema diremos que es pertinente un cambio de mentalidad y de actuar en los operadores jurídicos, unos y otros enfrentan una labor especial, la actuación del juzgador debe dejar de ser cómoda, salir de su zona de confort y asumir con verdadera vocación de servicio la noble tarea de la impartición de justicia, la selección de los juzgadores debe ser escrupulosa en todo sentido, pues como lo expresa Alsina<sup>553</sup> cuando alude a la gran responsabilidad de jueces y magistrados, cuando refiere: “...Por eso se le exigen condiciones excepcionales para desempeñar el cargo y se le rodea de garantías que aseguren la independencia y rectitud de sus fallos; pero también se castiga su inconducta con severas sanciones.”.

---

<sup>552</sup> Alcalá-Zamora, Niceto, *op. cit.*, nota 11, p. 104.

<sup>553</sup> Alsina, Hugo, *op. cit.*, nota 19, p. 392.

### **8.3 Constitucionalidad del Divorcio Exprés.**

Sobre las posibles reformas a la legislación estatal en materia de divorcio incausal, es menester recordar que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cúspide del sistema jurídico mexicano, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor a partir del día siguiente de su publicación como lo preceptúa el artículo primero transitorio del decreto correspondiente, incorpora plenamente los derechos humanos en el sistema constitucional incluidos aquellos determinados en los diversos tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, a efecto de que tengan una eficacia plena en la práctica en la nación, como también se advierte del diverso numeral 133, los que respectivamente, estatuyen:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. - Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. - Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. –



Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana ya tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

De dichas normas resulta relevante el imperativo en cuanto a que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en consecuencia incorpora las normas contenidas en tales instrumentos al sistema jurídico y, por ende, obliga a los tribunales judiciales a resolver las controversias que se planteen ante ellos atendiendo a sus disposiciones.

De la misma manera, la Suprema Corte de Justicia emitió ejecutoria<sup>554</sup>, en la que señala que se presenta el criterio hermenéutico por virtud del cual debe hacerse una interpretación extensiva de la norma de manera que garantice la protección más amplia de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales suscritos por México, cuyo contenido indica:

---

<sup>554</sup> [J] Tesis publicada en el Libro VII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de 2012, t. 2, p. 1838. Principio *pro homine*. Su conceptualización y fundamentos.

*“...En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano del derecho internacional, el principio en mención se encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno.”*

Zaragoza Huerta y Martínez Zamora, señalan: *“...La doctrina mayoritaria, que ha abordado este tema, establece que no existe un criterio uniforme en relación al concepto de Derechos Humanos por lo cual, podemos señalar que encontramos distintos términos que aluden a los mismos (derechos naturales, Derechos Humanos o derechos del hombre, derechos públicos subjetivos, garantías jurídicas y derechos fundamentales, a mi parecer, el término Derechos humanos, es el más adecuado)<sup>1</sup>. Sin embargo, podemos mencionar*

que existen dos corrientes fundamentales o representativas que los identifican:

a) **iusnaturalismo:** Concibe a los Derechos Humanos como derechos naturales, derechos que el ser humano tiene por su propia naturaleza y dignidad (per sé). Estos derechos son universales e invariables, derechos propios de todos los seres humanos, independientemente de las circunstancias de tiempo y lugar.

b) **Positivismo:** Los Derechos Humanos son derechos positivos. Para que un derecho humano sea reconocido como tal, debe estar positivizado, es decir, contemplado por un ordenamiento jurídico. Los Derechos Humanos son aquellos que se acuerdan que lo son. No son derechos que se reconocen en el ser humano, se le conceden.”<sup>555</sup>.

Sobre los derechos humanos o dignidad humana, Vázquez, reflexiona que a fin de lograr su esclarecimiento conceptual, es menester ver tales derechos, “... no solo desde la perspectiva de la tradición legislativa nacional e internacional, es decir, desde los parámetros otorgados por el Estado y/o los Estados para el goce y ejercicio de estos Derechos, sino también desde los horizontes del imaginario colectivo (que utópicamente hace de estos Derechos un medio de acceso a la justicia para quienes históricamente jamás han vivido la realización de este valor) y desde el horizonte de la doctrina filosófica que más ha influido en la configuración del concepto de dignidad humana, a saber, la de Emanuel Kant, valor que. Como es sabido, constituye el bien jurídico protegido de los llamados Derechos Humanos.”<sup>556</sup>.

---

<sup>555</sup> Zaragoza Huerta, José y Martínez Zamora, Juan Jesús, *op. cit.*, nota 133, *passim*.

<sup>556</sup> Vázquez, Efrén, “Los Derechos Humanos en el Reino de la Imprecisión y confusión Conceptual, Jurídica y Política”, en Aguilera Portales, Rafael Enrique y Prado Maillard, José Luis (coords.), *Las Transformaciones del Derecho, el Estado y la Política en el Nuevo Contexto Global*, San Nicolás de los Garza, UANL-Centro de Investigaciones de Tecnología Jurídica y Criminológica, 2003, p. 111.

Ahora bien, el artículo 14 de la Constitución Federal, en su segundo párrafo estatuye: *“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”*; del cual emerge el derecho al debido proceso enmarcado en la garantía de legalidad que exige el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.

Por otra parte y bajo este nuevo orden de cosas, debemos atender al contenido de diversos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, los primeros de ellos disponen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; que además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Por su importancia, se atiende al contenido textual de diversos artículos de la declaración en cita:

**Artículo 3.-** Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

**Artículo 8.-** Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

**Artículo 12.-** Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

**Artículo 16.-** 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Por su parte en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre<sup>557</sup>, se estatuye en su artículo primero, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, y en el segundo, que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en dicha declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. El derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar, se encuentra contemplado en su artículo quinto, y el derecho a la constitución y a la protección de la familia en el sexto.

---

<sup>557</sup> Derechos humanos.net., *Declaración americana de los derechos y deberes del hombre*, disponible en, <<http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/americana/DADH/1948-DADH.htm>>, Bogotá, 1948, página visitada el 05 de mayo de 2013.

En tanto que el derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles y al de justicia, se consignan en los siguientes términos:

**Artículo XVII:** Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.

**Artículo XVIII:** Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Como deberes ante la sociedad y para con los hijos y los padres, debemos recordar el contenido de los preceptos 29 y 30, que textualmente señalan:

**Artículo XXIX:** Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad.

**Artículo XXX:** Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.

En tanto que en los artículos 8º, 11, 17, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, a la cual se

vinculó México el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, se estatuyen las garantías judiciales, la protección de la honra y de la dignidad, la protección a la familia, a los derechos del niño y por supuesto la protección judicial, que se encuentran consagrados en los siguientes términos:

**Artículo 8.-** Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

**Artículo 11.-** 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

**Artículo 17.-** 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección

necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

**Artículo 19.-** Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

**Artículo 25.-** 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Retornando a la Constitución Federal, el artículo 4° reconoce un régimen propio en tratándose de cuestiones familiares al establecer, en su primer párrafo que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, que surge del vínculo jurídico del matrimonio, que constituye una forma de vida natural y permanente entre los consortes, lo que permite a su vez, cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro que imponen el derecho y la moral.”



En tanto que el Código Civil del Estado de Jalisco<sup>558</sup>, estatuye: “El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia.”

De la normatividad local e internacional en cita, se patentizan los deberes y derechos fundamentales del ser humano, los primeros en cuanto a los deberes ante la sociedad y para con los hijos y los padres, pues se tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad, y como derechos fundamentales se reconoce que el ser humano nace libre e igual ante la ley, en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, sin distinción alguna, reconociendo plenamente su derecho a la vida, a la libertad, a su vida privada, a su vida familiar, su honra y reputación, su derecho a casarse bajo libre y pleno consentimiento de los contrayentes y fundar una familia en igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto y durante el matrimonio y en el caso disolución del matrimonio, además está el derecho de protección de la propia familia y de los hijos, pues todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del propio Estado; así como de sus derechos civiles, y por supuesto, el derecho a la protección judicial, pues debe ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro.

En tal virtud, queda claro que la instauración del divorcio incausal, como una nueva fórmula para la disolución del vínculo matrimonial, no

---

<sup>558</sup> Véase, Código Civil del Estado de Jalisco, *op. cit.*, nota 51, art. 258.

violenta norma alguna y si por el contrario cumple a cabalidad el respetar los derechos fundamentales del ser humano, pues prevalece la voluntad y libertad de decisión de las personas, se respeta su vida privada, íntima y familiar, protegiendo de manera específica los derechos de los infantes, en caso de descendencia, mediante un procedimiento sencillo, rápido y efectivo ante jueces o tribunales competentes, pues como se ha indicado, este sistema representa rapidez (de uno a tres meses, según las cargas de labores de los tribunales) en situaciones de conformidad entre ambas partes, tanto en la disolución del vínculo como sobre las consecuencias del divorcio de índole patrimonial y las inherentes a los hijos, en caso de haberlos, por lo que la reducción de los plazos tiene como consecuencia ahorro en tiempo y costos económicos, con todos los beneficios que ello conlleva. De la misma manera, el nuevo proceso respeta el derecho fundamental de la libertad de decisión, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, así como el respeto irrestricto a los derechos de personalidad de las personas al proteger su vida personal e íntima, ya que no es menester señalar causa o motivo alguno sobre la ruptura matrimonial.

En el juicio de divorcio exprés, al igual que en todos los juicios, las autoridades jurisdiccionales de cualquier nivel, primera o segunda instancia, deben prestar especial atención al desenvolvimiento del proceso, para garantizar la debida protección de los derechos de audiencia y defensa de las partes involucradas, el trámite propuesto en el Distrito Federal cumple con ello, pues las partes involucradas son debidamente escuchadas y el procedimiento propuesto debe interpretarse bajo el amparo de la tesis<sup>559</sup> emitida por el Poder Judicial de las Federaciones, de la que se colige que el nuevo sistema de disolución del vínculo matrimonial, cumple con las exigencias de respeto a los derechos fundamentales tanto de índole constitucional como convencional.

---

<sup>559</sup> [J] I.4o.C.260 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165275, Civil, febrero de 2010, p. 2843. Divorcio exprés. Interpretación de su normatividad para que resulte constitucional.

## CONCLUSIONES

### PRIMERA.-

Los cambios imperantes del tradicional concepto de familia nuclear parental, dan paso a una nueva visión de esta figura. En materia familiar hemos comenzado el siglo XXI con grandes cambios producidos por la necesidad de atender nuevas situaciones sociales. Cambios que van en la dirección de la adaptación de una familia más democrática, multicultural y en definitiva mucho más diversificada<sup>560</sup>.

### SEGUNDA.-

Pese al incremento del divorcio, los divorciantes enfrentan este proceso con desconocimiento total de la complejidad del asunto en todas y sus muy variadas dimensiones, así como las repercusiones que de él emanan, que van desde lo emocional, económico, social, laboral, y por supuesto, jurídicas. Queda justificado que las etapas de un proceso jurisdiccional de divorcio ya sea por mutuo o contencioso, pero sobre todo en este último, resulta un juicio con alto grado de obstaculización jurídica procesal, que impide el debido cumplimiento de la Ley y su propia naturaleza, que los inconvenientes surgen ya sea por cuestiones legales derivadas de las propias disposiciones normativas ante su imprecisión o lagunas, o bien por la enorme dificultad probatoria que las causales presentan en la praxis judicial, así como el sin fin de exigencias jurídicas establecidas en ejecutorias y tesis jurisprudenciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación, a lo que se agrega, la falta de profesionalismo de los operadores jurídicos. Se ha justificado que el porcentaje anual de sentencias favorables en los juicios de divorcio contencioso, son exiguas frente al número de demandas presentadas

---

<sup>560</sup> González Martín, Nuria, *op. cit.*, nota 75, *passim*.

para tal objetivo. Con el consiguiente demerito que ello implica, para el foro de abogados y los funcionarios judiciales.

### **TERCERA.-**

A lo largo de la investigación, queda en claro que la normatividad sobre la disolución del vínculo matrimonial jurisdiccional, vigente en el Estado de Jalisco, junto con la interpretación que de ella se hace por parte del Poder Judicial de la Federación, provocan procesos extenuantes con pocos resultados positivos, en detrimento de la condición jurídica de las personas que pretenden disolver el matrimonio, por lo que las normas vigentes no cumplen con el cometido de respeto irrestricto a diversos derechos fundamentales, consagrados específicamente en los artículos 1º, 4º 17º Constitucional, que consignan que en este país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los el país sea parte; se establece de manera clara que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, debiendo favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia de tales derechos fundamentales; determinando con claridad que está prohibida cualquier discriminación motivada, entre otras causas, por el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, que el varón y la mujer son iguales ante la ley, así como el deber del Estado de proteger la organización y el desarrollo de la familia, y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, y por supuesto, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial.

#### **CUARTA.-**

Con el objetivo de lograr procesos expeditos, eficientes y garantistas, para la disolución del vínculo matrimonial, se contemplaron tres posibles vías.

La primera propone efectuar reformas a la ley sustantiva y procesal civil sobre el divorcio por mutuo y contencioso. Empero, como se analizó, no se estima una solución adecuada. La segunda alternativa, plantea la implementación de los medios alternativos de solución de conflictos, para la resolución de todo conflicto matrimonial, pues solo se contempla como opción en el divorcio administrativo. Como tercera opción, y ante el claro escenario de que no es factible resolver todos los conflictos mediante los sistemas alternativos, se plantea la implementación del divorcio incausal, que corresponde al divorcio remedio, sin que importen las causas de ese conflicto.

#### **QUINTA.-**

En menester un cambio de actitud y mentalidad en los operadores jurídicos, tanto del abogado como del juzgador, que mantienen una tradicional visión positivista, pues ambos deben estar abiertos a las nuevas formulas de entender el derecho, bajo una visión garantista. Aunado a ello, se debe incluir en las aulas de derecho, la preparación formal del estudiante sobre esta nueva forma de estudiar, aprender, ver, sentir e interpretar el derecho, para su debida aplicación en beneficio de la colectividad con pleno respeto a sus derechos fundamentales.

#### **SEXTA.-**

El Estado está obligado a crear políticas públicas que den cabal cumplimiento a los derechos fundamentales que se consagran en la Constitución General de la República, que respeten a cabalidad los derechos fundamentales del ser humano y por supuesto, el derecho a la protección

judicial. La implementación del divorcio, mediante métodos alternativos de solución de conflictos y la instauración del divorcio incausal, como recientes formulas para la disolución del vinculo matrimonial, cumple a cabalidad el respetar los derechos fundamentales del ser humano, pues prevalece la voluntad y libertad de decisión de las personas, se respeta su vida privada, intima y familiar, protegiendo de manera específica los derechos de los infantes, en caso de descendencia, mediante procesos sencillos, rápidos y efectivos, el primero ante el mediador y el segundo ante jueces o tribunales competentes, sistemas que representan rapidez en situaciones de conformidad entre ambas partes, tanto en la disolución del vinculo como sobre las consecuencias del divorcio, patrimoniales y de descendientes.

## **PROPUESTAS.**

### **PRIMERA.-**

Reformas sustanciales al Código Civil del Estado de Jalisco, a fin de que se deroguen las normas inherentes al divorcio remedio o sanción, así como los tres sistemas de disolución del vínculo matrimonial, para que en su lugar se implemente el divorcio incausal.

### **SEGUNDA.-**

Reformar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que se deroguen las normas procesales inherentes al divorcio por mutuo y se establezca con claridad y precisión, bajo la normatividad respectiva, el proceso a seguir en el divorcio incausal o exprés.

### **TERCERA.-**

Reformas a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, a fin de que dentro de su normatividad se faculte el uso de los medios alternos en los conflictos de índole matrimonial con las consiguientes facultades para el trámite del divorcio. En la función pública es indispensable que la tarea del legislador encuentre una forma de expresión del Derecho, que sea respetuosa de los derechos fundamentales y que se ajuste a la realidad de la demanda social, definiendo con claridad, precisión y transparencia los procesos idóneos que brinden una adecuada y expedita solución a los problemas que aquejan a los justiciables en materia de divorcio, buscando que además de respetar tales garantías, se logre dar cabal cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando los derechos de audiencia y defensa, legalidad y debido proceso, para dar certeza jurídica en los procesos y tramites de esta índole, y por supuesto ello tendrá como consecuencia el fortalecimiento del Derecho y la práctica de la abogacía.

## BIBLIOGRAFÍA.

- ACOSTA ROMERO, Miguel, *Código Civil para el Distrito Federal. Comentarios, Legislación, Doctrina y Jurisprudencia*, 2ª ed., México, Porrúa, 1986.
- ALCALÁ-ZAMORA, Niceto, *Proceso, auto composición y auto defensa*, México, Editorial Jurídica Universitaria, 2001, Serie Clásicos de la Teoría General del Proceso, vol. 2.
- ALONSO, Martín, *Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Libro Práctico*, México D. F., Editorial Aguilar, 1994.
- ALSINA, Hugo, *Fundamentos de Derecho Procesal*, México, Editorial Jurídica Universitaria, 2001, Serie Clásicos de la Teoría General del Derecho, vol. 4.
- ARELLANO GARCÍA, Carlos, *Derecho Procesal Civil*, México, Porrúa, 2001.
- ARELLANO GARCÍA, Carlos, *Teoría General del Proceso*, México, Editorial Porrúa, 1998.
- ARNAU GRAS, Jaime, *Psicología experimental*, México D. F., Trillas, 1979.
- Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, "Iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal", *Gaceta Parlamentaria de la ALDF*, México, año III, núm. 169, primer periodo, 27 de septiembre de 2011.
- Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, *Gaceta Parlamentaria*, <<http://www.aldf.gob.mx/gaceta-parlamentaria-903-1.html>>, página visitada el 26 de abril de 2013.
- Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, *Gaceta Parlamentaria*, 3 de octubre de 2008.
- BAEZA ACEVEZ, Leopoldo, *Ética*, 6ª ed., México D. F., Porrúa, 1965.
- BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía, *Derecho de Familia y Sucesiones*, 9ª ed., México, Harla.
- BAQUEIRO ROJAS, Edgar, *Derecho de Familia*, 7ª ed., México, Editorial Harla, 2009.
- BAQUEIRO ROJAS, Edgar, *Derecho Familiar*, México, Editorial Oxford, 1999.



- BBC Mundo, Analítica.com, *Incompatibilidad de caracteres*, disponible en [www.analitica.com/media/9864286.pdf](http://www.analitica.com/media/9864286.pdf), página visitada el 17 de noviembre de 2012.
- BECERRA BAUTISTA, José, *El Proceso Civil en México*, México, Porrúa, 1997.
- BELLUSCIO, César Augusto, *Manual de Derecho de Familia*, 7ª ed., (1ª reimp.), Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Desalma, 2004, t. II.
- BELLUSCIO, Cesar Augusto, *Manual de Derecho de Familia*, 7ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2004, t. I.
- BOBBIO, Norberto, *El problema del positivismo jurídico. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política*, México, Distribuciones Fontamara, 1991.
- BOBBIO, Norberto, *Teoría General del Derecho*, España, Editorial Debate, 1992.
- BONNECASE, Julien, *Tratado elemental del Derecho Civil*, México, Harla, 1993, Colección Clásicos del Derecho.
- BUENROSTRO BÁEZ, Rosalía, *Derecho de Familia*, México, Editorial Oxford, 2006.
- BURGOA ORIHUELA, Ignacio, *Derecho Constitucional Mexicano*, México, Porrúa.
- BUSTOS RODRÍGUEZ, María Beatriz, *Diccionario de Derecho Civil*, México, Oxford, 2006.
- BUSTOS RODRÍGUEZ, María Beatriz, *Personas y Familia*, México, Oxford, 2006.
- CALAMANDREI, Piero, *Elogio de los Jueces*, Edición Facsimilar, México, Editorial Tribunal.
- CAMPILLO SÁINZ, José, *Dignidad del abogado*, 9ª ed., México, Porrúa, 1999.
- CANEVARO, Alfredo, "Apuntes para una filosofía del grupo familiar", *Revista de terapia familiar*, Buenos Aires, núm. 3.
- CÁRDENAS, Eduardo José, *La mediación en conflictos familiares*, 2ª ed., Buenos Aires, Editorial Lumen Humanitas, 1999.
- CARNELUTTI, Francesco, *Como se hace un proceso*, Bogotá, Editorial Themis, S.A., 2007.
- CHÁVEZ ASECIO, Manuel F., *La Familia en el Derecho. Primera parte*, 2ª ed., México, Porrúa, 1990.

- CHÁVEZ ASENCIO, Manuel F., *Matrimonio y divorcio*, disponible en <<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/19/pr/pr26.pdf>>, página visitada el 22 de noviembre de 2012.
- CISNEROS FARÍAS, Germán, *Argumentación y Discurso Jurídico*, México, Trillas, 2010.
- CISNEROS FARÍAS, Germán, *Diccionario Jurídico*, México, Trillas, 2006 (reimpresión 2012).
- Código Civil del Estado de Jalisco, *Periódico Oficial del Estado*, 26 de enero de 2013.
- Código Civil para el Distrito Federal, *Gaceta Oficial del Distrito Federal*, 18 de agosto de 2011.
- Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, *Periódico Oficial de Estado*, 27 de diciembre de 2011.
- Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, *Periódico Oficial del Estado*, 28 de diciembre de 2012
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, *Diario Oficial de la Federación*, 26 de febrero de 2013.
- CONTRERAS VACA, Francisco José, *Derecho Procesal Civil*, México, Oxford University Press, 1999, vol. I.
- COUTO, Ricardo, *Derecho civil mexicano*, México, D. F., Porrúa, 1919.
- O, Antonia de la, "El bien jurídico tutelado y la conducta típica del delito de violencia familiar en el Estado de Nuevo León", *Conocimiento y Cultura Jurídica*, UANL-FACDYC-Centro de Investigación de Tecnológica Jurídica y Criminológica, San Nicolás de los Garza, Segunda Época, año 3, núm. 5, enero-junio de 2009.
- Decreto 22578/LVIII/09. Adición del artículo 68-ter. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.-Feb. 5 de 2009. Sec. III.
- Decreto 23032/LVIII/09. *Periódico oficial del estado de Jalisco*, 29 de diciembre de 2009, sec. IV.
- Decreto 23933/LIX/11. Se adiciona el art. 405-Ter. al Código Civil del Estado de Jalisco, 27 de diciembre de 2011. Sec. V.

Decreto núm. 63, *Ley de Divorcio*, Guadalajara, 22 de mayo de 1915.  
 Establecimiento del Divorcio, conforme al Decreto de 29 de diciembre de 1914, expedido por la Primera jefatura del E. C.

Decreto número 21689/LVII/06, disponible en <[www.congreso.jalisco.gob.mx](http://www.congreso.jalisco.gob.mx)>, consultado el día 28 de octubre del 2012.

Decreto número 23933/LIX/11. Se adiciona el art. 405-Ter. al Código Civil del Estado de Jalisco, diciembre 27 de 2011, sec. V.

Definición.de, disponible en <<http://definicion.de/separacion/#ixzz2E7aOMtcg>>, 2008-2013.

Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, Arzobispado de Barcelona, núm. 35, consultado el 18 de noviembre de 2010.

Derechos humanos.net., *Declaración americana de los derechos y deberes del hombre*, disponible en, <<http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/america/DADH/1948-DADH.htm>>, Bogotá, 1948, página visitada el 05 de mayo de 2013.

Diccionario jurídico. Iurisconsultas. IC.com. Abogados, <<http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/legitimacion-procesal/30>>, página visitada el 20 de noviembre de 2012.

Disponible en <<http://www.definicionlegal.com/definicionde/MatrimonioPutativo.htm>>, página consultada el 21 de noviembre de 2012.

Divorcio. Antecedentes del divorcio en México, disponible en <<http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21886/Capitulo1>>, página visitada el 21 de noviembre de 2012.

DWORKIN, Ronald, *El imperio de la Justicia*, Barcelona, Gedisa, 1992.

ELÍAS AZAR, Edgar, *Personas y Bienes en el Derecho Civil Mexicano*, México, Porrúa, 1997.

El Espectador.com, *El divorcio en Estados Unidos ya es un lujo*, disponible en, <<http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo102647-el-divorcio-estados-unidos-ya-un-lujo>>, 28 de diciembre de 2008, página visitada el 01 29 de abril de 2013.

- Enciclopedia Jurídica, *Representación*, disponible en <<http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/representacion/representacion.htm>>, página visitada el 20 de noviembre de 2012.
- Espacios Poder Joven, Instituto mexicano de la Juventud, <<http://espacios.imjuventud.gob.mx/contenidos.php?idsubcontenido=1>>, página visitada el 15 de noviembre de 2012.
- Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, <<http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/periodico/ets/papiloma.html>>, página visitada el 28 de noviembre de 2012.
- FOUCAULT, Michel, *Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber*, México, D. F., Siglo XXI Editores, 1991.
- FROMM, Erich, *Tener o ser*, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2000.
- GALINDO GARFIAS, Ignacio, *El derecho de familia*, 9ª ed., México D. F., Porrúa, 2002.
- GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, *Introducción al estudio del Derecho*, México D. F., Porrúa, 2004.
- GOLDSTEIN, Mabel, *Consultor Magno. Diccionario jurídico*, Buenos Aires, Circulo Latino Austral, S. A., 2008.
- GÓMEZ LARA, Cipriano, *Derecho Procesal Civil*, 5ª ed., México, Editorial Harla, 1991, Colección Textos Jurídicos Universitarios.
- GÓMEZ LARA, Cipriano, *Teoría General del Proceso*, México, Editorial Harla, 2002.
- GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria, *El derecho de familia en un mundo globalizado. Especial Referencia a la adopción internacional*, disponible en <<http://www.oas.org/dil/esp/5%20-%20nuria.LR.CV.75-120.pdf>>.
- GORJÓN GÓMEZ, J. Francisco y Steele Garza, José G., *Métodos alternativos de solución de conflictos*, 2ª ed., México, Oxford University Press, 2012.
- GUDIÑO PELAYO, José de Jesús, "La Calidad en la Justicia. Corresponsabilidad de jueces, litigantes y partes". *Reforma Judicial. Revista Mexicana de la Justicia*, México, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, IIJ-UNAM, enero-junio 2004.
- HERNÁNDEZ, Kelly, *Teoría general del derecho procesal*, México, Porrúa, 2000.

- HERRENDORF, Daniel E., *El Poder de los Jueces. Cómo piensan los jueces que piensan*, 2ª ed., Argentina, Abeledo-Perrot, 1994.
- IBARROLA, Antonio De, *Derecho de familia*, México, D. F., Porrúa, 2011.
- INEGI, disponible en <<http://www.inegi.org.mx/inegi/acercade/default.aspx>>, página consultada el 20 de abril de 2013.
- INEGI, *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*, 2010, disponible en <<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/Enigh2010/tradicional/default.aspx>>, página consultada el 22 de abril de 2013.
- INEGI, *Síntesis metodológica. Estadística de divorcios*, disponible en [http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/registros/sociales/sm\\_divorcios.pdf](http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/registros/sociales/sm_divorcios.pdf), página consultada el 20 de abril de 2013.
- INFONews, *Torquemada siglo XXI*, disponible en <<http://veintitres.infonews.com/nota-5277-politica-Torquemada-siglo-XXI.html>>, página consultada el 27 de abril de 2013.
- Instituto Nacional de Estudios Políticos A. C., *Memoria política de México. 1914. Ley sobre el divorcio. DVD*, INEP A. C., México, 2012.
- Iusquarens 10 Blog, <<http://iusquarens10.wordpress.com/2010/05/29/prescripcion-preclusion-y-caducidad/>>, 31 de marzo de 2012, página visitada el 25 de noviembre de 2012.
- Grasso Vecchio, José Analista Financiero, *Relación entre la economía y el matrimonio*, <<http://www.elmundo.com.ve/noticias/finanzas-personales/recomendaciones/relacion-entre-la-economia-y-el-matrimonio.aspx>>, 30 de agosto de 2010, página visitada el 21 de noviembre de 2011.
- JOSSERAND, Louis, *Derecho civil*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, vol. I, t. III, 1951.
- KELSEN, Hans, *¿Qué es la Justicia?*, México, Distribuciones Fontamara, 2000.
- LAÏDI, Kaki, *Política y Derecho. Un mundo sin sentido*, Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

Ley de Justicia alternativa para el Estado de Jalisco, *Periódico oficial del Estado*, consultada el 08 de enero de 2013.

Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, *Periódico Oficial del Estado de Jalisco*, 15 de diciembre de 2011, art. 98. La sentencia ejecutoria que declare un divorcio, se remitirá en copia certificada al Archivo General del Registro Civil y al oficial del Registro Civil del lugar donde se celebró el matrimonio, para que levante el acta correspondiente.

Ley General de Salud, *Diario Oficial de la Federación*, 24 de abril de 2013.

LÓPEZ DEL CARRIL, Julio, *Derecho de familia*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1984.

LUVIANO GONZÁLEZ, Rafael, "Justicias, Jueces y Derechos. Su interpretación y argumentación", *Revista Jurídica Jalisciense*, Universidad de Guadalajara, Tercera Época, año XX, núm. I.

MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario, *Instituciones de derecho civil*, México, Porrúa, 1988, t. III.

MALEM, Jorge, La vida privada de los Jueces. Principio básico de la Deontología Jurídica. Reforma Judicial, *Revista Mexicana de la Justicia*, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, julio-diciembre 2006.

MALQUI REYNOSO, Max, *Derecho de familia*, Lima, Burgos Editorial, 1983.

MARGADANT, Guillermo F., *Derecho Romano*, 5ª ed., México, Editorial Esfinge, 1974.

MARLOW, Lenard, *Mediación Familiar. Una práctica en busca de una teoría. Una Nueva Visión del Derecho*, España, Editorial Granica, 1999.

MATEOS MUÑOZ, Agustín, *Gramática Latina*, México D.F., Editorial Esfinge, 1998.

MÉNDEZ LUÉVANO, Tanya Elizabeth y Reynoso Orozco, Orlando, "Aproximaciones al Estudio de la Violencia y los Psicópatas", *Revista Letras Jurídicas*, núm. 9, Otoño de 2009.

MONTERO DUHALT, Sara, *Derecho de Familia*, México, Porrúa, 1992.

- NAVARRETE, Urbano, Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II, Madrid, Biblioteca autores cristianos, 2007.
- NIETZCHE, Federico, Humano. Demasiado humano, México, Porrúa, 1989.
- OJEDA TORRES, Guido Andrey, *Filiación matrimonial. Impugnación de la paternidad y maternidad*, disponible en <http://www.monografias.com/trabajos93/impugnacion-paternidad/impugnacion-paternidad.shtml>, página visitada el 23 de abril de 2013
- PALLARES, Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, 21ª ed., México, Porrúa, 1994.
- PALLARES, Eduardo, *El Divorcio en México*, 3ª ed., México, Porrúa, 1981.
- PAZ Y FUENTES, Víctor M. De La, *Teoría y Práctica del Juicio de Divorcio*, 2ª ed., México, D.F., Editor Fernando Leguizamo Cortes, 1984.
- PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, *Derecho de Familia*, Lima, Editorial Idemsa, 2002.
- PÉREZ CONTRERAS, María de Monserrat, "Violencia Familiar", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, nueva serie, año XXXII, núm. 95, mayo-agosto de 1999.
- PÉREZ CONTRERAS, María de Monserrat, *Aspectos jurídicos de la Violencia contra la Mujer*, México, Editorial Porrúa, 2001.
- PÉREZ PALMA, Rafael, *Guía de Derecho Procesal Civil*, 6ª ed., México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1981.
- PÉREZ SAUCEDA, José Benito *et al.*, "La interdisciplinariedad y multidisciplinariedad como modelos a seguir en la enseñanza del Derecho. La experiencia de los Métodos Alternos de Solución de Controversias", *Revista Letras Jurídicas*, núm. 8, primavera de 2009.
- PINA VARA, Rafael De, *Diccionario de Derecho*, México D. F., Editorial Porrúa, 2004.
- Poder Judicial del Distrito Federal, *Anuario General Estadístico*, disponible en [http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/comunicados/anuario%20estadistico/anuario\\_general.pdf](http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/comunicados/anuario%20estadistico/anuario_general.pdf), página visitada el 03 de mayo de 2013.

Poder Judicial del Distrito Federal, *Tercer informe*, disponible en <http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/noticias/tercer%20informe%202010.pdf>, página visitada el 03 de mayo de 2013.

Poder Legislativo del Estado de Jalisco, *Biblioteca Virtual*, disponible en [http://congresoweb.congreso.jalisco.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador\\_leyes\\_estatales.cfm](http://congresoweb.congreso.jalisco.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador_leyes_estatales.cfm), página consultada el 15 de diciembre de 2013.

PORTALIS, Jean Etienne Marie, *Discurso Preliminar al Código Civil Francés*, Jalisco, Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas, Ediciones de la Noche, 2004.

Psicología online. Formación, autoayuda y consejo, Iria Malde Modino, disponible en <http://www.psicologia-online.com/>, página visitada el 17 de diciembre de 2012.

Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 22ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 2001.

Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco, *Periódico Oficial del Estado*, consultado el 20 de enero de 2013.

ROJINA VILLEGAS, Rafael, *Compendio de Derecho Civil*, 9ª ed., México, Porrúa, 2009, t. I.

SADA CONTRERAS, Carlos Enrique, *Apuntes elementales de Derecho Procesal Civil*, Nuevo León, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2000.

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, Ricardo, *Derecho Civil*, 3ª ed., México, Porrúa, 1998.

SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, Jorge Antonio, *Introducción al Derecho Mexicano. Derecho Civil*, México, UNAM, 1981, Serie textos y estudios legislativos, núm. 39.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Rafael, *Metodología de la Ciencia del Derecho*, México, Porrúa, 2008.

SANZ, Diana y Molina, Alejandro, *Violencia y abuso en la familia*, Argentina, Lumen Humanitas, 1999.



- SERVÍN BECERRA, Jorge, *Derecho de Familia y Sucesiones*, Acatlán, UNAM-Facultad de Estudios Superiores, 2009.
- STAMMLER, Rudolf, *El Juez*, México D. F., Editorial Nacional, 2001.
- STILERMAN, Martha y De León, María Teresa, *Divorcio. Causales objetivas*, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1994.
- STILERMAN, Martha y León, María Teresa de, *Divorcio. Causales objetivas*, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1994.
- SuDivorcio.es. Consultas sobre el divorcio. Divorcio y Convenio Regulador, <[http://www.sudivorcio.es/divorcio\\_convenio.htm](http://www.sudivorcio.es/divorcio_convenio.htm)>, página visitada el 20 de noviembre de 2012.
- TARIGO, Enrique E. *Derecho de Familia y Familia*, Uruguay, s.e., 1993, vol. I.
- Telemundo, Todo sobre el divorcio en Estados Unidos, <<http://www.telemundodallas.com/inmigracion/tu-consulta-gratis/El-divorcio-en-Estados-Unidos-132567688.html>>, página consultada el día 9 de enero de 2013.
- TNRelaciones, <<http://www.tnrelaciones.com>>, página visitada el 17 de noviembre de 2012.
- Universidad de Salamanca, "Divorcio. Doctrina y Legislación Española", *Revista jurídica*, España, Universidad de Salamanca, 2012.
- VÁZQUEZ, Efrén, "Los Derechos Humanos en el Reino de la Imprecisión y confusión Conceptual, Jurídica y Política", en Aguilera Portales, Rafael Enrique y Prado Maillard, José Luis (coords.), *Las Transformaciones del Derecho, el Estado y la Política en el Nuevo Contexto Global*, San Nicolás de los Garza, UANL-Centro de Investigaciones de Tecnología Jurídica y Criminológica, 2003.
- VÁZQUEZ, Efrén, "El Entroncamiento del Problema Hermenéutico con el Deontológico en la formación de los Operadores del Derecho", (Segunda Parte), *Revista Conocimiento y Cultura Jurídica*, Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Segunda Época, Año 3º, núm. 5, enero-junio 2009.

VILLORRIO TORANZO, Miguel, *Deontología Jurídica. Textos Universitarios*, México, D. F., Universidad Iberoamericana, Departamento de Derecho, 1987.

Wikipedia, <[http://es.wikipedia.org/wiki/De\\_oficio](http://es.wikipedia.org/wiki/De_oficio)>, página visitada el 16 de enero de 2013.

ZANNONI, Eduardo A., *Derecho Civil. Derecho de Familia 2*, 3ª ed., Buenos Aires, Editorial Astrea, 1978.

ZARAGOZA HUERTA, José y Martínez Zamora, Juan Jesús, “Medios de Protección de las Garantías Individuales (Derechos Humanos). Principio Pro-homine”, *Revista letras Jurídicas*, núm. 4, marzo-septiembre de 2007.

ZARAGOZA MARTÍNEZ, Edith Mariana (coord.) *et al.*, *Ética y Derechos Humanos*, México D. F., Iure, 2006.

## **JURISPRUDENCIA.**

- [J] XXIV, Tesis Aislada, *Semanario Judicial de la Federación*, Sexta Época, Registro: 271969, Tercera Sala, Cuarta Parte, Civil, p. 260, Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 316.
- [J] 1a. CXVIII/2012 (10a.), Tesis aislada, Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, No. Registro: 2,001,003, Constitucional, Civil, junio de 2012, Libro IX, t. 1. Patria potestad. El artículo 598, fracción III, del Código Civil del Estado de Jalisco, en la parte que condiciona la pérdida de aquélla a que se demuestre que quienes la ejercen comprometieron la seguridad o moralidad del menor, es inconstitucional.
- [J] 1a./J. 10/94, Jurisprudencia, Primera Sala, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. 77, Octava Época, Registro: 206115, Penal, mayo de 1994. Apéndice 1917-1995, t. II, Materia Penal, Primera Parte, tesis 381. Violación entre cónyuges, sino de ejercicio indebido de un derecho. No configuración del delito de.
- [J] 1a./J. 10/94, Jurisprudencia, Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. XXIII, Novena Época, Registro: 176065, Penal, enero de 2006. Violación. Se integra ese delito aun cuando entre el activo y pasivo exista el vínculo matrimonial (legislación del estado de Puebla).
- [J] 1a./J. 118/2009, Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. XXXI, Novena Época, Registro: 165038, Civil, marzo de 2010. Divorcio necesario. El allanamiento del demandado releva al accionante de la carga de la prueba respecto de los hechos fundatorios de la pretensión, siempre que no se refiera a derechos de terceros o irrenunciables y no sea evidente un fraude a la ley (legislación procesal civil del estado de Jalisco).
- [J] 1a./J. 137/2009, Jurisprudencia, Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. XXXI, Novena Época, Registro: 164795, Civil, abril de 2010. Divorcio por declaración unilateral de voluntad. Ante la falta de acuerdo de las partes respecto del convenio para regular las obligaciones que persisten después de disuelto el matrimonio, el juez de lo familiar debe

decretar aquél y reservar para la vía incidental la resolución de todas las demás cuestiones (legislación del Distrito Federal vigente a partir del 4 de octubre de 2008).

- [J] 1a./J. 16/99, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IX, Novena Época, Registro: 194070, Civil, mayo de 1999. Divorcio. Incumplimiento de la obligación alimentaria. Carga de la prueba (legislación del estado de Puebla).
- [J] 1a./J. 173/2007, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Novena Época, Registro: 170094, Civil, marzo de 2008. Divorcio. Por separación de los cónyuges por tiempo determinado como única o una de las condiciones que se prevén en los códigos sustantivos civiles para que se actualice la causal correspondiente. El lapso respectivo no se obstaculiza o interrumpe con el depósito de personas, sólo la reconciliación o el avenimiento de los consortes es apto para ese efecto.
- [J] 1a./J. 18/95, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Novena Época, Registro: 200439, Civil, diciembre de 1995. Divorcio, por incumplimiento de ministrar alimentos, no requiere término para su ejercicio. (Legislación del estado de Puebla).
- [J] 1a./J. 182/2005, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Novena Época, Registro: 176168, Civil, enero de 2006. Prueba testimonial a cargo de los menores hijos en el juicio de divorcio necesario de sus padres. Su admisión y desahogo constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto.
- [J] 1a./J. 191/2005, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Novena Época, Registro: 175053, Civil, mayo de 2006. Menores de edad o incapaces. Procede la suplencia de la queja, en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente.

- [J] 1a./J. 35/99, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, Novena Época, Registro: 193178, Civil, octubre de 1999. Divorcio, juicio de. La demostración de la acción principal, no deja sin materia la ejercida en la vía reconventional (legislación del estado de Veracruz).
- [J] 1a./J. 44/2001 Jurisprudencia Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, Novena Época, Registro: 189214, Civil, agosto de 2001. Alimentos. Requisitos que deben observarse para fijar el monto de la pensión por ese concepto (legislaciones del distrito federal y del estado de Chiapas).
- [J] 1a./J. 53/2006, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, Novena Época, Registro: 174054, Civil, octubre de 2006. Pensión alimenticia provisional. No cesa con el solo dictado de la sentencia con la que culmina el juicio de alimentos, si el juez reserva para el periodo de ejecución la cuantificación definitiva (legislación del estado de Aguascalientes).
- [J] 1a./J. 69/2006, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Novena Época, Registro: 173572, Civil, enero de 2007. Divorcio necesario. Cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de violencia intrafamiliar, en la demanda deben expresarse pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.
- [J] 1a./J. 84/2001, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, Novena Época, Registro: 188349, Civil, Noviembre de 2001. Sociedad conyugal. La disolución y la orden de liquidación que de ella establezca el juzgador, oficiosamente, en la sentencia que declaró procedente la acción de divorcio, no transgreden el principio de congruencia que debe revestir toda sentencia.
- [J] 1a./J. 92/2004, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Novena Época, Registro: 179317, Civil, febrero de 2005. Divorcio Necesario. La confesión *ficta*, por sí misma, es insuficiente para tener por acreditados los hechos en que se funda la acción.
- [J] 1a./J. 98/2006, Jurisprudencia, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Novena Época, Registro: 173319, Civil, febrero de 2007.

Divorcio necesario. Cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de injurias graves, corresponde a ambos cónyuges aportar todos los elementos de convicción que permitan al juzgador examinar tanto su existencia como su gravedad.

- [J] 1ª/J.5/2012 (10ª.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación. Libro VI, Decima Época, marzo de 2012, t. I. Divorcio. Separación de los cónyuges por más de dos años, no existe aplicación retroactiva de la fracción XIX del artículo 404 del Código Civil para el estado de Jalisco cuando la separación ocurrió antes de la entrada en vigor de dicho precepto, es continua y se cumple el plazo previsto.
- [J] 3a./J. 7/94, Jurisprudencia, Tercera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206634, Civil, marzo de 1994. Patria potestad. Pérdida de la misma en caso de incumplimiento al deber de alimentos.
- [J] CXXXVI, Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Sexta Época, Registro: 269144, Civil. Divorcio, actos inmorales como causal de. Prueba.
- [J] I.13o.C.42 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165561, Civil, enero de 2010. Divorcio sin causa. Es potestativo para cualquiera de las partes sujetarse al mismo en procedimientos jurisdiccionales iniciados con anterioridad a su vigencia; empero, cuando se hubiese demandado conjuntamente la pérdida de la patria potestad en la vía ordinaria, debe decretarse la disolución del vínculo matrimonial incausado y continuar el procedimiento por lo que respecta a la pérdida de la patria potestad.
- [J] I.2o.C.45 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 164796, Civil, abril de 2010. Divorcio incausado, competencia por razón de territorio.
- [J] I.3o.C. J/33, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Novena Época, Registro: 181056, Civil, julio de 2004. Prueba pericial, valoración de la. Sistemas.

- [J] I.3o.C.536 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Novena Época, Registro: 175689, Civil, marzo de 2006. Alimentos provisionales. Constituye una protección urgente otorgada por el legislador, a los integrantes de la familia, respecto de la cual no procede la restitución de los pagos hechos por este concepto pues no se está ante un enriquecimiento ilegal.
- [J] I.3o.C.643 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, Novena Época, Registro: 171032, Civil, octubre de 2007. Sevicia, amenazas o injurias graves como causa de divorcio. Se acredita con prueba de presunciones.
- [J] I.4o.C.198 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165567, Civil, enero de 2010. Divorcio exprés. Ante la falta de contestación a la demanda, el juez debe celebrar la audiencia de conciliación, y dependiendo de su resultado dictar la sentencia que corresponda.
- [J] I.4o.C.206 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165562, Civil, enero de 2010. Divorcio exprés. Su regulación no es discriminatoria para las partes.
- [J] I.4o.C.207 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165564, Civil, enero de 2010. Divorcio exprés. La voluntad de uno solo de los cónyuges es suficiente para ejercer la pretensión.
- [J] I.4o.C.259 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165565, Civil, enero de 2010. Divorcio exprés. La resolución que lo decreta en la fase de depuración del procedimiento, es materialmente una sentencia definitiva y no una interlocutoria.
- [J] I.4o.C.260 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165275, Civil, febrero de 2010. Divorcio exprés. Interpretación de su normatividad para que resulte constitucional.

- [J] I.4o.C.260 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165275, Civil, febrero de 2010. Divorcio exprés. Interpretación de su normatividad para que resulte constitucional.
- [J] I.4o.C.271 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Novena Época, Registro: 163823, Civil, septiembre de 2010. Divorcio exprés. La propuesta de convenio debe comprender los alimentos de los hijos mayores de edad con derecho.
- [J] I.4o.C.272 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Novena Época, Registro: 163822, Civil, septiembre de 2010. Divorcio exprés. Obligación de exhibir la propuesta de convenio cuando ambos cónyuges presenten la demanda.
- [J] I.4o.C.318 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII, Novena Época, Registro: 162867, Civil, febrero de 2011. Divorcio exprés. Demanda presentada por ambos cónyuges. La ilegalidad de alguno de los puntos de la propuesta de convenio no es causa de desechamiento.
- [J] I.5o.C.53 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IV, Novena Época, Registro: 200915, Civil, noviembre de 1996. Divorcio, causales de. El acreditamiento de una de ellas no es óbice para analizar las demás que se hacen valer.
- [J] I.6o.C. J/47, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Novena Época, Registro: 179681, Civil, enero de 2005. Alimentos. Obligación del juzgador de proveer de oficio respecto de ellos, al dictar sentencia en cualquier instancia, aun cuando no se hubiesen solicitado en vía de excepción o reconvención.
- [J] I.6o.C.25 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Novena Época, Registro: 203757, Civil, noviembre de 1995, p. 519. Custodia de menores. Quien por mutuo consentimiento de las partes, elevado a la categoría de cosa juzgada tenga la, para cambiar del domicilio previamente establecido a otro distinto, ya sea



dentro del país o fuera de éste, debe solicitarlo a través de un juicio autónomo y no por la vía incidental.

- [J] I.7o.C.135 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXX, Novena Época, Registro: 166173, Civil, octubre de 2009. Divorcio incausado. Sólo las resoluciones que en vía incidental decidan respecto del o los convenios presentados por las partes son recurribles.
- [J] II. 2o. C. T. 9 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Octava Época, Registro: 209724, Civil, diciembre de 1994. Divorcio necesario. Por maltrato físico o mental a los hijos, elementos de la acción de (legislación del Estado de México).
- [J] II. 2o. C. T. 9 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Octava Época, diciembre de 1994. Divorcio necesario. Por maltrato físico o mental a los hijos, elementos de la acción de (legislación del Estado de México).
- [J] II.1o.C.153 C, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VII, Novena Época, enero de 1998. Divorcio. La hipótesis prevista en el artículo 253, fracción XVI, del código civil del estado de México, requiere que no exista sanción para la conducta delictuosa atribuida al consorte demandado.
- [J] II.1o.C.T.50 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Novena Época, Registro: 202074, Civil, junio de 1996. Divorcio, separación del domicilio conyugal como causal de. Es causa justificada, estar recluido en un centro de readaptación social.
- [J] II.2o.C. J/30, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII, Novena Época, Registro: 162402, Civil, abril de 2011, p. 1085. Convivencia, régimen de. Principios jurídicos que deben tenerse en cuenta para su correcto desarrollo entre menores y sus progenitores, cuando éstos se encuentran separados o divorciados.

- [J] II.2o.C.312 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, Registro: 188238, Civil, diciembre de 2001. Divorcio, adulterio como causal de. Para acreditarla resulta procedente la prueba indirecta.
- [J] II.3o.C.28 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIII, Novena Época, Registro: 189967, Civil, abril de 2001. Divorcio. Separación por más de dos años como causal. Es procedente si se demuestra que el mandato judicial que autorizaba la separación de los cónyuges, perdió sus efectos en atención a la declaratoria de caducidad (legislación del Estado de México).
- [J] II.3o.C.62 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Novena Época, Registro: 178644, Civil, abril de 2005. Régimen de visita y convivencia con los padres. El Juez debe resolver ese tema aunque las partes no lo hayan planteado, atendiendo al interés superior del niño.
- [J] II.4o.C.49 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXX, Novena Época, Registro: 166522, Civil, septiembre de 2009. Adulterio como causal de divorcio. Para su actualización no se requiere reunir los requisitos o condiciones que establece el Código Penal (Legislación del estado de México).
- [J] III.1o.A.56 A, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Novena Época, junio de 1998, p. 637. Derechos agrarios. Caso en el que los cónyuges o concubinos de ejidatarios tienen capacidad legal para heredarlos.
- [J] III.1o.C. J/32, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVI, Novena Época, Registro: 186288, Civil, agosto de 2002. Divorcio, valor probatorio del informe rendido en un juicio de, por el departamento de trabajo social del supremo tribunal de justicia del estado de Jalisco.
- [J] III.1o.C.100 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XI, Novena Época, Registro: 192537,

Civil, enero de 2000. Divorcio. Negativa injustificada a suministrar alimentos (legislación del estado de Jalisco).

- [J] III.1o.C.14 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Novena Época, mayo de 1996. Documentales. Valor y alcance probatorio de las.
- [J] III.2o.C. J/26, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Novena Época, Registro: 169803, Civil, abril de 2008. Revisión de oficio de las sentencias de divorcio necesario. Sus limitantes (legislación del estado de Jalisco).
- [J] III.2o.C.152 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Novena Época, Registro: 168393, Civil, diciembre de 2008. Alimentos. Cuando el juzgador no cuente con dato alguno para poder fijar una suma determinada por tal concepto, está obligado a recabar datos estadísticos referidos a la canasta básica, del Sistema Nacional De Información Estadística y Geográfica, a que alude el artículo 26, apartado B, primer párrafo, de la Constitución Federal.
- [J] III.5o.C.107 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Novena Época, Registro: 173450, Civil, enero de 2007. Separación de personas como acto prejudicial. Es una medida no prevista para los concubinos (Legislación del estado de Jalisco).
- [J] III.5o.C.111 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Novena Época, Registro: 173315, Civil, febrero de 2007. Divorcio. Se cataloga como fraude a la ley que los consortes promuevan un juicio contencioso de esa naturaleza y luego decidan de motu proprio que concluya como voluntario (legislación del estado de Jalisco).
- [J] Informe 1956, Tesis Aislada, Tercera Sala, Informes, Civil. Alimentos. El cónyuge que obtiene el divorcio fundado en la causal de enajenación mental incurable de su esposa tiene obligación de ministrarle.

- [J] IV, Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro: 272930, Cuarta Parte, Civil. Alimentos provisionales. El procedimiento para obtenerlos no es anticonstitucional (legislaciones de Chiapas y de Jalisco).
- [J] IV.1o.C.50 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Novena Época, Civil, Registro: 176995, Octubre de 2005. Igualdad jurídica entre el varón y la mujer. El artículo 167, párrafo primero, del código de procedimientos civiles del estado de nuevo león (vigente hasta el veintiocho de abril de dos mil cuatro), viola esa garantía constitucional.
- [J] IX, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro: 220141, Civil, Marzo de 1992. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de cómputo del término para la caducidad de la acción. (Legislación del estado de Tlaxcala).
- [J] IX.1o.17 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, junio de 1997. Alimentos, pagos esporádicos realizados por concepto de. No acreditan el cumplimiento de la obligación alimenticia (legislación del estado de San Luis Potosí).
- [J] Jurisprudencia, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 42, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 242050, Civil. Apéndice 1917-1985, Novena Parte, tesis 201. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de.
- [J] Jurisprudencia, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 97-102, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241210, Civil. Sexta Época, vol. XXXIV, Cuarta Parte. Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 3. Apéndice 1917-1985, Novena Parte, tesis 204. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de. Necesidad de acreditar la fecha de separación.
- [J] Jurisprudencia, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 90, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241260, Civil. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de.

- [J] Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil el Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación. 181-186, Sexta Parte, Séptima Época. Divorcio, delito infamante como causal de (fracción XIV del artículo 267 del Código Civil) no se configura sumando penas menores.
- [J] Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Octava Época, julio de 1994. Divorcio incompatibilidad de caracteres como causal de.
- [J] Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación. I, Segunda Parte-1, Octava Época, enero a junio de 1988. Divorcio, embriaguez como causal de. Además de su habitualidad, debe justificarse que amenaza la ruina de la familia.
- [J] Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. VI, Segunda Parte-2, Octava Época, julio a diciembre de 1990. Divorcio, hábito de la embriaguez como causal de, deben expresarse las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la conducta.
- [J] Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XII, Octava Época, julio de 1993. Divorcio, acusación calumniosa como causal de.
- [J] Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, marzo de 1992. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de, cómputo del término para la caducidad de la acción (legislación del estado de Tlaxcala).
- [J] Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. 49, Cuarta Parte. Divorcio, actos inmorales ejecutados por el marido con el fin de corromper a los hijos, como causal de. (Legislación del estado de San Luis Potosí).
- [J] Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Cuarta Parte, Sexta Época. Divorcio, hábito de juego como causal de. (Legislación de Nuevo León).
- [J] Tesis Aislada, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación. CXI, Quinta Época, Registro: 298113, Penal. Allanamiento de morada (cónyuges).

- [J] Tesis Aislada, Segunda Parte-2, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. III, Octava Época, Registro: 229642, Civil, enero a junio de 1989. Terminación de los juicios civiles.
- [J] Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIV, Octava Época, julio de 1994. Injurias, malos tratos y amenazas, testimonial para demostrar la causal de divorcio de.
- [J] Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Parte. XI, Tercera Sala, Sexta Época, Civil, Registro: 272647. Divorcio. Causal fundada en el artículo 268 del Código Civil (Legislación de Coahuila).
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 9, Cuarta Parte, Séptima Época. Divorcio, calumnia como causal de. Influencia del auto de libertad por falta de méritos.
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 85, Cuarta Parte, Séptima Época. Divorcio, delito cometido por uno de los cónyuges como causal de, prevista en la fracción XIV del artículo 323 del Código Civil. (Legislación del estado de Guanajuato).
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 91-96, Séptima Época, Registro: 241221, Civil, Cuarta Parte. Genealogía: Informe 1976, Segunda Parte, Tercera Parte, tesis 44. Divorcio, adulterio como causal de. La caducidad de la acción transcurre a partir de la fecha del conocimiento de la causal, independientemente del proceso penal a que también pudiera dar lugar.
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. CXXIV, Quinta Época, Civil, Registro: 340151. Hijos adulterinos. Efectos del registro del nombre de los padres (adulterio como causal de divorcio).
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 4, Cuarta Parte, Séptima Época, Civil, Registro: 242487. Divorcio, causales de. Hijos concebidos antes de celebrarse el matrimonio (Legislaciones de los estados de Baja California y Morelos).

- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 67, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241649, Civil. Divorcio, corrupción de los hijos como causal de.
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. XXX, Quinta Época, Registro: 364224, Civil. Enajenación mental.
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. CXXIX, Quinta Época, Registro: 339233, Civil. Informe 1956, Tercera Sala. Divorcio, enajenación mental como causal de. Prescripción de la acción (Legislación del estado de Nuevo León).
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. XXXVI, Quinta Época, Registro: 362464, Civil. Enajenación mental, prueba de la.
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LXXII, Sexta Época, Registro: 270479, Civil. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de (Legislación del estado de Veracruz).
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 34, Cuarta Parte Séptima Época. Divorcio. Abandono del domicilio conyugal cuando los cónyuges viven en calidad de arrimados.
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 47, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241967, Civil. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de. La acción corresponde al cónyuge abandonado (legislación del estado de Chiapas).
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 109-114, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241006, Civil. Informe 1978, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 71. Divorcio, sevicia, amenazas e injurias graves, como causales de. El término para el ejercicio de la acción empieza a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos (legislación del estado de Veracruz).
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 103-108, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241080, Civil. Informe 1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 85. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de (legislación del estado de Campeche).

- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. XXXVII, Cuarta Parte, Sexta Época. Divorcio, calumnia como causal de.
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 121-126, Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 240900., Civil. Informe 1979, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 28. Divorcio, delitos como causales de, previstas en las fracciones XIV y XVI del artículo 425 del Código Civil del estado de Sonora.
- [J] Tesis Aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 97-102 Cuarta Parte, Séptima Época, Registro: 241172, Civil. Divorcio. Fecha en que principian los términos de ejercicio y caducidad de la acción, cuando se promovió amparo, en el caso del artículo 268 del Código Civil para el Distrito Federal.
- [J] Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, febrero de 1992. Divorcio, injuria grave como causal de. Debe analizarse si las frases proferidas ofenden o son de uso normal, tomando en cuenta el grado de educación.
- [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, Registro: 220141.n, Civil, marzo de 1992. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de, cómputo del término para la caducidad de la acción. (Legislación del estado de Tlaxcala).
- [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. VI, Octava Época, Registro: 225211, Civil, julio a diciembre de 1990, 2ª parte-2. Prueba testimonial. Los parientes, amigos o domésticos son aptos en juicios de divorcio.
- [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XII, Octava Época, Registro: 215414, Civil, agosto de 1993. Divorcio, adulterio como causal de. No es prueba suficiente la relativa a que el cónyuge demandado haya sido visto en compañía de otra persona que no es su consorte.
- [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XI, Octava Época, Registro: 216632, Civil, abril de 1993.



Divorcio, adulterio como causal de. Las pruebas indirectas para acreditarlo deben satisfacer los requisitos legales.

- [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, Registro: 220135, Civil, marzo de 1992. Divorcio. Abandono del hogar conyugal, cuando ha transcurrido en exceso el término que la ley señala para que opere este, no se requiere precisar la fecha de separación.
- [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. VII, Octava Época, Registro: 223849, Civil, enero de 1991. Divorcio, la separación del hogar conyugal como causal de, no caduca a los seis meses. (Legislación del estado de Chiapas).
- [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. III, Segunda Parte-1, Octava Época, Registro: 228338, Civil, enero - junio de 1989. Divorcio, incompatibilidad de caracteres como causal de (legislación del estado de Tlaxcala).
- [J] Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. 145-150, Sexta Parte, Séptima Época, Registro: 250842, Civil. Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 16. Divorcio, hábito de la embriaguez como causal de.
- [J] Tesis aislada. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IV, Segunda Parte-2, Octava Época, Registro: 227727, Civil, julio a diciembre de 1989. Divorcio, abandono del domicilio conyugal como causal de. Separación de común acuerdo.
- [J] Tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 4ª parte, t. CXXIII. Divorcio, adulterio como causal de, fundada en la bigamia.
- [J] Tesis publicada en el Libro VII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de 2012, t. 2. Principio *pro homine*. Su conceptualización y fundamentos.
- [J] Tesis: II.2o.C.113 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VIII, Novena Época, Registro: 195659,

Civil, agosto de 1998. Divorcio. La incapacidad física para la procreación por parte de la mujer no es causal de disolución del matrimonio (Legislación del Estado de México).

- [J] Tesis: II.3o. J/7, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, Registro: 220013, Civil, marzo de 1992. Gaceta núm. 51, marzo de 1992. Divorcio. Injurias graves como causal de. Concepto.
- [J] Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación. VII, Octava Época, enero de 1991. Divorcio, hábito de embriaguez como causal de.
- [J] Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XIII, Octava Época. Instancia, marzo de 1994, p. 324. Causal de divorcio prevista en la fracción XIII del artículo 263 del Código Civil. Debe ejercerse dentro de los seis meses siguientes a partir de la fecha en que tuvo conocimiento el afectado de los hechos de la acusación, so pena de que caduque la acción en su perjuicio. (Legislación del estado de Chiapas).
- [J] V, Segunda Parte-1, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, enero a junio de 1990. Divorcio necesario. Las causales que le dan origen son autónomas e independientes.
- [J] V.1o. J/29, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 81, Octava Época, Registro: 210330, Laboral, septiembre de 1994. Obscuridad, excepción de. Procedencia.
- [J] VI, Segunda Parte-1, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, julio a diciembre de 1990. Divorcio, allanamiento al, debe ratificarse para que produzca efectos de confesión.
- [J] VI.1o.140 C, Semanario Judicial de la Federación, XV-II, Civil, Febrero de 1995. Domicilio conyugal. En las diligencias relativas a la separación de un cónyuge, como medida preparatoria de juicio, no debe tener el otro intervención.

- [J] VI.1o.C.90 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Novena Época, Registro: 174475, Civil, agosto de 2006. Divorcio voluntario. Es indispensable que la comparecencia del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, se acredite fehacientemente para estar en condiciones de concluir que el convenio respectivo ha sido analizado por él, si estuvo o no de acuerdo con lo propuesto por las partes y en particular con lo determinado en torno a los intereses de los menores involucrados (Legislación del estado de Puebla).
- [J] VI.2o. J/183, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. IX, Octava Época, Registro: 220014, Civil, marzo de 1992. Divorcio. Las causales deben probarse plenamente.
- [J] VI.2o. J/206, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 55, Octava Época, Registro: 218873, Civil, julio de 1992. Divorcio. Alimentos. Negativa injustificada a proporcionarlos como causal de. (Legislación de Puebla).
- [J] VI.2o. J/222, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 59, Octava Época, Registro: 217856, Civil, noviembre de 1992. Nulidad. No existe de pleno derecho.
- [J] VI.2o. J/226, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro: 217859, Civil, Noviembre de 1992. Divorcio. Injurias, amenazas y malos tratos. Caducidad.
- [J] VI.2o. J/226, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 59, Octava Época, Registro: 217859, Civil, noviembre de 1992. Divorcio. Injurias, amenazas y malos tratos. Caducidad.
- [J] VI.2o. J/227, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 59, Octava Época, Registro: 217861, Civil, noviembre de 1992, p. 70. Divorcio, sevicia e injurias graves como causal de. Deben expresarse en la demanda los hechos en qué consisten y el lugar, tiempo y modo en que acontecieron.

- [J] VI.2o.C. J/218, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Novena Época, Registro: 187909, Civil, enero de 2002. Sentencia incongruente. Es aquella que introduce cuestiones ajenas a la litis planteada o a los agravios expresados en la apelación.
- [J] VI.2o.C. J/325 (9a.), Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 160962, Civil, octubre de 2011, Libro I, t. 3. Alimentos. Prestaciones que deben considerarse para fijar la pensión.
- [J] VI.2o.C.493 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, Novena Época, Registro: 174736, Civil, julio de 2006. Divorcio necesario. Cuando se sustenta en la perversión de alguno de los cónyuges, no se requiere que antes de que se enjuicie civilmente a quien se le imputa tal conducta, exista sentencia condenatoria en el proceso penal que pudiera incoarse en su contra (Legislación del estado de Puebla).
- [J] VI.3o.C. J/32, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 192661, Civil, Diciembre de 1999. Alimentos, carga de la prueba (Legislación del estado de Puebla).
- [J] VII.1o.C.85 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Novena Época, Registro: 168933, Civil, septiembre de 2008. Divorcio necesario por separación de los cónyuges. Si ésta se debió a cuestiones de trabajo, pero el quejoso continuó contribuyendo al sostenimiento del hogar (familia), a pesar de vivir en distinta ciudad del domicilio conyugal, queda desvirtuada dicha separación para efectos de aquél (inaplicación de la jurisprudencia 1a./j. 173/2007).
- [J] VII.3o.C.45 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Novena Época, Registro: 180896, Civil, agosto de 2004. Divorcio necesario basado en la separación de los cónyuges por más de dos años. Caso en que debe acreditarse la fecha exacta de separación (legislación del estado de Veracruz).

- [J] XI. 1o.T.Aux.18 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII, Novena Época, Registro: 162865, Civil, febrero de 2011. Divorcio. Para que proceda la acción por violencia familiar, es innecesaria la existencia previa de una sentencia condenatoria penal donde se considere culpable al demandado en el juicio civil (legislación del estado de Michoacán).
- [J] XIII.2o.9 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Novena Época, Registro: 179949, Civil, diciembre de 2004. Convivencia familiar pactada por convenio judicial elevado a la categoría de cosa juzgada. No debe impedirse *motu proprio*.
- [J] XIV.C.A.32 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Novena Época, Registro: 165039, Civil, marzo de 2010. Divorcio. Clasificación de las causas que lo originan, en relación con el derecho a recibir alimentos (legislación del estado de Yucatán).
- [J] XIX.2o.A.C. J/19, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Novena Época, Registro: 170236, Civil, febrero de 2008. Pensión alimenticia. La facultad del juzgador para allegarse de pruebas, tratándose de menores de edad o incapaces, es de ejercicio obligatorio si no se cuenta con las suficientes para fijar la definitiva (legislación del estado de Tamaulipas).
- [J] XLVIII/92, Tesis Aislada, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Registro: 206827, Tercera Sala, Civil, Mayo de 1992. Competencia en un juicio de divorcio y alimentos. Corresponde al juez de la residencia del acreedor alimentario.
- [J] XV, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 151-156 Sexta Parte, Séptima Época, Registro: 250557, Civil. Genealogía: Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito. Divorcio, adulterio como causal de caducidad de la acción.
- [J] XV.2o.29 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Novena Época, Registro: 163363, Civil,

diciembre de 2010. Dictamen toxicológico. Es inconducente para demostrar la causal de divorcio prevista en la fracción XV del artículo 264 del Código Civil para el estado de Baja California.

- [J] XVI.5o.6 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, Novena Época, Registro: 185187, Civil, enero de 2003. Divorcio, separación de los cónyuges por más de dos años como causal de. No es requisito indispensable acreditar el ánimo en la separación (legislación del estado de Guanajuato).
- [J] XVII.1o.17 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Novena Época, noviembre de 2000, p. 875. Legitimación en la causa. Corresponde determinarla al juzgador con base en el material probatorio aportado en el juicio y no en las declaraciones unilaterales de las partes.
- [J] XVII.1o.3 C, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, septiembre de 1994, t. XIV. Allanamiento y contestación a la demanda en juicio de divorcio. Debe prevalecer esta.
- [J] XX. J/10, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Novena Época, Registro: 203910, Civil, noviembre de 1995. Divorcio. Acusación calumniosa como causal de, para que opere se necesita acreditar en el juicio que la denuncia se hizo a sabiendas de que era inoperante y con el único propósito de dañar al cónyuge en su reputación. (Legislación del estado de Chiapas).
- [J] XX.429 C, Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XV-I, Octava Época, Registro: 209164, Civil, febrero de 1995. Sevicia como causal de divorcio. No es de tracto sucesivo la.
- [J] XX.430 C, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación. XV-I, Octava Época, febrero de 1995. Embriaguez como causal de divorcio. Es necesario el diagnostico y reconocimiento de un médico especializado para acreditar la.

**ANEXOS.**

**Anexo 1.- Divorcios registrados según tipo de trámite, 1990 a 2011.**

<b>Año</b>	<b>Total</b>	<b>Administrativo</b>	<b>Judicial</b>
<b>1990</b>	46 481	6 982	39 499
<b>1991</b>	50 001	7 900	42 101
<b>1992</b>	51 953	7 757	44 196
<b>1993</b>	32 483	6 790	25 693
<b>1994</b>	35 029	6 733	28 296
<b>1995</b>	37 455	6 898	30 557
<b>1996</b>	38 545	6 212	32 333
<b>1997</b>	40 792	6 591	34 201
<b>1998</b>	45 889	7 157	38 732
<b>1999</b>	49 271	7 484	41 787
<b>2000</b>	52 358	8 307	44 051
<b>2001</b>	57 370	9 431	47 939
<b>2002</b>	60 641	10 290	50 351
<b>2003</b>	64 248	11 395	52 853
<b>2004</b>	67 575	11 686	55 889
<b>2005</b>	70 184	11 850	58 334
<b>2006</b>	72 396	12 163	60 233
<b>2007</b>	77 255	11 914	65 341
<b>2008</b>	81 851	12 873	68 978
<b>2009</b>	84 302	12 613	71 689
<b>2010</b>	86 042	12 089	73 953
<b>2011</b>	91 285	13 199	78 086

**Nota:** Las cifras se refieren a los divorcios por entidad federativa de registro. A partir de 1993 se modificó el procedimiento de captación de la estadística, en virtud de que se detectó que los divorcios judiciales eran, en ocasiones, reportados tanto por los juzgados como por las Oficialías del Registro Civil.

**Fuente:** INEGI. *Estadísticas de Nupcialidad*.

**Nota:** Puede observarse en el cuadro anterior, el índice de crecimiento del divorcio en los últimos años en nuestro país, lo que denota un cambio en la mentalidad de las personas respecto del divorcio.



## Anexo 2.- Población por sexo y estado conyugal, 1950 a 2010.

<b>Sexo Estado conyugal</b>	<b>1950</b>	<b>1960</b>	<b>1970</b>	<b>1990</b>	<b>2000</b>	<b>2010</b>
<b>Total</b>	15 057 867	22 042 801	29 697 303	55 913 847	69 235 053	84 927 468
<b>Solteros</b>	4 194 120	8 274 032	12 012 444	22 691 676	25 665 924	29 853 117
<b>Casados</b>	7 191 928	9 837 776	13 479 542	25 585 392	30 808 375	34 420 923
<b>Unidos</b>	1 795 167	1 852 184	2 427 232	4 124 512	7 103 365	12 230 680
<b>Separados</b>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	407 111	679 817	1 799 035	3 182 426
<b>Divorciados</b>	67 810	119 045	135 762	406 777	687 444	1 246 556
<b>Viudos</b>	1 109 168	1 322 979	1 235 212	2 034 337	2 992 514	3 733 357
<b>Hombres</b>	6 957 591	10 852 867	14 625 590	27 084 182	33 271 132	40 947 872
<b>Solteros</b>	2 069 432	4 435 383	6 464 267	11 754 855	13 239 762	15 460 577
<b>Casados</b>	3 524 162	4 866 796	6 590 367	12 481 960	15 170 879	17 067 461
<b>Unidos</b>	850 689	880 507	1 161 989	1 960 002	3 461 465	6 045 370
<b>Separados</b>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	103 407	162 515	468 175	970 996
<b>Divorciados</b>	19 847	38 190	44 596	110 563	209 540	433 354
<b>Viudos</b>	250 622	320 426	260 964	414 532	627 762	819 019
<b>Mujeres</b>	8 100 276	11 189 934	15 071 713	28 829 665	35 963 921	43 979 596
<b>Solteras</b>	2 124 688	3 838 649	5 548 177	10 936 821	12 426 162	14 392 540
<b>Casadas</b>	3 667 766	4 970 980	6 889 175	13 103 432	15 637 496	17 353 462
<b>Unidas</b>	944 478	971 677	1 265 243	2 164 510	3 641 900	6 185 310
<b>Separadas</b>	<u>ND</u>	<u>ND</u>	303 704	517 302	1 330 860	2 211 430
<b>Divorciadas</b>	47 963	80 855	91 166	296 214	477 904	813 202
<b>Viudas</b>	858 546	1 002 553	974 248	1 619 805	2 364 752	2 914 338

**Nota:** El total de población incluye a la que no especificó su estado conyugal; el Censo de 1970 no presenta el concepto No especificado. Para 1950 las cifras se refieren a hombres de 16 y más años y mujeres de 14 y más años; para 1960 a 2010 a hombres y mujeres de 12 y más años. Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 6 de junio (1950); 8 de junio (1960); 28 de enero (1970); 12 de marzo (1990); 14 de febrero (2000); y 12 de junio (2010).

ND No disponible.

**Fuente:** INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1950 - 1970, 1990, 2000 y 2010.

**Anexo 3.- Distribución porcentual de la población de 12 y más años según sexo y estado conyugal para cada entidad federativa, 2000 y 2010.**

Entidad federativa	Hombres				Mujeres			
	Solteros	Casados y unidos	Separados y divorciados	Viudos	Solteras	Casadas y unidas	Separadas y divorciadas	Viudas
<b>2000</b>								
<b>Estados Unidos Mexicanos</b>	39.9	56.2	2.0	1.9	34.6	53.8	5.0	6.6
<b>Aguascalientes</b>	40.3	56.6	1.5	1.6	37.8	53.1	3.6	5.5
<b>Baja California</b>	39.1	56.1	3.3	1.5	31.2	56.5	6.6	5.7
<b>Baja California Sur</b>	39.6	56.3	2.7	1.4	31.4	58.0	5.5	5.1
<b>Campeche</b>	38.5	57.2	2.4	1.9	32.0	57.2	5.3	5.5
<b>Coahuila de Zaragoza</b>	37.1	58.7	2.2	2.0	31.4	57.6	4.7	6.3
<b>Colima</b>	40.8	54.7	2.7	1.8	35.0	53.3	5.4	6.3
<b>Chiapas</b>	40.0	56.5	1.6	1.9	33.4	55.5	4.9	6.2
<b>Chihuahua</b>	37.4	57.9	2.7	2.0	30.6	57.3	5.8	6.3
<b>Distrito Federal</b>	40.8	54.1	3.2	1.9	36.3	48.5	7.5	7.7
<b>Durango</b>	39.4	56.5	1.9	2.2	33.6	54.9	4.7	6.8
<b>Guanajuato</b>	40.3	56.7	1.1	1.9	38.5	53.3	2.6	5.6
<b>Guerrero</b>	40.1	55.9	1.9	2.1	33.1	53.8	5.1	8.0
<b>Hidalgo</b>	39.7	56.5	1.5	2.3	33.6	54.2	4.8	7.4
<b>Jalisco</b>	41.8	54.5	1.8	1.9	38.4	51.5	3.7	6.4
<b>México</b>	39.6	56.9	1.9	1.6	34.5	54.3	5.3	5.9
<b>Michoacán de Ocampo</b>	40.1	56.5	1.4	2.0	36.7	53.4	3.3	6.6
<b>Morelos</b>	39.1	56.6	2.4	1.9	33.3	53.3	6.3	7.1

<b>Nayarit</b>	39.7	55.8	2.4	2.1	32.6	55.4	5.0	7.0
<b>Nuevo León</b>	38.9	57.2	2.2	1.7	33.2	56.6	4.5	5.7
<b>Oaxaca</b>	40.5	55.7	1.3	2.5	35.1	52.5	3.9	8.5
<b>Puebla</b>	40.7	55.8	1.5	2.0	35.7	52.0	4.9	7.4
<b>Querétaro</b>	42.1	55.1	1.3	1.5	38.8	52.1	3.5	5.6
<b>Quintana Roo</b>	38.6	57.6	2.7	1.1	30.8	59.8	5.8	3.6
<b>San Luis Potosí</b>	40.6	55.8	1.5	2.1	36.1	53.9	3.7	6.3
<b>Sinaloa</b>	40.5	55.4	2.4	1.7	32.2	55.6	5.7	6.5
<b>Sonora</b>	40.1	55.2	2.8	1.9	32.7	55.4	5.7	6.2
<b>Tabasco</b>	40.4	55.9	2.0	1.7	33.8	54.7	5.5	6.0
<b>Tamaulipas</b>	38.6	57.3	2.3	1.8	32.5	55.6	5.4	6.5
<b>Tlaxcala</b>	40.0	56.8	1.3	1.9	35.3	54.1	4.7	5.9
<b>Veracruz de Ignacio de la Llave</b>	39.4	56.3	2.2	2.1	32.9	53.7	5.9	7.5
<b>Yucatán</b>	39.3	56.4	2.0	2.3	34.4	55.2	4.3	6.1
<b>Zacatecas</b>	39.3	57.3	1.3	2.1	36.0	55.1	3.0	5.9
<b>2010</b>								
<b>Estados Unidos Mexicanos</b>	<b>37.9</b>	<b>56.7</b>	<b>3.4</b>	<b>2.0</b>	<b>32.8</b>	<b>53.7</b>	<b>6.9</b>	<b>6.6</b>
<b>Aguascalientes</b>	38.4	56.8	3.1	1.7	35.5	53.3	5.8	5.4
<b>Baja California</b>	38.5	54.4	5.7	1.4	31.3	54.2	8.9	5.5
<b>Baja California Sur</b>	37.2	56.3	5.0	1.4	29.7	57.8	7.6	4.9
<b>Campeche</b>	36.6	57.9	3.5	2.0	31.0	56.2	7.1	5.7
<b>Coahuila de Zaragoza</b>	35.5	58.2	4.0	2.2	30.1	56.8	6.7	6.3
<b>Colima</b>	38.5	55.1	4.6	1.8	32.5	53.7	7.5	6.3
<b>Chiapas</b>	38.8	57.0	2.2	1.9	32.5	54.6	6.8	6.1
<b>Chihuahua</b>	36.5	56.9	4.5	2.1	30.6	55.5	7.3	6.6
<b>Distrito</b>	39.7	53.0	5.1	2.2	35.8	47.0	9.4	7.8

<b>Federal</b>								
<b>Durango</b>	37.8	56.4	3.4	2.4	32.0	54.6	6.4	7.0
<b>Guanajuato</b>	37.7	58.0	2.3	2.0	35.3	54.4	4.5	5.8
<b>Guerrero</b>	38.3	56.3	3.1	2.2	31.6	53.5	6.9	7.9
<b>Hidalgo</b>	37.0	58.2	2.5	2.2	31.7	54.5	6.6	7.2
<b>Jalisco</b>	39.9	54.9	3.3	1.9	35.7	52.2	5.7	6.4
<b>México</b>	37.4	57.6	3.3	1.8	32.8	53.9	7.3	6.0
<b>Michoacán de Ocampo</b>	37.0	58.0	2.7	2.2	33.0	54.8	5.2	7.0
<b>Morelos</b>	37.3	56.6	4.1	2.0	31.5	52.6	8.7	7.1
<b>Nayarit</b>	37.1	56.9	4.0	2.1	30.3	56.2	6.7	6.9
<b>Nuevo León</b>	36.3	58.0	3.8	1.8	30.6	57.3	6.3	5.9
<b>Oaxaca</b>	38.7	56.7	2.1	2.6	33.7	52.5	5.4	8.3
<b>Puebla</b>	38.8	56.8	2.4	2.1	34.2	51.9	6.7	7.2
<b>Querétaro</b>	39.5	56.3	2.6	1.6	36.2	52.7	5.4	5.7
<b>Quintana Roo</b>	37.1	57.4	4.3	1.2	30.4	57.9	7.9	3.8
<b>San Luis Potosí</b>	38.6	56.4	2.7	2.2	34.0	53.9	5.5	6.5
<b>Sinaloa</b>	38.0	56.2	4.0	1.8	29.9	55.6	7.4	7.1
<b>Sonora</b>	38.4	54.7	5.0	1.9	30.9	54.6	8.0	6.5
<b>Tabasco</b>	37.1	57.8	3.2	1.9	30.5	55.3	7.9	6.4
<b>Tamaulipas</b>	36.3	57.9	3.9	2.0	30.2	55.9	7.2	6.7
<b>Tlaxcala</b>	37.3	58.4	2.3	1.9	33.1	54.4	6.6	5.9
<b>Veracruz de Ignacio de la Llave</b>	37.4	57.2	3.2	2.2	31.4	53.6	7.3	7.7
<b>Yucatán</b>	37.5	57.0	3.2	2.4	32.4	55.4	6.1	6.2
<b>Zacatecas</b>	36.0	59.4	2.3	2.3	32.3	56.9	4.6	6.2

**Nota:** En las distribuciones se excluyó el *No especificado* del estado conyugal. Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 14 de febrero (2000) y 12 de junio (2010).

**Fuente:** INEGI. *Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010*

**Anexo 4.- Distribución porcentual de divorcios judiciales según persona que lo solicita para cada causa de divorcio, 2009, 2010 y 2011.**

<b>Causas de divorcio</b>	<b>Total</b>	<b>Hombre</b>	<b>Mujer</b>	<b>Ambos</b>
<b>2009</b>				
<b>Total</b>	71 689	13.7	19.6	66.8
<b>Mutuo consentimiento</b>	45 889	NA	NA	100.0
<b>Separación del hogar conyugal <sup>a</sup></b>	13 854	44.8	55.2	0.0
<b>Abandono de hogar por más de 3 o 6 meses, sin causa justificada</b>	5 546	28.7	43.5	27.8
<b>Sevicia, amenazas o injurias o la violencia intrafamiliar</b>	3 357	41.5	58.5	0.0
<b>Negativa a contribuir voluntariamente o por sentencia del juez familiar al sostenimiento del hogar</b>	767	19.0	81.0	0.0
<b>Adulterio o infidelidad sexual</b>	737	7.3	92.7	0.0
<b>Incompatibilidad de caracteres</b>	465	32.1	28.7	39.2
<b>Las demás causas <sup>b</sup></b>	1 074	33.0	67.0	0.0
<b>2010</b>				
<b>Total</b>	73 953	14.5	20.3	65.2
<b>Mutuo consentimiento</b>	46 377	NA	NA	100.0
<b>Separación del hogar conyugal <sup>a</sup></b>	13 562	45.9	54.1	0.0
<b>Voluntario unilateral</b>	8 147	31.2	48.9	19.9
<b>Abandono de hogar por más de 3 o 6 meses, sin causa justificada</b>	2 969	41.9	58.1	0.0
<b>Sevicia, amenazas o injurias o la violencia intrafamiliar</b>	762	21.1	78.9	0.0
<b>Negativa a contribuir voluntariamente o por sentencia del juez familiar al sostenimiento del hogar</b>	687	9.4	90.6	0.0
<b>Incompatibilidad de caracteres</b>	527	45.5	54.5	0.0

<b>Las demás causas <sup>b</sup></b>	922	35.1	58.7	6.2
<b>2011</b>				
<b>Total</b>	78 086	14.4	19.6	66.1
<b>Mutuo consentimiento</b>	49 545	NA	NA	100.0
<b>Separación del hogar conyugal <sup>a</sup></b>	14 832	46.6	53.4	0.0
<b>Voluntario unilateral</b>	8 324	31.2	48.3	20.6
<b>Abandono de hogar por más de 3 o 6 meses, sin causa justificada</b>	2 576	41.4	58.6	0.0
<b>Sevicia, amenazas o injurias o la violencia intrafamiliar</b>	681	23.7	76.3	0.0
<b>Negativa a contribuir voluntariamente o por sentencia del juez familiar al sostenimiento del hogar</b>	657	9.8	90.2	0.0
<b>Adulterio o infidelidad sexual</b>	515	42.9	57.1	0.0
<b>Las demás causas <sup>b</sup></b>	956	33.3	58.5	8.2

**Nota:** Se refiere a las principales causas para cada año. Para el cálculo excluye el *No especificado* según persona que lo solicita.

**<sup>a</sup>** Comprende: Separación por 2 años o más independientemente del motivo y separación del hogar conyugal por más de 1 año, por causa justificada

**<sup>b</sup>** Comprende: acusación calumniosa; alumbramiento ilegítimo; bigamia; cometer acto delictivo contra el cónyuge; corrupción y/o maltrato a los hijos; declaración de ausencia o presunción de muerte; enajenación mental incurable o el estado de interdicción declarado por sentencia; enfermedad crónica o incurable y la impotencia incurable; haber cometido delito doloso o infamante; hábitos de juego, embriaguez o drogas; incitación a la violencia; propuesta de prostitución; si un cónyuge solicitó el divorcio por causa injustificada, el demandado puede divorciarse 3 meses después de la última sentencia; y la no especificada. Para 2009 adulterio o infidelidad sexual y

fecundación asistida sin consentimiento del cónyuge. Para 2010 y 2011, incompatibilidad de caracteres.

**NA:** No aplicable

**Fuente:** INEGI. Estadísticas de nupcialidad.



**Anexo 5.- Distribución porcentual de divorcios judiciales según persona a favor de quien se resuelve para cada causa de divorcio, 2009, 2010 y 2011.**

<b>Causas de divorcio</b>	<b>Total</b>	<b>Hombre</b>	<b>Mujer</b>	<b>Ambos</b>
<b>2009</b>				
<b>Total</b>	71 689	12.4	18.2	69.4
<b>Mutuo consentimiento</b>	45 889	NA	NA	100.0
<b>Separación del hogar conyugal <sup>a</sup></b>	13 854	44.4	55.6	0.0
<b>Abandono de hogar por más de 3 o 6 meses, sin causa justificada</b>	5 546	14.9	24.9	60.1
<b>Sevicia, amenazas o injurias o la violencia intrafamiliar</b>	3 357	41.1	58.9	0.0
<b>Negativa a contribuir voluntariamente o por sentencia del juez familiar al sostenimiento del hogar</b>	767	18.1	81.9	0.0
<b>Adulterio o infidelidad sexual</b>	737	6.3	93.7	0.0
<b>Incompatibilidad de caracteres</b>	465	20.5	19.4	60.1
<b>Las demás causas <sup>b</sup></b>	1 074	31.7	68.3	0.0
<b>2010</b>				
<b>Total</b>	73 953	12.5	17.8	69.7
<b>Mutuo consentimiento</b>	46 377	NA	NA	100.0
<b>Separación del hogar conyugal <sup>a</sup></b>	13 562	45.3	54.7	0.0
<b>Voluntario unilateral</b>	8 147	15.0	25.4	59.6
<b>Abandono de hogar por más de 3 o 6 meses, sin causa justificada</b>	2 969	41.8	58.2	0.0
<b>Sevicia, amenazas o injurias o la violencia intrafamiliar</b>	762	20.6	79.4	0.0
<b>Negativa a contribuir voluntariamente o por sentencia del juez familiar al</b>	687	7.3	92.7	0.0

<b>sostenimiento del hogar</b>				
<b>Incompatibilidad de caracteres</b>	527	43.0	57.0	0.0
<b>Las demás causas <sup>b</sup></b>	922	30.8	54.4	14.7
<b>2011</b>				
<b>Total</b>	78 086	12.3	16.9	70.8
<b>Mutuo consentimiento</b>	49 545	NA	NA	100.0
<b>Separación del hogar conyugal <sup>a</sup></b>	14 832	46.2	53.8	0.0
<b>Voluntario unilateral</b>	8 324	13.3	22.7	64.0
<b>Abandono de hogar por más de 3 o 6 meses, sin causa justificada</b>	2 576	40.4	59.6	0.0
<b>Sevicia, amenazas o injurias o la violencia intrafamiliar</b>	681	22.2	77.8	0.0
<b>Negativa a contribuir voluntariamente o por sentencia del juez familiar al sostenimiento del hogar</b>	657	8.4	91.6	0.0
<b>Adulterio o infidelidad sexual</b>	515	41.4	58.6	0.0
<b>Las demás causas <sup>b</sup></b>	956	28.7	52.8	18.5

**Nota:** Se refiere a las principales causas para cada año. Para el cálculo excluye el No especificado según persona a favor de quien se resuelve .

**a** Comprende: Separación por 2 años o más independientemente del motivo y separación del hogar conyugal por más de 1 año, por causa justificada.

**b** Comprende: acusación calumniosa; alumbramiento ilegítimo; bigamia; cometer acto delictivo contra el cónyuge; corrupción y/o maltrato a los hijos; declaración de ausencia o presunción de muerte; enajenación mental incurable o el estado de interdicción declarado por sentencia; enfermedad crónica o incurable y la impotencia incurable; haber cometido delito doloso o infamante; hábitos de juego, embriaguez o drogas; incitación a la violencia; propuesta de prostitución; si un cónyuge solicitó el divorcio por causa

injustificada, el demandado puede divorciarse 3 meses después de la última sentencia; y la no especificada. Para 2009 adulterio o infidelidad sexual y fecundación asistida sin consentimiento del cónyuge. Para 2010 y 2011, incompatibilidad de caracteres.

**NA:** No aplicable.

**Fuente:** INEGI. Estadísticas de Nupcialidad.

**Fecha de actualización:** Miércoles 16 de enero de 2013.

**Anexo 6.- Divorcios registrados por entidad federativa según tipo de trámite, 2011.**

<b>Entidad federativa</b>	<b>Total</b>	<b>Administrativo</b>	<b>Judicial</b>
<b>Estados Unidos Mexicanos</b>	<b>91 285</b>	<b>13 199</b>	<b>78 086</b>
<b>Aguascalientes</b>	1 194	71	1 123
<b>Baja California</b>	3 410	241	3 169
<b>Baja California Sur</b>	712	101	611
<b>Campeche</b>	991	137	854
<b>Coahuila de Zaragoza</b>	3 392	177	3 215
<b>Colima</b>	873	31	842
<b>Chiapas</b>	1 852	516	1 336
<b>Chihuahua</b>	5 694	41	5 653
<b>Distrito Federal</b>	11 385	3 093	8 292
<b>Durango</b>	1 435	223	1 212
<b>Guanajuato</b>	4 741	0	4 741
<b>Guerrero</b>	1 319	326	993
<b>Hidalgo</b>	1 390	0	1 390
<b>Jalisco</b>	4 392	389	4 003
<b>México</b>	8 937	986	7 951
<b>Michoacán de Ocampo</b>	3 343	1 245	2 098
<b>Morelos</b>	1 322	106	1 216
<b>Nayarit</b>	942	238	704
<b>Nuevo León</b>	6 973	795	6 178
<b>Oaxaca</b>	570	0	570
<b>Puebla</b>	2 429	260	2 169
<b>Querétaro</b>	1 614	175	1 439
<b>Quintana Roo</b>	1 679	707	972
<b>San Luis Potosí</b>	1 716	0	1 716
<b>Sinaloa</b>	3 554	0	3 554
<b>Sonora</b>	2 826	0	2 826
<b>Tabasco</b>	1 700	317	1 383
<b>Tamaulipas</b>	2 114	149	1 965
<b>Tlaxcala</b>	401	94	307
<b>Veracruz de Ignacio de la Llave</b>	4 441	1 772	2 669
<b>Yucatán</b>	2 460	1 009	1 451
<b>Zacatecas</b>	1 484	0	1 484

**Nota:** Las cifras se refieren a los divorcios por entidad federativa de registro.

**Fuente:** INEGI. Estadísticas de Nupcialidad.

**Fecha de actualización:** Miércoles 16 de enero de 2013.

**Anexo 7.- Edad media al divorcio por entidad federativa de residencia habitual de los divorciantes según sexo, 2007 a 2011**

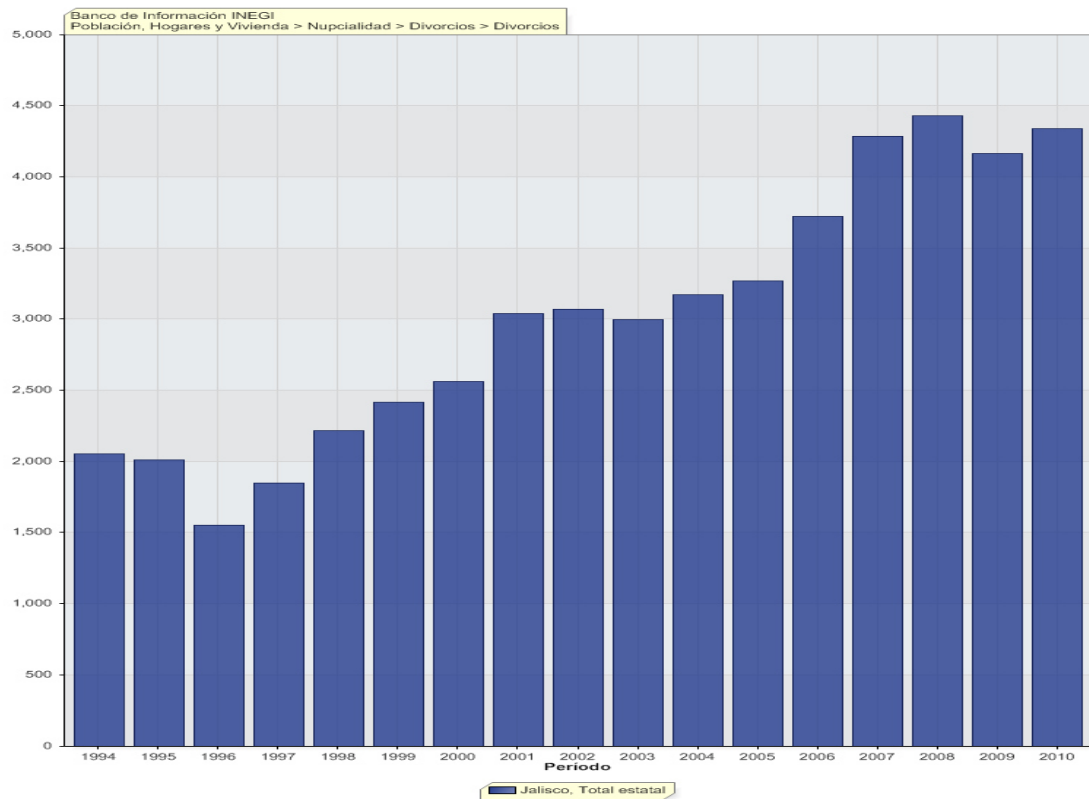
(Años)										
Entidad federativa	2007		2008		2009		2010		2011	
	Hom bres	Muj ere s	Hom bres	Muj ere s	Hom bres	Muj ere s	Hom bres	Muj ere s	Hom bres	Muj ere s
<b>Estados Unidos Mexicanos</b>	37.8	35.2	38.1	35.4	38.3	35.7	38.6	36.0	39.0	36.4
<b>Aguascalientes</b>	36.9	34.2	37.9	35.5	36.8	34.8	37.4	35.3	37.6	35.1
<b>Baja California</b>	38.3	35.8	38.7	36.1	39.1	36.4	39.2	36.5	40.0	37.3
<b>Baja California Sur</b>	36.9	33.8	37.2	34.1	37.8	35.1	38.8	35.6	38.9	35.6
<b>Campeche</b>	38.1	34.7	37.4	34.5	38.0	35.3	37.5	34.8	38.2	35.6
<b>Coahuila de Zaragoza</b>	37.0	34.5	36.9	34.5	36.9	34.6	37.0	34.7	37.3	35.0
<b>Colima</b>	38.1	35.1	38.9	35.7	39.0	35.6	38.8	35.2	38.5	35.2
<b>Chiapas</b>	36.7	33.5	37.3	33.9	37.3	33.7	37.8	34.5	37.8	34.4
<b>Chihuahua</b>	37.8	35.5	37.9	35.4	37.9	35.6	38.5	36.2	38.7	36.2
<b>Distrito Federal</b>	39.4	36.9	39.9	37.4	40.5	38.1	40.7	38.3	41.2	38.9
<b>Durango</b>	37.1	34.4	37.8	35.1	37.5	35.0	38.2	35.7	38.8	35.6
<b>Guanajuato</b>	35.6	33.3	35.9	33.6	35.8	33.6	36.2	34.0	36.7	34.3
<b>Guerrero</b>	37.8	34.5	37.2	34.3	38.1	35.0	37.3	34.4	38.2	35.1
<b>Hidalgo</b>	38.4	35.5	38.8	35.4	38.4	35.7	39.1	36.2	39.2	36.4
<b>Jalisco</b>	37.4	34.9	37.2	34.7	37.7	35.1	37.9	35.4	38.4	35.8

<b>México</b>	37.9	35.7	38.4	36.1	38.5	36.2	38.3	36.2	38.8	36.6
<b>Michoacán de Ocampo</b>	37.6	34.6	37.1	34.4	38.1	35.2	38.4	35.4	38.9	36.0
<b>Morelos</b>	39.4	36.4	40.7	37.3	39.6	36.6	40.5	37.7	40.6	37.5
<b>Nayarit</b>	39.1	35.8	37.7	34.7	38.7	35.4	38.7	35.3	39.4	36.0
<b>Nuevo León</b>	36.6	34.1	37.2	34.8	37.5	35.1	37.9	35.4	38.1	35.8
<b>Oaxaca</b>	37.6	35.1	38.8	35.4	39.3	36.1	38.5	35.3	38.7	36.3
<b>Puebla</b>	39.2	36.8	39.0	36.4	39.6	37.2	39.7	37.0	40.6	37.9
<b>Querétaro</b>	38.4	35.8	38.3	36.0	38.1	35.7	38.5	36.2	39.7	37.2
<b>Quintana Roo</b>	37.1	34.4	37.4	34.5	37.9	35.1	38.8	36.0	38.3	35.2
<b>San Luis Potosí</b>	38.3	35.9	38.9	36.6	38.7	36.3	39.4	37.1	39.6	37.2
<b>Sinaloa</b>	38.5	35.5	38.6	35.5	38.5	35.6	38.9	35.8	39.3	36.3
<b>Sonora</b>	36.5	33.8	37.0	34.2	37.5	34.8	37.7	34.8	37.9	35.3
<b>Tabasco</b>	38.3	35.1	38.6	35.1	38.9	35.2	39.0	35.5	39.2	35.8
<b>Tamaulipas</b>	37.5	34.7	38.4	35.8	38.8	36.5	38.5	36.8	38.6	36.7
<b>Tlaxcala</b>	39.0	35.0	38.0	35.3	38.7	35.4	38.8	35.6	39.4	36.2
<b>Veracruz de Ignacio de la Llave</b>	39.5	36.4	39.5	36.1	40.0	36.9	40.1	37.0	40.7	37.4
<b>Yucatán</b>	36.2	34.9	36.4	35.0	36.1	34.5	36.5	34.7	36.9	35.1
<b>Zacatecas</b>	36.9	34.0	37.0	34.2	37.1	34.5	37.6	35.0	37.9	35.3

**Fuente:** INEGI. Estadísticas de Nupcialidad.

**Fecha de actualización:** Martes 22 de enero de 2013.

## Anexo 8.- INEGI. Divorcios



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad.  
Nota: La información se presenta por lugar de registro.

**Nota:** Con este grafico puede observarse de manera clara el incremento en los procesos de divorcio en los últimos años en nuestro país.

## Anexo 9.-

<b>Juzgado Primero</b>													
Año	ACTOS PREJUDICIALES	CIVIL ORDINARIO	TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001	38	138	2	119	299	72	468	210	13	85	12	4	1460
2002	49	197	8	190	485	115	757	325	18	139	21	12	2316
2003	54	216	6	191	521	113	738	325	17	126	24	9	2340
2004	40	119	86	190	457	111	700	292	17	107	15	7	2141
2005	38	105	133	190	453	127	747	300	20	128	16	24	2281
2006	30	104	118	194	440	113	730	301	14	119	18	10	2191
2007	27	125	110	193	419	140	713	284	17	135	11	14	2188
2008	27	136	145	186	375	183	646	258	13	128	9	27	2133
2009	18	131	118	187	371	167	614	244	10	127	14	13	2014
2010	25	145	91	192	390	154	627	264	13	143	14	29	2087

<b>Juzgado Segundo</b>													
	ACTOS PREJUDICIALES	CIVIL ORDINARIO	TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001	41	134	3	118	297	73	467	211	14	84	14	4	1460
2002	50	193	6	188	477	108	758	323	18	140	21	8	2290
2003	53	218	6	190	519	112	737	326	16	126	24	8	2335
2004	40	119	86	196	458	111	700	297	12	111	18	6	2154



2005	31	103	132	198	455	127	750	310	15	131	23	17	2292
2006	30	105	120	195	438	111	730	299	12	120	18	8	2186
2007	25	125	110	192	424	138	712	281	12	131	14	11	2175
2008	25	109	137	186	375	176	645	257	12	128	12	14	2076
2009	16	133	119	188	371	166	613	248	8	128	14	14	2018
2010	24	146	91	194	389	150	626	263	11	144	16	29	2083

Juzgado Tercero													
	ACTOS PREJUDICIALES	CIVIL ORDINARIO	TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001	39	13	3	11	29	72	468	21	13	84	15	4	146
		4		9	8			1					0
2002	49	19	4	18	47	11	758	32	18	13	21	6	228
		2		9	6	1		4		8			6
2003	53	21	6	19	52	11	738	32	16	12	24	13	233
		5		0	0	4		5		5			9
2004	42	12	86	19	45	11	697	29	17	10	14	8	214
		3		1	8	2		2		6			6
2005	33	10	12	19	44	12	750	31	18	12	22	10	227
		6	7	7	7	8		0		3			1
2006	28	10	11	19	44	11	728	30	14	12	17	8	218
		5	8	4	0	3		1		1			7
2007	29	12	11	19	42	13	712	28	17	13	11	11	218
		3	0	0	4	9		3		4			3
2008	22	11	13	18	37	17	643	25	13	12	12	14	207
		0	9	6	5	6		9		9			8
2009	17	13	11	18	37	16	611	24	9	12	14	17	201
		2	6	7	1	4		8		8			4
2010	22	14	89	19	38	15	624	26	12	14	17	27	207
		5		3	7	2		4		5			7

<b>Juzgado Cuarto</b>													
	ACTOS PREJUDICIALES	CIVIL ORDINARIO	TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001	38	13 4	3	12 0	29 5	72	469	20 9	14	83	13	7	145 7
2002	49	19 2	6	18 9	47 6	10	758	32 5	18	13 8	22	7	228 9
2003	60	22 0	6	19 1	52 1	11	739	32 5	17	13 1	24	9	235 8
2004	39	12 3	85	19 4	45 6	11	700	29 6	18	10 7	18	8	215 7
2005	34	10 5	13	20 0	45 5	12	749	30 9	17	12 8	12	18	228 6
2006	29	10 5	11 7	19 4	43 9	11	728	30 1	12	12 0	19	17	219 1
2007	29	12 3	10 8	19 2	42 4	13	710	28 5	17	13 2	10	14	218 3
2008	24	10 7	13 9	18 6	37 4	17	645	25 6	13	12 5	13	16	207 5
2009	19	13 2	11 9	18 4	37 6	16	613	24 6	9	12 4	14	18	201 8
2010	26	14 5	91	19 2	38 8	15	626	26 0	9	14 2	16	29	207 6

<b>Juzgado Quinto</b>													
	ACTOS PREJUDICIALES	CIVIL ORDINARIO	TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001	78	25 9	11	25 2	65 3	16	102 8	46 6	29	17 5	22	13	315 5
2002	49	19 3	6	18 8	47 6	10	758	32 6	18	13 7	21	5	228 6
2003	53	21 7	6	19 1	52 0	11	738	32 5	17	12 5	24	9	233 7

2004	31	11	86	18	45	11	700	29	18	11	18	4	213
		8		9	2	6		7		0			9
2005	34	10	12	19	45	12	749	30	20	12	18	8	226
		3	9	9	0	8		6		5			9
2006	31	10	11	19	44	11	730	30	14	11	17	8	219
		4	9	5	0	4		1		9			2
2007	30	12	11	19	42	13	709	28	16	13	12	13	217
		0	0	2	3	8		2		4			9
2008	26	11	13	18	37	17	643	25	12	12	9	12	207
		0	8	5	1	7		8		9			0
2009	14	13	11	18	37	16	612	24	10	12	11	14	200
		2	7	7	1	5		8		8			9
2010	24	14	89	19	38	15	625	26	13	14	16	28	207
		5		3	8	4		1		3			9

Juzgado Sexto													
	ACTOS PREJUDICIALES	CIVIL ORDINARIO	TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001	68	22	9	21	56	14	885	39	26	15	18	9	270
		9		1	1	3		8		2			9
2002	49	19	5	18	47	10	757	32	17	13	21	6	228
		2		8	6	9		5		8			3
2003	54	21	9	19	52	11	738	32	17	12	23	6	233
		6		0	0	3		4		5			5
2004	38	11	86	19	45	11	701	29	16	11	16	9	214
		9		2	5	1		5		0			8
2005	28	10	12	20	44	12	742	31	12	12	12	12	225
		8	3	0	6	9		0		8			0
2006	30	10	11	19	43	11	729	30	14	12	19	6	218
		5	9	5	9	0		2		1			9
2007	26	12	11	19	42	14	712	28	17	13	9	11	218
		5	0	3	3	1		3		3			3
2008	24	11	13	18	37	17	644	25	12	12	11	10	207
		1	9	7	3	7		7		8			3
2009	18	13	11	18	37	16	614	24	9	12	14	12	201
		1	6	7	0	4		8		8			1
2010	25	14	88	19	39	15	628	26	12	14	16	28	208
		5		2	1	2		3		2			2

## Juzgado Séptimo

	ACTOS PREJUDICIALES	CIVIL ORDINARIO	TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001	68	23 0	9	21 3	56 1	14 3	885	39 8	25	15 1	18	8	270 9
2002	49	19 2	5	18 9	47 6	10 9	758	32 4	18	13 8	21	7	228 6
2003	54	21 7	6	19 0	52 0	11 3	739	32 5	17	12 5	24	8	233 8
2004	39	12 0	86	19 0	45 5	10 9	700	29 6	13	10 6	12	15	214 1
2005	38	10 1	13 1	19 3	45 1	13 0	746	31 0	9	13 3	20	9	227 1
2006	29	10 4	12 0	19 3	43 8	11 2	729	30 1	13	12 0	17	7	218 3
2007	30	12 2	10 8	19 1	42 4	14 0	708	28 7	16	13 3	10	27	219 6
2008	24	10 9	13 9	18 4	37 4	17 5	645	25 6	11	12 8	11	12	206 8
2009	16	13 1	11 8	18 6	37 2	16 5	613	24 8	10	12 8	14	13	201 4
2010	27	15 1	90	19 4	38 7	15 2	628	26 4	13	14 4	13	41	210 4

## Juzgado Octavo

	ACTOS PREJUDICIALES CIVIL ORDINARIO		TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001													
2002													
2003													
2004	46	14	91	22	51	11	790	33	21	12	17	7	242
		1		1	1	5		5		8			3
2005	39	11	14	22	51	13	848	34	20	14	24	8	255
		4	4	2	1	7		6		6			9
2006	29	10	11	19	44	11	729	30	13	12	18	6	218
		5	7	4	0	3		1		2			7
2007	30	12	10	19	42	14	710	28	16	13	13	23	219
		2	5	4	4	2		3		0			2
2008	26	10	13	18	37	17	642	25	11	12	10	11	206
		7	9	6	2	3		9		8			4
2009	18	13	11	18	37	16	613	24	10	12	13	14	201
		3	6	7	2	7		8		8			9
2010	24	14	90	19	38	15	627	26	10	14	14	29	207
		5		4	8	3		2		2			8

	Juzgado Noveno												
	ACTOS PREJUDICIALES CIVIL ORDINARIO		TRAMITACIÓN ESPECIAL	SUCESIÓN TESTAMENTARIA	SUCESIÓN INTESTAMENTARIA	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA	DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO	DIVORCIO CONTENCIOSO	DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN	ALIMENTOS	INTERDICTO FAMILIAR	OTROS	TOTAL
2001													
2002													
2003													
2004													
2005													
2006	18	64	63	11 3	25 4	73	420	18 1	12	73	11	6	128 8
2007	29	14 2	12 7	21 7	48 9	15 9	815	32 6	16	14 9	16	8	249 3
2008	26	11 1	13 8	18 5	37 4	17 7	645	25 9	10	12 7	12	13	207 7
2009	18	12 9	11 9	18 7	36 8	16 7	614	24 8	11	12 7	13	11	201 2
2010	25	14 3	90	19 4	39 0	15 1	626	26 4	13	14 2	17	28	208 3

	Juzgado Décimo																							
	ACTOS PREJUDICIALES CIVIL ORDINARIO		TRAMITACIÓN ESPECIAL		SUCESIÓN TESTAMENTARIA		SUCESIÓN INTESTAMENTARIA		JURISDICCIÓN VOLUNTARIA		DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO		DIVORCIO CONTENCIOSO		DILIGENCIAS DE ADOPCIÓN		ALIMENTOS		INTERDICTO FAMILIAR		OTROS		TOTAL	
2001																								
2002																								
2003																								
2004																								
2005																								
2006																								
2007																								
2008	24	11	13	18	38	17	668	25	10	13	5	15	210											
		0	4	8	4	6		8		4			6											
2009	17	13	11	18	37	16	615	24	11	12	14	14	202											
		2	8	7	2	5		7		8			0											
2010	25	14	88	19	38	15	627	26	13	14	16	26	208											
		6		0	8	3		3		5			0											

**Anexo 10.- Cuestionarios sobre el divorcio por mutuo  
consentimiento**



JUZGADO Primero DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(X)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(X)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....(X)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

- a) Deficiente planteamiento del convenio.....80.....%
- b) Falta de documentación.....10.....%
- c) Ausencia del convenio.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:  
 Incompetencia del juzgado por domicilio conyugal  
 Certificado ingravidez caducos o de laboratorio privado.

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( ) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de divorcio voluntario, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....10.....%..

b) Ejecución de sentencia.....90.....%.

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de divorcio por mutuo, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:

a) Falta de preparación del abogado asesor ..... 10 %

b) Deficiencias del convenio ..... 20 %

c) Deficiencias o lagunas de la ley ..... %

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

~~Incumplimiento al convenio en~~  
~~algunas de sus cláusulas~~ ~~Cpago~~  
~~de alimentos, incrementos, custodia y convivencia~~

4- NOTA  
 Incorrecta  
 la correcta  
 esta al a uve  
 era

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites de **divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

a) Igual X

b) Peor \_\_\_\_\_

c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

a) Simplificar el trámite en la ley ..... 50 %

b) Preparación adecuada de los abogados ..... 50 %

c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

y el otro 50% por incumplimiento  
 de las partes.

JUZGADO 2º DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....( ☒ )..

De 26 a 50%.....(    )..

De 51 a 75%.....(    )

De 76 a 100%.....(    )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....(    )..

De 26 a 50%.....( ☒ )..

De 51 a 75%.....(    )

De 76 a 100%.....(    )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....( ☒ )..

De 26 a 50%.....(    )..

De 51 a 75%.....(    )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

a) Deficiente planteamiento del convenio.....<sup>80</sup>.....%  
b) Falta de documentación.....<sup>20</sup>.....%

c) Ausencia del convenio.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....(<sup>X</sup>)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de **divorcio voluntario**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....<sup>30</sup>.....%..

b) Ejecución de sentencia.....<sup>70</sup>.....%.

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de **divorcio por mutuo**, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:

- a) Falta de preparación del abogado asesor ..... %
- b) Deficiencias del convenio..... %
- c) Deficiencias o lagunas de la ley..... %
- d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites **de divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual       X
- b) Peor
- c) Mejor

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

- a) Simplificar el tramite en la ley ..... <sup>50</sup> %
- b) Preparación adecuada de los abogados..... <sup>50</sup> %
- c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO 3º DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....(☒)

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

a) Deficiente planteamiento del convenio.....<sup>5</sup>.....%  
 b) Falta de documentación.....<sup>3</sup>.....%

c) Ausencia del convenio.....<sup>1</sup>.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(X)..  
 De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de **divorcio voluntario**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....<sup>15</sup>.....%..


b) Ejecución de sentencia.....<sup>30</sup>.....%.

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de **divorcio por mutuo**, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:



- a) Falta de preparación del abogado asesor ..... 5 %
- b) Deficiencias del convenio ..... 15 %
- c) Deficiencias o lagunas de la ley ..... 2 %
- d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 8% falta madurez en la pareja para aceptar  
 una nueva relación de ex conyuge

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites de **divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual 
- b) Peor \_\_\_\_\_
- c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

- a) Simplificar el trámite en la ley ..... 0 %
- b) Preparación adecuada de los abogados ..... ✓ %
- c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 preparación de los conyuges para que aceptan  
 la nueva status

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(☒)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(☒)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

a) Deficiente planteamiento del convenio.....% 30

b) Falta de documentación.....% 25

c) Ausencia del convenio.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....(✓) ..

De 26 a 50%.....( ) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de divorcio voluntario, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....% 30

b) Ejecución de sentencia.....% 70

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de divorcio por mutuo, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:

- a) Falta de preparación del abogado asesor .....% **50**
- b) Deficiencias del convenio.....% **30**
- c) Deficiencias o lagunas de la ley.....% **30**
- d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites **de divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual
- b) Peor
- c) Mejor

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....% **30**
- b) Preparación adecuada de los abogados.....% **50**
- c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO 5<sup>a</sup> DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

### CUESTIONARIO 1

#### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(✓)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....(✓) ..

De 26 a 50%.....( ) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....( ) ..

De 26 a 50%.....(✓) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

a) Deficiente planteamiento del convenio.....~~8~~ 80 %

b) Falta de documentación.....20 %

c) Ausencia del convenio.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....(✓) ..

De 26 a 50%.....( ) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de **divorcio voluntario**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....%..

b) Ejecución de sentencia.....(✓) %.

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de **divorcio por mutuo**, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:

a) Falta de preparación del abogado asesor .....%

b) Deficiencias del convenio.....%

c) Deficiencias o lagunas de la ley.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites **de divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

a) Igual.....

b) Peor.....

c) Mejor.....

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

a) Simplificar el tramite en la ley .....%

b) Preparación adecuada de los abogados.....%

c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO 6<sup>o</sup> II DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....( ☐ )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....( ☐ )..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....(☒)

De 76 a 100%.....( ☐ )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )



De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

a) Deficiente planteamiento del convenio.....% 30

b) Falta de documentación.....% 30

c) Ausencia del convenio.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....(X)..  
 De 26 a 50%.....( )..  
 De 51 a 75%.....( )  
 De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de **divorcio voluntario**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....%..  
 b) Ejecución de sentencia.....% X

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de **divorcio por mutuo**, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:

a) Falta de preparación del abogado asesor .....% 50

b) Deficiencias del convenio.....% 50

c) Deficiencias o lagunas de la ley.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites **de divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

a) Igual X

b) Peor \_\_\_\_\_

c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

a) Simplificar el tramite en la ley .....% 50

b) Preparación adecuada de los abogados.....% 50

c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

.....

.....

.....

.....

.....

JUZGADO  
JUDICIAL.

*Septimo*

DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....( ☐ )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....( ☐ )..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....(☒)

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

- a) Deficiente planteamiento del convenio.....<sup>100</sup>.....%  
 b) Falta de documentación.....<sup>40</sup>.....%  
 c) Ausencia del convenio.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....(<sup>✓</sup>)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de **divorcio voluntario**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....%..

b) Ejecución de sentencia.....<sup>100</sup>.....%.

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de **divorcio por mutuo**, se complican en la etapa de ejecución de sentencia;

- a) Falta de preparación del abogado asesor ..... 70 %
- b) Deficiencias del convenio..... 20 %
- c) Deficiencias o lagunas de la ley..... 10 %
- d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites **de divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual \_\_\_\_\_
- b) Peor ✓ \_\_\_\_\_
- c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

- a) Simplificar el tramite en la ley ..... 30 %
- b) Preparación adecuada de los abogados..... 20 %
- c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....

— a) omitir la junta de avenimiento, ya que en los diez años anteriores, ningún trámite de divorcio voluntario ha concluido por la reconciliación de los promouantes.

JUZGADO 8° DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(X )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....( X )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....( X )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

- a) Deficiente planteamiento del convenio.....30%  
 b) Falta de documentación.....20%  
 c) Ausencia del convenio.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....( X )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de divorcio voluntario, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....%..

b) Ejecución de sentencia.....100%.

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de divorcio por mutuo, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:

- a) Falta de preparación del abogado asesor .....%
- b) Deficiencias del convenio.....80 %
- c) Deficiencias o lagunas de la ley.....%
- d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites **de divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual.....
- b) Peor.....
- c) Mejor ☒ .....

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....100 %
- c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



JUZGADO NOVENO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(☒)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

a) Deficiente planteamiento del convenio.....% ☒

b) Falta de documentación.....%

c) Ausencia del convenio.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:

En el convenio establece cuestiones sobre  
los artículos 764 C.C.E. y 406 Cód. -  
g.º Civil del Cód.

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....( ☒ )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de **divorcio voluntario**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....%..

b) Ejecución de sentencia.....% 80

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de **divorcio por mutuo**, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:

a) Falta de preparación del abogado asesor ..... %

b) Deficiencias del convenio..... % 80

c) Deficiencias o lagunas de la ley..... %

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

En algunas ocasiones el convenio no es susceptible de ejecutarse o es muy difícil de ejecutar.

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites de **divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

a) Igual \_\_\_\_\_

b) Peor X \_\_\_\_\_

c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

a) Simplificar el trámite en la ley ..... %

b) Preparación adecuada de los abogados..... %

c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

Creo que los costos han empeorado porque la situación económica y el desempleo y la falta de valores han influido negativamente en la familia. Estoy convencido que el aumento de divorcios se debe a que actualmente el hombre no asume su papel de proveedor, y trata de evitar a todo costo pagar la pensión alimenticia, y a veces los Abogados son buenos en su profesión, pero trabajan para servir a sus clientes de sus responsabilidades.

JUZGADO  
JUDICIAL.

10<sup>o</sup> Familiar

DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO

## CUESTIONARIO 1

### DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, cuáles el porcentaje en las que recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....( ☐ )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de **solicitudes de divorcio por mutuo**, cuál es el rango de porcentaje de solicitudes que fueron planteadas y formuladas en forma correcta.

De 1 a 25%.....( ☐ )..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....(☒)

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las solicitudes de **divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, no se admitieron por cualesquier causa

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** De mayor a menor, (si es posible el porcentaje) cuáles son las principales causas, por las que se plantea en forma indebida o incompleta una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento;

a) Deficiente planteamiento del convenio.....60...%

b) Falta de documentación.....20...%

c) Ausencia del convenio.....20...%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento**, en que rango de porcentaje, se abandono el tramite.

De 1 a 25%.....(X)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En los trámites de **divorcio voluntario**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

a) Tramite.....%..

b) Ejecución de sentencia.....100...%.

**Pregunta:** Cual considera que sea el motivo por el que en los trámites de **divorcio por mutuo**, se complican en la etapa de ejecución de sentencia:

a) Falta de preparación del abogado asesor .....%

b) Deficiencias del convenio.....% 80

c) Deficiencias o lagunas de la ley.....%

d) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

En algunas ocasiones el convenio no es susceptible de ejecutarse o es muy difícil de ejecutar.

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los trámites de **divorcio por mutuo consentimiento**, en comparación con el año 2010.

a) Igual \_\_\_\_\_

b) Peor X \_\_\_\_\_

c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los procedimientos de **divorcio por mutuo consentimiento**.

a) Simplificar el tramite en la ley .....%

b) Preparación adecuada de los abogados.....%

c) Otras: Indicar cual o cuales y en que medida

Creo que los costos han empeorado porque la situación económica, el desempleo y la falta de valores han influido negativamente en la familia. Estoy convencido que el aumento de divorcios se debe a que actualmente el hombre no asume su papel de proveedor, y trata de evitar a todo costo pagar la pensión alimenticia, y a veces los Abogados son buenos en su profesión, pero trabajan para evadir a sus clientes de sus responsabilidades.

## **Anexo 11.- Cuestionarios sobre el divorcio contencioso**

JUZGADO Primero DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....(X)

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(X)..  
De 26 a 50%.....( )..  
De 51 a 75%.....( )  
De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....(X)..  
De 26 a 50%.....( )..  
De 51 a 75%.....( )  
De 76 a 100%.....( )



**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....(~~X~~)

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se hacen valer las causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(15)%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(0)%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(0)%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...(1)%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....(0)%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(1)%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(1)%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..(70)%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(20)%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( )%

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( 1 ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;..... ( 50 ) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 80 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 80 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( 0 ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( 0 ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( 30 ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( 0 ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 40 ) %

NOTA: En los porcentajes se maneja con arreglo de causas particularmente es sumamente común que coexistan el abandono de domicilio conyugal con la falta de ministro de alimentos incluso también los hechos se narican cuestiones de adicciones, violencia intrafamiliar e.

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%..... ( ✓ ) ..

De 26 a 50%..... ( ) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(~~X~~)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se acreditan y estiman procedentes las diversas causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(10)%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(2)%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(2)%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...(0)%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....(0)%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(1)%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(1)%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..40%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....( )%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( )%

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;.....(1)%

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;.....(5)%

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 0 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 80 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( 0 ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( 0 ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( 0 ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( 0 ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 30 ) %

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%..... ( )..

De 26 a 50%..... (X) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos..... (50) %

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar .... (50) %

- c) Causales caducas.....(40)%
- d) Falta de pruebas idóneas.....(70)%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 No dan el 100% se habla en terminos  
 genericos de como se advierte la incidencia  
 en el planteamiento.....

**Pregunta:** En juicios de divorcio contencioso, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....( )%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....(70)%
- c) Ejecución de sentencia.....(30)%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las causas jurídicas por las que no se obtiene una sentencia de disolución del vinculo matrimonial, en los juicios contenciosos.

- a) Hechos de la demanda deficientes .....(40)%
- b) Ausencia de pruebas.....(30)%
- c) Pruebas deficientes.....(30)%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico .....(90)%

- b) Lagunas de la ley .....( 0 )%
- c) Deficiencias de la ley.....( 0 )%
- d) Exceso de formalismos legales .....(10)%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....( 0 )%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los **diez años anteriores**, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual ✓
- b) Peor \_\_\_\_\_
- c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....( )%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....(100)%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.



Si: ( ☒ )

No: (    )

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

a) Celeridad en el proceso.....(100)%

b) Libertad de decisión de las personas.....(    )%

c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....(    )%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

a) Exceso o permisividad de la ley .....(    )%

b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....(    )%

c) Detrimento del Matrimonio.....(    )%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO 20 DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....(X)

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )



**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(**X**)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje **se hacen valer las causales** de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(**10**) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( ) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;..... ( ) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( ) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;..... ( ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. ( ) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente..... ( ) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. (**20**) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....( ) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;..... ( ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;..... ( ) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... (40) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... (70) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... (10) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación. 10

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... (10) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%..... (X) ..

De 26 a 50%..... ( ) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(X)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se **acreditan y estiman procedentes**  
**las diversas causales de divorcio.**

I. La infidelidad sexual;.....(20) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( ) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;..... ( ) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( ) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;..... ( ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. ( ) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente..... ( ) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. (30) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....( ) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;..... ( ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;..... ( ) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y.....( ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho.....( ) %

**Pregunta:** En su opinión, el año **2010** del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( 7 )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En su opinión, el año **2010** del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos.....(50)%

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar ....(50)%

- c) Causales caducas.....( )%
- d) Falta de pruebas idóneas.....( )%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de **divorcio contencioso**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....( )%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....( ~~5~~ )%
- c) Ejecución de sentencia.....( )%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las **causas jurídicas** por las que **no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial, en los juicios contenciosos.**

- a) Hechos de la demanda deficientes .....( 50 )%
- b) Ausencia de pruebas.....( 50 )%
- c) Pruebas deficientes.....( )%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico ..... ( 40 )%

- b) Lagunas de la ley .....(30)%
- c) Deficiencias de la ley.....(30)%
- d) Exceso de formalismos legales .....( )%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....( )%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los **diez años anteriores**, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual\_\_\_\_\_
- b) Peor\_\_\_\_\_✓
- c) Mejor\_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....(50)%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....(50)%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.

Si: ( X )

No: ( )

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

- a) Celeridad en el proceso.....( 30 )%
- b) Libertad de decisión de las personas.....( 30 )%
- c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....( 30 )%
- d) Otras: Indique cuales.....  
.....  
.....  
.....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

- a) Exceso o permisividad de la ley .....( )%
- b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....( ) %
- c) Detrimento del Matrimonio.....( )%
- d) Otras: Indique cuales.....  
.....  
.....  
.....

JUZGADO 3º DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....( ☐ )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....( ☐ )..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....(☒)

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( ☐ )..

De 51 a 75%.....( ☐ )

De 76 a 100%.....( ☐ )



**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....(X)

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se hacen valer las causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(59)%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(0)%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(0)%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...(0)%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....(0)%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(0)%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(0)%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..(50)%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(30)%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( )%

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( 0 ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;..... ( 75 ) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 50 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 50 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( 2 ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( 2 ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( 20 ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( 0 ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( 50 ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 25 ) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%..... ( X )..

De 26 a 50%..... ( )..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....(X)

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se acreditan y estiman procedentes las diversas causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....88%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( )%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(0)%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...(6)%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....( )%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(0)%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(0)%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..( )%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(0)%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( )%

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;.....(0)%

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;.....88%

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... (50) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... (90) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... (50) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... (50) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... (20) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... (0) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... (100) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... (90) %

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(X) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos.....(20)%

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar ....(50) %

- c) Causales caducas.....( 5 )%
- d) Falta de pruebas idóneas.....(25)%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de **divorcio contencioso**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....( )%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....( )%
- c) Ejecución de sentencia.....( X )%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las **causas jurídicas** por las que **no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial, en los juicios contenciosos.**

- a) Hechos de la demanda deficientes .....(50)%
- b) Ausencia de pruebas.....(10)%
- c) Pruebas deficientes.....(40)%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico .....(20)%

- b) Lagunas de la ley .....(    )%
- c) Deficiencias de la ley .....(    )%
- d) Exceso de formalismos legales .....(50)%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....(30)%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los **diez años anteriores**, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual \_\_\_\_\_ ✓
- b) Peor \_\_\_\_\_
- c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....( ✓ )%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....( ✓ )%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.

Si: ( ☒ )

No: (    )

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

a) Celeridad en el proceso.....(50)%

b) Libertad de decisión de las personas.....(25)%

c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....(25)%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

a) Exceso o permisividad de la ley .....(    )%

b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....(    ) %

c) Detrimento del Matrimonio.....(    )%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( ☒ )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....( ☒ )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....( ☒ )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )



**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( 4 )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se hacen valer las causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(10)%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(0)%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(0)%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...(0)%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....(5)%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(0)%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(0)%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..(50)%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(25)%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....(25)%

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... (10) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;..... (80) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... (50) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... (40) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... (25) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... (10) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... (10) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... (0) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... (50) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... (25) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%..... (✓) ..

De 26 a 50%..... ( ) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(✓)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se acreditan y estiman procedentes las diversas causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(50)%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(0)%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(0)%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito... (0)%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;..... (10)%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. (0)%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente..... (0)%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. (0)%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(10)%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;..... (10)%

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... (0)%

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;..... (50)%

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 0 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 100 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( 0 ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( 0 ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( 0 ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( 0 ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( 100 ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 50 ) %

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%..... ( ✓ ) ..

De 26 a 50%..... ( ) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos..... ( ) %

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar .... ( 100 ) %

- c) Causales caducas.....(    )%
- d) Falta de pruebas idóneas.....(    )%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de **divorcio contencioso**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....(    )%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....(    )%
- c) Ejecución de sentencia.....(    )%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las **causas jurídicas** por las que **no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial, en los juicios contenciosos.**

- a) Hechos de la demanda deficientes .....( 50 )%
- b) Ausencia de pruebas.....( 50 )%
- c) Pruebas deficientes.....( 59 )%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico .....(    )%

- b) Lagunas de la ley .....(    )%
- c) Deficiencias de la ley.....(    )%
- d) Exceso de formalismos legales .....(    )%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....(    )%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los **diez años anteriores**, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual           /
- b) Peor
- c) Mejor

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....(   /   )%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....(   /   )%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.

Si: ( ☒ )

No: ( ☐ )

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

a) Celeridad en el proceso.....( ☒ )%

b) Libertad de decisión de las personas.....( ☐ )%

c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....( ☒ )%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

a) Exceso o permisividad de la ley .....( ☐ )%

b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....( ☐ )%

c) Detrimento del Matrimonio.....( ☐ )%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO 5 DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(☒)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(☒)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....(☒)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )



**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( ✓ )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se hacen valer las causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....( 10 ) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( 0 ) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....( 0 ) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( 0 ) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....( 0 ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..( 0 ) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....( 0 ) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..( 60 ) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....( 10 ) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( 0 ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;..... ( 60 ) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 80 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 80 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( 40 ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( 10 ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( 40 ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( 10 ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( 70 ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 10 ) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( ✓ )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(✓)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se acreditan y estiman procedentes  
las diversas causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(4<sup>ta</sup>) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(2) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(0) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...(2) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....( ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(2) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(0) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..(5<sup>ta</sup>) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(1<sup>ra</sup>) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;.....(2) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;.....(3<sup>ra</sup>) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 0 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 8<sup>o</sup> ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( 0 ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( 0 ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( 0 ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( 0 ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( 10<sup>o</sup> ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 10<sup>o</sup> ) %

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( ✓ )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos.....( 3<sup>o</sup> ) %

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar ....( 5<sup>o</sup> ) %

- c) Causales caducas.....(15)%
- d) Falta de pruebas idóneas.....(30)%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de **divorcio contencioso**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....( )%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....( )%
- c) Ejecución de sentencia.....(30)%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las **causas jurídicas** por las que **no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial, en los juicios contenciosos.**

- a) Hechos de la demanda deficientes .....(20)%
- b) Ausencia de pruebas.....(90)%
- c) Pruebas deficientes.....(30)%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico ..... (✓)%

- b) Lagunas de la ley .....(    )%
- c) Deficiencias de la ley.....(    )%
- d) Exceso de formalismos legales .....(    )%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....(    )%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los **diez años anteriores**, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual \_\_\_\_\_
- b) Peor \_\_\_\_\_
- c) Mejor ✓ \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....(    )%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....( ✓ )%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.

Si: ( ☒ )

No: (    )

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

- a) Celeridad en el proceso.....(    )%
- b) Libertad de decisión de las personas.....( ☒ )%
- c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....(    )%
- d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

- a) Exceso o permisividad de la ley .....(    )%
- b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....(    ) %
- c) Detrimento del Matrimonio.....(    )%
- d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO 6<sup>o</sup> DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(X)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(X)..  
De 26 a 50%.....( )..  
De 51 a 75%.....( )..  
De 76 a 100%.....( )..

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....( X)..  
De 26 a 50%.....( )..  
De 51 a 75%.....( )..  
De 76 a 100%.....( )..



**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( **X** )..

De 26 a 50%.....(    )..

De 51 a 75%.....(    )

De 76 a 100%.....(    )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje **se hacen valer las causales** de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....( **10** ) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( **—** ) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;..... ( **—** ) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( **—** ) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.... ( **—** ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. ( **—** ) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente..... ( **—** ) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. ( **60** ) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....( **—** ) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;..... ( **7** ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... (—) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;..... (10) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... (10) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... (30) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... (—) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... (1) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... (1) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... (—) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y *Es Procedimiento Especial y se analiza el contenido, no puede hacerse el comparativo*..... ( ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... (10) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%.....(—) ..

De 26 a 50%.....( ) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a ~~100~~%.....(—)

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se **acreditan y estiman procedentes**  
**las diversas causales de divorcio.**

I. La infidelidad sexual;.....(100) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(—) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;..... (—) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito... (—) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;..... ( — ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. ( — ) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente..... ( — ) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. ( 90 ) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(—) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;..... ( ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... (—) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;..... (30) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... (70) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... (90) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... (—) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... (90) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... (—) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... (—) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... (100) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... (90) %

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%..... (X) ..

De 26 a 50%..... ( ) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos..... (30) %

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar .... (40) %

- c) Causales caducas.....( 15 )%
- d) Falta de pruebas idóneas.....( 15 )%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de **divorcio contencioso**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....( )%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....( X )%
- c) Ejecución de sentencia.....( )%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las **causas jurídicas** por las que **no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial, en los juicios contenciosos.**

- a) Hechos de la demanda deficientes .....( 50 )%
- b) Ausencia de pruebas.....( 30 )%
- c) Pruebas deficientes.....( 30 )%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico ..... ( )%

- b) Lagunas de la ley .....(    )%
- c) Deficiencias de la ley.....(    )%
- d) Exceso de formalismos legales .....( X )%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....( X )%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**Pregunta:** En los **diez años anteriores**, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual           X
- b) Peor
- c) Mejor

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....(100)%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....(    )%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.

Si: ( ☒ )

No: (    )

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

a) Celeridad en el proceso.....(    )%

b) Libertad de decisión de las personas.....( 100 )%

c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....(    )%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

a) Exceso o permisividad de la ley .....(    )%

b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....(    ) %

c) Detrimento del Matrimonio.....(    )%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO Séptimo DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(✓)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(✓)..  
De 26 a 50%.....( )..  
De 51 a 75%.....( )  
De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....(✓)..  
De 26 a 50%.....( )..  
De 51 a 75%.....( )  
De 76 a 100%.....( )



**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(~~1~~)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje **se hacen valer las causales** de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(30) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( 0 ) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;..... ( 0 ) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( 0 ) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;..... ( 10 ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. ( 5 ) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente..... ( ) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. (30) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(30) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;..... (15) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( 0 ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;..... ( 70 ) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 40 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 60 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( 15 ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( 15 ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( 30 ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( 10 ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 60 ) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%..... ( ✓ )..

De 26 a 50%..... ( )..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(☒)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se acreditan y estiman procedentes las diversas causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(~~40~~) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(0) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(0) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...(0) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....(0) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(0) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(0) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..(~~70~~) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(3) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;.....(0) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;.....(50) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... (40) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... (10) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... (5) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... (5) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... (20) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... (5) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... (100) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... (10) %

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(✓) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos.....(50) %

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar ....(50) %

- c) Causales caducas.....(    )%
- d) Falta de pruebas idóneas.....(    )%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de **divorcio contencioso**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....(    )%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....(40)%
- c) Ejecución de sentencia.....(60)%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las **causas jurídicas** por las que **no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial, en los juicios contenciosos.**

- a) Hechos de la demanda deficientes .....(50)%
- b) Ausencia de pruebas.....(50)%
- c) Pruebas deficientes.....(    )%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico ..... (70)%

- b) Lagunas de la ley .....( )%
- c) Deficiencias de la ley.....( )%
- d) Exceso de formalismos legales .....( )%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....(30)%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual.....
- b) Peor.....
- c) Mejor.....

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el trámite en la ley .....(30)%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....(70)%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal:

Si: (✓)

No: ( )

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

- a) Celeridad en el proceso.....(50)%
- b) Libertad de decisión de las personas.....(50)%
- c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....( )%
- d) Otras: Indique cuales.....  
.....  
.....  
.....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

- a) Exceso o permisividad de la ley .....( )%
- b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....( )%
- c) Detrimento del Matrimonio.....( )%
- d) Otras: Indique cuales.....  
.....  
.....  
.....

JUZGADO 8<sup>o</sup> DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....(X)

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )



**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(X) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se hacen valer las causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....( 2/3 ) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( ) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;..... ( ) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( ) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;..... ( ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. ( 10 ) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente..... ( ) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. ( 20 ) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....( 30 ) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;..... ( 30 ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;..... ( 60 ) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 80 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 70 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( 60 ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 20 ) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%..... ( X )..

De 26 a 50%..... ( )..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(X)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se acreditan y estiman procedentes las diversas causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(30) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( ) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....( ) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( ) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....( ) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. (10) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....( ) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. (80) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(60) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( ) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;.....( ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;..... (80) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... (10) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... (40) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... (80) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... (40) %

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%..... (X) ..

De 26 a 50%..... ( ) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En su opinión, el año 2010 del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos..... (20) %

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar .... (20) %

- c) Causales caducas.....(10)%
- d) Falta de pruebas idóneas.....(50)%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de divorcio contencioso, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....(10)%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....(40)%
- c) Ejecución de sentencia.....(50)%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las causas jurídicas por las que no se obtiene una sentencia de disolución del vinculo matrimonial, en los juicios contenciosos.

- a) Hechos de la demanda deficientes .....(20)%
- b) Ausencia de pruebas.....(20)%
- c) Pruebas deficientes.....(60)%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico ..... (60)%

- b) Lagunas de la ley .....(    )%
- c) Deficiencias de la ley.....(    )%
- d) Exceso de formalismos legales .....(    )%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....(    )%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de divorcio necesario, en comparación con el año 2010.

- a) Igual \_\_\_\_\_
- b) Peor \_\_\_\_\_ *+*
- c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....(    )%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....(100)%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.

Si: ( )

No: ( X )

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

a) Celeridad en el proceso.....( )%

b) Libertad de decisión de las personas.....( )%

c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....( )%

d) Otras: Indique cuales.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

a) Exceso o permisividad de la ley .....( )%

b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....( ) %

c) Detrimento del Matrimonio.....( X )%

d) Otras: Indique cuáles.....  
 .....  
 .....  
 .....

JUZGADO NOVENO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(X)

De 76 a 100%.....( )

En la actualidad y creo que desde antes del 2010, en las demandas hacen valer muchas acciones simultaneas al divorcio.

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( ) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( ) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )



**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(X)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje **se hacen valer las causales** de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....( )%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( )%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;..... ( )%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( )%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;..... ( )%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;.. ( )%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente..... ( )%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;.. ( )%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....( )%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;..... ( )%

estas 5, no voy  
a la bre vista  
a la bre vista

2

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( ) %

4 XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;..... ( ) %

3 XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( ) %

ma' 1 ← XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( ) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%.....(X)..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las **demandas de divorcio necesario**, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....(X)..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se acreditan y estiman procedentes las diversas causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....( 0 )%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....( 80 )%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....( )%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( )%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....( )%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..( )%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....( )%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..( 45 )%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....( )%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....( )%

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;.....( )%

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;.....( )%

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 0 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 100 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( ) %

**Pregunta:** En su opinión, el año **2010** del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%..... ( ) ..

De 26 a 50%..... ( X ) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En su opinión, el año **2010** del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos..... ( ) % **60%**

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar .... ( ) %

*Yo pienso q' de acuerdo a los expedientes que he revisado para sentencia, lo más común es que en la misma demanda no son específicos, omitiendo señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar.*

- c) Causales caducas.....( )% 10%
- d) Falta de pruebas idóneas.....( )% 30%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de **divorcio contencioso**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....( )%.
- b) oferta y desahogo de pruebas.....(X)%
- c) Ejecución de sentencia.....( )%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las **causas jurídicas** por las que **no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial, en los juicios contenciosos.**

- a) Hechos de la demanda deficientes .....( )%
- b) Ausencia de pruebas.....( )%
- c) Pruebas deficientes.....( )%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida

Se da una combinación de los tres, puesto  
 q. en algunos límites la demanda es defi-  
 ciente, y en otros o no hay pruebas o  
 ellas no son las idóneas

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico ..... ( )%

- b) Lagunas de la ley .....( )%
- c) Deficiencias de la ley.....( )%
- d) Exceso de formalismos legales .....( )%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....( )%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

Hay mucho desconocimiento en la materia familiar, y los abogados en ocasiones ignoran la técnica jurídica específica para esta materia.

**Pregunta:** En los **diez años anteriores**, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual \_\_\_\_\_
- b) Peor \_\_\_\_\_
- c) Mejor \_\_\_\_\_
- Lo que ha cambiado es el cómo, cada día más trabajo y más complejo. Los juicios se complican más, porque hay más puntos de demanda y en muchos casos requieren.

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....( )%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....( )%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....

Reducir el número de juicios que se hacen en cada juzgado, con eso se mejoraría el nivel porque en ocasiones se sacrifica calidad por cantidad.

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.

Si: ( )

No: (X)

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

- a) Celeridad en el proceso.....( )%
- b) Libertad de decisión de las personas.....( )%
- c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....( )%
- d) Otras: Indique cuales.....  
.....  
.....  
.....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

- a) Exceso o permisividad de la ley .....( )%
- b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....( ) %
- c) Detrimento del Matrimonio.....( )%
- d) Otras: Indique cuales. *Porque queda por ejecución de sentencia, cuestiones referentes a los hijos, y la posible eliminación o a los bienes que en ejecución de sentencia se compran.*



JUZGADO 10º Familiar DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO  
JUDICIAL.

## CUESTIONARIO 2

### DIVORCIO NECESARIO

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, se presentan demandas en las que también se hacen valer acciones simultaneas.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....(X)

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las **demandas de divorcio contencioso**, en que rango de porcentaje, les recayó auto de prevención por deficiencias en el planteamiento.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En el año **2010** del cien por ciento de las demandas de divorcio contencioso, en que rango de porcentaje, no fueron admitidas por cualesquier causa.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )



**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, de las que fueron planteadas de forma correcta.

De 1 a 25%.....( )..  
De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(~~X~~)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se hacen valer las causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(20)%

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(3)%

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(1)%

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...(1)%

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....(0)%

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(1)%

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(1)%

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..(40)%

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(10)%.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....(2)%

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;..... ( 5 ) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;..... ( 25 ) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... ( 30 ) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... ( 80 ) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... ( 10 ) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... ( 3 ) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... ( 10 ) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... ( 5 ) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... ( 70 ) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... ( 30 ) %

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, en que rango de porcentaje, se abandonó el juicio.

De 1 a 25%..... ( X ) ..

De 26 a 50%..... ( ) ..

De 51 a 75%..... ( )

De 76 a 100%..... ( )

**Pregunta:** En el año 2010 del cien por ciento de las demandas de divorcio necesario, cuál es el rango de porcentaje, que en sentencia se declararon procedentes.

De 1 a 25%.....( )..

De 26 a 50%.....( )..

De 51 a 75%.....(X)

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** Establezca en que porcentaje se acreditan y estiman procedentes las diversas causales de divorcio.

I. La infidelidad sexual;.....(10) %

II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en juicio de reconocimiento de paternidad.....(10) %

III. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que lo haya hecho directamente o consienta en ello por cualquier causa;.....(1) %

IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer algún delito...( ) %

V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe ser de actos positivos y no por omisión;.....(1) %

VI. Padecer alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, que ponga en peligro la vida del otro cónyuge y que se prolongue por más de dos años;..(1) %

VII. Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente.....(3) %

VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin causa justificada;..(30) %

IX. La separación del hogar conyugal por más de un año sin el consentimiento del otro consorte.....(10) %.

El plazo señalado en esta fracción empezará a contar a partir de la interpelación judicial o extrajudicial ante notario, que se haga al cónyuge separado para su reintegración al hogar conyugal;.....(5) %

X. La declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia;.....(1) %

XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o desprestigiar al ofendido;.....(40) %

XII. La incompatibilidad de caracteres que haga imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse después de pasado un año de celebrado el matrimonio;..... (40) %

XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la reclamación de los mismos;..... (50) %

XIV. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;..... (3) %

XV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años;..... (3) %

XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal;..... (10) %

XVII. Cometer un cónyuge contra la otra persona o los bienes del otro, un delito declarado por sentencia ejecutoria, o bien, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que exceda de un año de prisión;..... (3) %

XVIII. El mutuo consentimiento; y..... (98) %

XIX. La separación ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación.

Esta causal podrá ser invocada por cualquiera de los cónyuges, si transcurridos dos años de separados, quien teniendo el derecho de acción para invocar el divorcio por las causales previstas en las fracciones VIII y IX de este mismo artículo no lo ha hecho..... (70) %

**Pregunta:** En su opinión, el año **2010** del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, se plantearon en forma deficiente.

De 1 a 25%.....(X) ..

De 26 a 50%.....( ) ..

De 51 a 75%.....( )

De 76 a 100%.....( )

**Pregunta:** En su opinión, el año **2010** del cien por ciento de las causales de divorcio que se hicieron valer, en que rango de porcentaje, son los principales motivos por los cuales se plantearon deficientemente.

a) Hechos genéricos.....(40) %

b) Causales sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar ....(40) %

- c) Causales caducas.....(30)%
- d) Falta de pruebas idóneas.....(30)%
- e) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** En juicios de **divorcio contencioso**, cual es la etapa que genera mayor problemática.

- a) Inicial .....(10)%..
- b) oferta y desahogo de pruebas.....(50)%
- c) Ejecución de sentencia.....(40)%.

**Pregunta:** Establezca el rango de porcentaje, sobre las **causas jurídicas** por las que **no se obtiene una sentencia de disolución del vínculo matrimonial, en los juicios contenciosos**.

- a) Hechos de la demanda deficientes .....(40)%
- b) Ausencia de pruebas.....(40)%
- c) Pruebas deficientes.....(20)%
- d) Otros: Indicar cual o cuales y en que medida  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Pregunta:** Indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por las cuales Usted considera, que no se obtiene una sentencia favorable en los juicios contenciosos.

- a) Falta de profesionalismo del asesor jurídico ..... (40)%

- b) Lagunas de la ley .....(10)%
- c) Deficiencias de la ley.....( 2 )%
- d) Exceso de formalismos legales .....( 2 )%
- e) Exceso de formalismos en tesis y Jurisprudencias.....( 1 )%
- f) Otras: Indique cual o cuales.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** En los diez años anteriores, el comportamiento jurídico procesal de los juicios de **divorcio necesario**, en comparación con el año 2010.

- a) Igual   X
- b) Peor \_\_\_\_\_
- c) Mejor \_\_\_\_\_

**Pregunta:** En su opinión, que se requiere para mejorar el nivel de los juicios de divorcio contencioso.

- a) Simplificar el tramite en la ley .....(50)%
- b) Preparación adecuada de los abogados.....(30)%
- c) Otras: Indicar cual o cuales.....   Mediación Familiar

.....

.....

.....

.....

**Pregunta:** Estaría de acuerdo en la implementación del divorcio Exprés o incausal.

Si: ( )

No: (X)

**Pregunta:** En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales Usted considera conveniente la implementación del divorcio Exprés.

- a) Celeridad en el proceso.....( )%
- b) Libertad de decisión de las personas.....( )%
- c) Respeto a la intimidad de los cónyuges.....( )%
- d) Otras: Indique cuales.....  
.....  
.....  
.....

**Pregunta:** En caso de ser negativa su respuesta a la implementación del divorcio Exprés o incausal, indique el rango de porcentaje, sobre los motivos por los cuales se considera no conveniente.

- a) Exceso o permisividad de la ley .....(✓)%
- b) Violación al derecho fundamental del debido proceso.....(50) %
- c) Detrimento del Matrimonio.....(50) %
- d) Otras: Indique cuales.....  
.....  
.....  
.....

**Anexo 12.- Regímenes presuntos en los estados de la  
Republica Mexicana.**



## **1. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES<sup>561</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD LEGAL.**

ARTÍCULO 90.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:

V.- El convenio que los pretendientes celebren en relación a los bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio; en el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores edad deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No pueden dejarse de presentar este convenio bajo ningún pretexto y el Oficial del Registro Civil está obligado a asesorarlos, en especial en lo relativo a lo dispuesto en los artículos 191 y 210 de este Código.

ARTÍCULO 209.- A falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo el régimen de sociedad legal.

## **2. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE<sup>562</sup>.**

**NO CONTIENE RÉGIMEN PRESUNTO, (POSIBLEMENTE  
SOCIEDAD LEGAL)**

ARTÍCULO 95.- Al escrito a que se refiere el Artículo anterior, se acompañará:

---

<sup>561</sup> <[www.ordenjuridico.gob.mx/.../aguascalientes/](http://www.ordenjuridico.gob.mx/.../aguascalientes/)>, disponible en línea el 31 de octubre del 2012.

<sup>562</sup> <[www.ordenjuridico.gob.mx/.../Baja%20California/wo19493](http://www.ordenjuridico.gob.mx/.../Baja%20California/wo19493)>, disponible en línea el 31 de octubre del 2012.

V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio.

En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni a un pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 186 y 208, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicado a los interesados todo lo que necesitan saber al efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

ARTÍCULO 175.- El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el de separación de bienes.

ARTÍCULO 180.- La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

### **3. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR<sup>563</sup>.**

#### **RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD LEGAL.**

Artículo 100.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

---

<sup>563</sup> <[www.cbcs.gob.mx/](http://www.cbcs.gob.mx/)>, disponible en línea el día 1 de noviembre del 2012.

V.- El convenio o capitulaciones que los pretendientes deben celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes.

No puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio y el Oficial del Registro Civil está obligado a asesorarlos e incluso a redactarlo a petición de los interesados. Si no expresan su voluntad en ningún sentido, se entenderá que se casan bajo el régimen de separación de bienes.

Artículo 187.- Los matrimonios celebrados fuera del Estado, se registrarán por las capitulaciones respectivas. Si se adoptó el régimen económico presunto, conocido como sociedad legal, la propiedad, administración y liquidación de los bienes adquiridos por los cónyuges en el Estado de Baja California Sur, se registrará por el convenio o la ley del lugar del matrimonio y, en lo no previsto, por las normas supletorias antes señaladas.

#### **4. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE<sup>564</sup>.**

##### **RÉGIMEN PRESUNTO, SEPARACIÓN DE BIENES.**

Artículo 109.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:

VII.-Testimonio o copia con firmas autógrafas de las capitulaciones matrimoniales, si el matrimonio se pretende celebrar bajo el régimen de sociedad conyugal o mixto.

---

<sup>564</sup> <congresocam.gob.mx/LVIII/inicio/leyes/LEY%20003>, disponible en línea el día 1 de noviembre del 2012.

Artículo 189.- El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Si no se pactan capitulaciones matrimoniales, se entiende celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y se registrá por lo dispuesto en el capítulo VI de éste título.

## **5. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS<sup>565</sup>.**

### **NO TIENE RÉGIMEN PRESUNTO. (POSIBLEMENTE SOCIEDAD).**

Artículo 79.- Al escrito que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

V.- El convenio que los pretendientes celebren en relación a los bienes y que deben abarcar forzosamente especificación en cuanto a la forma que se proporcionaran alimentos, la forma de distribuir la propiedad de los bienes, muebles o inmuebles, la repartición de créditos activos y pasivos, de ingresos y egresos, de bienes recibidos a título gratuito en forma separada o en común, la prevención en cuanto a bienes futuros y la forma de aplicar todos estos. El convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad legal o de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberá estar aprobado por las personas cuyo consentimiento previo es necesario para que se celebre el matrimonio. No podrá dejar de presentar este convenio bajo ningún pretexto y el Oficial del Registro Civil está obligado a asesorarlos.-

Artículo 175.- El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes.-

Artículo 205.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial: lo no estipulado en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.-

---

<sup>565</sup> <[www.chiapas.gob.mx/marco/.../estatal\\_codigo\\_civil](http://www.chiapas.gob.mx/marco/.../estatal_codigo_civil)>, Disponible en línea el día 1 de noviembre del 2012.

## **6. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<sup>566</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL.**

Artículo 165.- El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo separación de bienes. Cuando se omitiere constar el régimen bajo el cual se contrae, el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal y se registrará por las reglas establecidas en este código.

## **7. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA<sup>567</sup>.**

### **RÉGIMEN PRESUNTO, SEPARACIÓN DE BIENES.**

Artículo 197. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

V. Las capitulaciones matrimoniales en caso de que los pretendientes deseen contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Si los pretendientes son menores de edad deberán aprobar las capitulaciones las personas cuyo consentimiento previo sea necesario para la celebración del matrimonio. Si por su contenido las capitulaciones matrimoniales deben constar en escritura pública, se acompañará un testimonio de ésta.

En caso de que, aun manifestando que el matrimonio se desea celebrar bajo el régimen de sociedad conyugal, no se presenten las capitulaciones

---

<sup>566</sup> <[www.chihuahua.gob.mx/attach2/sgg/rpp/uploads/.../CodigoCivil.pdf](http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sgg/rpp/uploads/.../CodigoCivil.pdf)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

<sup>567</sup> <[www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Coahuila/15369013.doc](http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos/Coahuila/15369013.doc)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

matrimoniales, el matrimonio se entenderá celebrado, por disposición de la ley, bajo el régimen de separación de bienes.

Artículo 281. El régimen patrimonial del matrimonio podrá ser el de separación de bienes o el de sociedad conyugal.

Para establecer el régimen de sociedad conyugal es indispensable el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales.

Cuando los contrayentes omitieren otorgar capitulaciones matrimoniales, se entenderá, por disposición de la ley, que el matrimonio se celebra bajo el régimen de separación de bienes.

## **8. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA<sup>568</sup>.**

### **NO TIENE RÉGIMEN PRESUNTO. (POSIBLEMENTE SOCIEDAD CONYUGAL)**

Artículo. 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio No puede dejarse de presentar este convenio, ni aun a pretexto de que los

---

<sup>568</sup> <[www.congresocol.gob.mx/legislacion.html](http://www.congresocol.gob.mx/legislacion.html)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

Artículo 178.- El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el de separación de bienes.

Artículo 208.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.

## **9. CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL<sup>569</sup>.**

### **NO TIENE RÉGIMEN PRESUNTO (POSIBLEMENTE SOCIEDAD CONYUGAL)**

Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañara:

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresara con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No

---

<sup>569</sup> <[www.aldf.gob.mx/marco-juridico-102-1.html](http://www.aldf.gob.mx/marco-juridico-102-1.html)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

puede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versara sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el juez del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

Artículo 208. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.-

## **10.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO<sup>570</sup>.**

### **NO TIENE RÉGIMEN PRESUNTO (POSIBLEMENTE SOCIEDAD CONYUGAL)**

Artículo 94.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar ese convenio ni aún a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que

---

<sup>570</sup> <[www.congresodurango.gob.mx/legislacion.htm](http://www.congresodurango.gob.mx/legislacion.htm)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.



adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 184 y 186 y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo (18) fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escrituras públicas, se acompañará un testimonio de esa escritura;

Artículo 173.- El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el de separación de bienes.

Artículo 178.- La sociedad se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

Artículo 203.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.

## **11.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO<sup>571</sup>.**

### **RÉGIMEN PRESUNTO, SEPARACIÓN DE BIENES.**

Artículo 3.26.- Al celebrarse el matrimonio se asentará el acta respectiva, en la que se hará constar:

VII. La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes.-

---

<sup>571</sup> <[www.edomex.gob.mx](http://www.edomex.gob.mx)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

Artículo 4.24.- El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes. En el caso de omisión o imprecisión, se entenderá celebrado bajo el régimen de separación de bienes.

## **12. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO<sup>572</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, SEPARACIÓN DE BIENES.**

Artículo 102. - Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

VII. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes; si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio.

Si los pretendientes expresan su voluntad de contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, no pueden dejar de presentar este convenio, ni aun a pretexto de que carecen de bienes, pues en tal caso versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Si los pretendientes expresan su voluntad de casarse bajo el régimen de separación de bienes, no tendrán obligación de presentar este convenio. Si no expresan su voluntad en ningún sentido, se entenderá que se casan bajo el régimen de separación de bienes.

---

<sup>572</sup> <[www.congresogto.gob.mx](http://www.congresogto.gob.mx)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

### **13.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO<sup>573</sup>.**

#### **RÉGIMEN PRESUNTO, SEPARACIÓN DE BIENES.**

Artículo 349.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar si contrajeran matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio;

Artículo 437.- El régimen patrimonial del matrimonio será el de sociedad conyugal o el de separación de bienes. Los cónyuges en la sociedad conyugal, podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero bastará que los cónyuges al contraer matrimonio, expresaren que lo hacen bajo el régimen de sociedad conyugal, aún cuando no celebraren capitulaciones para que se entienda que la sociedad conyugal habrá de constituirse con los bienes que los cónyuges adquieran durante el matrimonio; salvo los casos de excepción que aun existiendo el matrimonio, se prevean en la ley. La atención al hogar y el trabajo doméstico se considerarán como aportación al patrimonio familiar.

Quando los cónyuges omitieren expresar el régimen patrimonial al que sujetarán sus bienes, se entenderá, por disposición de la ley, que lo hacen bajo el de separación de bienes.

---

<sup>573</sup> <[guerrero.gob.mx/gobierno/leyes-y-reglamentos/](http://guerrero.gob.mx/gobierno/leyes-y-reglamentos/)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

#### **14.CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE HIDALGO<sup>574</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL LEGAL.**

Artículo 31.- Acompañarán al escrito a que se refiere el Artículo 29, los documentos siguientes:

IV.- Convenio respecto al régimen de los bienes. Si no tienen se referirá los futuros.

Artículo 58.- El matrimonio se contratará bajo los siguientes regímenes:

I.- Sociedad conyugal, voluntaria o legal.

II.- Separación de bienes.

Si no manifiestan expresamente su voluntad al contraerse el matrimonio, se considera que lo hacen bajo el régimen de Sociedad Conyugal Legal.

#### **15.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO<sup>575</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD LEGAL.**

Artículo 282.- El matrimonio puede celebrarse por lo que respecta a su relación patrimonial, bajo el régimen de sociedad legal; sociedad conyugal o voluntaria y separación de bienes. El régimen de sociedad legal, será presunto en los matrimonios que se celebren. En la sociedad conyugal o voluntaria y en el régimen de separación de bienes, se requiere expresamente de capitulaciones matrimoniales para su establecimiento. Al celebrarse el

---

<sup>574</sup> <[www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?Biblioteca-Legislativa](http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?Biblioteca-Legislativa)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

<sup>575</sup> <[www.congresoajal.gob.mx](http://www.congresoajal.gob.mx)>, disponible en línea el día 2 de noviembre del 2012.

matrimonio los cónyuges deberán de indicar cuál de los dos tendrá la administración.

## **16.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACÁN<sup>576</sup>.**

### **RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL.**

Artículo 95. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

V. El convenio que los contrayentes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los contrayentes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar ese convenio ni aun a pretexto de que los contrayentes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 177 K y 177 DD, y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 G, fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura.

Artículo 173. El matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal o separación de bienes.

Artículo 177. Cuando habiendo contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, falten las capitulaciones matrimoniales o haya omisión o

---

<sup>576</sup> <[www.leyes.michoacan.gob.mx/](http://www.leyes.michoacan.gob.mx/)>, disponible en línea el día 3 de noviembre del 2012.

imprecisión en ellas, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto por este Capítulo.

Artículo 177 A. Mientras no se pruebe, en los términos establecidos por este Código, que los bienes y utilidades obtenidos por alguno de los cónyuges pertenecen sólo a uno de ellos, se presume que forman parte de la sociedad conyugal.

Artículo 177 E. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones generales de la sociedad conyugal.

Artículo 177 AA. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En la parcial, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los cónyuges.

**17.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS<sup>577</sup>.  
RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL.**

Artículo 141.- Régimen económico matrimonial. El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes, pudiendo pactarse un régimen mixto. El régimen escogido podrá cambiarse por acuerdo de los cónyuges durante el matrimonio.

En caso de omisión sobre el régimen patrimonial del matrimonio se entenderá establecido el de sociedad conyugal.

**18.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT<sup>578</sup>.  
NO CONTIENE RÉGIMEN PRESUNTO, (POSIBLEMENTE SOCIEDAD  
CONYUGAL)**

Artículo 94.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio, ni aún a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 183 y 205, y el oficial del registro civil deberá

---

<sup>577</sup> <[www.morelos.gob.mx/](http://www.morelos.gob.mx/)>, disponible en línea el día 3 de noviembre del 2012.

<sup>578</sup> <[www.tsjnay.gob.mx/Leyes/codigo\\_civil\\_para\\_el\\_estado\\_de\\_n.htm](http://www.tsjnay.gob.mx/Leyes/codigo_civil_para_el_estado_de_n.htm)>, disponible en línea el día 3 de noviembre del 2012.

tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esa escritura.

Artículo 172.- El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes.

Artículo 177.- La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

Artículo 202.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.

## **19.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN<sup>579</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL.**

Artículo 94.- A la solicitud a que se refieren los artículos anteriores, se acompañará:

V.- La manifestación de los pretendientes de que contraen el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes. En uno u otro caso se estará a lo dispuesto en este Código respecto a dichos regímenes patrimoniales;

---

<sup>579</sup> <[www.sanpedro.gob.mx/.../](http://www.sanpedro.gob.mx/.../)>, Disponible en línea el día 3 de Noviembre del 2012.



Artículo 178.- El Contrato de Matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. A falta de régimen expresamente señalado, se estará sujeto al régimen de sociedad conyugal, y en ningún caso, los bienes adquiridos antes del matrimonio, el importe de la venta de los bienes propios, los adquiridos por herencia, donación o por cualquier otro título gratuito, los productos y los que se obtengan por su reinversión, formarán parte de la sociedad conyugal, salvo que expresamente se pacte lo contrario en las capitulaciones matrimoniales.

## **20.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA<sup>580</sup>.**

### **NO CONTIENE RÉGIMEN PRESUNTO, (POSIBLEMENTE SOCIEDAD)**

Artículo 100.- Al escrito a que se refiere el Artículo anterior se acompañarán:

V.- El convenio que los pretendientes celebren con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio cuando éste se contraiga bajo el régimen de sociedad voluntaria o de separación de bienes. Si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 fuera necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública será acompañado del testimonio de esa escritura.

Artículo 177.- El contrato de matrimonio se celebrará bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes.

Artículo 178.- La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal.

Artículo 179.- La sociedad voluntaria se regirá estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan: en todo lo que no estuviere

---

<sup>580</sup> <[www.congresooaxaca.gob.mx/](http://www.congresooaxaca.gob.mx/)>, disponible en línea el día 3 de noviembre del 2012.

expresado en ellas de un modo terminante regirán los preceptos que arreglan la sociedad legal.

Artículo 180.- La sociedad voluntaria y la legal se regirán por las disposiciones relativas a la sociedad común en todo lo que no estuviere comprendido en los capítulos relativos de este Código.

## **21.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA<sup>581</sup>.**

### **RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL.**

Artículo 336.- El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal.

Artículo 337.- Las personas que contraigan matrimonio deben manifestar, al celebrar éste, si optan por el régimen de separación de bienes o por el de sociedad conyugal.

Artículo 338.- Si quienes contraigan matrimonio omiten, al celebrar éste, la manifestación a que se refiere el artículo anterior, se les tendrá por casados con el régimen de sociedad conyugal.

## **22.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERETARO<sup>582</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, COMUNIDAD DE BIENES.**

Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:

---

<sup>581</sup> <[www2.scjn.gob.mx/.../Textos%5CPuebla](http://www2.scjn.gob.mx/.../Textos%5CPuebla)>, disponible en línea el día 3 de noviembre del 2012.

<sup>582</sup> <[www.legislaturaqro.gob.mx/asuntos-legislativos/consulta/leyes.html](http://www.legislaturaqro.gob.mx/asuntos-legislativos/consulta/leyes.html)>, disponible en línea el día 3 de noviembre del 2012.

VI. El convenio que los pretendientes celebren en relación a los bienes y que deba expresar con toda claridad, si el matrimonio se pretende contraer bajo régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, ese convenio deberá estar aprobado por las personas cuyo consentimiento previo es necesario para que se celebre el matrimonio. No podrá dejar de presentarse este convenio, bajo ningún pretexto y el Oficial del Registro Civil está obligado a asesorar a los pretendientes, para su redacción.

Artículo **166.-** El matrimonio se celebrará bajo los siguientes regímenes de:

- I.- separación de bienes;
- II.- Sociedad conyugal; y
- III.- Comunicad de bienes.

Antes o durante la celebración del matrimonio, los cónyuges manifestarán expresamente su voluntad para contraerlo bajo régimen de separación de bienes o el de sociedad conyugal, en cuyo caso deberán otorgarse capitulaciones matrimoniales. Si no expresan tal voluntad o se omitieran requisitos esenciales para su formalización, se aplicará como régimen supletorio el de Comunidad de Bienes adquiridos durante el matrimonio, el cual se regirá por las reglas aplicables a la copropiedad. Únicamente quedarán excluidos de la comunicad de bienes, lo que los cónyuges reciban individualmente por donación o herencia.

## **23.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO<sup>583</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, COMUNIDAD DE BIENES.**

Artículo 640.- El acta de matrimonio se extenderá haciéndose constar:

VI.- La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el régimen (sic) de comunidad de bienes o de separación de éstos;

Artículo 719.- Las personas que vayan a contraer matrimonio deben manifestar, en el acto de la celebración de éste, si optan por el régimen de separación de bienes o por el de comunidad de los mismos, en la inteligencia de que si omiten hacerlo, se les tendrá por casados bajo este último régimen.

## **24.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ<sup>584</sup>. NO CONTIENE RÉGIMEN PRESUNTO, (POSIBLEMENTE SEPARACIÓN DE BIENES)**

Artículo 163.- El hombre y la mujer, al celebrar el contrato de matrimonio, conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenezcan; y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien aquellos correspondan.

Artículo 165.- El hombre y la mujer, antes o después de contraer matrimonio, pueden convenir en que los productos de todos los bienes que poseen o de alguno o algunos de ellos, especificándolos en todo caso, serán

---

<sup>583</sup> <[www.congresoqroo.gob.mx/codigos/](http://www.congresoqroo.gob.mx/codigos/)>, disponible en línea el día 3 de noviembre del 2012.

<sup>584</sup> <[www.ieeaslp.inea.gob.mx/joomla/docs/trans/a18/SLPCOD05.pdf](http://www.ieeaslp.inea.gob.mx/joomla/docs/trans/a18/SLPCOD05.pdf)>, disponible en línea el día 3 de noviembre del 2012.

comunes; pero entonces fijarán de una manera clara y precisa la fecha en que se ha de hacer la liquidación y presentar las cuentas correspondientes.

Artículo 166. El hombre y la mujer antes y después de contraer matrimonio, pueden convenir en que los productos de su trabajo, profesión, industria o comercio, se dividan entre ellos en la proporción y términos que convengan.

Artículo 177. La casa en que este establecida la morada conyugal y los bienes que le pertenezcan, sean propios de uno de los cónyuges o de ambos, no podrán ser enajenados si no es con el consentimiento expreso de los dos; tampoco podrán ser gravados esos bienes, ni embargados por los acreedores del marido o de la mujer o de ambos, siempre que dichos objetos no tengan en conjunto un valor mayor de dos mil salarios mínimos vigentes en el estado.

## **25.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA<sup>585</sup>.**

### **NO CONTIENE RÉGIMEN PRESUNTO, (POSIBLEMENTE SOCIEDAD CONYUGAL)**

Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar ese convenio ni aun a pretexto de que los

---

<sup>585</sup> <[www.transparenciasinaloa.gob.mx](http://www.transparenciasinaloa.gob.mx)>, disponible en línea el 4 de noviembre del 2012.

pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los Artículos 189 y 211, y el oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo lo que necesiten saber a efecto de que el convenio quede debidamente formulado.

Artículo 178. El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el de separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y en otro caso.

Artículo 183. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

Artículo 208. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.

## **26.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA<sup>586</sup>.**

### **RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD LEGAL.**

Artículo 190.- Al escrito de referencia deberá acompañarse:

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a los bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes. Si los

---

<sup>586</sup> <[www.esonora.gob.mx/.../codigos/](http://www.esonora.gob.mx/.../codigos/)>, disponible en línea el 4 de noviembre del 2012.

pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio. No puede dejarse de presentar este convenio ni aún con el pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso versará sobre los que adquieran durante el matrimonio; pero podrá en su lugar, manifestarse o presumirse de acuerdo con lo que establece el artículo 270 que se opta por el régimen de sociedad legal.

Artículo 270.- El contrato de matrimonio, puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, separación de bienes o sociedad legal. Si no hubiere capitulaciones matrimoniales estableciendo alguno de los regímenes mencionados en primer término, se entenderá celebrado el matrimonio bajo el de sociedad legal.

## **27.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO<sup>587</sup>.**

### **RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL.**

Artículo 180.- Régimen matrimonial. Las personas que vayan a contraer matrimonio deben manifestar, tanto en el escrito a que se refiere el artículo 115, como en el acto de su celebración, si optan por el régimen de separación de bienes o por el de sociedad conyugal, en la inteligencia de que si omiten hacerlo, se les tendrá por casados bajo este último régimen.

---

<sup>587</sup> <[www.tsj-tabasco.gob.mx/.../Leyes%20y%20Codigos/codigoshtml](http://www.tsj-tabasco.gob.mx/.../Leyes%20y%20Codigos/codigoshtml)>, disponible en línea el día 4 de noviembre del 2012.

## **28.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS<sup>588</sup>. RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL.**

Artículo 172.- La simple declaración de los cónyuges, ya ante el Oficial del Registro Civil, ya en la capitulación respectiva, según sea el caso, constituye la sociedad legal.

También se entenderá constituida cuando los cónyuges sean omisos respecto al régimen que quieran adoptar.

## **29.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA<sup>589</sup>. RÉGIMEN ECONÓMICO PRESUNTO, SEPARACIÓN DE BIENES.**

Artículo 60.- El régimen económico del matrimonio puede ser el de sociedad conyugal o el de separación de bienes.

La sociedad conyugal será siempre voluntaria; pero si los cónyuges no la establecen expresamente, pactando capitulaciones matrimoniales, el régimen del matrimonio es el de separación de bienes.-

## **30. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ<sup>590</sup>.**

### **RÉGIMEN PRESUNTO, SOCIEDAD CONYUGAL.**

Artículo 166.- El matrimonio debe de celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o de separación de bienes, a falta de capitulaciones que definan una u otra la ley establece la presunción legal de que el matrimonio se ha celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal.

---

<sup>588</sup> <[www.matamoros.gob.mx/.../Codigo-Civil-para-el-Estado-de-Tamaulipas](http://www.matamoros.gob.mx/.../Codigo-Civil-para-el-Estado-de-Tamaulipas)>, disponible en línea el día 4 de noviembre del 2012.

<sup>589</sup> <[www.legislacion.vlex.com.mx/.../codigo-civil-libre-soberano-tlaxcala](http://www.legislacion.vlex.com.mx/.../codigo-civil-libre-soberano-tlaxcala)>, disponible en línea el día 4 de noviembre del 2012.

<sup>590</sup> <[www.legisver.gob.mx](http://www.legisver.gob.mx)>, disponible en línea el día 4 de noviembre del 2012.



### **30.CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN<sup>591</sup>.**

#### **RÉGIMEN PRESUNTO, SEPARACIÓN DE BIENES.**

Artículo 117.-El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. La sociedad conyugal puede ser convencional o legal. Si en el acta matrimonial no se hiciera mención del régimen, se entenderá celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.

### **31.CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE ZACATECAS<sup>592</sup>.**

#### **RÉGIMEN PRESUNTO, SEPARACIÓN DE BIENES.**

Artículo 135.- El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, bajo el de separación de bienes, o bien régimen mixto.

Artículo 138.- El Oficial del Registro Civil ante quien se celebre el matrimonio, debe asentar en el tenor del acta con toda claridad, el régimen patrimonial por el que opten los esposos; su omisión, determinará que se considere que el matrimonio se celebra bajo el régimen de separación de bienes; sin embargo, salvo pacto en contrario, los cónyuges y concubinos tienen derecho en igual proporción a los gananciales del matrimonio según se establece en este Capítulo.

Del análisis anterior, se advierte que el régimen presunto se encuentra establecido en todas las normas jurídicas de nuestro país y que el mismo se aplica en el supuesto de que los cónyuges no determinen alguno de los regímenes específicos que la propia ley regula, así nos encontramos que en algunos estados el régimen presunto es la separación de bienes mientras que

---

<sup>591</sup> <[www.yucatan.gob.mx/gobierno/](http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/)>, disponible en línea el día 4 de noviembre del 2012.

<sup>592</sup> <[www.congresozaac.gob.mx/](http://www.congresozaac.gob.mx/)>, disponible en línea el día 4 de noviembre del 2012.

en otros es la sociedad legal, con lo que se advierte que en esta figura jurídica no existe una hegemonía a nivel nacional.

## **Anexo 13.- Estadísticas del Divorcio en el Distrito Federal**

### **Estadísticas del divorcio, antes y después del divorcio exprés:**

A fin de tener una panorámica sobre la conformación del Poder Judicial en el Distrito Federal sobre la materia del derecho familiar, este se conforma por el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, el que ejerce la función judicial del fuero común, funciona en Pleno y en salas, en la actualidad el Tribunal se divide en 10 salas civiles, 4 salas familiares, 9 salas penales y 2 de justicia para adolescentes.

En materia familiar existen 42 juzgados familiares. En los últimos años, el número de demandas recibidas en materia Familiar<sup>593</sup>, corresponde a:

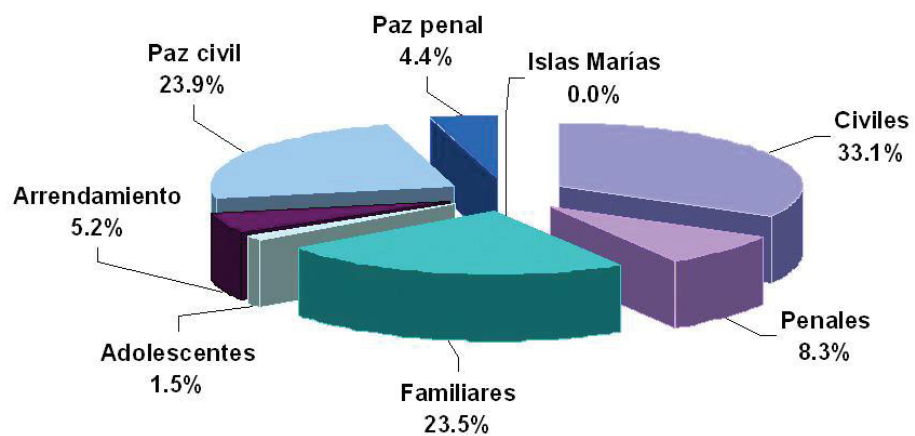
Año 2005 .....	51,991
Año 2006 .....	53,000
Año 2007 .....	55,979
Año 2008 .....	55,775
Año 2009 .....	68,379
Año 2010.....	40,234

Cuadros estadísticos que reflejan las cargas de trabajo de los juzgados de lo familiar en el Distrito Federal.

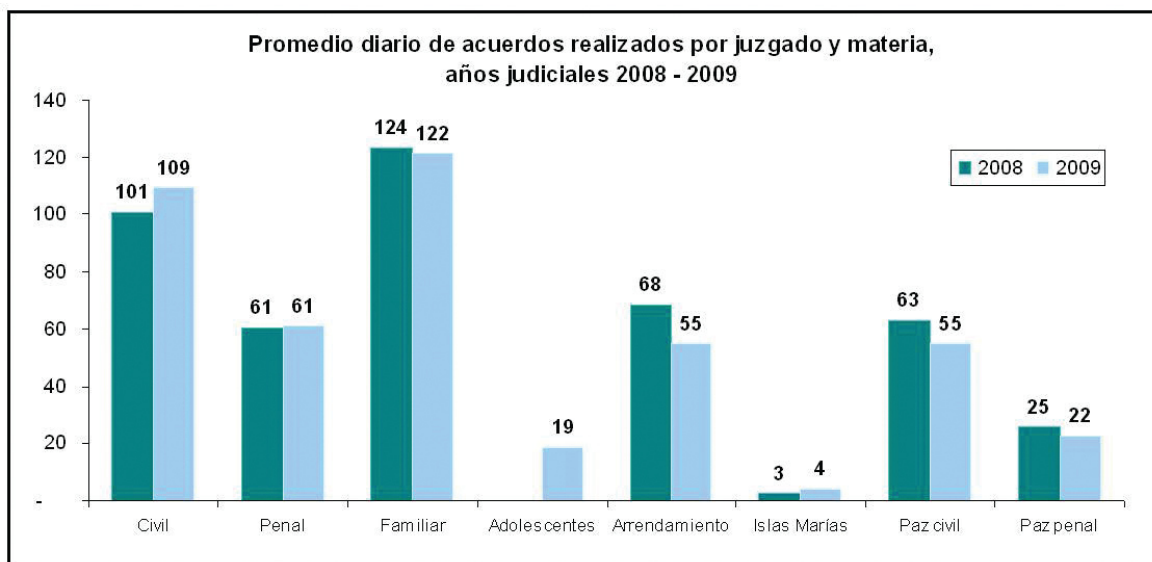
---

<sup>593</sup> Disponible en línea en la liga que se presenta a continuación, <[http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/comunicados/anuario%20estadistico/anuario\\_general.pdf](http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/comunicados/anuario%20estadistico/anuario_general.pdf)>.

Distribución porcentual de sentencias por materia en juzgados de 1a. Instancia, año judicial 2009



#### Anexo 14.- Promedio de acuerdos realizados por juzgado y materia, años judiciales 2008-2009.



Las cargas de trabajo en el año 2009 se pueden medir diariamente, de esta manera conocemos que los juzgados familiares son lo que tienen el mayor número promedio de acuerdos realizados por día con 122, seguidos por los juzgados civiles con 109, los de la materia penal con 61, los de arrendamiento y paz civil con 55 cada uno, los de paz penal con 22 y justicia para adolescentes con 19<sup>594</sup>.

En tanto que en el año 2010, los juicios familiares, se incrementaron en 5.6 por ciento, al pasar de 68,379 en el año judicial 2009, a 72,227 en el 2010. De la misma manera se incremento el pronunciamiento de sentencias en materia de familia, en un 8.2 por ciento, al pasar de 43,397, a 46,937<sup>595</sup>.

























---

<sup>594</sup> *Idem.*

<sup>595</sup> Disponible en línea en la liga que se presenta a continuación, <http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/noticias/tercer%20informe%202010.pdf>.

## Anexo 15.- INEGI, Nupcialidad, conjunto de datos.

### Divorcios<sup>596</sup>.

<u>Año registro hecho</u>	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Ent y mun de registro</u>	   	   	   	   	   	   
<u>- Total</u>	72,396	77,255	81,851	84,302	86,042	91,285
<u>+ Aguasc alientes</u>	1,191	1,084	1,302	1,306	1,427	1,194
<u>+ Baja Califor nia</u>	4,317	3,263	3,359	3,149	3,123	3,410
<u>+ Baja Califor nia Sur</u>	557	609	752	690	564	712
<u>+ Campec he</u>	828	779	841	890	934	991
<u>+ Coahuil a de Zarago za</u>	2,982	3,173	3,333	3,581	3,261	3,392
<u>+ Colima</u>	741	849	862	946	924	873
<u>+ Chiapas</u>	1,457	1,529	1,618	1,588	1,722	1,852
<u>+ Chihua hua</u>	4,077	4,667	4,804	4,810	5,174	5,694
<u>+ Distrito Federal</u>	6,924	7,035	7,692	9,386	11,053	11,385
<u>+ Durang o</u>	1,359	1,417	1,304	1,342	1,379	1,435
<u>+ Guanaj uato</u>	3,601	3,933	4,294	4,398	4,464	4,741

<sup>596</sup> Disponible en línea en la liga que se presenta a continuación,  
<<http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825470692&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=26&pg=0>[http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/registros/sociales/marmetvit\\_div.pdf](http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/registros/sociales/marmetvit_div.pdf)>.

<u>+ Guerre ro</u>	1,178	1,391	1,198	1,194	1,344	1,319
<u>+ Hidalgo</u>	754	822	925	1,313	1,301	1,390
<u>+ Jalisco</u>	3,724	4,288	4,429	4,167	4,340	4,392
<u>+ México</u>	7,716	7,894	7,975	8,184	8,304	8,937
<u>+ Michoa cán de Ocamp o</u>	2,798	2,810	2,765	2,863	2,887	3,343
<u>+ Morelos</u>	731	780	1,006	1,067	1,218	1,322
<u>+ Navarit</u>	1,050	1,106	913	886	903	942
<u>+ Nuevo León</u>	4,636	6,072	6,975	7,366	6,747	6,973
<u>+ Oaxaca</u>	456	620	618	617	605	570
<u>+ Puebla</u>	1,951	2,132	2,203	2,206	2,342	2,429
<u>+ Queréta ro</u>	1,339	1,384	1,487	1,327	1,498	1,614
<u>+ Quinta na Roo</u>	1,189	1,448	1,704	1,793	1,566	1,679
<u>+ San Luis Potosí</u>	1,205	1,332	1,345	1,482	1,516	1,716
<u>+ Sinaloa</u>	2,786	3,113	3,284	3,025	3,260	3,554
<u>+ Sonora</u>	2,549	2,795	2,970	2,869	2,869	2,826
<u>+ Tabasc o</u>	1,479	1,371	1,714	1,849	1,589	1,700
<u>+ Tamaul ipas</u>	1,951	2,173	2,177	1,984	1,900	2,114
<u>+ Tlaxcal a</u>	176	245	341	298	313	401
<u>+ Veracr uz de Ignacio de la Llave</u>	3,473	3,718	4,070	4,032	4,022	4,441
<u>+ Yucatá n</u>	2,034	2,169	2,350	2,279	2,055	2,460
<u>+ Zacatec as</u>	1,187	1,254	1,241	1,415	1,438	1,484